

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO, GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
TESIS DOCTORAL

LA EXTORSIÓN POR PARTE DEL CRIMEN
ORGANIZADO EN ESPAÑA: EVALUACIÓN DE LA AMENAZA
E IMPLICACIONES EN EL DERECHO PÚBLICO

AUTORA: CARMEN JORDÁ SANZ
TUTORA Y DIRECTORA: DRA. LAURA POZUELO PÉREZ
CODIRECTORA: DRA. ANDREA GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS

MADRID, 2018

A mis padres, por ayudarme a volar echando raíces.

A Inés y a los que vengan.

Índice de contenidos

Introducción	20
--------------------	----

BLOQUE I: ANÁLISIS TEÓRICO

CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL OBJETO DE ESTUDIO: LA EXTORSIÓN A EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	24
---	----

1. La delincuencia organizada	25
--	-----------

1.1. Aproximación teórica	26
---------------------------------	----

1.1. a) Concepto e indicadores de crimen organizado.....	27
--	----

1.1. b) Diferencias con el fenómeno del terrorismo	33
--	----

1.2. El fenómeno de la delincuencia organizada: dimensiones	35
---	----

1.2. a) Organizaciones criminales.....	36
--	----

1.2. b) Mercados ilegales y actividades instrumentales	37
--	----

1.2. c) Las consecuencias de la delincuencia organizada	40
---	----

1.3. La financiación de las organizaciones criminales: actividades criminales e infiltración en la economía legal	42
---	----

1.3. a) Actividades ilícitas y características de las organizaciones	42
--	----

1.3. b) La infiltración del crimen organizado en la economía legal.....	44
---	----

2. La extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada	47
---	-----------

2.1. Definiciones y formas de manifestación	49
---	----

2.2. Fases del proceso extorsivo	52
--	----

2.3. Las funciones de financiación y control sobre empresas.....	53
--	----

2.4. Empleo de empresas legales e ilegales con fines extorsivos	54
---	----

2.5. Consecuencias de la extorsión	56
--	----

3. La victimización de empresas a través de prácticas extorsivas	57
3.1. Fenómeno específico y tipologías	57
3.2. Tipos de extorsión a empresas.....	60
3.3. Factores específicos de vulnerabilidad	61
3.3. a) Factores de vulnerabilidad en negocios pertenecientes a sectores económicos concretos.....	62
3.3. b) Factores de vulnerabilidad en negocios establecidos dentro de comunidades étnicas	64
3.4. Consecuencias de la extorsión a empresas.....	66
4. Conclusiones de la aproximación teórica	67
4.1. Delimitación del objeto de estudio	67
4.2. Identificación de las necesidades principales del análisis.....	68
CAPÍTULO 2. EL ANÁLISIS LEGAL: LA RESPUESTA DEL SISTEMA PENAL A LOS PROCESOS EXTORSIVOS	71
1. Procesos extorsivos y posibles respuestas penales	72
1.1. Tipologías extorsivas y tipos penales en juego	72
1.1. a) Supuestos de extorsión por protección	72
1.1. b) Supuestos de extorsión monopolística	77
1.1. c) Supuestos de extorsión laboral	78
1.2. Principales delitos identificados.....	80
1.2. a) Extorsión.....	80
I) Especial mención a los elementos del tipo penal	84
II) Especial mención al núcleo y a la finalidad de la extorsión	85
III) Breve comentario sobre la violencia y la intimidación.....	87
1.2. b) Robo con violencia o intimidación	90
1.2. c) Amenazas condicionales.....	95
1.2. d) Coacciones	99

1.2. e) Detenciones ilegales y secuestros.....	103
1.2. f) Acoso.....	110
1.2. g) Realización arbitraria del propio derecho.....	115
1.3. La estructura subsidiaria o residual de las amenazas condicionales y las coacciones...	119
<i>Breve comentario sobre la intimidación ambiental y la amenaza implícita</i>	<i>121</i>
1.4. Otros delitos dentro de los procesos extorsivos.....	123
1.4. a) Delitos secundarios y frecuentes	124
1.4. b) Delitos accesorios y menos frecuentes.....	138
2. El contexto: el delito de criminalidad organizada en España	144
2.1. La delincuencia organizada como delito de organización: tipificación y cuestiones doctrinales.....	144
2.1. a) Definición y conductas tipificadas.....	145
2.1. b) Componente esencial y bien jurídico protegido: doctrina	148
2.1. c) Concreciones jurisprudenciales del concepto	152
2.2. Delitos en el marco de una organización criminal	154
2.2.a) El contexto de los delitos de organización	158
2.2. b) Delitos de organización en la actualidad: organizaciones terroristas y criminales	160
2.3. La extorsión en los delitos de organización: el “impuesto revolucionario” por parte de E.T.A.	163
3. Investigación y persecución desde las Fuerzas y los Cuerpos de seguridad ...	171
3.1. La investigación policial.....	171
3.2. Grupos especializados.....	172
3.2. a) A nivel nacional	173
3.2. b) A nivel autonómico	174
3.2. c) A nivel supranacional.....	175
4. Investigación y enjuiciamiento desde el sistema judicial.....	177
4.1. La organización judicial en el orden penal	177

4.2. Los procedimientos judiciales	178
4.3. Los órganos según el procedimiento judicial	179
4.4. El Ministerio Fiscal.....	180
<i>Breve comentario sobre la colaboración institucional en las investigaciones penales</i>	<i>182</i>
5. Conclusiones del análisis jurídico	187

BLOQUE II: ANÁLISIS METODOLÓGICO

CAPÍTULO 3. PROBLEMAS DE MEDICIÓN Y ELECCIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO	191
1. La extorsión como fenómeno latente	192
1.1. Datos sobre extorsión en España	193
1.1. a) La dificultad en la obtención de los datos.....	193
1.1. b) Cuestiones metodológicas relativas a los datos oficiales	194
1.2. Los problemas en la investigación policial y judicial que reducen el número de casos enjuiciados	197
2. Métodos para medir la extorsión y fuentes de información	199
2.1. Métodos de medición de los procesos extorsivos	200
2.1. a) Indicadores para medir los niveles de extorsión.....	200
2.1. b) Encuestas de victimización de extorsiones.....	204
2.1. c) Estadísticas oficiales de extorsión	207
2.1. d) Estudio de casos.....	208
2.2. Las fuentes de información sobre extorsión.....	209
2.2. a) Información bibliográfica	209
2.2. b) Información estadística	210
2.2. c) Noticias de prensa	210
2.2. d) Información policial e información judicial.....	210

3. Aproximación a la extorsión a empresas en España: estudio preliminar	213
3.1. Principales sectores victimizados	215
3.2. Principales nacionalidades afectadas	216
4. Justificación de la selección de los grupos de casos para su estudio	224
4.1. Estudiar los procesos extorsivos en el sector de la hostelería	224
4.2. Estudiar los procesos extorsivos en la comunidad china	225
5. Conclusiones: limitaciones de medición y marco metodológico	227
 CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE LOS PROCESOS EXTORSIVOS: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	 230
1. Objetivos específicos del estudio	231
1.1. Identificación de un método de estudio de los procesos extorsivos a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada.....	231
1.2. Análisis de los procesos extorsivos a las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada	231
1.3. Identificación de factores de vulnerabilidad en los negocios objeto de procesos extorsivos	232
1.4. Desarrollo de recomendaciones de lucha y prevención a partir de las implicaciones jurídicas, policiales y judiciales.....	233
2. Elección del método de investigación y las fuentes de información	234
2.1. El enfoque orientado a la evaluación de vulnerabilidades	235
2.2. El procedimiento de selección de casos: unidad de análisis y fuentes de información	240
2.2. a) Fuentes policiales: atestados	241
2.2. b) Fuentes judiciales: resoluciones	242
2.2. c) Información complementaria: entrevistas semiestructuradas y seminarios temáticos.....	243
2.3. Protocolo de recogida de información.....	245
2.4. La muestra	246
2.5. Análisis de los procesos extorsivos: estudio de casos.....	249

3. Problemas y limitaciones del estudio	249
4. Conclusiones: resumen de la propuesta metodológica	252

BLOQUE III: ESTUDIO EMPÍRICO

CAPÍTULO 5. LOS PROCESOS EXTORSIVOS A NEGOCIOS DE HOSTELERÍA EN ESPAÑA.....	258
--	------------

1. El contexto: el sector de la hostelería en España	259
1.1. Dimensiones y distribución geográfica del sector de la restauración en España	259
1.2. Aspectos económicos vulnerables del sector: economía sumergida y corrupción	261
2. Los autores de los procesos extorsivos	266
2.1. Implicación de las organizaciones criminales.....	266
2.1. a) Los casos de extorsión por protección	269
2.1. b) Los casos de extorsión monopolística.....	272
2.1. c) Los casos de extorsión laboral.....	272
2.2. <i>Modus operandi</i>	273
2.2. a) Finalidad de la extorsión	273
2.2. b) Medios empleados en los procesos extorsivos.....	278
2.2. c) Implicación de cargos públicos.....	280
3. Las víctimas del sector hostelero afectadas por los procesos extorsivos	282
3.1. Características demográficas, sociales y económicas de las regiones afectadas	284
3.1. a) Regiones basadas en la agricultura	285
3.1. b) Zonas turísticas	285
3.2. Pautas de comportamiento de las víctimas	287
4. Respuesta legal ante los procesos extorsivos contra la hostelería	289
4.1. Descripción jurídica de la muestra	289
4.2. Conductas extorsivas y tipos penales aplicados	293

<i>Breve comentario sobre la respuesta jurídica</i>	306
CAPÍTULO 6. LOS PROCESOS EXTORSIVOS EN LA COMUNIDAD CHINA ASENTADA EN ESPAÑA.....	309
1. Aspectos contextuales: la comunidad china en España	310
1.1. Características culturales	310
1.2. Aspectos relevantes del asentamiento de la población china en España.....	311
1.3. El crimen organizado chino	315
2. Los autores de los procesos extorsivos	325
2.1. Implicación de las organizaciones criminales.....	326
2.1. a) Grandes organizaciones criminales.....	329
2.1. b) Pequeños grupos criminales	330
2.2. Móviles y causas de la extorsión.....	330
2.2. a) Extorsión cuya finalidad el lucro directo	331
2.2. b) Extorsión monopolística en el ámbito de la delincuencia organizada.....	332
2.3. <i>Modus operandi</i>	332
2.3. a) Medios empleados en los procesos extorsivos.....	332
2.3. b) Implicación de cargos públicos	333
3. Las víctimas de la comunidad china afectadas por los procesos extorsivos ...	334
3.1. Características de las zonas geográficas afectadas	335
3.2. Perfil de los negocios victimizados.....	335
3.3. Pautas de comportamiento de las víctimas	337
4. Respuesta legal ante los procesos extorsivos en la comunidad china.....	338
4.1. Descripción jurídica de la muestra	338
4.2. Conductas extorsivas y tipos penales aplicados	341
<i>Breve comentario sobre la respuesta jurídica</i>	351

BLOQUE IV: LUCHA Y PREVENCIÓN

CAPÍTULO 7. LA EXPERIENCIA ITALIANA EN LA LUCHA CONTRA LOS PROCESOS EXTORSIVOS	355
1. Los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada en Italia	356
1.1. La extorsión como actividad histórica del crimen organizado en Italia	356
1.2. Los datos sobre las extorsiones mafiosas en Italia	359
1.3. Nuevo escenario de extorsiones: la comunidad china en Italia.....	360
1.3. a) La comunidad china en Italia.....	361
1.3. b) La extorsión del crimen organizado chino en Italia	363
2. Marco legal.....	364
2.1. Respuestas penales y normativa aplicable	364
2.2. Investigación y persecución desde las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad.....	366
2.2. a) Investigación policial	366
2.2. b) Grupos especializados.....	367
2.3. Investigación y enjuiciamiento desde el sistema judicial.....	368
3. Medidas específicas contra la extorsión del crimen organizado.....	369
3.1. Medidas legales específicas en la lucha contra la extorsión.....	370
3.1. a) Colaboradores de la justicia	370
3.1. b) Interceptaciones preventivas.....	371
3.1. c) El agente encubierto	372
3.1. d) Confiscación de bienes previa a la condena	372
3.1. e) Reutilización social de los activos confiscados.....	373
3.2. La protección económica y física de las víctimas	373
3.2. a) El Fondo de solidaridad con las víctimas del crimen organizado, la extorsión y la usura.....	374

3.2. b) Medidas de protección física para las víctimas de la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada.....	375
3.2. c) Medidas específicas para la protección de la comunidad china	375
3.3. La implicación de la sociedad civil.....	376
3.3. a) Las asociaciones italianas contra la extorsión.....	377
3.3. b) La sociedad china frente a la extorsión.....	379
3.3. c) Principales necesidades planteadas	380
CAPÍTULO 8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: PROPUESTAS DE MEJORA EN LA LUCHA CONTRA LOS PROCESOS EXTORSIVOS.....	383
1. Discusión de resultados	384
1.1. Aspectos generales de los procesos extorsivos	385
1.2. Los procesos extorsivos perpetrados contra el sector hostelero en España	388
1.2. a) Las características principales	388
1.2. b) Factores de vulnerabilidad en el sector de la hostelería	391
1.3. Los procesos extorsivos en la comunidad china	393
1.3. a) Las características principales	393
1.3. b) Factores de vulnerabilidad en la comunidad china	398
1.4. La respuesta desde el sistema penal a los procesos extorsivos analizados.....	401
1.4. a) Principales tipos penales en juego	401
1.4. b) Dificultades de investigación de los delitos	406
2. Conclusiones del estudio: propuestas de mejora en la lucha contra los procesos extorsivos	408
2.1. Lecciones aprendidas	409
2.2. Medidas de protección de los sectores y las comunidades	412
2.2. a) Medidas legales.....	413
2.2. b) Medidas económicas y empresariales	420
2.2. c) Medidas sociales.....	422

2.3. Retos de futuro	424
2.3. a) Procesos extorsivos a empresas en otros sectores.....	424
2.3. b) Procesos extorsivos a empresas de otras comunidades.....	426
2.3. c) Otros fenómenos relacionados con los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada.....	428
3. Síntesis final	433
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	437
AUTOS Y SENTENCIAS	456

Índice de tablas

Tabla 1. Indicadores de crimen organizado.	33
Tabla 2. Elementos definitorios del crimen organizado y el terrorismo.	34
Tabla 3. Datos policiales sobre extorsiones de 2011 a 2013 en España.	195
Tabla 4. Medios empleados en los casos de extorsión conocidos por la policía de 2011 a 2013 en España.	196
Tabla 5. Resumen de las características relevantes de las cuatro metodologías: ventajas y desventajas.	205
Tabla 6. Estudios europeos que incluyen la extorsión en sus encuestas de victimización de empresas.	206
Tabla 7. Lista de casos de estudio del sector hostelero con su identificación, lugar de incidente extorsivo y fuente del caso (N=15).	247
Tabla 8. Lista de casos de estudio de la comunidad china con su identificación, lugar de incidente extorsivo y fuente del caso (N=15).	248
Tabla 9. Distribución de los principales sectores económicos españoles.	259
Tabla 10. Estimaciones de economía sumergida según cada informe.	264
Tabla 11. Resumen de los casos de extorsión en la hostelería por tipología, provincia, negocio victimizado, demanda y relaciones previas entre autores y víctimas.	268
Tabla 12. Descripción de los grupos de autores, los medios empleados, las causas, las actividades principales y los objetivos de la extorsión en los casos de hostelería.	276
Tabla 13. Descripción de los casos de extorsión en la hostelería por características de las víctimas, reacción frente a la extorsión y lugar de los hechos.	283
Tabla 14. Características principales de los lugares afectados por los casos de extorsión en la hostelería.	287
Tabla 15. Descripción jurídica de los casos de extorsión en la hostelería.	290
Tabla 16. Descripción de casos de extorsión en la comunidad china por descripción de autores, causas de la extorsión y relación previa entre autores y víctimas.	328
Tabla 17. Medios empleados para forzar el cierre de los negocios en los casos de extorsión en la comunidad china.	333
Tabla 18. Descripción jurídica de los casos de extorsión en la comunidad china.	339
Tabla 19. Número de condenados por extorsión entre 2010 y 2012 en Italia.	360

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Esquema de clasificación de delitos sobre empresas.	59
Ilustración 2. Número anual de causas judiciales por delito de extorsión de 2007 a 2016 en España.	194
Ilustración 4. Nacionalidades más afectadas por la extorsión del crimen organizado en España.	216
Ilustración 5. Esquema de fases en el procedimiento de cobro de deudas en grupos organizados de origen colombiano.	222
Ilustración 6. Esquema de búsqueda de casos de extorsión por fuentes policiales.	242
Ilustración 7. Esquema de búsqueda de casos de extorsión por fuentes judiciales.	243
Ilustración 8. Mapa de distribución de negocios registrados en el sector de la restauración en España.	261
Ilustración 9. Residentes de nacionalidad china en España de 2004 a 2017.	312
Ilustración 10. Mapa de distribución de la población de nacionalidad china por comunidad autónoma en España.	313
Ilustración 11. Etapas del asentamiento de negocios chinos en España.	314
Ilustración 12. Número anual de causas judiciales por delito de extorsión entre 2007 y 2016 en Italia.	359
Ilustración 13. Esquema resumen del modus operandi en los procesos extorsivos al sector hostelero	390
Ilustración 14. Esquema resumen de los procesos extorsivos en la comunidad china con base en la importación	395
Ilustración 15. Esquema resumen del modus operandi de los procesos extorsivos en la comunidad china	396

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de muchas personas muy diferentes, aunque aquí solo nombre a algunas, gracias a todas.

Gracias a mis directoras, Andrea y Laura, han sido dos auténticas muletas sobre las que aprender a caminar en este complicado mundo científico-académico.

Gracias a los investigadores del proyecto CEREU, de sus conocimientos y aportaciones se nutre una parte esencial de este estudio.

Gracias a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, especialmente a Q. Touza, a Barceló y a F. Poves, con vuestro empeño y profesionalidad me habéis aportado mucho más de lo que sois conscientes.

Gracias a mis compañeras de investigación en la universidad por estar ahí y ser un apoyo en el día a día.

Gracias a mis amigos: Miguel, Inés, Carlos, Raisa, Viki, Ale, mis Jordanas, los chicos de Dca, los compis de carrera, master y doctorado (y mil que no nombro), vosotros me habéis animado a no tirar la toalla y esa parte emocional es igual de importante que la técnica.

Gracias, Isabel, por aguantar el chaparrón y por tener una familia genial.

Por último y más importante, gracias a mi familia, mis hermanas, mis cuñados, todos mis primos y tíos... sin duda sois una parte esencial de todo lo que hago. Gracias también a mi tía Sara, que se ha involucrado en este trabajo de una manera espectacular en mil sentidos.

En especial gracias a mis padres por todo el amor recibido y todo el crecimiento personal que hemos compartido durante estos años y a Inés, por ser mi gran empujón de motivación estos últimos meses.

Introducción

La tesis que se presenta tiene por objeto de estudio los procesos extorsivos a empresas cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada. Como veremos a lo largo de los capítulos, se trata de un complejo fenómeno latente, poco estudiado y hasta casi desconocido en algunos ámbitos de la academia, a la vez que supone una grave amenaza para la libertad, la seguridad y la democracia. Precisamente por tratarse de un ataque directo contra tales valores, es el Derecho penal quien debe dar una respuesta, en su carácter de *ultima ratio*, a tan seria amenaza como principal modo de protección legal y efectivo. Ahora bien, del estudio que se presenta derivan distintas implicaciones en derecho público e incluso en otros ámbitos legales y sociales de la ciudadanía.

El análisis criminológico-penal que estructura toda la tesis doctoral responde a un axioma: la Criminología y el Derecho penal se necesitan mutuamente, pues la primera sin el segundo sería carente de toda utilidad, mientras que el segundo sin la primera no tendría contenido. Regular las conductas extorsivas requiere un estudio teórico y empírico que constituya el sustento sobre el que pivotan las propuestas de lucha contra el fenómeno.

Tal ambicioso propósito solo puede llevarse a cabo desde la rigurosidad que la ciencia aporta a todo estudio: un diseño metodológico que dé respuesta al planteamiento del problema es la única forma de iniciar un análisis ajustado a la realidad, a pesar de las limitaciones que presente, que resulte replicable y realmente permita la implementación de una investigación de utilidad para el futuro. La rigurosidad del marco metodológico radica en que se trata de un estudio exploratorio, con escasísimos antecedentes, dirigido a la correcta formulación del problema para hacer posible su investigación más precisa a partir de una propuesta metodológica.

Tampoco se debe olvidar la faceta preventiva, como parte directamente vinculada al interés que aporta el estudio en profundidad del fenómeno. Así, en materia de prevención se hace necesaria la revisión de buenas prácticas y, dada la multidimensionalidad del problema que se analiza, de diversos aspectos legales, empresariales y sociales que impedirían la proliferación de procesos extorsivos en un futuro.

Los puntos expuestos son los que han guiado la estructura de la presente tesis doctoral, que comprende cuatro bloques temáticos:

a) El *análisis teórico* comprende el estudio de los procesos extorsivos a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada desde una perspectiva criminológica, a través de la revisión de la literatura científica en la materia, y una perspectiva legal, analizando la respuesta del sistema penal a tales prácticas extorsivas.

b) El *análisis metodológico* abarca el marco científico del objeto de estudio, las dificultades de su medición, así como la propuesta metodológica a implementar. Además, se explica el procedimiento seguido en el presente trabajo.

c) El *estudio empírico* que se presenta consiste en el estudio de casos reales de extorsión a empresas en el ámbito de la criminalidad organizada ocurridos en España que, respondiendo a la metodología planteada, analiza por un lado la victimización de empresas del sector de la hostelería y por otro lado los procesos extorsivos a empresas dentro de la comunidad china.

d) Por último, la *lucha y prevención* han requerido un estudio de buenas prácticas en Italia, dado que se trata de un país con una arraigada tradición en las extorsiones de la mafia y llevan un largo recorrido en su erradicación. También se exponen la discusión de los resultados y las principales conclusiones del estudio, incluyendo las lecciones aprendidas, las propuestas de mejora en materia de medidas de protección y señalando algunos interesantes retos de futuro.

El estudio que se presenta se ha realizado en el marco del proyecto europeo de investigación CEREU: Countering Extortion Racketeering in the UE, cofinanciado por la Comisión Europea, desarrollado de forma conjunta la Universidad Autónoma de Madrid y la Guardia Civil junto a otros países de la Unión Europea, sin los cuales este análisis no tendría la robustez que requiere ni podría haberse llevado a cabo de la manera que se hizo. La aportación de investigadores policías, fiscales, jueces y otros colaboradores de diferentes países europeos ha sido esenciales en la consecución de los objetivos del estudio.

BLOQUE I: ANÁLISIS TEÓRICO

CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL OBJETO DE ESTUDIO: LA EXTORSIÓN A EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Como se desprende del título del primer capítulo, el objeto de estudio pivota sobre tres conceptos: la extorsión, la victimización de empresas y la delincuencia organizada¹. El objetivo de las siguientes páginas consiste en exponer una aproximación teórica que permita identificar y definir los tres elementos señalados desde la perspectiva criminológica, que dé lugar a un fenómeno específico. Este ambicioso propósito se lleva a cabo a través de una estructura que permite ubicar la extorsión a negocios como una actividad más de las organizaciones criminales que emplean empresas de forma ilegal y en su propio beneficio.

Para ello, en primer lugar, conviene analizar el complejo concepto de crimen organizado, exponiendo los principales rasgos de este y sus consecuencias para la sociedad, prestando especial interés en explicar la infiltración de las organizaciones criminales en la economía legal como fuente de financiación.

Situados en tal entorno, en segundo lugar, se presentan las características esenciales de la extorsión² como actividad del crimen organizado y sus diferentes formas de manifestación, dando un mayor protagonismo, en la parte final de este apartado a la utilización de empresas legales con fines extorsivos.

El tercer apartado viene de la mano del contexto explicado en los dos anteriores, y presenta el proceso de victimización de empresas a través de las prácticas extorsivas perpetradas por el crimen organizado como fenómeno específico, siendo el punto central la identificación de elementos específicos de vulnerabilidad de las víctimas en dos escenarios: a) los factores de vulnerabilidad en negocios pertenecientes a un mismo sector económico, y b) los factores de vulnerabilidad en negocios dentro de una comunidad étnica.

¹ En lo sucesivo, delincuencia organizada, crimen organizado y criminalidad organizada serán tomados como sinónimos.

² La palabra extorsión equivaldrá a proceso extorsivo o actividad extorsiva como concepto criminológico, a no ser que se especifique que se está hablando del tipo penal, en cuyo caso hará referencia únicamente al delito.

Finalmente, el cuarto apartado concluye el capítulo con la delimitación del objeto de estudio de la presente tesis y su necesidad de análisis, que marcarán las líneas de desarrollo de los demás capítulos.

1. La delincuencia organizada

La delincuencia organizada es una compleja problemática criminológica, legal e histórica³, en constante transformación⁴ y crecimiento⁵. En materia de seguridad ha sido tradicionalmente un asunto prioritario para los países europeos de nuestro entorno⁶ y, aunque en España el interés es relativamente reciente, constituye en la actualidad una de las principales preocupaciones en el ámbito de la política pública⁷.

Nuestro país ha sido desde siempre un punto estratégico en el continente europeo debido, entre otros motivos, a su ubicación geográfica. Por ello, tradicionalmente se le ha considerado un importante punto de acceso todo tipo de bienes legales e ilegales. Esta cualidad ha sido bien explotada por la delincuencia organizada, que ha aprovechado nuestro territorio para la entrada y tráfico de drogas⁸, especialmente de cocaína (Gómez-Céspedes, 2010). Consecuentemente, parece que, a pesar de la creciente atención prestada en materia de seguridad nacional⁹, resulta todavía insuficiente debido al vertiginoso y exponencial ritmo al que

³ Se trata de una problemática tradicional cuya característica eminentemente transnacional ignora e incluso aprovecha los límites fronterizos entre países (Bassiouni y Vetere, 1998; Albanese, 2011).

⁴ Así lo afirma Interpol (2017), la organización policial internacional más grande del mundo, integrada por 192 países entre los que se encuentra España.

⁵ Tal como señala Europol (2017) en su informe SOCTA, el informe más exhaustivo de la delincuencia organizada grave en la UE según Europol. Sólo existen dos ediciones de este informe, la inaugural en 2013 y la última en 2017.

⁶ Así lo indican informes policiales (como los de Europol, 2011; Interpol, 2014) y autores (como De la Cuesta Arzamendi, 2001; Gómez-Céspedes, 2010) debido, entre otros motivos, a su situación geográfica, sus características históricas, culturales y económicas.

⁷ Como señalan Giménez-Salinas et al. (2009), Cancio (2011) y García Albero (2016), entre otros.

⁸ Según el Ministerio del Interior (2016) las principales drogas objeto de tráfico del crimen organizado en España son la cocaína, el hachís, la marihuana y la heroína.

⁹ Se debe tener en cuenta que los controles ejercidos sobre la delincuencia organizada afectan de manera significativa al conocimiento sobre la materia, entre otras razones, porque el control aduanero y policial supone una de las principales fuentes de información (Gómez-Céspedes, 2010).

evolucionan las organizaciones criminales¹⁰, que cada vez presentan un carácter más internacional (Ministerio del Interior, 2016). Es precisamente esta internacionalización del fenómeno, lo que hace necesario un análisis teórico que supere nuestras fronteras, teniendo presente el fenómeno de la globalización y, por tanto, el desarrollo del crimen organizado en términos globales.

Para conocer de forma introductoria el fenómeno de la delincuencia organizada, en el presente punto se abordarán las principales problemáticas en torno a la definición de la delincuencia organizada y sus principales diferencias con el terrorismo, como formas autónomas de criminalidad; se profundizará en la materia analizando las tres principales dimensiones del crimen organizado: los grupos, las actividades instrumentales¹¹ y los mercados ilícitos¹². Al ser el ánimo de lucro el fin principal de las organizaciones criminales, resulta imprescindible conocer las cuestiones clave en materia de financiación para la correcta comprensión del fenómeno. Con este objetivo, se abordarán los tres aspectos esenciales de dicha materia: las actividades de financiación, las estructuras de control y la infiltración de los grupos ilegales en la economía legal.

1.1. Aproximación teórica

La aproximación teórica tiene como fin describir de la forma más ajustada posible a la compleja realidad de fenómeno. Con tal propósito, se incluye el análisis del concepto a partir de la revisión de la literatura más significativa en la materia y la exposición de los indicadores del crimen organizado, así como la identificación de las principales diferencias con el terrorismo, problemática vinculada a la agrupación de personas con fines ilegales con la que comparte importantes características, pero cuya naturaleza se puede considerar bien distinta.

¹⁰ Así se viene advirtiendo desde hace décadas desde la academia (Pradel, 1988; Garrido et al., 1999; De la Cuesta Arzamendi, 2001) y más recientemente desde los informes de organismos policiales supranacionales (Interpol, 2013; Europol, 2017).

¹¹ Se trata de las actividades que constituyen los medios de desarrollo del crimen organizado, actividades que son necesarias para la supervivencia de los grupos de crimen organizado y que se consideran actividades inseparables a la principal actividad delictiva de los mismos.

¹² Integra las actividades o mercados legales o ilegales que son objetivo del crimen organizado y que constituyen la actividad lucrativa principal del grupo.

1.1. a) Concepto e indicadores de crimen organizado

La delincuencia organizada es un fenómeno enormemente complejo¹³ que implica una coordinación efectiva y prolongada en el tiempo de un conjunto de personas con el principal objetivo de obtener el máximo beneficio económico a partir del desarrollo de sus actividades ilegales (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010; Albanese, 2011). Es precisamente ese ánimo de lucro el núcleo central de todas sus actividades: bien sean *actividades principales*, es decir, actividades de provisión de bienes y servicios, preferentemente ilegales, a partir de las que se obtienen los principales beneficios económicos, o bien *actividades secundarias* o fuentes de financiación complementarias que no suponen el núcleo esencial de su actividad lucrativa, o incluso *actividades instrumentales*, que son aquellas actividades ilícitas que no generan beneficio económico pero que son necesarias para la realización de actividades principales y secundarias. Por ejemplo, una organización criminal dedicada al tráfico de drogas como actividad principal, puede dedicarse también a los préstamos ilegales como actividad secundaria en la que se apoyaría económicamente y, además, se pueden ver obligados a realizar tareas instrumentales de corte logístico para el transporte de la droga, como, por ejemplo, el robo de vehículos o el alquiler de locales de ocio para su venta. Todas las actividades mencionadas están orientadas a lograr el objetivo económico que permite la continuidad de la organización en el tiempo.

La enorme complejidad del concepto de crimen organizado viene definida por la combinación de sus tres dimensiones principales: los *grupos ilegales* que constituyen el conjunto de personas que las dirigen y las conforman de manera organizada, las *actividades instrumentales* orientadas a la consecución de sus actividades principales y secundarias, y los *mercados ilegales* donde operan, esto es, los negocios objetivo del crimen organizado, a partir de los cuales obtienen ilegalmente los beneficios (Giménez-Salinas et al., 2009). Las infinitas posibilidades de combinación de los elementos citados dificultan una aproximación teórica al fenómeno que se ajuste a la realidad criminológica del mismo y ha dado lugar a largos e intensos debates científicos sobre su conceptualización.

Se trata de una problemática relevante debido a que tradicionalmente las discrepancias sobre la formulación terminológica del fenómeno siempre han sido un obstáculo en la lucha contra el mismo (Anarte, 1997; Ferrandis, 2017). Por ello, es de interés analizar las dos fórmulas de aproximación al concepto de crimen organizado identificadas a partir de la revisión de la

¹³ Zúñiga (2016) así lo demuestra en un completo repaso sobre el concepto de criminalidad organizada desde las distintas aproximaciones a lo largo de la historia reciente.

literatura en lo relativo a la definición teórica, como son las señas de identidad y los indicadores, que permiten analizar el fenómeno a través de diversos autores y diferentes elementos.

Respecto a la definición teórica, destaca Von Lampe (2016), que ha recopilado más de 190 descripciones de crimen organizado en demostración de la amplia diversidad de estudios y conceptualizaciones¹⁴. Gracias a ello, se pueden identificar perspectivas diferentes atendiendo al elemento esencial que se toma como referencia.

a) El *ánimo de lucro como objetivo mantenido en el tiempo*, que aleja este fenómeno de conductas aisladas perpetradas en grupo. Así, la definición del crimen organizado que aporta Abadinsky (2008, p. 404) hace referencia a personas involucradas en asociaciones ilícitas con los principales objetivos de “obtener beneficios económicos y perdurar en el tiempo”. El autor explica que no se trata de un grupo de tres ladrones que planean un robo¹⁵, pues a pesar de la búsqueda de beneficios económicos, esta forma de unión no se coordina de forma estable con el fin de perpetuar la organización si no como una acción concreta que se llevará a cabo en un momento determinado. En cambio, el crimen organizado siempre mantiene la intención estratégica de obtener beneficios de forma estable y duradera.

b) Los *medios empleados* para lograr la perpetuación del grupo. La enorme diversidad de medios con los que una organización puede contar para lograr su continuidad supone una dificultad añadida en la definición. Un complejo entramado de actividades ilegales que incluye conductas violentas, corruptas y empresariales, permiten la sostenibilidad de la organización. Por ejemplo, Albanese (2000, p. 411) señala que el crimen organizado es un “negocio ilegal continuo” que funciona de forma racional para obtener beneficio de actividades ilícitas, y el mantenimiento de su existencia se logra mediante el uso de la fuerza, las amenazas, el control monopolístico y/o la corrupción de funcionarios.

c) En tercer lugar, la *división de tareas y las estructuras*¹⁶ son fundamentales para la eficacia de los medios y la consecución de los objetivos. Se entiende así porque la estructuración y la división de tareas configuran la organización como un ente más allá de la mera agrupación puntual de personas, lo que permite orientar el ánimo de lucro de manera estratégica. Concretamente Chow (2003, p.473) define crimen organizado como un grupo de personas o

¹⁴ Si bien la enumeración y análisis de todas ellas supera el objetivo del presente apartado, resulta de interés mencionar al menos algunas de ellas.

¹⁵ Como confirma Varese (2001).

¹⁶ Los tipos de estructuras se abordan más adelante, dentro de este primer capítulo.

entidades actuando de manera concertada para participar en actividades ilegales “dentro de una estructura organizativa general” y bajo la dirección de un individuo o un grupo de individuos.

En definitiva, como Finckenauer (2005, p.81) señala, la dificultad de definir crimen organizado “se encuentra en la palabra *organizado*”. Este atributo permite incluir en las conductas criminales cierto nivel de sofisticación para perpetrar los delitos de manera más efectiva e impune. Debe contar, por tanto, con un grado de estructuración suficiente que aporte una planificación estratégica para el desarrollo de las conductas criminales y establezca una coordinación del conjunto de personas. Además, debe existir la identificación como grupo que suponga la máxima cohesión entre los miembros, especialmente si comparten lazos étnicos o familiares, y que se encuentre avalado por una reputación de autoridad que le permita obtener control de un territorio y actuar de forma eficaz. Con ello, se garantiza la obtención de lucro y la perpetuación del grupo, llegando en algunos casos, según apunta Finckenauer (2005), a lograr el control monopolístico en una zona concreta.

Tal es la complejidad y la importancia de la formulación terminológica, que ya en la década de los 70, Naciones Unidas trataba de exponer en su V Congreso de prevención del crimen y de tratamiento de delincuentes, el concepto de crimen organizado, haciendo hincapié en la complejidad y transnacionalidad de esta actividad ilegal compleja, llevada a cabo a través de grupos de personas, más o menos organizadas, para el enriquecimiento de quienes forman parte de los mismos, a costa de la comunidad y de sus miembros. En referencia a los medios, añadía que el principal eje sobre el que se obtienen beneficios es la negligencia inexorable de toda ley, que abarca desde delitos contra las personas hasta la corrupción política (Naciones Unidas, 1975, p. 8)

Posteriormente, en el Octavo encuentro del mismo Congreso, ampliaba los medios utilizados por el crimen organizado a las amenazas, así como a la intimidación, enfocados hacia el “ánimo de lucro mediante el abastecimiento y explotación de mercados ilegales” (Naciones Unidas, 1990, p. 5).

Como se ha señalado, la complejidad de la definición de crimen organizado se pone de manifiesto en la diversidad de definiciones aportadas. Esta falta de consenso trató de superarse mediante dos formas de abordaje conceptual del fenómeno: por un lado, se trató de llegar a una definición teórica lo más representativa y universal posible, por otro lado, y de forma posterior, se trató de identificar el fenómeno a través de una suerte de *indicadores* característicos de forma más flexible y dinámica.

Una de las *definiciones* más representativas a nivel internacional es la aportada por la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000¹⁷, que en su artículo 2 orientó las bases del concepto en materia de políticas públicas:

“Un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante un cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con la intención de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

Ahora bien, el dinamismo y versatilidad que han mostrado las organizaciones criminales a lo largo de la historia, han limitado la existencia de un verdadero consenso en materia de definición teórica. Esto se refleja, por ejemplo, en la enorme variedad de organizaciones criminales en todo el mundo, desde grandes organizaciones opacas y secretas dedicadas a la trata de personas en China hasta pequeños grupos de matones mafiosos dedicados a servicios de protección extorsiva en Italia, o agrupaciones medianas de empresarios dedicados a la corrupción política en Argentina. Es decir, englobar en una sola definición teórica a organizaciones tan dispares cuyas tareas, estructuras y propósitos son complejos y diversos puede resultar una tarea casi imposible: si la definición es muy concreta es posible que algunos grupos queden fuera de la misma, mientras que si el concepto es muy amplio es probable que resulte demasiado vago y no permita una utilidad efectiva en materia de seguridad pública.

La conceptualización del fenómeno a través de sus características supone una forma distinta de abordaje teórico. Así, la identificación de atributos o notas a modo de *señas de identidad*¹⁸ aporta una delimitación a la altura de la complejidad del concepto¹⁹. Se trata de responder a la necesidad de abordar el fenómeno de forma estructural a través de la identificación de sus principales formas de manifestación en el escenario legal e ilegal. Estas señas incluyen:

- La finalidad económica, puesto que el ánimo de lucro es un elemento esencial en la existencia de organizaciones ilegales.

¹⁷ En España se tardaron diez años más hasta tipificar el delito de crimen organizado en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, cuestión jurídica que será detalladamente analizada en el siguiente capítulo.

¹⁸ Expuestas por Giménez-Salinas y De la Corte (2010) como forma de superación de características, más centradas en la comprensión del fenómeno y sus problemáticas.

¹⁹ Además de la definición teórica y la identificación por criterios o "indicadores".

- La implicación prioritaria en la provisión y el suministro de bienes y servicios ilegales incluye una amplia gama de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la prostitución, la extorsión o el juego ilegal. Este suministro es siempre una respuesta concreta a una demanda. Todo mercado ilícito tiene su origen en el ordenamiento jurídico que regula, restringe o controla la oferta y demanda de un determinado producto (De La Corte y Giménez-Salinas, 2010; Jordá y Giménez-Salinas, 2015). En este sentido, Albanese (2000) expone la Ley de la Oferta y la Demanda en el ámbito del crimen organizado: las organizaciones criminales se adaptan a los mercados ilícitos de cada momento y región, tratando de dar una respuesta lucrativa a las demandas de los consumidores, aprovechando la demanda de las personas y las limitaciones de la oferta legal. De esta forma, los fallos y limitaciones propias de las empresas que operan en los mercados legales suponen una oportunidad para estas organizaciones ilícitas. Así, determinadas necesidades pueden no llegar a ser cubiertas por los negocios legales, por ejemplo, la migración transnacional a gran escala: dadas las características de la demanda, el crimen organizado aprovecha las necesidades de los migrantes y las limitaciones de las agencias de viajes y transportes, con el fin de lucrarse a través de la oferta de servicios clandestinos de viaje.
- La complementariedad de actividades ilegales con negocios legales bien sea para el blanqueo de capitales o para la inversión en mercados legales. La urgente y constante necesidad de los grupos de crimen organizado de blanquear los ingentes beneficios que sus actividades ilegales producen ha sido siempre el principal motivo para la utilización de empresas, especialmente “empresas pantalla”, con el fin de dar apariencia de legalidad y poder adquirir bienes y servicios del mercado legal. Además, las empresas que operan en los mercados ilegales pueden servir de tapadera para la consecución de sus actividades ilegales como señala Gambetta (2007), por ejemplo, locales de juego que combinan juegos lícitos con los no permitidos, o la extorsión a empresas legales de su entorno para facilitar la obtención de beneficio legal de sus propios negocios, aunque en muchas ocasiones la extorsión a empresas legales también responde a una necesidad de reconocimiento social o de ocultación de sus actividades ilegales a sus familiares (Paoli, 2003; Von Lampe, 2016).
- Las medidas de protección para la búsqueda de la continuidad del grupo son consecuencia de la exposición y el peligro que supone operar contra la ley y el orden

público, especialmente en el ámbito de la represión policial. Las medidas de protección más comunes consisten en actos de violencia, corrupción, actividades de falsificación de documentación, actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, etc. (Giménez-Salinas et al., 2009).

En este contexto, existen dos mecanismos reseñables en la consecución de sus objetivos económicos y sus intereses de control territorial como, son la *corrupción*, que incluye los tres ámbitos públicos donde operan principalmente las organizaciones criminales: político, policial y judicial; y la *violencia o reputación*, teniendo en cuenta que se ejerce menor violencia física cuanto mayor es la reputación, es decir la capacidad de intimidación en forma de violencia psicológica requiere menos esfuerzo en el plano físico²⁰.

Ahora bien, las señas de identidad y la exposición de los mecanismos utilizados por estos grupos delictivos presentan enormes dificultades y limitaciones para el estudio empírico del fenómeno²¹. Tratando de dar respuesta a las necesidades de operativización del fenómeno, destaca lo que se puede considerar como un gran éxito: la aceptación internacional de la propuesta del Consejo de Europa (2001) en forma de *indicadores de crimen organizado*. Se trata de una serie de criterios comunes más flexibles, que engloban la consideración de crimen organizado de manera compartida, incluyendo las diversas formas de manifestación que puede adoptar al operar en diferentes países o al desarrollar diferentes actividades²². Estos indicadores se subdividen en dos categorías.

- *Indicadores obligatorios*: colaboración de dos o más personas, búsqueda de beneficios de poder, permanencia en el tiempo y sospecha de comisión de delitos graves.
- *Indicadores optativos*: reparto de tareas específicas entre sus miembros, existencia de mecanismos de control y de disciplina interna, empleo de la corrupción política, de medios, de comunicación, de la Justicia, etc., actividad internacional, empleo de

²⁰ Como señalan Giménez-Salinas y De la Corte (2010) parece que el uso de la violencia física inter-grupal persigue el monopolio, la defensa de la actividad, la evasión del control policial o es debido a problemas de pago mientras que el empleo de la violencia intra-grupal se da principalmente para imponer disciplina o por lucha de poder; por último la violencia sobre otros individuos no parece que responda a objetivos comunes o concretos, queda relegada a un plano más residual y casi anecdótico.

²¹ Tanto en el ámbito policial y judicial como en el jurídico, criminológico, económico, etc.

²² La forma que adopta una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en España es muy dispar a la que puede tomar si se dedica a la explotación sexual infantil en Tailandia, a la ciberdelincuencia en Canadá o al sicariato en México; el objetivo consiste en buscar criterios objetivos que permitan categorizar todas estas organizaciones como delincuencia organizada, con indicadores comunes para todos los países.

violencia e intimidación, empleo de estructuras comerciales y económicas y participación en blanqueo de capitales.

A continuación, se expone una tabla que presenta los indicadores del crimen organizado del Consejo de Europa (2001).

Tabla 1. Indicadores de crimen organizado.

Indicadores	
Obligatorios	Optativos (al menos dos)
Colaboración con dos o más personas	Reparto de tareas entre los miembros
Búsqueda de beneficios de poder	Mecanismos de control y disciplina interna
Permanencia en el tiempo	Empleo de corrupción política
Sospecha de comisión de delitos graves	Actividad internacional
	Empleo de violencia e intimidación
	Empleo de estructuras comerciales y económicas
	Participación en el blanqueo de capitales

Fuente: elaboración propia a partir de los indicadores del Consejo de Europa (2001).

Esta propuesta en forma de criterios identifica como grupo de delincuencia organizada aquel que cumpla con los criterios obligatorios y al menos dos de los optativos, permitiendo cierta flexibilidad y adaptación a las diversas formas de manifestación del fenómeno.

Ahora bien, el crimen organizado es un fenómeno que implica la actuación ilegal de un colectivo, compartiendo similitudes concretas, así como relevantes diferencias con el terrorismo, asunto que resulta de interés para el objetivo del presente capítulo.

1.1. b) Diferencias con el fenómeno del terrorismo

Las diferencias criminológicas²³ entre el terrorismo y el crimen organizado radican en los elementos definitorios en torno a la finalidad de cada fenómeno²⁴: el crimen organizado, como ya se ha indicado, tiene como fin último el beneficio económico a través de actividades ilegales que requieren su ocultación en el escenario legal. En cambio, el terrorismo tiene como objetivo principal un cambio institucional, generalmente de corte político, a través del impacto social, normalmente mediante actividades violentas dirigidas a atemorizar a la sociedad para que exija tales cambios institucionales a sus responsables políticos (De la Corte, 2006; De la Corte y Blanco, 2013). A continuación, se presenta una tabla que identifica los elementos definitorios

²³ También se realiza un análisis jurídico de diferencias en el capítulo siguiente.

²⁴ Así lo exponen De la Corte y Giménez-Salinas (2010).

del crimen organizado en contraposición con los de terrorismo, incluyendo sus fines y sus medios principales.

Tabla 2. Elementos definitorios del crimen organizado y el terrorismo.

Elementos definitorios		
	Crimen organizado	Terrorismo
Fin principal	Ánimo de lucro	Cambio institucional
Medio principal	Ocultación	Impacto social

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de De la Corte (2006).

Se puede apreciar, por tanto, que el terrorismo también es un fenómeno complejo y dinámico puesto que confluyen factores esencialmente de tres tipos:

- Políticos²⁵: el terrorismo siempre conlleva una serie de pretensiones de cambio institucional, generalmente de corte político (De la Corte, 2006). Es habitual que estos cambios institucionales traten de lograr el beneficio de una región (a través de la independencia o de un trato favorable en cuestiones políticas) o que la región esté involucrada en las normas de convivencia (a través de una gran unión entre el Estado y la religión, o tratando de imponer unas ideas religiosas concretas).
- Sociales²⁶: a través del impacto social (De la Corte, 2006), causando terror entre la población. Para ello, en ocasiones se perpetran diferentes delitos contra la vida o la integridad física con un *modus operandi* que infunda miedo a la población de la forma más generalizada posible.
- Psicológicos²⁷: puesto que lleva aparejados procesos de radicalización violenta. En este sentido, además de simpatizar con una ideología o unas opiniones concretas, en los procesos de radicalización violenta debe concurrir la justificación de la violencia para la consecución de los objetivos de esas ideas concretas.

Es muy frecuente que grupos ilegales pertenecientes a ambos fenómenos empleen mecanismos similares de intimidación, y ejerzan la violencia a través de los mismos medios, incluso puntualmente pueden compartir actividades instrumentales no orientadas a sus fines principales: bien que los grupos de crimen organizado traten de influir en las decisiones políticas,

²⁵ El terrorismo siempre conlleva una serie de pretensiones de cambio institucional, generalmente de corte político (De la Corte, 2013)

²⁶ A través del impacto social (De la Corte, 2013), difundiendo terror entre la población.

²⁷ Lleva aparejados procesos de radicalización violenta.

bien que los grupos terroristas se lucren a través de actividades ilegales como el tráfico de drogas o la extorsión. Además, es innegable que existen vínculos crecientes entre organizaciones criminales y grupos terroristas, por ejemplo, en el aprovechamiento de rutas para el tráfico ilegal de bienes, especialmente drogas y armas²⁸.

En conclusión, aunque existen similitudes y solapamientos en las actividades y definiciones de grupos criminales y terroristas, la delincuencia organizada puede ser considerada como un fenómeno criminológico autónomo y diferenciado del terrorismo. En consecuencia, sus características y problemáticas deben ser analizadas de forma específica y separada de aquellas que corresponden a grupos terroristas²⁹.

1.2. El fenómeno de la delincuencia organizada: dimensiones

El concepto de crimen organizado o delincuencia organizada no hace referencia explícita a un solo tipo de delito, de delincuente o de víctima, sino más bien a un modo de actuar, orientado a la asociación, la coordinación y la profesionalización de actividades con fines ilícitos y lucrativos (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010). Estas características dificultan enormemente su estudio en muchos sentidos, dificultades que abarcan desde su concepción criminológica hasta los problemas jurídicos para su persecución³⁰.

Las líneas de investigación más punteras consideran tres dimensiones esenciales para medir dicha criminalidad y para evaluar sus características, que suponen tres elementos interrelacionados: grupos, mercados³¹ y actividades instrumentales (Giménez-Salinas et cols., 2009). A continuación, se describen los aspectos de mayor interés de cada uno de estos elementos.

²⁸ Profundizando en este tema, De la Corte (2013) analiza los escenarios críticos en Afganistán, Pakistán, Irán y el Sahel y la colaboración entre organizaciones criminales y terroristas, además del crecimiento constante de los vínculos que unen a unos y otros grupos (De la Corte, 2015).

²⁹ Sin perjuicio de que un estudio paralelo pueda aportar conocimiento de interés en la materia específica que se trabaje, como ocurre en el presente trabajo cuando se analizan las extorsiones por parte de la organización terrorista E.T.A. con el fin de identificar de manera sucinta sus formas de manifestación y su respuesta penal en España; siempre considerando el crimen organizado y el terrorismo como figuras autónomas.

³⁰ Analizados en el capítulo siguiente.

³¹ Huelga decir que como mercado se entiende aquel que constituye la actividad lucrativa principal del grupo, al margen de otro tipo de delitos que se perpetren por las características intrínsecas de la actividad principal.

1.2. a) Organizaciones criminales

Los grupos de crimen organizado³² presentan una doble caracterización: el plano empresarial y el plano familiar (Paoli, 2003). Ambos aspectos son esenciales en su organización estructural y en la dedicación a actividades lícitas e ilícitas.

a) En el contexto *empresarial*, la mafia tradicionalmente se ha identificado como una suerte de industria de la protección privada, que ofrece sus servicios tanto a particulares como a empresas (Gambetta, 1993), aunque actualmente los grupos de crimen organizado dan respuesta a la demanda de una enorme variedad de bienes y servicios (Von Lampe, 2016). Cuando un grupo mafioso llega a controlar cierto territorio, la imposición de sus demandas, bien sean de contratación de servicios o de compraventa de bienes, puede incluso llegar a sustituir las labores impositivas y de regulación del mercado propias de una institución pública. En caso de que el grupo consiga el suficiente arraigo, puede llegar a la implantación de códigos y sistemas punitivos y normas básicas como los términos de un contrato de protección y códigos para la cohesión, el orden, la protección y los negocios (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010). En este sentido, la capacidad económica y la libertad de mercado de las empresas y negocios de la región pueden verse gravemente afectadas.

b) En el plano *familiar*, los lazos étnicos y la socialización juegan un papel trascendental. En primer lugar, la vinculación étnica y familiar entre miembros de organizaciones criminales es muy significativa (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010). Existen, por ejemplo, organizaciones de tipo mafioso en Italia compuestas por familias completas. También es frecuente que las organizaciones estén compuestas por miembros del mismo grupo étnico, en ocasiones vinculados por los movimientos migratorios de origen y un destino compartido, como ocurre en las organizaciones criminales chinas asentadas en Europa. En segundo lugar, la socialización dentro del grupo es un proceso esencial en el desempeño y la evolución de este. Las relaciones interpersonales pueden incluir familiares o personas de origen étnico compartido, pero también las amistades y hermanamientos; y todas ellas permiten suplir necesidades personales en un espacio social compartido dentro de la organización criminal. En definitiva, la semejanza y la socialización³³ marcan las características de la organización criminal como familia (Paoli,

³² En el presente capítulo se tratarán como sinónimos los conceptos de organización y grupo criminal, sus diferencias jurídicas serán analizadas en el siguiente capítulo.

³³ En este sentido, la comunidad china como elemento diferenciador dentro de los grupos organizados chinos asentados en occidente juega un papel clave tanto en procesos de integración de miembros como

2003), permitiendo la creación de dos categorías: miembros del grupo y no-miembros, donde se pueden encontrar desde colaboradores y cómplices a clientes y víctimas³⁴. Un ejemplo claro es el estudio llevado a cabo por Mastrobuonini y Patacchini (2012), que evidenció la estratégica endogámica de la mafia italiana en EE. UU.³⁵. Los lazos familiares y los vínculos³⁶ jugaban un papel clave en la comprensión de las reglas de la organización, por encima de la visión estratégico-económica³⁷. Los autores encontraron una fuerte influencia de los grupos sociales como amplificadores de la conducta delictiva, siguiendo la teoría de la Asociación Diferencial de Sutherland (1947), que enfatiza la importancia del papel de las bandas o grupos como facilitadores del aprendizaje en ciertas materias delictivas. Resalta así el autor, que la conducta criminal se aprende a través de la interacción con otras personas, y pone énfasis en el papel de la comunicación humana.

1.2. b) Mercados ilegales y actividades instrumentales

Como notas características del crimen organizado, la provisión y el suministro de bienes y servicios ilegales constituyen el principal cometido de las organizaciones criminales, son las tareas a las que dedican sus esfuerzos de grupo debido a que es lo que les permite la obtención del beneficio económico (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010). Las características de los mercados donde operan son fundamentales para comprender la efectividad estructural del crimen organizado: por ejemplo, no se estructura de la misma forma una organización que pretende operar en el mercado ilegal de tráfico de drogas que aquella que busca ofrecer mano de obra ilegal a través de la explotación laboral de personas. Estas dos organizaciones del ejemplo deben operar en mercados muy diferentes, que requieren actividades instrumentales bien distintas: entre otras muchas, por ejemplo, la primera debe decidir cómo adquirir o fabricar

de victimización de compatriotas (Chin et al., 1992; Perrone, 2000; Wagstaff et cols., 2006; Tilley y Hopkins, 2008).

³⁴ Paoli (2003, p.73) señala en su estudio sobre la mafia italiana que llegar a ser miembro, considerado en determinados grupos como “hombre de honor”, puede ser comparable a una conversión religiosa.

³⁵ Esto se hace especialmente reseñable en determinados delitos que requieren la organización previa de un grupo para su correcta perpetración, como el tráfico de drogas o las prácticas extorsivas.

³⁶ Por medio de los datos del FBN (Federal Bureau of Narcotics) sobre información personal de los miembros de la mafia, se pudieron estudiar las características individuales y familiares, y elaborar un “interaction index” o índice de interacción para analizar los lazos comunitarios atendiendo a los grados de interacción como indicador de la importancia dentro del grupo.

³⁷ Mastrobuonini y Patacchini (2012) estudiaron las redes del crimen organizado aplicando las técnicas de análisis de redes a la mafia americana a través de 800 perfiles criminales de miembros de la mafia activos ente 1950 y 1960 y sus conexiones con la Cosa Nostra.

el producto ilegal que desea vender, además de cómo estructurar la logística necesaria para el transporte clandestino de la misma, y los puntos de venta en los que actuar; mientras que la segunda deberá conseguir trabajadores ilegales a los que explotar e identificar negocios y lugares donde aporten más rendimiento económico, además del mantenimiento y ocultación de estas víctimas de la explotación.

Para llevar a cabo el análisis de mercado, es necesario diferenciar entre tipologías de mercados ilícitos según su grado de *legalidad* y la regulación de este. En este sentido, Von Lampe (2016) expone una tipología de mercados ilegales atendiendo a la restricción de la oferta por tres motivos³⁸:

- El bien es ilegal, por lo que no existe oferta lícita. Nos situamos en el mercado de contrabando absoluto, donde se ofrecen bienes prohibidos como la pornografía infantil³⁹ o las monedas falsificadas, o servicios clandestinos, como la prostitución infantil o el sicariato. Se trata de un espacio de prohibición completa donde la regulación es estricta.
- El bien es legal, pero existe una restricción en su venta. En el mercado de contrabando relativo, se aprovecha la legalidad de los bienes o servicios regulados adquiriéndolos, transportándolos o vendiéndolos a través de medios ilícitos, como es el caso de la venta ilegal de armas, material nuclear o fauna protegida, o servicios como la recaudación ilegal de deudas o la eliminación ilegal de residuos. En este espacio una regulación más flexible es objeto de actividades instrumentales ilícitas orientadas a necesidades logísticas o financieras de bienes regulados, que ni están prohibidos de forma absoluta ni están permitidos de manera libre. En este escenario, el crimen organizado ha sabido aprovecharse especialmente de las necesidades migratorias a través del servicio ilícito de transporte ilegal de inmigrantes.
- La venta del producto es legal pero sus impuestos encarecen en gran medida el precio y restringen la oferta. En el mercado de contrabando fiscal los bienes legalmente regulados no son declarados en el plano tributario, como la gasolina, el

³⁸ Aunque explica más detalladamente la influencia de los precios, los impuestos y demás restricciones del ámbito legal y social sobre la oferta de tales bienes y servicios en el ámbito ilegal.

³⁹ Actualmente denominada por INTERPOL “imágenes de explotación o abuso sexual infantil” o CAM por sus siglas en inglés (Child Abuse Material).

alcohol o el tabaco⁴⁰ o en el caso de servicios, la mano de obra ilegal; así se mejoran las posibilidades de venta del producto legal en el mercado mediante la reducción de su precio evadiendo impuestos. Se trata de un espacio de compraventa libre donde se busca el ocultamiento fiscal para el beneficio económico mediante una actividad económica que en términos generales es legal.

En materia de actividades ilegales, la globalización es una clave del desarrollo de las organizaciones criminales, donde destaca la liberalización de los mercados y la demanda de bienes y servicios ilegales ya que han añadido nuevas oportunidades criminales a causa de los cambios sociales y tecnológicos (Albanese, 2000). La enorme capacidad de adaptación de las organizaciones criminales permite dar respuesta a la evolución social, tecnológica y económica del mercado, en la que esta globalización viene de la mano de movimientos migratorios, por ejemplo, que demandan servicios legales e ilegales de transporte, financiación para el emprendimiento o la posibilidad de acceder al mercado de trabajo como mano de obra legal o ilegal; ofreciendo así grandes oportunidades de negocio a estas organizaciones (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010; Albanese, 2011).

Factores como la migración generalizada hacia una determinada región, la confianza y el compromiso cívico y el auge de nuevos mercados afectan en gran medida a las organizaciones: facilitan la movilización a nuevos territorios a través de la oferta de servicios. Como ya se ha explicado previamente, el crimen organizado trata de lucrarse mediante actividades ilegales atendiendo a la oferta y la demanda de los mercados donde opera: como ejemplo de ello, Varese (2011) expone la regulación del alcohol en la ciudad de Nueva York: entre 1919 y 1933 la conocida Ley Seca estadounidense ilegalizó la fabricación, transporte, importación, exportación y venta de alcohol. Esto supuso una ausencia de oferta legal a la demanda de consumo de este tipo de bebidas, que permitió la intromisión ilegal del crimen organizado en este mercado. Se trata de una clara muestra de la capacidad adaptativa de la delincuencia organizada a través de distintas actividades y mercados ilegales, atendiendo a la regulación y características de los mercados ilegales.

Este entramado de actividades instrumentales y mercados ilícitos implica para las organizaciones criminales la necesidad de estructurarse de manera más eficiente en sus tareas

⁴⁰ Lógicamente se concentra en bienes de alta presión fiscal. En el caso del tabaco, forma parte de este mercado desde su legalización, siendo tradicional también del contrabando absoluto durante los años de su prohibición en los países occidentales.

y en sus mercados, así como de actuar de forma más discreta en el mundo legal⁴¹. De esta manera, las diferentes posibilidades de organizar sus estructuras⁴² se adaptan para dar respuesta a las necesidades de cada mercado ilícito. Se ha decidido exponer otras cuestiones estructurales más profundas en el apartado sobre financiación ilegal para orientar su análisis a las formas de control que ofrecen y así conectar el apartado con la infiltración en la economía legal.

1.2. c) Las consecuencias de la delincuencia organizada

La relevancia del estudio de la delincuencia organizada radica en las graves consecuencias que supone su presencia en una determinada región (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010). Debido a su especial orientación hacia el lucro, las actividades de las organizaciones criminales afectan de forma clara a la economía y a las finanzas; además, si entre las actividades instrumentales se encuentran la corrupción del sector público también significarán serias consecuencias políticas y legales. La delincuencia organizada puede afectar a diversos niveles si opera de forma sostenida en el tiempo en una zona determinada:

- A nivel *económico*, entre las principales consecuencias destacan, no sólo el lucro ilegal obtenido en sus actividades, sino también el empleo de importantes recursos por parte de la administración para combatir el crimen organizado, el desequilibrio de los sistemas financieros debido a las actividades financieras ilícitas de la

⁴¹ Por ejemplo, una estructura jerárquica donde los miembros responden ante sus superiores resulta útil en organizaciones de gran tamaño dedicadas a la falsificación de tarjetas ya que requieren disciplina interna para el control de las actividades de sus miembros en un mercado de prohibición absoluta, mientras que una estructura en red más flexible es una respuesta más común e inteligente en organizaciones de menor tamaño dedicadas a contrabando de bienes de lujo en un mercado de prohibición relativa (Jordá y Requena, 2013).

⁴² Siguiendo la clasificación de Naciones Unidas (UNODC, 2002) existen cinco estructuras concretas sobre las que suelen asentarse las organizaciones criminales:

- La estructura jerárquica estándar es una disposición jerárquica piramidal, con un líder o cúpula directiva y una fuerte disciplina interna.
- La estructura jerárquica regional se organiza en grupos que delinquen con cierta autonomía, aunque subordinados a una cúpula directiva.
- La estructura en racimos dispone grupos criminales que colaboran normalmente con un grupo central que actúa de nexo.
- La estructura en red consiste en un grupo reducido de personas que se asocian de forma temporal para la comisión de actividades delictivas, atendiendo fundamentalmente a habilidades, intereses o afinidades.
- Por último, la estructura de grupo central se organiza con un número reducido de miembros que conforman un grupo cohesionado, y un número superior de individuos asociados con los que colaboran según las necesidades de cada operación.

delincuencia organizada, la inversión de dinero ilegal en sectores de la economía legal, el aumento de la competencia desleal entre empresas de mercados legales, la distribución ineficaz de rentas y la desincentivación de la actividad empresarial.

- A nivel *político*, este fenómeno expone a la población a una serie de daños y perjuicios para la su democracia tan serios como la pérdida de eficacia de las instituciones públicas, la erosión de los fundamentos y pilares de un Estado de derecho y el aumento de la desconfianza hacia el Estado, especialmente si la intromisión de la delincuencia organizada en el sector público implica la corrupción a altos niveles de cargos públicos de gran responsabilidad o a funcionarios clave como miembros de fuerzas de seguridad o del servicio aduanero.
- A nivel *legal*, existen determinadas consecuencias que afectan a la sociedad en su conjunto como son el condicionamiento de las leyes y decisiones políticas a partir de la infiltración del crimen organizado en las administraciones públicas y la consiguiente deslegitimación de la Justicia y del Estado, cambios no deseados en los sistemas de creencias, valores y actitudes que pueden condicionar la acción política de los ciudadanos así como una especie de efecto contagio que se traduce en la emulación de conductas criminales.

Estas consecuencias no son percibidas a corto plazo de forma directa por la sociedad porque, si bien las organizaciones criminales habitualmente cometen delitos tales como amenazas, coacciones o lesiones, estos suelen recaer sobre miembros del propio grupo como medida de disciplina interna y no resultan tan alarmantes como si se cometieran con cierta frecuencia sobre el resto de la población.

Sus daños inmediatos pueden aparecer difuminados al no tratarse de daños personales físicos, como sucede con el blanqueo de capitales y el lucro que se produce como consecuencia de prácticas empresariales monopolísticas ilegales. Esto, combinado con su intención de ocultación, permite al crimen organizado generar más impacto debido a la discreción con la que puede llegar a penetrar en un territorio, si no es detectado en un período de tiempo breve.

A largo plazo, si este primer paso se supera y la delincuencia organizada logra asentarse tomando el control de determinadas zonas, los efectos en el plano social, económico y legal pueden suponer un gran impacto en las posibilidades de desarrollo de una región de manera casi irreversible; ahora bien, para alcanzar tal impacto, el nivel de crimen organizado ha de ser muy elevado (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010). Con el fin de lograr este escenario, las organizaciones criminales centran sus esfuerzos en identificar las posibilidades de financiación

utilizando para ello diversas fórmulas y sirviéndose de las actividades criminales e infiltración en la economía legal.

1.3. La financiación de las organizaciones criminales: actividades criminales e infiltración en la economía legal

Dada la importancia del ánimo de lucro para las organizaciones ilegales, resulta de especial interés analizar sus principales mecanismos de financiación. Según Von Lampe (2016), dichos mecanismos pueden manifestarse mediante estructuras de control que conforman las características necesarias para que la organización desarrolle sus actividades ilícitas de forma eficiente que pueden estar más orientadas a aspectos económicos, sociales o vinculados con la función pública. También existen determinadas formas de infiltración para lucrarse a través de muy diversas actividades económicas⁴³. Ambas cuestiones se exponen a continuación.

1.3. a) Actividades ilícitas y características de las organizaciones

Todas las actividades criminales y necesidades del grupo⁴⁴ deben quedar cubiertas por una estructura que responda de manera eficaz y coordine la actuación de sus miembros. Debido a la diversidad de posibilidades⁴⁵ de organización, el término *estructuras criminales* ha sido útil para referenciar de forma genérica todo tipo de grupos ilegales, organizaciones criminales, empresas ilícitas, mafias, sindicatos del crimen y redes criminales, como afirma Von Lampe (2016). El autor, en un esfuerzo por resumir todas las tipologías de estructuras criminales, expone los siguientes tipos:

- Las *estructuras criminales empresariales* tienen funciones económicas orientadas a generar beneficios a través de prácticas predatorias. Estos grupos cometen delitos basados en el cálculo costes-beneficios, buscando la eficiencia mediante el mayor beneficio y el mínimo riesgo. Buen ejemplo de ello son las organizaciones pedófilas que se estructuran en un formato de tipo empresarial para captar y abusar de

⁴³ Ya sean instrumentales como medio para la consecución de otros objetivos, principales como parte central de sus ocupaciones, o secundarias para diversificar las fuentes de ingresos.

⁴⁴ Necesidades como el acceso a recursos para la comisión de ilegalidades, la seguridad ante instituciones del orden y frente a otros grupos criminales, el estatus social (Paoli, 2003) e incluso la ideología que justifique la conducta criminal (Von Lampe, 2016).

⁴⁵ Además, la tendencia creciente a la subcontratación en el ámbito de la delincuencia organizada (Giménez-Salinas et cols., 2009) añade complejidad a la identificación y clasificación de estructuras.

menores de forma regular. Así, sus miembros trabajan de modo conjunto para buscar recursos financieros y procedimientos para influenciar a las víctimas (atrayéndolas hacia el mundo de la moda infantil, por ejemplo) al objeto de minimizar los riesgos y facilitar el acceso a los menores. En este ejemplo, las características empresariales de sus estructuras permiten a los grupos coordinar sus fuentes de financiación de forma eficiente para crear entornos infantiles de fácil acceso a los menores que, de manera individual, sus miembros no podrían conseguir.

- Las *estructuras criminales asociativas* son organizaciones orientadas a funciones de corte más social. Internamente, crean un sentido y una identidad de pertenencia al grupo, y externamente, cuentan con delincuentes que tienen características específicas diferentes a las del resto de la sociedad. Así crean una subcultura que aporta cierta exclusividad y se apoya sobre la confianza y comunicación entre sus miembros, reforzados por los valores comunes. Los grupos ilegales de moteros⁴⁶, por ejemplo, comparten estas características que permiten crear una identidad de grupo, llegando en ocasiones a conformar una ideología. Este aspecto ideológico facilita en gran medida la confianza y la comunicación que requieren las actividades ilegales a las que se dediquen, como el tráfico de drogas, la prostitución o la extorsión.
- Las *estructuras criminales cuasi gubernamentales*, o también denominadas “Sindicatos Capone”, consisten en una suerte de agrupaciones orientadas a la función pública⁴⁷, que tratan de ordenar y gestionar los problemas que afecten a sus integrantes como si fueran una institución oficial. Cuando estas organizaciones controlan un territorio concreto pueden llegar a crear una esfera percibida por los afectados como más segura y predecible que el propio gobierno legítimo. Esto es así porque entre sus funciones destacan la protección de los derechos de propiedad⁴⁸, la defensa del cumplimiento de los acuerdos entre criminales⁴⁹ o la reducción de los

⁴⁶ Se trata concretamente de agrupaciones que comparten el interés por las motocicletas y a su vez cometen actividades ilegales de forma coordinada y mantenida en el tiempo, como es el caso de los *Free Souls*, los *Highwaymen* y los *Hells Angels*.

⁴⁷ Ya sean en un escenario legal o ilegal.

⁴⁸ Por ejemplo, gestionando con sus miembros más vigorosos la recaudación de deudas de propiedad adquiridas en casas de apuestas bajo su control.

⁴⁹ Por ejemplo, en disputas sobre compra y venta de drogas.

niveles generales de violencia física en una región⁵⁰ (Reuter, 1982; Sharbek, 2014). Frecuentemente a cambio de mantener estas estructuras, requieren una suerte de *impuestos* de forma predatoria en el mercado donde tienen lugar las actividades legales e ilegales bajo su control.

La interrelación entre estructuras y actividades es dinámica, y su evolución viene marcada por las fuentes principales de ingresos en cada momento. La versatilidad del crimen organizado permite ajustar su actuación delictiva al mercado y al territorio donde tienen como objetivo operar (Varese, 2001). Esta habilidad de adaptación se hace patente en la facilidad de “conquista de nuevos territorios” de la mafia, ajustando sus actividades a las demandas del mercado al que desean acceder: tal es el caso del mercado de la construcción en Rosario (Argentina), de interés para la mafia debido a los enormes beneficios que generó en el momento de su asentamiento (Varese, 2011). Si la organización criminal encuentra posibilidades lucrativas en escenarios legales, puede tratar de infiltrarse a través de distintas fórmulas, que se exponen a continuación.

1.3. b) La infiltración del crimen organizado en la economía legal

La utilización de empresas legales e ilegales es una constante dentro del fenómeno del crimen organizado (Albanese, 2011; Varese, 2011). Esto se debe a que la infiltración en la economía legal supone una oportunidad lucrativa para los grupos de crimen organizado.

Un buen ejemplo de ello es la infiltración en el sector de la construcción por parte de grupos criminales italianos dedicados a la corrupción, que tienen capacidad de influencia sobre los decisores políticos de su país, éstos a su vez valoran la oportunidad de beneficiarse mediante contratos de obras públicas para sus propias empresas constructoras (Giampietri y Sarno, 2015). Otro ejemplo ilustrativo es la frecuente iniciativa de grupos criminales italianos en el extranjero para implantar empresas a través de negocios de restauración típica italiana, debido al control que ejercen sobre los proveedores de productos de pizza y pasta en su país de origen: se trata de un método habitual de asentamiento en países como Alemania, donde las pizzerías ofrecen a estos grupos criminales un mecanismo de infiltración en la economía legal que constituye una tapadera para sus actividades ilegales y a su vez un modo de financiación (Varese, 2010).

⁵⁰ Ayudando a grupos ilegales a evitar la atención policial como mecanismo no violento de resolución de potenciales conflictos o aportando recursos financieros para facilitar la corrupción de políticos y policías.

Así, el ánimo de lucro puede llevar a una organización, de forma directa o indirecta, a su infiltración en la economía legal de muy diversas formas⁵¹. De hecho, es habitual la combinación de negocios legales e ilegales, como resultado de la búsqueda de maximización de beneficios por parte de los grupos de delincuencia organizada en un territorio concreto⁵².

Entre las diferentes actividades a las que las organizaciones criminales pueden dedicarse, lo cierto es que ambos sectores, construcción y hostelería, son “especialmente atractivos” en términos de extorsión⁵³ (Savona et cols. 2016, p.121). Así pues, la implementación de procesos extorsivos como forma de infiltración en la economía legal por parte del crimen organizado puede presentar tres distintos propósitos:

a) Invertir para generar beneficios en la esfera legal, bien sea como forma de inversión económica, o bien para obtener control o lograr una determinada reputación social en el territorio. Invirtiendo, por ejemplo, en negocios legales inmobiliarios (Varese, 2010), permite a la organización tanto obtener beneficios con apariencia legal como generar influencia en los negocios de la zona e incluso en los decisores políticos (Savona et cols., 2016).

b) Blanquear los beneficios que la organización genera ilegalmente. Se trata de una actividad muy frecuente debido a los enormes beneficios que la delincuencia organizada obtiene por vía ilegal. Un ejemplo ilustrativo de ello es la creación de negocios de restauración que permiten al grupo criminal generar facturas falsas para justificar ingresos obtenidos ilegalmente (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010; Savona y Berlusconi 2015). En ocasiones el negocio puede convertirse en rentable, constituyendo una nueva vía de financiación o control a la que se refiere el apartado a).

c) Facilitar la comisión de delitos: en este supuesto la estructura legal puede actuar como una pieza dentro del engranaje de una actividad delictiva especialmente compleja o que presenta unas necesidades específicas para su ejecución. Es el caso del empleo de empresas legales, cuyo objeto social está vinculado a productos químicos, para facilitar la adquisición de elementos que permiten la producción y el tráfico de fármacos ilegales (Jordá y Giménez-Salinas,

⁵¹ Como indican De la Corte y Giménez-Salinas (2010, p.25) "*los beneficios de la delincuencia organizada provienen de una combinación de actividades legales e ilegales*".

⁵² El interesante estudio de Mastrobuonini y Patacchini (2012) que aporta evidencia empírica sobre la tendencia de los criminales a asociarse con otros delincuentes dedicados a negocios similares, tanto en actividades legales como ilegales. Estos resultados incluyen la extorsión como una de las fórmulas de mayor éxito y frecuencia.

⁵³ Cuestión que se explicará en los últimos apartados del presente capítulo.

2015) o la inversión en negocios de transporte para el tráfico ilegal de drogas (Savona y Berlusconi, 2015).

Ahora bien, conviene discriminar entre diversas situaciones en el escenario del empleo de empresas legales por parte del crimen organizado. Cuando una organización criminal interactúa con una empresa, los individuos que intervienen en nombre de dicha empresa pueden presentar diferentes niveles de voluntariedad ante los negocios que el grupo ilegal le propone: el *beneficio mutuo* supone el máximo nivel de voluntariedad puesto que ambas partes se encuentran igual de interesadas en llevar a cabo los negocios pactados. Sin embargo, la *extorsión*⁵⁴ supone el mínimo nivel de voluntariedad, es decir, las empresas extorsionadas forman parte del fenómeno de la infiltración, pero en forma de víctimas⁵⁵ que no desean esa interacción con el grupo criminal. Los niveles intermedios de voluntariedad abarcan relaciones en forma de *cohecho o colaboración*, donde el convencimiento llega mediante el ofrecimiento por parte del grupo criminal de una compensación financiera⁵⁶.

Por lo tanto, en algunos de estos supuestos la empresa se beneficia en cierta manera de su relación con el grupo criminal; son los casos en los que ambas partes resultan beneficiadas, cuestión que es claramente diferente a la victimización por extorsión, donde este delito predatorio permite al grupo explotar la rentabilidad de la víctima, sin que ésta reciba una contraprestación.

Existen otros métodos⁵⁷ de infiltración a través de empresas legales como *la apertura de un nuevo negocio legal* que realiza el propio miembro de la organización criminal: aunque el concepto de infiltración sugiere la toma de control paso a paso de una empresa ya creada, Savona y Berlusconi (2015) señalan que es bastante común la creación de empresas por parte de los propios grupos de crimen organizado, o *la adquisición legal de una compañía*: si bien la idea de infiltración también puede parecer una actividad claramente irregular, la adquisición de una empresa a través de mecanismos que respeten la legalidad es una forma útil para las organizaciones criminales de infiltrarse de manera efectiva y sin levantar sospecha, lo que resulta especialmente interesante si el negocio en cuestión es rentable o tiene buena

⁵⁴ Savona y Berlusconi (2015) también señalan la coerción y las amenazas como parte de la problemática, cuestión que puede considerarse incluida en el fenómeno extorsivo.

⁵⁵ Las diferentes maneras de victimizar a una empresa están recogidas en los siguientes apartados del presente capítulo.

⁵⁶ Frecuentemente compartiendo los beneficios (Savona et cols., 2016).

⁵⁷ Además de otros de mecanismos más complejos de control de la gerencia y la dirección de negocios cuyo análisis supera los objetivos del presente capítulo.

reputación, no sólo como método de financiación y control, sino también para la captación de clientes y el establecimiento de nuevas relaciones empresariales (Savona y Berlusconi, 2015). Ambos casos suponen el empleo de empresas legales mediante negocios directamente controlados por el grupo de crimen organizado.

2. La extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada

La extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada se ha venido describiendo, desde hace tiempo, como la *actividad definitoria del crimen organizado* (Konrad y Skaperdas, 1998), y actualmente constituye una de las principales actividades de la delincuencia organizada en la Unión Europea, que continua en crecimiento (Europol, 2017).

Las actividades vinculadas a la exigencia de pagos u otro tipo de demandas por parte de una organización criminal de manera sostenida en el tiempo permiten el mantenimiento económico de la propia organización: ya sea como actividad principal o como complemento financiero de otras actividades ilegales, lo cierto es que se trata de una actividad muy lucrativa, propia del crimen organizado cuando tiene suficiente control sobre una región⁵⁸.

Esta conducta criminal es claramente explotadora debido a que actúa como un parásito de personas y empresas a las que exige sus demandas, es decir, se lucra, sin desarrollar actividad económica alguna, de personas y empresas que desempeñan sus funciones, normalmente en la economía legal⁵⁹, por ello no resulta extraño identificarla como una *actividad propia de la delincuencia organizada* (Best, 1982) que se alinea de forma natural con los objetivos económicos del crimen organizado. Dicho de otra manera, resulta lógico que un grupo criminal que busca lucrarse tiende a cometer actividades ilegales de corte patrimonial, como es el caso del fenómeno extorsivo, cuyo fin principal es beneficiarse económicamente de sus víctimas. De esta forma, desarrollando procesos extorsivos de forma organizada y sostenida en el tiempo, la

⁵⁸ De hecho, la extorsión es considerada como un “delito centinela” en relación con el nivel de penetración del crimen organizado en la economía legal (Savona y Berlusconi, 2015, p.109). Esto se debe a que se trata de un formato de infiltración donde la organización criminal establece estructuras de control de manera muy sencilla, empleando la intimidación suficiente para lograr la aceptación de las condiciones impuestas, sin necesidad de gestionar ni adquirir el negocio, y sin compartir los beneficios, lo que le aporta el máximo nivel de rendimiento con el mínimo esfuerzo en inversión de recursos.

⁵⁹ Aunque como se verá más adelante, la economía sumergida en ciertas regiones facilita estas actividades explotadoras y predatorias.

naturaleza explotadora de la extorsión permite a los grupos ilegales perpetuarse y lograr el control sobre un grupo de víctimas.

Esta es una diferencia esencial en contraste con el incidente extorsivo, que puede cometerse de forma aislada sobre una sola víctima mediante un único autor, y que lógicamente, sus características no contienen el nivel de complejidad ni de daños económicos que presenta el mismo fenómeno en el ámbito de la delincuencia organizada.

Como ya se ha mencionado, las formas más comunes de extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada se suelen manifestar en términos de suministro o servicios de protección (Gambetta, 1993). Por ejemplo, al ejercer control sobre una región concreta, el grupo ilegal trata de aportar una suerte de servicios de seguridad, que en realidad consisten en el compromiso del propio grupo de no ejercer violencia en la zona. De esta forma, lo que realmente aporta el grupo es la creación activa de una demanda de seguridad a través de la comisión reiterada de delitos que produzcan una inseguridad suficiente como para que la víctima acepte los servicios de protección.

Pero esta es sólo una de las formas comunes de extorsión, hay muy diversas fórmulas de manifestación de la extorsión a través del suministro de otros tipos de bienes y servicios, en función del mercado donde opera la organización criminal.

En este contexto, cabe destacar que existen condiciones que pueden facilitar los procesos extorsivos:

- a) La presencia de objetivos vulnerables, analizados más detenidamente en el tercer apartado de este capítulo.
- b) La ineficacia de los actores de control social, especialmente las instituciones de represión: cuerpos policiales, fiscales y jueces.
- c) Una organización sofisticada y coordinada, esto es, la profesionalización del crimen: la especialización de una organización en extorsionar de forma exitosa en un territorio concreto (Best, 1982; Paoli, 2003).

Para comprender mejor este complejo entramado de formas y condiciones extorsivas, resulta de interés exponer de forma breve el análisis de las principales definiciones de la extorsión dentro de la literatura criminológica, para posteriormente identificar las principales fases del proceso extorsivo y estudiar el fenómeno en sus dos principales funciones: como medio

de financiación y como mecanismo de control, incluyendo la utilización de empresas para la consecución de sus objetivos. En el último punto de este apartado se describen las consecuencias más significativas del fenómeno.

2.1. Definiciones y formas de manifestación

Las diferentes definiciones que la literatura científica aporta sobre el concepto de extorsión permiten identificar posibles formas de manifestación del fenómeno, atendiendo siempre a la consecución del objetivo de los extorsionadores: el beneficio económico, como insisten De la Corte y Giménez-Salinas (2010).

Ahora bien, es importante analizar los diversos elementos y conductas que abarcan este fenómeno, que puede incluir como víctimas a una empresa o a un particular.

Intimidación y violencia

La petición de pagos a través de la intimidación y la violencia es el mecanismo extorsivo más sencillo y tradicional para la obtención del beneficio buscado. En esta línea, Rowher (2009) describe la extorsión como extracción de dinero y otros recursos a través del uso de la coerción, la violencia y las amenazas. En cambio, Racovita et cols. (2013) señalan que la intimidación al personal y la amenaza de causar daños en los locales del negocio son los mecanismos utilizados para reforzar la solicitud del dinero. Por su parte, Tylor (2006) expone que los bienes o el dinero se pueden conseguir a cambio de un falso servicio de protección, que en realidad supone el simple hecho de no dañar la empresa, es decir, una promesa de *no hacer* por parte del grupo criminal. Evidentemente no es un servicio de protección real porque no protege a la víctima de ningún otro grupo criminal o problema de seguridad que el negocio pueda sufrir.

Uso de posición dominante o poder

En un sentido algo más complejo, Broadhurst et cols. (2011) en su estudio sobre victimización de empresas en China, definieron la extorsión como el uso ilegal de cargos públicos de nivel superior para situarse en posición de ventaja y así poder utilizar el chantaje o la intimidación de manera efectiva. Esta definición pone de manifiesto la utilización de la corrupción a través de funcionarios como medio intimidatorio contra empresas de la competencia, con un fin claramente monopolístico de dominio del mercado. El abuso de una

posición relevante permite al grupo ejercer una intimidación suficiente para sus pretensiones lucrativas.

Ahora bien, tales prácticas no deben confundirse con la corrupción, donde tanto el sobornador como el sobornado reciben algún tipo de beneficio o recompensa. El supuesto de la extorsión perpetrada por cargos públicos implica que las víctimas no perciban beneficio alguno o que incluso puedan verse obligadas a pagar con el fin de no recibir un trato peor que el que se considera justo.

Protección ilegal

Ampliando este concepto de protección, Mugellini (2013) contempla la extorsión como la venta de protección en la que se solicita dinero y otros beneficios a determinadas empresas mediante el uso de la fuerza, amenazando a los directores o empleados, o solicitando dinero u otros recursos a cambio de servicios informales de protección frente a delitos que pudieran cometer otros grupos criminales diferentes a los que les ofrecen el servicio⁶⁰.

Estas prácticas extorsivas permiten, por tanto, identificar no sólo la protección en el sentido de promesa del propio grupo de no dañar el negocio, si no la protección real frente a otros grupos criminales. Esto puede llegar a suponer una ventaja competitiva para la propia víctima, pues contar con la protección de una organización criminal con fuerte poder en la zona le puede permitir operar con una mayor seguridad frente a aquellos que no aportan la demanda extorsiva requerida.

La extorsión como forma de exigir obligaciones contractuales

El Australian Institute of Criminology (2004) describe las prácticas extorsivas como la intimidación con el fin de obtener dinero o bienes de forma ilegal a cambio de un servicio, o de la obligación de guardar silencio. Esta definición aporta una gama amplia de conductas empresariales que, además de responder a la demanda de pagos, puede incluir la exigencia de contratación de proveedores monopolísticos pertenecientes al grupo organizado, que impongan al empresario una toma de decisiones respecto a su negocio que impliquen obligaciones contractuales, en ocasiones con empresas aparentemente legales.

⁶⁰ Este fenómeno también se conoce como *cobro de piso*.

Tal sería el caso de una empresa legal perteneciente a un grupo organizado dedicado a la venta de bebidas alcohólicas que consigue contratos como proveedor de bares de determinadas zonas donde la organización tiene el control. Actuaría intimidando a los dueños de los bares forzándoles a asumir obligaciones contractuales con proveedores de bebidas de sus propias empresas legales.

La extorsión como forma de explotar beneficios ajenos

La definición de Dugato et cols. (2013) aporta una perspectiva más centrada en la realidad europea⁶¹. Su estudio está concretamente relacionado con delitos a empresas en Europa, y define la extorsión como cualquier intento de obtener dinero u otros beneficios de un comercio local intimidando a los directores o a los empleados mediante amenazas que incluyen causar daños a la propiedad o contaminar los productos. Este concepto se centra en la explotación de beneficios de negocios ajenos a la organización de forma flexible mediante mecanismos intimidatorios.

La complejidad del concepto, reflejada en la diversidad de manifestaciones y conductas analizadas, obliga a adoptar un enfoque más dinámico en el estudio de la conducta criminal, sustituyendo o equiparando el concepto *extorsión* por *proceso extorsivo* dado que se trata de un fenómeno dinámico mantenido en el tiempo. La primera consecuencia de ello es la identificación de una evolución de la conducta objeto de estudio que se puede analizar en distintas fases.

En el siguiente apartado, se exponen las fases del proceso extorsivo⁶² que conforman los patrones delictivos en general.

⁶¹ Se trata de un innovador estudio piloto de encuestas de victimización de empresas en la UE: en el año 2012, Dugato y su equipo entrevistaron a 19039 empresas de 20 Estados Miembros y presentaron un cuestionario escrito a 2815, encontrando que más de un tercio de las empresas habían sido víctimas de un delito. Entre los delitos recogidos que se encontraba la extorsión, que sin poder llegar a considerarlo un fenómeno frecuente atendiendo a los datos (0.6%), sí se concluyó que se trata de una problemática vinculada a la vulnerabilidad de las empresas, especialmente las pertenecientes a determinados sectores económicos.

⁶² Se han considerado las fases del proceso extorsivo de tal relevancia que se ha creado un apartado específico para describirlas.

2.2. Fases del proceso extorsivo

La conceptualización del fenómeno extorsivo debe incluir un análisis de sus diferentes fases. La Spina et al. (2014)⁶³ distinguen tres fases o pasos para la consecución de un proceso extorsivo común:

a) La *intimidación*: consiste en el primer contacto entre el extorsionador y la víctima que se inicia empleando habitualmente amenazas verbales e intimidatorias. En las entrevistas mantenidas con investigadores italianos expertos en extorsión⁶⁴ (Becucci, 2015; Nannucci, 2015; Scagliarini, 2015; Squillace, 2015) explican que los daños materiales y la violencia contra los propietarios o empleados pueden reforzar el temor de las víctimas y facilitar el paso a la siguiente fase.

b) La *negociación*: constituye una fase intermedia, en la que se trata de llegar a un acuerdo en la cuantía y la forma de pago. Los expertos italianos (Becucci, 2015; Nannucci, 2015; Scagliarini, 2015; Squillace, 2015) señalan que en ocasiones se busca a una persona ajena al conflicto, que no sea víctima ni miembro de la organización, para que adquiera el rol de intermediario o negociador. Sus funciones suelen ser dos: tranquilizar a las víctimas y persuadirlas para que acepten la exigencia criminal.

c) Por último, la *demanda*: es el pago o cumplimiento de la condición exigida por el extorsionador, que según el tipo de extorsión utilizada puede consistir, entre otras, en un pago periódico, o en la realización de un contrato laboral o incluso en el cierre de un local. Los estudios (Becucci, 2015; Nannucci, 2015; Scagliarini, 2015; Squillace, 2015) indican que generalmente las exigencias extorsivas consisten en la solicitud de pagos periódicos o la imposición de contratar determinados proveedores de mercancías o servicios. Aunque esta fase sea la última, cuando la víctima se niega a aceptar las exigencias, se suelen retomar las estrategias de intimidación y violencia de la primera fase para presionar a la víctima.

Estas fases permiten la consecución de la acción extorsiva, es decir, el pago o cumplimiento de las condiciones impuestas. Ahora bien, si esta actividad ilegal se sostiene en el tiempo y se perpetra contra grupos de empresas que comparten determinadas características,

⁶³ Estos autores realizaron un interesante estudio en Italia mediante el análisis cualitativo de las diez operaciones judiciales contra la mafia italiana dedicada a la extorsión. Mediante el análisis de 154 casos de extorsión obtuvieron una valiosa información que combinaron con entrevistas a expertos (policías, jueces y víctimas).

⁶⁴ Llevadas a cabo por el instituto de investigación italiano Transcrime en el marco del proyecto de investigación Cereu: Countering Extortion Racketeering in the EU.

puede permitir a la organización criminal no sólo financiarse, sino controlar regiones o sectores concretos.

2.3. Las funciones de financiación y control sobre empresas

La extorsión a particulares o empresas se enmarca en las actividades desarrolladas por los grupos criminales como forma de obtención de beneficios económicos, cuando las organizaciones poseen un fuerte control territorial (Savona, 2010). Además, los procesos extorsivos facilitan el mantenimiento de ese control. Es decir, la extorsión mantenida en un territorio concreto supone una doble forma de actividad para las organizaciones criminales:

a) Aportando ingresos directos, lo que permite financiar al grupo. Se crean obligaciones contractuales con personas o negocios de un territorio concreto, en forma de redes de suministro de bienes y servicios.

b) Manteniendo a las organizaciones en contacto con personas o negocios relevantes en una región, lo que permite un control inmediato del entorno, e incluso de la competencia.

Un claro ejemplo de este mecanismo dual de control y financiación es el aportado por Albanese (2011, p.239): la imposición por parte de un grupo criminal de implantar máquinas tragaperras en negocios de restauración, tales como bares y clubes nocturnos en un barrio concreto. Esta obligación impuesta a los empresarios de restauración permitió al grupo ejercer su dominio sobre dicho territorio mientras se lucraba con las ganancias de las máquinas. El control se llevaba a cabo a través de las visitas regulares y las consecuencias para aquellos negocios que rechazaban la imposición: se les amenazaba e intimidaba⁶⁵, y a continuación se les exigía el pago de unas cuotas a cambio de protección⁶⁶.

Como se muestra en el ejemplo anterior, los negocios legales⁶⁷ ofrecen importantes oportunidades de financiación a través de procesos extorsivos. Estas oportunidades se exponen en el siguiente apartado.

⁶⁵ Estas conductas podían llegar al acoso.

⁶⁶ Es decir, que el propio grupo no dañara el negocio victimizado, como señala Gambetta (1993).

⁶⁷ Y aquellos que se encuentran dentro de la economía sumergida.

2.4. Empleo de empresas legales e ilegales con fines extorsivos

La interrelación entre empresas legales y crimen organizado es compleja, como ya se ha expuesto en apartados anteriores. En el caso concreto del objeto de la presente tesis, el estudio se centra en las actividades extorsivas a negocios, que suelen adoptar la forma de exigencia de pagos o de imposición de condiciones contractuales. Estas actividades pueden estar referidas a la provisión de bienes o servicios, como por ejemplo la venta de alcohol o consistir en la protección a negocios nocturnos, o centrarse en la limitación de competencia en determinadas regiones, como la prohibición de más de un número concreto de bazares chinos en ciertas zonas, etc. Cuando estas obligaciones extorsivas son sistemáticas y reiteradas en el tiempo, los negocios terminan considerándolas una suerte de impuesto o de costes adicionales que deben cumplir para desempeñar sus actividades económicas lícitas en un territorio y en un sector concreto.

Dentro de este fenómeno extorsivo existen dos objetivos que son especialmente relevantes para la comprensión del crimen organizado como industria que genera beneficios a partir de negocios legales, dichos objetivos son la protección y la competitividad. Así lo expone Gambetta (1993), explicando el complejo equilibrio entre la obtención del beneficio óptimo y el intento de controlar gran parte del mercado, pero sin llegar a un monopolio absoluto que levante sospechas y acreciente la amenaza de la policía o de otros grupos ilegales que deseen formar parte del mercado. De esta forma, la tendencia al monopolio consiste en controlar un buen número de negocios en una región determinada de manera que sean sus *protegidos* en materia de violencia y competitividad, para dominar de forma absoluta el mercado. Estos negocios pueden ser propiedad de la organización criminal, pero en general, suelen ser de empresarios víctimas o cómplices de procesos extorsivos.

Siguiendo estos dos objetivos de protección y competitividad con tendencias monopolísticas, existen dos formas principales de controlar parte del mercado legal específico: a) *invirtiendo en empresas legales* propias que resulten competitivas, b) *prometiendo protección a empresarios*, aunque, como indica Gambetta (1993), los servicios de protección son más bien un compromiso de no dañar a la empresa victimizada a cambio de cumplir sus obligaciones. Esto no supone una ventaja competitiva para el negocio, sino sencillamente una forma de forzar al empresario a cumplir los objetivos criminales de la organización.

Para lograr estos objetivos, existen factores derivados de las características de negocios en territorios o colectivos concretos que resultan más atractivos para el crimen organizado en los términos expuestos; buen ejemplo de ello es el nivel elevado de corrupción de una región

que permite a los grupos desarrollar sus actividades ilegales de manera más efectiva mediante el soborno y el chantaje a autoridades o a funcionarios públicos (Schneider, 2010). Los mecanismos de corrupción del sector público son instrumentos frecuentemente utilizados por el crimen organizado para acceder a la economía legal⁶⁸ a través de dos tipos de escenarios:

- El *escenario administrativo* en donde, por ejemplo, la concesión de licencias es uno de los primeros pasos y más sencillos, a través del que el crimen organizado corrompe a funcionarios públicos para controlar las licencias de apertura de locales que benefician a los negocios dominados por la mafia, o clausura negocios de la competencia y limita el acceso a la misma.
- El *escenario de la política pública*, influyendo en las decisiones legislativas en materias que benefician a los mercados donde operan ilegalmente las organizaciones criminales⁶⁹.

En un plano intermedio, entre la total clandestinidad y la legalidad, se encuentra la economía sumergida, que ofrece especiales oportunidades al crimen organizado. Las empresas en esta situación denominada “economía gris”, engloba aquellos negocios que no declaran todos sus ingresos o que contratan a trabajadores de forma ilegal. Por ello, presentan una mayor vulnerabilidad cuando resultan victimizados, pues encuentran más limitaciones a la hora de presentar una denuncia a las autoridades porque pondrían en evidencia sus propias infracciones. Esta situación es aprovechada por los grupos de crimen organizado, que ven una oportunidad de extorsionar a dichas empresas ya que no pueden rechazar sus demandas intimidatorias porque ello supondría tener que acudir a las autoridades⁷⁰.

Esta vulnerabilidad derivada de los negocios que operan en la economía sumergida es clave a la hora de analizar las características de los sectores más afectados por la criminalidad organizada (Van Dijk, 2007).

⁶⁸ Así lo exponen van Dijk (2007), Albanese (2011) y Von Lampe (2016), entre otros.

⁶⁹ Se trata de una práctica frecuentemente utilizada por la mafia (Giménez-Salinas y De la Corte, 2010).

⁷⁰ Más adelante se analizan los elementos específicamente vulnerables en empresas de diferentes sectores, atendiendo a los estudios de Caneppele et al. (2013) y Savona et cols. (2015).

2.5. Consecuencias de la extorsión

Las extorsiones en el ámbito de la delincuencia organizada, como los delitos predatorios, tienen el claro objetivo de explotar tanto a los negocios como a los individuos y beneficiarse ilegalmente del trabajo ajeno de forma sostenida en el tiempo. La victimización de sujetos⁷¹ supone un incremento de la realidad delictiva debido a los múltiples delitos que se perpetran en los procesos extorsivos: amenazas, coacciones, lesiones, etc., que serán analizados en el siguiente capítulo. Además, por la propia naturaleza del fenómeno extorsivo, los delitos no se suelen denunciar lo que supone una mayor dificultad para detectar su incidencia⁷², haciendo realmente compleja la labor de ayuda y protección a las víctimas y la lucha contra el crimen organizado que llevan a cabo instancias especializadas en esta materia.

Además, a medio y largo plazo, para el crimen organizado supone tanto una fuente de financiación como el logro del control territorial, que le permite sostener sus actividades ilegales. Este fenómeno puede llegar a afectar a la libertad de mercado si se trata de grupos criminales infiltrados en la economía legal de forma sostenida, debido a la posibilidad de controlar a grupos de empresas de un determinado sector, que permita a la organización intervenir en asuntos como los contratos con proveedores, las aperturas de nuevas empresas, las demarcaciones territoriales donde deben ubicarse los negocios existentes, etc.

También puede afectar al funcionamiento legal del sistema financiero en el caso de que estas organizaciones puedan blanquear los beneficios de sus actividades ilegales a través de las oportunidades que las extorsiones y la utilización de empresas legales les permite⁷³.

⁷¹ Ya sean extorsiones sobre personas individualmente o sobre empresarios cuyo negocio está siendo explotado.

⁷² Aumenta también la cifra oscura, esto es, número oculto de delitos existentes que no se reflejan en los datos oficiales de criminales debido a que no son denunciados ni consecuentemente, puestos en conocimiento de las autoridades pertinentes.

⁷³ Concretamente, las consecuencias que siguen a la extorsión perpetrada contra las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada serán expuestas en los siguientes apartados del presente capítulo.

3. La victimización de empresas a través de prácticas extorsivas

El crimen organizado, debido a su naturaleza explotadora, tiende a concentrarse en aquellos objetivos donde la obtención de beneficios se realiza de manera más eficiente. Así, determinadas características pueden suponer un elemento de atracción para las organizaciones, que operan atendiendo a diferentes criterios e intereses. Para comprender este fenómeno resulta importante conocer cómo se incardina la extorsión como delito del crimen organizado especialmente orientado a las empresas, y las tipologías o formas específicas que puede adoptar.

3.1. Fenómeno específico y tipologías

La extorsión específicamente empleada contra las empresas ofrece dos oportunidades lucrativas de gran interés para la delincuencia organizada:

a) Por un lado, *reclamar pagos u obligaciones de contratar* a los negocios de una zona supone una importante forma de financiación que avala la posibilidad de mantenimiento de negocio. En ocasiones los pagos llegan a adaptarse a las capacidades económicas de las empresas victimizadas, para garantizar la continuidad de negocio y, consecuentemente, de los pagos extorsivos (Chin et al., 1992).

b) Por otro lado, *invertir en empresas legales* en busca de competencia monopolística permite, tanto dar apariencia de legal al dinero negro⁷⁴, como controlar la fuente de financiación vinculada a prácticas extorsivas. Además, los negocios obtienen mayor éxito a través de los patrones monopolísticos, que incluyen la obligación del cierre de negocios o la limitación de apertura de segundos locales en determinada región.

En cuanto a la categorización del fenómeno criminológico como actividad del crimen organizado, Mugellini (2013) clasifica la extorsión como delito contra el sector privado, aunque señala que no siempre es así dado que en ocasiones no resulta sencillo identificar a la víctima como empresa.

⁷⁴ Es decir, blanqueo de capitales.

En su estudio, Mugellini (2013) propone una serie de tipologías de extorsión por parte del crimen organizado atendiendo a diferentes criterios:

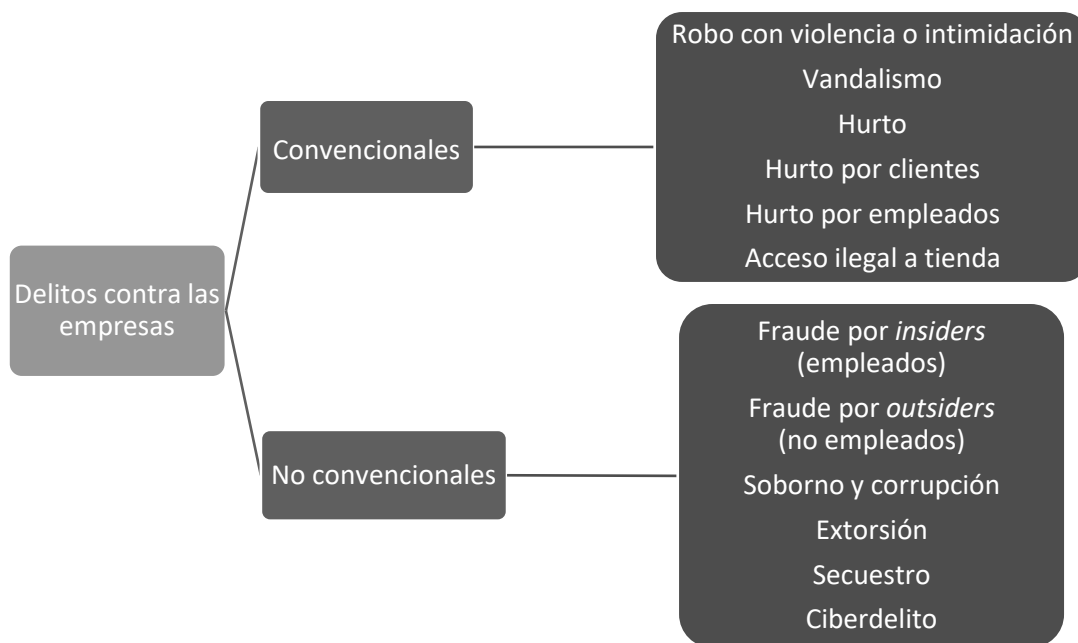
- Clasifica los delitos contra las empresas según la *víctima objetivo* dentro del sector privado. Así, distingue entre el negocio, su propiedad y los trabajadores de la empresa.
- El segundo criterio para categorizar las extorsiones atiende a los autores del delito: son *externas* si sus autores no forman parte de la empresa, y son extorsiones *internas* si se cometen por *insiders* o miembros pertenecientes al propio negocio. Esta distinción que ha sido frecuentemente utilizada⁷⁵, fue aplicada por primera vez, por Felson (1996, p. 74) y seguidamente por Aromaa (2000) en su estudio sobre los tipos de delitos sufridos por empresas finlandesas en San Petersburgo y Estonia, diferenciando entre los cometidos por sus propios empleados y los perpetrados por individuos externos al negocio. Concretamente, destaca la clasificación más completa de Broadhurst et al. (2011, p. 18), que distingue entre distintos tipos de autores: *individuos* que incluyen a empleados o clientes, *otros negocios* constituidos por competidores o proveedores, *funcionarios* en caso de soborno a los mismos y *organizaciones criminales* en el supuesto de extorsión.
- Mugellini (2013) afirma que ambos criterios sobre tipos de víctimas y de autores del delito son útiles en términos de prevención delictiva a las empresas porque permite clasificar de forma ágil los problemas criminológicos según autor y víctima para así comprender las características más vulnerables del negocio específico.
- Un tercer criterio relevante consiste en la convencionalidad: son delitos *convencionales* si se consideran habituales en el ámbito empresarial, como ocurre con los robos o el vandalismo; y son *no convencionales*, cuando se trata de delitos identificados como síntoma de problemas más serios. Así, las extorsiones frecuentes se considerarían un síntoma de altos niveles de crimen organizado. Por ejemplo, en Italia el 26% de los negocios son víctimas de al menos un incidente de intimidación y amenazas y el 77.5% de ellos lo fueron por extorsión. Por parte del International Crime Business Survey del año 2008, se especifica que esos delitos los habían cometido grupos locales de crimen

⁷⁵ Australian Institute of Criminology (2004).

organizado. Lógicamente, este último tipo de delitos contra las empresas requiere medidas de lucha y prevención específicas.

A continuación, se expone un esquema que recoge ejemplos de los tipos identificados:

Ilustración 1. Esquema de clasificación de delitos sobre empresas.



Fuente: elaboración propia a partir de Mugellini (2013).

Las extorsiones perpetradas contra las empresas ya fueron anteriormente mencionadas como fenómeno relevante por Gambetta (1993) en su estudio basado en entrevistas a 26 empresarios y agentes económicos de Palermo, donde analiza la evolución del crimen organizado desde su vertiente empresarial en materia de servicios de protección. Este estudio hace una referencia directa a los procesos extorsivos como forma de control de negocios y financiación de grupos ilegales. El autor explica que los servicios de protección no son reales, sino que son prácticas extorsivas que permiten a un comerciante continuar con su negocio a cambio de unos pagos.

Como ya se ha comentado en este mismo capítulo, Gambetta (1993) argumenta que lo que realmente crea el grupo de forma activa es una demanda de seguridad a través de la comisión reiterada de delitos que producen una inseguridad suficiente como para aceptar los servicios de protección que ellos mismos ofrecen. Pero existen más formas de extorsión a las empresas, atendiendo a si las actividades son de protección (como en el ejemplo de Gambetta, 1993) o de tipo competitivo para controlar un mercado concreto, que se exponen en el siguiente apartado.

3.2. Tipos de extorsión a empresas

En relación con las tipologías de extorsión a las empresas, el estudio de Monzini (1993) permite identificar tres modalidades de gran interés:

- a) *Extorsión-protección*: consiste en el pago regular de una cantidad que se impone mediante el uso de violencia, y donde el grupo ilegal está especializado y es el garante de la protección de las empresas que pagan.
- b) *Extorsión monopolística*: es una estrategia empresarial por la que se trata de eliminar físicamente a los competidores o crear coaliciones monopolísticas mediante el uso de la violencia, utilizada por el crimen organizado para controlar áreas del mercado legal. El grupo puede comprar empresas, ser socio o tener parte del capital de ciertos negocios, y la violencia aporta reputación al grupo para convencer a las empresas que acepten la extorsión y además le permite garantizar la continuidad del sistema monopolístico.
- c) *Extorsión laboral*: se trata de una negociación violenta para manipular el mercado laboral. Se emplean medios violentos para regular las relaciones sociales y laborales entre empresas o empleados y controlar a empleados o empresarios. Cuando se pretende controlar a empleados, se trata de terminar con las quejas actuando a modo de servicios anti-huelga. Este tipo de extorsión se produce con especial frecuencia en empresas o sectores de gran envergadura en Italia. En cambio, cuando se pretende controlar a empresarios, el método consiste en obligar a contratar a miembros de la organización criminal en el negocio victimizado. En ambos casos, el papel de las organizaciones es imponer su presencia de forma continua en las empresas y asegurarse de influir en el proceso de toma de decisiones del negocio, que el grupo criminal logra mediante actitudes intimidatorias.

Estas tres tipologías de Monzini (1993) responden a un contexto de delincuencia organizada donde el control ejercido sobre el territorio es un instrumento esencial para la efectividad de sus actividades. Además, la literatura revisada⁷⁶ coincide en que no se trata de un incidente azaroso: los negocios victimizados por el crimen organizado presentan características y elementos de vulnerabilidad que facilitan los procesos extorsivos en una zona, sector económico o etnia concretos.

Además, existen determinadas esferas donde estos atributos se concentran en mayor medida; así, en aquellos territorios, conjuntos de empresas, comunidades o sectores económicos que presenten una mayor proporción de elementos de vulnerabilidad, las empresas allí ubicadas resultarán más atractivas para la explotación económica del crimen organizado.

3.3. Factores específicos de vulnerabilidad

La problemática de la concentración de delitos del crimen organizado en determinados conjuntos de empresas ha captado la atención de numerosos expertos, que han centrado sus esfuerzos en el análisis de los factores específicos de vulnerabilidad⁷⁷.

Este interés por el enfoque de vulnerabilidad ha llegado a instituciones de seguridad pública tan relevantes como Europol, que lo incluye en su informe exhaustivo sobre crimen organizado SOCTA 2013. Dicho informe se centra en identificar las características de los negocios victimizados en el ámbito de la delincuencia organizada que facilitan la reiteración de delitos en regiones concretas a través del enfoque de vulnerabilidades. Además, define los *factores relevantes de delincuencia* como “*aquellos factores y vulnerabilidades propiciadores del entorno que influyen en las actuales y futuras oportunidades o barreras para los grupos de crimen organizado*” (Europol, 2013, p. 42).

Del mismo terno es el estudio de Perrone (2000) sobre victimización a pequeñas empresas australianas⁷⁸, que llega a conclusiones situadas en la misma línea, a través del desarrollo de una encuesta de victimización. Los resultados del estudio revelaron que más de la mitad de los negocios de la muestra fueron victimizados y sólo unas pocas empresas

⁷⁶ Algunos de los estudios que se revisan en el siguiente apartado: Chin et al. (1992), Gambetta (1993), Perrone (2000), Albanese (2008), Tilley y Hopkins (2008), Racovita et cols. (2013), Mugellini (2013), Caneppele et al. (2013); Ellis (2013); Lisciandra (2014); Savona et cols. (2015).

⁷⁷ Así lo exponen autores relevantes en la materia como de Alvazzi del Fratte (2004); Tilley y Hopkins (2008); Dugato et al. (2013); Lisciandra (2014); Savona et cols. (2015); entre otros.

⁷⁸ Como quioscos de periódicos, tiendas de alimentación o farmacias.

concentraron un gran número de incidentes. Este fenómeno denominado *revictimización* se refiere a la reiteración de delitos a la misma víctima. Concretamente, el estudio de Perrone (2000) explica que los incidentes declarados fueron de naturaleza patrimonial y violenta, entre los que se encontraban las extorsiones⁷⁹. Se trata de delitos relacionados con la intimidación⁸⁰, muchos de ellos en el ámbito de la delincuencia organizada.

Este fenómeno de la revictimización tiene sentido en el entendido de que las organizaciones criminales llevan a cabo *actividades rutinarias*, es decir, tienden a cometer delitos similares con un *modus operandi* parecido y se dedican a actividades ilegales de forma estable, por lo que suelen delinquir mediante los mismos procesos y sobre el mismo tipo de empresas⁸¹. Los estudios sobre victimización revisados⁸² coinciden en que la desproporción territorial de delitos a empresas, que tienden a concentrarse geográficamente en áreas de especial incidencia del crimen organizado, responde a su vez a la agrupación de colectivos empresariales o sociales. Es decir, las empresas de un mismo sector económico o de una misma comunidad étnica establecida en una región concreta, comparten características comunes que atraen a las organizaciones criminales dedicadas a victimizar negocios similares. El análisis de los citados estudios permite exponer, a continuación, los elementos de vulnerabilidad de negocios pertenecientes a sectores económicos concretos y posteriormente explicar aquellos que corresponden a los que tienen lugar dentro de las comunidades étnicas.

3.3. a) Factores de vulnerabilidad en negocios pertenecientes a sectores económicos concretos

Atendiendo a la literatura científica sobre victimización de empresas por parte del crimen organizado sin especificar los delitos, las principales características de vulnerabilidad de los negocios se concentran en⁸³:

⁷⁹ Aunque estas no llegaban al 0.5% de los delitos incluidos en las encuestas de victimización.

⁸⁰ Vandalismo, amenazas, robos, etc.

⁸¹ Así lo explican Tilley y Hopkins (2008) en su estudio sobre el impacto de los delitos del crimen organizado contra las empresas mediante la localización física (áreas y barrios), cuyos resultados se exponen más adelante en el presente capítulo.

⁸² Walker (1995); Perrone (2000); Taylor y Mathew (2002); Taylor (2006); Wagstaff et cols. (2006); Tilley y Hopkins (2008); Mugellini (2013) y Racovita et cols. (2013), entre otros.

⁸³ Según la revisión de los estudios de Albanese (2008); Caneppele et al. (2013) y Savona y Berlusconi (2015).

- El tamaño pequeño y un gran movimiento de dinero en efectivo, lo que en materia de extorsión los haría más accesibles a la demanda de pagos.
- La fuerte vinculación con la economía sumergida y la corrupción ya que, en el supuesto de delitos como robos o extorsiones, pueden tener muy limitadas las alternativas al pago, dado que evitarán la denuncia para no evidenciar sus propias infracciones ante las autoridades.
- Un perfil tecnológico bajo.
- El arraigo local, lo que dificulta que se eviten y rechacen las prácticas extorsivas por no poder cambiar fácilmente la ubicación de sus negocios.

En este escenario, determinados sectores resultan más vulnerables ante el crimen organizado, debido a que sus características presentan especiales oportunidades que facilitan la reiteración de los delitos. Los sectores *manufacturero*, *constructor* y *hostelero* son los más afectados⁸⁴, puesto que las actividades económicas realizadas por bares y restaurantes permiten una gran circulación de dinero en efectivo y los hoteles se establecen en un territorio específico con enormes limitaciones de movilidad; ambas características constituyen factores de riesgo para la infiltración económica (Savona y Berlusconi, 2015).

Sobre la concentración de empresas y la atracción del crimen organizado, resulta interesante el estudio de Tilley y Hopkins (2008), quienes analizaron los delitos contra empresas por parte del crimen organizado en Reino Unido, centrándose en tres áreas geográficas de Inglaterra con alta tasa de criminalidad, en las que residían tres comunidades étnicas diferentes concentradas en tres regiones específicas. Descubrieron que muy pocos negocios de estas áreas sufrieron directamente la victimización del crimen organizado, y señalaron que el 1% fueron extorsionados. Ahora bien, al estudiar la incidencia regional obtuvieron resultados significativos sobre el papel de las comunidades étnicas, dividiendo su muestra en tres áreas.

La primera de ellas estaba predominantemente poblada por clase obrera blanca, y los autores encontraron que además del tráfico de drogas y los mercados de bienes robados, los grupos de crimen organizado se centraron en la extorsión a empresas a través de la intimidación y el miedo hacia los negocios locales. Estas compañías también les eran útiles a las organizaciones criminales para las labores de distribución de bienes ilegales y drogas y la provisión de elementos accesorios para la realización de sus tareas, como por el ejemplo el uso de vehículos de empresas.

⁸⁴ Así lo afirman Dugato et al. (2013) y Mugellini (2013), entre otros.

En la segunda área estudiaron los negocios de la comunidad asiática cuyos negocios controlaban y explotaban los grupos criminales locales a través de procesos extorsivos, especialmente los vinculados a servicios de protección mediante el miedo y la intimidación.

En la tercera área se analizó la población de emprendedores de Oriente Medio, cuyos procesos extorsivos se consideraban una forma de contribución comunitaria, cuyo incumplimiento era una conducta reprochable. También aprovechaban la ayuda de los negocios para establecer redes dentro del mercado de bienes ilícitos.

Este estudio evidencia la importancia de las comunidades étnicas en el estudio de la vulnerabilidad de los negocios frente al crimen organizado, cuestión que se expone a continuación.

3.3. b) Factores de vulnerabilidad en negocios establecidos dentro de comunidades étnicas

La inclusión de la comunidad étnica, como elemento de estudio en los procesos extorsivos a empresas, es especialmente relevante en el ámbito del crimen. Algunos de los elementos que pueden resultar atractivos para el crimen organizado son⁸⁵:

- La tendencia a la concentración de negocios en las zonas de asentamiento, puesto que las poblaciones extranjeras tienden a emplazarse en regiones específicas y establecer vínculos con sus compatriotas, aunque estas tendencias pueden variar en función de la cultura a la que pertenezcan. Esta característica facilita los procesos extorsivos específicamente para el control del territorio.
- Las necesidades de traslado y financiación de grupos migratorios, debido a que las organizaciones criminales pueden ofrecer servicios de transporte de grupos de personas en procesos migratorios, ya sea de forma legal o ilegal, y de financiación para la supervivencia e incluso la apertura de un negocio en territorio extranjero. Estas situaciones pueden conllevar préstamos usureros que se pueden transformar en extorsión ante situaciones de impago.
- La especial vulnerabilidad física de determinadas poblaciones, puesto que el crimen organizado puede beneficiarse a través de falsos servicios de protección, aprovechando la situación de numerosos inmigrantes establecidos en territorios nuevos, que suelen

⁸⁵ Albanese (2011) y Lisciandra (2013) exponen estas ideas.

denunciar menos a la policía las situaciones de abuso, o encontrar enormes problemas para hacerlo debido a barreras lingüísticas o culturales.

Dos estudios revisten especial interés en esta materia:

En primer lugar, Chin et al. (1992) analizaron los patrones extorsivos de grupos organizados a empresarios dentro de la comunidad china asentada en EE. UU.⁸⁶ Los autores destacan el aislamiento social, físico y económico de esta comunidad a causa de las barreras lingüísticas, culturales y en especial, debido a su preferencia por hacer negocios dentro de su propia comunidad. De esto se aprovechan las organizaciones criminales y proveen a sus compatriotas de servicios ilícitos como préstamos ilegales, prostitución y juego, que incluso les aporta legitimidad como grupo de referencia. En este escenario, el pago de extorsiones por parte de los pequeños negocios puede llegar a ser una imposición institucional y cultural.

En segundo lugar, el estudio de Ellis (2013) expone que la extorsión a empresas es una de las actividades⁸⁷ más comunes de los grupos de crimen organizado chino en Latinoamérica⁸⁸. Se trata de procesos extorsivos perpetrados a pequeños negocios y comerciantes pertenecientes a la comunidad china, situados en los grandes centros urbanos como Buenos Aires o Lima. Estos grupos ilegales asiáticos establecidos en otros continentes, suelen aprovechar las oportunidades de lucro que cada mercado ofrece, manteniendo incluso relaciones comerciales ilegales con el crimen organizado local. Por citar solo un ejemplo: “el grupo Dragón Rojo, cuyas actividades estaban antes concentradas principalmente en la extorsión a dueños de restaurantes y comerciantes chinos, ha comenzado a participar en la red mundial de tráfico de personas y, más recientemente, en el tráfico de cocaína y drogas sintéticas desde Asia” (Ellis, 2013, p. 476). Gracias a la revisión de casos a partir de fuentes abiertas (esencialmente prensa local), la autora destaca tanto la resistencia de las víctimas a denunciar estos casos a las autoridades de los países donde se ubican⁸⁹, como la especial vinculación de las víctimas con su país de origen, dado que las extorsiones llevan aparejadas amenazas a miembros de su familia localizados en China.

⁸⁶ Para ello, realizaron entrevistas a 603 dueños de negocios chinos en la ciudad de Nueva York.

⁸⁷ Junto con el tráfico de personas, drogas y bienes de contrabando.

⁸⁸ Los casos obtenidos de fuentes abiertas, esencialmente prensa.

⁸⁹ En especial dada la cultura de la comunidad y la violencia de las organizaciones.

3.4. Consecuencias de la extorsión a empresas

Analizadas las consecuencias del crimen organizado en un apartado previo, así como el impacto de las actividades extorsivas en el ámbito de la delincuencia organizada sobre cualquier tipo de víctima, incluidos particulares, resulta interesante exponer algunos de los efectos perversos más relevantes y específicos de la extorsión a las empresas por parte de grupos criminales.

En primer lugar, las *empresas víctimas* de extorsión ven recortados sus beneficios por la imposición de pagos y condiciones, limitando sus beneficios o condicionando los mismos a un incremento del precio de sus productos o servicios, que pueden repercutir en el precio final, disminuyendo su ventaja competitiva. Así, si se ven obligados a aportar unos pagos sistemáticos al grupo extorsivo su actividad económica pierde rentabilidad.

En segundo lugar, estas prácticas afectan a la libertad de actuación de los empresarios y a la *libre competencia*. Frecuentemente esta limitación consiste en la prohibición de contratar a otros proveedores más competitivos o de abrir segundos locales o la obligación de traspasar el negocio a determinados territorios controlados por el grupo criminal. Así, si deben contratar determinados productos con proveedores concretos se coarta su libertad de contratación y se limita el nicho de mercado que ofrecen otros proveedores que no están vinculados al crimen organizado.

En tercer lugar, este impacto sobre el mercado también afecta a los *usuarios o clientes*, particulares que conforman la demanda de un servicio o producto, pues se pueden encontrar una oferta distorsionada, no pagando un precio justo por lo contratado debido al ajuste del mercado a los intereses financieros del crimen organizado (Gambetta, 1993; Von Lampe, 2016). Por ejemplo, los empresarios pueden repercutir en el precio final el coste de los pagos al grupo extorsivo. A medio plazo también se puede producir un aumento de precio generalizado debido la orientación monopolística provocada por las organizaciones criminales de un territorio.

A medio y largo plazo, el control del crimen organizado puede conllevar una tendencia hacia el monopolio, lo que implica la distorsión de *la economía del mercado* en un sector o territorio concreto, además de tener un impacto significativo en el *crecimiento económico* de las regiones concernidas. Esto puede afectar no sólo a las empresas directamente victimizadas, si no a los negocios dentro del sector o a las empresas proveedoras, que ven limitada su actividad económica (Savona y Berlusconi, 2015).

Por último, los procesos extorsivos arraigados en un territorio pueden terminar *empobreciendo* la zona y haciendo *desaparecer sectores empresariales* a nivel local: cuando un gran grupo de negocios, concentrado físicamente en un entorno, sufre procesos extorsivos durante un tiempo prolongado, se puede superar la capacidad explotadora que es capaz de soportar la zona, es decir, que los negocios dejen de ser rentables y ya no puedan aportar los beneficios que el crimen organizado busca. En tal momento los grupos organizados tenderán a desplazar sus actividades extorsivas a otras regiones o negocios explotables que puedan dar la rentabilidad deseada, a la vez que desaparecerán de forma generalizada los negocios previamente victimizados y las actividades económicas en una zona o en un sector específicos (Paoli, 2003; Varese, 2010).

4. Conclusiones de la aproximación teórica

Como principales conclusiones del capítulo expuesto, se detallan dos puntos clave para la tesis que se presenta: la delimitación del objeto de estudio y las principales necesidades de investigación para el análisis que se propone.

4.1. Delimitación del objeto de estudio

Expuesta la aproximación teórica al concepto de crimen organizado y descrito el fenómeno de la delincuencia organizada, una vez enmarcadas las actividades extorsivas dentro de los mecanismos de infiltración de las organizaciones criminales en la economía legal, cabe concluir que el objeto de estudio se centra en los procesos extorsivos a las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada.

Esto implica considerar específicamente las diferentes formas de manifestación que adopta la extorsión a empresas cuando ésta se perpetra mediante una agrupación coordinada de personas cuyos fines principales son la obtención de beneficios a través de la ocultación de sus actividades ilícitas y el desarrollo de negocios legales e ilegales mediante formas eficaces de financiación y control.

De esta manera, existen factores de vulnerabilidad en determinadas agrupaciones de negocios que permiten al crimen organizado explotar más eficientemente sus recursos; estos

factores se pueden congregar en torno a sectores económicos específicos o concentrar dentro de comunidades étnicas, debido a determinadas características que revisten sus empresas.

Será relevante, por tanto, conocer en qué consisten los *procesos extorsivos a empresas*, cómo son las *organizaciones criminales* dedicadas a tal actividad, y qué vulnerabilidades explotan de los *negocios victimizados*, para poder establecer unos objetivos realistas en torno a una propuesta metodológica de estudio aplicable a España, así como analizar y describir los procesos extorsivos a las empresas establecidas dentro de nuestras fronteras, y desarrollar recomendaciones de lucha y prevención partiendo de implicaciones jurídicas, policiales y judiciales⁹⁰ de un estudio más profundo de la materia.

4.2. Identificación de las necesidades principales del análisis

Las principales necesidades de análisis que se derivan de la aproximación teórica al objeto de estudio son dos:

- El análisis legal de las conductas contenidas en los procesos extorsivos a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada, que implicará estudiar la respuesta del sistema penal a tales procesos, analizar el contexto legal en el que se desarrollan tales conductas, es decir, la criminalidad organizada, además de conocer el encaje de la extorsión en la lucha desde las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y el sistema judicial. Tales conductas se pueden englobar en tres tipologías expuestas por Monzini (1993):
 - a) extorsión-protección que consiste en un impuesto regular que se aplica a través de medios violentos;
 - b) la extorsión laboral en el ámbito de la delincuencia organizada, que consiste en una negociación violenta para el acceso al mercado laboral y al empleo (por lo general, la extorsión procede de antiguos trabajadores de los negocios de las víctimas con la ayuda de grupos organizados); y
 - c) la extorsión monopolística en el ámbito de la delincuencia organizada que es una estrategia de mercado específica forzada por medios violentos y cuyo objetivo consiste en la eliminación física del competidor o en la formación de coaliciones monopolísticas.A partir de las conductas extorsivas que se extraigan de tales tipologías, se identificarán los principales delitos objeto de análisis legal.

⁹⁰ Objetivos que se expondrán en el primer apartado del capítulo cuarto de la presente tesis.

- El análisis metodológico para la elaboración de una propuesta de investigación de los procesos extorsivos a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada que respete los criterios científicos, especialmente de objetividad y replicabilidad y que sea aplicable a España; lo que deberá incluir un marco metodológico para estudiar la extorsión y una propuesta metodológica para su aplicación en nuestro país.

Ello permitirá la implementación del estudio empírico basado en casos reales que aporten nuevo conocimiento material del fenómeno objeto de estudio, a través del cual, se podrán desarrollar conclusiones orientadas a la recomendación de lucha y prevención.

CAPÍTULO 2. EL ANÁLISIS LEGAL: LA RESPUESTA DEL SISTEMA PENAL A LOS PROCESOS EXTORSIVOS

Teniendo en cuenta los aspectos criminológicos más relevantes de los procesos extorsivos a las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada, expuestos en el capítulo primero, el presente capítulo desarrolla un análisis jurídico de las conductas criminales contenidas en tales procesos.

Se procede, pues, a profundizar en la concreción de la casuística que muestra hasta qué punto se pueden presentar configuraciones combinatorias distintas.

A tal efecto, se describirán las principales conductas que componen las diferentes formas de actuar de las principales tipologías extorsivas reconocidas en la literatura científica⁹¹, con objeto de identificar los delitos que configuran los comportamientos propios de las organizaciones criminales dedicadas a extorsionar a los negocios. Ello permitirá conocer, a partir de la casuística, las respuestas penales aplicables a los complejos procesos extorsivos, y analizar las cuestiones jurídicas más relevantes para la aplicabilidad en un estudio empírico.

Con tal propósito, este capítulo se estructura en cinco apartados:

En primer lugar, el estudio de las respuestas jurídicas a los procesos extorsivos en el ámbito de la criminalidad organizada; en segundo lugar, el análisis legal del contexto de las organizaciones criminales; en tercer lugar, las herramientas policiales de investigación y persecución específicas para los incidentes extorsivos; en cuarto lugar las herramientas legales de instrucción y enjuiciamiento aplicables a las extorsiones y en quinto y último lugar, se presentan las conclusiones del marco jurídico mediante la identificación de problemáticas relativas al objeto de estudio de la presente tesis.

⁹¹ Siguiendo el estudio de Monzini (1993), expuesto en el siguiente apartado.

1. Procesos extorsivos y posibles respuestas penales

Como ya se ha expuesto en el capítulo primero, una vez analizados los procesos extorsivos, se han delimitado diferentes tipologías en cuanto a la clase de delitos cometidos. De todas estas tipologías, las de mayor interés para llevar a cabo el presente estudio se recogen en el estudio de Monzini (1993) que se detallan a continuación.

1.1. Tipologías extorsivas y tipos penales en juego

En las tres tipologías expuestas por Monzini (1993), extorsión por protección⁹², extorsión monopolística⁹³ y extorsión laboral⁹⁴, se han identificado una serie de conductas criminales que articulan diversas formas de actuar de las organizaciones criminales dedicadas a estas actividades. A continuación, se describen dichas conductas para, seguidamente, identificar los tipos penales en los que podrían encajar. Tras ello, se procederá a una breve definición y diferenciación de esas figuras penales.

1.1. a) Supuestos de extorsión por protección

La imposición de pagos o compensaciones a cambio de no ejercer violencia física sobre la víctima, sus familiares o propiedades puede manifestarse de diversas formas. Las conductas típicas variarán en función de cómo se establezca el proceso extorsivo y de sus características, por ejemplo: la demanda puede solicitarse en términos económicos, en especie o en obligaciones contractuales; otra variable se refiere al colectivo de víctimas afectado que puede ser un conjunto de empresarios de la zona de control de la organización criminal o un grupo de extranjeros recién llegados al país. Por lo tanto, bajo esta tipología de proceso extorsivo, la organización criminal puede desarrollar, en paralelo, diferentes actos extorsivos que conforman supuestos con tipos penales distintos a la extorsión y con elementos de interés para el análisis jurídico de las conductas criminales:

⁹² Que, como se ha explicado en el capítulo anterior, consiste en el pago regular de una cantidad que se impone mediante el uso de violencia, y donde el grupo ilegal está especializado y es el garante de la protección de las empresas que pagan.

⁹³ Tal como se ha descrito en el primer capítulo, es una estrategia empresarial por la que se trata de eliminar físicamente a los competidores o crear coaliciones monopolísticas mediante el uso de la violencia, utilizada por el crimen organizado para controlar áreas del mercado legal.

⁹⁴ Se trata de una negociación violenta para manipular el mercado laboral.

Conducta I: exigencia de pago regular de una cantidad de dinero a cambio de protección. Se trata de forzar una aportación económica⁹⁵ mediante su solicitud, por parte de uno o varios miembros del grupo, que pretende intimidar a la víctima al identificarse como representantes de una organización criminal, e incluso consistir en realizar visitas reiteradas para imponer sus demandas a través del acoso físico o mediante el acoso telefónico. Frente a la resistencia de la víctima al pago sistemático, el grupo puede llevarse todo o parte del contenido de la caja registradora del negocio, o sustituir el desembolso regular por la apropiación de productos que se comercialicen en la empresa; por ejemplo, si el negocio fuera un restaurante, la sustitución podría consistir en el consumo periódico y gratuito de comida y bebida.

Modus operandi: se ejerce a través de mecanismos de intimidación de forma explícita, esto es, mediante advertencias de lo que le ocurriría a la víctima en caso de no pagar. También puede darse una intimidación implícita, con la simple identificación del miembro del grupo como parte de una organización criminal⁹⁶. En este último caso, la intimidación adopta la forma de lo que criminológicamente se denomina “reputación”: la fama o reputación de ese miembro del grupo criminal hace innecesaria una intimidación explícita, pues la víctima sabe lo que le puede pasar si no accede a sus pretensiones.

Posibles *respuestas penales*: la estructura básica en ambos supuestos, tanto ejerciendo intimidación explícita como implícita, es la de las amenazas condicionales⁹⁷, puesto que se trata de la amenaza de un mal constitutivo de delito –contra la integridad física o el patrimonio por daños en la empresa- a cambio del pago por parte de la víctima o la sustracción de dinero de la caja registradora o de productos propiedad del negocio. Pero algunas de las conductas descritas también podrían formar parte de las conductas propias de la intimidación del robo con violencia o intimidación o del delito de extorsión.

En el primer caso, al tratarse de pagos periódicos con intimidación explícita, podríamos hablar de un delito de extorsión tal como se entendió en el supuesto del “impuesto revolucionario” de ETA⁹⁸.

⁹⁵ Si son negocios que aparenten buena capacidad económica pueden ser grandes cantidades las que se exijan, pero si se trata de pequeñas empresas el pago será menor.

⁹⁶ Este mensaje se puede reforzar con el acompañamiento de los miembros más corpulentos del grupo.

⁹⁷ Todos los tipos penales nombrados en el presente punto, contenidos como delitos que forman parte de las diferentes formas de actuar de las organizaciones criminales dedicadas a procesos extorsivos serán analizados pormenorizadamente en el siguiente punto.

⁹⁸ Este tema se abordará de forma específica más adelante, dentro del presente capítulo.

En cambio, el robo con intimidación es la figura que mejor encajaría en el segundo de los supuestos, puesto que se ejerce intimidación, aunque sea implícita. En este punto, incluso cabría hablar en algún caso de la denominada “intimidación ambiental”⁹⁹.

Conducta II: recuperación de deudas. Las organizaciones criminales dedicadas a la concesión de préstamos ilegales¹⁰⁰, suelen reclamar los impagos de forma violenta. Este tipo de solicitud acostumbra a incluir advertencias de los daños que puede sufrir la víctima si no salda la deuda, e incluso puede acarrear la exigencia de que la víctima preste su empresa como lugar para la realización de actividades delictivas de la organización criminal, como sucedería en el caso de obligarla a ser punto de venta de drogas. En ocasiones, durante el proceso de recuperación de deudas los prestatarios pueden incrementar los intereses de forma arbitraria, o reclamar más cantidad de dinero de lo estipulado.

Modus operandi: en estos casos se ejerce violencia o intimidación sobre la víctima, usando incluso información profesional o personal de ella o de sus familiares para que la amenaza sea más verosímil y más eficaz, para así forzar el pago. Hay que precisar que el objeto principal del proceso extorsivo en estos supuestos es el pago de una deuda, es decir, del cumplimiento en principio de algo debido, aunque este tipo de préstamos suele ser ilegal, incluso en los límites de la usura. Pero tanto si la deuda tiene origen en un préstamo bien sea legal o ilegal¹⁰¹, el proceso extorsivo comienza con el impago, cuando se fuerza su cumplimiento con violencia o intimidación, además de los intereses leoninos que se puedan exigir.

Posibles respuestas penales: estos supuestos están en el límite de varios delitos. Si es el pago de una deuda ya vencida, es decir, sólo se exige el dinero que se debe, empleando violencia o intimidación puede ser calificado como un delito de extorsión, al tratarse del pago de la deuda como acto jurídico proveniente de una relación jurídica previa como es un préstamo. También puede considerarse una realización arbitraria del propio derecho, que igualmente se lleva a cabo con violencia o intimidación. Se trata de un delito contra la Administración de Justicia en el que se exige el pago de una deuda de forma ilegal, esto es, a través de tres medios comisivos posibles: violencia, intimidación o fuerza en las cosas, constituyendo una alternativa frente a las vías legales para el acreedor que quiere ver satisfecha la deuda en su favor.

⁹⁹ Este concepto se analizará en un apartado específico de este mismo capítulo.

¹⁰⁰ Frecuentemente concedido a personas vinculadas al consumo de drogas o a negocios que tienen dificultades económicas.

¹⁰¹ Más adelante se explican los mecanismos mediante los que estas organizaciones implementan un proceso extorsivo a partir del impago de una deuda.

Si se exige el pago de más dinero del debido, puede tratarse de una extorsión, que supone el pago de dinero no debido como acto o negocio jurídico, o en caso de que no se entienda como acto o negocio jurídico, podría tratarse de un robo con violencia o intimidación.

Subsidiariamente, si resulta difícil probar cualquiera de los tres delitos anteriores siempre existiría un delito de amenazas condicionales en el supuesto de expresar verbalizaciones o incluso de coacciones si hubo ejercicio de violencia, sin descartar un posible delito de lesiones como resultado de esta.

Conducta III: consumo gratuito de productos, bebidas o comidas por parte de los miembros principales de la organización criminal. En este caso, los pagos consisten en aportaciones no económicas que el negocio puede proporcionar: si se trata de un restaurante, la conducta consiste en el consumo sistemático y gratuito de bebidas y comidas por parte de los miembros del grupo hasta que éste considere que la deuda queda saldada.

Modus operandi: en estos casos se ejerce una intimidación frecuentemente implícita, lo que los asimila a los supuestos anteriores en los que miembros de la organización criminal llegan a la empresa para llevarse productos o dinero de la caja registradora. Es decir, la simple identificación de los autores como miembros de una reputada organización criminal es suficiente para intimidar al dueño del negocio y doblegar su voluntad, permitiendo el libre consumo en su local.

Posibles *respuestas penales*: consumir los productos en el mismo lugar donde se ubica el negocio puede suponer un delito de extorsión en la medida en la que se está obligando con intimidación a un acto o negocio jurídico como es la prestación de un servicio con contraprestación económica— por ejemplo, dar comida—. Si, por ejemplo, se llevaran los productos para consumir en su casa —*take away*—, aunque encajaría también en el tipo de extorsión se aprecia también cierta semejanza con un robo con violencia e intimidación.

De nuevo, la existencia de un contexto intimidatorio plantea subsidiariamente la existencia de unas amenazas condicionales, que consistirían en la amenaza explícita o implícita de un mal a las personas del negocio o a su patrimonio si no se accede al servicio gratuito de comida y bebida. En el supuesto de que se consiga el consumo gratuito mediante violencia, podría plantearse un delito de coacciones. En el caso de que las coacciones se prolonguen en el tiempo de tal modo que supongan una privación de libertad podríamos estar ante un delito de detenciones ilegales.

Conducta IV: obligaciones sobre el negocio. Se trata de conductas empresariales¹⁰² que se deben adoptar a petición de la organización criminal, bajo advertencia, por ejemplo, de que el grupo produzca daños en el local. Estas conductas pueden consistir, por ejemplo, en ampliar el horario del bar o restaurante de la víctima en aquellas ocasiones que le interesen a la organización criminal.

Modus operandi: ejercicio de intimidación como en los anteriores supuestos.

Posibles *respuestas penales*: al no apreciarse una sustracción de bienes patrimoniales, parece más difícil sostener un robo con violencia o intimidación y también es difícil identificar el delito de extorsión, porque la ampliación de horario no es exactamente un acto o negocio jurídico. Parece más plausible en estos supuestos identificar los tipos de amenazas condicionales, o coacciones si también hubo violencia.

Conducta V: exigencia de pago a víctimas extranjeras. Consiste en una exigencia especial debido a las concretas características de los procesos extorsivos que se establecen con estos colectivos vulnerables.

Modus operandi: se ejerce intimidación para exigir el pago a víctimas extranjeras, atendiendo a tres tipologías:

- a) Inmigrantes en situación administrativa irregular dedicados al sector de la restauración: en estos casos se solicitan pagos sistemáticos a cambio de no informar a las autoridades de la situación irregular.
- b) Inmigrantes en situación administrativa regular que se dedican a la venta ambulante: en estos supuestos se les exige el pago de parte de las ganancias por ubicarse en una zona de control de la organización, como una suerte de impuestos obligatorios, sin los que no se les permitiría comercializar en la región; también se interponen denuncias falsas a la policía para reforzar la intimidación y advertir a quien no paga de lo que le puede pasar.
- c) Inmigrantes en situación administrativa regular y con negocios que obtienen grandes beneficios: en estos casos se demandan pagos de un volumen importante con métodos

¹⁰² No nos encontramos ante conductas que puedan suponer un tipo penal de corrupción de empresas porque el beneficio no es mutuo, en todo momento la única parte beneficiada del acuerdo siempre es la organización criminal; tal delito podría plantearse el supuesto donde ambas partes, organización criminal y empresa, obtuvieran una ganancia en forma de beneficio o ventaja competitiva, cuestión que no se da en el fenómeno objeto de estudio.

de acercamiento específicamente engañosos, como el interés por establecer negocios conjuntos o de realizar inversiones de beneficio mutuo¹⁰³.

Posibles *respuestas penales*: el caso a) se trata de amenazas condicionales. Los casos b) y c) nos vuelven a situar en el escenario entre el robo con violencia e intimidación y la extorsión por la exigencia de pagos que se vieron con anterioridad. Y también en estos dos casos volvemos a estar subsidiariamente ante la posibilidad de amenazas condicionales o coacciones debido a las advertencias de castigo frente a la posible resistencia de las víctimas.

Si la captación de estas víctimas se produce a través del engaño mediante la muestra de un falso interés en negocios conjuntos con la víctima, la organización puede lograr inducir un error suficiente para realizar un negocio jurídico en su propia contra, en tal caso, se habla de un delito de estafa. Ahora bien, cuando la víctima se da cuenta del engaño (habiendo realizado el negocio jurídico o no), los métodos de intimidación de la organización criminal para que culminen los negocios ilegalmente logrados en su favor y no se ponga en conocimiento de las autoridades suelen incluir amenazas de muerte o, en su caso, de denunciar su situación ilegal. También se pueden cometer delitos de acusación y denuncia falsa, dado que las organizaciones aprovechan el desconocimiento de las víctimas extranjeras de nuestro ordenamiento jurídico, para denunciar falsamente agresiones físicas o verbales ante las autoridades.

1.1. b) Supuestos de extorsión monopolística

En estos casos autores y víctimas son competidores en una misma zona, y los grupos criminales organizados pretenden controlar el ámbito de mercado donde ambos concurren. En estos supuestos las víctimas no suelen tener contacto entre sí; a menudo incluso se procura que estén aisladas para que haya mayor indefensión. Los objetivos pueden ser dos: que se controlen las aperturas y cierres de determinadas empresas que permitan al grupo criminal seguir ejerciendo monopolio o que las víctimas contraten con proveedores de la organización criminal para dominar el suministro de una zona.

Modus operandi: en estos supuestos es menos frecuente que se ejerza violencia física, pero sí diferentes formas de intimidación: en caso de rechazo de las demandas de la

¹⁰³ De nuevo, no existe delito de corrupción de empresas porque el beneficio no es mutuo, en todo momento la única parte beneficiada del acuerdo siempre es la organización criminal; de hecho, en este caso el interés es únicamente aparente, no llegando normalmente a ejecutarse actividad empresarial alguna.

organización criminal se pueden llegar a emplear medios específicos para forzar la conducta empresarial requerida como, por ejemplo, el acoso, los daños materiales e incluso incendios provocados a la empresa para conseguir doblegar la voluntad de la víctima.

En el caso de que el objetivo sea que la víctima contrate sólo con los proveedores de la organización criminal se puede dar el escenario de que inicialmente la relación entre autor y víctima sea fluida y carente de amenazas, similar a lo que sucedería en una relación comercial en la que un sujeto quiere convencer a otro de que su bar o restaurante venda exclusivamente sus servicios¹⁰⁴. El problema surge cuando el comerciante no accede, o bien, pasado un tiempo, quiere contratar con otros proveedores y el autor empieza a ejercer las conductas intimidatorias que se han descrito anteriormente.

Posibles *respuestas penales*: abrir o cerrar empresas o contratar con unos proveedores u otros son identificables con actos o negocios jurídicos, de modo que el ejercicio de violencia o intimidación para su realización nos sitúa en el ámbito de la extorsión. Y, como siempre, subsidiariamente, los delitos de amenazas condicionales o coacciones.

Respecto de las conductas de acoso nos encontraríamos ante unas amenazas condicionales o, en el caso de cometerse reiteradamente y alterar la vida cotidiana del empresario victimizado, podríamos situarnos ante el nuevo delito de acoso¹⁰⁵, especialmente en aquellas conductas de vigilancia o de comunicación insistente con la víctima. Ahora bien, como medios específicos de intimidación para forzar los pagos, también podemos encontrarnos diversos tipos penales: delitos de daños, de incendio o de secuestro.

1.1. c) Supuestos de extorsión laboral

Esta tipología las organizaciones criminales utilizan medios violentos o intimidatorios para influir o incidir en las relaciones laborales de determinadas empresas. Cuando se perpetra sobre pequeñas empresas, el objetivo suele ser la contratación de uno o varios miembros del

¹⁰⁴ Del mismo modo que hay bares que, por ejemplo, sólo suministran una marca de cerveza por haber llegado a un acuerdo que beneficia al proveedor y al comerciante.

¹⁰⁵ Se trata de un nuevo tipo penal, que persigue la reiteración de conductas que concretan un mal que coartan la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima (García del Blanco, 2017a), como se explicará más adelante en este mismo capítulo. Es de interés en la materia debido a que los procesos extorsivos han empleado tradicionalmente este mecanismo de acoso como forma de presión y vigilancia de sus víctimas que, implementado tras la verbalización de amenazas de muerte, pueden generar un enorme temor en las víctimas que los lleve a aceptar las condiciones extorsivas o, en su caso, a denunciarlo ante las autoridades.

grupo como empleados del negocio. Cuando se trata de grandes empresas, el método es diferente, pues suele consistir en introducir un “topo” dentro de la empresa como representante de los trabajadores para actuar desde dentro y conseguir con ello alguno o algunos de los siguientes tres propósitos: a) impedir huelgas; b) impedir reivindicaciones laborales y c) reclutar trabajadores, lo que incluye obligar al empresario a contratar -o a renovar el contrato laboral- a determinadas personas que le indique la organización criminal, normalmente integrantes de esa organización.

Modus operandi: violencia o intimidación en los tres casos, ejercida sobre el empresario para que tome las decisiones empresariales deseadas por la organización. De nuevo, en caso de rechazo a las demandas de la organización criminal se pueden llegar a emplear métodos específicos como el acoso, los daños materiales e incluso incendios provocados a la empresa para conseguir doblegar la voluntad de la víctima.

Posibles *respuestas penales*: el supuesto de tratar de impedir la huelga entraría dentro de la modalidad agravada de coacciones (artículo 172.1, párrafo segundo) para impedir el ejercicio de derechos fundamentales, en este caso, el derecho a la huelga del artículo 28.2 de la Constitución.

En el caso de las reivindicaciones laborales también nos encontraríamos con un delito de coacciones, en principio sin la agravación del caso anterior, aunque habría que analizar cada caso concreto por si pudiera afectar a algún derecho fundamental, sin perjuicio de los delitos contra los trabajadores que eventualmente pudieran cometerse. Se trata de casos en los que una organización criminal impide o limita derechos vinculados con la libertad sindical y la huelga, como forma de control del mercado laboral a través de coacciones a empleados de una empresa o un sector económico, aunque no se han detectado casos en el presente estudio.

En el caso de obligar a suscribir un contrato laboral, o a renovarlo, bajo violencia o intimidación, nos sitúa más claramente ante una extorsión, pues un contrato es sin duda un acto o negocio jurídico. Y, también, subsidiariamente, cabe siempre apreciar amenazas condicionales o coacciones.

Una vez identificadas las diversas respuestas penales a partir de la realidad fáctica de los diferentes procesos de extorsión, la mayoría se pueden clasificar, a tenor de los delitos encontrados, como: delitos contra el patrimonio y delitos contra la libertad, aunque no exclusivamente. A continuación, se presenta un análisis pormenorizado tanto del delito de

extorsión como de los tipos penales que comparten características con la extorsión¹⁰⁶ y que también forman parte de los procesos extorsivos objeto de estudio de la presente tesis.

1.2. Principales delitos identificados

Las formas de actuar propias de cada tipología extorsiva nos han permitido extraer los principales delitos que se cometen en los procesos extorsivos, además de otros que presentan un carácter secundario en el análisis, y que se exponen en los siguientes apartados de forma más sucinta. Se trata de tipos penales de muy distinta naturaleza entre los que se encuentran delitos contra el patrimonio como son la extorsión y el robo con violencia e intimidación; delitos contra la libertad como las amenazas condicionales, las coacciones, las detenciones ilegales, los secuestros o el acoso, y concretamente en los casos de recaudación de deudas, identificamos un delito contra la Administración de Justicia como es la realización arbitraria del propio derecho.

1.2. a) Extorsión

El delito de extorsión se encuentra tipificado en el artículo 243 del Código Penal con el siguiente tenor literal: *“el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados”*.

Así pues, se trata del delito esencial del presente estudio, al que se dará un especial protagonismo a lo largo del capítulo; y sobre el que cabe mencionar un interesante comentario de Muñoz Cuesta (2004, p.1):

“Dentro de los delitos contra patrimonio y el orden socioeconómico se halla el delito de extorsión, el que una vez examinada la jurisprudencia del Tribunal Supremo se constata que su aplicación lo ha sido en raras ocasiones, conducta delictiva que por el contrario estimamos ofrece mayores posibilidades de persecución y consecuentemente de castigo, teniendo en

¹⁰⁶ Se han seleccionado los delitos de especial interés en el análisis de conductas criminales dentro de los procesos extorsivos, sin perjuicio de la aparición otros eventuales tipos penales.

cuenta su contenido puramente patrimonial y propio de una delincuencia de los tiempos en que vivimos”.

En la misma línea Álvarez García (2011b) cita como ejemplo que en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2010 no se hace ni una sola referencia al delito de extorsión, e indica asimismo que no llegan ni a una veintena los casos referenciados en la Jurisprudencia del año 2009, en contraposición con la “cifra negra nada despreciable” que piensa que existe (Álvarez García, 2011b, p.172)¹⁰⁷.

Teniendo en cuenta estas palabras, se nos presenta un tipo penal regulado en el Código Penal de manera autónoma, en el único y complejo artículo 243 del Capítulo III, ubicado en el Título XIII: Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.

Atendiendo al propio precepto penal, a la doctrina y a la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debemos considerar el delito de extorsión como una figura contra el patrimonio dado su claro propósito lucrativo, como también lo indican Gago (1999), Varela (2004), Cuenca (2006b), Hava (2011), Robles y Pastor (2015), Quintero (2016b), Vicente (2016) y Muñoz Conde (2017), entre otros; pero como matiza Díaz-Maroto (2017), con una acción objetiva parecida a los delitos contra la libertad, ya que tiene un claro componente coactivo exteriorizado a través del uso de la violencia o de la intimidación, con la finalidad de impedir u obligar a la realización de un negocio o acto y causar así un perjuicio económico¹⁰⁸.

Para profundizar más en el concepto, debemos acudir a la jurisprudencia (Díaz-Maroto, 2017), que identifica cuatro elementos principales¹⁰⁹:

a) el comportamiento de *obligar a una persona a realizar* o a omitir un negocio jurídico, aunque no sea necesariamente identificable este negocio con un acto de disposición, pero sí debe tener contenido *patrimonial*;

b) la *violencia* o la *intimidación* como medio para obligar;

¹⁰⁷ Esta idea es significativa en el contenido de los procesos extorsivos que se van a analizar, y aplicable al ámbito de la delincuencia organizada actual que perpetra delitos (especialmente patrimoniales) contra las empresas.

¹⁰⁸ STS de 27 de diciembre de 2010, donde se analiza el delito de extorsión combinado con el de asociación ilícita, y define al primero como “un tipo híbrido compuesto por el uso de la violencia o las coacciones como forma de alcanzar un beneficio patrimonial ilícito”.

¹⁰⁹ Así se afirma en la SAP Madrid de 19 de septiembre de 2008 y en la SAP Mallorca de 15 de marzo de 2010.

c) *perjuicio en el patrimonio* del obligado o en el de un tercero, aunque se especifica que no es necesario que éste llegue a producirse, ya que el delito se consuma con la realización del negocio, a pesar de que éste no produzca el resultado;

d) *ánimo de lucro* que generalmente se construye en correlación al perjuicio patrimonial.

La jurisprudencia también hace mención a tres aspectos claros en relación con el tipo penal¹¹⁰: por un lado, la exigencia expresa de *ánimo de lucro*; por otro la amplitud de la *acción*, que no solo comprende la de obligar a otro a suscribir, otorgar o integrar, sino también a omitir; y, en tercer y último lugar, la extensión del *objeto*, el acto o negocio jurídico, que no tiene por qué circunscribirse a algo que tenga que estar documentado o registrado, ya que también podría ser un contrato no escrito o una transferencia bancaria.

Es necesario señalar que el citado artículo 243 experimentó un significativo cambio de ubicación en el actual Código Penal, pasando a integrar un capítulo independiente debido a una motivación clara: “una corriente doctrinal que vino entendiendo que se trataba de una especie propia y, por ello, criticaba su ubicación en el antiguo Código Penal de 1973, en que el artículo 503, antecedente más inmediato del actual artículo 243, se encontraba dentro del capítulo dedicado a los robos, como dando a entender que era una modalidad más de ellos”¹¹¹. Parece que se trataba de responder así a un concurso aparente de normas penales, dada su afinidad con el delito de robo, pero también con el de coacciones o de amenazas condicionadas, que habría que resolver mediante el principio de especialidad, “habida cuenta que la extorsión, por sí sola, engloba los requisitos de los demás delitos citados, en cuanto que la misma persigue una finalidad defraudatoria, para cuya consecución se vale el agente, no ya de engaño, sino de medios coactivos o amenazadores”¹¹².

Por tanto, la existencia de un capítulo independiente donde se integra el delito de extorsión se explica en virtud de su nueva consideración como “figura anómala y atípica, que bascula entre el delito de robo con intimidación, las defraudaciones e, incluso, las amenazas condicionales en lo económico, pero mantiene sin embargo una fisonomía propia e independiente”¹¹³; alcanzando así lo que la jurisprudencia ha señalado como una mayor perfección técnica, dado que el *modus operandi* es completamente distinto al de la figura de

¹¹⁰ Como indica la SAP Asturias de 5 de marzo de 2014 y SAP Navarra de 31 de octubre de 2015.

¹¹¹ Tal como señalan la SAP Santa Cruz de Tenerife de 9 de enero de 2013.

¹¹² Así lo indica la SAP Santa Cruz de Tenerife de 9 de enero de 2013.

¹¹³ STS de 29 de septiembre de 1999.

robo¹¹⁴ aunque sus similitudes son innegables (Díaz-Maroto, 1997; Gago, 1999; Varela, 2004; Vicente, 2016).

El bien jurídico protegido por el delito de extorsión es tanto la libertad de la víctima como el patrimonio propio o de un tercero, aunque eventualmente la integridad física y la propia vida pueden ser menoscabadas (Gómez Tomillo, 2015; Hava, 2016; Díaz-Maroto, 2017).

Ahora bien, esta figura jurídica requiere, además, que exista una directa *colaboración* por parte del sujeto pasivo¹¹⁵, lo que implica su denominación como delito de encuentro o experimental¹¹⁶; no se trata de una colaboración espontánea sino determinada por la intención de evitar un mal, como resultado de la violencia o de la intimidación ejercidas en las que se incluyen conductas como empujones, forcejeos o comportamientos que generen cualquier tipo de lesión (Varela, 2004).

Se trata de un delito de resultado cortado, dado que no precisa un efectivo empobrecimiento, sino que se adelanta la intervención penal al peligro patrimonial de la víctima, previo a la lesión consumada de su libre voluntad¹¹⁷.

Cabe matizar que el acto o negocio jurídico pretendido ha de ser apto para producir un perjuicio patrimonial, por lo que la extorsión puede plasmarse en cualquier documento otorgado cuyo objeto dispositivo o de renuncia sea un bien mueble o inmueble o incluso puede ser un derecho, aunque este siempre deberá tener un carácter patrimonial, como bien señala Quintero (2016b).

En el tipo básico de extorsión la pena está delimitada entre uno y cinco años de prisión, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados. Pero existe también la posibilidad de atenuación de la pena en uno o dos grados, conforme a lo establecido en el artículo 269 del Código Penal en caso de actos preparatorios: provocación, conspiración y proposición para cometer extorsión.

Atendiendo a las características de este delito, resulta de interés desarrollar brevemente algunos puntos que requieren una especial atención, como son: a) los elementos del tipo penal

¹¹⁴ STS de 13 de octubre de 2009.

¹¹⁵ Así exigido por el ATS de 29 de mayo de 2014 y recordado por la SAP de Valladolid de 20 de enero de 2015.

¹¹⁶ SAP Santa Cruz de Tenerife de 9 de enero de 2013, que cita la STS de 29 de septiembre de 1999.

¹¹⁷ SAP Santa Cruz de Tenerife de 9 de enero de 2013.

b) el núcleo y la finalidad de la extorsión y c) la violencia y la intimidación. Todos ellos se describen a continuación.

I) Especial mención a los elementos del tipo penal

El concepto jurídico de extorsión tiene una caracterización compleja¹¹⁸, en la que encontramos una serie de elementos objetivos y subjetivos¹¹⁹ que se deben analizar detenidamente.

- En primer lugar, el *ánimo de lucro* es un elemento común al hurto y al robo y, en general, a todos los denominados delitos de enriquecimiento, que consisten en la ganancia o provecho; como señala Bajo (2004, p.55), el lucro es “fundamentalmente una ventaja patrimonial”. Tal como expone Rodríguez Mourullo (2017) existe un sector doctrinal¹²⁰ que defiende la concepción del lucro en su vertiente estrictamente económica, aunque la jurisprudencia ha optado de forma consolidada por un sentido más amplio. Así, se entiende por lucro “cualquier provecho, beneficio, ventaja o utilidad, incluso altruista o contemplativa, para sí o para un tercero que puede derivarse de la apropiación del objeto”¹²¹.

Este concepto abarca tanto la intención del sujeto activo de incorporar la cosa sustraída a su patrimonio, es decir, en beneficio propio, como la mera tenencia, incluyendo fines contemplativos o de transmisión gratuita a una tercera persona¹²².

En el delito de extorsión, en términos generales, que el resultado lucrativo se produzca o no, resulta ajeno a la consumación, pues la intención es suficiente¹²³.

- El segundo elemento central es el *acto u omisión del sujeto pasivo*. En este punto existe una importante diferencia¹²⁴ con la doctrina jurisprudencial correspondiente

¹¹⁸ Confirmado por la SAP Gerona de 22 de enero de 2015.

¹¹⁹ SSTs de 18 de septiembre de 1998, de 21 de octubre de 2004 y de 22 de octubre de 2009.

¹²⁰ Representado por Rodríguez Devesa (1946), Bajo (1975) y Pérez Manzano (1998).

¹²¹ Tal como recoge la SAP Santa Cruz de Tenerife de 9 de enero de 2013.

¹²² SAP Burgos de 20 de noviembre de 1998.

¹²³ SAP Santa Cruz de Tenerife de 9 de enero de 2013; además recuerda: “este elemento queda excluido si la intención es la de resarcirse de perjuicios debidos, pues ello nos llevaría a una figura penal diferente (realización arbitraria del propio derecho o coacciones).”

¹²⁴ Señalada por la STS de 26 de abril de 2002.

al Código Penal anterior¹²⁵, en el que se exigía la efectiva suscripción de una escritura pública o documento. Sin embargo, para la actual normativa penal, la extorsión se comete siempre que se emplee violencia o intimidación para obligar a otro a realizar u omitir algún acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, es decir, sin necesidad de que suscriba documento alguno, lo que permite denominarle un delito de “resultado cortado”¹²⁶. Se amplía así el radio de acción del delito respecto del tipo penal del Código anterior (Gago, 1999; Cuenca, 2006b) y, además, no se exige que el perjuicio llegue a producirse (Cuenca, 2006b; Hava, 2016).

- En tercer lugar, la *violencia* o la *intimidación* son dos conceptos diferenciables, aunque con puntos comunes. Ambos suponen medios suficientes, cada uno por sí mismo, para producir una efectiva lesión de un bien jurídico protegido, debiendo ser en todo caso “relevante, jurídicamente típica, y ejercerse de forma incontestada”¹²⁷, y, por supuesto, anteriores y conectadas con el apoderamiento para poder constituirse como elemento del tipo penal de la extorsión¹²⁸.

Por su importancia para el presente trabajo, posteriormente se hará un breve comentario, en este mismo apartado.

II) Especial mención al núcleo y a la finalidad de la extorsión

Como se ha señalado previamente, el núcleo de la conducta típica de la extorsión viene constituido por la determinación violenta o intimidatoria de la ejecución de un acto o negocio jurídico, estableciendo de este modo el resultado del delito (Octavio, 1982; Gómez Recio y Espina Ramos, 2005; Álvarez García, 2011b; Martínez Atienza, 2014; Gómez Tomillo, 2015; Robles y Pastor, 2015; Muñoz Conde, 2017).

¹²⁵ Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre.

¹²⁶ SAP Santa Cruz de Tenerife de 9 de enero de 2013.

¹²⁷ Así lo expresan la STS de 29 de enero de 2002, la SAP Sevilla de 17 de abril de 2006 y la SAP La Rioja de 17 de octubre de 2016

¹²⁸ En opinión de Varela (2004), la fuerza en las cosas en el delito de extorsión puede entenderse como intimidación si es apta para generar un clima de temor, de esta forma se entendería incluida en el tipo y se evitaría cierta impunidad.

Esto significa que, a efectos del núcleo de la infracción, el fin perseguido es imponer al sujeto pasivo la realización de un acto dispositivo sobre su patrimonio, ya sea sobre la totalidad o sobre una parte de este (Alfonso y Samaniego, 2011). Concretamente, en palabras de Muñoz Cuesta (2004, p.2):

“El núcleo del delito se compone por la realización u omisión de un acto o negocio jurídico, entendiéndose por acto jurídico toda manifestación de voluntad con relevancia jurídica y por negocio la declaración de voluntad que crea y regula una relación jurídica, pudiendo consistir en la suscripción de un documento en que se condone o reconozca una deuda o en el no ejercicio sin más de una acción de reclamación de cantidad que como consecuencia de la intimidación no se lleva a cabo, dejándola caducar”.

En el estudio que se presenta, esta finalidad toma especial relevancia debido a que la víctima del delito objeto de estudio siempre va a estar vinculada a una empresa. Supone, por tanto, el objetivo de analizar los actos o negocios jurídicos llevados a cabo (o no llevados a cabo) por un empresario cuyo consentimiento está claramente afectado por los medios intimidatorios de una organización criminal, que le exige realizar tales actos o negocios. En este escenario se abre una amplia variedad de posibles actos o negocios jurídicos. Atendiendo a la tipología de Monzini (1993), y como ya se ha adelantado en el epígrafe primero del presente capítulo, los más comunes son:

- La extorsión por protección en la que nos encontramos con diversas posibilidades, entre las que destacan: a) un pago periódico a la organización criminal, lo que obliga a la empresa a realizar una aportación dineraria sistemática para evitar represalias o a reconocer una deuda, b) una obligada provisión de bienes o servicios de forma gratuita para integrantes de la organización, que suele adoptar la forma de consumo gratuito de los productos que vende el empresario, c) el cumplimiento de obligaciones vinculadas al negocio, como suele ser el acatamiento de horarios impuestos por la organización, de forma que la actividad económica propia del negocio sólo puede desarrollarse dentro del marco temporal establecido por el grupo extorsionador, dejando de poder prestar servicios en cualquier otro momento.
- La extorsión monopolística suele consistir en la contratación de suministros a un proveedor específico, o en la no apertura de un negocio en una zona y momento determinados, limitando la libertad de elección del empresario y condicionando sus actividades económicas a los criterios de la organización.

- La extorsión laboral se suele limitar a la contratación de personas concretas, normalmente integrantes de la organización, forzando al empresario a suscribir un contrato laboral con personas que no desea incluir en su plantilla.

Ahora bien, en virtud de lo establecido en el artículo 1265 del Código Civil serán nulos sus efectos siempre que se haya empleado violencia o intimidación para el consentimiento, por lo que aquellos negocios y actos que sean resultado de un proceso extorsivo serán siempre nulos (Varela, 2004; Quintero, 2016b; Vicente, 2016)¹²⁹.

Como señala Díaz-Maroto (2017), la conducta condicionada sería ese mismo núcleo, es decir, la finalidad de imponer la ejecución de un acto dispositivo sobre la totalidad o parte del patrimonio de la víctima; mientras que la conducta condicionante es el elemento instrumental, o sea, el empleo de violencia e intimidación.

III) Breve comentario sobre la violencia y la intimidación

En términos generales, en el ámbito del Derecho penal la noción de violencia comenzó considerándose, de forma exclusiva, como la fuerza física aplicada a las personas¹³⁰, de modo equivalente a la *agresión corporal*, tal como señala Caruso (2011) en su estudio jurídico sobre las coacciones. Esta visión de violencia planteó ciertos dilemas conceptuales, pues, como ya argumentaba Mir (1977) en materia de coacciones, apelando a un significado valorativo y social del Derecho penal: las acciones a regular son procesos con un cierto sentido social, y así deben adaptarse los conceptos normativos. En esta línea, Sánchez Tomás (1999) admite que no es un concepto consensuado unánimemente, sino que depende de las necesidades interpretativas político-criminales de cada delito, pues como señala Brandariz (2003) no existe una interpretación auténtica del término violencia en el ordenamiento jurídico¹³¹.

¹²⁹ En el presente estudio no se tratan las cuestiones fuera del ámbito penal, pero sin duda existen importantes consecuencias civiles de los delitos contenidos en los procesos extorsivos a las empresas.

¹³⁰ El Tribunal Supremo todavía define este tipo concreto de violencia con el siguiente tenor literal: “el empleo de acometimiento o fuerza física sobre la persona mediante el cual se vence o evita su física oposición o resistencia al apoderamiento perseguido” (STS de 30 de enero de 1999), “la acción de ímpetu o fuerza que se realiza sobre una persona para vencer su resistencia natural a la desposesión de algo que le pertenezca” (STS de 9 de abril de 1999), es decir, el empleo de fuerza física eficaz y suficiente para vencer la resistencia de la víctima (STS de 23 de septiembre de 2002) o en otras palabras: “la violencia supone el empleo de cualquier medio físico para doblegar la voluntad de la víctima” (STS de 4 de septiembre de 2007).

¹³¹ Si bien el estudio de Sánchez Tomás (1999) en busca de un término *unívoco* de violencia es de gran valor en la materia que se presente, su análisis supera los objetivos del presente apartado, que

Se infiere entonces que la violencia es entendida como una conducta social que debe reprimirse y que consiste en “enfrentarse a la realización de los designios de otra persona” (Mir, 1977, p.276), pero este concepto tiene diferentes matices. En un principio el bien jurídico protegido se consideraba como *la libertad de obrar*, posteriormente evolucionó hacia la *libertad de decisión*, consistente en privar a una persona de su capacidad de actuar según su propia voluntad sin emplear la tradicional fuerza física sobre ella, desarrollándose así lo que tradicionalmente se denomina como “espiritualización” del concepto de violencia (Caruso, 2011, p.7; Cuerda, 2016a, p.164, entre otros), esta apreciación concretamente vinculada a la extorsión ha sido señalada por autores como Octavio (1982) y Gómez-Tomillo (2015).

En materia penal, consecuentemente, existen dos concreciones conceptuales: por un lado, la violencia propia, y por otro, la impropia (Llobet, 2017c). La violencia propia es el acometimiento agresivo que supone la utilización de fuerza física sobre las personas, como pegar, empujar, sujetar, inmovilizar o derribar, es decir, el primer concepto antes considerado de forma exclusiva; mientras que la violencia impropia consiste en la utilización de medios como narcóticos, somníferos o gases para dejar inconsciente a una persona y apoderarse así de sus objetos. Como señala la STS de 10 de octubre de 2015, se puede cometer a través de medios químicos (violencia impropia) o mecánicos (violencia propia), pero la finalidad es la misma: evitar cualquier acción de la víctima¹³². Así, Sánchez Tomás (1999), señala que la narcosis, hipnosis y técnicas sofrológicas se consideran medios comisivos violentos dado que lesionan el bien jurídico protegido: la libertad de decisión o de actuación.

En contraste con la violencia, la intimidación tiene una naturaleza psíquica, y requiere el empleo de coacción, amenaza o amedrentamiento con un mal racional y fundado¹³³. Así, puede considerarse como el anuncio o conminación de un mal inmediato, grave, personal y posible que provoque en el sujeto pasivo un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego ante la posibilidad de ese mal anunciado (Díaz-Maroto, 2017)¹³⁴.

únicamente pretende abordar los términos generales del concepto, teniendo en cuenta que su valoración en los delitos violentos ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas.

¹³² La STS de 11 de noviembre de 2004 llega a señalar que la administración de un narcótico inmoviliza a la víctima igual o más que las ataduras.

¹³³ SSTs de 3 de octubre de 2002 y 2 de noviembre de 2004 y ATS de 29 de mayo de 2014.

¹³⁴ En la jurisprudencia podemos encontrar definiciones muy similares, como: “el anuncio o conminación de un mal inmediato, grave y posible, susceptible de inspirar temor en el interlocutor” (STS de 14 diciembre de 2001) que también “implica un sentimiento de temor o angustia ante la contingencia de un daño real o imaginario” (ATS de 7 de julio de 2000).

Una definición algo más desarrollada se encuentra en la STS de 28 de junio de 2000: “una coacción moral que se proyecta sobre la capacidad de decisión de la víctima, cuya voluntad se doblega acomodándola a los deseos de quien la ejerce, mediante la amenaza injusta e ilícita de un mal grave e inminente, de suerte que la conducta de la víctima se realiza no por el ejercicio libre de su voluntad, sino por la coerción psicológica que soporta, que genera una inquietud anímica apremiante y una aprensión racional o recelo, más o menos justificado”.

Parecen suficientes, por tanto, el empleo de palabras, amenazas o actitudes conminatorias¹³⁵ si se reconoce dentro del contexto la idoneidad de los medios para lograr intimidarle¹³⁶, destacando así su gran carga de subjetividad.

Además, la intimidación puede ser de dos tipos (por todos, Álvarez García, 2011b)¹³⁷: a) expresa, es decir, mediante el uso de palabras o hechos que expresen la amenaza del mal, b) implícita, la que se produce a través de un comportamiento precedente a la toma o petición de las cosas, cuyo propósito sea claramente deducible que consiste en causar un mal frente a la resistencia de la víctima¹³⁸.

En conjunto, tenemos la violencia (vis física) y la intimidación (vis compulsiva) como medios comisivos de numerosos delitos, entre ellos la extorsión. Ahora bien, es relevante para el objeto del presente estudio conocer aquellos delitos que emplean violencia o intimidación como medios comisivos¹³⁹ (elementos sin los que no se podría configurar por completo el tipo penal) y que, en nuestros supuestos extorsivos, pueden suponer una parte importante del *modus operandi*.

¹³⁵ Así lo admiten las SSTs de 30 de enero de 1999 y 22 de mayo de 1992.

¹³⁶ La STS 15 de marzo de 2000 matiza: “existen muchas formas de conseguir un efecto intimidante sin que para ello sea necesario que el agresor se valga de instrumentos que puedan suponer un peligro añadido para la integridad física de la víctima o simplemente acentúen el efecto psicológico de indefensión y desamparo”.

¹³⁷ Según expone la STS de 23 de octubre de 2008.

¹³⁸ La intimidación ambiental se tratará más adelante, en el punto 1.3 del presente capítulo.

¹³⁹ Sin perjuicio de que, como señalan Robles y Pastor (2015), se castiguen por separado los actos de violencia física que no queden absorbidos por la forma de proceder inherente a la constitución del injusto de cada delito. Es decir, en los supuestos donde se ejerza mayor violencia de la necesaria para la comisión del delito principal, esta podrá castigarse de forma independiente.

Para el análisis de los tipos penales en juego, se debe tener en cuenta que en muchos negocios¹⁴⁰ donde se trabaja de cara al público porque (por ejemplo, porque se dediquen a la venta de un producto en un local) existe una importante exposición ante conductas violentas.

Concretamente, las organizaciones criminales pueden tener contacto directo con la víctima de forma inmediata al conocer la localización de su tienda simplemente visitando el local; además pueden recabar una información personal de gran valor con la simple vigilancia de sus movimientos: saber sus horarios de apertura, su número de teléfono (si lo indica en su tienda) e incluso identificar a miembros de su familia que puedan formar parte de la plantilla o frecuentar el negocio de su familiar. Esta información puede ser empleada en los mecanismos de intimidación para forzar la aceptación de las conductas extorsivas, como veremos más adelante.

Como se ha ido anticipando en los epígrafes anteriores, el robo con violencia o intimidación, las amenazas condicionales, las coacciones, las detenciones ilegales, el secuestro, el acoso¹⁴¹ y la realización arbitraria del propio derecho son los tipos penales más destacados en el análisis jurídico de las conductas extorsivas. Por ello se analizan a continuación, tratando de mostrar sus principales características y sus diferencias con el delito de extorsión.

1.2. b) Robo con violencia o intimidación

El artículo 237 del Código Penal establece que serán reos del delito básico de robo *“los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren”*.

Como se puede extraer de la conducta típica del robo en su modalidad básica, los elementos del tipo son: a) una acción de apoderamiento, b) de una cosa mueble, c) que la cosa sea ajena, d) que el apoderamiento se realice sin consentimiento de la persona que pueda disponer de la cosa conforme a la ley y e) que exista el ánimo de lucro por parte del sujeto activo.

¹⁴⁰ Especialmente los más vulnerables al crimen organizado, como se ha expuesto en el apartado tercero del primer capítulo de la presente tesis.

¹⁴¹ Este nuevo delito busca sancionar determinadas conductas que pretenden intimidar a la víctima, por lo que existe una significativa vinculación con el elemento intimidatorio, aunque no se exijan para el tipo los elementos de violencia ni intimidación, tal como se explica en el punto 1.2.f) de este mismo apartado.

De nuevo nos encontramos con una figura compleja y pluriofensiva ya que ataca, por un lado, la libertad y, por otro lado, realiza un daño patrimonial (Soto Nieto, 2003; Vicente, 2004; Mata y Vicente, 2010; Álvarez García, 2011b; Cuerda, 2016b). Además, los intereses tutelados según las conductas ejercidas sobre la víctima pueden incluir la vida o la salud, tal como exponen Mata y Martín (1995), Brandariz (2003) y Souto García (2017), aunque únicamente quedan protegidos los ataques más básicos y leves (Robles, 2015).

Souto García (2017) explica que hay consenso en este punto, mientras que el debate se centra en los bienes jurídicos protegidos, tratados de forma sucinta más adelante, en este mismo apartado. Concretamente sobre el ánimo de dominio del delito básico de robo, Muñoz Conde (2017) define el robo como un delito de enriquecimiento y de apoderamiento. Sobre este tipo penal, Muñoz Clares (2003) indica que el patrimonio afectado consiste en un concepto mixto económico-jurídico: se trata de un conjunto de bienes y derechos de contenido patrimonial que se ponen a disposición de una persona bajo la tutela del derecho.

En materia de consumación, la clave radica en “la disponibilidad que pueda ostentar el agente sobre el objeto sustraído, aunque tal condición de disponer aparezca como meramente potencial y su tracto temporal escaso o abreviado” (Soto Nieto, 2003, p.3). Este criterio de disponibilidad está extendido en la doctrina y la jurisprudencia¹⁴² lo que implica que la cosa mueble quede a expensas de la voluntad del sujeto activo disponible para ejercitar sobre ella cualquier acto de dominio material, fuera de control del sujeto pasivo y dueño legítimo; y con “total independencia de que se logre el aprovechamiento propuesto”.

La conducta típica consiste en apoderarse de las cosas muebles ajenas, mientras que el tipo específico objeto de análisis está recogido en el artículo 242¹⁴³ del Código Penal, que exige que se realice a través de uno de los dos medios comisivos: violencia o intimidación ejercida contra las personas.

¹⁴² Así, por ejemplo, la STS de 30 de enero de 2013 señala que la infracción contra el patrimonio se produce cuando “se alcanza la disponibilidad de las cosas sustraídas”, es decir, se entiende que hay delito de robo con violencia o intimidación cuando se tiene “la disponibilidad de la cosa mueble, no su simple apoderamiento”, como indica Muñoz Conde (2017, p.358), esta postura también es defendida por Cuerda (2016b).

¹⁴³ El artículo 242 del Código Penal tiene dos párrafos: “1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase. 2. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.”

Ahora bien, debe existir una relación instrumental entre la violencia o intimidación y la sustracción, siendo este un requisito tradicionalmente aceptado para la tipificación del delito, tal como se recoge en la STS de 13 de junio de 2000, y así afirman autores como Brandariz (2003), Vicente (2004), Mata y Vicente (2010), Álvarez García (2011b), Sánchez Robert (2015) y Llobet (2017c).

En términos de Álvarez García (2011b, p.145): que la violencia o la intimidación “hagan posible, faciliten o aseguren el apoderamiento”, esto es, que exista una *dimensión finalista* entre el empleo de medios violentos o intimidatorios y el apoderamiento de la cosa mueble; además tales medios deberán estar presentes durante la fase ejecutiva del apoderamiento (Robles, 2015).

Existe un debate doctrinal acerca de los bienes jurídicos protegidos en el delito de robo en torno al patrimonio, la propiedad y la posesión; aunque un análisis en profundidad supera los objetivos del presente apartado, la falta de consenso debe al menos quedar reflejada citando las posturas más significativas del estudio de Souto García (2017), que indica que la postura mayoritaria entiende que el bien jurídico protegido es la propiedad sobre los bienes muebles, equiparando *dueño* a *propietario* y asumiendo que la afectación de la posesión es un medio para el fin principal, que es la lesión de la propiedad (en esta línea destacan Mata y Martín, 1995; Pérez Manzano, 1998; Sánchez Moreno, 2004; Manzanares, 2010; Jaén Vallejo y Perrino Pérez, 2015); mientras que una opinión minoritaria defiende que el bien jurídico protegido es la posesión, argumentando que el poseedor en ocasiones puede destipificar la conducta de sustracción mediante su consentimiento (por ejemplo mediante el usufructo) independientemente de que el poseedor deba rendir cuentas al propietario; iguala así el concepto de *dueño* a la “aptitud de entregar la cosa” (Souto García, 2017, p.38 siguiendo a García Arán, 1998, p.50), explicando que es difícil situarla solo en la titularidad del propietario o del poseedor; postura también seguida por García Arán (1998), Brandariz (2003) y Andrés Domínguez (2015).

Desde una perspectiva comprehensiva, Muñoz Clares (2003) afirma que la propiedad es el bien jurídico ideal a proteger por el robo, y que, junto con la posesión, son estos los dos derechos de procedencia civil principalmente protegidos; ahora bien, añade que en el plano real también se protege el patrimonio.

En el supuesto de robo con violencia e intimidación parece acertada la postura de Muñoz Conde (2017) que defiende que, entre los bienes jurídicos protegidos por este tipo

específico están la posesión de la cosa mueble y la libertad; además de la integridad física o salud¹⁴⁴ (Robles, 2015).

Como ya se ha comentado, la violencia supone el ejercicio de la fuerza, ya sea por medios físicos o químicos, mientras que la intimidación tiene una mayor carga de intersubjetividad, requiriendo un estudio más pormenorizado de cada caso: las condiciones y la situación de la persona intimidada, el lugar, el tiempo y a la suficiencia e idoneidad de los medios concretos de apoderamiento (Llobet, 2017c). En este ámbito, se entiende que puede haber intimidación sin palabras ni gestos, mediante el contexto, tal como recoge la STS de 23 de noviembre de 2005 que consideró robo con intimidación a las personas la sustracción de 4.900 euros por parte de unos policías durante el registro de un vehículo propiedad de individuos extranjeros, específicamente debido a la situación de superioridad de los agentes frente a las víctimas extranjeras.

Además, existe un tipo agravado cuando, por un lado, la intimidación o violencia se lleva a cabo mediante empleo de armas u objetos peligrosos, y por otro, se ataque a quien trata de auxiliar a la víctima o a los que le persiguieran¹⁴⁵.

Sobre esta cuestión, se puede considerar que los instrumentos peligrosos y el ataque al auxiliador son dos agravantes separados, o como Brandariz (2003) apunta, que el segundo requiere también el uso del primero, es decir, que el ataque a los auxiliadores debe hacerse mediante armas u objetos peligrosos. Llobet (2017c) aporta una tercera interpretación intermedia¹⁴⁶: que la concurrencia de armas u objetos peligrosos se exija en ambas modalidades (tanto para el empleo de violencia o intimidación como para el ataque a quien auxiliare) tiene un alcance diferente para cada caso. Los distintos términos empleados para cada uno marcarían tal alcance: “hacer uso” implica la mera exhibición del arma, siempre y cuando esté conectada con el desapoderamiento y se practique sobre el sujeto pasivo del delito de robo; mientras que “atacar” hace referencia a un uso material del arma.¹⁴⁷

En la materia que nos ocupa, vista la posible casuística en el primer apartado de este capítulo, resulta de especial interés el subtipo de la comisión del delito en local abierto al

¹⁴⁴ Tal como se ha especificado previamente, únicamente se protegen los ataques más básicos y leves.

¹⁴⁵ Así se recoge en el segundo apartado de artículo 243 *“cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren.”*

¹⁴⁶ Según indica, esta interpretación es seguida por los tribunales.

¹⁴⁷ Cita a este respecto la SAP Barcelona de 10 de mayo de 2000.

público. Se trata de un supuesto agravado que no concreta si es aplicable sólo en horario de apertura o también al resto del tiempo. Ahora bien, con base en el fundamento de la agravación, parece lógico aplicarla en los casos en que el local se encuentre abierto o cuando el sujeto sepa que hay personas dentro, aunque haya terminado el horario de apertura, como ocurre en la doctrina sobre robo en las cosas (Llobet, 2017c).

Diferencias con el delito de extorsión

Como puede apreciarse a partir de la lectura de los tipos penales de robo con violencia e intimidación y extorsión, ambos coinciden en dos aspectos sustanciales: el empleo de violencia o intimidación y el ánimo de lucro.

De la simple lectura de sus preceptos penales se deduce que el ánimo de lucro, es decir, de obtener provecho o utilidad, está presente en los dos delitos, pero con matices: en la extorsión sí distingue entre que el beneficio pueda ser propio o para un tercero, previsión que no se hace para el robo.

Pues bien, existen grandes diferencias entre ambos tipos penales¹⁴⁸. Así, en la extorsión se requiere un acto de disposición patrimonial, elemento no necesario en el robo; además éste último consiste en un ataque patrimonial que solo puede recaer sobre una cosa mueble; mientras que la extorsión se puede proyectar sobre *cualquier aspecto patrimonial* (Gago, 1999; Varela, 2004; Gómez Tomillo, 2015; Díaz-Maroto, 2017; Muñoz Conde, 2017). El tipo penal de extorsión es aplicable, por tanto, a situaciones de impago de deudas en las que se exija la transmisión de la propiedad de un inmueble del deudor, no así en el delito de robo.

Además, el beneficio del robo es inmediato, lo que no sucede en la extorsión, al ser consecuencia de un acto o negocio jurídico (Muñoz Cuesta, 2004). A este respecto, señala Vicente (2016) que en los dos tipos penales hay una *colaboración forzada* de la víctima porque su voluntad está doblegada por la violencia o la intimidación, pero cabe establecer una diferencia en la mayor o menor inmediatez de la respuesta forzada de la víctima, además Varela (2004) señala que tal colaboración es prescindible en el robo. Será mayor en el robo con violencia e intimidación y menor en la extorsión. En este sentido, la jurisprudencia entiende que el extorsionado dispone de una oportunidad de defensa que la víctima del robo no tiene¹⁴⁹ dada

¹⁴⁸ En esta línea también afirma Gago (1999) que los medios comisivos (violencia e intimidación) son prácticamente su único punto en común.

¹⁴⁹ SAP Santa Cruz de Tenerife de 9 de enero de 2013.

la inmediatez de la comisión en el delito de robo en contraste con el proceso algo más extenso en el tiempo en el delito de una extorsión.

Para clarificar esa diferencia, resultan de gran ayuda los tres ejemplos de la extorsión y no del robo aportados por la jurisprudencia, que expone Llobet (2017c): a) la intimidación con arma blanca a un notario al que obligó a extender un talón bancario contra su cuenta corriente (STS de 15 de noviembre de 1994); b) la violencia ejercida sobre una persona a la que obligó a pagar, redactar y firmar un papel en el que cedía sus derechos sobre un coche, y a quien, tras exigirle la cartera para comprobar el DNI y tomar a cuenta 90 euros, le trasladó para recoger el vehículo cedido y sustraerle las llaves y la documentación del mismo (STS de 18 de noviembre de 1998) y c) la violencia ejercida sobre una prostituta para que hiciera un pago a cambio de permitirle ejercer su actividad (STS de 20 de octubre de 2010). En todos los casos el eje de la conducta típica es el acto o negocio jurídico que se lleva a cabo como consecuencia de la violencia o la intimidación ejercidas contra la víctima; mientras que cuando una persona se identifica como miembro de una organización criminal y exige a la víctima que abra la caja registradora para sustraer dinero¹⁵⁰, se trata de un robo puesto que el objetivo es apoderarse de la cosa pretendida.

Dentro de los procesos extorsivos podemos encontrarnos tipos penales como la extorsión o el robo con violencia, pero éstos pueden ir acompañados de amenazas que constituyan un delito adicional (Quintero, 2016b), cuestión que se expone a continuación.

1.2. c) Amenazas condicionales

El artículo 169.1 del Código Penal señala que *“el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años. Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las*

¹⁵⁰ En el contexto de un proceso extorsivo el sujeto activo lo puede interpretar como parte del pago obligado.

amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.”

Se trata del primero de los tres preceptos que regulan las amenazas en el Código Penal, que exige que el mal sea constitutivo de uno o varios de los delitos enumerados, lo que debe interpretarse bajo el principio de “*numerus clausus*”. El segundo precepto se centra en las amenazas dirigidas contra un colectivo (artículo 170) y el tercero y último, recoge tanto las amenazas de un mal no constitutivo de delito como las amenazas leves en el ámbito de la violencia doméstica y de género (artículo 171).

Ragués (2015, p.103) explica que gramaticalmente *amenazar* a alguien significa “anunciarle el padecimiento de un mal”. Esta definición es prácticamente idéntica a la del mundo jurídico penal y abarca innumerables formas de manifestación, pero siempre debe ser un anuncio futuro (Sánchez Tomás, 2011; Cuerda, 2016a; Quintero, 2016a; Muñoz Conde, 2017; Llobet, 2017b). Puede consistir en un acto verbal, escrito u oral, o no verbal como los *actos concluyentes* consistentes en aparentar activamente algo de forma implícita; pero en todos los casos debe ser un “acto comunicativo”, como matiza Sánchez Tomás (2011, p.359).

La consumación del delito se produce en el mismo momento en el que la intimidación llega a la víctima, como señala Quintero (2016a), y esto ocurre independientemente de si las amenazas son condicionales o no. En cualquier caso, ambos son, por un lado, delitos contra la libertad y, por otro, delitos de mera actividad¹⁵¹: bien sea de expresión por verbalizar el anuncio del mal, o bien de peligro al poner en riesgo a la víctima¹⁵², sin necesidad de que efectivamente se llegue a consumir esa lesión (Ragués, 2015; Muñoz Conde, 2017; Llobet, 2017b).

En este contexto, la conducta típica que resulta de interés para el presente análisis es la *amenaza condicional*, cuando el cumplimiento del mal depende de una condición, ya sea con un mal constitutivo de delito como, por ejemplo, amenazar a un empresario con matar a su familia¹⁵³, ya sea con un mal no constitutivo de delito como, por ejemplo, cuando una organización criminal amenaza a un inmigrante irregular con denunciar su situación ante la

¹⁵¹ En contraposición a los delitos de resultado, que exigirían la consecución de los objetivos del autor: ejercer la suficiente presión sobre la víctima como para perturbar su situación de tranquilidad.

¹⁵² En contraposición a los delitos de lesión, que requiere la efectiva lesión del bien jurídico, en este caso la libertad de la persona y la tranquilidad. Basta con la idoneidad de la amenaza que pretenda llegar a la perturbación del ánimo del sujeto pasivo, por ello quedan fuera del tipo las amenazas de males genéricos o que no dependan de la voluntad del sujeto activo, tales como “que te parta un rayo”.

¹⁵³ Si no cumple sus exigencias de pago o de consumo gratuito en el negocio de la víctima.

policía¹⁵⁴.

Consecuentemente, el núcleo esencial es el anuncio de hechos o expresiones que consistan en causar un mal serio, real y perseverante y que además cumpla ciertas características: debe ser futuro, injusto, determinado y posible, tal como expone la reiterada doctrina jurisprudencial¹⁵⁵ del Tribunal Supremo.

Además, se trata de un delito circunstancial, debiendo valorarse la ocasión, las personas y los actos previos, simultáneos y posteriores a la amenaza atendiendo al caso concreto (Sánchez Tomás, 2011; Cuerda, 2016a; Llobet, 2017b). Esta característica que concierne a las circunstancias del delito también afecta a otros tipos penales como el robo con violencia o intimidación previamente analizado y, en general, a los que contengan el elemento de la intimidación; e implica la necesidad de conocer el marco contextual de la comisión del hecho¹⁵⁶. Esto se da especialmente en los procesos extorsivos que se llevan a cabo a través de organizaciones criminales con poder territorial, cuyo análisis debe hacerse atendiendo a las condiciones ambientales concretas de cada caso. Es en este punto donde tienen peso los testimonios de las víctimas cuando indican, por ejemplo, que conocen la reputación del extorsionador o de la organización criminal.

Por último, el tipo penal requiere un dolo¹⁵⁷ específico por parte del sujeto activo, que pretenda ejercer presión sobre la víctima y perturbar así su tranquilidad, e indubitado, es decir, que parta de un plan premeditado¹⁵⁸. Este propósito debe ser persistente y creíble¹⁵⁹ y se extraerá de las expresiones proferidas, así como de su forma y momento en el ámbito de las relaciones entre autor y víctima (STS de 1 de julio de 2008); ahora bien, la efectiva voluntad de

¹⁵⁴ Si no comparte los beneficios de su puesto callejero o si no cierra su local ubicado en la zona de control de la organización.

¹⁵⁵ SSTs de 12 de junio de 2000, de 14 de julio de 2011, de 22 de septiembre de 2011, y de 8 de marzo de 2012; así como las SSTs de 2 de febrero de 1981, de 13 de diciembre de 1982, de 30 de abril de 1985, y de 2 de diciembre de 1992, citadas en la SAP Albacete de 22 de abril de 2014.

¹⁵⁶ Así los señala la STS de 15 de octubre de 2009: “que concurran circunstancias concomitantes y circundantes a los hechos que permitan valorar la emisión y recepción del anuncio de un mal como de entidad suficiente para merecer la repulsa social y servir de soporte al juicio de antijuridicidad”

¹⁵⁷ Según la STS de 4 de mayo de 2005 “consiste en actuar con el conocimiento de que concurren los elementos objetivos del tipo de delito de que se trate.”

¹⁵⁸ O como señala Llobet (2017, p.892): “con un ánimo intimidatorio evidente para la víctima”.

¹⁵⁹ Tal como se cita en la STS de 15 de octubre de 2009: “que en el agente no sólo se dé el elemento subjetivo general de la conciencia y voluntariedad del acto, en el que pueda asentarse el reproche de culpabilidad, sino también que la expresión del propósito sea persistente y creíble, que es lo que integra el delito distinguiéndolo de otras contravenciones afines”.

cumplir la amenaza es totalmente ajena al contenido del dolo (Quintero, 2016a).

Una vez más, la importancia del entorno resulta significativa, pues estamos analizando lo que sucede cuando un extorsionador es miembro de una organización y así se identifica, o cuando ya ha habido otras formas de aproximación a la víctima, esto es, durante la primera fase del proceso extorsivo, denominada *intimidación*¹⁶⁰ en el estudio de la Spina et al. (2014). Así, un primer delito de daños a un local y un segundo contacto a través de amenazas condicionadas suponen el acercamiento tradicional de algunas organizaciones criminales a negocios ubicados en una zona de control. El mal contenido en las amenazas condicionales dentro de los procesos extorsivos suele estar dirigida a provocar la muerte de la víctima o de sus familiares. Esta es la fórmula más sencilla pues, bajo tal anuncio, los extorsionadores pueden lograr cualquiera de los objetivos de la organización: un pago periódico, una obligada provisión de bienes, el cumplimiento de obligaciones, la contratación de suministros con proveedores específicos, la no apertura de un negocio o la contratación de alguno de sus integrantes.

Diferencias con el delito de extorsión

Existe sin duda una especial vinculación entre el delito de extorsión y el de *amenazas condicionadas*¹⁶¹ dado que la intimidación, como uno de los medios comisivos de la extorsión, es en sí una amenaza, condicionada por el hecho de obtener a cambio el requisito de que se realice u omita un negocio jurídico.

Las amenazas condicionales se diferencian claramente del robo en que este último es un delito de apoderamiento que afecta a la propiedad o el patrimonio, no así las amenazas; también se distinguen en la inmediatez¹⁶² de la comisión de la entrega, como señalan Muñoz Cuesta (2004), Varela (2004) y Díaz-Maroto (2017). Sin embargo, esta diferencia se hace más sutil en la extorsión (Llobet, 2017b): cuando se exige la realización u omisión de un acto o negocio jurídico de forma más inmediata se trata de una extorsión, mientras que, si la exigencia se relega a un momento posterior, nos podríamos encontrar, al menos de modo indiciario, ante unas amenazas; ahora bien, no se trata de una regla matemática y se debe tener en cuenta el

¹⁶⁰ Las fases de los procesos extorsivos se exponen en el apartado segundo del primer capítulo de la presente tesis.

¹⁶¹ Tipificadas en los artículos 169 y siguientes del Código Penal.

¹⁶² Así se afirma en la jurisprudencia “en el delito de amenazas condicionales lucrativas para obtener el desplazamiento patrimonial o lograr que la víctima haga entrega de lo que se le pide se le amenaza con un mal más o menos próximo, pero siempre futuro, mientras que en el robo se amenaza con un mal inmediato” (SSTS de 27 de octubre de 1982 y de 13 de junio de 1989).

caso concreto.

Martínez Atienza (2014) afirma que el delito de amenazas condicionales lucrativas se entiende contenido en el de extorsión, por lo que se aplica el criterio de absorción¹⁶³. Así, Muñoz Cuesta (2004) señala que el delito de extorsión absorbe al de amenazas, pues dado el carácter pluriofensivo del primer delito, ya queda contemplado y desvalorado el atentado a la libertad como medio comisivo a la hora de imponer la pena a través del concepto de intimidación.

En materia de concursos de delitos contra la libertad, donde toman especial relevancia los conceptos de violencia e intimidación, existe un denominado “cajón de sastre” (Sánchez Tomás, 1999, p.61) debido a la configuración de sus elementos, formulados de manera que sean adaptables a numerosas conductas que no encuentran cabida en otros tipos penales del Código. Esto es lo que sucede con las coacciones, que se presentan en el siguiente epígrafe.

1.2. d) Coacciones

Las coacciones están recogidas en el artículo 172.1. Código Penal: *“el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”*.

Se puede considerar el delito de coacciones dentro del contexto de delitos contra la libertad como “el delito de recogida” por excelencia (García-Pablos de Molina, 1983a, p.144; Corcoy, 2001, p.199; Sánchez Tomás, 2011, p.422; Díaz-Maroto, 2017, p.910), siendo subsidiario en numerosos supuestos. Como ya señalaba tradicionalmente García-Pablos de Molina (1983a, p.105) al indicar que por la naturaleza del bien jurídico enmarcado en la libertad de obrar y la su amplia conexión con otros bienes jurídicos, las coacciones eran consideradas como un “tipo abierto”. En esta misma línea se pronuncia actualmente Cuerda (2016a).

Las coacciones hacen referencia a “una acción violenta que impide a una persona hacer lo que la ley no prohíbe”¹⁶⁴, donde la orientación de la fuerza no se centra en el ánimo de lucro,

¹⁶³ Según el cual *“el precepto especial se aplicará con preferencia al general”*.

¹⁶⁴ STS de 18 de mayo de 2001.

más propio de delitos contra la propiedad como el robo, sino en la libertad de las personas. Tal como explica la STS de 5 de julio de 2007, el delito de coacciones requiere cinco elementos:

a) una conducta violenta de contenido material, como vis física, ejercida sobre el sujeto pasivo, ya sea de modo directo o de modo indirecto;

b) la finalidad perseguida, como resultado de la acción, es la de impedir lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiere, sea justo o injusto;

c) intensidad suficiente de la acción como para originar el resultado que se busca, pues de carecer de tal intensidad, se podría dar lugar a la falta¹⁶⁵;

d) la intención dolosa consistente en el deseo de restringir la libertad ajena, lógica consecuencia del significado que tienen los verbos impedir o compeler y

e) que el acto sea ilícito -sin estar legítimamente autorizado- que será examinado desde la normativa exigida en la actividad que la regula.

En resumen, se presentan una serie de características concretas (Gago, 1999; Sánchez Tomás, 2011; Ragués, 2015; Cuerda, 2016a; García del Blanco, 2017a; Muñoz Conde, 2017): este tipo penal requiere una conducta violenta o intimidatoria como medio comisivo, cuya finalidad debe ser impedir lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiere, sea justo o injusto. Además, la acción debe tener una intensidad suficiente como para originar el resultado pretendido, también requiere dolo, como deseo de restringir la libertad ajena mediante el empleo de fuerza o violencia dirigida a doblegar la voluntad de la víctima para someterla así a los deseos o criterios propios. Por último, el acto debe ser ilícito: el sujeto activo no debe estar legítimamente autorizado, esta ilicitud se examinará atendiendo al orden jurídico y a la normativa exigida en la actividad que se regula, desde la perspectiva de las normas de convivencia social (por todos, García del Blanco, 2017a).

Como se puede apreciar en su descripción, se trata de un delito que protege los ataques contra la libertad de actuación personal no contenidos en otros artículos del Código Penal, siendo su bien jurídico protegido la libertad en general (Muñoz Conde, 2010; Sánchez Tomás,

¹⁶⁵ Hay que señalar que desde 2015 desaparecen las faltas del Código Penal, resultando de aplicación los delitos leves.

2011; Cuerda, 2016a). Aunque como Mir (1977) y Corcoy (2001) matizan, el delito de coacciones protege la libertad de obrar según una decisión previamente adoptada.

El Código Penal contempla una agravante cuando lo que se pretende impedir es el ejercicio de un derecho fundamental¹⁶⁶. Ahora bien, su aplicación será siempre subsidiaria cuando las conductas perseguibles no estén específicamente protegidas de manera expresa en otra parte del Código Penal. Este sería el caso del derecho fundamental a la libertad deambulatoria mediante la tipificación penal de las detenciones ilegales y secuestros de los artículos 163 a 168¹⁶⁷, o la libertad sindical y el derecho a huelga a través los delitos contra los trabajadores¹⁶⁸ especificados en el artículo 315¹⁶⁹; además de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas¹⁷⁰ y los cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales¹⁷¹.

Ahora bien, la STS de 11 de julio de 2001 expone como ejemplos de medios la fuerza en las cosas siempre que afecten a la libertad de obrar o a la capacidad de actuar de la víctima, se trata de criterios que generaron cierta polémica hace tiempo debido al ya mencionado proceso de “espiritualización” de la violencia¹⁷². Aquí se incluirían conductas como: arrancar una puerta o cambiar una cerradura de un camión a un conductor que no quiere sumarse a una huelga, cuestión que afecta a la extorsión laboral expuesta en el primer apartado del presente capítulo.

Además, atendiendo a las diferentes modalidades de acciones violentas o intimidatorias, existen conductas similares que pueden cometerse en un local como escenario

¹⁶⁶ En virtud de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 172.1: “*Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.*”

¹⁶⁷ Analizados en el siguiente punto 1.2.e) del presente apartado.

¹⁶⁸ Que pudieran ser aplicables en las extorsiones monopolísticas cuando afecten a tales derechos, aunque no se haya detectado todavía ningún caso similar en España.

¹⁶⁹ Que señala: “1. *Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.*

2. *Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.*

3. *Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses*”

¹⁷⁰ Del artículo 510 y siguientes.

¹⁷¹ Del artículo 529 y siguientes.

¹⁷² En el comentario tercero del apartado 1.2.a) del presente capítulo.

de conductas extorsivas. Así, cuando las pretensiones de una organización criminal se orientan al cobro de deudas en las extorsiones por protección o a la contratación de proveedores específicos resultaría aplicable la modalidad de *compeler* cuando buscan la extorsión monopolística. En el caso de que las pretensiones de la organización criminal se orienten al cierre de un local en una zona concreta para lograr el control monopolístico, la modalidad aplicable es la de *impedir*.

Diferencias con el delito de extorsión

En ambos delitos subyace una “compulsión directa para que otro haga o deje de hacer algo” (Varela, 2004, p.391), pero la extorsión tiene una posición preferente frente a los delitos de coacciones y amenazas condicionales lucrativas debido a su especialidad (Gómez Tomillo, 2015).

Así, Muñoz Cuesta (2004) afirma que el delito de extorsión es sumamente más específico en su contenido, siendo por tanto las coacciones una conducta básica a través de la que se obliga o impide a alguien hacer lo que no quiere.

Además, el delito de coacciones carece de contenido patrimonial, lo que refuerza la especificidad de la extorsión. Esto es así debido a que las coacciones son una modalidad comisiva de la extorsión, que se hallan comprendidas en el concepto de violencia, con lo que el desvalor de las coacciones se encuentra incluido por el legislador dentro del delito de extorsión¹⁷³. A esto debe añadirse que, como indica Varela (2004), en la extorsión deben concurrir dos elementos: el ánimo de lucro y los actos o negocios jurídicos.

Cabe mencionar que la diferencia entre el delito de amenazas condicionales, recientemente expuesto, y el de coacciones reside en la proximidad de la violencia: en el primero está diferida en el tiempo al tratarse de un mal futuro, mientras que en el segundo la violencia es inmediata y actual (Quintero, 2016a). Ambos son delitos que protegen el bien jurídico de la libertad aunque, como ya se ha comentado, Mir (1977) y Corcoy (2011) concretan que en las coacciones se trata de una libertad de obrar según una decisión previa.

¹⁷³ Lo mismo cabe decir de las amenazas condicionadas en relación con la intimidación, aunque en palabras de Muñoz Conde (2017) muchas veces sea *imposible distinguir* las coacciones de las amenazas condicionales.

Ahora bien, esa libertad de obrar que protege el delito de coacciones es de tipo genérico, pero cuando lo que se pretende salvaguardar es concretamente la libertad deambulatoria son aplicables los delitos de detenciones ilegales¹⁷⁴, que se exponen a continuación¹⁷⁵.

1.2. e) Detenciones ilegales y secuestros

Los delitos de detenciones ilegales y secuestros son la respuesta del Código Penal ante las agresiones a la libertad más brutales (Quintero, 2016a, p.174), que consisten en la “privación constrictiva de la libertad deambulatoria”, de forma que se someta al sujeto pasivo a través de una presión física o psicológica que le “impida absolutamente la capacidad de desplazarse”.

Por tanto, en ambos tipos el bien jurídico protegido es la libertad individual, específicamente la libertad deambulatoria del artículo 17.1 de la Constitución Española, como defiende Muñoz Conde (2010) y también indica la STS de 10 de febrero de 2009, haciendo referencia al citado artículo, que dicta: *“toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”*.

Expresados estos puntos en común, se procede a analizar a continuación ambos delitos de forma breve y por separado.

I) El delito de detenciones ilegales

El delito básico de detenciones está recogido en el artículo 163 del Código Penal, que señala *“el particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años”*.

¹⁷⁴ También lo indica así la STS de 18 de febrero de 2016: “por lo que hace a la detención ilegal y a las coacciones es cierto que genéricamente preservan el mismo bien jurídico que no es otro que la libertad de la persona. Por ello cuando se trata de diferenciar ambos tipos la jurisprudencia ha considerado que se hallan en relación de género (coacciones) y especie (detención ilegal) de forma que el primero responde al principio de subsidiariedad y solo entrará en juego cuando no concurra otro tipo aplicable de mayor gravedad o por razón de su especialidad.”

¹⁷⁵ Así, explica Ragués (2003, p. 1) que “comete (detenciones ilegales) quien encierra o detiene a otra persona privándole de su libertad, siendo autor (de un delito de coacciones) aquel que, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compele a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”.

Se trata de un delito en el que un sujeto activo dolosamente limita la deambulación de otro, el sujeto pasivo, que anímicamente se ve constreñido en contra de su voluntad, y con una duración determinada como factor determinante de esa privación de libertad (Sanz Delgado, 2006a).

Las conductas típicas se presentan a través de dos verbos nucleares: a) *encerrar*, lo que supone obligar a alguien a permanecer en un lugar cerrado concreto, y b) *detener*, que implica impedir que alguien se mueva en un espacio abierto contra su libertad; así lo exponen Rebollo (2011); Ragués (2015), González Cussac (2016a), Quintero (2016a), Llobet (2017a); entre otros; y la STS de 20 de marzo de 2012, entre otras.

Estos dos verbos se refieren a la privación de trasladarse a cualquier persona como sujeto pasivo, pero el sujeto activo debe ser, como bien señala el artículo, un particular; en caso contrario estaríamos ante un delito del artículo 167 del Código Penal¹⁷⁶, que es una modalidad agravada en la que los sujetos activos son autoridades o funcionarios públicos.

La privación de libertad no requiere medios comisivos concretos, por lo pueden ser más diversos que en los preceptos vistos anteriormente; ahora bien, el método más frecuente es el uso de la fuerza o la violencia, aunque también son admisibles los medios intimidatorios y los procedimientos engañosos, como recuerdan Ragués (2015), González Cussac (2016a) y Llobet (2017a)¹⁷⁷.

Se trata de un complejo delito de resultado y de consumación instantánea, pero de carácter permanente (Escuchuri, 2004; Sanz Delgado, 2006a; Rebollo, 2011). Por un lado, significa que, como infracción instantánea, se considera consumado desde el momento exacto en que la detención o el encierro tienen lugar (Sanz Delgado, 2006b; González Cussac, 2016a; Llobet, 2017a)¹⁷⁸, por otro lado, el principio de ofensividad exige una duración mínima en la acción típica para que la acción sea considerada relevante¹⁷⁹; y la conducta se perfecciona

¹⁷⁶ Que indica: “la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en este Capítulo será castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado”; aunque en el segundo apartado del mismo artículo indica que basta con que haya dado su “autorización, apoyo o aquiescencia”.

¹⁷⁷ Para tales supuestos señala como ejemplo las SSTS de 8 de julio de 2003, de 20 de diciembre de 2004 y de 8 de octubre de 1992, respectivamente.

¹⁷⁸ Apoyándose en jurisprudencia con las SSTS de 1 de octubre de 2009 y de 8 de octubre de 2007.

¹⁷⁹ Como señala el Tribunal Supremo con la STS de 28 de enero de 2005.

cuando pierde su libertad, no termina hasta que la privación llega a su fin (Ragués, 2015; González Cussac, 2016a).

Así, Mirat (2001) indica que un simple forcejeo no constituirá una detención por la escasa duración temporal, aunque tampoco tiene obligatoriamente que constituir un tipo de coacciones; se trata simplemente de una conducta atípica. En estos casos no se produce una aprobación social de la conducta sino sólo una relativa tolerancia de esta dada su escasa gravedad, el principio de insignificancia excluiría la presencia del tipo penal.

En este sentido, Sanz Delgado (2006a) equipara la libertad ambulatoria a libertad de abandono, debiendo transcurrir un lapso suficiente para que durante el mismo la víctima pudiera haber abandonado el lugar, si bien el autor señala que se considerará delito de coacciones aquellos impedimentos de clara naturaleza momentánea. De esta forma coincide con Rebollo (2011) en que toda detención ilegal implica una cierta coacción, pero no todas las coacciones constituyen una detención ilegal, además las coacciones precisan violencia, elemento no estrictamente requerido en la detención ilegal.

Lo cierto es que, en delitos como el robo, se puede atentar contra la libertad deambulatoria sin que llegue a considerarse perpetrado un delito de detención ilegal; esto es así cuando la privación de libertad ha sido “necesaria, inherente e inseparable de la acción delictiva principalmente proyectada y perseguida por el delincuente” (Sanz Delgado, 2006b, p.3), puede quedar absorbida en el robo. En sentido contrario, cuando tal privación rebasa el tiempo normal y característico de la mecánica comisiva del robo, nos situamos ante un delito de detenciones ilegales, independientemente de la consumación del robo.

Además, el Código Penal contempla una modalidad atenuada si se diera libertad al sujeto pasivo dentro de los tres primeros días de su detención, siempre y cuando no se haya logrado el propósito por el que se le detuvo¹⁸⁰. La modalidad agravada se contempla en el caso de que la privación de libertad se prolongue más de 15 días¹⁸¹.

Este delito incluye supuestos en los que se recluye a una persona en un lugar cerrado, como apunta la STS de 6 de abril de 2009. La citada sentencia contempla como detención ilegal

¹⁸⁰ Recogido en el artículo 163.2 del Código penal: “*si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado.*”

¹⁸¹ En el artículo 163.3 del citado texto penal: “*se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha durado más de quince días.*”

el caso en el que se encierra a una persona en una vivienda aun teniendo libertad de movimiento en su interior.

Este supuesto es extrapolable a los casos de extorsión donde se obliga a una persona a permanecer en el local comercial sin salir del mismo, como ocurre cuando una organización criminal exige el consumo gratuito de productos en un negocio de restauración y mientras tanto no se permite abandonar el local a la persona que está sirviendo la comida y la bebida.

II) El delito de secuestro

El artículo 164 del Código Penal sanciona el delito de secuestro: *“el secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a diez años. Si en el secuestro se hubiera dado la circunstancia del artículo 163.3, se impondrá la pena superior en grado, y la inferior en grado si se dieran las condiciones del artículo 163.2.”*

Como se observa en el citado precepto, en el delito de secuestro concurren dos aspectos fácticos: a) la privación de libertad encerrando o deteniendo; y b) la exigencia de un requisito para la liberación del sujeto activo, que es una *condición*¹⁸².

Como recuerda González Cussac (2016a), la formulación de la condición en los secuestros se construye de forma idéntica a la de las amenazas condicionales, y aunque es frecuente que se reclame un rescate en forma de pago de dinero, la condición puede ser de cualquier otra naturaleza, como por ejemplo personal (Rebollo, 2011).

Ahora bien, esta condición ha de ser un requisito para la puesta en libertad¹⁸³ y aunque éste suele reclamarse a un tercero, en ocasiones puede recaer sobre la víctima de secuestro¹⁸⁴. Así ocurrió en los hechos recogidos en la STS de 13 de abril de 2010, y expuestos por Llobet (2017c) que explican cómo se detuvo a una persona con el propósito de cobrar una deuda bajo la amenaza de no dejarla en libertad hasta que fuera saldada. Por tanto, si bien en el supuesto

¹⁸² Tal como citan las STS 27 de diciembre de 2004 y 26 de diciembre de 2008: “de un lado, la privación de libertad, encerrando o deteniendo a otro, (...). De otro, la exigencia de una condición para ponerla en libertad”.

¹⁸³ Quedan por tanto fuera los supuestos en los que a pesar de pagar lo solicitado, la detención continúa en el tiempo y posteriormente la víctima se escapa (STS de 26 de diciembre de 2008).

¹⁸⁴ La jurisprudencia (STS 9 de marzo de 1991 y STS 26 de noviembre de 2001) ha entendido que la exigencia puede hacerse al mismo detenido o a un tercero.

de que se reclame un pago para la liberación del sujeto pasivo, el Tribunal Supremo señala que requiere que el rescate se exija a una tercera persona, y puntualiza que “*de exigirse el rescate al mismo detenido, el hecho constituiría una modalidad del delito de robo*”¹⁸⁵, ello no excluiría un posible concurso entre el delito de robo y el de detención ilegal.

En realidad, lo que se exige para cumplir el tipo es que la condición haga referencia a una actividad externa al sujeto privado de libertad: un comportamiento de terceras personas que se reclama para dar libertad a la víctima detenida. Llobet (2017c) clarifica esta puntualización con un claro ejemplo: el caso en el que se priva de libertad a una persona con el propósito de que proporcione una determinada información, al no presentar condición de actividad externa alguna, se trata de una detención ilegal y no de un secuestro¹⁸⁶ (STS de 11 de marzo de 1999).

En relación con otras cuestiones relativas al delito de secuestro, hay que señalar que se considera consumado una vez se ha privado de libertad al sujeto pasivo y se ha hecho saber la condición a quien deba cumplirla¹⁸⁷, no siendo necesario su cumplimiento (Rebollo, 2011; Llobet, 2017c). Así lo indica la STS de 11 de marzo de 1999 cuando afirma que: “detener a una persona para conseguir un objetivo no se identifica exactamente con exigir el logro de ese objetivo a cambio de la liberación de aquélla”¹⁸⁸.

El secuestro de un familiar o de un empleado puede ser un reclamo idóneo para la solicitud de un pago o de una contratación; además, al tratarse de una conducta de extrema gravedad puede suponer una sensible mejora de la reputación para la organización criminal, que demuestra a los demás negocios lo que puede ocurrir en caso de rechazar las solicitudes de los extorsionadores. Esto supone un avance importante en la efectividad de la intimidación ambiental, materia que se aborda más adelante en este mismo capítulo.

Una vez presentadas las diferencias entre ambos tipos penales, hay que poner de relieve que detención ilegal y secuestro también presentan elementos comunes, además de los verbos nucleares que comparten *detener* o *encerrar*; estos elementos son: a) los supuestos agravados,

¹⁸⁵ STS de 5 de marzo de 1999.

¹⁸⁶ Es decir, será aplicable el artículo 163 y no el 164 del Código Penal.

¹⁸⁷ Llobet (2017) hace referencia a la STS de 8 de noviembre de 2006.

¹⁸⁸ Como se señala en las STS de 10 de noviembre de 2004 y de 2 de diciembre de 2004: “en definitiva para el tipo de secuestro es preciso que se prive de libertad y que se advierta por los autores al sujeto pasivo, o a otras personas, que la recuperación de la libertad de aquél depende del cumplimiento de la condición impuesta”.

como la simulación de autoridad o función públicas y la minoría de edad o incapacidad de la víctima; b) la desaparición forzada de personas¹⁸⁹, c) la comisión por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y d) la punibilidad de los actos preparatorios.

Además, ambos delitos son dolosos (González Cussac, 2016a) tal como afirma la STS de 6 de mayo de 2005 “en cuanto al delito de detención ilegal el dolo exigible consiste simplemente en la plena conciencia de la ilicitud del acto, siendo irrelevantes los motivos; basta que el acusado tenga una idea clara de la ilicitud de su conducta, no es preciso un propósito específico ni una finalidad concreta”.

En definitiva, tal como señala la STS de 4 de mayo de 2005: “en este delito de detención ilegal el sujeto activo ha de saber que con su conducta está encerrando o deteniendo a una persona física (autoría) o induciendo o auxiliando al autor en tal encierro o detención (participación a título de inductor o de cooperador necesario o de cómplice)”.

Diferencias con el delito de extorsión

A diferencia de la extorsión, si sólo se da la detención ilegal, únicamente queda afectada la libertad, pero no el patrimonio, al menos de manera directa. El acto delictivo de robar o el de extorsionar puede perpetrarse sin necesidad de atentar contra la libertad deambulatoria¹⁹⁰ y tratar únicamente de obtener lucro, es decir, puede no haber privación de libertad en absoluto.

En un robo con violencia o intimidación siempre se atenta contra la libertad, pero esto ya está considerado en la propia violencia, que en realidad constituiría unas coacciones, o en la intimidación, que en realidad constituiría unas amenazas. En el momento en el que el robo tenga una duración determinada, el atentado contra la libertad del sujeto pasivo excede de lo incluido en la violencia o la intimidación y se puede considerar, además, una detención ilegal¹⁹¹. En este último tipo penal, la privación de libertad no queda limitada al tiempo estrictamente necesario

¹⁸⁹ Esto es, que no dé razón del paradero del sujeto activo.

¹⁹⁰ SAP de Madrid de 21 de diciembre de 2000.

¹⁹¹ Del artículo 163.1. del Código Penal: “*el particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años*”.

para efectuar el despojo como ocurre en el robo¹⁹². Este sentido se entiende que, si se incluyeran los elementos del tipo, podría considerarse como delito de extorsión¹⁹³.

La duración del delito es una cuestión significativa en su diferenciación con otras figuras penales. Así, nos encontramos ante un delito de detenciones ilegales y no de robo con violencia o intimidación, cuando el tiempo de privación de libertad de la víctima “excede del que fue preciso para efectuar la sustracción”.¹⁹⁴ La simple inmovilización de corta duración podría situarnos ante un delito de coacciones, especialmente si se emplea violencia (como señala la STS de 22 de diciembre de 2009), en cambio, si entran en juego unas detenciones ilegales el problema habría de resolverse mediante un concurso de delitos¹⁹⁵.

La libertad deambulatoria que protege el delito de detención ilegal es más concreta que la libertad genérica que protegen las coacciones, como ya se ha comentado previamente, como pone de manifiesto la STS de 26 de marzo de 2006 cuando diferencia ambos tipos penales: “el delito de detención ilegal desplaza al de coacciones, siempre que la forma comisiva, representada por los verbos detener o encerrar, afecte no solo a la genérica libertad de hacer o no hacer sino al específico derecho, incluido naturalmente en aquella libertad, de moverse y deambular seguir a la persona que le plazca, a lo que se suele incorporar, no sin reservas, un cierto factor temporal porque la restricción de la facultad deambulatoria, para que integre el delito de detención ilegal, ha de tener una mínima duración.” Además, a diferencia de las coacciones, para la concurrencia de la detención ilegal la privación de libertad debe tener una duración mínima (Corcoy, 2001), como ya se ha comentado respecto de otros tipos penales.

Esa concreta libertad deambulatoria se limita habitualmente en los delitos de extorsión y robo con violencia o intimidación, al menos en cierto grado, cuando durante la consumación del hecho no se permite a las víctimas moverse del lugar o se le traslada a otro para la obtención

¹⁹² STS de 20 de abril de 2002.

¹⁹³ Resulta de interés mencionar que los “traslados de agresor y víctima hasta un cajero bancario” son considerados por la jurisprudencia como pérdida de libertad momentánea propia del delito de robo, como señalan las SSTS 17 de diciembre de 1997 y 11 de septiembre de 1998.

¹⁹⁴ Así se recoge en la jurisprudencia apuntada por Escuchuri (2004): SSTS de 11 de abril de 2000, de 23 de junio de 2000, de 22 de noviembre de 2000; de 27 de febrero de 2002 y de 23 de enero de 2003, entre otras.

¹⁹⁵ La STS de 1 de marzo de 1994 matiza: “la especificidad típica de la detención ilegal exige encerrar o detener a otro privándole de su libertad, detención o inmovilización que puede ser más o menos duradera, y que puede abarcar también el supuesto en el que se obliga al sujeto pasivo a trasladarse a un determinado lugar, o de un lugar a otro, pues en este caso se le está impidiendo realmente trasladarse desde donde se encuentra hasta donde querría encontrarse”.

del lucro¹⁹⁶. Ahora bien, cuando la duración de esa privación de libertad es excesiva, se puede considerar que concurre un delito de detención ilegal, y entraría en régimen de concurso ideal¹⁹⁷, es decir, se pueden dar los dos delitos simultáneamente.

Además, cabe recordar lo señalado por Quintero Olivares (2016a) sobre el delito de secuestro, cuando indica que se trata de un ataque a la libertad exigiendo una condición como pago del rescate, por lo tanto, es una modalidad compleja que combina una detención ilegal y una amenaza condicional: no liberar al secuestrado si no se cumple la condición exigida; pero si el destinatario de la petición de cumplimiento de condiciones fuera la víctima y estas consistieran en un negocio jurídico, podría ser aplicable el delito de extorsión.

Como se ha ido enumerando en estos últimos cuatro apartados, existen delitos que comparten ciertas características esenciales, como son los que se han analizado hasta aquí: la extorsión, el robo con violencia o intimidación, las amenazas condicionales, las detenciones ilegales y el secuestro. Pero en el marco del estudio jurídico de los procesos extorsivos, se han identificado otros dos delitos que, si bien no comparten características esenciales con aquellos que obliguen a distinguir los matices que diferencian a estas figuras de la extorsión, lo cierto es que subyacen en estos procesos de forma relevante. Estos tipos penales son muy distintos: por un lado, se encuentran el acoso, dentro de los delitos contra la libertad y por otro, la realización arbitraria del propio derecho, dentro de los delitos contra la Administración de Justicia. Ambos serán analizados a continuación.

1.2. f) Acoso

El tipo penal de acoso está recogido en el artículo 172ter del Código Penal: *“será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:*

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

¹⁹⁶ Como un gran número de sentencias señalan, haciendo especial referencia al robo con violencia: SSTs de 9 de mayo de 1996, de 23 de mayo de 1996, de 17 de diciembre de 1997, de 6 de julio de 1998 y de 11 de septiembre de 1998, citadas en la SAP Albacete de 22 de abril de 2014.

¹⁹⁷ Siguiendo lo expuesto en la SAP Burgos de 30 de noviembre de 2000, *“se superponen las acciones propias de la privación de libertad con las generadoras del atentado contra la propiedad, de tal manera que se puede afirmar que hay un solo hecho”*, respetando el artículo 77 del Código Penal.

2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años”.

El delito de acoso u hostigamiento es lo que en derecho anglosajón se conoce como *stalking*, y persigue la reiteración de conductas que concretan un mal que coartan la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima (Fraile Coma, 2015; García del Blanco, 2017a).

En este delito no se llega a anunciar expresamente la causa de un mal como en el delito de amenazas y tampoco existe violencia ni intimidación, como sería en el caso de las coacciones. Se trata de conductas que hasta 2015 no estaban tipificadas, y que mediante la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo¹⁹⁸ se incluyeron en el Capítulo III del Título VI dedicado a los delitos contra la libertad, por exigencia del Convenio de Estambul del año 2011¹⁹⁹, cambio necesario para hacer frente al fenómeno del acoso predatorio²⁰⁰, pues los tipos penales previos a su tipificación eran insuficientes para proteger los diversos casos de ataque a la libertad (Villacampa, 2016).

García Moreno (2017), apoyándose en la jurisprudencia reciente²⁰¹, define la

¹⁹⁸ Por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

¹⁹⁹ Ratificado por España, este Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención contra la violencia, contra las mujeres y contra la violencia doméstica recoge en su artículo 34: *“las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de adoptar, en varias ocasiones, un comportamiento amenazador contra otra persona que lleve a esta a temer por su seguridad.”*

²⁰⁰ El acoso predatorio es, como expone Villacampa (2010) en su completa revisión, un complejo fenómeno que ha suscitado un gran debate en cuanto a su definición, pero con tres elementos comunes que comparte la comunidad científica: a) que consiste en un patrón de conducta insidioso y disruptivo, pudiendo llegar a denominarse obsesivo, b) que no debe contar con la anuencia de la víctima y c) que la comunicación o aproximación asfixiante no querida sea susceptible de generar algún tipo de repercusión. Menos consensuado es si este tercer elemento debe consistir en la sensación de desasosiego o temor, o si debe interrumpir en la vida privada de la víctima, debate interesante pero que supera los objetivos del presente capítulo.

²⁰¹ SAP Madrid de 27 de diciembre de 2016 y SAP Burgos de 27 de abril de 2017.

configuración de este delito como tipo mixto alternativo²⁰², con una conducta típica que requiere la insistencia y reiteración de los comportamientos de acoso y hostigamiento, y un resultado directamente atribuible a tales comportamientos: la alteración grave del desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. Es decir, no es suficiente que el sujeto pasivo vea afectado su sentimiento de seguridad, sino que además su comportamiento habitual debe verse alterado como consecuencia de las conductas reiterativas de quien no está autorizado a realizarlas.

Se describen en el tipo diversas formas de acoso (Ragués, 2015; García Del Blanco, 2017a) como son:

- a) Vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de la víctima.

Se trata de comportamientos consistentes en permanecer en las proximidades físicas de la víctima, pero sin que haya contacto con esta, ni violencia ni intimidación; no pareciendo necesario que la víctima sea consciente de esa situación o llegue a percibir visualmente a su acosador en ese preciso momento, únicamente basta con que la conducta sea objetivamente idónea, aunque como es lógico deberá percibirlo en un momento posterior para verse presionada a modificar el desarrollo de su vida normal.

- b) Contactar o intentar contactar con ella a través de cualquier medio de comunicación, incluso por medio de terceras personas.

Como se aprecia en la descripción, no es necesario que el sujeto activo logre ponerse en contacto con la víctima, basta con que las conductas que realiza con tal propósito sean idóneas, y lleguen a conocimiento de la víctima para crear esas sensaciones de inseguridad. Esto puede suceder, por ejemplo, en el caso de que se lleven a cabo reiteradas llamadas perdidas a su teléfono móvil, o mediante terceras personas como cuando el acosador publica el teléfono de la víctima en una web de contenido sexual y esta comienza a recibir numerosas llamadas y mensajes solicitando sus servicios. El medio de comunicación empleado es indiferente, ya sean cartas tradicionales o redes sociales.

- c) Adquirir productos o mercancías o contratar servicios mediante el uso indebido de los datos personales de la víctima o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella.

²⁰² También en García del Blanco (2017a).

Esta forma de acoso consiste, por ejemplo, en la adquisición online de productos a nombre de la víctima aportando su nombre, apellidos y dirección para que, se le realice la entrega en su domicilio o tenga que ir a la Oficina de Correos a comprobar el envío, o suscribirla a determinadas publicaciones, etc. La molestia puede derivar de la propia constancia de la puesta en contacto por parte del sujeto activo, como puede ocurrir con la entrega reiterada de un ramo de flores, o de las características del propio producto, por ejemplo, mediante la suscripción a una revista pornográfica.

d) Atentar contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

En este caso se entiende que hace referencia a comportamientos no violentos como pueden ser determinados actos de vandalismo: pintadas en la casa o en el coche de la víctima o allegados, por ejemplo.

Además, el sujeto activo no debe estar legítimamente autorizado aunque, según la postura de Villacampa (2016), acosar es siempre ilícito, pues la conducta lleva siempre implícita la inadecuación, siendo así dudosa para la autora la situación que se pueda ver amparada en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En este sentido, Muñoz Conde (2017) concreta que el ejercicio legítimo de derecho de cobro de una deuda no legitima los actos de acoso²⁰³; tal es el caso en los supuestos de recaudación de deudas que se tornan en procesos extorsivos aprovechando la vulnerabilidad de la víctima y la aceptación de la deuda en los términos que se le exijan.

Ahora bien, resultaría enormemente difícil realizar una enumeración exhaustiva de las conductas específicas perseguibles y hasta imposible llegar a establecer un *numerus clausus* (Vargas, 2017). Consecuentemente, existen numerosos comportamientos que pueden encajar en el tipo, y lo cierto es que, aunque la figura se encuentra bien delimitada en su precepto, una formulación tan abierta puede generar una inseguridad jurídica contraria a los principios de legalidad y taxatividad, así lo defiende Vargas (2017) temiendo además que este artículo pueda aplicarse a conductas que no presenten entidad suficiente, lo que supondría una confrontación con el principio de intervención mínima del Derecho penal; por tanto, la concreción de las conductas contenidas en este tipo será desarrollada por la jurisprudencia. Lo que sí existe es una especial protección mediante los tipos agravados cuando la víctima es una persona

²⁰³ El autor pone de ejemplo el conocido Cobrador del Frac, un servicio especializado en cobro de morosos.

especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación.

La primera vez que se aplicó este delito fue en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Tudela mediante la sentencia de 23 de marzo de 2016, que exigía la existencia para la concurrencia del delito una “una estrategia sistemática de persecución con acciones insistentes y reiteradas que alteren gravemente la vida cotidiana del sujeto pasivo”, apuntando como bienes jurídicos protegidos “la libertad y sentimiento de seguridad, sosiego y tranquilidad”²⁰⁴ vulnerados mediante la reiteración de llamadas telefónicas y mensajes. Concretamente, en los hechos probados se recoge que “a raíz de conocer a la denunciante por la pérdida y recuperación de un perro de su propiedad, comienza a hacer llamadas al teléfono de esta, mensajes de WhatsApp escritos y de audio, le remite fotografías y finalmente comienza a remitirle mensaje de contenido sexual, alterando la normal vida de la denunciante.” Estas conductas pueden compartir características con los procesos extorsivos donde, ante el impago de deudas o la negación de la víctima frente a determinadas condiciones contractuales, se persigue a la misma de manera sistemática tratando de someter su voluntad.

Las conductas que están recogidas en el tipo penal deben llevarse a cabo de manera insistente y reiterada; además los actos que componen la conducta criminal no tienen por qué ser ilegales o dañosos en sí mismos: tal es el caso de quien se limita a seguir y observar a la víctima en espacios públicos (Gómez Rivero, 2011), como puede ser su propio negocio. Estas conductas han sido identificadas en casos de extorsiones monopolísticas, cuando los miembros de una organización criminal solicitan a un empresario del sector de la restauración, por ejemplo, que contrate los servicios de suministro de bebidas alcohólicas con una empresa afín a la organización y de forma insistente, sin llegar a ejercer violencia ni intimidación, realizan comportamientos de seguimiento y observación del dueño del negocio en su propio local.

Aunque es evidente la diferenciación con el tipo penal de la extorsión, resulta de interés destacar brevemente algunas características propias del acoso que delimiten esta figura frente a tipos con ciertas similitudes. Así, cuando se realicen comportamientos de hostigamiento similares a las amenazas, pero sin expresiones verbales y se persiga alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima, corresponderá aplicar el delito de acoso.

Tampoco las coacciones podrían considerarse el tipo adecuado para responder a esta clase de conductas cuando las mismas no requieren violencia como medio comisivo; aunque la interpretación que efectúa la jurisprudencia de los medios comisivos de la coacción permite que

²⁰⁴ Se trata de conductas de llamadas y mensajería instantánea al móvil de la víctima.

el mismo tipo se aplique como cláusula de cierre en el sistema que ha permitido castigar supuestos de hostigamiento que ahora han sido expresamente incluidos en el artículo 172 ter del Código Penal.

Cabe señalar, como Villacampa (2016) recuerda, que este delito se enmarca en un proceso de incriminación de distintas conductas de acoso a lo largo de los últimos años. Así, antes de 2010, la única conducta de acoso recogida era el delito de acoso sexual²⁰⁵, tras la reforma del Código Penal del año 2010²⁰⁶ se incluyeron dos formas de acoso: el laboral y el inmobiliario²⁰⁷; hasta llegar al actual delito de *stalking*²⁰⁸.

1.2. g) Realización arbitraria del propio derecho

La realización arbitraria del propio derecho es un delito recogido en el artículo 455 del Código Penal, cuyo tenor literal es el siguiente: *“el que, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses”*.

Como señala Quintero (2016c), es un tipo penal que abarca diferentes formas violentas²⁰⁹ de recurrir a las *vías de hecho* para satisfacer un derecho, vinculado al quebrantamiento del monopolio estatal sobre el uso de las formas coercitivas en el pago de lo debido (Cobo y Sánchez-Vera, 2002; Gili, 2010, Benlloch, 2015; Orts, 2016); en palabras de García Rivas (2011, p.930) es “la prohibición dirigida al particular de tomarse la justicia por su mano”.

Cabe pensar que se trata de un delito pluriofensivo (Hidalgo, 1999; Gili, 2010; Cancio, 2017b), ya que por una parte, es un delito contra la Administración de Justicia, pues, aunque no afecta de forma directa a su funcionamiento, lo cierto es que no se está respetando la

²⁰⁵ Del artículo 184 de Código Penal.

²⁰⁶ Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

²⁰⁷ Ambos dentro de los delitos contra la integridad moral en los artículos 173.1 párrafos 2º y 3º; y la incriminación expresa del acoso inmobiliario para las coacciones cualificadas que tengan por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental en el artículo 172.1 párrafo 3º.

²⁰⁸ Aunque este proceso de tipificación ha dado como resultado ciertos agravios comparativos, resultando el delito de *stalking* comparativamente “privilegiado” a nivel punitivo frente a lo demás delitos de acoso (inmobiliario y laboral) sin aparente justificación, como expone Villacampa (2016, p.233).

²⁰⁹ El autor matiza: contra las personas o con fuerza en las cosas.

monopolización del Estado²¹⁰ en la resolución de conflictos mediante la justicia²¹¹ y, por otra parte, derechos individuales como la libertad o los derechos patrimoniales pueden verse afectados por la conducta típica²¹².

El propósito de realizar un derecho propio es relevante como elemento subjetivo específico del injusto: desplaza y excluye el ánimo de lucro, lo que le permite diferenciarse del robo²¹³. Por tanto, cuando el propósito del sujeto activo sea satisfacer una deuda o ejercitar un derecho, no se considera que exista una ventaja lucrativa (Guardiola, 2003; Santana, 2011; Benlloch, 2015; Orts, 2016; Ragués, 2016).

Bajo Fernández (1975, p.377) señalaba que el sentido del delito de realización arbitraria del propio derecho en el anterior Código Penal era “precisamente el de castigar estos casos excluidos del delito de robo”. Y ya entonces aquel tipo penal exigía que existiera una obligación previa, susceptible de ser extinguida a través del pago (Córdoba, 1978); de forma que se consideraba imprescindible la relación jurídica obligatoria entre el sujeto activo y el propietario de la cosa (Ferris, 1988). De hecho, si esta deuda no fuera exigible no se realizaría

²¹⁰ Más concretamente, se señala en la SAP Guadalajara de 19 de octubre de 2011 “el primer bien jurídico mencionado como objeto de protección, concretado al interés del Estado en monopolizar el uso de la fuerza para resolver los conflictos privados mediante el ejercicio de la jurisdicción”.

²¹¹ Cuestión que comparte con el Código Penal anterior, en el texto de 1973 el delito tenía la siguiente redacción “*el que con violencia o intimidación se apoderare de una cosa perteneciente a su deudor para hacerse pago con ella, será castigado con la pena de multa equivalente al valor de la cosa, sin que pueda bajar de 5.000 pesetas*”. Es interesante para el delito actual el debate acerca del bien jurídico protegido del tipo penal de 1973, ya que le son aplicables las consideraciones sobre el mismo (Hidalgo, 1999); pero no obtuvo consenso en la doctrina, pues Muñoz Conde (1985, p.672) defendía que el bien jurídico protegido era además de la Administración de Justicia, “la propiedad e indirectamente la libertad del deudor al emplearse medios que la atacan, como la violencia o la intimidación”. Para Rodríguez Devesa (1983), el bien jurídico protegido era la Administración de Justicia, mientras que para Ferris (1988, p.813) no era en ningún caso la Administración de Justicia, si no “la propiedad, el patrimonio del deudor, junto con su libertad, si concurre intimidación, o salud, si concurre violencia en la comisión del delito”. Además, se trataba de un delito complejo, puesto que, por ejemplo, no quedaba claro si se exigía que el acreedor hubiera reclamado explícitamente el pago y que el deudor se hubiera negado a ello (como recoge la STS de 8 de marzo de 1968), o si en cambio, no era un requisito exigible por no contemplarse explícitamente en el tipo (Córdoba, 1978). Ahora bien, respecto al delito de 1973, tal como expone la SAP Guadalajara de 19 de octubre de 2011, la nueva tipificación supone “un ensanchamiento del ámbito de aplicación del precepto, a través de una ampliación de la tipicidad, que persigue incriminar genéricamente el empleo violento de las vías de hecho como medio para realizar cualquier derecho propio” lo que, añade, refuerza el primer bien jurídico protegido citado.

²¹² Puede ser el patrimonio del deudor atacado, su libertad, o seguridad; tal como recoge la STS de 23 de enero de 1998.

²¹³ Tal como apunta la STS de 21 de noviembre de 2008, cambia la *intención de apoderamiento de cosa ajena* del robo sustituyéndose por la menos grave *intención de recobro de la cosa propia*.

arbitrariamente derecho alguno, lo que le excluiría del tipo. Así lo señalaba posteriormente el Tribunal Supremo en aplicación del actual delito contenido en el Código Penal de 1995, cuando afirmaba que, lógicamente, los sujetos activos debían ser los titulares del derecho de cuya realización se trate (STS de 6 de mayo de 2005), siendo necesario que el autor actúe con el propósito de *realizar un derecho propio*; así lo expone Cancio (2017b) diferenciándolo de la anterior redacción del año 1973, donde se exigía el *ánimo de hacerse pago*.

El delito de realización arbitraria del propio derecho queda consumado con la consecución del propósito para el cual fue imprescindible usar como medio alguna de aquellas tres vías: uso de violencia, intimidación o fuerza en las cosas. El núcleo del comportamiento típico es la actividad que realiza el sujeto activo en favor de su derecho subjetivo actuando fuera de las vías legales y que además permitan al autor adoptar una alternativa alejada del ordenamiento jurídico (Cancio, 2017b). Así lo afirma la STS de 26 de octubre de 2012, cuando explica que el cobro de una deuda por cauces extralegales supone la realización arbitraria del propio derecho: “esta infracción requiere la concurrencia de medios violentos o intimidatorios para su ejecución”. Además, existe un agravante cuando la intimidación o violencia se hace mediante empleo de armas u objetos peligrosos²¹⁴.

Además, como bien señala Hidalgo (1999), en el tipo penal de realización arbitraria del propio derecho, a pesar de verse lesionados los bienes jurídicos de vida e integridad física, libertad y seguridad o patrimonio en una enorme variedad de conductas que se presuponen violentas o intimidatorias, lo cierto es que puede no darse una lesión patrimonial en aquellos supuestos en que el apoderamiento de la conducta delictiva recae específicamente sobre la cosa debida del autor. Nos situamos, por tanto, ante un abanico amplio y complejo de posibles conductas de reclamación de pagos, donde el empleo de alguno de los medios comisivos para realizar un derecho verdaderamente existente, actual y realizable será suficiente para alcanzar la consumación del delito, no siendo necesario que el sujeto activo logre su propósito (García Rivas, 2011; Benlloch, 2015; Orts, 2016).

Un ejemplo de delito de realización arbitraria del propio derecho lo encontramos en las organizaciones criminales dedicadas a la recaudación de deudas, que, a través de medios intimidatorios o violentos, exigen los pagos a los empresarios deudores.

Ahora bien, en múltiples ocasiones estas organizaciones se quedan con la deuda solicitada y además extorsionan a sus propios clientes reclamándole también otros pagos

²¹⁴ Sobre los que cabe comentar lo mismo que en el delito de robo previamente expuesto.

diferentes a la deuda concreta. De esta forma, la organización obtiene un mayor beneficio: la deuda completa que el empresario debía al acreedor y el pago del acreedor extorsionado.

Diferencias con la extorsión

La diferenciación de este delito con los delitos patrimoniales es significativa, como bien establece la STS de 2 de marzo de 2017, al exponer que: “si un acreedor (por las razones que sean: entre otras la de no poder probar la deuda que sin embargo, se acredita como real en el proceso penal ulterior), para hacerse el pago, valiéndose de violencia o intimidación arrebatada al deudor estrictamente lo que le adeuda, no estamos ante un delito de robo (artículo 237 del Código Penal) sino ante un delito de realización arbitraria del propio derecho castigado con una pena muy inferior; inferior también a la de la estafa.”

Teniendo esto en cuenta, en relación con el objeto de estudio, existen dos opciones de reclamación violenta de pagos: a) que la deuda tenga un origen legítimo²¹⁵ y b) que la deuda no tenga un origen legítimo.

En el primer supuesto, para que concurra el delito de realización arbitraria del propio derecho debería producirse la reclamación del pago a empresarios a través de los medios comisivos de violencia, intimidación y fuerza en las cosas; ahora bien, tal deuda debió asumirse de forma libre y sin el empleo previo de tales medios comisivos, de modo que haya un derecho legítimo al cobro (Álvarez García, 2011b; Varela, 2004). Asimismo, en el delito de realización arbitraria del propio derecho se hace una mención expresa a la fuerza en las cosas, además de

²¹⁵ En este supuesto de origen legal de la deuda es importante resaltar que puede existir una gestión privada de deudas sin extralimitaciones; en línea con lo defendido por Cobo y Sánchez-Vera (2002), se pueden reclamar los pagos sin emplear violencia, intimidación ni fuerza en las cosas, y sin incurrir así en ningún delito. Los autores explican que en la gestión de cobro de una deuda debida no existe el delito de amenazas del artículo 169 del Código Penal pues las reiteradas visitas no pueden considerarse constitutivas de un mal; ni del artículo 171.1 del citado texto legal pues solo es punible cuando la condición no consista en una conducta debida, como es el caso; ni un delito de coacciones del artículo 172 del Código argumentando que no se está impidiendo hacer lo que la Ley no prohíbe si no lo contrario, impedir una falta de cumplimiento de una deuda; aunque estas argumentaciones no están exentas de debate ni son seguidas por la jurisprudencia de forma consistente en absoluto. Así, la sentencia STS de 2 de marzo de 2017 explica que “si no se emplea violencia ni intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, el hecho resultará atípico. Sería absurdo considerar que entonces estaríamos ante un delito de hurto sancionado con mayor penalidad. Si no es un delito de hurto es por ausencia del tipo subjetivo: el ánimo de lucro injusto interpretado en esa clave. Lo mismo sucede cuando el acreedor real se vale de un engaño para conseguir el pago debido. No hay estafa porque falta la ilegitimidad jurídica del enriquecimiento”.

a la violencia e intimidación, no así en la extorsión (Varela, 2004).

En caso contrario nos situamos ante el segundo supuesto, la reclamación violenta de una deuda de origen no legítimo sobre la que Cobo y Sánchez-Vera (2002) recuerdan que podrían ser aplicables otros delitos como el de extorsión: si se trata de un acto o negocio jurídico generado a través de la violencia se incurre en un delito de extorsión, dado que hay una ventaja patrimonial injusta, esto es, ánimo de lucro. Tampoco concurre un delito de realización arbitraria del propio derecho porque no existe un derecho legítimo de cobro, que es un elemento indispensable en la configuración del tipo. Este aspecto es importante pues, como señala la STS de 29 de junio de 2009, el ánimo de lucro propio de la extorsión es la diferencia esencial respecto del delito de realización arbitraria del propio derecho.

Como hemos ido viendo a lo largo de este primer apartado, existen delitos que contienen elementos de violencia o intimidación y comparten ciertas características con la extorsión; pues bien, las amenazas condicionales y las coacciones son los dos tipos penales reseñables a este respecto: su estructura subsidiaria permite abarcar numerosas conductas contenidas en cada *modus operandi* propio de los diferentes procesos extorsivos. A continuación, se expone esta idea con mayor detalle.

1.3. La estructura subsidiaria o residual de las amenazas condicionales y las coacciones

Según la doctrina (por todos, Díaz-Maroto, 2017), tal como ya se ha señalado anteriormente²¹⁶, el delito de extorsión, a pesar de ser autónomo, incluye notas características de otros delitos como las coacciones o las amenazas condicionales. Al igual que en el delito de robo analizado y otros tipos penales, la extorsión emplea los dos medios comisivos: la violencia y la intimidación, de tal forma que subyacen en ellos las coacciones o las amenazas condicionales.

²¹⁶ En el apartado 1.2.d) del presente capítulo se presenta una breve revisión de la doctrina en materia de coacciones.

En numerosas ocasiones, los problemas a la hora de probar en un juicio la concurrencia de determinadas conductas impiden demostrar la existencia de un delito de estorsión²¹⁷; por esta razón, los delitos de amenazas condicionales y coacciones adquieren una especial relevancia en el presente análisis jurídico. Pues bien, debido a su estructura residual, se pueden subsumir conductas propias de los procesos extorsivos dentro de estos tipos penales, que requieren menos elementos para su completa configuración.

Así, Quintero (2016a) señala que las amenazas y las coacciones están presentes de uno u otro modo en todos los delitos cuya descripción contenga violencia o intimidación. Concretamente, el delito de coacciones es incluso denominado el “delito de recogida” por excelencia (García-Pablos de Molina, 1983a, p.144; Corcoy, 2001, p.199; Sánchez Tomás, 2011, p.422; Díaz-Maroto, 2017, p.910) o *cajón de sastre* (por todos, Sánchez Tomás, 1999).

Las coacciones y las amenazas comparten con las detenciones ilegales y el secuestro su denominación de “Delitos contra la libertad”²¹⁸, protegiendo el mismo bien jurídico en sentido amplio, entendiendo la libertad como “un atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere y no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida y mediatizada por otras personas”²¹⁹, es decir, en ambos delitos lo que se pretende es doblegar la voluntad del sujeto pasivo (Quintero, 2016a) y, específicamente, las amenazas condicionales y las coacciones buscan que la víctima *haga algo o deje de hacerlo*²²⁰.

Además, en estos tipos penales el bien jurídico es a la vez objeto inmediato de ataque en contraste con otros delitos como la extorsión, el robo con violencia e intimidación, el acoso o la realización arbitraria del propio derecho, en los que se ataca la libertad como medio para conseguir otros fines. La autonomía de los delitos contra la libertad contenidos en estos casos se pierde, quedando absorbida por estos delitos complejos²²¹.

²¹⁷ Estas dificultades se exponen a lo largo de la presente tesis, y concretamente se recogen de forma resumida en el punto 1.2 del capítulo tercero.

²¹⁸ Ubicado en el Título VI del Libro II del Código Penal, como Muñoz Conde (2017) recuerda.

²¹⁹ Muñoz Conde (2017, p.133); aunque en el caso concreto de las detenciones ilegales y el secuestro se precise en un formato más específico, denominado libertad deambulatoria, como ya se ha explicado en el apartado correspondiente a cada delito.

²²⁰ Cabe matizar que, en las coacciones, la violencia es inmediata y actual, mientras que en las amenazas condicionadas está algo más diferida en el tiempo, pues se orientan a un “mal futuro”; además las coacciones pueden contener violencia física, mientras que las amenazas se limitan al anuncio del mal futuro (García del Blanco, 2017a; Quintero, 2016a).

²²¹ Así lo expresa Muñoz Conde (2017).

Atendiendo a las principales conductas criminales analizadas en el presente capítulo, es pertinente exponer tres niveles de actuación de las organizaciones criminales en cuanto a sus efectos sobre la libertad, identificando los delitos subyacentes en cada uno de ellos:

- En primer lugar, de las exigencias de pago o de contratación como condición para la no realización del mal constitutivo de delito, generalmente causar la muerte al empresario o a su familia, se desprende un delito de amenazas condicionales.
- En segundo lugar, si para reforzar o acelerar el propósito del primer mensaje, se emplea violencia, obligando o impidiendo a la víctima la realización de determinadas conductas, se comete un delito de coacciones.
- En tercer lugar, aunque sucede de forma menos frecuente, si las coacciones se prolongan en el tiempo y suponen una privación de libertad para la víctima, se puede identificar un delito de detenciones ilegales o de secuestro.

En conclusión, las amenazas y las coacciones están presentes de uno u otro modo en cada *modus operandi* de los procesos extorsivos analizados y son tipos penales con una estructura subsidiaria de protección de la libertad, siempre que este bien jurídico sea atacado (ya sea como fin o como medio para otro propósito) a través de métodos violentos o intimidatorios. Ahora bien, como Muñoz Conde (2017) matiza, la libertad siempre se ve condicionada por la convivencia humana, por lo que debemos situarnos en un contexto social concreto. En este punto, y teniendo en cuenta que el objeto de estudio de la presente tesis se centra en los procesos extorsivos a empresas en el ámbito de la criminalidad organizada, la intimidación ambiental y la amenaza implícita adquieren un protagonismo importante. Por ello, resulta oportuno hacer un breve comentario en el que se realizan algunas observaciones.

Breve comentario sobre la intimidación ambiental y la amenaza implícita

Un aspecto de especial relevancia en el análisis del *modus operandi*, cuando se identifican las características de los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada, es la importancia de la reputación del grupo criminal. En ocasiones, los objetivos de la intimidación se logran de forma muy rápida al presentarse el extorsionador como miembro de una organización criminal conocida. Este efecto inmediato, que mejora la efectividad del

crimen organizado, disminuye sus conductas violentas²²² y permite difundir el mensaje intimidatorio con mayor potencia y alcance sin necesidad de amenazas explícitas.

En este escenario resulta fundamental hacer un breve análisis del concepto de intimidación ambiental como forma de intimidación implícita que supone, por ejemplo, la continuidad delictiva por parte de los miembros de la organización criminal conocida por las víctimas o por su entorno o, lo que significa dicha intimidación en palabras de la STS de 16 de mayo de 2000 “la reacción que la presencia de los agentes de la autoridad representa”.

Este concepto de intimidación ambiental ha sido frecuentemente utilizado en el ámbito de las agresiones sexuales²²³. Por ejemplo, la STS de 8 de noviembre de 2005 señala en un caso de violación en presencia de otros individuos, que “la existencia del grupo puede producir en la persona agredida un estado de intimidación ambiental”. Refuerza su argumento señalando que la víctima “ante el efecto combinado de todos, había renunciado ya a toda resistencia, con lo que se ha de apreciar el carácter de cooperación necesaria de la actividad de fuerza física realizada por cada uno de los agentes”. Se entiende, por tanto, que el efecto combinado señalado por la jurisprudencia es superior a los efectos intimidatorios de cada uno de los actos, asumiendo un elemento cooperativo que refuerza el mensaje intimidatorio y minimiza la resistencia. Debido a esto, una sola de las conductas llega a ser suficiente para causar los efectos deseados a causa del ambiente de riesgo que se ha creado previamente.

También se llegó a aplicar en relación con la aceptación de la entrada y registro por parte de detenidos y presos en una situación de privación de libertad, tal como cita la STS de 13 de junio de 1992: “el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona y bienes o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes no nace de un

²²² A mayor reputación, menor necesidad tiene el grupo de ejercer violencia para doblegar la voluntad de sus víctimas, por lo tanto, mejores niveles de efectividad tienen las conductas de solicitud de pagos.

²²³ Ampliamente explicado en la STS de 3 de octubre de 1997, “considerada como aquella forma de amedrentamiento que, con independencia de cuál de los procesados fuese quien materialmente emplease los mecanismos físicos o psíquicos productores de terror en la víctima, se produce por el hecho de que los demás acompañantes están presentes cuando cada uno de los agresores consuma materialmente las diversas violaciones. La presencia de los copartícipes reforzaba la situación de desamparo de la víctima, facilitando cada acto causal, haciendo nulo o ilusorio cualquier futuro mecanismo de defensa, por parte de aquélla, que bien hubiera podido activarse de no concurrir los agresores en grupo (...) La actitud pasiva de la víctima no sólo es explicable por la inicial agresión física sino que también está originada por la concurrencia de todos los partícipes en el interior o en las proximidades de la tienda, hecho que según el relato fáctico era conocido y o percibido por la víctima que se encontraba así inmersa en un clima de intimidación ambiental en el que jugaban un papel decisivo todos los componentes del grupo”.

comportamiento de quien formula la «invitación» a permitir el registro voluntariamente, sino de la situación misma de detenido, esto es, de una «intimidación ambiental»". En este mismo entorno, la STS de 26 de noviembre de 2003 llega a considerar que en casos de "intimidación ambiental (...) el consentimiento otorgado en esas condiciones es un consentimiento viciado y carente de eficacia".

Aplicando este concepto al ámbito de la delincuencia organizada, el elemento colectivo puede reforzar, a través de la reputación adquirida, conductas intimidatorias o violentas previas sobre otras víctimas. Así, Grasso (2016) señala que cuando se hace un uso moderado de la violencia es porque se trata de una variable inversamente proporcional a la fuerza de la organización mafiosa; es decir, a más fuerza o reputación, menos violencia necesita ejercer para doblegar la voluntad de la víctima.

El mensaje intimidatorio en el contexto de los procesos extorsivos puede ser implícito cuando la víctima conoce la reputación del grupo y el autor o autores se identifican como miembros de este. De este modo, la víctima accede a las demandas del grupo por el simple hecho de conocer quiénes son y cómo actúan ante una negativa.

1.4. Otros delitos dentro de los procesos extorsivos

A partir de la exposición del *modus operandi* dentro de las tipologías extorsivas perpetradas por organizaciones criminales se extraen una gran variedad de delitos, que con mayor o menor frecuencia se cometen contra los negocios analizados en este trabajo. Los delitos expuestos en el apartado anterior adquieren un protagonismo mayor al tratarse de las conductas nucleares de los procesos extorsivos y por tanto son definidos y diferenciados a través de un análisis jurídico en un apartado específico. Pero en tales procesos también se han señalado delitos secundarios que se dan de manera frecuente y delitos accesorios menos frecuentes. Ambos tipos de delito revisten un especial interés para el objeto de la presente tesis, por lo que se abordarán, aunque de forma sucinta, en los siguientes apartados.

1.4. a) Delitos secundarios y frecuentes

En el análisis de las conductas propias de los procesos extorsivos existen tres delitos secundarios que se dan de manera frecuente en los *modus operandi* de las organizaciones que los perpetran.

En primer lugar, cuando concurre el elemento de engaño, algunas conductas identificadas son subsumibles en el delito de estafa; en segundo lugar, cuando la violencia propia de los procesos extorsivos se materializa con determinada intensidad en las víctimas, resulta aplicable un delito de lesiones; y, en tercer lugar, cuando la violencia es ejercida sobre la propiedad de las víctimas, adopta forma de daños. Dichos delitos se describen a continuación.

El delito de estafa

El delito de estafa está regulado en dos apartados del artículo 248 del Código Penal: “1. Cometan estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

2. También se consideran reos de estafa:

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

b) Los que fabricaren, introdujeran, poseyeran o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

c) Los que, utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.”

Se trata de un delito contra el patrimonio que precisa cinco elementos esenciales, tal como señala la jurisprudencia²²⁴:

²²⁴ Así se expone en la STS de 1 de junio de 2012.

1) la utilización de un *engaño* previo bastante, por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico²²⁵;

2) el engaño ha de desencadenar el *error* del sujeto pasivo de la acción;

3) debe darse también un *acto de disposición patrimonial* del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero;

4) la conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y *ánimo de lucro* y

5) de ella tiene que derivarse un *perjuicio* para la víctima, perjuicio que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (*nexo causal*) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo.

Como se deduce de la lectura de sus cinco elementos, para el delito de estafa es fundamental la existencia del *engaño* (por todos, Bajo, 2004), que Anarte (2017, p.473) define como: “una maniobra defraudadora explicitada en actuaciones, declaraciones u ocultaciones que revisten apariencia de realidad y seriedad”. Esta es la clave sobre la que pivota la configuración del delito, siempre y cuando sea bastante para inducir al error al sujeto pasivo, existiendo por tanto un nexo de causalidad (Pérez Manzano, 1998; Herrero, 2006; Álvarez García, 2011c; Pastor y Coca, 2015; González Cussac, 2016b; Muñoz Conde, 2017; Rebollo, 2017). Aunque Bajo (2017) matiza que además del engaño, lo decisivo de la estafa es el perjuicio patrimonial. Así, la jurisprudencia²²⁶ indica que el engaño debe ser suficiente²²⁷, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima y debe constituir la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial.

A este respecto, Bajo (2014) señala que, aunque se acepta el engaño por omisión como forma comisiva, a su juicio debería quedar en el ámbito civil pues, además de considerar difícil que una conducta omisiva cumpla con la exigencia típica de maquinación engañosa, esta

²²⁵ Las mismas sentencias añaden que “esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad del sujeto pasivo en el caso concreto.”

²²⁶ SSTs de 22 de septiembre de 2000, de 8 de marzo de 2002, y de 29 de febrero de 2003.

²²⁷ Además, como recuerdan Herrero (2006) y Álvarez García (2011c), para valorar la concurrencia de engaño bastante se deberán tener en cuenta las capacidades de la víctima, tales como su especial credulidad o su situación de angustiosa necesidad.

presenta un menor desvalor. Ahora bien, Herrero (2006) matiza que no debe confundirse la comisión por omisión con la comisión a través de *actos concluyentes* que hacen referencia a una actividad engañosa implícita, como pudiera ser aparentar activamente algo que realmente no es.

En cualquier caso, dado que el engaño debe ser un factor antecedente y causal de las consecuencias de carácter económico²²⁸, se considera que debe tener una “vinculación secuencial perfecta” (Quintero, 2016b, p.651) a través del error, entendido como una falsa representación de la realidad, elemento conectado necesariamente con el acto de disposición patrimonial, que puede consistir en hacer entrega de una cosa o en prestar un servicio (Bajo, 2017) y puede ser *de hacer* o *de no hacer* (Álvarez García, 2011c). Esta será la clave esencial en la identificación de delitos dentro de los procesos extorsivos objeto de estudio, cuando a través de un engaño bastante se genere una distorsión en la percepción de la realidad de un empresario, que le provoque tomar la decisión de actuar en el desarrollo de sus actividades económicas en favor de la organización criminal, con su consecuente perjuicio patrimonial.

En esta misma línea y debido a que se trata de un delito de resultado material, ese traspaso patrimonial debe entenderse como el acto de disposición que realiza el propio perjudicado bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad y debe causar, asimismo, un perjuicio patrimonial propio o de tercero, mediante la entrega de una cosa o la prestación de un servicio por el que no se obtiene ninguna contraprestación. Por lo tanto, como apuntan Pérez Manzano (1998), González Cussac (2016b) y Quintero (2016b), la naturaleza jurídica del acto no es relevante, sencillamente debe producir un desplazamiento patrimonial del sujeto pasivo al sujeto activo.

Se debe tener en cuenta que la consumación del delito se da en el momento en el que el sujeto pasivo realiza, por error y como consecuencia del engaño, el acto de disposición patrimonial y el sujeto activo obtiene la disposición de la cosa ajena (Herrero, 2006; Álvarez García, 2011c; Bajo, 2017) y que tal disposición del engañado debe producir un perjuicio patrimonial para él o para un tercero, como apunta Pérez Manzano (1998). Por tanto, que no es necesario que se haya producido el provecho correspondiente, basta con la producción del perjuicio patrimonial. Ahora bien, el acto de disposición debe ser idóneo para producir el perjuicio (Pastor y Coca, 2015).

²²⁸ Como señala la jurisprudencia: así véanse las SSTs de 19 de mayo de 2000 y de 5 de junio de 2000.

Tal como explica Anarte (2017), actualmente el delito de estafa muestra una indudable versatilidad, dada su extendida utilización por la delincuencia común y la criminalidad económica, además de sus enormes posibilidades de aplicación por la amplitud de su conducta típica, especialmente del engaño. Aun así, se han tipificado algunos comportamientos específicos como por ejemplo las denominadas estafas impropias, que son la estafa informática y la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito o cheques de viaje, adaptando su regulación a los tiempos actuales (Pérez Manzano, 1998; Herrero, 2006), estas modalidades comparten con la básica el bien jurídico protegido común, que es el patrimonio del sujeto pasivo.

Tanto en la extorsión como en la estafa subyace “un ánimo de lucro que se traduce en un desplazamiento patrimonial” (Varela, 2004, p.392) pero la diferencia fundamental entre ambas es el medio comisivo: en la estafa es el engaño bastante mientras que en la extorsión es la violencia o la intimidación (Díaz-Maroto, 1997; Bajo, 2017). Otra diferencia significativa radica en el bien jurídico que protegen ambos tipos penales: la jurisprudencia²²⁹ señala que la extorsión protege el patrimonio frente a ciertas agresiones contra la libertad del sujeto pasivo, consistentes en violencia o intimidación, a diferencia de la estafa, que protege la autodeterminación patrimonial del sujeto pasivo frente a acciones engañosas.

La maquinación de un plan por parte de un grupo de personas que prepara una situación simulada con apariencia de buena fe en los negocios es aplicable al ámbito de los procesos extorsivos, porque una vez que el sujeto pasivo descubre la falsedad de los intervinientes, la situación se puede tornar más violenta y derivar en unas exigencias de pago por parte de la organización criminal con métodos más directos. Es decir, una vez detectado el engaño, en muchas ocasiones se perpetran amenazas condicionales o coacciones para que la víctima realice los pagos, pero también es posible que el engaño no sea detectado hasta un momento posterior al pago y se haya logrado inducir a error suficiente para realizar un negocio jurídico en su propia contra, conducta típica del delito de estafa.

Un caso de estafa, por ejemplo, se encuentra en los hechos probados de la STS de 30 de junio de 2015, que relatan el engaño de una organización criminal mediante el envío de cartas nigerianas: “el mecanismo de engaño ha sido, fundamentalmente, ponerse en contacto (vía email o carta) con las víctimas a quienes se les ha hecho creer que algún familiar había fallecido dejando una herencia millonaria, o que le correspondía cobrar una considerable cantidad de dinero en atención a negocios o trabajos que había realizado con anterioridad”. Es relevante

²²⁹ STS de 14 de septiembre de 2001 y SAP Gerona de 22 de enero de 2015.

tener en cuenta que, como recoge la sentencia, el desplazamiento patrimonial se produjo como consecuencia del engaño, pues recuerda que “la estafa como elemento esencial requiere la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima que constituye la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial, acto de disposición que realiza el propio perjudicado bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad”.

Así, en los hechos probados se recoge que: “los modos de los que se valía la organización para defraudar a las víctimas, consistía en que en la primera comunicación uno de los acusados se suele identificar con un nombre falso, diciendo ser representante de una entidad financiera, abogado o familiar de un político de un país africano o de un fallecido, etc. y que posee una cantidad de varias decenas de millones de euros o dólares en dinero efectivo, depositados en alguna entidad o Banco de Nigeria u otro país africano o en una empresa de seguridad de un país europeo. El depósito de ese dinero en Nigeria o su traslado a una empresa de seguridad en España se produjo antes del infortunio sucedido a su propietario. El acusado propone y pide a la víctima que colabore con él en el desbloqueo de esa suma de dinero a cambio de un porcentaje de la cantidad depositada y le pide que facilite su número de cuenta bancaria para transferir a ella aquellos fondos. Una vez que la persona les ha comunicado su número de cuenta, le remiten un documento ficticio emitido por la entidad que supuestamente custodia los fondos en el que se acredita haber recibido la orden de transferencia de estos a favor de la víctima”. Deja patente, por tanto, que la organización preparaba el engaño de forma coordinada con el fin de lucrarse a costa del desplazamiento patrimonial fruto del error provocado en las víctimas.

En el análisis del *modus operandi* de los procesos extorsivos, hallamos que la tipología de extorsión por protección incluye una conducta aplicable al delito de estafa: la exigencia de pago a víctimas extranjeras se hace habitualmente a través del engaño, requiriendo cierta documentación o proponiendo negocios mediante el falso supuesto de que el grupo quiere realizar actividades que involucran a la víctima; si en tal caso se consiguiera inducir a error suficiente para realizar un negocio jurídico en su propia contra podríamos estar ante un delito de estafa. Ahora bien, normalmente el momento en el que las víctimas se dan cuenta del engaño, es cuando se inician los procesos extorsivos que incluyen violencia e intimidación, en este supuesto se puede incurrir en un delito de estafa y en un delito de extorsión, o en el caso de que la estafa no haya sido consumada, en una tentativa de estafa junto con un delito de extorsión consumado.

El delito de lesiones

El delito básico de lesiones está recogido en el artículo 147.1 del Código Penal con el siguiente tenor literal: *“el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.”*

Como se desprende de la descripción del tipo, ese resultado puede suponer un ataque a la integridad física entendida como el bienestar corporal, y la salud física o mental (García García-Cervigón, 2004; Álvarez García, 2011a; Felip, 2015; Carbonell, 2016; Tamarit, 2016; Muñoz Conde, 2017). La salud se puede entender como bien jurídico amplio que puede verse afectada por la causación de una enfermedad; igual sucede con la integridad física o moral del artículo 15 de la Constitución²³⁰.

²³⁰ Que dice así: “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.”

Se trata de un delito de resultado material²³¹ y de medios indeterminados, pudiendo cometerse a través de medios omisivos²³² (Álvarez García, 2011a; Felip, 2015; Tamarit, 2016), como en el caso del Pabellón Multiusos Madrid Arena²³³.

Ahora bien, el resultado del delito debe consistir en el menoscabo de la integridad corporal, la salud física o mental causado mediante “cualquier procedimiento”, por lo que las conductas típicas pueden ser agresiones físicas, empleo de medios físicos, contagios de enfermedades, exposición a sustancias tóxicas, etc.; esto es, siempre y cuando produzcan la lesión, el resultado típico que exige el delito (por todos, Cancio, 2017a), así, se exige una relación de causalidad entre la acción y el resultado (Álvarez García, 2011a; Muñoz Conde, 2017). Pero como Carbonell (2016) recuerda, la acción de golpear o maltratar de obra también puede ser

²³¹ Ahora bien, como señala Mir (2003, p.5) “la intervención de la víctima puede excluir la imputación del hecho a quien contribuye a causarle una lesión”; se trata de casos de “autopuesta en peligro” por parte de la víctima cuando participen otras personas en forma de inducción o de cooperación, y en casos donde la puesta en peligro de la víctima por parte de otro es imputable a la víctima, siendo de aplicación el artículo 156 del Código penal como en casos de trasplante de órganos, esterilizaciones y cirugía transexual.

Hay que tener en cuenta que el consentimiento no siempre exime de responsabilidad penal del autor, como recuerda García García-Cervigón (2004), pues en los demás supuestos ajenos al artículo 156 las lesiones sí se castigan, aunque con una pena inferior en uno o dos grados cuando ha mediado el consentimiento válido, libre, espontáneo y expreso de la víctima. Además, a tenor de lo dispuesto en el artículo 155, tal consentimiento no será válido si quien lo otorga es un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.

²³² Siempre y cuando sea aplicable el artículo 11 del Código Penal que establece las condiciones para la comisión por omisión: “*los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equipará la omisión a la acción:*

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.

b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.”

²³³ La STS de 11 de diciembre de 2012 explica que varias personas resultaron heridas (algunas con resultado de muerte) en una fiesta de Halloween en las aglomeraciones y caídas de numerosas personas que trataban de salir de la pista, al encontrarse cerradas la mayoría de las salidas principales como resultado de la ausencia de control de quien tenía la posición de garante de la seguridad de una fiesta masiva en un local de grandes dimensiones.

Además, la citada sentencia desarrolla una explicación sobre la comisión por omisión de los tipos penales en juego (homicidio y lesiones): “la responsabilidad se predica de la dejación de las funciones de control o falta de la diligencia debida, o de la omisión del deber de cuidado, y no tanto de la presencia física del responsable del evento, sino del ejercicio de control de la actividad que puede resultar dañosa cuando se encuentra descontrolada”, con una clara relación causal entre tal acción omisiva y los resultados lesivos.

constitutiva de un delito de mera actividad que no requiere resultado alguno, contenido en el apartado tercero del citado artículo 147²³⁴.

Este tipo básico incluye lesiones para las que su sanación requiera una primera asistencia facultativa y un tratamiento médico o quirúrgico; en caso contrario será aplicable el artículo 147.2 del Código Penal²³⁵ que es un tipo subsidiario con una pena menor para aquellas lesiones que no cumplen los requisitos establecidos. Concretamente, esta delimitación es definida por Cancio (2017a, p.823), aunque admitiendo que no es sencilla, partiendo de la noción de tratamiento quirúrgico: “toda acción prolongada más allá del primer acto médico y que supone una reiteración de cuidados que se continúa durante dos o más sesiones, sin que deban incluirse en el mismo simples cautelas, medidas de prevención como obtención de radiografías, *scanners* o resonancias magnéticas o sometimiento a observación que no generen medidas de intervención propiamente dichas”. Consecuentemente, indica que el significado de primera asistencia facultativa se encuentra en contraposición con el tratamiento médico o quirúrgico, teniendo este una clara finalidad curativa frente a actos paliativos o de diagnóstico de aquella. Ahora bien, el propio autor señala que los actos médicos curativos de pequeñas afecciones que logren su sanidad con una sola intervención también encajarían en el concepto de primera asistencia facultativa. En esta misma línea, García García-Cervigón (2002, p.314) recuerda que “la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no será considerado tratamiento médico”.

Además, existen diferentes tipos agravados en función de los medios empleados, la forma en la que la lesión se lleva a cabo y las características de la víctima, contenidos en el artículo 148 del citado texto legal:

- Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.
- Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.
- Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

²³⁴ El apartado 3 del artículo 147 del Código Penal establece que “*el que golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.*”

²³⁵ El apartado 2 del artículo 147 del Código Penal establece que: “*el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.*”

- Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
- Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Y existen también dos tipos agravados por la gravedad del resultado²³⁶, el primero se refiere a la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica y el segundo, en una versión menos grave, se da cuando el resultado es la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad, respectivamente.

Se debe tener en cuenta que, si bien existe la modalidad imprudente²³⁷, es de interés para el tema que nos ocupa conocer la explicación de la comisión dolosa eventual que el Tribunal Supremo aporta en su STS de 21 de octubre de 2015 relativa a un delito de lesiones donde la acción pretende el resultado: “en el marco de una agresión, se establece que existe dolo por parte del agente activo cuando conociendo que su conducta genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, sigue actuando, provocando las lesiones sobre el sujeto pasivo, aunque no tenga la seguridad de que pueda provocarlas y aunque no persiga directamente el resultado final”²³⁸.

Un caso claro de proceso extorsivo con lesiones es el expuesto en la STS de 26 de diciembre de 2008, que señala lo siguiente: “con ánimo de menoscabar la integridad corporal

²³⁶ El artículo 149.1 del Código Penal prevé que: “*el que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección*” y en el 150 se establece: “*el que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años*”.

²³⁷ Sobre esta modalidad por imprudencia García García-Cervigón (2002, p.327) señala que “es un precepto necesario y acorde con la realidad social”, argumentando que se trata de hechos que se dan con relativa frecuencia

²³⁸ En el caso de la sentencia, se trata de la pérdida de un ojo por parte de la víctima, hecho que posiblemente no era directamente buscado por el autor, pero siendo este conocedor del peligro de su ataque perpetrado mediante un puñetazo a una puerta de cristal a la altura de la cara de la víctima “siendo en todo caso consciente del riesgo que generaba su conducta y del posible resultado lesivo” y en consecuencia clavándole un cristal en el ojo.

(de la víctima) y poder obtener el inicial ilícito de enriquecimiento le golpearon en la cabeza por detrás, y le produjeron varios cortes en la espalda, al tiempo que le cubrían la cabeza con una bolsa de plástico, le taparon la boca con cinta adhesiva y le ataron con una cinta de nylon, pasando toda la noche sobre una cama de una habitación del piso superior del chalet donde le llevaron los procesados” (...) la víctima “privado de libertad de movimientos como estaba, fue obligado por los procesados a firmar diversos documentos que comprometían su patrimonio”.

En el análisis jurídico de la casuística que nos ocupa, todo proceso violento de extorsión es susceptible de incluir un resultado de lesiones en los casos de exceso. Cuando la violencia de una conducta delictiva (extorsión, robo, etc.) es de tal intensidad que hay un desvalor superior y no encaja en la forma de comisión normal del delito, ésta no queda absorbida por el delito principal, ya que supera los fines para los que se empleó la violencia, incurriendo así en un delito secundario de lesiones de forma autónoma.

Esto ocurre²³⁹, por ejemplo, en los casos de recaudación de deudas ilegales, cuando se recurre a métodos muy violentos para el reclamo de liquidación ante impago y cuando se exige la contratación de proveedores a través de una extorsión extremadamente agresiva; en estos supuestos, se genera un resultado lesivo en las víctimas que no queda absorbido por la violencia contenida en el delito de extorsión (u otros delitos eventualmente aplicables).

El delito de daños

El delito básico de daños está recogido en el artículo 263.1 del Código Penal: *“el que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño. Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.”*

Es un delito patrimonial que protege el bien jurídico de la propiedad castigando la conducta de causar daños en propiedad ajena no comprendidos en otros tipos del Código Penal (Andrés Domínguez, 2010; Quintero, 2016b), entendido por tanto como una categoría residual (Martínez-Buján, 2016; Guérez, 2017).

²³⁹ En este contexto, las lesiones pueden ser un exceso de la acción extorsiva, derivada de la violencia contenida en el delito principal o puede actuar de forma complementaria reforzando el mensaje contenido en amenazas o coacciones.

Este tipo comprende los comportamientos típicos de destruir, deteriorar, inutilizar (del artículo 265) y de alterar (del artículo 264), siempre que acompañe el menoscabo sustancial de la cosa. El objeto material del tipo puede ser cosa mueble o inmueble, pero siempre material y económicamente valorable, susceptible de deterioro o destrucción y que afecte al derecho de propiedad (Andrés Domínguez, 2010). Robles y Pastor (2015) aportan curiosos ejemplos ilustrativos de esta diversidad material en el concepto de daños: introducir azúcar en el depósito de gasolina, cortar flores de un rosal, verter legía sobre ropa o destruir documentos.

Además, el tipo básico requiere dolo, que debe ser tal como pone de manifiesto la STS de 15 de junio de 2015 cuando señala que “en primer lugar, que conste la realidad y cuantía del menoscabo patrimonial sufrido por el sujeto pasivo del delito, y en segundo, que el ánimo o intención del agente y sus actos de ejecución demuestren de modo cumplido su designio de querer directa y exclusivamente causar un daño sin otro propósito que pudiera exculpar su acción. Es indispensable el propósito en el agente conocido por *animus damnandi*, o lo que es lo mismo, que el autor sabe: elemento cognoscitivo del dolo, que su acción va a producir daños en el patrimonio ajeno y los realiza: elemento volitivo del dolo”.

También se prevé la modalidad por imprudencia, recogida en el artículo 267²⁴⁰ del texto penal. Asimismo, se puede apreciar el dolo eventual: aunque el culpable de un delito de daños no buscara directamente causar los daños efectivos, basta con que “los asumiese como resultado o consecuencia muy probable de su acción” (STS de 15 de octubre de 2004). Al ser un delito de resultado se exige la destrucción, deterioro o menoscabo de la cosa²⁴¹, aunque algunos de ellos sean objeto de especial agravación según lo previsto en el artículo 264 del Código²⁴².

²⁴⁰Donde se establece que: “los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos. Las infracciones a que se refiere este artículo sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. El Ministerio Fiscal también podrá denunciar cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida. En estos casos, el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130 de este Código.”

²⁴¹ Así lo recuerda la STS de 15 de junio de 2015.

²⁴² El artículo 264 consta de tres apartados, que se exponen a continuación: “1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años. 2. Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concorra alguna de las siguientes circunstancias: 1.ª Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.

Se trata de una infracción contra el patrimonio en la que no existe enriquecimiento, se da una expropiación de la cosa, en lugar de una apropiación (Robles y Pastor, 2015). El objeto material se concreta en una cosa corpórea que puede ser mueble o inmueble, evaluable económicamente (Martínez-Buján, 2016).

Así, el delito de daños se caracteriza porque puede implicar un detrimento patrimonial para el dueño o poseedor de los bienes, sin que ello suponga un beneficio patrimonial para el sujeto activo. Aunque Robles y Pastor (2015) señalan que no es necesario que se ocasione un perjuicio patrimonial en la víctima, como indican con el ejemplo de quien mata a un viejo animal que sólo producía gastos para su dueño. En esta línea Andrés Domínguez (2010) recuerda que la acción debe producir un daño entendido como efecto concreto sobre el objeto material, independientemente de sus repercusiones en el patrimonio del sujeto.

Por tanto, los daños dolosos pueden producir perjuicio patrimonial en la víctima o no, pero sencillamente generan una *destrucción gratuita*. Ahora bien, esto no se considera así cuando los daños son delitos mediales respecto de otros delitos. En tal caso puede desaparecer la penalidad si los daños son absorbidos por la otra infracción para determinados supuestos: por ejemplo, en supuestos de daño causado por fuerza derivada del robo con fuerza en las cosas²⁴³. Quintero (2016b) aporta ejemplos muy ilustrativos como la ruptura de un escaparate para la

2.ª Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas informáticos.

3.ª El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.

4.ª Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder mantener sus funciones.

5.ª El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el artículo 264 ter.

Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, podrá imponerse la pena superior en grado.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.”

²⁴³ Además, aplicando el artículo 16.2 del Código Penal se puede apreciar un delito de daños en los supuestos en los que se desista de otro delito que se pretendía cometer, pero tenga un resultado de daños, por ejemplo, en un robo, cuando un ladrón, habiendo ejercido ya la fuerza en las cosas dañando la cerradura de un local en un atraco y advirtiendo la presencia del personal de la empresa, decida abandonar el lugar sin llevarse nada (Gúerez, 2017).

comisión de un robo en una tienda, el destrozo de una puerta para un delito de allanamiento de morada y el desgarrar de la ropa de una víctima de un delito de lesiones.

Aunque sí puede resultar aplicable el delito de daños en otros supuestos: cuando éstos sean tan desproporcionados que se pueda fundamentar un injusto independiente del principal, por ejemplo, en la destrucción gratuita de objetos en un momento posterior a la comisión de un robo. Así lo indica Guérez (2017) poniendo como ejemplo la destrucción de un vehículo con el que los autores de un delito de robo se dan a la fuga. Se trata del equivalente a los supuestos en los que la violencia en un robo con violencia o una extorsión, por ejemplo, es de tal envergadura que permite apreciar autónomamente un delito de lesiones.

Cabe mencionar que existen dos modalidades delictivas, además del tipo básico, que son los daños cualificados²⁴⁴ y los daños informáticos²⁴⁵. Además, habría que destacar entre las modalidades agravadas²⁴⁶, una conducta relevante para el tema que nos ocupa: los daños

²⁴⁴ Los previstos en el artículo 263.2: “será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si concurriere alguno de los supuestos siguientes:

1.º Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales.

2.º Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado.

3.º Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.

4.º Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.

5.º Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.

6.º Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales.”

²⁴⁵ Recogidos en el primer apartado del artículo 264 del Código Penal: “el que, por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.”

²⁴⁶ Previstas en el artículo 254.2 del Código Penal: “Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.

2.º Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas informáticos.

3.º El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.

4.º Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad,

provocados por incendios del artículo 266.1 Código Penal²⁴⁷. Se trata de un delito accesorio a determinados procesos extorsivos perpetrados por organizaciones criminales con intenciones monopolísticas: los daños provocados por incendios en locales de nueva apertura pueden servir como advertencia para la víctima, en el sentido de indicarle que la zona está controlada por ellos.

Un caso que ilustra la conducta típica del delito básico de daños es el expuesto en la STS de 5 de abril de 2016. Si bien esta conducta se da en un contexto de rivalidad vecinal²⁴⁸, es aplicable a un proceso extorsivo, donde los daños a las propiedades de las víctimas pueden forzar los pagos exigidos: el autor “golpeó desde la calle con un palo o una barra la ventana del salón de la vivienda (de la víctima) rompiendo los cristales, causando daños tasados en 60 euros que fueron abonados por la compañía aseguradora” y acompañó esos daños con frases amenazadoras como “te voy a reventar” o “te voy a matar”. Los efectos de un delito de daños en un local o domicilio propio pueden conllevar conductas de respuesta de la víctima ante la posibilidad de que se repitan, como recoge la misma sentencia, “ante el temor, la angustia y la inseguridad que el comportamiento (del autor) fue generando (en la víctima y su familia) y para evitar males mayores, decidieron que su hija y nietos abandonarían el domicilio familiar y cambiarían su lugar de residencia.”

Estas situaciones son frecuentes, por ejemplo, en casos de extorsión laboral que conllevan pequeños daños al negocio de quien se pretende que contrate a miembros del grupo, o en casos de extorsión monopolística, cuando se intenta que un negocio no se abra en una zona de control de la organización, evitando así nueva competencia. El efecto intimidatorio de los daños en los locales acompañado de sugerencias de cambios en la contratación o en el lugar de apertura es muy común en organizaciones que buscan evitar la comisión de delitos contra las personas y tal conducta puede tener una efectividad muy similar a las amenazas o las coacciones.

la protección y el bienestar económico y social de la población cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder mantener sus funciones.

5.ª El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el artículo 264 ter.

Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, podrá imponerse la pena superior en grado.”

²⁴⁷ Cuyo contenido es: “será castigado con la pena de prisión de uno a tres años el que cometiere los daños previstos en el apartado 1 del artículo 263 mediante incendio, o provocando explosiones, o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva o que genere un riesgo relevante de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad, o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas.”

²⁴⁸ O tal como dicta la sentencia: “entre ambos surgieron diversos enfrentamientos vecinales”.

1.4. b) Delitos accesorios y menos frecuentes

De manera accesoria, nos podemos encontrar conductas poco frecuentes en determinados procesos extorsivos, pero que forman parte de un *modus operandi* específico. Tal es el caso de los tipos penales de incendio, denuncia falsa o simulación de delito, que conforman comportamientos de gran utilidad en determinadas organizaciones criminales; especialmente efectivos en los casos de víctimas extranjeras que encuentran enormes barreras para explicar lo sucedido y solicitar protección. Resulta pertinente para el contexto jurídico que se presenta en este capítulo exponer sucintamente las características básicas de tales delitos.

El delito de incendio

El tipo penal básico que corresponde a los incendios se establece en el artículo el 351.1 del Código Penal donde se dicta que *“los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años. Los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas la menor entidad del peligro causado y las demás circunstancias del hecho. Cuando no concurra tal peligro para la vida o integridad física de las personas, los hechos se castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código.”*

Es de interés conocer una breve descripción de la conducta típica, que es la acción de incendiar²⁴⁹, es decir, prender fuego a lo que no debe quemarse o que no está destinado a arder (De la Cuesta Aguado, 2011; Tamarit, 2016b).

Se trata de un delito de peligro que protege el patrimonio, la vida y la integridad física de las personas y cabe su comisión por omisión; en cualquier caso, la consumación se produce cuando se prende fuego concurriendo los siguientes elementos: que exista una combustión, que ésta sea autónoma y que exista un riesgo de propagación, entendiendo por este riesgo que el fuego esté fuera de control (De la Cuesta Aguado, 2011).

²⁴⁹ Que contiene dos elementos, citando lo expuesto más ampliamente por la jurisprudencia se requiere “un elemento objetivo consistente en la acción de aplicar fuego a una zona espacial que comporta la causación de un peligro para la vida e integridad física de las personas; y un elemento subjetivo que estriba en el propósito de hacer arder dicha zona espacial, y en la conciencia del peligro originado para la vida y para la integridad física de las personas” (SSTS de 14 de julio de 2005, de 8 de octubre de 2008, de 18 de noviembre de 2009 y de 18 de noviembre de 2014).

Como añade Maraver (2017), el alcance de la conducta se delimita entendiendo el concepto de incendio como fuego de grandes dimensiones y también que tal incendio debe ser bastante para suponer un riesgo para la vida o la salud de las personas²⁵⁰.

En esta misma línea, Muñoz Cuesta (2008) señala que no es aplicable el delito de incendio en aquellos supuestos que, a pesar de haber prendido fuego a algo, no concurre peligro para otros bienes por no existir el riesgo de propagación; esto significa que el peligro es un requisito indiscutible.

En este sentido, Tamarit (2016b) explica que si se pretende terminar con la vida de dos personas y se prende fuego a su casa, que se encuentra aislada en un monte y el resultado se limita al fallecimiento de tales personas, el autor responderá únicamente por dos delitos de homicidio y no por un delito de incendio; esto se debe a que el desvalor de peligro en este supuesto quedaría extinguido en la lesión del bien jurídico que ya protege el delito de homicidio, resultando aplicable la regla de consumación del artículo 8.3 del Código Penal: *“el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél”*.

Así, Andrés Domínguez (2010) recuerda que, dado que lo característico del incendio es el riesgo de propagación, también es precisamente lo que le diferencia del delito de daños: el objeto de protección en el delito de incendio es la seguridad colectiva en base al riesgo o peligro de propagación, mientras que el delito de daños en cosa ajena es la propiedad sobre la integridad material de las cosas. Esto implica que, la destrucción de objetos por cremación sin riesgo de propagación que ponga en peligro la seguridad de las personas será considerado un delito de daños.

En el objeto de estudio que ocupa el presente análisis, es reseñable un interesante apunte de Muñoz Cuesta (2008, p.1) sobre el específico delito de incendio: “la gravedad que supone el prender fuego a objetos materiales motivando un incendio es algo obvio y que al menos, por sus posibles devastadoras consecuencias, produce alteración social, creando miedo y desasosiego a los ciudadanos que lo perciben”. Es precisamente este miedo y desasosiego el propósito de las organizaciones criminales al prender fuego un local de un empresario que ha rechazado cerrar el negocio o contratar determinados proveedores.

²⁵⁰ Remitiéndose a la jurisprudencia de las SSTs de 24 de octubre de 2003, de 26 de enero de 2012 y de 3 de diciembre de 2017.

Un ejemplo ilustrativo del delito de incendio como medio intimidatorio, en muchas ocasiones previa amenaza de provocar tal acción para la obtención de una exigencia es el caso de la STS de 19 de febrero de 2016, al señalar que el condenado “colocó un artefacto explosivo compuesto por tres botellas de gas (...) y las hizo explotar, mediante la combustión de un mecanismo acelerante, para producir fuego en la casa y consciente de que las llamas se extenderían al resto del inmueble, lo que efectivamente ocurrió”, tales son los actos propios encaminados a la provocación de un incendio, con claro riesgo de propagación. La intención lucrativa se deduce de la declaración de su cuñado, cuando afirmó que lo que el autor buscaba era un beneficio económico y ante la negativa de sus reclamos, quiso demostrar que debían acceder a sus exigencias, pues previamente había requerido a su madre y a su hermana la entrega de 100.000 euros bajo amenaza de apuñalarlas²⁵¹.

Pues bien, tal conducta puede resultar especialmente efectiva como mecanismo de presión para las extorsiones monopolísticas en el ámbito de la delincuencia organizada. Estas extorsiones se pueden perpetrar con el claro propósito de que, como resultado de los daños producidos tras un incendio provocado en su negocio y el miedo frente a un nuevo incidente con la organización criminal, la víctima acceda a las exigencias de la organización, cualesquiera que sean. Entre ellas, puede incluirse la prohibición de abrir un local en la zona donde el grupo ejerce su dominio; en ese supuesto, podría ser aplicable además del delito de incendio un delito de daños específico por medio de un incendio previsto en el artículo 266.1 del Código Penal²⁵², siempre y cuando genere un riesgo significativo de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad, o ponga en peligro la vida o la integridad de las personas.

El delito de acusación y denuncia falsa

El delito de denuncia falsa se prevé en los dos apartados del artículo 456 del Código Penal, con el siguiente tenor literal: “1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían

²⁵¹ Este último extremo no fue considerado probado porque la madre y la hermana se acogieron a la dispensa del artículo 416 de la LECrim, debido a motivos personales ajenos a la hipotética falsedad de la declaración de su cuñado, pero que permitió al acusado la absolución del delito de amenazas.

²⁵² Cuyo tenor literal es el siguiente: “será castigado con la pena de prisión de uno a tres años el que cometiere los daños previstos en el apartado 1 del artículo 263 mediante incendio, o provocando explosiones, o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva o que genere un riesgo relevante de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad, o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas.”

infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados: 1.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave. 2.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave. 3.º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve. 2. El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses.”

Quintero (2016c) explica que es un tipo penal construido a partir de la descripción típica de la calumnia: es una modalidad específica que requiere la condición de que los sujetos ante quien se pronuncia o dirige la falsa imputación sea un funcionario judicial o administrativo que tenga obligación de proceder a la averiguación del hecho por razón de su cargo.

Por tanto, se trata de un delito que afecta tanto a la Administración Pública como al honor de quien se le imputa la realización de una determinada infracción penal cuya conducta típica también requiere que esa imputación se atribuya de manera clara e individualizada sobre una persona, que sea objetivamente falsa y que subjetivamente se conozca su falsedad o se desprecie la verdad y, como ya se ha comentado, que sea realizada frente a un funcionario judicial o administrativo que deba proceder a su averiguación (Díaz Pita, 1996; Morón, 2011; Soto Rodríguez, 2012; Benlloch, 2015; Orts, 2016; Quintero, 2016c; Cancio, 2017c; Muñoz Conde, 2017).

Ahondando más profundamente en el delito, la STS de 22 de febrero de 2004 recuerda los elementos del tipo:

a) La acción de simular ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una infracción de este tipo, inexistente en realidad, siendo el destinatario de la acción un funcionario judicial o administrativo que, ante la noticia del delito, tenga profesionalmente la obligación de proceder a su averiguación.

b) Que esa actuación falsaria motive o provoque alguna actuación procesal.

c) El elemento subjetivo se integra con la conciencia de la falsedad de aquello que se dice y la voluntad específica de presentar como verdaderos hechos que no lo son, lo que excluye la comisión culposa. La incriminación del delito de denuncia falsa del art. 456 del Código Penal exige, según reiterada jurisprudencia, una conciencia por parte del denunciante de estar

revelando hechos apartados de la realidad. El delito de denuncia falsa no puede nunca consistir en la mera atribución subjetiva de la comisión de un delito, con cita de una base fáctica valorada como tal por el denunciante, pero insuficiente por sí misma para la condena, aun cuando resultase posteriormente acreditada, sino en la imputación de toda una narración que integre plenamente la acción delictiva, pues no en balde el artículo 456 se refiere a "unos hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal.

d) La relación de causa a efecto entre la falsedad y la actuación procesal. (...) En aquellos casos en que la denuncia simulada no llega a producir la actuación procesal perseguida, se entenderá el hecho cometido como delito de simulación de delito o denuncia falsa en grado de tentativa.

Conviene recordar que nuestro ordenamiento procesal penal permite tres formas de iniciar un proceso penal: la denuncia, la querella y de oficio. Todas ellas pueden dar lugar a un delito de acusación y denuncia falsas (Soto Rodríguez, 2012; Quintero, 2016c; Muñoz Conde, 2017).

Ahora bien, Quintero (2016c) destaca un aspecto relevante: una acusación no se convierte en falsa a partir de la absolución por falta de dolo o culpa del acusado o de pruebas en el juicio; únicamente se considera falsa cuando existe una declaración de inexistencia del hecho.

Sin entrar en el debate sobre la idoneidad de proteger penalmente su conducta típica, es reseñable mencionar la postura de Serrano González de Murillo (2005, p.7): "resulta inapropiado para un Estado constitucional democrático el asegurar la relación del ciudadano con algunas instituciones mediante deberes de veracidad con respaldo penal. Naturalmente, con una salvedad: resultaría necesario incluso el respaldo penal si se demostrara que el respeto plasmado en un deber de veracidad resulta absolutamente indispensable para el funcionamiento de la institución, de manera que sin este no pudiera llevar a cabo las tareas encomendadas", aunque el propio autor destaca que se trata de un delito escasamente aplicado y estudiado.

Respecto de la materia que nos ocupa, Soto Rodríguez (2012, p. 1) describe el delito de acusación y denuncia falsa como "generalmente extorsionante", asumiendo cierto poder coercitivo en la acción. Además, la autora puntualiza que gran parte de estas denuncias falsas

están asociadas o relacionadas con el artículo 457²⁵³ del Código Penal sobre simulación de delitos, cuando una persona simula ser responsable o víctima de una infracción penal o denuncia una infracción inexistente ante alguno de los funcionarios citados en el artículo 456 provocando así las actuaciones procesales correspondientes.

Un ejemplo de denuncia falsa lo encontramos en la STS de 24 de febrero de 2001, que condena por delito continuado de acusación y denuncia falsa a tres autores que tratan de recuperar los créditos de una empresa que estaba atravesando dificultades económicas mediante la presión de una denuncia falsa; la citada sentencia señala “para recuperar como fuera (dichos) créditos, interesó del acusado la interposición de una querella criminal contra aquéllos, como medida de presión para el cobro de las deudas”.

Este mecanismo puede resultar especialmente efectivo, como de la propia descripción de los hechos se desprende, en el cobro de deudas propias de los procesos extorsivos por protección, pero también ha sido identificado en procesos extorsivos contra extranjeros como mecanismo de advertencia si no se entregan los pagos demandados por la organización criminal.

Analizadas las diferentes formas de actuar de las organizaciones criminales en las distintas tipologías extorsivas expuestas por Monzini (1993), debemos tener en cuenta que estas organizaciones criminales también pueden cometer otro tipo de delitos no directamente vinculados a los tipos penales citados, ya sea porque realizan otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos, o porque emplean mecanismos corruptos orientados a la promoción de sus negocios como el cohecho o el tráfico de influencias. En palabras de los Fiscales Gómez Recio y Espina Ramos (2005, p.2):

“Al lucrativo ejercicio de la extorsión se han sumado prácticamente todos los grupos que se mueven dentro de una criminalidad organizada cada día más próspera por los también cada vez más numerosos campos de actuación que les ofrece todo el elenco de las innumerables actividades que han venido siendo prohibidas por el Derecho penal a lo largo del siglo XX”.

Nos encontramos, por tanto, ante una amplia gama de actividades delictivas desarrolladas en grupo de forma especialmente eficaz mediante nuevas formas de criminalidad,

²⁵³ Donde se establece que “*el que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simular ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses.*”

mucho más difíciles de combatir (Gómez Recio y Espina Ramos, 2005). Ahora bien, por el mero hecho de configurarse en el ámbito de la criminalidad organizada, pueden resultar aplicables delitos de organización como son el delito de organización criminal, de grupo criminal o de asociación ilícita.

Llegados a este punto, resulta de gran interés conocer el escenario donde se perpetran los procesos extorsivos analizados, cuestión que se expone a continuación.

2. El contexto: el delito de criminalidad organizada en España

Como se ha señalado anteriormente, los procesos extorsivos que se analizan en este trabajo se desarrollan en el ámbito de la criminalidad organizada, por lo que resulta de gran interés estudiar las características jurídicas que presenta este fenómeno. Una vez se ha explorado en el capítulo anterior la perspectiva criminológica, es necesario abordar ahora el punto de vista jurídico analizando la tipificación del delito de organización criminal y las consecuencias penales que se prevén, así como los diferentes delitos que nuestro ordenamiento jurídico vincula con la criminalidad organizada.

2.1. La delincuencia organizada como delito de organización: tipificación y cuestiones doctrinales

Para conocer el entorno completo del fenómeno que se pretende estudiar, es importante identificar las conductas tipificadas y las principales aportaciones que la doctrina y la jurisprudencia han realizado en materia de delincuencia organizada.

Hay que comenzar señalando que su tipificación en España fue relativamente reciente; se produjo en el año 2010, a través de la Ley Orgánica 5/2010, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en virtud de la cual se introdujeron los tipos de organización criminal y grupo criminal en el Capítulo VI del Título XXII del Libro II, integrado por los artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter. Sin embargo, se puede considerar un delito vivo, porque en su corta vida ya ha sido frecuentemente aplicado, ampliamente debatido

e incluso modificado. Para conocer su concreta problemática se debe comenzar por presentar la definición y conductas típicas que recoge el Código Penal.

2.1. a) Definición y conductas tipificadas

Concretamente, el delito de organización criminal es definido en el Código Penal de la siguiente manera: *“agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”* (artículo 570 bis 1., párrafo segundo).

Han sido muy relevantes las dos reformas del Código Penal que se han llevado a cabo en esta materia. Como ya se ha comentado, la L.O. 5/2010 de 22 de junio, que introduce este delito Penal; y la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo introduce una modificación sobre la anterior redacción²⁵⁴.

En cuanto a la conducta típica, dentro del tipo de organización criminal, se distinguen dos modalidades de conducta y dos tipos de fines de la organización, y ambas variables sirven como criterio para modular las penas. El Código Penal las recoge de la forma siguiente²⁵⁵:

- a) El delito de intervención en posición directiva en una organización criminal, definiéndolo mediante conductas concretas: *“Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren”* (artículo 570 bis 1., primer párrafo, primer inciso).
- b) El delito de intervención sin posición directiva en una organización criminal, enmarcándolo dentro de las siguientes actividades: *“participar activamente, formar parte, cooperar económicamente o de cualquier otro modo”* (artículo 570 bis 1., primer párrafo, segundo inciso).
- c) Que el fin de la organización sea cometer delitos graves.

²⁵⁴ Anteriormente se incluía la perpetración reiterada de faltas como finalidad perseguible, y una de las reformas de 2015 incluye la supresión definitiva del catálogo de faltas, pasando la mayor parte de ellas a estar tipificadas como delitos leves.

²⁵⁵ Las penas que el citado código atribuye a cada opción, atendiendo a todas sus posibles combinaciones, son las siguientes: el delito de intervención en posición directiva de una organización con el fin de cometer delitos graves está penado con prisión de cuatro a ocho años, el delito de intervención en posición directiva de organizaciones criminales con el fin de cometer otro tipo de infracciones criminales se castiga con prisión de dos a cinco años, el delito de intervención sin posición directiva dentro de una organización criminal cuyo fin sea cometer delitos graves queda penado con prisión de tres a seis años y por último, el delito de intervención sin posición directiva en una organización criminal que tenga el fin de cometer otro tipo de infracciones criminales está penado entre uno y tres años de prisión.

d) Que el fin de la organización sea cometer otro tipo de infracciones criminales.

Además, el legislador ha definido dos tipos cualificados para los comportamientos referidos a organizaciones criminales, previsión que supone un aumento de la pena en su mitad superior, atendiendo a:

- Las características de la organización, tales como el elevado número de miembros, armas o instrumentos peligrosos, y medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte; con el añadido de una hiperagravación en caso de concurrir dos de esas características cualificantes (artículo 570 bis 2).
- Los delitos que programe la organización criminal, en concreto: delitos contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales y delitos contra trata de seres humanos (artículo 570 bis 3).

Ahora bien, también se ha considerado relevante delimitar la noción de grupo criminal como un ente de menor gravedad, definiéndolo en el artículo 570 ter segundo párrafo del mismo texto legal: *“la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos”*. De esta manera, se precisa por un lado su vertiente negativa – un grupo criminal es lo que no es una organización criminal- con base en la ausencia de una o más características definitorias de la organización, y, por otro lado, en la vertiente positiva se implantan dos requisitos comunes con la misma: la finalidad de delinquir y la comisión deliberadamente pactada.

Esta fórmula menos grave está menos castigada²⁵⁶ que, en los delitos de criminalidad organizada, aunque las agravantes se aplican ante los tres mismos supuestos²⁵⁷ puesto que el legislador ha estimado que también incrementan el peligro o la efectividad de sus delitos.

²⁵⁶ Las penas se establecen atendiendo a tres posibilidades:

a) Cuando la finalidad del grupo es cometer determinados delitos: delitos contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos, recogidos en el artículo anterior, con la pena de dos a cuatro años de prisión si se trata de uno o más delitos graves y con la de uno a tres años de prisión si se trata de delitos menos graves.

b) Cuando la finalidad es cometer cualquier otro delito grave se impone una pena de seis meses a dos años de prisión.

c) Cuando se trate de cometer uno o varios delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o cuando se reitere la perpetración de delitos leves la pena será de tres meses a un año de prisión.

²⁵⁷ A modo de recordatorio: a) que el grupo esté formado por un elevado número de personas, b) que disponga de armas o instrumentos peligrosos, y c) que disponga de medios tecnológicos avanzados de

Para concluir este breve análisis descriptivo de los tipos penales es relevante mencionar determinadas medidas que el Código Penal aporta a los jueces o tribunales orientadas a neutralizar los riesgos provenientes del conjunto del colectivo y no sólo a sus miembros.

Recogidos en el artículo 570 quáter²⁵⁸ destacan medidas como el acuerdo de la disolución de la organización o grupo criminal y, en su segundo apartado, la inhabilitación especial para actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la agrupación criminal. También existe una serie de medidas dirigidas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que incluye la propia disolución de la persona jurídica, el cierre o

comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables; pena que se impondrá en su mitad superior.

²⁵⁸ Este artículo del Código Penal contiene cuatro párrafos, que establecen que:

“1. Los jueces o tribunales, en los supuestos previstos en este Capítulo y el siguiente, acordarán la disolución de la organización o grupo y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias de los artículos 33.7 y 129 de este Código.

2. Asimismo se impondrá a los responsables de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, además de las penas en ellos previstas, la de inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con su actuación en el seno de los mismos, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, al número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

En todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artículos estuvieren comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en la regla 4.ª del artículo 8.

3. Las disposiciones de este Capítulo serán aplicables a toda organización o grupo criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, aunque se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero.

4. Los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al responsable de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a través de dichas organizaciones o grupos”.

clausura de locales o la suspensión temporal de actividades²⁵⁹, algunas de ellas aplicables a entes que no encajen en el artículo 31 bis por carecer de personalidad jurídica²⁶⁰.

2.1. b) Componente esencial y bien jurídico protegido: doctrina

La persecución de infracciones colectivas o cometidas en el seno de una agrupación es una cuestión harto conocida para nuestro sistema penal, ahora bien, la tipificación de nuevos delitos de organización responde a una actualización del ordenamiento ante la evolución de la sociedad del siglo XXI²⁶¹. Ello supone una adaptación en materia de seguridad pública al desarrollo criminológico global que ha permitido una gran progresión y una mayor eficacia en

²⁵⁹ Estas consecuencias sobre la personalidad jurídica se recogen al completo en el artículo 33.7 del Código Penal: *“las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen la consideración de graves, son las siguientes:*

a) Multa por cuotas o proporcional.

b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa”.

²⁶⁰ En este caso el artículo aplicable es el 129, que además de permitir al juez acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita; activa los apartados del c) al g) del artículo 33.7, expuesto en el anterior pie de página.

²⁶¹ Como bien indica Cancio (2008, p.5) “ni la situación político-institucional general ni las organizaciones correspondientes en el siglo XXI son idénticas con las del siglo XIX, como es evidente”.

las conductas criminales en grupo, especialmente en fenómenos como el terrorismo y el crimen organizado, obligando a ser un asunto prioritario en las agendas político-criminales de Occidente (Cancio, 2008; De la Corte y Giménez-Salinas, 2010; García Albero, 2016; Ferrandis, 2017). En este sentido, Martínez Garay (2007) destaca la dificultad de traducir en términos técnico-jurídicos un complejo concepto criminológico que abarca multiplicidad de fenómenos y realidades que presentan diversas particularidades²⁶².

Si bien es cierto que el delito de organización criminal se ubica en el Título XXII del Código Penal, que contiene los delitos contra el orden público, no es menos cierto que existen diversas posturas doctrinales derivadas del bien jurídico protegido de este tipo penal.

Primeramente, sin duda parece que este tipo de delitos vulneran un bien jurídico que se puede considerar *colectivo*, como apuntan Sánchez-García de Paz (2008) y Faraldo (2012). Ahora bien, como expone Cancio (2008), existen también diferentes objetos de protección posibles.

Uno de ellos es el defendido por Lamarca Pérez (1998) cuando explica que, puesto que los grupos que emplean medios violentos están ejerciendo las funciones exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el bien jurídico que se protege es el *ejercicio exclusivo de la violencia* por parte del Estado. En cambio, es diferente la idea defendida por García-Pablos de Molina (1977), puesto que una agrupación con suficiente poder sería capaz de limitar la capacidad de actuación del Estado (o incluso su existencia), como ha llegado a ocurrir en regiones dominadas por la mafia en el sur de Italia o por las guerrillas en Latinoamérica; defendiendo así que se está protegiendo el *poder del Estado*. Desde otro punto de vista, en línea con García Albero (2016), la ubicación del delito en el Código Penal puede llevarnos a pensar que el bien jurídico protegido en el mismo es el *orden público*²⁶³, teniendo en cuenta la importancia de su “papel limitador de la esfera de la libertad de los individuos” tal como señala Faraldo (2012, p.232) y dado el considerable perjuicio que pueden causar las organizaciones criminales a través de su actividad coordinada y mantenida en el tiempo. El propio García Albero (2016, p.2157) define materialmente el orden público como “la seguridad y la paz en las manifestaciones de la vida ciudadana”.

²⁶² Se han señalado algunos de los aspectos criminológicos más en el apartado primero del capítulo 1 del presente trabajo.

²⁶³ Concepto muy genérico y omnicomprensivo, objeto de amplio debate conceptual tanto en Derecho penal como en Derecho civil, Derecho internacional privado (como explica Faraldo, 2012), y en especial en Derecho Administrativo (Martín-Retortillo, 1975).

En este contexto, conviene recordar que el Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, reconoce el orden público como bien jurídico abarca la *seguridad jurídica*, la vigencia efectiva del principio de legalidad y los derechos y libertades de los ciudadanos.

Es en este punto donde toma protagonismo el intuitivo pero complejo concepto de *seguridad ciudadana*, que se articula en torno a la perspectiva del orden público como bien jurídico a proteger, combinado con dos preceptos constitucionales de especial relevancia en este ámbito: el artículo 104.1²⁶⁴ relativo a la garantía de la *seguridad ciudadana* como función de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, y el artículo 149.1. 29ª²⁶⁵ sobre la *seguridad pública* como competencia del Estado.

Así pues, en el contexto que nos ocupa, determinadas características estructurales de la organización criminal que facilitan la realización de su plan criminal y le otorgan más probabilidades de éxito, son precisamente las que ponen en riesgo este bien jurídico denominado *seguridad ciudadana*. En términos de Faraldo (2012), se crea una suerte de dinámica de grupo que influye y determina el comportamiento individual, es decir, la especial efectividad de la coordinación a partir de una estructuración estratégica, supone un riesgo superior para la ciudadanía.

Con la idea de concretar ese aumento de riesgo, García-Pablos de Molina (1977) y Sánchez García de Paz (2008) señalan la importancia de la peligrosidad añadida en la suma de voluntades mediante una estructura organizada y compleja, frente a la simple suma de fuerzas individuales más propia de la conspiración. Como apoyo a esta argumentación, la Circular 2/2011 de 2 de junio de la Fiscalía General del Estado²⁶⁶, expresa que “la conspiración es un comportamiento aislado y determinado en el tiempo, una unión de personas que se agota en la comisión de un único²⁶⁷ y concreto delito²⁶⁸”, bien diferente de lo que suponen las organizaciones criminales. La efectiva lesión de los bienes jurídicos objeto de los delitos de la organización queda en manos de una *voluntad colectiva*, como consecuencia de una total

²⁶⁴ Que establece que “las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

²⁶⁵ Que indica que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de “Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.”

²⁶⁶ En su apartado II b, p.13.

²⁶⁷ Aunque Faraldo (2012) añade que se puede considerar de manera puntual para cometer más de un delito.

²⁶⁸ De hecho, la conspiración queda absorbida por la ejecución del delito, a diferencia del castigo contra la estructura estable de los delitos de organización.

pérdida de control individual (Faraldo, 2012): la importancia de la estabilidad de la organización puede superar la puntual colaboración de sus miembros o incluso la concreta dirección de sus jefes. En esta misma Circular 2/2011 se expone que el bien jurídico que se protege en la persecución de organizaciones y grupos criminales es la *seguridad ciudadana*, que, explica, incluye la seguridad y la paz en el normal desenvolvimiento de la ciudadanía.

Llobet (2015, p.430) afirma que el fenómeno de la criminalidad organizada afecta a la *seguridad jurídica, la vigencia efectiva del principio de legalidad y los derechos y las libertades* de los ciudadanos atentando contra la base misma de la democracia porque “multiplica cuantitativamente la potencialidad lesiva de las distintas conductas delictivas llevadas a cabo en su seno y cualitativamente generan procedimientos dirigidos a asegurar la impunidad de sus actividades y la ocultación de los rendimientos de aquellas”. En la misma línea, Cuerda (2016c) añade que tal multiplicación cualitativa y cuantitativa puede alterar también el normal funcionamiento de los mercados y de las instituciones, corromper la naturaleza de los negocios jurídicos y afectar a la gestión y a la capacidad de acción de los órganos del Estado.

Se entiende, por tanto, que el riesgo que supone este fenómeno no se persigue en tanto que se concrete una ejecución grupal de delitos, si no por la conformación de un *elemento estructural* que permite la coordinación efectiva de los integrantes de la organización. En este escenario, una cuestión fundamental radica en el reparto de tareas como base funcional en la consideración de organización criminal. Dentro de la distribución de funciones propia de cualquier agrupación de personas con intención de delinquir, el elemento estructural es un componente esencial que debe implicar un reparto real de responsabilidades y tareas de forma consistente, rígida y mantenida en el tiempo; esto es lo que aporta mayor efectividad a la organización, y consecuentemente, supone un riesgo para la *seguridad ciudadana*. Precisamente la doctrina se sirve de esa especial gravedad y peligrosidad de las organizaciones criminales para explicar la *necesidad de modificar los instrumentos penales y procesales* para hacerles frente, como explica Martínez Garay (2007).

Ahora bien, dadas las limitaciones de la definición del fenómeno, podemos encontrar concreciones al concepto en la jurisprudencia, como se expone a continuación.

2.1. c) Concreciones jurisprudenciales del concepto

Como ya se ha señalado, el delito de *crimen organizado*²⁶⁹ responde a un fenómeno dinámico y camaleónico, difícil de conceptualizar jurídicamente y complejo de aplicar (Martínez Garay, 2007), por ello resulta de interés exponer algunas aportaciones relevantes de la jurisprudencia.

Como bien señala el Tribunal Supremo²⁷⁰, y en consonancia con la doctrina señalada, se trata de un delito *“donde hay una estructura más o menos compleja, una consistencia o permanencia en el tiempo (...) y el fin de la organización ha de ser la comisión de delitos como producto de una “voluntad colectiva”, superior y diferente a la voluntad individual de sus miembros”*. Esta voluntad colectiva se basa en dos requisitos: el carácter estable y la coordinación en las tareas, por lo que supone un grado mayor de organización al considerado como *grupo criminal*, donde pueden no concurrir alguno o ambos requisitos.

Este mismo Tribunal²⁷¹ concreta la idea de grupo criminal destacando el elemento diferencial respecto de la organización: *“puede permanecer estable cierto tiempo en función del tipo de infracción criminal a que oriente su actividad delictiva para la comisión de uno o varios delitos o la comisión reiterada de faltas, pero carece de una estructuración organizativa perfectamente definida”*. La importancia de la definición radica en el nivel de peligro a causa de la efectividad más limitada que se considera que posee el grupo frente a la organización.

Es precisamente esta estabilidad orientada a la permanencia en el tiempo en forma de estructura, la que permite distinguir este concepto de la simple coautoría recogida en el artículo 28²⁷² del Código Penal. Tal como señala la STS de 6 de julio de 2005: *“la pertenencia a una*

²⁶⁹ Contemplado en el artículo 570 bis del Código Penal: *“quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos”*. *“A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.”*

²⁷⁰ STS de 16 de abril de 2014.

²⁷¹ STS de 5 de diciembre de 2013.

²⁷² Este artículo establece que *“son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores: a) Los que*

organización no puede confundirse con la situación de coautoría o coparticipación y la existencia de personas coordinadas sin más no implica la pertenencia a la misma". Y añade "la organización, a su vez, positivamente, puede abarcar todos los supuestos en los que dos o más personas programan un proyecto o propósito para desarrollar una idea criminal, sin que sea precisa una ordenación perfecta, pero deben subrayarse las notas de estructura jerárquica y cierta permanencia"²⁷³.

Resultan destacables las cuatro notas características que expone la Fiscalía General del Estado como propias del fenómeno de la criminalidad organizada (Circ 2/2011):

a) "Una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad, que se concreta en tres o más". Se deben por tanto poner de acuerdo al menos tres personas, aunque el tipo penal diferencia distintas clases de autores atendiendo a la responsabilidad asumida en el seno de la organización, como se ha definido en la descripción del tipo.

b) "La existencia de una estructura más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista, en la que por lo general deben poder reconocerse relaciones de jerarquía y disciplina", lo que se debe entender como el sometimiento de sus integrantes a las decisiones grupales tomadas por otros miembros que ejercen una función jerárquicamente superior o funcionalmente diferente.

c) "Una consistencia o permanencia en el tiempo", por lo que, lejos de la transitoriedad propia de otros fenómenos, el acuerdo asociativo debe ser duradero y estable.

d) "El fin de la organización ha de ser la comisión de delitos como producto de una *voluntad colectiva*, superior y diferente a la voluntad individual de sus miembros lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar". Así lo indica la propia Fiscalía como señala remitiéndose a las SSTS de 25 de noviembre de 2008 y de 20 de enero de 2009.

En conclusión, una agrupación que en esencia contenga un elemento estructural que permita una distribución efectiva de tareas y una estabilidad temporal, es condición necesaria²⁷⁴ para suponer un peligro suficiente que el Derecho penal deba reprimir de forma autónoma a

inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado."

²⁷³ También en SSTS de 5 de diciembre de 1998, 12 de febrero de 2002 y 28 de febrero de 2003, entre otras.

²⁷⁴ Siempre que se cumplan los requisitos del tipo penal.

través de un delito específico, sin perjuicio de los delitos que se puedan cometer a través de actividades ilegales en el seno de una organización criminal, cuestión que se analiza a continuación.

2.2. Delitos en el marco de una organización criminal

En este punto, es preciso matizar que se contemplan medidas represivas específicas cuando el delito concreto se ha desarrollado en el marco de una organización criminal. Así pues, España cuenta, por un lado, con preceptos legales distintos para la existencia y las actividades características del crimen organizado, y por otro, considera como agravante la pertenencia a una organización o grupo criminal en delitos como, por ejemplo, el tráfico de drogas y sus precursores²⁷⁵; los delitos contra la propiedad intelectual e industrial²⁷⁶ como son la estafa informática, *phishing*²⁷⁷, y las estafas con tarjetas bancarias²⁷⁸; la pornografía infantil²⁷⁹; el blanqueo de capitales²⁸⁰; el tráfico ilegal de personas²⁸¹; y, el fraude fiscal o a la Seguridad Social²⁸².

Esta doble tipificación presenta en la práctica problemas de solapamiento que han de solucionarse como concurso de leyes, habitualmente por el criterio de alternatividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 570 quáter 2, que establece que *“en todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artículos estuvieren comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en la regla 4.ª del artículo 8”*; tal regla señala que el precepto penal más grave excluye los que castiguen el hecho con pena menor, para los casos en los que no sean aplicables las tres primeras reglas de ese artículo 8.

²⁷⁵ Se encuentra recogida en los artículos 369.1. 2º y 3º, 370.2º y 371.2 del Código Penal.

²⁷⁶ Tipificados en los artículos 270 y 276c del Código Penal.

²⁷⁷ El *phishing* hace referencia a una forma de ingeniería social en la cual un atacante (*phisher*) intenta conseguir de forma fraudulenta credenciales confidenciales o sensibles del usuario, imitando comunicaciones electrónicas desde una organización confiable o pública, de forma automática (Denning y Baugh, 2000).

²⁷⁸ En el artículo 248 del Código Penal.

²⁷⁹ En los artículos 183 y 189 del Código Penal, o CAM por sus siglas en inglés, Child Abuse Material, tal como Europol denomina a este tipo de material.

²⁸⁰ Artículos 301 a 304 del Código Penal.

²⁸¹ Artículo 318 bis del Código Penal.

²⁸² Artículo 305.1 del Código Penal.

Los delitos concretos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal²⁸³ (en lo sucesivo, LECrim) en su artículo 282 bis 4 vincula con posibles propósitos de las organizaciones criminales son los siguientes:

- a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos²⁸⁴.
- b) Delito de secuestro de personas²⁸⁵.
- c) Delito de trata de seres humanos²⁸⁶.
- d) Delitos relativos a la prostitución²⁸⁷.
- e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico²⁸⁸, entre los que se encuentra el robo con violencia e intimidación, la extorsión y la estafa.
- f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial²⁸⁹.
- g) Delitos contra los derechos de los trabajadores²⁹⁰.
- h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros²⁹¹.
- i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada²⁹².
- j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo²⁹³.
- k) Delitos contra la salud pública²⁹⁴.
- l) Delitos de falsificación de moneda²⁹⁵ y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje²⁹⁶.
- m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos²⁹⁷.
- n) Delitos de terrorismo previstos en los artículos²⁹⁸.
- o) Delitos contra el patrimonio histórico²⁹⁹.

²⁸³ Aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

²⁸⁴ Previstos en el artículo 156 bis del Código Penal.

²⁸⁵ Previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal.

²⁸⁶ Previsto en el artículo 177 bis del Código Penal.

²⁸⁷ Previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal.

²⁸⁸ Previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal.

²⁸⁹ Previstos en los artículos 270 a 277 del Código Penal.

²⁹⁰ Previstos en los artículos 312 y 313 del Código Penal.

²⁹¹ Previstos en el artículo 318 bis del Código Penal.

²⁹² Previstos en los artículos 332 y 334 del Código Penal.

²⁹³ Previsto en el artículo 345 del Código Penal.

²⁹⁴ Previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal.

²⁹⁵ Previstos en el artículo 386 del Código Penal.

²⁹⁶ Previsto en el artículo 399 bis del Código Penal.

²⁹⁷ Previsto en los artículos 566 a 568 del Código Penal.

²⁹⁸ Artículos 572 a 578 del Código Penal.

²⁹⁹ Previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

Todos estos delitos son aplicables en materia de procesos extorsivos, puesto que pueden formar parte de la actividad principal de una organización que refuerce sus intereses económicos mediante extorsiones laborales, monopolísticas o de protección.

También la Fiscalía General del Estado, en su Circular 2/2011, explicita la vinculación entre crimen organizado y extorsión, pues expone que: “junto a las actividades que constituyen el centro de la delincuencia organizada en nuestro país como son el tráfico de drogas, la explotación sexual a través de tramas de prostitución y la explotación laboral unida al fenómeno de la inmigración ilegal, otros delitos que habitualmente se encuentran vinculados al fenómeno de criminalidad organizada son la trata de seres humanos, los secuestros y extorsiones (...) las estafas y la corrupción”.

Ahora bien, destacan ciertos delitos vinculados legalmente a la criminalidad organizada que son relevantes para el presente estudio a partir del análisis jurídico de la casuística presentada al comienzo de este capítulo, puesto que pueden formar parte de las acciones propias de los procesos extorsivos. Estos delitos serían los siguientes:

- El delito de secuestro: este delito puede ser un instrumento de gran utilidad dentro del proceso extorsivo para forzar los pagos a la organización.
- Los delitos contra los derechos de los trabajadores: estos delitos estarían vinculados a la extorsión laboral, donde una organización puede distorsionar la contratación laboral de un negocio en busca de sus propios intereses.
- Los delitos contra el patrimonio: una vez que la organización criminal tiene cierto control, su reputación le puede permitir la comisión de delitos contra el patrimonio, especialmente a través de intimidación dirigida contra los negocios de las víctimas de procesos extorsivos.

Además, se debe tener en cuenta que una organización puede dedicarse a cualquiera de las actividades recogidas en el 282 bis 4 Lecrim, y que, como resultado de determinados conflictos, también se dedique a extorsionar. Tal puede ser el caso de los siguientes claros ejemplos:

- a) Una organización criminal puede dedicarse al tráfico de drogas en determinado territorio y, ante situaciones de impago, inicie procesos de recaudación de deudas con unos intereses leoninos que, finalmente, mediante el uso de la violencia terminen convirtiéndose en procesos extorsivos exigiendo cada vez más pagos.

b) Una organización criminal puede ofrecer servicios ilegales vinculados a delitos de prostitución o de trata de seres humanos con una doble vía extorsiva: por un lado, se pueden aprovechar de la precaria situación de personas que desean venir a España en busca de nuevas oportunidades, ofreciéndoles ayuda para el viaje, el alojamiento e incluso el trabajo a cambio de un compromiso³⁰⁰ que finalmente se transforma en un proceso extorsivo de solicitud de pagos vinculado al negocio donde trabajan³⁰¹. Por otro lado, estos servicios que prestan las organizaciones criminales, en el caso de prostíbulos y locales de juego, permiten a los clientes³⁰² asumir deudas e incluso adquirir préstamos para continuar el consumo de tales servicios y, ante el impago o la insolvencia de esos clientes, se puede iniciar la recaudación de deudas mediante el ejercicio de violencia y aplicando unos intereses abusivos en forma de proceso extorsivo.

Si bien todos los delitos contenidos en el artículo 282 bis 4 de la Lecrim son susceptibles de enmarcarse en el ámbito de la delincuencia organizada dedicada a extorsionar, lo cierto es que esta enumeración es incompleta. En este punto es reseñable nuevamente la Circular de la Fiscalía General de Estado 2/2011, que señala que “en el campo criminológico se ha puesto de manifiesto la complejidad del concepto de criminalidad organizada, ya que bajo dicha denominación se integran una multiplicidad de fenómenos y realidades muy diferentes”.

Por tanto, la situación legal actual del delito de extorsión es la siguiente: se trata de una de las actividades a las que se puede dedicar una organización o grupo criminal reconocidas en el artículo 282 bis 4 de la Lecrim, pero no es un supuesto donde quepa la aplicación del agravante de pertenencia a una organización o grupo criminal. Ahora bien, parece que numerosos procesos extorsivos pueden contener otros delitos como robo con violencia e intimidación, estafa o delitos contra los trabajadores, que se encontrarían en la misma situación legal. En cambio, como ha quedado de manifiesto en las diversas tipologías y formas de actuación de organizaciones criminales dedicadas a extorsionar empresarios, existen determinadas conductas que no se contemplan dentro de la aplicabilidad del agravante ni de los propósitos de las organizaciones criminales: esencialmente, las amenazas condicionales, coacciones, las detenciones ilegales, el acoso y la realización arbitraria del propio derecho. Esto significa que

³⁰⁰ Puede ser un trabajo, un préstamo sin intereses, un negocio en buenas condiciones o un precio falso que luego se incrementa injustificadamente.

³⁰¹ Puede ser un bar donde ejercen la prostitución, una tienda donde trabajan más horas de las legalmente permitidas, etc.

³⁰² Clientes que en numerosas ocasiones son dueños de pequeños locales que se utilizan como una suerte de aval informal.

muchos de los delitos contenidos en los procesos extorsivos no son actualmente considerados por el legislador de mayor gravedad cuando se cometen como parte de las actividades delictivas en el marco de una organización criminal, como ocurre con otros delitos. Todo ello sin perjuicio de que pudiera aplicarse para tales casos, además del delito concreto, el tipo autónomo de organización o grupo criminal.

Dada la importancia de la figura de la extorsión en el presente trabajo, resulta de interés la exposición de un análisis complementario de una figura criminológica y legal donde se realizan procesos extorsivos contra empresas en el seno de una organización que aporta referencias empíricas en España: el denominado “impuesto revolucionario” de la organización terrorista E.T.A. Se trata de una problemática de nuestra historia jurídico-criminológica que puede enriquecer el estudio legal que se presenta, siempre y cuando se definan sucintamente algunas cuestiones de diferenciación entre estos delitos de organización.

Para ello se expone a continuación un breve comentario en relación con los delitos de organización sobre el origen de estos, mediante la remisión al delito de asociación ilícita y su diferenciación en materia de bien jurídico protegido, así como la puntualización de determinadas características comunes y elementos diferenciadores entre los delitos de organización criminal y de organización terrorista.

2.2.a) El contexto de los delitos de organización

Al analizar la tipificación del actual delito de organización criminal se debe tener en cuenta que es el resultado de largos procesos de adaptación e incluso intensificación³⁰³ del Derecho penal en torno a este fenómeno delictivo que comienza con el delito de asociación ilícita.

Este delito está recogido en el artículo 515.1. del Código Penal: *“son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión. 2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. 3.º Las organizaciones de carácter paramilitar. 4.º Las que fomenten, promuevan*

³⁰³ Es una tendencia del Derecho penal hacia una “expansión cuantitativa y cualitativa”, constatada por Silva (2001) y que también afecta específicamente al ámbito de la criminalidad organizada; así lo defiende Sánchez García de la Paz (2005).

o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad.”

Aunque predecesor, es un tipo penal muy diferente de los delitos de organización y grupo criminal, cuestión que también se refleja en su ubicación, pues este artículo se encuentra recogido en el Capítulo IV De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas del Título XXI, dentro de los Delitos contra la Constitución. Pero este texto legal no describe sus elementos típicos, si no que ha sido la jurisprudencia quien ha señalado los cuatro siguientes: “a) pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad; b) existencia de organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista; c) consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio; d) el fin de la asociación -en el caso del artículo 515.1 inciso primero- ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar” (SSTS de 13 de abril de 2010, de 22 de mayo de 2009, de 19 de enero de 2007 y así recogido también en la FGE Circ 2/2011).

Como se aprecia en su descripción, es evidente que ambos tipos penales, tanto la organización criminal como la asociación ilícita, comparten la importancia del “elemento colectivo”³⁰⁴, núcleo conceptual de agrupaciones muy diversas. Pero en ninguno de los dos tipos se exige que el origen o nacimiento de la agrupación, ya sea asociación ilícita u organización criminal, esté directamente vinculado a la orientación delictiva de sus objetivos, es decir, este propósito fuera de la legalidad puede ser fruto de una decisión posterior a su creación. Así lo defiende Faraldo (2012), quien recoge tres exigencias derivadas de la doctrina y la jurisprudencia sobre ambos tipos:

a) Que el objetivo de perpetrar delitos sea resultado de la voluntad colectiva, no de algunos miembros, aunque éstos fueran de alto rango.

b) Los ilícitos deben ser pretendidos o cometidos en nombre y representación del ente colectivo y en su beneficio.

³⁰⁴ Argumento que permite a García-Pablos de Molina (1983b) y Cancio (2008) asumir que en el lenguaje jurídico-dogmático del Derecho penal español “asociación” es “organización”.

c) Que las actividades ilegales deben ser definitorias del grupo, y no meramente secundarias o eventuales.

Ahora bien, el delito de asociación ilícita considera que se hace un uso abusivo de uno de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española de 1978 (Muñoz Conde, 2013; Llobet, 2015) en relación con el derecho de asociación del artículo 22 y desarrollado por la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Además, se persiguen supuestos específicos ajustados únicamente al delito de asociación ilícita del artículo 515 del Código Penal: aquellas que aun teniendo por objeto un fin lícito, emplean medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución, organizaciones de carácter paramilitar o las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia, tal como señala el tipo.

Por tanto, se puede considerar que el tipo de asociación ilícita no persigue los fenómenos vinculados a la delincuencia organizada de forma efectiva ni adecuada (García Rivas y Lamarca, 2010), siendo necesaria una regulación autónoma para su correcta represión (Llobet, 2015). Así, García Del Blanco (2017b) mantiene que el bien jurídico protegido en el delito de asociación ilícita es el derecho de asociación, mientras que con los delitos de organización y grupo criminal se protege el orden público. Pero se debe tener en cuenta que existen otros delitos de organización, como son los delitos de terrorismo, que presentan enormes diferencias y que, sin embargo, que también comparten importantes características; algunas de ellas conviene recordarlas sucintamente.

2.2. b) Delitos de organización en la actualidad: organizaciones terroristas y criminales

Ya expuestos en el primer capítulo las diferencias criminológicas entre ambos fenómenos, cabe recordar brevemente que en el terrorismo los objetivos se orientan a un cambio institucional, generalmente de corte político, a través de medios de intimidación masiva que generen impacto social, mientras que en la delincuencia organizada el ánimo de lucro es la meta esencial mediante la ocultación. Ahora bien, la diferencia jurídica esencial en su tipificación radica en la materia del bien jurídico que protegen: se considera que las organizaciones terroristas atentan contra el orden constitucional y la paz pública³⁰⁵. También destaca su distinta

³⁰⁵ García Del Blanco (2017b) y Cancio (2017d) amplían los debates en torno los bienes jurídicos expuestos, tanto de las organizaciones terroristas como criminales; en ocasiones el bien jurídico protegido por

ubicación en el Código Penal: estos delitos tienen un Capítulo en exclusiva denominado *De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo*. Aunque este asunto tampoco está exento de polémica, pues, por ejemplo, Cancio (2010) argumenta que los delitos de organización se caracterizan por poner en cuestión el monopolio de la violencia del Estado y en especial el terrorismo, pues pretende “subvertir el orden constitucional” como describe el precepto que lo recoge, por lo que su ubicación dentro del Código debe situarse entre los delitos contra la Constitución.

En cuanto a las similitudes a nivel jurídico, además de la evidente noción nuclear de una estructura en el colectivo en ambas tipologías de organización (Cancio, 2018), llama la atención la “estrecha relación” de ambos tipos penales, (Muñoz Conde, 2017, p.776), cuyo análisis se expone a continuación.

Previamente al delito de organización criminal, el legislador español reguló los delitos vinculados al terrorismo en torno a los tres elementos definitorios de las organizaciones terroristas que Cancio (2011) expone como resultado de lo establecido por la jurisprudencia española: a) la proyección política, b) el ejercicio de intimidación masiva y c) una estructura emergente, permanente y diversificada.

En un momento posterior, el legislador, cambiando la intimidación masiva por la actividad delictiva y eliminando “el elemento de la proyección estratégica de combate al sistema político establecido” crea la figura de organización criminal. De esta manera, lo que diferencia finalmente en términos de tipificación los delitos de organización criminal y los de terrorismo, es un único añadido que se recoge en el artículo 571³⁰⁶: al establecer que además de reunir las características propias de las organizaciones criminales, tengan por finalidad la comisión de delitos de terrorismo³⁰⁷. Esta finalidad se configura en el artículo 573 a través de cuatro modalidades:

determinadas organizaciones criminales puede resultar “difícil de fundamentar” (García Del Blanco, 2017b, p.1916).

³⁰⁶ Concretamente el citado artículo del Código Penal señala que deberán reunir “*las características respectivamente establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis (a los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos) y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter (a los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos).*”

³⁰⁷ Así lo expone de forma más profunda y precisa Cancio (2011).

a) Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

b) Alterar gravemente la paz pública.

c) Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

d) Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Estas finalidades permiten articular una definición penal de terrorismo, como explica Muñoz Conde (2017), inexistente antes de la reforma del Código en 2015³⁰⁸, siempre y cuando una de ellas sea el propósito principal de los delitos contenidos en el artículo 573.1 del texto penal. Dichas finalidades son: *cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías.*

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que las organizaciones criminales y las terroristas pueden realizar actividades instrumentales muy similares para la consecución de sus propios objetivos³⁰⁹, lo cual puede dar lugar a una enorme similitud en los delitos que cometen de forma habitual, más allá de su formato organizativo³¹⁰. Entre otros ejemplos, delitos como

³⁰⁸ Mediante la L.O. 1/2015, de 30 de marzo.

³⁰⁹ Es más, de forma puntual, pueden compartir objetivos cruzados, tal como se explica en el capítulo primero de la presente tesis: en un momento dado una organización criminal puede tener un objetivo de tipo institucional como paso hacia una forma de corrupción para lograr ventajas en la otorgación, por ejemplo, de licencias de apertura de locales o de proyectos urbanísticos que sin duda están siempre orientados al beneficio económico final; así como un grupo terrorista puede tratar de financiarse a través del tráfico de drogas o de armas para poder invertir en sus necesidades logísticas o propagandísticas, siempre con el fin último de lograr un cambio institucional.

³¹⁰ En este contexto, resulta interesante lo señalado por Martínez Garay y Mira (2010) respecto de la Reforma Penal de 2010 (LO 5/2010, de 22 de junio). Curiosamente esta modificación introdujo importantes cambios como la responsabilidad penal de personas jurídicas, la tipificación autónoma de los delitos de pertenencia a organizaciones y grupos criminales y la modificación de los delitos de pertenencia a organizaciones y grupos terroristas; pero de forma paradójica, hacía inexigible la responsabilidad penal a organizaciones terroristas con personalidad jurídica y, consecuentemente, medidas específicas a personas jurídicas como la disolución o la clausura de establecimientos no resultaban aplicables al ámbito de la lucha terrorista. En definitiva, esta reforma permitía exigir responsabilidad penal a las sociedades,

las amenazas, las lesiones o los daños a propiedades pueden resultar comunes como parte de las actividades cotidianas de ambos. Otra clara muestra de ello es el fenómeno concreto de la extorsión: organizaciones criminales y terroristas implementan procesos extorsivos como fuente de financiación para el mantenimiento del propio grupo (De la Corte, 2015).

Específicamente en España, como ya se ha señalado, el denominado “impuesto revolucionario” por parte de la organización terrorista E.T.A. que guarda ciertas características comunes con el objeto de estudio de la presente tesis. En esencia, se trata de una solicitud de pago de un grupo coordinado que tiene control en un territorio, por lo que encaja en la modalidad de extorsión por protección, aunque actuando en un ámbito terrorista. Resulta, por tanto, muy importante estudiar este fenómeno concreto.

2.3. La extorsión en los delitos de organización: el “impuesto revolucionario” por parte de E.T.A.

La historia de España lamentablemente nos permite contar con un referente legal de prácticas extorsivas como es el conocido *impuesto revolucionario* del grupo terrorista E.T.A.³¹¹

Aclaradas en apartados anteriores las diferencias y similitudes entre los fenómenos de terrorismo y crimen organizado, resulta de interés el estudio jurídico de las prácticas extorsivas realizadas por parte de E.T.A. Estas se centran en un conjunto de autores que extorsiona a víctimas propietarias de empresas³¹², quienes realizan una actividad económica de forma

empresas o asociaciones de apariencia lícita instrumentalizadas por los miembros de las organizaciones mafiosas o criminales para la comisión de delitos, pero no cuando tales organizaciones eran terroristas.

³¹¹ Aunque no es el único grupo terrorista que emplea procesos extorsivos a empresas, por citar solo un ejemplo, De la Corte (2013, p.158) señala a grupos como TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan, o los talibanes pakistaníes) y la Red Haqqani indicando que: “la agresión y amenaza con propósitos extorsivos a comerciantes y profesionales de diverso nivel se ha convertido en una práctica generalizada entre los grupos terroristas establecidos en diferentes provincias y áreas de Pakistán: desde las regiones tribales, limítrofes con Afganistán, hasta las provincias más desarrolladas del Punjab y Sindh. Las víctimas habituales de dicha extorsión son comerciantes y profesionales de diversa índole (...) Precisamente, algunas informaciones indican que grupos radicales pakistaníes han obtenido fondos en España practicando la extorsión a compatriotas afincados en nuestro país”.

³¹² Lo que Sáez de la Fuente y Prieto (2017) denominan *extorsión empresarial*.

sostenida en el tiempo, y cuyo patrimonio resulta perjudicado (Martínez González, 1991), aspecto que comparte claramente con el fenómeno que se analiza en este trabajo.

Estas prácticas se describen así por el Tribunal Supremo³¹³: “la organización terrorista E.T.A., con la finalidad de obtener fondos para la ejecución de sus criminales propósitos, el cambio del orden constitucional mediante la ejecución de atentados contra las personas, propiedades e infraestructuras, entre otros medios, recurre a una campaña de extorsión a empresarios solicitándose el pago de dinero, pretensión de cantidades a la que se compele a los empresarios bajo la amenaza de sufrir acciones armadas de la organización, bien en sus propiedades bien en sus personas”, llegando a denominar tales conductas como extorsión mafiosa.

Las extorsiones específicamente a empresarios constituyeron una actividad explotadora sistemática para la organización terrorista E.T.A. durante décadas y supusieron una de sus más importantes fuentes de financiación (Sáez de la Fuente et al., 2017; Buesa, 2006; De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2004). Se estima que aportaron 5,15 millones de euros entre 1993 y 2001³¹⁴, alcanzando las 10.000 víctimas en 2010³¹⁵.

Se trata, por tanto, de prácticas predatorias orientadas a explotar económicamente un territorio controlado a base de violencia e intimidación durante décadas; pero a pesar de los datos, y como ocurre en el ámbito de la delincuencia organizada, parece ser que su investigación científica y especialmente, desde una perspectiva centrada en las víctimas, ha sido en realidad escasa (Martín-Peña, 2013), llegando a denominarse la *laguna oculta en la investigación sobre la organización terrorista* (Sáez de la Fuente et al., 2017).

Las características de las empresas victimizadas respondían a un perfil de negocio pequeño en localidades de mayor control y presión del entorno radical, donde abundaban prácticas de *extorsión mafiosa*³¹⁶, dirigidas a la recaudación el impuesto revolucionario a partir del uso de la intimidación, como se expone a continuación.

³¹³ STS de 26 de julio de 2012.

³¹⁴ Tal como expone Buesa (2006), matizando que casi el 60 por 100 corresponden al pago de rescates por las personas secuestradas y el resto a las cantidades exigidas bajo coacción, ambas consideradas formas de extorsión a empresarios.

³¹⁵ Según Sáez de la Fuente et al. (2017, p.8).

³¹⁶ Así lo describe Sáez de la Fuente et al. (2017).

La intimidación y el silencio social

De manera similar a lo que ocurre en el ámbito de la delincuencia organizada, los mecanismos de intimidación terrorista pueden englobar, además de amenazas en forma de verbalizaciones, auténticas coacciones que incluyan violencia u otras figuras penales que afecten no sólo a la libertad si no a la integridad física de las víctimas. En este punto, Sáez de la Fuente et al. (2017) explican que, a pesar de los primeros intentos, en realidad la extorsión de E.T.A. comenzó a funcionar de forma exitosa cuando mató a Ángel Berazadi y a Javier de Ybarra, porque estos dos empresarios no cedieron a las pretensiones. En este escenario, se puede apreciar un importante cambio social (Sáez de la Fuente y Prieto, 2017), a partir de entonces las amenazas de muerte resultaron creíbles para las demás víctimas.

El proceso extorsivo en cuestión, tal como relata la STS de 1 de diciembre de 2015, comenzaba por el envío de una primera carta con el siguiente contenido:

“Por la presente nos dirigimos a vd. Para notificarle la decisión de la Organización Euskadi Ta Askatasuna ETA de exigirle el pago del Impuesto Revolucionario en concepto de cotización obligatoria para el desarrollo de la lucha del Movimiento de Liberación Nacional Vasco que nuestra Organización lidera.

A la luz de las informaciones que sobre su situación económica obran en nuestro poder, la cantidad fijada es de X. El pago deberá hacerlo en efectivo.

Habrà para ello de utilizar los medios Vascos habituales (o círculos abertzales habituales) a fin de ponerse en contacto con nuestra Organización.

Queda seriamente advertido de que, en caso de que Vd. se negara pagar la cantidad estipulada, nuestra Organización se verá obligada tomar las medidas de represalia oportunas contra sus bienes y su persona. Sobra decirle que cualquier intento por su parte de ponerse en contacto con la Policía o Ertzantza le acarrearía consecuencias de carácter irreparable.

Euskadi Ta Askatasuna. E.T.A.”

La sentencia continúa explicando “si el profesional o empresario afectado no entraba en contacto con ETA, se le enviaba una segunda, una tercera o excepcionalmente hasta una cuarta misiva en la que ya le indicaban que ante el incumplimiento de la obligación de pago su persona y sus bienes pasaban a convertirse en objetivos de la organización, y que la única forma de

desactivarlo era proceder al pago de la cantidad exigida con un recargo. Cuando la cantidad se pagaba, ETA hacia llegar se entregaba al pagador un documento a modo de recibo.”

Aunque el contenido intimidatorio de la carta es explícito, anunciando “medidas de represalia” y “consecuencias de carácter irreparable”, la efectividad de tal intimidación venía dada por las acciones de intimidación y violencia, especialmente los atentados, que trataban de demostrar a las víctimas de extorsión que si no cooperaban con la organización sufrirían las mismas consecuencias que otras víctimas anteriores (Martín-Peña, 2013; De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2004). Además, los secuestros a empresarios constituían una doble vía de financiación: por un lado, obtenían dinero a cambio de su liberación³¹⁷; por otro lado, reforzaban los mensajes intimidatorios a otros empresarios víctimas de extorsión.

Esto creó un clima de miedo que se tradujo en *silencio social*: a raíz de esta situación de violencia muchas personas tuvieron fuertes reticencias para hacer pública su oposición a E.T.A., afectadas por el miedo al aislamiento ante el rechazo (Martín-Peña, 2013). Una consecuencia similar ante el miedo a las represalias frente a una organización con poder en un territorio concreto es la *omertá* italiana³¹⁸, el silencio al que deben sumarse los miembros y colaboradores (incluso forzados, esto es, víctimas) y que genera un entorno de inseguridad y limita el rechazo de las víctimas de extorsión. En el caso de la organización terrorista E.T.A., Sáez de la Fuente et al. (2017, p.25) afirman que: “buena parte de la sociedad vasca mantuvo una actitud indiferente y públicamente distante hacia las víctimas del terrorismo en general y de la extorsión en particular”.

En este escenario, numerosos sujetos pasivos del delito de extorsión se encontraron ante una *eventual responsabilidad* derivada del abono de impuesto revolucionario. Esta problemática puede darse de forma paralela en el ámbito de la delincuencia organizada, por lo que resulta relevante hacer un breve análisis, que se expone a continuación.

La confusión entre víctima y colaborador de la organización

Lo cierto es que la conducta consistente en aportar dinero a una organización terrorista o criminal, como respuesta ante los procesos extorsivos, puede ser analizada desde diversos puntos de voluntariedad³¹⁹, según lo explicado por Savona y Berlusconi (2015). En un extremo

³¹⁷ Como pone de manifiesto, entre otras, la STS 3 de julio de 2012.

³¹⁸ De este concepto se habla también en el primer apartado del capítulo séptimo de la presente tesis, aunque para información más amplia se recomienda la lectura de De la Corte y Giménez-Salinas (2010).

³¹⁹ Como ya se ha expuesto en el apartado 1.3.b. del primer capítulo de la presente tesis.

nos encontramos ante la victimización, esto es cuando la víctima no desea la interacción con la organización extorsiva; mientras que en el extremo opuesto tenemos a los integrantes de la organización que desvían pagos de la economía legal, utilizando diversos procedimientos para financiar a su grupo. Ahora bien, en los niveles intermedios de voluntariedad nos podemos encontrar con la colaboración, que en las organizaciones criminales suele producirse como resultado de un ofrecimiento de compensación financiera, mientras que en la organización terrorista se daría como forma de patriotismo al apoyar los objetivos de un cambio institucional concreto, en el caso de E.T.A., la denominada *libertad de Euskal Herria*³²⁰.

En este supuesto, por tanto, la conducta propia de una víctima del delito de extorsión se puede confundir con la de un autor del delito de colaboración con organización terrorista³²¹.

Un claro caso de la confusión entre víctima y colaborador de la organización terrorista E.T.A. como resultado del pago en las extorsiones a empresarios es el recogido en la STS de 26 de julio de 2012, sentencia que absuelve a dos empresarias de un delito de colaboración con organización terrorista³²² concurriendo la circunstancia eximente de miedo insuperable. Los hechos probados relatan que “en el marco de una campaña de extorsión, las acusadas recibieron en fecha no determinada del año 2003 una carta de la organización terrorista ETA en la cual se les reclamaba el pago de 120.000 euros. Las procesadas, no pusieron en conocimiento de las

³²⁰ Objetivo que también buscan expresamente mediante la financiación a través de extorsiones a empresarios, como pondrá de manifiesto en los siguientes párrafos la STS de 26 de julio de 2012.

³²¹ Actualmente recogido en el artículo 177 del Código Penal, cuyo primer apartado dice: “*será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización, grupo o elemento terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo. En particular son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, la construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de alojamientos o depósitos, la ocultación, acogimiento o traslado de personas, la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, la prestación de servicios tecnológicos, y cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda a las actividades de las organizaciones o grupos terroristas, grupos o personas a que se refiere el párrafo anterior.*”

Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas se impondrá la pena prevista en este apartado en su mitad superior. Si se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos.”

³²² Cabe recordar que el delito de colaboración con organización terrorista vigente en ese momento hace alusión a las siguientes conductas: “*que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o finalidades de una banda armada organización o grupo terrorista*”. Además, entre los actos de colaboración se incluye “*la cooperación, ayuda o mediación económica*”.

autoridades estos hechos, y contactaron con la organización terrorista para negociar el pago de la aportación económica enviando ETA una segunda carta en la que les solicitaba el pago de una cantidad inferior, habiendo entregado voluntariamente a la organización terrorista 6.000 €, aportación que la ETA agradeció a las acusadas, expresando el siguiente tenor: "Mediante esta carta, además de expresarles que hemos recibido su aportación de 6.000 euros, quisiéramos agradecerles también por colaborar a favor de la libertad de Euskal Herria. Considerando que conocen el camino y tienen posibilidades para contactar con la organización, sepan que tienen las puertas abiertas para tratar tanto sobre la ayuda económica, como sobre cualquier otro tema relacionado con la lucha de liberación de Euskal Herria"". Añade la sentencia que el padre de las acusadas "en el año 1980 interrumpió un pleno del Ayuntamiento, y denunció públicamente que ETA le había exigido el pago del impuesto revolucionario y que se negaba pagarlo, generando en él mismo, y en toda su familia una grave situación de angustia y desasosiego".

Pues bien, cabe mencionar una serie de puntos significativos extraídos de la argumentación jurídica de la citada sentencia.

- a) Para colaborar con la organización no es necesaria afinidad ideológica con el grupo terrorista.

El tipo subjetivo requiere dolo, que consiste en conocer y querer la acción; pero "*basta (...) la conciencia de que el acto o la conducta de que se trate sirva o favorezca a la banda u organización terrorista, y la voluntad de llevarla a cabo, sin necesidad de ningún otro requisito*", recordando la STS de 21 de junio de 2005. Así, se puede colaborar con una organización terrorista por intereses económicos, como en el supuesto de la venta de armamento, o por razones de afecto a determinados integrantes, recordando la relación amorosa como móvil de la colaboración en la STS de 13 de julio de 2006. Por tanto, sólo son necesarios los elementos subjetivos del injusto propios de toda conducta dolosa: conocimiento y voluntad.

- b) Existen importantes problemas vinculados a la presunción de inocencia y a la prueba de cargo.

Según la sentencia es discutible que exista prueba de cargo suficiente que acredite el abono de 6.000 euros³²³ (o más bien de su autoría) o de la voluntad del pago ni intención

³²³ La sentencia argumenta que no se puede *presumir la veracidad* de los documentos encontrados en el registro de una vivienda de dirigentes de la organización donde consta una carta de agradecimiento por el pago dirigida a las condenadas.

de colaborar por parte de las condenadas³²⁴ a partir de la identificación de una carta de agradecimiento por el pago de la extorsión.

- c) El miedo insuperable puede limitar o incluso exonerar de responsabilidad a las víctimas. Si bien la conducta que cabe esperar de un ciudadano extorsionado es que denuncie los hechos y se niegue a pagar, no es reprochable penalmente a quien paga en silencio movido por el temor a que se cumplan las amenazas³²⁵, pues el miedo insuperable actúa como eximente³²⁶. De esta forma, el principio de inexigibilidad constituye el fundamento de la exención, pues la no exigibilidad excluye la responsabilidad penal del sujeto, pero no la antijuridicidad del hecho ni su prohibición.

Así, la STS de 26 de julio de 2012 afirma que “quienes se doblegan ante la extorsión de una banda terrorista actúan bajo coacción”. En este sentido, Sáez de la Fuente y Prieto (2017) explican que el objetivo de la violencia terrorista era forzar colaboradores, es decir, lograr que las víctimas cooperaran por miedo. Así, añaden que éstas no denunciaban a los cuerpos policiales por la impresión de que su respuesta iba a ser ineficaz.

Ahora bien, más allá de los actos propiamente extorsivos, similares a los expuestos en el primer apartado del presente capítulo, y que comprenden delitos vinculados a la intimidación y la violencia directamente ejercidos contra las víctimas, existen numerosas conductas indubitadas de voluntad de colaboración con la organización terrorista E.T.A. Atendiendo a la argumentación seguida por Savona y Berlusconi (2015) y expuesta en este mismo apartado, estas conductas se situarían en niveles intermedios o extremos de voluntariedad, pues pueden llegar a constituir supuestos de pertenencia a la organización. Hay tres sentencias que pueden aportar interesantes ejemplos en esta materia a través de las conductas objeto de condena:

³²⁴ La sentencia dice: “no pudiendo determinarse de forma concluyente como se ha razonado que en su actuación estuviese presente, junto al miedo por la acreditada extorsión, un cierto y difuso ánimo de contribuir financieramente con la organización terrorista”.

³²⁵ En palabras de propia sentencia: “no resulta soportable que quien no asume iguales patrones de conducta, por razones susceptibles de ser comprendidas aunque no respondan a lo esperado social y legalmente, se pliega a la extorsión realizando las aportaciones económicas exigidas temeroso de que se cumplan las amenazas en un contexto en que ha sido testigo cercano de la despiadada actuación de la banda chantajista, haya de ser sometido, sin consideración y al margen de mayores matizaciones o modulaciones, a la más intensa de las censuras que el Estado dispensa: el reproche penal.”

³²⁶ A este respecto, la sentencia señala que “la amenaza seria de males puede disculpar una actuación del ciudadano no conforme a derecho. El Estado no podría exigirle penalmente un comportamiento que sitúe por encima de bienes personales de singular valor que ve seriamente amenazados el interés general de toda la sociedad”.

- Asistiendo en la recaudación de ingresos fruto de los procesos extorsivos, como argumenta la STS de 1 de diciembre de 2015, que condena a dos personas que han contribuido con la organización terrorista en dos grados diferentes: a una de ellas la condena como colaborador de la organización por su contribución esporádica, y a la otra por integración en la propia organización al ser su colaboración más duradera.
- Apoyando los procesos extorsivos ya iniciados a las víctimas escogidas por la organización terrorista, como pone de manifiesto la STS de 3 de julio de 2012, que mantiene la condena por detención ilegal y pertenencia a banda armada (entre otros delitos) en el contexto de ayuda a un secuestro en el año 1986.
- Aportando información sobre la represión de los procesos extorsivos por parte de las fuerzas del orden para evitar, por ejemplo, su detención, como señala la STS de 10 de julio de 2014, mediante los delitos de revelación de secretos y colaboración con banda armada.

El largo desarrollo legislativo represivo específico contra todas estas conductas de terrorismo y colaboración (Cancio, 2018), y la intensa persecución de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y desde el sistema judicial, junto a otros factores, han dado como resultado una gran *especialización* en la lucha contra el terrorismo en España; observándose una tendencia político criminal caracterizada por la prevención³²⁷ (Llobet, 2015).

En cambio, esto no ha ocurrido con la delincuencia organizada: la falta de especialización policial y judicial, derivada de centrar los esfuerzos precisamente en materia de terrorismo nacional, entre otras razones³²⁸, ha permitido que España se convierta en uno de los puntos clave de la delincuencia organizada. Si ya entramos concretamente a analizar la persecución específica de los procesos extorsivos, la atención además ha sido inespecífica, de forma paralela a la tipificación de las extorsiones (y los delitos contenidos como parte de sus procesos). En este

³²⁷ Llobet (2015) y Cancio (2018) coinciden en que la tendencia político-criminal se ha centrado en la prevención fáctica materializándose a través medidas de inoculación de los sujetos peligrosos, castigando actividades vinculadas con el adoctrinamiento y entrenamiento de potenciales terroristas como el *adiestramiento pasivo* (artículo 575 del Código penal), conductas de colaboración material o anímica con actividades o finalidades terroristas que incluyen actos de comunicación en forma de *adoctrinamiento colaborativo*, de *enaltecimiento o justificación* y de *humillación a las víctimas* (artículos 576 a 578); e incluso conductas de comunicación como la infracción de difusión de *mensajes o consignas* idóneos para incitar a la comisión de delitos de terrorismo (artículo 579.1).

³²⁸ Giménez-Salinas (2013) añade a estas razones, otras como la ubicación geográfica de España o la falta de sensibilización con la entrada de dinero ilegal al país, como consecuencia de la especial preocupación por el turismo y el desarrollo urbanístico, que a su vez dos factores vulnerables ante el blanqueo de capitales.

sentido, es importante entrar a analizar la situación actual en este sentido, para poder identificar los puntos fuertes y las necesidades de mejora en un capítulo posterior.

3. Investigación y persecución desde las Fuerzas y los Cuerpos de seguridad

La colaboración policial y judicial es esencial en el análisis del fenómeno, por ello resulta imprescindible identificar las funciones de ambas instituciones en la lucha contra la extorsión. Concretamente, es relevante conocer la investigación de la policía judicial a través de sus grupos especializados a nivel nacional, autonómico y supranacional.

3.1. La investigación policial

En España, la extorsión y el crimen organizado se combaten a nivel policial mediante las unidades especializadas con que cuentan las policías judiciales de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad. A tenor de lo previsto en el artículo 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial³²⁹, en adelante LOPJ, las funciones de la Policía Judicial, en términos generales, comprenden el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes; también recogido en el artículo 282 de la Lecrim³³⁰.

Dichas funciones se detallan en el artículo 549 de la citada LOPJ, que establece que:

³²⁹ Concretamente Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

³³⁰ Que señala: *“la Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal.*

Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.”

- a) La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes.
- b) El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deban realizar fuera de su sede y requieran la presencia policial.
- c) La realización material de las actuaciones, que puedan requerir el ejercicio de la coerción que ordenare la autoridad judicial o fiscal.
- d) La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal.
- e) Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal.

Sin entrar en profundidad sobre las formas de investigación y persecución³³¹, es relevante también conocer a los grupos especializados de los cuerpos policiales encargados de perseguir la extorsión y el crimen organizado, delitos que constituyen las dos principales problemáticas de nuestro estudio.

3.2. Grupos especializados

Lo cierto es que la regulación de la Policía Judicial se encuentra dispersa en distintas disposiciones legales: entre los artículos 280 y 298 LECrim, en la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) –modificada a estos efectos por LO 19/2003, de 23 de diciembre–, cuyo Título III de su Libro VII –arts. 547 a 550– se dedica a la regulación de la Policía Judicial; y en la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), que, en el capítulo V de su Título II, configura las denominadas Unidades de Policía Judicial, así como en el RD 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de Policía Judicial, modificado por RD 54/2002, de 18 de febrero, para incorporar a las Comisiones de Coordinación de Policía Judicial, a aquellas comunidades autónomas con competencia estatutaria en esta materia: País Vasco por Ley 4/1992, de 17 de julio; Cataluña por Ley 10/1994, de 11 de julio; y Navarra por Ley Foral 8/2006, de 20 de junio.

Puesto que un análisis pormenorizado de las funciones y unidades de los cuerpos policiales desbordaría los objetivos del presente apartado, sí cabe describir brevemente aquellos

³³¹ Si bien resultan de gran interés, lo cierto es que superan los objetivos del presente capítulo.

aspectos de mayor relevancia en materia de investigación del objeto de estudio, las extorsiones en el ámbito de la delincuencia organizada.

3.2. a) A nivel nacional

En el ámbito nacional, Policía Nacional y Guardia Civil son los dos cuerpos policiales estatales que asumen las competencias expuestas en el apartado anterior.

Dentro del Policía Nacional, se encuentra la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (normalmente conocido por su acrónimo U.D.E.V.), que cuenta con una división dedicada a investigar secuestros y extorsiones, denominada Sección de Secuestros y Extorsiones, que orgánicamente depende de la Brigada de Investigación de Delitos contra las Personas. Además, existen las Unidades de Droga y Crimen Organizado (también llamadas U.D.Y.C.O.) que se dedican a investigaciones sobre organizaciones criminales. Ambas unidades se encuentran dentro de la Comisaría General de Policía Judicial.

La Guardia Civil cuenta con el Grupo de Delitos contra las Personas (frecuentemente conocido como G.D.P.) donde miembros especializados se dedican a perseguir los delitos de extorsión en el Equipo de Secuestros y Extorsiones, perteneciente a la Unidad Central Operativa (o también, U.C.O.) y depende de la Jefatura de Policía Judicial. Dentro de esta misma Unidad, se encuentra el Grupo de Delincuencia Organizada, especializado en crimen organizado. Además, la Unidad Técnica de Policía Judicial (U.T.P.J.) centraliza la información sobre delincuencia, mientras que las Unidades Orgánicas de Policía Judicial territoriales se ocupan de las funciones específicas de la policía judicial en cada territorio.

La LOCFS establece en sus artículos arts. 29.2, 38.2.b, 46 y 53.1.e) que las Policías Autonómicas y Locales se constituyen en *colaboradores o partícipes* de la función de Policía Judicial; dado que en realidad su ejercicio se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como recoge el artículo 11.1.g) LOCFS. Así, los cuerpos policiales de nivel nacional ejercitan su competencia mediante unidades constituidas sobre criterios de especialidad y exclusividad atendiendo al artículo 30.1 LOCFS; coexistiendo con los cuerpos autonómicos españoles que actualidad son tres: la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra cuentan con Unidades Orgánicas de Policía Judicial.

Con el fin de desarrollar una inteligencia estratégica contra el crimen organizado, en el año 2014 se creó el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO),

como una nueva subdirección general dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante la integración del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO) a través del Real Decreto 873/2014, de 10 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior Real Decreto 873/2014, de 10 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Uno de sus puntos fuertes más relevantes es la coordinación de investigaciones conjuntas entre distintos cuerpos policiales.

3.2. b) A nivel autonómico

Actualmente existen dos comunidades autónomas con cuerpos policiales³³² que contienen funciones de policía judicial con plenas competencias: Cataluña, País Vasco y Navarra.

En Cataluña se creó el cuerpo policial de los Mossos d'Esquadra en desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, que contó con funciones de policía judicial gracias a la ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad "Mossos d'Esquadra", regulado entre los artículos 13 y 15; y que establece en su artículo 12.3 que seguirán los términos establecidos por los artículos 126 de la Constitución, 13.5 del Estatuto de autonomía y 443 y siguientes de la LOPJ.

En el País Vasco, se creó la Ertzaintza en desarrollo del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979, tienen competencias en las materias propias de la policía judicial gracias a la Ley 4/92 del Parlamento Vasco, de 17 de Julio de 1992, sobre Ordenación de la Policía Vasca "Ertzaintza", regulado entre los artículos 112 y 115, y que señala que los miembros de la Policía del País Vasco respetarán la autoridad de los Tribunales, y, en el desempeño de su función como Policía Judicial, estarán al servicio y bajo la dependencia de la Administración de Justicia, en los términos que dispongan las Leyes en su artículo 29.

Ambas cuentan con unidades especializadas en extorsiones y en crimen organizado, también de forma separada.

³³² Se exponen a continuación y de forma sucinta las principales disposiciones legales referentes a los cuerpos policiales autonómicos en materia de policía judicial en cumplimiento de la Constitución Española, pues un estudio de los antecedentes histórico-legales de los mismos superaría los objetivos del presente apartado.

Por su parte, Navarra cuenta con su propia Policía Foral desarrollada mediante la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), que cuenta con su división de policía judicial desde 1997 reconocida actualmente en el artículo 13 de Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra.

Ahora bien, de la misma forma que las unidades adscritas a la Policía Nacional como señalan los artículos 37 y 47 de la LFCS, la Policía Foral de Navarra actualmente no asume las funciones propias de la policía judicial de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, bajo la dependencia de los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sentido estricto, si no con carácter colaborador.

3.2. c) A nivel supranacional

En el ámbito de la Unión Europea, España forma parte del Comité Ejecutivo de EUNAT (European Union Network Advisory Teams) que es una red especializada en secuestros y extorsiones que conecta a las policías de diversos países a través de la agencia Europol.

Además, en la persecución del delito de extorsión según lo previsto en los acuerdos de Schengen³³³ resulta aplicable su artículo 40.2³³⁴ de vigilancia transfronteriza y el 40.1³³⁵ de

³³³ España se adhirió al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, mediante Acuerdo de 25 de junio de 1991 ratificado por Instrumento de 23 de julio de 1993, entrando a formar parte de lo que se conoce como “espacio de Schengen”.

³³⁴ Que establece que: “cuando, por razones particularmente urgentes, no pueda solicitarse la autorización previa de la otra Parte contratante, los agentes encargados de la vigilancia estarán autorizados a proseguir más allá de la frontera la vigilancia de una persona que presuntamente haya cometido hechos delictivos enumerados en el apartado 7, en las siguientes condiciones:

a) El cruce de la frontera será comunicado inmediatamente durante la vigilancia a la autoridad de la Parte contratante designada en el apartado 5 en cuyo territorio prosiga la operación de vigilancia.

b) Se transmitirá sin demora la solicitud de asistencia judicial presentada con arreglo al apartado 1 y en la que se expongan los motivos que justifiquen el cruce de la frontera sin autorización previa.”

³³⁵ Que indica que: “los agentes de una de las Partes contratantes que, en su país, estén siguiendo a una persona hallada en flagrante delito de comisión de una de las infracciones mencionadas en el apartado 4 o de la participación en una de dichas infracciones estarán autorizados a proseguir la persecución sin autorización previa en el territorio de otra Parte contratante cuando las autoridades competentes de la otra Parte contratante, debido a la especial urgencia, no hayan podido ser advertidas previamente de la entrada en el territorio por uno de los medios de comunicación mencionados en el artículo 44, o cuando dichas autoridades no hayan podido personarse en el lugar con tiempo suficiente para reanudar la persecución.

Se aplicarán las mismas normas cuando la persona perseguida se hubiese evadido mientras estaba bajo detención provisional o cumpliendo una pena privativa de libertad.

persecución en caliente: se trata de dos artículos que se contemplan sólo ante determinados hechos delictivos³³⁶, entre los que se encuentra la extorsión; asunto clave en la lucha contra los procesos extorsivos en materia de cooperación internacional que bien reseña López Barja de Quiroga (2014).

Conociendo las notas de transnacionalidad y eficacia que caracterizan las actividades propias de la delincuencia organizada, como ya se ha señalado en el primer capítulo, y encontrándose los procesos extorsivos entre ellas, resulta especialmente útil la cooperación policial a nivel supranacional. Así Mendoza (2016) recuerda la relevancia actual de la cooperación policial penal en el marco de la Unión Europea, especialmente en materia de delincuencia organizada, pues supone un elemento fundamental en la seguridad pública y en “la búsqueda del equilibrio que debe regir entre el imperio del Estado de Derecho y la garantía de un sistema democrático”.

Ahora bien, para considerar los problemas de persecución en su conjunto, se debe analizar la investigación y el enjuiciamiento desde el sistema judicial, dado que el artículo 126 de la Constitución establece que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, estableciendo así una dependencia funcional, que coexiste con la dependencia orgánica respecto de sus mandos policiales, tal como señala la Memoria de la Fiscalía General del Estado (2017).

A más tardar en el momento en que se cruce la frontera, los agentes que realicen la persecución recurrirán a las autoridades competentes de la Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar la persecución. La persecución cesará cuando así lo solicite la Parte contratante en cuyo territorio deba tener lugar la persecución. A petición de los agentes que realicen la persecución, las autoridades locales competentes aprehenderán a la persona perseguida para determinar su identidad o proceder a su detención.”

³³⁶ Los hechos delictivos en cuestión son: asesinato, homicidio, violación, incendio provocado, falsificación de moneda, robo y encubrimiento con ánimo de lucro o receptación, extorsión, secuestro y toma de rehenes, tráfico de seres humanos, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, infracciones de las disposiciones legales en materia de armas y explosivos, destrucción con explosivos, transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos, delito de fuga a raíz de un accidente con resultado de muerte o heridas graves.

4. Investigación y enjuiciamiento desde el sistema judicial

Como se avanzaba al comienzo del capítulo, uno de los grandes retos del estudio que se presenta tienen su origen en la complejidad que existe para incardinar los delitos analizados como parte de los procesos extorsivos en el seno de una organización criminal, especialmente sus diferentes formas de manifestación.

En este contexto, resulta relevante conocer qué procedimientos se aplican a los diferentes delitos cometidos por las organizaciones criminales, esto es, qué respuesta se da desde el sistema judicial. La organización judicial, los procedimientos judiciales establecidos para los diversos casos de extorsión y los órganos competentes en la materia, son cuestiones necesarias para completar el análisis legal desde la perspectiva judicial. La función del Ministerio Fiscal y la colaboración entre las instituciones judiciales y policiales en este ámbito también forman parte del estudio que guiará el análisis empírico posterior.

4.1. La organización judicial en el orden penal

La organización judicial en España se establece en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, donde se recogen los distintos órganos judiciales y la competencia de los mismos, dependiendo del ámbito material y territorial en el que actúen, así como de la fase del procedimiento judicial en la que intervengan.

En el orden penal, se establece que:

A nivel nacional y con reserva de competencia, se encuentran los *Juzgados Centrales de lo Penal*³³⁷ y la Sala de lo Penal de la *Audiencia Nacional*³³⁸, para enjuiciar con la misma sistemática las causas que les corresponda.

El órgano Instructor es el del Partido Judicial donde el delito se hubiere cometido³³⁹. Si este lugar no consta, será competente el del lugar donde se descubran las pruebas materiales

³³⁷ Según el artículo 89 BIS 3 LOPJ: delitos contenidos en el artículo 65 LOPJ cuando su conocimiento no compete a la Audiencia Nacional.

³³⁸ Delitos contenidos en el artículo 65 LOPJ y de terrorismo (introducido por la LO 4/1988, de 25 de mayo): delitos de terrorismo, contra la Corona, el narcotráfico a gran escala, los delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional, los cometidos por españoles en el extranjero, así como de las extradiciones y euroórdenes.

³³⁹ Siguiendo el artículo 87 LOP.

del delito, y en su defecto donde fuere detenido el supuesto autor o el lugar de su residencia, en este orden sucesivo³⁴⁰.

La jurisdicción ordinaria que se determine será también competente para juzgar los delitos conexos, entendiendo por éstos los cometidos simultáneamente o mediante concierto entre ambas personas y los cometidos como medio para perpetrar otros o lograr su impunidad³⁴¹. Será competente en estos supuestos el órgano del territorio donde se haya cometido el delito con pena mayor y si es de igual pena, el órgano que iniciara antes la instrucción³⁴².

4.2. Los procedimientos judiciales

Los procedimientos judiciales que nos podemos encontrar para el enjuiciamiento de estas organizaciones criminales son principalmente de dos tipos³⁴³:

- *Procedimiento Ordinario*: para el enjuiciamiento de delitos con pena superior a nueve años de privación de libertad.
- *Procedimiento Abreviado*³⁴⁴: para el enjuiciamiento de delitos con pena de hasta nueve años de privación de libertad, y penas de distinta naturaleza independientemente de su duración.

³⁴⁰ Atendiendo al artículo 15 LECrim.

³⁴¹ Según los artículos 16 y 17 LECrim.

³⁴² Como cita el artículo 18 LECrim.

³⁴³ Existen otros procedimientos judiciales, pero no se utilizarán para el enjuiciamiento de estos delitos cometidos por organizaciones criminales (tales son los procedimientos especiales, por ejemplo, contra diputados y senadores).

³⁴⁴ Según el Artículo 757 LECrim: “sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración”.

Ambos procedimientos siguen tres fases: la instrucción, donde se investigan los hechos y la responsabilidad³⁴⁵, la intermedia donde se prepara el juicio oral³⁴⁶ y el juicio oral que permite dar lugar al fallo³⁴⁷.

4.3. Los órganos según el procedimiento judicial

Los distintos procedimientos judiciales, así como las reglas de atribución de las causas por competencia material y territorial a distintos órganos se establecen en la Lecrim.

Dentro de la jurisdicción en materia penal hay dos tipos de órganos de distinta naturaleza y con distintas funciones:

- *Órgano Instructor*³⁴⁸: se encarga, entre otras competencias, de la instrucción de causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponde a un órgano distinto a éste. Dentro de estos órganos se encuentran los *Juzgados de Instrucción*, pertenecientes a un partido judicial y los *Juzgados Centrales de Instrucción* de ámbito nacional con una competencia especial para determinadas materias³⁴⁹.
- *Órgano de Enjuiciamiento*³⁵⁰: le corresponde el enjuiciamiento de las causas por delito, que han sido instruidas previamente por los anteriores órganos. Por un lado, se encuentran los *Juzgados de lo Penal*³⁵¹ para el enjuiciamiento de causas por delitos con pena de hasta 5 años de prisión provisional y 10 de privación de

³⁴⁵ En casos de actuaciones sumariales secretas será la fase sumarial.

³⁴⁶ Donde puede darse el sobreseimiento o el archivo de actuaciones, ya sea libre y el cierre sea definitivo al no haber indicios racionales, o provisional y se suspenda el proceso o se archiven provisionalmente las actuaciones al no estar estas debidamente justificadas o no haya pruebas para la acusación (según los artículos 634 y siguientes LECrim).

³⁴⁷ Atendiendo a los artículos 785 y siguientes LECrim.

³⁴⁸ Causas serán conocidas por medio de denuncia, querella, atestado (según el artículo 297 LECrim), o conocimiento directo del Juez (supuesto previsto en el artículo 303, párrafo primero de la LECrim). Concretamente, es el artículo 299 LECrim dicta: “*constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos*”.

³⁴⁹ Ya expuesto en el apartado anterior.

³⁵⁰ Siguiendo lo establecido por el artículo 785 LECrim.

³⁵¹ Atendiendo al artículo 14.3 LECrim.

derechos, y por otro lado la *Audiencia Provincial*³⁵², para el enjuiciamiento de causas por delitos con penas asociadas superiores a las ya mencionadas. La competencia de ambos órganos es de ámbito provincial.

4.4. El Ministerio Fiscal

Por su parte, el Ministerio Fiscal, como Ministerio Público, tiene como función primordial promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, como enuncia el artículo uno de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Dentro de sus muchas funciones³⁵³, interesa resaltar la potestad de ejercer la acción penal o de oponerse a la misma ejercitada por otros. El Ministerio Fiscal ejercerá la acción penal en los delitos perseguibles de oficio, como es el caso de los delitos de extorsión y organización criminal, dado que es el órgano llamado a promover la persecución penal a través de la acusación³⁵⁴.

³⁵² Según el artículo 82 LOPJ.

³⁵³ El artículo 12 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, enuncia los siguientes órganos del Ministerio Fiscal:

- a) El Fiscal General del Estado.
- b) El Consejo Fiscal.
- c) La Junta de Fiscales de Sala.
- d) La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas.
- e) La Fiscalía del Tribunal Supremo.
- f) La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
- g) La Fiscalía de la Audiencia Nacional.
- h) Las Fiscalías Especiales.
- i) La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de dicho Tribunal.
- j) La Fiscalía Jurídico Militar.
- k) Las Fiscalías de las Comunidades Autónomas.
- l) Las Fiscalías Provinciales.
- m) Las Fiscalías de Área.

³⁵⁴ La LECrim, además de referirse al Ministerio Fiscal en el artículo 785 y siguientes, también lo menciona en el artículo 773, con el siguiente tenor: *“el Fiscal se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de las acciones penal y civil conforme a la Ley. Velará por el respeto de las garantías procesales del investigado o encausado y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito. El término «investigado o encausado», contenido en el presente apartado, ha sido introducido en sustitución del anterior término «imputado» conforme establece el número 2 del apartado veintiuno del artículo único de la L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica («B.O.E.» 6 octubre).*

Además de ejercer la acción penal, también puede solicitar funciones de investigación criminal a la Policía Judicial, respetando las garantías jurisdiccionales establecidas por ley. Por otro lado, puede interesar la notificación de cualquier resolución judicial del Juzgado o Tribunal, así como el estado de los procedimientos. Los distintos órganos fiscales se incardinan en relación con la planta judicial, para asumir las funciones legalmente encomendadas en los distintos procedimientos penales llevados a cabo por los diferentes órganos jurisdiccionales.

En materia de investigación, si bien las diligencias de investigación del Fiscal están reguladas en el art. 5 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y en el art. 773.2 LECrim; lo cierto es que tal como apunta la Memoria de la

En este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, de manera especial, impulsar y simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa de las partes y del carácter contradictorio del mismo, dando a la Policía Judicial instrucciones generales o particulares para el más eficaz cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las actuaciones, aportando los medios de prueba de que pueda disponer o solicitando del Juez de Instrucción la práctica de los mismos, así como instar de éste la adopción de medidas cautelares o su levantamiento y la conclusión de la investigación tan pronto como estime que se han practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio de la acción penal.

El Fiscal General del Estado impartirá cuantas órdenes e instrucciones estime convenientes respecto a la actuación del Fiscal en este procedimiento, y en especial, respecto a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 780.

Tan pronto como el Juez ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, el Secretario judicial lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél. Párrafo cuarto del número 1 del artículo 773 redactado por el apartado ciento dos del artículo segundo de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre). Vigencia: 4 mayo 2010.

2. Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, informará a la víctima de los derechos recogidos en la legislación vigente; efectuará la evaluación y resolución provisionales de las necesidades de la víctima de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. El Fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia ante el Juez de Instrucción. En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

El Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal.

Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.”

Fiscalía 2017, su actividad investigadora se ha venido potenciando a través de las reformas legislativas sobre sus competencias, especialmente en la instrucción en materia penal.

En España no existe fiscalía especializada en materia de extorsión, pero sí existen dos Fiscalías especiales para afrontar la lucha contra la criminalidad organizada, con las siguientes funciones establecidas por el art 19 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de su regulación específica:

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, intervendrá directamente en procesos penales en relación con:

- Delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad social y de contrabando.
- Delitos cometidos por funcionarios públicos, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho.
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
- Delitos societarios y blanqueo de capitales y conductas afines a la receptación, salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conductas a las otras Fiscalías Especiales.

Breve comentario sobre la colaboración institucional en las investigaciones penales

Es importante señalar que la Policía Judicial, en el curso de sus distintas investigaciones, ejerce sus funciones bajo la dependencia de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, como enuncia el artículo 126³⁵⁵ de la Constitución.

La dependencia de estos órganos vendrá marcada por el estado de las investigaciones, de tal forma que cuando se encuentra en un estadio inicial en el cual la investigación aún no ha sido judicializada, la comunicación y relación con el Ministerio Fiscal se hace necesaria siendo este quién dirige las órdenes necesarias para la realización de las diligencias de investigación. Una vez la investigación se judicializa, será el órgano judicial competente quién dirija la

³⁵⁵ Artículo 126 de la Constitución española: “la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.”

instrucción del procedimiento y encomiende las funciones a la Policía Judicial (Jordá et cols. 2014).

Además, como se ha puesto de manifiesto en diferentes puntos de estos dos primeros capítulos, el carácter más o menos represivo de un concreto ordenamiento jurídico constituye un elemento de gran influencia en el desarrollo de las actividades ilegales del crimen organizado, pues si es más represivo en materia de crimen organizado puede ejercer una suerte de efecto llamada si las organizaciones criminales entienden que es más rentable operar en su jurisdicción³⁵⁶; además, la regulación específica en materia de seguridad de los territorios donde operan también es un importante factor de desarrollo de dichas actividades (Albanese, 2000; Giménez-Salinas, 2012).

Así, en el caso español, se puede considerar que en cierta medida, la limitada eficacia en la aplicación de medidas represivas y la escasez de control han sido “un buen reclamo para el desarrollo de actividades legales” (Giménez-Salinas, 2012, p.22); a esto debe añadirse “la falta de medios, de preparación y de recursos de los organismos judiciales y cuerpos policiales” a los que no se dota de recursos materiales y humanos como sería pertinente, que también suponen elementos para el aprovechamiento del crimen organizado. Tales elementos se vuelven aún más significativos cuando se trata de erradicar organizaciones criminales extranjeras, con sus propias características culturales, su idioma y sus formas de intimidación. Un caso ilustrativo es el constante empleo de ritos de vudú por parte de la mafia nigeriana asentada en España, que le permite someter la voluntad de mujeres para la explotación sexual; así la combinación de los ritos de vudú con las coacciones constituye un mecanismo fuertemente intimidatorio para las víctimas.

En cualquier caso, no se debe perder de vista el ánimo de lucro como fin último del crimen organizado, que nos sitúa en el entorno de las problemáticas de la delincuencia económica. En este escenario, la globalización ha generado un espacio económico ineficazmente regulado, que, además, la delincuencia económica ha sabido aprovechar mediante un intenso proceso de internacionalización, como señala Jiménez Villarejo (2005). Por esta razón, la cooperación policial y judicial penal en el contexto supranacional es también muy relevante.

³⁵⁶ Atendiendo a la regulación de cada servicio o producto, las organizaciones criminales operarán en un escenario u otro, adquiriendo las capacidades más efectivas en cada caso, como se ha puesto de manifiesto en el apartado 1.3. a) Actividades ilícitas y características de las organizaciones del primer capítulo.

No obstante, se han dado importantes pasos dentro de la Unión Europea. Aunque un análisis pormenorizado superaría los límites del presente comentario, cabe destacar al menos algunos puntos vinculados a la materia:

Cabe pues mencionar la importancia de las medidas en la lucha contra la delincuencia en el espacio de la Unión Europea, que están recogidas en el artículo 3.2 del Tratado de la Unión Europea (en adelante, TUE)³⁵⁷ y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, TFUE), que contiene tres importantes artículos relativos al funcionamiento de tal lucha:

- El artículo 67.3 del TFUE³⁵⁸ recoge dos elementos esenciales: el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y la coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales.
- El artículo 85 del TFUE define la principal función de Eurojust, el órgano de la Unión Europea encargado del refuerzo de la cooperación judicial entre los Estados miembros: apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros o que deba perseguirse según criterios comunes, basándose en las operaciones efectuadas y en la información proporcionada por las autoridades de los Estados miembros y por Europol³⁵⁹. En este punto, es de interés reseñar la posibilidad de creación de una Fiscalía

³⁵⁷ Que establece concretamente que: *“la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia”*.

³⁵⁸ Señala que *“la Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de las legislaciones penales”*.

³⁵⁹ Continúa el artículo: *“a tal fin, el Parlamento Europeo y el Consejo determinarán, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, la estructura, el funcionamiento, el ámbito de actuación y las competencias de Eurojust. Estas competencias podrán incluir: a) el inicio de diligencias de investigación penal, así como la propuesta de incoación de procedimientos penales por las autoridades nacionales competentes, en particular los relativos a infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión; b) la coordinación de las investigaciones y los procedimientos mencionados en la letra a); c) la intensificación de la cooperación judicial, entre otras cosas mediante la resolución de conflictos de jurisdicción y una estrecha cooperación con la Red Judicial Europea. En dichos reglamentos se determinará asimismo el procedimiento de participación del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en la evaluación de las actividades de Eurojust”*.

Europea, amparándose en el artículo 86 del TFUE³⁶⁰, que fue aprobada recientemente por el Consejo de la Unión Europea mediante el Reglamento 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea como nuevo actor en la lucha contra la delincuencia financiera, reclamado con intensidad por la fiscalía española en diferentes directivas.

- Por último, el artículo 88.1 del TFUE describe la principal función de Europol, también denominada Oficina Europea de Policía, que es el órgano encargado de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en el seno de la Unión Europea. Concretamente interviene para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades policiales y de los demás servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros, para la colaboración en la prevención de la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, del terrorismo y de las formas de delincuencia que lesionen un interés común que sea objeto de una política de la Unión, así como en la lucha en contra de ellos³⁶¹.

Lo cierto es que el TFUE dedica todo el capítulo cuarto a la cooperación judicial en materia penal, y establece el *principio de reconocimiento mutuo* en el artículo 82³⁶².

³⁶⁰ Que señala: “para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, el Consejo podrá crear, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, una Fiscalía Europea a partir de Eurojust. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo”.

³⁶¹ Y continúa en sus apartados siguientes: “2. El Parlamento Europeo y el Consejo determinarán, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, la estructura, el funcionamiento, el ámbito de actuación y las competencias de Europol. Estas competencias podrán incluir: a) la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de la información, en particular la transmitida por las autoridades de los Estados miembros o de terceros países o terceras instancias; b) la coordinación, organización y realización de investigaciones y actividades operativas, llevadas a cabo conjuntamente con las autoridades competentes de los Estados miembros o en el marco de equipos conjuntos de investigación, en su caso en colaboración con Eurojust. En dichos reglamentos se fijará asimismo el procedimiento de control de las actividades de Europol por el Parlamento Europeo, control en el que participarán los Parlamentos nacionales. 3. Cualquier actividad operativa de Europol deberá llevarse a cabo en contacto y de acuerdo con las autoridades de los Estados miembros cuyo territorio resulte afectado. La aplicación de medidas coercitivas corresponderá exclusivamente a las autoridades nacionales competentes.”

³⁶² En su primer apartado señala que “la cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en los ámbitos mencionados en el apartado 2 y en el artículo 83.

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario,

Una de las formas más conocidas y explícitas de reconocimiento mutuo es la Orden Europea de Detención y Entrega, adoptada por la Decisión Marco (DM) de 13 de junio de 2002 (2002/584/JAI), y regulada en España por dos leyes: la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la Orden Europea de Detención y Entrega y la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre la Orden Europea de Detención y Entrega. Se trata de un significativo Instrumento Jurídico Comunitario previsto en el artículo 34 TUE, por lo que no es una norma directamente aplicable por las autoridades judiciales de los Estados miembros, si no que éstos deben adaptar sus legislaciones internas a su contenido.

Es necesario recordar en este punto del capítulo que la presente tesis tiene como objetivo el estudio del fenómeno de los procesos extorsivos perpetrado contra las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada asentada en España.

Ahora bien, aunque la normativa de interés para el análisis radica más bien en la aplicación de los tipos penales y de las medidas de protección del ordenamiento jurídico español, no se debe olvidar la transnacionalidad del crimen organizado y el proceso de internacionalización de la delincuencia financiera, que han hecho necesario el estudio jurídico que al menos contemple de forma sucinta algunos aspectos significativos de la regulación en la Unión Europea³⁶³.

medidas tendentes a:

- a) establecer normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento en toda la Unión de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas;*
- b) prevenir y resolver los conflictos de jurisdicción entre los Estados miembros;*
- c) apoyar la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia;*
- d) facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales o equivalentes de los Estados miembros en el marco del procedimiento penal y de la ejecución de resoluciones."*

³⁶³ Un estudio más pormenorizado de los mismos, o incluso un análisis internacional hubieran sido de gran interés, pero superaría los objetivos del presente capítulo.

5. Conclusiones del análisis jurídico

Los procesos extorsivos perpetrados contra las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada pueden adoptar diversas formas de manifestación. En el estudio que se presenta, se tienen en cuenta las tres tipologías expuestas por Monzini (1993), extorsión por protección³⁶⁴, extorsión monopolística³⁶⁵ y extorsión laboral³⁶⁶, para identificar los tipos penales contenidos en las conductas criminales que articulan las diversas formas de actuar de las organizaciones criminales dedicadas a estas actividades.

De tal análisis se desprende que los principales delitos en juego son: la extorsión, el robo con violencia o intimidación, las amenazas condicionales, las coacciones, las detenciones ilegales y el secuestro, el acoso y la realización arbitraria del propio derecho, así como otros delitos secundarios (estafa, lesiones y daños) y accesorios (incendio y denuncia falsa); todos ellos empleados como parte del proceso extorsivo.

Además, el escenario donde se perpetran tales delitos presenta otras implicaciones penales tales como la posibilidad de aplicación de tipos penales relativos al crimen organizado: tanto de organización y grupo criminal (y asociación ilícita) como aquellos delitos considerados en el marco de una organización criminal. Cabe destacar en este punto que el delito de extorsión, la estafa y el robo con violencia o intimidación sí están recogidos como propósitos de las organizaciones criminales, pero no otros delitos contenidos en los procesos extorsivos analizados como las amenazas condicionales, las coacciones, las detenciones ilegales, el acoso o la realización arbitraria del propio derecho, entre otros, que no se encuentran recogidos en nuestro ordenamiento jurídico como cometidos en el seno de una organización criminal, a pesar de formar parte de esta grave amenaza en el ámbito crimen organizado que suponen los procesos extorsivos complejos (Gómez Recio y Espina Ramos, 2005; Europol, 2017).

También ha sido necesario conocer las notas características de la persecución desde las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, así como represión desde el sistema judicial, para poder aportar una visión global a las cuestiones teórico-legales que podrán abordarse en concepto de mejoras.

³⁶⁴ Que, como se ha explicado en el capítulo anterior, consiste en el pago regular de una cantidad que se impone mediante el uso de violencia, y donde el grupo ilegal está especializado y es el garante de la protección de las empresas que pagan.

³⁶⁵ Tal como se ha descrito en el primer capítulo, es una estrategia empresarial por la que se trata de eliminar físicamente a los competidores o crear coaliciones monopolísticas mediante el uso de la violencia, utilizada por el crimen organizado para controlar áreas del mercado legal.

³⁶⁶ Se trata de una negociación violenta para manipular el mercado laboral.

Debido a estas problemáticas jurídicas identificadas, es relevante el estudio de casos de extorsión desde una doble perspectiva criminológica-penal, que permita un análisis jurídico completo y que aborde cuestiones de la práctica policial y judicial. De esta forma se podrá extraer del mismo una serie de conclusiones aplicables en el campo del derecho lo más ajustadas posibles a la realidad criminológica, con una especial atención a la prevención y a las propuestas de mejora.

Para abordar tan ambicioso objetivo será necesario pasar de lo teórico a lo práctico: el diseño e implementación de un estudio empírico que permita conocer la realidad criminológico-penal teniendo en cuenta las limitaciones que ello supone. Para dar tal paso, los siguientes dos capítulos tratarán sobre el problema de la medición de los procesos extorsivos y el marco metodológico que configuran el diseño de la investigación empírica.

BLOQUE II: ANÁLISIS METODOLÓGICO

CAPÍTULO 3. PROBLEMAS DE MEDICIÓN Y ELECCIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO

A pesar de que la extorsión se considera una de las actividades definitorias del crimen organizado³⁶⁷ (Konrad y Skaperdas, 1998), lo cierto es que es un fenómeno latente: la baja tasa de denuncias a las autoridades impide la visibilidad de su incidencia en las cifras oficiales (Rusev et cols., 2016).

Este escenario conlleva fuertes limitaciones metodológicas para la investigación científica del fenómeno, que se analizan en el presente capítulo con el propósito de identificar la mejor forma de diseñar su estudio empírico.

Así, en el primer apartado se abordan las principales implicaciones de la extorsión como fenómeno latente, lo que incluye el análisis de los datos relativos a España y los problemas para su investigación policial y judicial.

En el segundo apartado se presentan los diferentes métodos de medición y fuentes de información tradicionales en los estudios criminológicos y su aplicabilidad al objeto de estudio de la presente tesis.

El tercer apartado expone los principales sectores victimizados y las principales nacionalidades afectadas por los procesos extorsivos del crimen organizado en España, a través de un estudio preliminar empírico que combina la información de fuentes abiertas con entrevistas a expertos³⁶⁸ de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

En el cuarto apartado se justifica la selección de los grupos de casos para el estudio, que configuran la base sobre la que se abordará el fenómeno en los capítulos siguientes.

Por último, el quinto apartado explica las limitaciones de medición y el marco metodológico como conclusiones del presente capítulo.

³⁶⁷ Como ya se ha mencionado en el punto tercero del primer capítulo de la presente tesis.

³⁶⁸ Tal como se explica en el apartado 2.3.c) del capítulo cuarto del presente trabajo: las entrevistas se realizaron a cuatro miembros de la Policía Nacional expertos en extorsiones y a cuatro miembros de la Guardia Civil expertos en extorsiones, a un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado, a un miembro de la Guardia Civil experto en crimen organizado, a un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado chino, a dos miembros de la Guardia Civil expertos en crimen organizado chino y un académico experto en cultura china.

1. La extorsión como fenómeno latente

Como hemos visto en el capítulo segundo, las principales conductas delictivas que las organizaciones criminales perpetran contra las víctimas de extorsión incluyen la violencia e intimidación como elementos esenciales para forzar el cumplimiento de las exigencias extorsivas, en cualquiera de sus tipologías. Pues bien, estos mecanismos llevan aparejados fenómenos como la intimidación ambiental³⁶⁹ o el silencio social³⁷⁰, que facilitan la perpetración y el mantenimiento de los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada de forma impune, pues su principal consecuencia es la aceptación inmediata de las extorsiones por parte de las víctimas.

Así, el temor que provocan estas acciones en las víctimas permite a la organización criminal la consecución de diferentes propósitos: por un lado, mejoran la efectividad de sus exigencias extorsivas, debido especialmente a la intimidación ambiental y, por otro lado, favorecen una mayor impunidad mediante el silencio social, ya que en muchas ocasiones las víctimas y los testigos son reacios a denunciar los incidentes extorsivos y si lo hacen, posteriormente retiran la denuncia por miedo a la venganza de sus extorsionadores.

Este modo de proceder tiene como consecuencia que los datos oficiales sean realmente escasos y, al ignorar su existencia, las autoridades policiales y judiciales asumen que no es un fenómeno frecuente en su jurisdicción, lo que provoca que dichas prácticas permanezcan aún más ocultas.

Por tanto, existe una elevada cifra oscura sobre la extorsión en el ámbito del crimen organizado ya que, como no se denuncian, un gran porcentaje de los delitos extorsivos que se perpetran como parte de las prácticas definidas en el capítulo segundo no llegan nunca a formar parte de los datos oficiales de criminalidad ni se tiene información alguna sobre ellos (Parkinson, 2004; Bezlov et al. 2006), lo que hace difícil identificar y medir su alcance.

Consecuentemente es un fenómeno latente (Rusev et cols., 2016), sobre el que es realmente complicado investigar de forma empírica, dada la fuerte limitación que existe para acceder a los datos oficiales y debido asimismo a la escasez de datos identificados.

Aplicando lo expuesto al escenario español sucede que, al igual que en los demás países, existen ciertas dificultades en relación con la obtención de datos y el diseño de la investigación

³⁶⁹ Descrito en el apartado 1.3. del segundo capítulo de la presente tesis.

³⁷⁰ Explicado en el apartado 3.2. del segundo capítulo de la presente tesis.

para llevar a cabo su recopilación y su metodología, así como determinados problemas vinculados a la investigación policial y judicial.

1.1. Datos sobre extorsión en España

Resulta difícil obtener una visión general de los procesos extorsivos en España debido a que existen importantes dificultades para poder medir y conocer su incidencia real. En términos generales, las principales razones que impiden una medición directa son las siguientes a) su elevada cifra oscura, es decir, una importante proporción de delitos no se llega a descubrir y b) diversas cuestiones metodológicas relativas a las prácticas de recopilación de datos oficiales.

1.1. a) La dificultad en la obtención de los datos

Como ya se ha mencionado, la extorsión es un delito poco denunciado debido a que las víctimas conocen los riesgos que asumen al comunicarlo a la policía: el proceso extorsivo conlleva el ejercicio de la violencia y la intimidación a las víctimas, lo que constituye la principal razón para que, ante el temor por su integridad física, las víctimas decidan gestionar el conflicto de forma privada, por lo que el número de denuncias es muy reducido y, en consecuencia, la cifra oculta es muy elevada (Mugellini, 2013).

En muchas ocasiones, aceptar el pago del dinero de la extorsión se percibe como una opción menos arriesgada que denunciar el caso a las autoridades, debido a la más que posible venganza de la organización criminal. De esta forma, la ocultación del delito hace más efectivas las exigencias extorsivas.

Además, esta cifra oscura suele ser mucho más elevada cuando la extorsión se produce dentro de una comunidad de inmigrantes que comparten el mismo origen, ya sea étnico, racial o de nacionalidad. Las causas son el desconocimiento tanto del marco jurídico de nuestro país como del idioma. De ahí que las amenazas proferidas por los extorsionadores a los miembros de una misma comunidad suelen ser más efectivas y permanezcan ocultas³⁷¹. Estas amenazas

³⁷¹ Así lo señalan los estudios sobre negocios de las minorías de Chin et al. (1992), Taylor (2006) y Wagstaff et al. (2006).

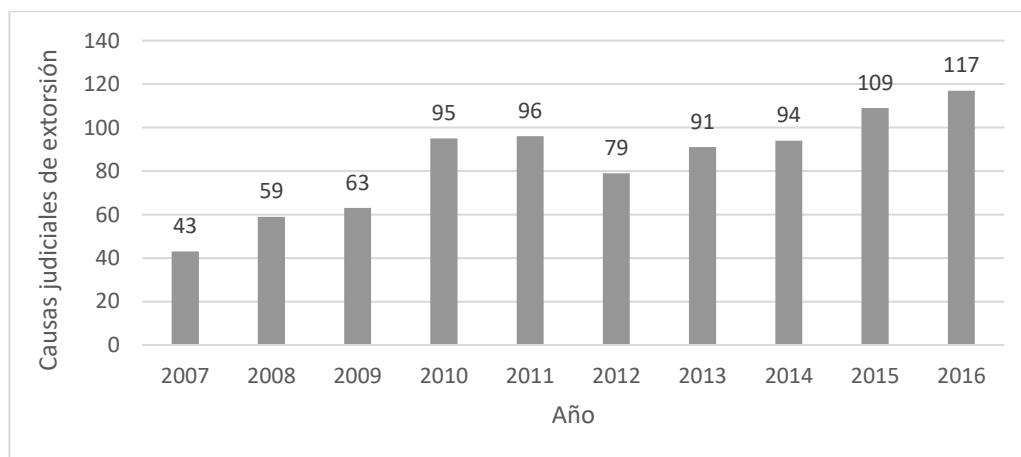
pueden mantenerse durante y después de las denuncias, llegando a conseguir en múltiples ocasiones que los testigos y las víctimas no ratifiquen sus declaraciones en el juicio oral.

1.1. b) Cuestiones metodológicas relativas a los datos oficiales

Por los motivos anteriormente citados y por la metodología empleada en su recogida, los datos judiciales y policiales de carácter oficial no suelen aportar realmente una visión general auténtica de la magnitud y características de la extorsión en España.

Los datos judiciales ofrecen una imagen incompleta debido al reducido número de casos de extorsión que han sido juzgados y a la escasez de registros de variables relativas a datos de extorsión. La siguiente figura muestra el número de causas judiciales consignadas entre los años 2007 y 2016, pudiéndose apreciar un ligero aumento desde las 43 inscritas en sus inicios hasta los 117 casos anotados en 2016. No obstante, resulta muy difícil alcanzar un conocimiento profundo de las características específicas de un delito³⁷², debido al limitado número de datos disponibles y a las también limitadas variables que ofrece la información recopilada.

Ilustración 2. Número anual de causas judiciales por delito de extorsión de 2007 a 2016 en España.



Fuente: elaboración propia con datos del INE (2017).

³⁷² Por ejemplo, en casos que están relacionados con el crimen organizado, distinguir qué víctimas son particulares y cuáles son empresarios, o el número total de autores y de víctimas.

Aunque los datos policiales ofrecen una visión algo más real de los casos de extorsión, únicamente se refiere a los incidentes denunciados, por lo que la cifra oscura continúa siendo muy elevada (Parkinson, 2004; Bezlov et al. 2006). Como podemos observar a continuación, la siguiente tabla muestra el número de casos de extorsión conocidos por la policía, la cifra de victimizaciones producidas por la extorsión y las detenciones practicadas, vinculadas con la extorsión desde el año 2011 hasta el 2013³⁷³.

Tabla 3. Datos policiales sobre extorsiones de 2011 a 2013 en España.

Datos policiales sobre extorsión	2011	2012	2013
Casos de extorsión detectados por la policía	243	246	336
Victimizaciones	281	276	283
Detenciones	219	235	237

Fuente: Ministerio del Interior, 2015.

Estas cifras muestran un incremento del número de casos de extorsión conocidos por la policía durante el periodo señalado³⁷⁴; en cuanto a la cifra de victimizaciones, cabe destacar que permaneció estable, sin embargo, se produjo un aumento del número de detenciones. Lo que destaca del análisis de estos datos, es el ligero ascenso de los delitos de extorsión y el reducido número que se producen anualmente; de ello se podría llegar a deducir que se trata de un hecho poco frecuente.

Desafortunadamente, en España no se han llevado a cabo encuestas de victimización todo lo exhaustivas que hubiera sido deseable para poder confirmar este extremo empíricamente. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, debido a que se trata de un delito latente, sería razonable pensar que el número de casos extorsivos registrados es pequeño debido a la falta de denuncias de las víctimas.

³⁷³ Estas cifras fueron facilitadas por el Ministerio del Interior durante el año 2015 en el marco del proyecto europeo de investigación CEREU, para conocer las posibilidades metodológicas de la medición de la extorsión en España; al concluirse que no resultan de utilidad para los propósitos de la investigación y al no ser datos de acceso público no se han podido actualizar en los años siguientes.

³⁷⁴ Para obtener información más amplia, se recomienda la lectura de Rusev et cols. (2016), sobre el informe *Extortion Racketeering in the European Union: vulnerability factors*, resultado del proyecto europeo de investigación CEREU, y publicado por el Center for the Study of Democracy en Sofia (Bulgaria).

Los datos policiales también aportan información sobre los medios empleados por los autores de los delitos, como son la intimidación, la violencia física y la psicológica. La tabla siguiente muestra los métodos utilizados en los casos de extorsión conocidos por la policía, donde se observa que el medio más habitual es la intimidación, seguido de la violencia psicológica y la física. Sin embargo, cabe destacar el gran número de casos (50%) que se integran en la categoría “otros”, lo que hace difícil conocer la amplia gama de procedimientos aplicados por los extorsionadores.

Tabla 4. Medios empleados en los casos de extorsión conocidos por la policía de 2011 a 2013 en España.

Medios empleados	2011	2012	2013
Intimidación	142	99	100
Violencia física	15	18	16
Violencia psicológica	20	16	34
Otros	66	113	186
Total	243	246	336

Fuente: Ministerio del Interior, 2015.

Para mayor complicación, a la carencia y la dificultad de acceso a datos reales, se añade que, una vez que se produce la denuncia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los organismos judiciales se enfrentan a importantes problemas de investigación y enjuiciamiento, como se muestra a continuación.

1.2. Los problemas en la investigación policial y judicial que reducen el número de casos enjuiciados

Las investigaciones criminales de los casos de extorsión son extremadamente complejas, principalmente por su dificultad probatoria³⁷⁵. En los casos en los que ha habido una denuncia, como ya se ha señalado, una de las principales dificultades radica en mantener en el tiempo los testimonios de las víctimas, ya que suelen negarse a testificar en el juicio³⁷⁶, no sólo para evitar posibles amenazas o coacciones, sino porque éstas ya se han producido y han inducido a la víctima a no seguir con el proceso. Por ello, los expertos entrevistados³⁷⁷ consideran que las investigaciones de estos delitos son largas y complejas y su resultado judicial suele ser incierto, terminando muchos de ellos por desestimarse.

Además, la situación se vuelve especialmente frágil cuando la única prueba del comportamiento delictivo es el testimonio del denunciante, mientras que, lógicamente, la parte denunciada niega los hechos. Se trata de supuestos muy comunes en los casos de extorsión perpetrados a través de mecanismos de intimidación del crimen organizado, sustentadas por acciones verbales, donde la ausencia de evidencias físicas hace recaer el peso de la prueba en el testimonio de la propia víctima o de un testigo. Cuando la única prueba ante un caso es la declaración de la víctima, resulta esencial valorarla y analizarla con la máxima precisión (Manzanero, 2008).

En términos generales, existen tres líneas de investigación sobre la credibilidad del testimonio (Manzanero y Diges, 1993) que son las siguientes: a) a través de medidas psicofisiológicas, es decir, los cambios físicos que acompañan a la mentira; b) mediante el comportamiento no-verbal, esto es, los movimientos y expresiones faciales asociados a la mentira y c) el análisis de contenido de la declaración. Concretamente, el análisis de contenido es la línea más consolidada en la actualidad y la seguida por la jurisprudencia española.

³⁷⁵ Para la elaboración de este apartado han sido de especial importancia las entrevistas a expertos y agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, a quienes se agradece su implicación y esfuerzo en el marco del proyecto europeo de investigación CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión Europea.

³⁷⁶ Según la entrevista mantenida con un agente de la Policía Nacional que investiga la extorsión en grupos criminales organizados colombianos.

³⁷⁷ Dos expertos en extorsiones y cuatro expertos en crimen organizado de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

En relación con lo expuesto en el párrafo anterior, se citan las palabras de Manzanero y Muñoz (2011, p.9):

“Los análisis de credibilidad basados en el contenido de las declaraciones no son lo suficientemente exactos como para ser admitidos como evidencia científica en casos criminales, aunque puedan tener utilidad en la investigación policial para orientar las actuaciones”.

Para la valoración del testimonio y, en especial, la evaluación de la credibilidad de su contenido, el Tribunal Supremo establece tres criterios conocidos (por todas, STS de 2 de diciembre de 2010):

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones entre inculcado e inculcador que puedan llevar a la existencia de un móvil espurio de resentimiento o de enemistad.

b) Verosimilitud del testimonio, en cuanto la misma se deduzca de corroboraciones periféricas.

c) Persistencia en la inculcación, manifestada por su prolongación temporal, por la pluralidad y por la ausencia de ambigüedades y contradicciones.

Aunque estos criterios son de frecuente aplicación en casos de delitos sexuales y en especial, abusos sexuales a menores³⁷⁸, también resultan aplicables a supuestos muy diversos, como señalan Cobo y Sánchez-Vera (2002). La exigencia de tales criterios puede limitar la credibilidad del testimonio aun cuando éste sea cierto y en especial cuando se requiere el cumplimiento del tercero de ellos: la persistencia. Esto puede ocurrir cuando se producen amenazas y coacciones contra las víctimas para que retiren las denuncias, situación muy frecuente en el ámbito de la delincuencia organizada³⁷⁹.

Todas estas limitaciones y dificultades tienen un claro impacto en las escasas cifras oficiales sobre los casos de extorsión. Dadas las características de los procesos extorsivos, se

³⁷⁸ En este sentido, resultan de especial interés los estudios de Manzanero (2001) sobre el análisis de procedimientos útiles para la credibilidad de menores víctimas de agresiones sexuales, y la no muy favorable acogida por parte de jueces y tribunales de justicia de tales procedimientos.

³⁷⁹ Así lo indicaron los expertos en la materia miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

puede afirmar³⁸⁰ que muchos de los casos, aunque se denuncian no llegan a juzgarse³⁸¹. En múltiples ocasiones los delitos que se registran oficialmente se refieren a los medios empleados para intimidar a la víctima: las amenazas, las coacciones, los incendios, etc. Esto se debe a que son delitos menos complejos de probar puesto que no requieren los elementos del tipo penal de extorsión³⁸².

De lo expuesto se deduce que no se contempla la conducta criminal al completo y la judicialización se circunscribe a una parte del fenómeno únicamente, con la consiguiente repercusión en los datos oficiales.

Una vez descritas las principales dificultades para la obtención de datos reales procede conocer los diferentes métodos existentes en la literatura internacional para la medición de la extorsión y, en especial, para la selección de fuentes de información que permitan analizar el fenómeno de la forma más ajustada posible a la realidad.

2. Métodos para medir la extorsión y fuentes de información

Teniendo presentes los importantes problemas que existen para acceder a datos reales y la dificultad para desarrollar los procedimientos de investigación policial y judicial de la extorsión, se exponen a continuación los principales métodos de medición y las fuentes de información que propician el conocimiento del fenómeno en el escenario español, lo cual permitirá identificar las posibilidades de estudio.

³⁸⁰ Siguiendo lo afirmado por los expertos en crimen organizado entrevistados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

³⁸¹ Por lo que no pasan a ser un dato oficial de caso enjuiciado ni a conocerse sentencia pública al respecto.

³⁸² Por ejemplo, en numerosas ocasiones no hay una evidencia clara de la realización de un acto o negocio jurídico, ni siquiera de un desplazamiento patrimonial, como hemos visto en algunos casos del capítulo segundo.

2.1. Métodos de medición de los procesos extorsivos

Se presentan a continuación tres importantes métodos de medición reconocidos internacionalmente, a los que se acompaña el estudio de su aplicabilidad e idoneidad en el ámbito de los procesos extorsivos.

Estos métodos son los siguientes: a) los indicadores, b) las encuestas de victimización y c) las estadísticas oficiales.

2.1. a) Indicadores para medir los niveles de extorsión

Los indicadores son datos que describen la intensidad de un fenómeno y se consideran un método útil para cuantificar de forma breve y concisa determinados conceptos multidimensionales (UNODC, 2013).

Cuando nos enfrentamos a fenómenos complejos que responden a características de distintas dimensiones y disciplinas, como sucede habitualmente en el campo de la seguridad, el empleo de indicadores facilita enormemente la labor para llevar a cabo un estudio objetivo.

En el caso de los procesos extorsivos a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada, debemos tener en cuenta los diversos factores que confluyen en los mismos:

- Factores económicos: dado que se trata de exigencias extorsivas que tienen un fuerte impacto en las empresas victimizadas y las regiones afectadas.
- Factores legales: debido a que el proceso contiene delitos e infracciones contemplados en distintas normativas.
- Factores criminológicos: al tratarse de un fenómeno delictivo y especialmente en el ámbito de la delincuencia organizada.
- Factores sociales: pues afecta a empresarios, familiares y empleados que temen por su integridad física y que, cuando tienen lugar de forma generalizada en una

región, pueden derivar en fenómenos como el silencio social³⁸³ o la intimidación ambiental³⁸⁴, etc.

Es decir, se trata de un fenómeno que abarca diversas ramas del conocimiento.

Actualmente no hay ningún indicador ni índice disponible del que se haya reconocido abiertamente su fiabilidad y validez para medir la extorsión del crimen organizado.

No obstante, existen tres instrumentos de medición de gran relevancia relacionados con este fenómeno.

- El primer instrumento de medición hace referencia a los *Indicadores Mundiales de Gobernabilidad* del Banco Mundial³⁸⁵ que se basan en una serie de indicadores el último de los cuales es el denominado “Control de la Corrupción” que incluye el correspondiente a la extorsión (Rohwer, 2009). Según el Banco Mundial (World Bank, 2015) el indicador llamado “Voz y rendición de cuentas” muestra la medida en que los ciudadanos de un país pueden participar en la elección de su gobierno, midiendo asimismo la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa. El indicador relativo a la “Estabilidad política y ausencia de violencia” hace referencia a la probabilidad de que el gobierno esté condicionado por actos de desestabilización a través de medios inconstitucionales o violentos, incluidos actos de terrorismo. El indicador sobre la “Eficacia del gobierno”, por su parte, está vinculado a la calidad de los servicios públicos, la capacidad de la administración pública y su independencia de las presiones políticas, y la calidad de la formulación de políticas. El indicador de “Calidad del marco regulatorio” tiene en cuenta la capacidad del gobierno para establecer políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. Otro indicador, el definido como “Estado de derecho” hace referencia al grado de confianza de los agentes en las reglas sociales y su nivel de acatamiento, incluidos la calidad del cumplimiento

³⁸³ Como se ha señalado anteriormente en el apartado 2.3. del segundo capítulo de este trabajo, es el silencio al que deben sumarse miembros, colaboradores y víctimas de una organización criminal, que genera un entorno de inseguridad, y deriva en el aislamiento ante el rechazo de las exigencias extorsivas, dando lugar a fuertes reticencias para hacer pública la oposición ante estas prácticas.

³⁸⁴ Se trata de un efecto derivado de actos intimidatorios reiterados por parte de un grupo de autores, que es superior a los efectos intimidatorios de cada uno de los actos, asumiendo un elemento cooperativo que refuerza el mensaje intimidatorio y minimiza la resistencia. Debido a esto, una sola de las conductas llega a ser suficiente para causar los efectos deseados a causa del ambiente de riesgo que se ha creado previamente. Este concepto está más ampliamente expuesto en el apartado 1.3. del segundo capítulo.

³⁸⁵ También denominado en inglés como The World Bank’s Worldwide Governance Indicators (WGI)

de los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como el riesgo de que se puedan cometer delitos. Por último, el indicador correspondiente al “Control de la corrupción” se refiere a la medida en que se ejerce el poder público en beneficio privado, incluidas las modalidades de corrupción a pequeña y gran escala, así como al control del Estado por minorías selectas o élites.

La mayor limitación en materia de prácticas extorsivas a las empresas es que se centra en gran medida en la corrupción entre el sector público y privado, y no permite distinguir la dimensión de la extorsión en el sector privado de forma exclusiva, ni si la autoría del delito se produce por parte de organizaciones ilegales.

- El segundo instrumento de medición consiste en el *Índice de Percepción de la Corrupción* (IPC) de Transparencia Internacional (TI)³⁸⁶. Este índice está compuesto por varios indicadores, que agregan fuentes de información diversas, lo cual tiene una gran fortaleza: poder resumir mucha información contrasta con la dificultad de mantener la claridad conceptual del fenómeno que se quiere medir (Rohwer, 2009). Concretamente el IPC mide los niveles de corrupción del sector público, percibido por los ciudadanos, se elabora a partir de 13 fuentes de datos, e incluye la extorsión como actividad dentro de la corrupción (Lambsdorff, 2007; Transparencia Internacional, 2016). Para ello, se obtiene información relacionada con la corrupción a partir del testimonio ofrecido por expertos en este tipo de delito y de las empresas victimizadas. Este proceso para recabar información se lleva a cabo en distintas instituciones (Rohwer, 2009), lo cual resulta de gran interés para el fenómeno que se pretende analizar. Ahora bien, el contenido sobre el sector público no incluye los procesos extorsivos a empresas, por lo que su uso no es pertinente para el presente estudio.
- El tercer instrumento de medición es la dimensión de las *Actividades de los grupos de crimen organizado*. Una dimensión es una parte de un índice compuesto. En este caso, hace referencia a un intento de medir el crimen organizado a través de índices compuestos³⁸⁷. Savona (2014) trató de evaluar diversas características y actividades

³⁸⁶ Más conocido en su traducción inglesa como Transparency International's (TI) Corruption Perceptions Index (CPI).

³⁸⁷ Idea ya propuesta abiertamente por Van Dijk et cols. (2007) aunque no en el mismo grado de concreción.

del crimen organizado de la manera más completa y fiable posible a través de cuatro dimensiones³⁸⁸, una de las cuales incluyó la extorsión, la denominada *Actividades de los grupos de crimen organizado*. Es un indicador de gran interés puesto que, aunque la falta de información disponible restringió de forma contundente la medición de su magnitud. La complejidad del estudio requirió aplicar una metodología específica para acotar la información y extraer un gran número de indicadores ajustándolos a unos cuantos parámetros útiles. Savona (2014) resolvió esta situación implementando un solo índice en cada dimensión y obteniendo un valor medio de todos los indicadores una vez estandarizados. Como resultado, se obtuvieron 17 índices para medir el nivel de crimen organizado.

La principal limitación que presenta el estudio viene señalada en su conclusión: “*en este escenario cabe destacar las dificultades y debilidades en el proceso de recopilación de datos*” (Savona, 2012, p. 34).

Los *indicadores* (así como los índices y las dimensiones) son una fórmula concisa de medir un fenómeno multidisciplinar (UNODC, 2013), pero estos instrumentos no resultan aplicables en este supuesto debido a la falta de disponibilidad de datos suficientes sobre la extorsión y, como ya se ha mencionado, a la escasez de denuncias relativas a la conducta punible consistente en el uso de la violencia y la intimidación, lo que convierte a este tipo de delitos en uno de los más invisibles (Lisciandra, 2014).

Así, aunque mediante los tres instrumentos de medición se trató de recoger información sobre extorsiones de forma agregada a otros fenómenos, la falta de datos limitó de forma determinante la medición de tal fenómeno. Esto se debe a que los datos sobre este tipo de actividades se suelen medir a través de la información obtenida de operaciones policiales y judiciales y, en caso de existir, de estadísticas oficiales. Pero en el escenario de la extorsión, el acceso a los datos está especialmente limitado por la falta de denuncias a causa de los efectos intimidatorios del fenómeno extorsivo (Savona, 2014). Por esta razón, y derivado de lo expuesto en el apartado anterior, tampoco resulta aplicable al ámbito español.

³⁸⁸ Las cuatro dimensiones se refieren a: a) los grupos (su tamaño, su estructura, sus características, las relaciones entre ellos y los *modus operandi*), b) las actividades (tráfico de drogas, tráfico de armas, blanqueo de capitales, actividades no criminales, extorsión y secuestro, entre otras), c) la respuesta del Estado (fuerzas de seguridad y sistema judicial) y c) los facilitadores (corrupción, desigualdad social, factores económicos, falta de gobernanza y estado de derecho).

2.1. b) Encuestas de victimización de extorsiones

Las encuestas de victimización preguntan directamente a la población sobre sus experiencias con los delitos, aportando una información muy valiosa; por esta razón actualmente están muy reconocidas³⁸⁹, incluso para medir los delitos contra las empresas.

Aunque las encuestas de victimización han empezado a emplearse bastante tarde como metodología en investigaciones criminológicas (UNECE-UNODC, 2010), actualmente se ha convertido en un método que se está proponiendo de forma constante como elemento clave en las políticas criminales (Stangeland y Muñoz, 2010).

Entre las ventajas de las encuestas de victimización destacan tanto la posibilidad de conocer los delitos no denunciados y no recogidos por las estadísticas para medir la victimización múltiple e identificar el miedo al delito, como el grado de satisfacción de los ciudadanos con la actuación policial. Además, las encuestas de victimización pueden ayudar a identificar la diferencia que existe entre los delitos denunciados y los que no lo han sido.

Algunos de los más prestigiosos estudios de victimización relacionados con delitos a las empresas, han sido llevados a cabo por grandes compañías privadas³⁹⁰.

Concretamente, tomando la extorsión como un delito contra las empresas, existe la Business Crime Survey (en adelante, BCS por sus siglas en inglés) para desarrollar encuestas nacionales e internacionales en este ámbito (Dijk et cols., 2008). Dentro de sus posibilidades de implementación, se han definido cuatro metodologías aplicables a diferentes entornos (Giesen et cols., 2012):

- CAPI³⁹¹, también conocida como entrevista cara-a-cara. Esta metodología permite guardar las respuestas en un ordenador mientras se desarrolla la entrevista.
- CATI³⁹², en la que se entrevista por teléfono o a través de un cuestionario virtual en el ordenador donde se pueden guardar las respuestas.

³⁸⁹ Así lo ponen de manifiesto los estudios de Sparks et cols. (1977), Alvazzi del Frate (2004), Aebi y Linde (2010), Mugellini (2013) y Lisciandra (2013).

³⁹⁰ Tales como KPMG (2004); Ernst and Young (2010) y PWC (2010), que tienen un claro interés en reducir los costes que suponen la victimización de sus negocios a través de estudios que les permitan detectar las problemáticas y posibles soluciones.

³⁹¹ Por sus siglas en inglés Computer Assisted Personal Interviewing.

³⁹² Computer Assisted Telephone Interviewing.

- CAWI³⁹³, en la que se responde a un cuestionario por internet.
- PAPI³⁹⁴, este modelo utiliza cuestionarios de papel para que los entrevistados respondan por sí mismos con lápiz o bolígrafo. Normalmente se envían por correo postal o se responden delante del entrevistador que posteriormente los recoge.

Resulta de interés destacar las ventajas y debilidades de cada metodología de encuesta:

Tabla 5. Resumen de las características relevantes de las cuatro metodologías: ventajas y desventajas.

Metodología	Ventajas	Desventajas
CAPI (Computer-assisted personal interviewing)	Se pueden emplear una gran variedad de preguntas y se puede enseñar material al encuestado.	Presenta fuertes limitaciones geográficas. Es muy costosa.
CATI (Computer-assisted telephone interviewing)	Es rápida y no tiene limitaciones geográficas.	No se puede llegar a cierta población objeto de estudio. Es muy costosa.
CAWI (Computer Aided Web Interviewing)	No tiene limitaciones geográficas, se adapta bien a diferentes áreas geográficas y los encuestados pueden realizar la encuesta en el momento que quieran.	Al realizarse a través de internet, es obligatorio proteger los datos, lo cual requiere un trabajo adicional (legal y técnico). Por otro lado, algunos ciudadanos están poco representados ya que existen colectivos con difícil acceso o manejo de internet.
PAPI (Paper and Pencil Interviewing)	Se puede enseñar material al encuestado.	Fuertes limitaciones geográficas. Es muy costosa.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DJS Research (2005).

Además, según los estudios revisados³⁹⁵, las tipologías de entrevista CAPI y la PAPI son muy costosas, y han demostrado reiteradamente que terminan siendo poco efectivas, ya que, debido al formato personalizado, en temas de victimización las personas encuestadas prefieren no responder. La tipología CAWI es difícil de implementar cuando la población objetivo son pequeñas y medianas empresas que no tienen un desarrollo tecnológico muy elevado. Finalmente, muchos estudios recomiendan la CATI, aunque en términos de porcentaje de respuestas también resulta poco efectiva.

Teniendo en cuenta las características de las distintas metodologías, es necesario también conocer aquellos estudios que han desarrollado encuestas de victimización a las

³⁹³ Computer Assisted Web Interviewing.

³⁹⁴ Paper and Pencil Interviewing.

³⁹⁵ UNECE-UNODC (2010) y Giesen et cols. (2012).

empresas y que además han incluido la extorsión en sus contenidos. Para ello se ha realizado una revisión documental a partir de la cual se ha elaborado la siguiente tabla:

Tabla 6. Estudios europeos que incluyen la extorsión en sus encuestas de victimización de empresas.

Encuesta	Año de recopilación de datos	Localización	Delitos recogidos
Commercial Victimization Survey	1994, 2002	Reino Unido	Asalto, soborno, extorsión, fraude, robo y robo de vehículos, y vandalismo (sectores minoristas y manufactureros).
Crimes against Business Survey	1994	Finlandia	Soborno, extorsión, fraude, robo y robo de vehículos, vandalismo y daños, violencia en el lugar de trabajo.
International Commercial Crime Survey (ICCS)	1994	Europa*	Asalto, soborno y corrupción, extorsión e intimidación, fraude, robo, robo de vehículos y vandalismo.
Crimes against Business Survey	1997	Estonia	Soborno, extorsión, fraude, robo, robo de vehículos, vandalismo y violencia en el lugar de trabajo.
National Business Crime Survey	Bianual desde 1998	Irlanda	Asalto y acoso, robo, fraude con tarjeta de crédito/cheque, extorsión, fraude, vandalismo y daños.
International Crime against Business Survey (ICBS), Central Eastern Europe	1999	Europa del Este**	Asalto, soborno y corrupción, extorsión e intimidación, fraude, solicitud de protección de dinero, robo, robo de vehículos y vandalismo.

Fuente: elaboración propia a partir de Broadhurst, et cols. (2011)

* República Checa, Franca, Alemania Hungría, Italia, Países Bajos, Suiza, Reino Unido.

** Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Rumanía, Rusia, Ucrania.

En todos los casos se trata de estudios generales sobre victimización a las empresas, donde los procesos extorsivos son una parte de la encuesta, y sobre los que no se especifica ninguna otra variable más que la incidencia. Excepto en Finlandia (81%), la tasa de respuesta a estas encuestas de victimización ha sido realmente baja (entre el 15 y el 25% en términos generales).

Dos interesantes estudios ponen de manifiesto las dificultades de la implementación de esta notable metodología en el entorno de la victimización de empresas mediante procesos extorsivos perpetrados en el ámbito de la delincuencia organizada:

- Tilley y Hopkins (2008) afirman en un importante estudio sobre delitos a empresas denominado “EU Falcone”, que el análisis de la victimización en el ámbito italiano fracasó a causa de la pequeña muestra y la aún menor tasa de respuesta: sólo 10 de 79 compañías multinacionales respondieron el cuestionario.
- Un relevante estudio piloto sobre la implementación de encuestas de victimización de empresas, llevado a cabo en el año 2012 (Dugato et cols. 2013) aplicó las metodologías CATI (entrevista telefónica) y CAWI (cuestionario web), entrevistó telefónicamente a más de 19.000 empresas, de las que unas 7.800 dijeron ser víctimas de un delito en el último año, y de las cuales finalmente 2.800 completaron el cuestionario virtual. Lo cierto es que la extorsión ³⁹⁶se encontró entre los delitos de menor prevalencia registrada (1%) junto con la corrupción (1%), la usura (1%), además el propio estudio señala que el 31% de los encuestados percibe la extorsión como casi inexistente, con la misma la incidencia que el crimen organizado en materia de extorsión por protección. Este estudio sitúa a España por debajo de la media europea en prevalencia detectada de extorsiones (0.3%) y coincidente con la media europea en la extorsión por protección (0.5%).

Si bien los resultados de las encuestas de victimización a empresas y los estudios sobre percepción en materia de crimen organizado tienen un gran potencial, la implementación de estos requeriría una fuerte inversión de tiempo.

2.1. c) Estadísticas oficiales de extorsión

Las estadísticas oficiales de extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada serían de gran ayuda para el estudio del fenómeno ya que, como consecuencia de la falta de denuncias, actualmente no existen datos oficiales que aporten conocimiento en esta materia (Giménez-Salinas et al., 2009). De hecho, importantes informes sobre crimen organizado como los de Europol (SOCTA, 2013 y 2017) o estadísticas sobre delincuencia en la Unión Europea como Eurostat no cuentan con cifras ni datos comparados de actividades concretas del crimen organizado.

³⁹⁶ Extorsión básica sumada a la extorsión por protección, que en el estudio de Dugato et cols. (2013) se mide por separado, denominando a la segunda “protection money” (dinero por protección).

En el ámbito nacional la situación es similar³⁹⁷, pues no disponemos de datos sobre actividades del crimen organizado ni informes relacionados con la materia que posibiliten un estudio profundo de la materia.³⁹⁸ Ahora bien, a falta de datos estadísticos, la información policial y judicial de los incidentes extorsivos aportará una información cualitativa de gran interés para el análisis de los procesos que nos ocupan.

2.1. d) Estudio de casos

El estudio de casos es una metodología bastante extendida en las ciencias sociales, que se basa en el estudio en profundidad de los hechos y donde el tamaño de la muestra puede reducirse atendiendo a los objetivos específicos de la investigación (Yin, 2009). Se trata de un método empírico que investiga casos reales de fenómenos contemporáneos y complejos, combinando diferentes fuentes de información.

Aunque esta metodología presenta fuertes limitaciones de representatividad, resulta realmente útil y eficaz en las investigaciones siempre y cuando se encuentren fuentes de información fiables para la recopilación de casos reales. En el supuesto de las extorsiones a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada se trataría de un estudio exploratorio dada la ausencia de antecedentes en la materia (Rusev et cols., 2016), para lo cual se requeriría un estudio sobre las fuentes de información accesibles, el protocolo de recogida de información, el procedimiento de selección de casos y los análisis cualitativos a realizar.

Pues bien, como se ha expuesto anteriormente, no existe por el momento una fórmula igual de fiable y válida para medir los niveles que alcanzan los delitos de extorsión como los que se aplican a otro tipo de delitos, y mucho menos si se trata de procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada. Sin embargo, a pesar de los enormes obstáculos que existen para el estudio de las actividades del crimen organizado, los indicadores compuestos y las encuestas de victimización han sido dos herramientas consideradas muy útiles para analizar el

³⁹⁷ Se ha comentado la situación de esta cuestión en el escenario español en el apartado 1.1. a) del presente capítulo.

³⁹⁸ Así se pone de manifiesto en investigaciones como en Jordá y Requena (2013), Jordá et cols. (2014) y Jordá y Giménez-Salinas (2015), todos ellos analizan diferentes actividades del crimen organizado a partir de la recopilación de datos policiales y judiciales, argumentando la ausencia de estadísticas oficiales.

fenómeno³⁹⁹ de la extorsión, además de los ya citados documentos judiciales y policiales⁴⁰⁰. Así, los indicadores podrían ser una forma de medir la extorsión a nivel nacional e internacional sin entrar en el detalle del fenómeno, las encuestas aportarían resultados más representativos y las estadísticas un mayor nivel de información periódica sobre victimización y respuesta represiva.

La combinación de más de una metodología, como por ejemplo la información policial relacionada con indicadores⁴⁰¹ o con encuestas a las víctimas⁴⁰² también ha sido una opción muy característica de la literatura científica en la materia abordada.

Ahora bien, dadas las ya comentadas limitaciones de acceso a los datos necesarios para la elaboración de indicadores, la dificultad para la implementación de encuestas de victimización, a las que se añade la falta de estadísticas oficiales sobre la materia, parece que el estudio de casos es la única metodología aplicable que puede cumplir con los propósitos exploratorios del análisis empírico de la extorsión a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada. Para diseñar la investigación de forma completa, se deben conocer previamente las fuentes de información disponibles, que se analizan a continuación.

2.2. Las fuentes de información sobre extorsión

Se presentan a continuación las principales fuentes de información para el estudio de la extorsión, analizando brevemente su aplicabilidad al objeto de estudio.

2.2. a) Información bibliográfica

A la vista de la revisión de la literatura científica relacionada con la materia, detallada en el primer capítulo de la presente tesis, se constata que la información bibliográfica resulta escasa, especialmente la referida al escenario español. Sin embargo, aunque es claramente

³⁹⁹ Aplicadas y así consideradas por Bezlov et cols. (2006), Van Dijk et cols., (2008), Dugato et cols., (2013), y Mugellini (2013).

⁴⁰⁰ En su estudio, La Spina (2014) aplica una metodología muy completa a partir de una base de documentos policiales y judiciales sobre la mafia.

⁴⁰¹ Aplicado por Kaufmann et cols. (2010) en el ámbito de la gobernanza.

⁴⁰² La suma de información policial y encuestas a las víctimas y afectados ha sido aplicada por Tilley y Hopkins (2008) en materia de delitos a empresas y supone una combinación de gran interés en los aspectos preventivo y reactivo.

insuficiente para constituir una verdadera fuente de información útil, sí lo es como marco teórico del estudio.

2.2. b) Información estadística

Como ya se ha mencionado en la metodología, la información de encuestas de victimización o datos oficiales de instituciones públicas no constituyen una fuente información útil⁴⁰³ en materia de extorsión, fundamentalmente por la carencia de denuncias.

2.2. c) Noticias de prensa

La falta de denuncias no tiene que llevar aparejada la ausencia de reportajes de prensa. En ocasiones, los periodistas ponen de manifiesto problemáticas desde el punto de vista social, como resultado de las investigaciones periodísticas o de la explotación de operaciones policiales contra el crimen organizado.

Así, por ejemplo, Ellis (2013) pone en evidencia determinadas actividades del crimen organizado en Latinoamérica entre las que destacan las extorsiones a pequeños empresarios gracias a informaciones de prensa abierta. Si bien esta fuente no parece aportar información de gran profundidad, lo cierto es que al menos advierte de forma rápida y actual sobre posibles problemas que no salen a la luz por miedo a probables venganzas tras la denuncia y a la falta de confianza en las autoridades policiales y judiciales.

2.2. d) Información policial e información judicial

El análisis de la información policial y judicial disponible ha sido la única fuente de información que, de momento, ha permitido estudiar la extorsión proveniente del crimen organizado con datos fiables, debido a que estos análisis aportan una visión más real del fenómeno⁴⁰⁴.

Ambas fuentes, policial y judicial, permiten un doble objetivo: a) aprovechar el conocimiento experto de los profesionales que pueden aportar información cualitativa de gran

⁴⁰³ Tampoco parece de interés analizar la delincuencia autorrevelada como fuente de información en materia de crimen organizado (Giménez-Salinas et al. 2009).

⁴⁰⁴ Así lo exponen Albanese (2011), Lisciandra (2014) y La Spina (2014).

profundidad e interés en el ámbito de la lucha y la prevención, y b) identificar casos reales a partir de atestados policiales o resoluciones judiciales.

En múltiples ocasiones, estos estudios han venido acompañados de entrevistas a expertos que aportan información contextual en el análisis de fenómenos con pocos antecedentes en la literatura científica y, de forma paralela, suponen una fuente adicional de información descriptiva del entorno de los casos concretos. Los estudios cualitativos que tratan de medir las extorsiones e intentan cuantificar el dinero y los bienes objeto de esta práctica, en ocasiones también incluyen entrevistas sobre la percepción que las empresas tienen acerca de la propagación de la extorsión en un territorio específico, como es el estudio de La Spina et cols (2014). Los autores afirman que los análisis cualitativos de documentos judiciales aportan una visión más real de la magnitud de este fenómeno.

Actualmente existen dos líneas de análisis en este ámbito:

- Los análisis de documentos de fuentes policiales y judiciales.
- Las entrevistas a víctimas de extorsiones, a jueces, a policías y a miembros de asociaciones antimafia, entre otros colectivos.

De esta manera, Albanese (2011) centra su análisis en las extorsiones perpetradas por el crimen organizado, estudiando documentos policiales con el fin de explicar el fenómeno en Estados Unidos. En cambio, Lisciandra (2014) combina evidencias de la investigación policial y judicial con encuestas de victimización, para estimar el volumen de la recaudación económica obtenida por el crimen organizado dedicado a la extorsión.

Cabe destacar que los documentos de los casos policiales relacionados con las actividades delictivas de grupos organizados, entre los que se encuentra el delito de extorsión, pueden aportar un resultado global fiable, especialmente si se combina con otras metodologías como las encuestas de victimización (Tilley y Hopkins, 2008) o los indicadores compuestos (Kaufmann et cols., 2010). Asimismo, las entrevistas con expertos pueden aportar información muy útil relacionada con las prácticas extorsivas del crimen organizado⁴⁰⁵ (La Spina et cols., 2010).

Frecuentemente, las entrevistas implementadas son *semiestructuradas*: el investigador

⁴⁰⁵ Además, las entrevistas con jueces y fiscales pueden aportar información de interés sobre las dificultades en la persecución del delito de extorsión por parte de grupos de crimen organizado en contraste con los perpetrados por autores no organizados.

cuenta con un pequeño guion de preguntas que contienen la información relevante que busca, pero se trata de cuestiones abiertas sobre las que el experto tiene la oportunidad de aportar matices o relacionar diversos temas. Este tipo de entrevistas proporciona más información que la *estructurada*, que cuenta con una serie de preguntas de respuesta muy breve (especialmente cuando se trata de un estudio exploratorio o sobre el que se tiene poca información), pero no tan amplia como la entrevista *en profundidad*, que da más margen a los temas a abordar en el guion de la entrevista, dado que los expertos no suelen contar o no pueden aportar información demasiado detallada de la materia.

En el escenario español, el estudio de fenómenos criminológicos mediante datos obtenidos a partir de investigaciones policiales no es nuevo, así lo hicieron De la Corte (2007) en su análisis sobre terrorismo o Giménez-Salinas et al. (2009) en su trabajo sobre crimen organizado, como tampoco lo es su combinación con información de resoluciones judiciales, como implementó Jordán (2009) en su estudio sobre terrorismo. De hecho, las aportaciones de tales documentos arrojan luz sobre los complejos análisis de los fenómenos señalados, acerca de los que es realmente difícil recabar información mediante otras fuentes⁴⁰⁶.

Así, la información policial suele consistir en los datos contenidos en los atestados policiales de operaciones llevadas a cabo en el marco de la lucha contra el fenómeno objeto de estudio o sobre incidentes (hechos supuestamente delictivos) recogidos por los cuerpos policiales para proceder a su judicialización, en su caso⁴⁰⁷.

En cambio, la información judicial suele versar sobre sentencias (u otro tipo de resoluciones) que dan respuesta a los casos policiales judicializados, a partir del pronunciamiento del órgano judicial pertinente en cada caso⁴⁰⁸.

Estas ricas y fiables fuentes de información permiten, por un lado, conocer los hechos recogidos en el atestado o probados en la sentencia y, por otro lado, identificar la respuesta legal

⁴⁰⁶ Puede ser debido a la dificultad de acceso a la información por la confidencialidad de los datos o a la escasa fiabilidad de las fuentes abiertas, entre otros motivos.

⁴⁰⁷ Aunque existen otros tipos de documentos policiales como los cuestionarios del CICO/CITCO, que responden brevemente a preguntas sobre el caso policial, o los Informes de explotación (también denominados INFEX), que son resúmenes de atestados muy valiosos, pues “este tipo de informes sintetizan el contenido, pero aportando información relevante sobre los hechos delictivos, cómo se averiguaron estos hechos, personas implicadas, detenidos, actuaciones policiales determinantes, lecciones aprendidas para un futuro, etc.” (Jordá et cols., 2013, p.443).

⁴⁰⁸ En el punto 4.3 del segundo capítulo del presente trabajo se exponen de forma sucinta los diferentes órganos de enjuiciamiento atendiendo a los principales procedimientos penales.

dada, bien en los delitos contenidos en los documentos policiales o bien en los tipos penales aplicados por el órgano judicial. Resulta, por tanto, una fuente de información de gran interés para el estudio que se presenta.

Una vez identificados los diferentes métodos de medición y las fuentes de información, resulta de interés una breve aproximación al fenómeno que nos permita concretar los principales objetivos del estudio.

Pues bien, dada la significativa carencia de antecedentes en la materia, resulta pertinente implementar un estudio preliminar sobre la extorsión a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada en España que suponga una primera aproximación al fenómeno, para posteriormente profundizar en los campos donde el estudio indique que pueden aportar más información⁴⁰⁹.

3. Aproximación a la extorsión a empresas en España: estudio preliminar

Lo cierto es que la información oficial disponible en la actualidad resulta insuficiente para estudiar a estos grupos con precisión (Giménez-Salinas et cols., 2009), y esta tarea se hace especialmente difícil cuando se pretende analizar los grupos dedicados expresamente a victimizar a las empresas.

Puestas de manifiesto de forma reiterada las enormes dificultades del acceso a datos oficiales y la falta de literatura científica en materia de procesos extorsivos a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada en España, resulta pertinente elaborar un breve estudio exploratorio para detectar su incidencia en sectores y comunidades específicas. Para ello, se ha implementado un conciso estudio específico⁴¹⁰ mediante el que se trata de contextualizar tanto

⁴⁰⁹ Esto se debe a que la carencia de información es la constante que impide un diseño metodológico con una muestra de mayor tamaño, tal como se expone a lo largo del apartado segundo del presente capítulo.

⁴¹⁰ Este análisis se llevó a cabo en el marco del proyecto de investigación CEREU: Countering Extortion and Racketeering in the EU, donde se analizó una breve muestra de casos de estudio para obtener una visión general de comunidades y factores afectados y poder identificar así las posibilidades metodológicas de un

a los principales mercados ilegales y grupos que actualmente operan en España como a los colectivos y sectores más afectados por las prácticas extorsivas.

Ello permitirá un doble objetivo: a) conocer el contexto de las extorsiones en España, y b) elegir un sector y una comunidad específicos atendiendo al contexto y a la posibilidad de acceder a datos.

Tal estudio preliminar se ha llevado a cabo empleando dos fuentes de información a) la información periodística, a través del análisis de noticias de prensa de dos periódicos: El Mundo y El País, y b) la información policial, mediante el examen de documentos policiales (Informes de explotación y cuestionarios del CICO/CITCO) y de las entrevistas a expertos⁴¹¹.

La recopilación de casos de operaciones policiales contra organizaciones criminales que empleaban métodos extorsivos como actividad principal, secundaria o instrumental finalizó con la recopilación de una muestra de 61 casos (N=61). Esta muestra se combinó con las aportaciones de las entrevistas realizadas a expertos en crimen organizado y en extorsiones, así como a diferentes agentes que habían intervenido en importantes operaciones contra organizaciones criminales de distintas nacionalidades, tales como la china o la colombiana. Los resultados del estudio se presentan a continuación.

A modo de introducción, cabe señalar que la mayor parte de las organizaciones detectadas (89%) se dedica a la extorsión como principal actividad ilegal, mientras que para el resto de los grupos es una actividad secundaria, que combinan con blanqueo de dinero, robos o tráfico de drogas (especialmente cocaína).

Seguidamente se presentan los principales sectores victimizados en los procesos extorsivos identificados.

abordaje más completo, para lo que se emplearon tanto fuentes abiertas como entrevistas a expertos de Guardia Civil y Policía Nacional.

⁴¹¹ Entrevistas a expertos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el marco del proyecto de investigación europeo denominado CEREU, Countering Extortion and Racketeering in EU, cofinanciado por la Comisión Europea. Este aspecto se explica con mayor detalle en el apartado 2.3.c) del capítulo cuarto del presente trabajo: se realizaron entrevistas a cuatro miembros de la Policía Nacional expertos en extorsiones y cuatro miembros de la Guardia Civil expertos en extorsiones, a un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado, y un miembro de la Guardia Civil experto en crimen organizado, a un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado chino, dos miembros de la Guardia Civil expertos en crimen organizado chino y un académico experto en cultura china.

3.1. Principales sectores victimizados

Del estudio realizado, se desprende que, en los casos relativos a empresas victimizadas, hay tres sectores especialmente afectados:

a) Comercios y establecimientos minoristas (36%): pequeñas tiendas, tiendas de barrio y pequeñas y medianas empresas que son victimizados a través de exigencias de dinero o de amenazas para adquirir productos a menor precio.

b) Establecimientos de ocio (26%) y turismo (8%), principalmente bares, pubs o clubs nocturnos, a los que se exige un pago por ubicarse en una zona de control de la organización criminal, o el cumplimiento de unas condiciones impuestas por la misma. En este entorno, la corrupción de autoridades policiales y judiciales es un elemento clave en la eficacia de las exigencias extorsivas.

c) Empresas de cobro de deudas (19%) que ofrecen servicios de recaudación a empresas a las que posteriormente extorsionan, es decir, estos grupos se aprovechan tanto de las empresas deudoras (exigiéndoles más dinero que el que adeudan) como de las acreedoras, a quienes demandan pagos utilizando para ello violencia e intimidación.

Aunque con menor incidencia, hay otros tres sectores que también se ven afectados por la extorsión: en primer lugar, se encuentra el sector mayorista (4%) como víctima de las extorsiones, éstas buscan una reducción del precio de los productos (pe.: en el mercado de la fruta). En segundo lugar, la extorsión dentro del sector de la construcción (4%), generalmente la organización pretende que algunos integrantes sean contratados como personal de seguridad privada. Recientemente este sector se ha visto muy perjudicado por a la crisis económica española, motivo por el cual las organizaciones criminales han desplazado sus actuaciones⁴¹² a sectores y actividades más rentables como, por ejemplo, el sector turístico y las actividades extorsivas para el cobro de deudas. En tercer y último lugar, la extorsión a empresas con dificultades económicas (3%), que suponen una oportunidad de negocio para los grupos organizados extranjeros que tienen por objetivo blanquear dinero, puesto que pueden comprar dichas empresas extorsionando a sus dueños y luego implementar diferentes mecanismos de delincuencia económica para dar apariencia legal al dinero obtenido de forma ilegal a través de otras actividades.

⁴¹² Según el experto en crimen organizado entrevistado de la Policía Nacional.

3.2. Principales nacionalidades afectadas

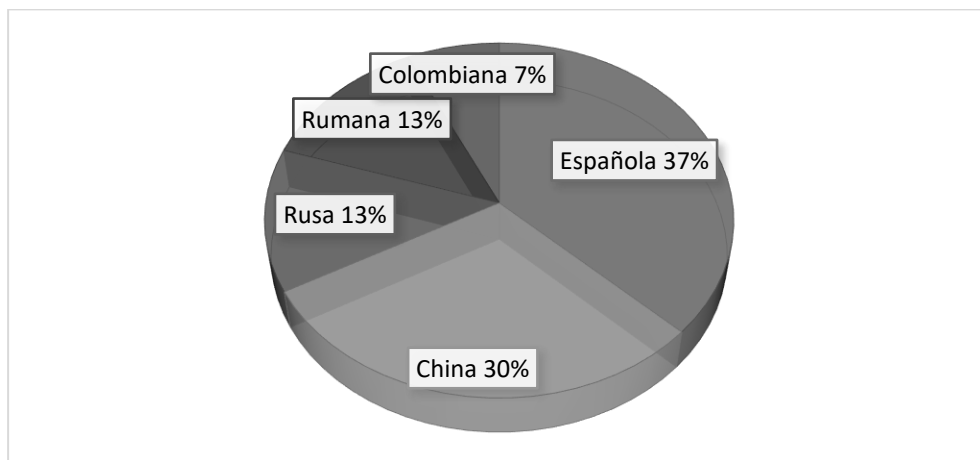
Las organizaciones criminales dedicadas a extorsión incluidas en la muestra (N=61) pertenecen principalmente a dos nacionalidades: a) la española (24%) vinculada con fraudes y deudas ficticias y b) la china (24%) grupos relacionados sobre todo con extorsiones a empresas pequeñas y con préstamos ilegales en casinos.

El resto de los grupos (28%) formados por una única nacionalidad⁴¹³, son italianos (7%) y rusos (6%) que se encuentran implicados en extorsiones instrumentales para blanquear dinero, rumanos (11%) que emplean la extorsión para conseguir contratos de seguridad; y colombianos (4%) que cometen extorsiones generalmente relacionadas con el cobro de deudas procedentes del tráfico de drogas.

Además, el 24% de los grupos identificados, considerando la muestra completa (N=61), están integrados por miembros pertenecientes a distintas nacionalidades: son españoles, latinoamericanos y europeos del Este.

El objetivo principal del estudio preliminar consiste en identificar concretamente a los colectivos más afectados por la extorsión, es decir, aquellos en los que autores y víctimas de los procesos extorsivos comparten nacionalidad. Los casos de la muestra incluidos en tal supuesto se reducen a la mitad (n=30), siendo las principales nacionalidades afectadas por la extorsión: la española, la china, la rusa, la rumana y la colombiana, como muestra la siguiente ilustración.

Ilustración 3. Nacionalidades más afectadas por la extorsión del crimen organizado en España.



Fuente: elaboración propia con casos oficiales de acceso público (N= 30).

⁴¹³ Es decir, aquellos grupos cuyos integrantes comparten la misma nacionalidad.

Debido a la importancia que tiene el análisis del perfil de las comunidades afectadas por la extorsión, a continuación, se describen las principales características de autores y víctimas de los grupos que comparten nacionalidad.

Para ello, si bien no se ha podido disponer de datos cuantitativos significativos sobre estas particularidades, la información cualitativa aportada por los expertos⁴¹⁴ ha resultado de gran valor para su conocimiento.

I) Nacionalidad española

Las organizaciones criminales españolas dedicadas a extorsionar a españoles (n=11) tienen una media de 8 integrantes. Generalmente su actividad principal es la extorsión, aunque con frecuencia esta es una fuente de financiación destinada al tráfico de drogas, que constituye la otra actividad ilegal preferente. Estos grupos extorsionan a los negocios exigiendo unos pagos que luego emplean como inversión en la adquisición de drogas, para posteriormente venderlas de forma ilegal y obtener importantes beneficios.

Las comunidades autónomas más afectadas son Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía, aunque se han localizado grupos dedicados a actividades extorsivas en otras comunidades autónomas de España como Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Cantabria. Además, en ocasiones, aunque los grupos tengan una sede física localizada, son capaces de actuar de forma simultánea en varias ciudades e incluso en varias comunidades autónomas.

Por su parte, los sectores más afectados son el comercio minorista, los establecimientos del sector turístico y los de ocio. Se trata de pequeños negocios de venta al público relacionados con la restauración y el ocio nocturno, como bares de copas, restaurantes turísticos, locales de música, etc. El método de extorsión consiste en intimidar, mediante de amenazas de muerte y con el uso de la violencia, a pequeños negocios y empresas minoristas para que paguen por su seguridad, a veces exigiendo la realización de un contrato laboral como vigilante de seguridad a un integrante de la organización, bajo amenazas de sabotaje y de provocar peleas en los locales

⁴¹⁴ Se realizaron entrevistas a cuatro miembros de la Policía Nacional expertos en extorsiones y cuatro miembros de la Guardia Civil expertos en extorsiones, a un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado, y un miembro de la Guardia Civil experto en crimen organizado, a un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado chino, dos miembros de la Guardia Civil expertos en crimen organizado chino y un académico experto en cultura china

nocturnos. Otros delitos que estos grupos perpetran habitualmente son el tráfico de influencias, las detenciones ilegales, los secuestros exprés, y el blanqueo de capitales. Las áreas más perjudicadas por estos delitos son las zonas turísticas de Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid y Galicia.

Además, según las fuentes entrevistadas⁴¹⁵, los grupos extorsivos también se dedican al cobro de deudas. Se trata de un *modus operandi* muy similar al del sector turístico, pero en el contexto de una deuda entre empresas. Se ofrecen servicios de cobro del dinero adeudado, pero los grupos criminales no devuelven la deuda a su acreedor, llegando incluso a extorsionar a su propio contratante. Esta forma de operar está extendida por todo el territorio, aunque los casos identificados se ubican en Navarra, Cataluña y Andalucía.

II) Nacionalidad china

Las organizaciones criminales chinas dedicadas a extorsionar a sus propios compatriotas (N=9) son generalmente de gran tamaño, pues cuentan con unos 21 miembros de media. Se trata de organizaciones jerárquicas con tareas claramente definidas, que cuentan con ramas específicas dedicadas principalmente a la extorsión, siendo el blanqueo de capitales otra de sus actividades relevantes. Según los expertos⁴¹⁶, entre las actividades secundarias de estos grupos destacan la prostitución, los secuestros y el tráfico de drogas.

Además, es habitual que las organizaciones de mayor tamaño realicen simultáneamente trabajos de cobro de deudas, aunque también se han identificado grupos que subcontratan a compatriotas para realizar este tipo de actividades o que se especializan ramas delictivas dentro de su propia organización.

Las áreas más afectadas por las acciones de estos grupos son las zonas industriales de Madrid y los barrios multiculturales de Barcelona.

En este escenario, cabe destacar que los negocios minoristas asiáticos, comúnmente bazares y restaurantes, suelen ser víctimas situadas en áreas geográficas muy localizadas en zonas industriales situadas en de Madrid y Barcelona; en estos casos el entorno puede ser un

⁴¹⁵ Un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado, y un miembro de la Guardia Civil experto en crimen organizado.

⁴¹⁶ Un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado chino, dos miembros de la Guardia Civil expertos en crimen organizado chino y un académico experto en cultura china.

elemento facilitador de la revictimización. Para estas víctimas, las diferencias culturales y de lenguaje suponen un gran obstáculo a la hora de presentar una denuncia, por lo que en la mayoría de los casos su número es prácticamente desconocido.

II) Nacionalidad rusa

Las organizaciones criminales rusas dedicadas a extorsionar a compatriotas asentados en España (n=4) también son de gran tamaño, con una media de 27 integrantes, de los que una parte se encuentra ubicada en países de la antigua Unión Soviética. Estos grupos criminales se centran en el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas en su país de origen, por lo que el delito de extorsión es un medio para alcanzar sus objetivos, no una actividad principal.

Las zonas más afectadas por estos grupos son las Islas Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque también se han detectado ramificaciones en otras zonas de la Península.

Existen organizaciones criminales rusas integradas en el mercado legal con el propósito de blanquear en España el dinero obtenido de forma ilícita y cuyo origen es desconocido, para lo que utilizan empresas legales⁴¹⁷.

En concreto, el *modus operandi* consiste en adquirir compañías con dificultades económicas a través de métodos violentos, para llevarlas a la quiebra tras vaciarlas de sus activos. En estos casos la actividad extorsiva consta de dos fases:

a) Mediante intimidación y amenazas, se solicita la compra de una compañía a un empresario.

b) Ante su negativa, los delincuentes presionan a clientes y proveedores de la compañía, hasta que el empresario en cuestión acepta la venta.

Una vez perpetrada la extorsión, los grupos se concentran en su actividad principal, especializándose en las denominadas “*raiders*”, método que consiste en la toma de control, de modo fraudulento, de grandes empresas que posteriormente hacen quebrar para venderlas o subastarlas. Mientras llega ese momento, la entidad legal les permite el blanqueo de capitales a través de mecanismos de delincuencia económica y empresarial.

⁴¹⁷ Según el experto, miembro de la Policía Nacional experto en extorsiones.

Los mecanismos de aproximación a la víctima consisten en que uno de los miembros del grupo criminal contacte con el dueño de una empresa con problemas económicos haciéndole pensar que quiere adquirir legalmente su negocio; posteriormente procede a intimidar al empresario, empleando coacciones y amenazas, para que cambie la titularidad de este. Además, son organizaciones con ramas especializadas en cuestiones económicas, legales y empresariales, particularmente gestores y abogados, que están vinculadas con la mafia rusa cuya actividad principal es el blanqueo de capitales. Como consecuencia de estas actividades delictivas, existe un importante número de víctimas afectadas de forma indirecta en las regiones donde actúan, así como la pérdida de clientes y proveedores de zonas próximas, que tienen actividades económicas en las regiones victimizadas⁴¹⁸.

Las empresas victimizadas suelen pertenecer a los siguientes sectores:

a) El sector turístico: donde los extorsionadores adquieren empresas hoteleras en las que realizan importantes inversiones que incrementan sensiblemente su valor, llevándolas posteriormente a la quiebra tras vaciarlas de sus activos. Las empresas que compran se encuentran en importantes dificultades económicas como resultado del perjuicio causado por la crisis económica española en el sector turístico.

b) Las empresas inmobiliarias y de lujo: los grupos criminales adquieren joyerías e inmuebles en las zonas más caras de las ciudades donde operan para blanquear dinero, aumentando el margen de beneficios de forma fraudulenta. Se trata de empresas que atraviesan dificultades económicas debido a que desarrollan su actividad en zonas que han sufrido un gran impacto con la crisis del mercado inmobiliario.

III) Nacionalidad rumana

Las organizaciones criminales rumanas dedicadas a extorsionar a compatriotas (n=4) son de pequeño tamaño, cuentan con unos 7 integrantes de media y su actividad principal es la extorsión dentro del mercado negro y la economía ilegal; por esta razón no es común la utilización de empresas para sus fines⁴¹⁹.

⁴¹⁸ Según el entrevistado, experto en extorsiones de la Policía Nacional, que cuenta con experiencia en operaciones que afectaron a esta comunidad.

⁴¹⁹ Según el entrevistado, experto en extorsiones de la Policía Nacional, que cuenta con experiencia en operaciones que afectaron a esta comunidad.

Aunque se trate de organizaciones de pequeño tamaño, tienen una gran capacidad para extorsionar a un significativo número de víctimas, alrededor de cien por caso, a quienes les exigen pagos periódicos de dinero en efectivo. Para alcanzar sus objetivos, utilizan la intimidación a través de amenazas de muerte y el uso de la violencia.

Geográficamente, las zonas más afectadas son Cataluña, Islas Baleares y Castilla y León, donde además de extorsionar, cometen una gran diversidad de actividades delictivas tales como el proxenetismo, la detención ilegal, el robo con violencia e intimidación, el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la tenencia ilícita de armas y el robo de vehículos.

Las víctimas son empresarios dedicados a la compraventa de locales, naves industriales e inmuebles, así como comerciantes, a quienes se les exige el pago de determinadas cuotas por trabajar en esa área geográfica, bajo amenaza de muerte dirigida tanto a ellos como a sus familiares que se encuentran en su país de origen.

IV) Nacionalidad colombiana

Las organizaciones criminales colombianas dedicadas a extorsionar a compatriotas (n=2) cuentan con una media de 16 integrantes. La estructura interna habitual en este tipo de grupos es la jerárquica, se encuentra liderada por un cabecilla respaldado por hombres de su confianza, trabajadores, etc. La especialidad de estos grupos son las oficinas de cobro donde sus sicarios llevan a cabo extorsiones, secuestros y homicidios relacionados con deudas del narcotráfico.

Muchos de los miembros de los grupos colombianos de crimen organizado son ex paramilitares, entrenados en el uso de armas y con antecedentes por homicidios, tanto en España como en Colombia que se financian principalmente a través del tráfico de drogas y de armas, así como del blanqueo de capitales y el cobro de deudas resultantes del menudeo de droga. En general, las oficinas de cobro no realizan actividades de préstamos monetarios, aunque en ocasiones sí pueden fiar la droga a determinadas personas; esto significa que permiten la adquisición física de la droga para finalizar la compraventa mediante la posterior entrega de dinero, una vez que el pequeño traficante, que no es miembro de la organización, haya conseguido vender todo el producto a través del menudeo. Ante impagos de la cantidad fiada, el cobro de las deudas suele realizarse de forma violenta utilizando procesos extorsivos

que pueden incluir intereses leoninos por impago de la deuda, a la que añaden unas cantidades inasumibles para el deudor⁴²⁰.

Las víctimas forman parte de las actividades de tráfico de drogas en más del 90% de los casos. También se producen ajustes de cuentas a los cabecillas del grupo, es decir, venganzas internas de algunos integrantes del grupo contra un superior jerárquico. Pero en general, son sicarios y grupos criminales “puros”, que emplean la violencia según la necesidad del caso. Unas veces las víctimas, conocedoras del procedimiento, obedecen sabiendo lo que puede suponer no hacerlo; en cambio en otros casos propinan brutales palizas para someter al extorsionado o secuestrado que no accede a la extorsión.

En las intervenciones telefónicas policiales que se realizan⁴²¹ a los miembros de las organizaciones criminales colombianas se detectan diariamente cientos de delitos de extorsiones y amenazas contra personas a las que se les exigen pagos. Esencialmente amenazan con causar daños a familiares en Colombia, su país de origen, ya que estas organizaciones tienen miembros ubicados en ambos países. En este procedimiento extorsivo de cobro de deudas se identifican tres fases, cuya violencia va aumentando de forma progresiva, como se observa en la siguiente ilustración:

Ilustración 4. Esquema de fases en el procedimiento de cobro de deudas en grupos organizados de origen colombiano.



*Amarre es un término acuñado que hace referencia a los secuestros con fines extorsivos en esta tipología de procesos en Colombia.

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista al experto en crimen organizado colombiano la Policía Nacional.

⁴²⁰ Según el entrevistado, experto en extorsiones de la Policía Nacional, que cuenta con experiencia en operaciones que afectaron a esta comunidad.

⁴²¹ Según el entrevistado, experto en extorsiones de la Policía Nacional, que cuenta con experiencia en operaciones que afectaron a esta comunidad.

A continuación, se detallan las tres fases del proceso extorsivo colombiano:

a) Extorsiones y amenazas: en este momento del proceso es importante para las víctimas saber quién está tratando de cobrarles. Si es una organización poderosa, saben que pueden llegar a secuestrar o a matar⁴²².

b) Amarre: retienen al deudor o a un familiar y piden el pago de dinero a cambio de su libertad. Aunque prefieren efectivo también suelen aceptar coches, propiedades (normalmente casas y fincas en Colombia), joyas, obras de arte, relojes, etc., en general cualquier objeto de valor.

c) Homicidios y asesinatos: llegado el momento se toma la decisión de acabar con la vida de una víctima (no siempre coincide con el deudor). Esta decisión se suele adoptar antes de saldar la deuda porque a la organización le interese infundir miedo al resto de deudores quitando le la vida, o matando a un tercero allegado, normalmente un familiar del deudor, a cambio de perdonar su deuda. Pero en ocasiones los homicidios se perpetran después de cobrar la deuda, como forma de resarcimiento por el retraso en el pago de la deuda.

Estos grupos suelen trabajar con una suerte de franquiciado, que cuenta con oficinas de corte informal ubicadas en diferentes zonas y países, pero mantienen una conexión muy sólida con la organización central.

No se hace uso de empresas o estructuras legales debido a que la fuente principal de financiación está en el mercado negro a través del tráfico de droga a pequeña escala. Aunque sí es cierto que integrantes o colaboradores aportan sus bares, establecimientos de ropa o peluquerías a modo de tapadera o como puntos de reunión.

En cuanto a la ubicación geográfica, la mayoría de las oficinas más importantes están en Madrid, aunque también existen otras de menor tamaño en Barcelona, y diferentes ciudades de Galicia y Comunidad Valenciana.

⁴²² Y se focalizan en daños a familiares o allegados de las víctimas ubicados en su país de origen, Colombia. Esta forma de proceder se debe a que generalmente los grupos colombianos suelen estar vinculados a un cártel que ostenta mayor poder en ese país, por lo que las amenazas tienen un potente carácter intimidatorio.

Una vez descritos los sectores y comunidades más afectados por los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada, se procede a seleccionar los grupos de casos más relevantes para el estudio de dicho fenómeno.

4. Justificación de la selección de los grupos de casos para su estudio

A partir de la revisión realizada de la literatura científica sobre extorsiones a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada, se han seleccionado dos escenarios diferentes para llevar a cabo el estudio del fenómeno: a) en un sector económico y b) en una comunidad extranjera.

Para ello, una vez expuestos los problemas que existen para realizar un análisis cualitativo debido a la dificultad de acceso a los datos de victimización por tratarse de un proceso que conlleva elementos intimidatorios que impiden la proliferación de denuncias a las autoridades por el miedo de las víctimas, se ha considerado útil optar por la metodología centrada en el estudio de casos complementada con entrevistas a expertos.

Este estudio preliminar ha permitido identificar una serie de sectores y comunidades especialmente afectadas por los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada, entre los que se debe optar por un sector y una comunidad para la implementación de un análisis exploratorio.

Pues bien, a continuación, se exponen los argumentos que justifican la selección realizada de los grupos de casos a estudiar.

4.1. Estudiar los procesos extorsivos en el sector de la hostelería

Entre los diferentes sectores económicos afectados por los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada, se ha seleccionado el sector hostelero por motivos que se exponen a continuación.

En primer lugar, los establecimientos de hostelería, vinculados al turismo o al ocio nocturno, han sido los más destacados en el estudio preliminar expuesto en el apartado anterior.

En segundo lugar, en términos globales, entre las empresas afectadas por el control de crimen organizado, los bares y restaurantes son negocios victimizados con mucha frecuencia y de forma sistemática⁴²³.

En tercer lugar, la literatura científica indica que las características propias de estos negocios, como su pequeño tamaño o la práctica habitual de utilizar dinero en metálico, los hacen especialmente vulnerables a las extorsiones⁴²⁴.

En cuarto lugar, se trata de un sector muy relevante para la economía española, especialmente vinculado al turismo, que conforma una parte importante del tejido empresarial español⁴²⁵.

Por último, en España el crimen organizado se concentra en zonas de costa y grandes ciudades⁴²⁶, donde a su vez abundan las pequeñas empresas de restauración.

Estos elementos permiten situar al sector hostelero como un objetivo posible de las organizaciones dedicadas a extorsionar; que, además, dadas las importantes proporciones del sector en España, hace más factible el acceso a casos reales.

4.2. Estudiar los procesos extorsivos en la comunidad china

Entre las diferentes comunidades extranjeras afectadas por los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada, se ha seleccionado la nacionalidad china por las cinco siguientes razones.

En primer lugar, se trata de la comunidad extranjera en la que el estudio preliminar ha detectado el mayor número de casos de extorsión.

⁴²³ Así lo recogen estudios europeos sobre victimización de empresas, como los de Tilley y Hopkins (2008), Savona (2010) y Mugellini (2013).

⁴²⁴ Como señalan Albanese (2008), Caneppele et al. (2013) y Savona y Berlusconi (2015).

⁴²⁵ Según los datos anuales del World Bank, entre otros.

⁴²⁶ Ministerio del Interior (2017).

En segundo lugar, la literatura científica indica que la extorsión es una de las principales fuentes de financiación de los grupos de crimen organizado chino⁴²⁷, por lo que su estudio en términos globales es muy relevante.

En tercer lugar, debido a sus características culturales, la población china es especialmente vulnerable ante las prácticas extorsivas. Como ya se ha señalado, ciertas minorías étnicas son más propensas a ser victimizadas, especialmente si procuran resolver los conflictos dentro de su propia comunidad en vez de recurrir a las fuerzas del orden⁴²⁸.

En cuarto lugar, se trata de una comunidad cuyo asentamiento es creciente y sus integrantes se agrupan en barrios determinados⁴²⁹. Los actos delictivos que se cometen contra las empresas se centran en áreas geográficas concretas. De ahí que esta comunidad resulte de especial interés para nuestro estudio⁴³⁰.

En quinto lugar, el crimen organizado chino es un fenómeno poco estudiado fuera de España y aún menos dentro de nuestras fronteras, por lo que se hace preciso abordar su análisis de forma rigurosa⁴³¹.

Estas razones llevan a concluir que es posible y positivo llevar a cabo un estudio empírico que suponga un avance en el conocimiento del fenómeno para la comunidad científica.

⁴²⁷ Entre otros autores, lo defienden Chin et al. (1992), Zhang y Chin (2002), De la Corte y Giménez-Salinas (2010), Soudijn y Zhang (2012) y Dees (2013).

⁴²⁸ Así lo ponen de manifiesto numerosos estudios (Chin et al., 1992; Perrone, 2000; Tilley y Hopkins, 2004; Wagstaff et cols., 2006)

⁴²⁹ Especialmente en Madrid y Barcelona (Sainz López, 2005), buen ejemplo de ello es barrio madrileño de Usera.

⁴³⁰ Según la literatura revisada (entre otros: Chin et al., 1992; Wagstaff et cols., 2006; Tilley y Hopkins, 2008).

⁴³¹ Así lo exponen, por ejemplo, Chin et al. (1992) y Taylor (2006).

5. Conclusiones: limitaciones de medición y marco metodológico

La extorsión a las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada es un fenómeno latente (Rusev et cols., 2016) motivado por la carencia de denuncias, a causa del temor de las víctimas, que ha invisibilizado su incidencia.

Esta situación de inaccesibilidad a datos supone una limitación determinante para su estudio, pues imposibilita la medición de las extorsiones a través de los tradicionales métodos cuantitativos internacionales, como son los indicadores, las encuestas de victimización y las estadísticas oficiales.

Por esta razón, se ha abordado el estudio de casos como única solución posible al problema que se plantea. En otras palabras, para analizar los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada, al no existir antecedentes científicos en la materia, se propone un estudio exploratorio cualitativo a través del estudio de casos.

Ahora bien, como consecuencia de la falta de denuncias, las fuentes de información son igualmente limitadas, así la información bibliográfica y estadística es insuficiente para estudiar el fenómeno en el escenario español. Sin embargo, las noticias de prensa empleadas en el estudio de aproximación al fenómeno han permitido, aunque de forma restringida, detectar las notas características de determinadas comunidades y sectores afectados por prácticas extorsivas del crimen organizado. De forma complementaria, las entrevistas mantenidas con expertos⁴³² de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, han dado lugar a la selección del sector económico y la comunidad de mayor interés para la implementación de un estudio de casos que analice de forma pormenorizada la complejidad de estas prácticas extorsivas.

Tanto el sector hostelero como la comunidad china han resultado ser los grupos de casos más significativos y accesibles para estudiar las acciones extorsivas contra las empresas perpetradas en el ámbito de la delincuencia organizada.

El método de estudio de casos y la fuente de información policial y judicial, van a permitir llevar a cabo el análisis cualitativo de una muestra empírica para el desarrollo de un estudio exploratorio. Dicho estudio tiene como propósito alcanzar una formulación del fenómeno

⁴³² En el marco del proyecto de investigación europeo denominado CEREU, Countering Extortion and Racketeering in EU, cofinanciado por la Comisión Europea.

ajustada a la realidad para hacer posible su investigación a partir de una propuesta metodológica. A partir de estas premisas, se establecen los objetivos del estudio empírico, que se exponen en el capítulo siguiente, donde también se describe la metodología de la investigación.

CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE LOS PROCESOS EXTORSIVOS: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Para completar la propuesta metodológica se ha realizado un estudio previo del marco criminológico, jurídico y metodológico de los procesos extorsivos contra las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada a lo largo de los tres primeros capítulos del presente trabajo.

El estudio teórico del fenómeno nos ha permitido enmarcar el objeto de análisis dentro de las actividades de financiación y control del crimen organizado, con importantes consecuencias económicas, sociales y democráticas cuando tales prácticas se perpetran de forma reiterada en una región, afectando a empresas de un sector o a una comunidad específicos. Además, las víctimas son reacias a denunciar debido al temor por su integridad física como consecuencia de los mecanismos de intimidación propios del crimen organizado, utilizados para lograr una mayor eficacia en sus exigencias extorsivas y mayor impunidad para la organización, facilitando así la latencia del fenómeno.

Ahora bien, las organizaciones que perpetran estos procesos extorsivos incurren en la comisión de diversos tipos penales que incluyen, además de la extorsión, el robo, las amenazas, las coacciones, las detenciones ilegales o el acoso, entre otros, lo que dificulta la identificación concreta de los incidentes extorsivos cuando estos llegan a denunciarse.

Pues bien, todas estas notas características, ya analizadas en los dos primeros capítulos, llevan consigo significativas limitaciones metodológicas expuestas en el tercero: la ausencia de datos ha hecho que el estudio de casos sea el único método aplicable al estudio de extorsiones a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada. Esto implica la necesidad desarrollar un estudio exploratorio que permita un análisis cualitativo a partir de la única fuente de información accesible: los casos de los cuerpos policiales y judiciales. Tales fuentes permitirán la extracción de información tanto de los documentos como de las entrevistas con los expertos que hayan intervenido en casos y operaciones vinculadas con la materia.

Para la implementación de dicho estudio de casos se ha elaborado el presente capítulo que comprende cuatro apartados: a) los objetivos del estudio, b) la elección del método de investigación, c) los problemas y limitaciones que presenta el estudio empírico y d) las conclusiones, que contienen el resumen de la propuesta metodológica para el estudio del fenómeno.

1. Objetivos específicos del estudio

Teniendo en cuenta las premisas anteriormente expuestas, se presentan a continuación los cuatro objetivos principales que configuran los propósitos del estudio empírico sobre prácticas extorsivas a las empresas.

Dichos objetivos son los siguientes:

1.1. Identificación de un método de estudio de los procesos extorsivos a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada

Elaborar una propuesta metodológica para el estudio empírico de la extorsión a empresas exige detallar un procedimiento científico que sea riguroso, contrastable y con posibilidad de ser replicable.

La latencia y ocultación de las prácticas extorsivas en el ámbito de la criminalidad organizada generan como consecuencia un fuerte desconocimiento de su incidencia real, lo que impide la existencia de antecedentes en la literatura científica sobre la materia objeto de estudio en España. Este escenario ha obligado a elaborar un diseño de investigación exploratorio completo, previo al estudio empírico.

La propuesta metodología de investigación de los procesos extorsivos se encuentra en el presente capítulo y da respuesta a este primer objetivo.

Dicha propuesta engloba la elección del método de investigación y las fuentes de información de manera justificada, además de describir de forma pormenorizada el enfoque del estudio, el procedimiento de selección de casos y la muestra de casos de extorsión.

1.2. Análisis de los procesos extorsivos a las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada

Una vez implementada la propuesta metodológica, el estudio empírico permite analizar los procesos extorsivos perpetrados contra las empresas en España en dos escenarios:

a) La victimización de empresas del sector hostelero por parte del crimen organizado que se expone en el capítulo quinto de la presente tesis.

b) La victimización de empresas dentro de la comunidad china asentada en España presentada en el capítulo sexto.

Este segundo objetivo abarca una doble perspectiva criminológica y legal para la interpretación de resultados, respetando el primer objetivo y permitiendo la consecución del tercero.

Dichos análisis cualitativos incluyen tres aspectos relevantes:

- Un estudio del contexto en el que se perpetran las prácticas extorsivas.
- Un análisis exploratorio de las organizaciones criminales implicadas y de las empresas victimizadas en el sector o comunidad afectados.
- Un estudio de la respuesta legal ante tales procesos extorsivos.

De los análisis cualitativos se extraerán las principales características que definen las principales tipologías extorsivas en el escenario español, los mecanismos intimidatorios utilizados, las regiones más afectadas y las pautas de comportamiento de las víctimas ante las exigencias extorsivas. Este segundo objetivo se cumple en los capítulos quinto y sexto del presente trabajo.

1.3. Identificación de factores de vulnerabilidad en los negocios objeto de procesos extorsivos

A partir de la literatura revisada y del estudio empírico, se extraerán los factores de vulnerabilidad de los negocios que permiten o promueven las prácticas extorsivas. De esta forma, en la discusión de resultados del capítulo octavo se contrastarán las principales características de los procesos extorsivos perpetrados contra empresas con la literatura criminológica revisada, así como los momentos de mayor riesgo para las víctimas del análisis realizado.

Además, se señalarán las principales dificultades que tienen los cuerpos policiales y organismos judiciales para llevar a cabo la investigación de los delitos, que suponen también un

importante elemento de análisis de las prácticas analizadas. Este tercer objetivo se cumple en el primer apartado del capítulo octavo.

1.4. Desarrollo de recomendaciones de lucha y prevención a partir de las implicaciones jurídicas, policiales y judiciales

Una vez completados los tres primeros objetivos, se pueden desarrollar las recomendaciones de lucha y prevención de los procesos extorsivos contra las empresas, que deben implementarse en el escenario español desde los tres poderes públicos:

En el marco del poder legislativo, mediante la correcta aplicación de los tipos penales correspondientes a las conductas punibles y la articulación de las herramientas jurídicas precisas para combatirlo.

En el escenario del poder ejecutivo, tanto a través de actuaciones policiales más efectivas en la persecución y represión del crimen extorsivo como a por medio de la adopción de medidas y planes de acción más ajustados a la realidad criminológica de España y a la victimología existente, analizando las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito en nuestro país.

Por último, en el plano judicial, mediante la aplicación de las herramientas legales capaces de resolver de manera más efectiva la protección de la víctima.

Para la consecución de este objetivo también ha sido de gran interés el estudio de buenas prácticas en la lucha contra la extorsión en Italia, región donde la lucha contra la extorsión mafiosa es histórica. Este estudio se presenta en el capítulo séptimo de la presente tesis.

Con la misma finalidad, se proponen una serie de medidas reactivas y preventivas que se han diseñado para combatir el fenómeno en España y que supondrían mejoras encaminadas a lograr la máxima protección de los ciudadanos frente a las extorsiones del crimen organizado. Estas se han elaborado en base a los siete primeros capítulos del trabajo y a la discusión del primer punto del octavo capítulo. Tales propuestas se exponen en el segundo apartado del capítulo octavo.

2. Elección del método de investigación y las fuentes de información

El dinamismo y complejidad del estudio de los procesos extorsivos contra empresas en el ámbito de la delincuencia organizada limita en gran medida la obtención de información completa y fiable.

La elección del método *cualitativo*⁴³³ se debe a la escasez de información cuantitativa y a las restricciones para el acceso a datos de extorsión; además, dada la ausencia de antecedentes españoles en la materia, el estudio que se presenta parte de un enfoque *empírico exploratorio* sobre victimización de empresas a través de procesos extorsivos del crimen organizado.

Al tratarse de un estudio piloto, el diseño de la investigación y la propuesta metodológica, orientada a la obtención de casos de estudio, resulta especialmente interesante porque trata de suplir las enormes dificultades encontradas para acceder a una muestra basada en incidentes reales de extorsión.

El enfoque del análisis, como ya se ha señalado en el anterior capítulo, parte de la identificación y selección de casos de extorsión a través de información policial y judicial, complementado con entrevistas a expertos. El estudio se centrará en una comunidad social, es decir, la nacionalidad común de autores y víctimas; y en un sector económico, esto es, una actividad empresarial concreta.

Partiendo de los múltiples aspectos que tiene el tema objeto de estudio y con el propósito de recabar la mayor información fiable posible, se ha considerado fundamental utilizar la combinación de metodologías para suplir la escasez de casos identificados y de estudios conocidos sobre la materia⁴³⁴.

⁴³³ Este análisis metodológico se llevó a cabo en el marco del proyecto de investigación CEREU: *Countering Extortion Racketeering in the EU*, cofinanciado por la Comisión Europea.

⁴³⁴ Por ejemplo, Tilley y Hopkins (2008) combinan revisiones de la literatura científica sobre soluciones metodológicas en estudios de delitos sobre empresas con entrevistas a expertos del crimen organizado, inteligencia policial y dirigentes de la sociedad civil y del sector empresarial que aporten conocimiento sobre la comunidad social o zona geográfica a estudiar, y con un estudio piloto de 17 empresas de muestra, encontrando serias dificultades en la viabilidad del estudio empírico.

Por lo tanto, el análisis preciso de la problemática suscitada debe partir del desarrollo de una *metodología combinada centrada en la víctima*⁴³⁵ que posibilite el estudio de los procesos extorsivos como delitos contra las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada.

En este sentido, y como resultado de la revisión de la literatura científica expuesta en el capítulo primero, se constata que existen dos formas de agrupación que reúnen determinadas características especialmente vulnerables a las conductas delictivas analizadas: a) los grupos de empresas que pertenecen a un mismo sector económico y b) los negocios establecidos en el seno de una comunidad que comparte el mismo origen racial o étnico.

El hecho de orientar el estudio hacia la vulnerabilidad de las víctimas pertenecientes a un colectivo concreto facilita la identificación de la victimización y de los problemas específicos, lo que permite incidir sobre los aspectos más significativos de cara a la prevención. Todo ello favorece la obtención de unas conclusiones más ajustadas de las diferentes realidades empresariales y sociales.

2.1. El enfoque orientado a la evaluación de vulnerabilidades

En el estudio sobre los delitos del crimen organizado contra las empresas mediante procesos extorsivos resulta de gran utilidad el enfoque orientado a la evaluación de las vulnerabilidades. Este enfoque metodológico consiste en el estudio de las oportunidades que suponen los negocios legales para los grupos de crimen organizado y centra su análisis en un entorno socioeconómico más amplio⁴³⁶.

⁴³⁵ Cuestión que se desarrolla en el siguiente capítulo.

⁴³⁶ En línea con estudios como el de Lavezzi (2008) sobre la estructura económica y la vulnerabilidad ante el crimen organizado. El autor realizó un estudio estadístico sobre las actividades económicas en distintas regiones de Italia y su vulnerabilidad frente a delitos como la extorsión del crimen organizado. En lugar de centrarse en factores sociales y culturales, mantiene la hipótesis de que ciertas características económicas permiten que el crimen organizado se expanda más fácilmente, estableciendo así una serie de características de las empresas en regiones especialmente victimizadas por grupos de crimen organizado en Sicilia: un gran número de empresas pequeñas, sectores tradicionales y con una especificidad territorial y bajo nivel de avance tecnológico, entre otros. De su análisis se extrae la importante idea de que al estudiar el desarrollo del crimen organizado deben tenerse en cuenta factores estructurales económicos, como elemento facilitador para su expansión.

Se trata de un enfoque que ha sido empleado por instituciones de seguridad pública muy relevantes en el estudio de este tipo de delincuencia, tales como Europol (2013) y el Equipo de Trabajo de Acción Financiera (FATF⁴³⁷, 2013).

El objetivo final de la evaluación de vulnerabilidades es facilitar la prevención y la investigación de la extorsión a través de la mejora de la disuasión y de la detección.

Los objetivos específicos son:

- a) Asegurar una mejor asignación de recursos por parte de las autoridades competentes.
- b) Suministrar información de utilidad para la elaboración de nuevas medidas políticas y legislativas específicas.
- c) Evaluar y adecuar la legislación específica existente, así como las herramientas de justicia penal para adaptarlas a los riesgos identificados.

En relación con las actividades del crimen organizado con baja tasa de denuncia por parte de las víctimas, como es el caso de la extorsión, la detección de vulnerabilidades es un recurso útil para la identificación del conjunto de problemas que atañen a la actividad extorsiva y la comprensión del entorno en el que se producen las oportunidades de victimización para los grupos criminales, tanto los que afectan a los diferentes sectores económicos como aquellos que incumben a las sociedades o comunidades de individuos.

La clave de las ventajas que tiene aplicar esta metodología a un sector económico o a una comunidad étnica o social está en que permite un enfoque a medida que ayuda a identificar los factores específicos de cada sector o de cada comunidad en los que es más rentable⁴³⁸ y viable perpetrar la extorsión. De este modo, se pueden formular indicadores de riesgo que faciliten la detección anticipada y el diseño de contramedidas para prevenir y minorar aquellos aspectos, de un contexto socioeconómico específico o de determinadas comunidades de inmigrantes, que suponen oportunidades para la delincuencia.

⁴³⁷ Por sus siglas en inglés Financial Action Task Force.

⁴³⁸ Para valorar la rentabilidad no sólo se tiene en cuenta el beneficio, también el riesgo de detección por las autoridades de la región, las posibilidades de resistencia de la víctima, la sostenibilidad de la extorsión a medio plazo, etc.

Los tres pasos que requiere la detección de vulnerabilidades son los siguientes (FATF, 2013):

a) Identificación de los rasgos característicos

La metodología que se plantea abarca el contexto socioeconómico general, el perfil de los autores y sus métodos, la implicación de cargos públicos en las actividades de extorsión, así como las características de las empresas victimizadas y sus patrones de comportamiento. Basándonos en el estudio de los casos seleccionados, se trata de identificar rasgos característicos que definan factores de riesgo y vulnerabilidad específicos que facilitan la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada, así como las posibles medidas de protección que pudieran adoptarse. Esto permite la extracción de conclusiones en materia de políticas públicas de seguridad y la elaboración de propuestas legislativas.

Una vez expuestos los elementos de vulnerabilidad propios de los entornos de determinados sectores económicos y comunidades sociales,⁴³⁹ descritos en la revisión de la literatura científica, este enfoque metodológico ha permitido identificar dos grupos de indicadores de riesgo o señales de alerta: a) indicadores de riesgo en el sector turístico y b) indicadores de riesgo en comunidades chinas.

Los indicadores de riesgo generalmente se dividen en cuatro tipos:

El primer tipo, es el conformado por los factores relacionados con el entorno:

- Puntos calientes o “hot spots” (principales regiones afectadas)
- Medidas de protección adoptadas por el gobierno o asociaciones de empresas.
- Nivel de economía sumergida
- Nivel de corrupción
- Tasas de empleo/desempleo
- Tamaño de la población
- Principales sectores económicos de la región
- Historia y presencia del crimen organizado

⁴³⁹ En el capítulo 1, apartado 3.3.

El segundo tipo hace referencia a los factores relacionados con el sector económico:

- Brechas o limitaciones en la regulación
- Número de empresas que operan en el sector
- Características estructurales (como el tamaño de las empresas)
- Asociaciones de empresas activas en el sector

El tercer tipo está constituido por los factores relacionados con las empresas:

- Edad de las víctimas
- Género de las víctimas
- Nacionalidad de las víctimas
- Papel en la empresa
- Localización y tipo de entidad legal
- Número de empleados
- Principal actividad de la empresa victimizada
- Pertenencia a una asociación de empresas
- Uso de servicios de seguridad privada
- Duración de la extorsión
- Denuncia a las fuerzas policiales
- Reacción ante la extorsión
- Relación con los extorsionadores
- Estatus económico de la compañía después de la extorsión

Por último, en el cuarto tipo se encuentran los factores relacionados con las comunidades migrantes específicas:

- Tamaño de la comunidad
- Número de empresas operando en la comunidad

- Presencia de asociaciones activas de empresas o de la comunidad
- Historia y presencia del crimen organizado étnico dentro de la comunidad
- Nivel de confianza en las fuerzas policiales del lugar
- Tradiciones culturales que aíslan a la comunidad (o dificultan su integración)

b) Análisis de los casos de extorsión

El segundo paso es el análisis de los casos, que permite identificar las diferencias y similitudes entre los incidentes de extorsión identificados, los factores de resistencia y de permisividad de las víctimas, las medidas y estrategias existentes para protegerlas y las formas efectivas de luchar contra la extorsión. Este análisis se realiza de forma pormenorizada mediante el estudio criminológico-legal de casos dentro del sector hostelero en el capítulo quinto, y dentro de la comunidad china en el capítulo sexto del presente trabajo.

c) Valoración de la vulnerabilidad

El último paso es la valoración, de la que se extraen las prioridades y medidas específicas en la lucha tanto preventiva como reactiva contra el fenómeno. En esta valoración se desarrolla una estrategia o plan de acción para prevenir o minimizar los riesgos identificados a corto, medio y largo plazo. Para realizar una valoración precisa, se propone un estudio de la experiencia italiana, donde las políticas de seguridad han evolucionado a partir de la realidad criminológica que suponen las actividades extorsivas de la mafia. Tal análisis, realizado en el séptimo capítulo del presente trabajo, permite la identificación de propuestas de mejora en el ámbito nacional, especialmente orientadas al estudio legal, que se formulan en el octavo y último capítulo.

Para la obtención de casos que conformen la muestra, se ha desarrollado un procedimiento de recogida de datos y un protocolo de recogida de información, que se exponen a continuación.

2.2. El procedimiento de selección de casos: unidad de análisis y fuentes de información

El proceso de selección de casos⁴⁴⁰ se ha desarrollado específicamente para la obtención de incidentes extorsivos en territorio español. Con este fin, se establecieron unos requisitos para la selección de la muestra y posteriormente se aplicaron a la búsqueda de casos en las fuentes de información.

La unidad de análisis estará formada por cada caso o incidente extorsivo, que deberá cumplir unos requisitos concretos para ser parte de la muestra. Dichos requisitos son:

a) Haber tenido lugar dentro del marco temporal establecido: entre los años 2009 y 2015. Se trata de un rango temporal consensuado, entendiendo que durante los años 2015 y 2016 se tenga conocimiento por las autoridades policiales y judiciales.

b) Que exista evidencia de un vínculo con el crimen organizado, debiendo estar presentes los siguientes elementos: la implicación de, al menos, tres autores coordinados o de un autor que forme parte de un grupo de más de tres personas, contemplando la posibilidad de que una persona represente a un grupo, siempre que se explicita así en el caso.

c) Que exista evidencia de prácticas extorsivas, por lo que los incidentes deben contener los siguientes elementos:

- Conductas de intimidación o violencia hacia la víctima.
- Evidencia de un daño patrimonial, que puede ser monetario, de daños a la propiedad, institución o mediante relaciones contractuales obligadas.
- Continuidad de la extorsión en el tiempo, bien porque haya al menos dos empresas afectadas, bien porque al menos se haya extorsionado a la víctima en dos ocasiones.

Para la identificación de tales requisitos, bastará que así quede recogido en el documento policial o judicial, ya sea porque las autoridades correspondientes lo afirman, o porque las víctimas, los autores o los testigos aporten esta información en sus declaraciones.

⁴⁴⁰ Elaborado en el marco del proyecto de investigación CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión Europea. Cada país que participa en el proyecto ha tenido que desarrollar su propio procedimiento en función de las posibilidades que ofrece su territorio.

En determinados delitos existen elementos relevantes de los que es realmente difícil obtener evidencias; tales elementos son, por ejemplo, el ánimo de lucro en las extorsiones y el reparto de tareas en los grupos de crimen organizado. Se trata, por tanto, de identificar los elementos demostrables a través de evidencias plasmadas en los atestados policiales y en las sentencias, de manera que, con criterios objetivos, sencillos y demostrables, se pueda identificar la perpetración de prácticas extorsivas y la autoría de un grupo organizado.

Las fuentes de información se exponen a continuación de forma detallada:

2.2. a) Fuentes policiales: atestados

En primer lugar, se solicitaron determinados expedientes de incidentes ocurridos en la comunidad china que hubieran tenido lugar en el período de tiempo establecido (entre 2009 y 2015). Dicha solicitud⁴⁴¹ se realizó bien por el sistema específico de la Guardia Civil o bien por la identificación de casos a través de fuentes abiertas⁴⁴².

A continuación, se llevó a cabo una lectura pormenorizada de los hechos delictivos recogidos en el informe o cuestionario policial, que permitió analizar su adecuación a la conducta extorsiva que se pretende estudiar.

Seguidamente se contrastaron las características del caso con la *check-list* de criterios de la muestra diseñada que son, por una parte, que la víctima posea una empresa y, por otra parte, que los autores configuren un grupo de crimen organizado.

Finalmente, se solicitaron los atestados completos para una lectura pormenorizada del incidente. Sucede con frecuencia que, únicamente dentro de los propios atestados se hace alusión a la víctima empresa, por lo que la decisión final siempre se ha tomado tras la lectura completa del caso.

En total se solicitaron 60 operaciones localizadas a través de fuentes abiertas (periódicos como El Mundo, El País, etc. y la propia página pública de la Guardia Civil) y 16.283 incidentes,

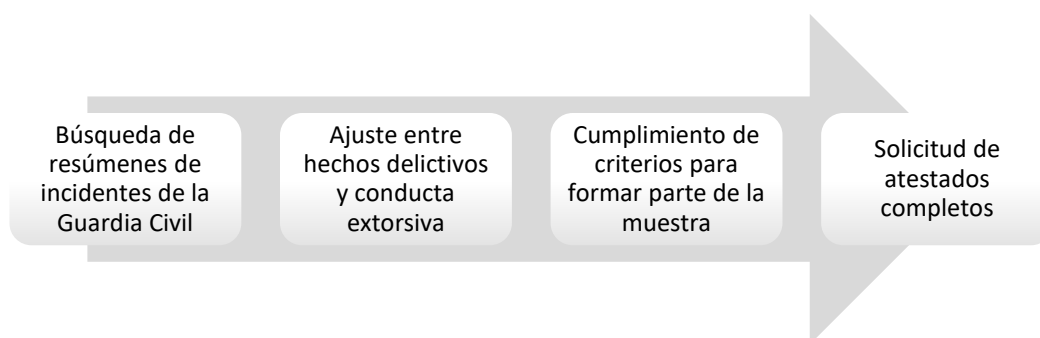
⁴⁴¹ Gracias a la colaboración de la Guardia Civil como parte española en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, sin la que esta fuente de información no hubiera sido accesible para los investigadores.

⁴⁴² Se realiza una búsqueda para identificar casos de extorsión en operaciones de la Guardia Civil publicadas en prensa.

de los cuales 14.192 se ajustaron al criterio de pertenencia a la nacionalidad china y los demás (2.090) correspondieron a nacionalidades pakistaní, india y turca⁴⁴³. De todos ellos, 24 fueron incluidos en la muestra: 14 casos de la comunidad china y 10 casos del sector restauración/hostelería.

Además, un caso fue directamente relatado por la víctima⁴⁴⁴ de forma voluntaria y anónima, a través de un cuestionario (Anexo I).

Ilustración 5. Esquema de búsqueda de casos de extorsión por fuentes policiales.



Fuente: elaboración propia.

2.2. b) Fuentes judiciales: resoluciones

Mediante los buscadores de jurisprudencia anteriormente indicados, se examinaron resúmenes de resoluciones judiciales que contuvieran delitos que pudieran formar parte de una conducta extorsiva objeto de estudio: amenazas, coacciones, extorsiones y lesiones.

A continuación, la lectura de tales resúmenes permitió estudiar su ajuste a la conducta extorsiva.

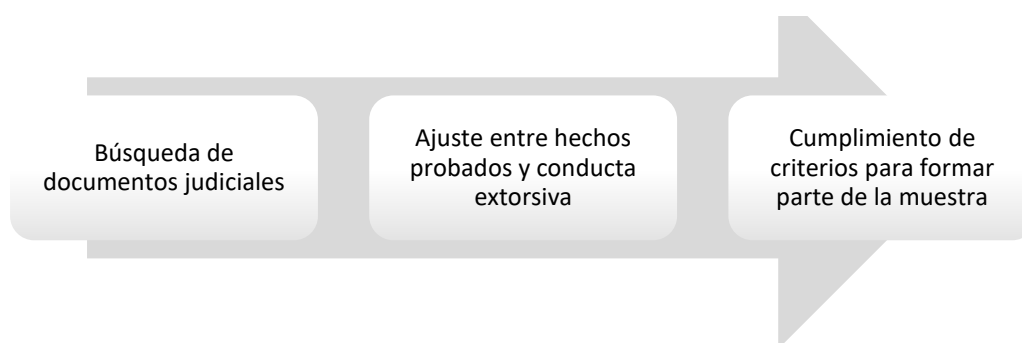
⁴⁴³ Debido a que se consensuó, dentro del equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid junto con la Guardia Civil, que sería posible que regentaran locales vinculados a la hostelería como restaurantes asiáticos o negocios de kebabs.

⁴⁴⁴ En uno de los primeros seminarios de exposición de las problemáticas de identificación de incidentes de extorsión y cuando la muestra de casos aún no había sido completada, una persona del público, de forma desinteresada sugirió que anónimamente podría dar testimonio de un proceso extorsivo sufrido por su familia, que regentaba un bar en Formentera y cumplía las características de victimización que estábamos buscando.

Seguidamente se contrastaron las características de los casos con la *check-list* de criterios de la muestra diseñada que, como se ha señalado con anterioridad, consisten en que la víctima posea una empresa y que los autores configuren una organización criminal.

Finalmente, se obtuvieron las resoluciones completas para realizar una lectura pormenorizada.

Ilustración 6. Esquema de búsqueda de casos de extorsión por fuentes judiciales.



Fuente: elaboración propia.

En total se revisaron 1.145 resúmenes de resoluciones judiciales, de las que 5 fueron finalmente incluidas en la muestra: 1 caso de la comunidad china y 4 casos del sector restauración.

Para la obtención sistemática y objetiva de la información se diseñó una hoja de recogida de datos y un protocolo de recopilación de datos de fuentes oficiales⁴⁴⁵.

2.2. c) Información complementaria: entrevistas semiestructuradas y seminarios temáticos

Para que la interpretación de la información aportada relativa a los incidentes extorsivos fuese ajustada a la realidad, se desarrolló de forma paralela un estudio complementario relativo a un conjunto de problemas que existen a nivel nacional, especialmente necesario dada la

⁴⁴⁵ En el marco del proyecto europeo de investigación CEREU: Countering Extortion and Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión Europea.

naturaleza exploratoria del estudio que se presenta. Así, se definieron dos formas de recogida de información complementaria cualitativa⁴⁴⁶.

En primer lugar, se llevaron a cabo catorce entrevistas semiestructuradas a expertos en la materia (Anexo II). Esta actuación permitió contextualizar los datos obtenidos a través del protocolo de recogida de información dentro del ámbito español, con actividades y entrevistas a expertos en la comunidad china y a profesionales de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que pertenecen a unidades específicas de lucha contra la extorsión⁴⁴⁷, el crimen organizado⁴⁴⁸ o especializados en problemáticas de la comunidad china⁴⁴⁹.

En segundo lugar, se desarrollaron tres seminarios temáticos a nivel nacional en el marco del mismo proyecto:

- El primero de ellos estuvo dedicado específicamente a la problemática de la extorsión en la comunidad china⁴⁵⁰ y fue determinante porque la información aportada por los ponentes⁴⁵¹ resultó clave para la comprensión del entorno de los quince casos objeto de análisis.

⁴⁴⁶ En el marco del proyecto europeo de investigación CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión Europea, donde, se tomó la decisión de complementar la información de casos con otras fuentes, como son las entrevistas con expertos en la materia, a la que se llegó por consenso entre los investigadores de los países y entidades de expertos que conforman el consorcio de investigación, de los que forman parte la Universidad Autónoma de Madrid y la Guardia Civil. Se consideró que el contexto que aportaban las entrevistas a expertos permitía una visión más completa de la compleja problemática a analizar.

⁴⁴⁷ Cuatro miembros de la Policía Nacional expertos en extorsiones y cuatro miembros de la Guardia Civil expertos en extorsiones.

⁴⁴⁸ Un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado, y un miembro de la Guardia Civil experto en crimen organizado.

⁴⁴⁹ Un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado chino, dos miembros de la Guardia Civil expertos en crimen organizado chino y un académico experto en cultura china.

⁴⁵⁰ Bajo el nombre “La extorsión del crimen organizado chino” el 21 de abril de 2016 en la Universidad Autónoma de Madrid.

⁴⁵¹ En el marco del señalado proyecto, el seminario contó con las ponencias de los siguientes expertos: Marcos Fernández Poves, teniente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil; Teresa Gálvez, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y lucha contra el crimen organizado; Andrea Giménez-Salinas Framis, investigadora del proyecto experta en crimen organizado; Francesco Nanucci, policía de Prato (Italia); Silvia Perrucci, fiscal (Italia); Lorella Garofallo, investigadora italiana del proyecto y experta en crimen organizado chino (Italia) y Stefano Becucci, profesor de la Universidad de Florencia (Italia). Gracias a sus aportaciones se pudo completar el análisis sobre el crimen organizado chino y el relativo a la experiencia italiana de la lucha contra la extorsión.

- El segundo seminario trató de los programas de prevención y protección a las víctimas existentes en Italia⁴⁵² y las ponencias⁴⁵³ de los expertos italianos sobre los mecanismos de lucha contra la extorsión fueron de enorme interés para el análisis de la experiencia Italia y las propuestas de mejora a nivel nacional.
- El tercer seminario se centró en los procesos extorsivos contra las empresas por parte del crimen organizado⁴⁵⁴. Las aportaciones de los miembros de las instituciones policiales y judiciales⁴⁵⁵ también fueron de gran utilidad para el estudio del fenómeno y específicamente para las propuestas de mejora en la lucha contra la extorsión y la prevención de esta.

Gracias a esta información complementaria, se han podido detectar las vulnerabilidades con un mayor ajuste a la realidad criminológica. A continuación, se presenta el protocolo de recogida de información.

2.3. Protocolo de recogida de información

Para la recogida de información de los casos, tanto policiales como judiciales, se estableció un protocolo específico en el que se incluyó un inventario diseñado para aportar consistencia y coherencia a la recogida de datos⁴⁵⁶ así como rigor a su análisis. Este inventario ha sido el instrumento utilizado para recopilar la información cualitativa y cuantitativa.

El inventario abarca seis dimensiones:

⁴⁵² Llamada “Conferencia sobre la lucha contra la extorsión”, tuvo lugar el 29 de septiembre de 2016 en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, acudieron como asistentes 80 miembros de Guardia Civil y Policía Nacional de Unidades especializadas en crimen organizado, extorsiones y secuestros, etc.

⁴⁵³ Los expertos provenían del mundo académico, policial, judicial y gubernamental, entre los que destacan Becucci, Brigadoi, Mundula, Aricó, Savona, Grasso, Cozzi, Marannano, y Morada; así como de asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas en la lucha contra la extorsión: Civitas Virtus y Addiopizzo.

⁴⁵⁴ Denominado “La extorsión del crimen organizado en España. Factores de vulnerabilidad para las empresas”, que tuvo lugar el 21 de octubre de 2016 en la Sede de la Dirección General de la Guardia Civil.

⁴⁵⁵ Especialmente de Juan José Rosa, fiscal de Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Criminalidad Organizada y Marcos Fernández Poves, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil; además de las aportaciones, en calidad de apoyo a este tipo de iniciativas mixtas, de instituciones públicas en materia de seguridad, por parte de Pedro Ángel Ortega Calahorro, General de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil y Jonathan Benito Sipos, Vicerrector Adjunto de Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid.

⁴⁵⁶ Se trata de un inventario de recogida de datos común a todos los países participantes en el proyecto de investigación: Reino Unido, Italia, Bulgaria, Grecia, Rumanía y España.

- Descripción general del caso: código del caso, lugar y fecha del incidente.
- Contexto local del incidente de la extorsión: población, principales sectores económicos, negocios pertenecientes al sector analizado o regentados por ciudadanos chinos, asociaciones de comerciantes, estadísticas criminales.
- Perfil de la víctima: edad, género, nacionalidad, papel desempeñado en el negocio, ubicación y persona jurídica, número de empleados, actividad principal, pertenencia a una asociación de comerciantes, seguros sociales.
- Respuesta de la víctima ante la extorsión: denuncia ante las fuerzas policiales, reacción a la extorsión, relación con los extorsionadores, duración de la extorsión, situación financiera del negocio tras la extorsión.
- Perfil de los autores: número de autores, nacionalidad, estructura y principal actividad criminal del grupo, implicación de funcionarios.
- *Modus operandi*: extorsión efectiva o en grado de tentativa, empleo de la violencia, empleo de la intimidación, causas y móvil de la extorsión, momento del pago/solicitud, presencia de intermediarios.

La autorización por el comité de ética para el uso de los datos en la presente tesis se incluye en el Anexo III y el inventario original del estudio se adjunta en el Anexo IV.

A continuación, se presenta la muestra final de casos para el estudio empírico.

2.4. La muestra

La muestra está formada por 30 casos: 15 corresponden al sector de la hostelería y 15 a la comunidad china.

Seguidamente, se exponen los 15 casos de la muestra de empresas del sector de hostelería afectadas por procesos de extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada.

Tabla 7. Lista de casos de estudio del sector hostelero con su identificación, lugar de incidente extorsivo y fuente del caso (N=15).

ID caso	Lugar de la extorsión*	Fuente
H1	Formentera	Testimonio anonimizado
H2	Jaén	Policía Judicial, Jaén caso 35/2011
H3	Alicante	Policía Judicial, Almería caso 2436/2013
H4	Almería	Policía Judicial, Almería caso 452/2015
H5	Alicante	Policía Judicial, Torrevieja caso 4920/2014
H6	Castellón	Audiencia Provincial, Castellón resolución 391/2010 (s2)
H7	Palma Mallorca	Audiencia Provincial, Islas Baleares sentencia 59/2012 (s1)
H8	Asturias	Audiencia Provincial, Asturias sentencia 237/2012
H9	Almería	Policía Judicial, caso 265/2011
H10	Zaragoza	Policía Judicial, caso 1205/2012
H11	Zaragoza	Policía Judicial, caso 648/2011
H12	Alicante	Policía Judicial, caso 5446/2011
H13	Murcia	Policía Judicial, caso 204/2011
H14	La Coruña	Policía Judicial, caso 37/2015
H15	Barcelona	Audiencia Provincial, Barcelona sentencia 12/2013 (s5)

*No se especifica la localidad de la extorsión para que las víctimas no sean identificables.

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de casos.

Asimismo, se exponen los 15 casos detectados de extorsiones dentro de la comunidad china asentada en España, el lugar de la comisión de los hechos y la fuente de información del caso (policial o judicial).

Tabla 8. Lista de casos de estudio de la comunidad china con su identificación, lugar de incidente extorsivo y fuente del caso (N=15).

ID caso	Lugar de la extorsión*	Fuente
C1	Valencia	Policía Judicial, caso 12/2015
C2	Madrid	Policía Judicial, caso 161/2013
C3	Madrid	Policía Judicial, caso 768/2013
C4	León	Policía Judicial, caso 37/2015
C5	Sevilla	Policía Judicial, caso 1431/2013
C6	Pontevedra	Policía Judicial, caso 83/2015
C7	Pontevedra	Policía Judicial, caso 194/2012
C8	Cáceres	Policía Judicial, caso 402/2012
C9	Cáceres	Policía Judicial, caso 145/2014
C10	Alicante	Policía Judicial, caso 1258/2012
C11	Madrid	Policía Judicial, caso 5355/2012
C12	Sevilla	Policía Judicial, caso 2052/2012
C13	Palacios y Villafranca	Policía Judicial, caso 1169/2011
C14	Torre vieja	Policía Judicial, caso 4774/2011
C15	Barcelona	Audiencia Provincial, Barcelona sentencia 582/2012 (s2)

*No se especifica la localidad de la extorsión para que las víctimas no sean identificables.

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de casos.

En el Anexo V se adjunta un resumen de la descripción de cada caso.

La identificación de estos casos es el resultado de un largo procedimiento de recogida de datos, que forma parte de la compleja búsqueda de incidentes extorsivos.

Como ya se ha expuesto anteriormente, las limitaciones para la selección de casos se originan en gran parte debido a la baja tasa de denuncia y la dificultad probatoria del delito. Por ello, se tuvo que desarrollar un procedimiento específico de búsqueda *ad hoc*.

A continuación, se presentan los análisis que se llevaron a cabo atendiendo a la metodología expuesta.

2.5. Análisis de los procesos extorsivos: estudio de casos

La metodología que se propone está centrada en el estudio de casos empíricos de extorsión y complementada con entrevistas semiestructuradas a expertos.

Se trata por tanto de un análisis cualitativo exploratorio a partir de información policial y judicial de casos de extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada con más de una víctima vinculada a empresas (N=30). El estudio se realizará de forma paralela en dos grupos de casos: a) extorsiones a empresas del sector hostelero (n=15) y b) extorsiones en la comunidad china (n=15).

Además, debido a la reducida literatura específica de la que se dispone, las entrevistas realizadas a expertos en la comunidad china y en extorsiones, así como a miembros de unidades especializadas y organismos judiciales que han intervenido en operaciones vinculadas a la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada han supuesto un significativo conocimiento añadido que permite contextualizar la información que aporta la casuística.

Partiendo del enfoque de evaluación de vulnerabilidades, se trata de orientar el análisis hacia las características de vulnerabilidad y el entorno socioeconómico de las víctimas empresas dentro del escenario español.

Ahora bien, como todo diseño metodológico, este estudio presenta una serie de problemas y limitaciones que se exponen a continuación.

3. Problemas y limitaciones del estudio

En este apartado se exponen las limitaciones más significativas, tanto a nivel metodológico como de contenido, y los problemas encontrados en el trabajo de recogida de información. Dichos problemas y limitaciones se clasifican en cinco tipos, que se exponen a continuación.

a) Cuestiones vinculadas a conceptos y definiciones

A partir del marco jurídico-criminológico, podemos apreciar la dificultad de conceptualizar elementos tan esenciales en el presente estudio como “extorsión” o “grupo de crimen organizado”. La elección de una definición clara y concisa es lo que determina que un

estudio sea objetivo y útil, que aborde el fenómeno de la manera más ajustada posible a la realidad, pero sin perder de vista las herramientas legales que existen en la actualidad.

Por ello, si bien ya se han expuesto tales definiciones en el apartado sobre elección del método y de las fuentes, cabe precisar que la elección de estas definiciones se debe a que facilitan el establecimiento de criterios a partir de las posibles evidencias, teniendo en cuenta siempre la dificultad que presenta un fenómeno prácticamente invisible como es la extorsión y un fenómeno prácticamente imposible de medir como es el crimen organizado.

Se trata, por tanto, de emplear conceptos operativos que aporten objetividad y pragmatismo a un estudio exploratorio que pueda basarse en evidencias empíricas y cuyo fin último es el desarrollo de medidas jurídicas de lucha y prevención en el escenario real.

b) Cuestiones sobre la selección de casos en comunidades y sectores

Al tratarse de un estudio exploratorio, que carece de informes, datos y literatura que pudieran aportar una base empírica desde la que analizar el fenómeno, la selección de una comunidad inmigrante y un sector económico-empresarial permite una aproximación más real al fenómeno, ya que no limita la problemática a uno sólo de estos elementos porque ambos resultan claves en el abordaje del estudio.

La principal razón de esta elección está vinculada a las posibilidades de replicabilidad del estudio en otras comunidades y sectores en el futuro.

c) Fuentes de datos

Las fuentes de datos oficiales únicamente aportan cifras de incidencia en materia de delitos de extorsión, desde el punto de vista policial y judicial, pero resultan insuficientes para configurar una visión completa del fenómeno, especialmente cuando se busca información relativa a que las víctimas sean empresas y los autores grupos organizados.

Por esta razón es fundamental la recopilación de casos policiales y judiciales a partir de diligencias policiales y sentencias, respectivamente, más ricos en información sobre víctimas y autores, aunque siempre orientados al esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, el hecho de que la víctima posea una empresa no afecta a la calificación jurídica ni a la demostración de los delitos, por lo que es poco frecuente que este dato aparezca reflejado en este tipo de documentación.

Además, la ausencia de informes y análisis previos que permitan contextualizar los casos dentro de la realidad criminológica en la que tienen lugar, se ha subsanado a través de entrevistas a expertos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Su contribución en materia de crimen organizado, prácticas extorsivas y delincuencia, en función de la nacionalidad a la que pertenecen los grupos (rusos, chinos, colombianos, etc.) configuran un soporte sobre el que analizar los casos de interés y permiten elaborar una primera visión general, aunque sea poco profunda del escenario actual.

d) Críticas a la aproximación metodológica

Lo cierto es que el método propuesto no contiene una muestra representativa ni contempla de forma completa los riesgos de la extorsión en actividades económicas ni comunidades étnicas.

La decisión de recopilar una muestra de 30 casos, con los 15 casos que resultaran ser lo más completos y representativos posible de dos problemáticas diferentes, se debe a la enorme dificultad para la obtención de casos de extorsión, razón por la que este estudio debe tratarse como exploratorio y tener en cuenta sus limitaciones respecto al nivel de representatividad.

e) La fiabilidad de los datos

Si bien en los casos judiciales los hechos probados han sido la fuente de información del delito, la información reflejada en los casos policiales ha sido aportada por el testimonio de una víctima o un testigo, lo que puede no ser siempre una fuente de información fiable.

Para tratar de reducir esta limitación se han contrastado los testimonios con la información que proporcionan los informes policiales, donde se ponen de manifiesto los hechos ocurridos, y con el contexto que las entrevistas a expertos han permitido configurar a partir de las características más comunes que estos profesionales han encontrado en el día a día de su labor de investigación y análisis criminológicos.

4. Conclusiones: resumen de la propuesta metodológica

Este apartado está dedicado al resumen de la propuesta metodológica que se presenta como conclusión del capítulo e introducción a los siguientes, en los que se exponen los resultados del análisis.

A lo largo del presente capítulo se han expuesto los principales retos que plantea el estudio empírico de los procesos extorsivos perpetrados por el crimen organizado. Los aspectos más relevantes que obstaculizan su medición en España son la dificultad para la obtención de datos, fruto de la elevada cifra oscura que provoca la intimidación propia de los procesos extorsivos en el ámbito de la criminalidad organizada, las dificultades para la obtención y el análisis de datos oficiales sobre extorsión y la complejidad de problemas a los que se enfrentan las investigaciones policiales y judiciales.

Todos ellos afectan a la correcta evaluación que se pretende realizar, por lo que deberán ser tenidos en cuenta en la lectura de resultados del estudio empírico.

Procedimiento de selección de casos

Para la obtención de casos de extorsión se han utilizado dos fuentes de información: documentos policiales y judiciales, a partir de la revisión de atestados policiales⁴⁵⁷ y de resoluciones judiciales (en su mayoría sentencias)⁴⁵⁸. Además, esta información se ha complementado con entrevistas a expertos.

Requisitos para la selección de la muestra

Para realizar el análisis empírico, se ha procedido a la selección de casos y como unidad de análisis se ha considerado un incidente extorsivo que debe cumplir los tres requisitos que se detallan a continuación:

⁴⁵⁷ Diligencias Previas de la Guardia Civil en el marco del proyecto europeo de investigación CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión Europea; gracias a la colaboración de la Guardia Civil como parte española en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, sin la que esta fuente de información no hubiera sido accesible para los investigadores.

⁴⁵⁸ Obtenidas de dos bases jurídicas: WestLaw y Vlex.

a) Haber tenido lugar dentro del marco temporal establecido, esto es, entre los años 2009 y 2015.

b) Que exista evidencia de un vínculo con el crimen organizado, debiendo estar presentes los siguientes elementos: al menos a tres autores implicados, o a un autor que forme parte de un grupo de más de tres personas, contemplando, de esta manera, la posibilidad de que una persona represente a un grupo, siempre que se explicita así en el caso.

c) Que exista evidencia de prácticas extorsivas, por lo que los incidentes deben contener los siguientes elementos: i) conductas de intimidación o violencia sobre la víctima, ii) evidencia de un daño patrimonial y, por último, iii) continuidad de la extorsión en el tiempo, bien porque haya al menos dos empresas afectadas o bien porque al menos se haya extorsionado a la víctima en dos ocasiones.

Son numerosas las razones por las que resulta de interés para el objeto que se estudia, diseñar un análisis basado en un sector económico y en una comunidad. En concreto, como consecuencia del análisis teórico y del estudio preliminar presentado en el capítulo tercero, se han seleccionado para la presente investigación⁴⁵⁹ los siguientes:

a) El sector hostelero porque bares y restaurantes son de los negocios más afectados según el estudio preliminar. Además, debido a las características de estos negocios, tales como su pequeño tamaño y el uso de dinero en metálico de forma habitual, resultan especialmente vulnerables a las extorsiones. En el escenario español, se trata de un sector muy relevante para la economía nacional, porque está especialmente vinculado al turismo. Cabe destacar, por último, que en España el crimen organizado tiende a concentrarse en zonas de costa y grandes ciudades, donde abundan las pequeñas empresas de restauración.

b) La comunidad china por ser la nacionalidad extranjera más afectada según el estudio preliminar. A esto debe añadirse que, según la literatura revisada, el crimen organizado tiene entre sus principales fuentes de financiación la extorsión a negocios de compatriotas. Además, se trata de una comunidad cuyo asentamiento en España es creciente y se establece agrupada en barrios, alrededor de grandes núcleos de población. Por último, cabe destacar que es un tipo de crimen organizado poco

⁴⁵⁹Más ampliamente justificadas en punto 4 del capítulo tercero.

estudiado fuera de nuestro país y aún menos dentro de nuestras fronteras, por lo que existe una gran demanda de investigación en la materia.

Teniendo en cuenta estas premisas, se logró completar una muestra de 30 casos, que conforman dos submuestras: 15 casos de extorsión dentro de la comunidad china y 15 casos de extorsión a empresarios del sector hostelero.

Análisis de los datos de extorsión

Para cada uno de los incidentes de extorsión identificados en el ámbito de la delincuencia organizada, se recabaron datos con arreglo al protocolo de recogida de información expuesto en el apartado 2.3 del presente capítulo y que cuenta con seis dimensiones que contienen las siguientes variables:

- Descripción general del caso: código del caso, lugar y fecha del incidente.
- Contexto local del incidente de la extorsión: población, principales sectores económicos, negocios pertenecientes al sector analizado o regentado por ciudadanos chinos, asociaciones de comerciantes, estadísticas criminales.
- Perfil de la víctima: edad, género, nacionalidad, papel desempeñado en el negocio, ubicación y persona jurídica, número de empleados, actividad principal, pertenencia a una asociación de comerciantes, seguros sociales.
- Respuesta de la víctima ante la extorsión: denuncia ante las fuerzas policiales, reacción a la extorsión, relación con los extorsionadores, duración de la extorsión, situación financiera del negocio tras la extorsión.
- Perfil de los autores: número de autores, nacionalidad, estructura y principal actividad criminal del grupo, implicación de funcionarios.
- *Modus operandi*: extorsión efectiva o en grado de tentativa, empleo de la violencia, empleo de la intimidación, causas y móvil de la extorsión, momento del pago/solicitud, presencia de intermediarios.

Para el análisis jurídico se propone el estudio de las conductas criminales y de los delitos registrados por las autoridades, con el fin de examinar su encaje en cada tipo penal expuesto en el segundo capítulo de la presente tesis.

El estudio planteado es el análisis cualitativo exploratorio a partir de los 30 casos de extorsión complementado con entrevistas semiestructuradas a expertos.

Problemas y limitaciones del estudio

Como toda investigación, a pesar de la rigurosidad que las ciencias criminológicas y jurídicas aportan, existen importantes limitaciones para el estudio que se propone. En el presente capítulo se han detallado algunas de ellas que son de especial relevancia a la hora de valorar los resultados de los análisis. Así, los conceptos sobre los que versa el estudio contemplan una gran complejidad criminológica y jurídica. Pues bien, para dar respuesta a las necesidades de su estudio se han establecido definiciones muy claras y concisas (de crimen organizado, por ejemplo), que no abarcan la realidad de forma completa, pero resultan operativas porque aportan objetividad y pragmatismo. Además, aunque los treinta casos no son representativos de la rica y variada realidad empresarial hostelera ni de la comunidad china asentada en España, permiten una aproximación a la identificación de vulnerabilidades en un entorno específico, y permiten la replicabilidad del estudio en otros sectores y comunidades. Las fuentes de datos, si bien son las más ricas y fiables, lo cierto es que ofrecen una información enormemente limitada. Por último, los datos proporcionados por los testimonios no resultan contrastables.

Por estos motivos, entre otros, los resultados que se presentan a continuación han de ser valorados como análisis exploratorios que tratan de iniciar una línea de investigación contrastable y replicable, especialmente orientada a la toma de decisiones sobre protección y prevención en materia de victimización de empresas a través de un complejo fenómeno: los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada.

BLOQUE III: ESTUDIO EMPÍRICO

CAPÍTULO 5. LOS PROCESOS EXTORSIVOS A NEGOCIOS DE HOSTELERÍA EN ESPAÑA

El fenómeno de la extorsión al sector de la hostelería en España es un asunto poco analizado, y requiere un estudio criminológico-legal⁴⁶⁰ que aporte información empírica de utilidad, no sólo sobre las características del crimen organizado implicado, sino también acerca de las formas de protección más efectivas para los negocios victimizados. Con este objetivo se presentan los resultados basados en el análisis de 15 casos⁴⁶¹ y en las entrevistas a expertos en la materia⁴⁶².

En primer lugar, se estudian los aspectos generales del contexto empresarial donde se perpetran las prácticas extorsivas: conocer el sector de la hostelería en España permite identificar el escenario de acción de las organizaciones criminales implicadas y de los negocios victimizados.

En segundo lugar, se describen los principales rasgos de los autores de tales procesos extorsivos, tanto la implicación de las organizaciones criminales, como los aspectos esenciales respecto de su *modus operandi*, los medios empleados y la implicación de cargos públicos en los mismos. Todas estas variables son fundamentales para identificar el escenario en el que se desarrolla el proceso de victimización de negocios hosteleros.

En tercer lugar, se estudian peculiaridades de las víctimas del sector hostelero, tanto en relación con las características demográficas, sociales y económicas de las zonas afectadas, como respecto de las pautas de comportamiento que siguen los negocios victimizados y las medidas de protección adoptadas.

Además, es sustancial conocer las respuestas del sistema judicial español ante dichos procesos extorsivos, por lo que se incluye en el presente capítulo la descripción jurídica de los casos y la respuesta legal específica dada a cada proceso extorsivo.

⁴⁶⁰ Cabe recordar que los términos en los que se expresan ciertos contenidos como extorsión u organización criminal no hacen referencia a los delitos o conceptos jurídicos sino a los criminológicos, a no ser que se explicita que se trata del tipo penal en cuestión.

⁴⁶¹ Muestra e información obtenidas en todos los casos en el marco del Proyecto CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión europea.

⁴⁶² Se realizaron entrevistas a cuatro miembros de la Policía Nacional expertos en extorsiones y cuatro miembros de la Guardia Civil expertos en extorsiones, un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado y a un miembro de la Guardia Civil experto en crimen organizado.

1. El contexto: el sector de la hostelería en España

El sector de hostelería incluye toda actividad o servicio relacionado con la provisión de comida, bebida y alojamiento (Figuerola et cols. 2017; Lashley y Morrison, 2013).

Siendo un sector especialmente relevante y conocido en España, resulta de interés recordar de forma sucinta sus dimensiones, distribución geográfica y sus principales características económicas de vulnerabilidad. Ambas materias se abordan a continuación.

1.1. Dimensiones y distribución geográfica del sector de la restauración en España

España es uno de los cinco líderes europeos en turismo, junto con Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que juntos suponen el 75% del valor del sector⁴⁶³, aportando nuestro país un 10%. Además, se encuentra entre los países más especializados en el sector hostelería con Malta, Grecia y Chipre, siendo España el más especializado en el subsector de restauración (Eurostat, 2017).

Para conocer su tamaño, el INE (2016) recopiló información estructural sobre los sectores económicos españoles, que dividió en cuatro categorías: comercio, construcción, industria y otros. La tabla que se expone a continuación muestra el número de empresas pertenecientes a cada categoría y el porcentaje que representa en el conjunto de la economía donde el negocio de la restauración se incluye dentro del sector Comercio.

Tabla 9. Distribución de los principales sectores económicos españoles.

Sectores	2015	%
Industria	198.004	6,2%
Construcción	405.849	12,7%
Comercio	763.930	24%
Resto de servicios	1.819.095	57%

Fuente: elaboración propia con datos de INE (2016).

⁴⁶³ Los datos del último estudio estructural de Eurostat se recopilaron el año 2014.

Lo cierto es que casi la totalidad del conjunto empresarial español, el 99,88%⁴⁶⁴, está constituido por pequeñas y medianas empresas (PYMEs), según la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPM, 2017); de las que más del 60% están ubicadas únicamente en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia.

De todas las PYME en España, el 8,5% constituyen negocios del sector hostelero, que destaca claramente como uno de los principales sectores de servicios (DGIPM, 2017).

Así, en España, el sector de la hostelería es uno de los más relevantes debido a la amplia actividad turística, así como a la fuerte demanda interna basada en patrones culturales profundamente arraigados, derivados, entre otros motivos de la riqueza gastronómica nacional y de las condiciones climáticas favorables a la socialización y la agricultura.

El turismo ha sido uno de los principales impulsores del crecimiento económico español desde su apertura al comercio internacional en los años sesenta y su competitividad ha crecido hasta el punto de que en la actualidad es la primera economía del mundo en recursos naturales y culturales, infraestructuras y política turística (World Economic Forum, 2017): así, en el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo de 2017, España lidera el ranking por segunda vez.

La hostelería está compuesta por más de 300.000 establecimientos, de los que el 90% son de restauración, el 10% restante corresponde a negocios de alojamiento, sobre los que no se han encontrado incidentes extorsivos. La restauración concretamente permite generar el 8,7% del empleo nacional, de los que más de 1.200.000 puestos son únicamente de restauración (Figuerola et cols., 2017).

Si bien el subsector de restauración⁴⁶⁵ en España representaba el 6,7% del PIB español en 2013, ganando peso tras la crisis de 2008 (INE, 2015), los datos actuales confirman su importancia. El último informe de la Federación Española de Hostelería ofrece una visión general del sector de la restauración en la actualidad, señalando que ya en 2017 representa el 6,8% del PIB español.

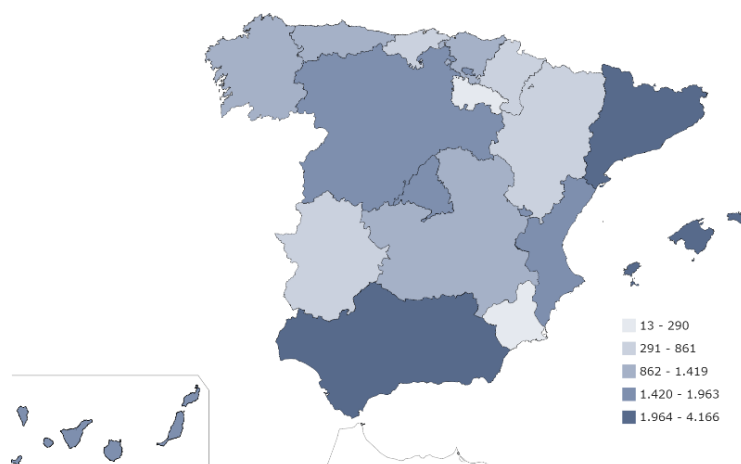
Los datos del INE ofrecen la distribución geográfica del subsector, que podemos observar en el siguiente mapa, donde se muestra como las empresas de restauración se

⁴⁶⁴ Lo que equivale a 3.228.747 unidades productivas.

⁴⁶⁵ El sector de la hostelería está compuesto por dos subsectores: la restauración y la hotelería, esto es, por los negocios de consumo de comida y bebida y por los negocios de alojamiento.

concentran principalmente en Andalucía, Cataluña y las Islas Baleares (las áreas más turísticas de España) seguidas por la Comunidad Valenciana, Madrid, las Islas Canarias y Castilla y León.

Ilustración 7. Mapa de distribución de negocios registrados en el sector de la restauración en España.



Fuente: INE, 2016.

Conocidos los aspectos más significativos del sector hostelero para la materia que nos ocupa, es necesario conocer algunos datos sobre la corrupción y la economía sumergida, debido a que los negocios de restauración vinculados a estas actividades delictivas resultan especialmente atractivos para llevar a cabo las acciones extorsivas por parte del crimen organizado, como ya se ha expuesto en el primer capítulo.

1.2. Aspectos económicos vulnerables del sector: economía sumergida y corrupción

Es relevante conocer tales elementos para el presente estudio dado que la hostelería es un sector económico vulnerable a la infiltración del crimen organizado debido a las características de los negocios implicados y a factores relacionados con su ubicación (Transcrime, 2009; Mugellini, 2013):

a) El pequeño tamaño de las empresas limita la resistencia ante las exigencias de organizaciones criminales.

b) La presencia de fraude fiscal los vincula con la economía sumergida y la corrupción que supone una barrera importante para su detección, debido a que al incumplir las normas fiscales y evitar pagar impuestos de forma ilegal, la protección policial deja de verse como una opción por miedo a que se descubra la evasión de tributos o a ser objeto de represalias si están implicados cargos públicos.

c) El fuerte anclaje físico que presentan, ya que son negocios cuya localización geográfica tiene una gran importancia y el cambio de ubicación supondría un elevado coste (Albanese, 2008; Caneppele et al., 2013; Savona y Berlusconi, 2015).

Aunque España presenta un fuerte potencial en materia de restauración, lo cierto es que se sitúa en el décimo octavo puesto mundial en seguridad para las empresas (World Economic Forum, 2017). Además, la reciente crisis económica perjudicó de manera más sensible a las economías más débiles: pequeños bares y cafeterías (Figueroa et cols., 2017).

Las empresas del sector de la hostelería de España son en su mayoría (más del 90%) pequeños y medianos hoteles y restaurantes, proporciones muy similares al resto de los países de la Unión Europea. Si bien estas empresas constituyen un elemento significativo de la industria del turismo, actividad esencial en la economía europea y nacional, también concentran mayores niveles de penetración del crimen organizado, economía sumergida y corrupción, elementos muy vinculados entre sí (Kearney y Schneider, 2013; Medina y Schneider, 2018).

La economía sumergida en España

Se entiende por economía sumergida, según Medina y Schneider (2018) todas aquellas actividades económicas que se ocultan a las autoridades por tres tipos de razones:

a) Monetarias: tales como evitar el pago de impuestos o contribuciones a la Seguridad Social. Al no cumplir con sus obligaciones tributarias, el empresario ahorra el coste de los tributos mejorando la rentabilidad de su negocio.

b) Regulatorias: como por ejemplo evitar tareas y cargas burocráticas. No cumpliendo las normas administrativas sortean las tramitaciones y prescinden de los costes de las medidas impuestas por los marcos reguladores que les correspondan.

c) Institucionales: tales como corromper a funcionarios, políticos o miembros del sistema judicial. El aprovechamiento del mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima permite al empresario mejorar la rentabilidad de su empresa a través de muy diferentes formas de corrupción⁴⁶⁶.

Ahora bien, la mayor parte de la economía sumergida detectada en sectores vulnerables ante el crimen organizado suelen ser de tipo monetario, cometido mediante tres formas: a) realizan actividades cuyos ingresos no son siempre declarados en su totalidad, b) suelen llevar a cabo trabajos no declarados, especialmente en el ámbito de la construcción y en el de la venta al por menor y c) gestionan un gran número de pequeñas transacciones en dinero líquido que no permiten ser detectados ni controlados (Kearney y Schneider, 2013).

Así, las pequeñas y medianas empresas de hostelería suelen comerciar generalmente en metálico, lo que permite que algunas de ellas en ocasiones, evadan parte de los impuestos que se deben pagar (Savona y Berlusconi, 2015).

La estimación de la economía sumergida española, entendida como la realización de actividades económicas ocultas al conocimiento de las autoridades, se sitúa en el 18.5% de nuestro PIB (Schneider, 2015). Incluso, existen otras estimaciones que superan este porcentaje, llegando a cifrarlo en el 25% del PIB (Ureta, 2013). La siguiente tabla muestra las estimaciones de la economía sumergida de España en porcentaje del PIB, según distintos estudios a nivel nacional e internacional.

⁴⁶⁶ Aunque se trate de un tema realmente interesante, el estudio de las formas de corrupción entre el sector privado y la administración pública supera los objetivos del presente apartado.

Tabla 10. Estimaciones de economía sumergida según cada informe.

Informe	% del PIB
Report Doing Business, 2007	22,6%
Estudio de los Técnicos de Hacienda, 2009	23,3%
Estudio Funcas, 2011	20,2%-23,7%
Closing the European Tax Gap, 2012	22,5%
Informe ATKearney/VISA, 2013	18,6%
Otros	20-25%

Fuente: elaboración propia con datos de Ureta (2013).

La media de los últimos años (entre 1991 y 2015) se sitúa en 24,52%, mientras que las estimaciones más recientes de Medina y Schneider (2018) sitúan los niveles de economía sumergida actuales entre el 11,2 y el 17.2%, exactamente una décima por encima de la media europea.

La corrupción en España

En términos de corrupción, España se sitúa en el puesto 42 de los 180 países incluidos por Transparencia Internacional (2017) en su índice de Percepción de la Corrupción, obteniendo una puntuación de 57 sobre 100 en los niveles de corrupción percibidos⁴⁶⁷ en nuestro territorio.

España es el país de Europa que más ha empeorado⁴⁶⁸ entre los años 2000 y 2017 gracias, por un lado, a la efectiva lucha policial contra la corrupción que ha permitido el descubrimiento de importantes escándalos. Por otro lado, la difícil situación económica ha venido acompañada de un aumento de la indignación pública, dando lugar a un importante incremento de exigencia social a partir de la lentitud de la justicia, la alarma social y la sensación

⁴⁶⁷ El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sitúa a los países en términos de corrupción atendiendo a los niveles de percepción por la ciudadanía empleando una escala de 0 a 100 puntos donde la puntuación 100 es la máxima e implica la ausencia de percepción de corrupción, asociada a unos niveles muy bajos, mientras que la puntuación 0 hace referencia a los mayores niveles de corrupción percibida.

⁴⁶⁸ No obstante, el propio informe indica que la comparación de datos entre los índices anuales de percepción de corrupción de TI es algo problemática, pues pueden cambiar el número de estudios que se incorporan o el número de países que se analizan o el método de puntuación.

de impunidad de los corruptos, pero en especial al fracaso del sector político en la lucha contra la corrupción, según Transparencia Internacional (2017).

La Comisión Europea (2013) llevó a cabo un Eurobarómetro Especial sobre la corrupción que en España tuvo unos resultados importantes: el 62% de los encuestados respondieron que estaban personalmente afectados por la corrupción en su vida diaria (la media de la Unión Europea es de 26%)⁴⁶⁹.

Sobre la corrupción en el sector empresarial, el 52% de los españoles consideró que el éxito de un sector económico era imposible sin conexiones políticas y un 83% pensaba que el favoritismo obstruye la competencia empresarial. Finalmente, un 93% de los encuestados afirmaron que el favoritismo y la corrupción suponen un gran obstáculo para la competitividad empresarial en el país (la media europea es de 73%).

Además, la Comisión Europea (2017) señala actualmente la ausencia de estrategias preventivas para mitigar los riesgos de corrupción en España, y la existencia de una regulación anticorrupción limitada señalando el peligro de impunidad en casos complejos⁴⁷⁰.

En resumen, las principales características de vulnerabilidad del sector hostelero en España frente a los procesos extorsivos del crimen organizado son:

- Los altos niveles de fraude fiscal, así como de transacciones realizadas con dinero en efectivo son factores de vulnerabilidad que facilitan el cumplimiento de las exigencias de las organizaciones dedicadas a la extorsión.
- La propia corrupción⁴⁷¹ genera la percepción de que la denuncia de los casos de extorsión ante la policía no resultará efectiva y podrá conllevar represalias del grupo criminal o de los propios funcionarios.

⁴⁶⁹ Además, el 95% de las personas consideraban que la corrupción era un problema extendido en el país (la media europea es de 76%) y un 91% afirmó que la corrupción es un hecho en las instituciones locales y regionales (la media europea es 77%). Sin embargo, al medir la victimización real, sólo un 2% de las personas encuestadas en España afirmaron que se les había preguntado explícita o implícitamente el último año (la media europea fue de 4%).

⁴⁷⁰ Este extremo sobre la insuficiencia de la regulación en materia de corrupción está avalado por la Fiscalía General del Estado (2017).

⁴⁷¹ Ya sea en las fuerzas policiales, en el funcionariado de las administraciones locales o en el sistema judicial.

- Los rasgos particulares del sector de la hostelería: pequeño tamaño de empresas, gran arraigo físico, elevado volumen de manejo de dinero en efectivo, así como la vinculación del sector con la economía sumergida y la corrupción.

Pues bien, expuesto el contexto empresarial del sector, a continuación, se presentan los resultados sobre los autores, las víctimas y la respuesta penal de los procesos extorsivos a empresas de la hostelería, a raíz del análisis cualitativo de los quince casos de la muestra.

2. Los autores de los procesos extorsivos

El análisis que se presenta sobre los autores identificados en los procesos extorsivos de la muestra incluye la descripción⁴⁷² de las organizaciones criminales para conocer sus aspectos más relevantes atendiendo a la tipología extorsiva que cometen. Además, se analiza el *modus operandi* desarrollado por las mismas, haciendo hincapié en los medios que emplean y la implicación de cargos públicos en la comisión de los hechos.

2.1. Implicación de las organizaciones criminales

El análisis de las organizaciones criminales implicadas en los procesos extorsivos contra empresas del sector de la hostelería permite identificar los tres tipos principales de extorsión que emplean los grupos criminales y que se corresponden con la tipología expuesta por Monzini (1993). Recordando lo expuesto en otros apartados del presente trabajo, dicha tipología tiene el siguiente esquema: a) *extorsión-protección* que consiste en la imposición de un impuesto regular que se exige por parte de la organización criminal a las empresas víctimas a través medios violentos, b) *la extorsión laboral en el ámbito de la delincuencia organizada*, que consiste en una negociación violenta para el acceso al mercado laboral y al empleo y c) *la extorsión monopolística en el ámbito de la delincuencia organizada* que es una estrategia de mercado

⁴⁷² En el Anexo V se recoge una sucinta descripción completa de las principales características de cada caso.

específica forzada por medios violentos y cuyo objetivo consiste en la eliminación física del competidor o en la formación de coaliciones monopolísticas⁴⁷³.

Las organizaciones criminales de la muestra han perpetrado mayoritariamente extorsiones por protección (diez casos), aunque también se han identificado organizaciones dedicadas a la extorsión monopolística (tres casos) y a la extorsión laboral (dos casos).

A continuación, se presenta una tabla resumen de los casos que constituyen la muestra de los procesos extorsivos contra negocios del sector hostelero en España, donde se identifica la causa que define cada tipología, y las principales características de las quince organizaciones criminales atendiendo al lugar en que se produce el incidente extorsivo, al tipo de negocio victimizado, a la demanda del grupo y a la relación previa entre autores y víctimas. La exposición se realiza de forma ordenada según la tipología: monopolística, laboral o de protección.

⁴⁷³ Estas tipologías se han descrito con mayor exhaustividad en el apartado 3.2 del capítulo primero desde la perspectiva criminológica y en el apartado 1.1 del segundo capítulo con una orientación más jurídica.

Tabla 11. Resumen de los casos de extorsión en la hostelería por tipología, provincia, negocio victimizado, demanda y relaciones previas entre autores y víctimas.

Caso	Causa o tipología	Provincia	Negocio Victimizado	Demanda	Relaciones previas
H2	Protección	Jaén	Restaurante	Deuda	Préstamos ilegales
H3	Protección	Almería	Vendedores ambulantes y empleados de negocios de kebabs	Pago (de 300€ a 10.000€)	Desconocido
H6	Protección	Castellón	Empresarios	10.000€ + otras exigencias	Clientes
H7	Protección	Islas Baleares	Cafetería	75.000€	Desconocido
H8	Protección	Asturias	Restaurantes	2.000€ al año	Conocido
H10	Protección	Zaragoza	Restaurante indio	Bebida, comida y dinero (más de 1.000€)	Clientes
H14	Protección	La Coruña	Negocio de kebab	Pagos periódicos (pequeños)	Competidor
H4	Protección	Almería	Empresarios	200.000€	Desconocido
H11	Protección	Zaragoza	Negocio de kebab	1.500€ al mes	Conocido por un trabajo anterior
H15	Protección	Barcelona	Bares y discotecas	Pagos periódicos y contratos de protección	Antiguos trabajadores y clientes
H1	Monopolística	Islas Baleares	Discoteca	Pago por servicios o cierre	Competidor
H5	Monopolística	Alicante	Restaurante indio	Cierre	Competidor
H12	Monopolística	Alicante	Restaurante indio	Cierre	Competidor
H9	Laboral	Almería	Negocio de kebab	Contrato laboral	Antiguo trabajador
H13	Laboral	Murcia	Discoteca	Contrato laboral	Antiguos trabajadores

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de casos, publicada en Rusev et cols. (2016).

Como se desprende de la tabla mostrada, existen importantes diferencias a nivel cualitativo, si tenemos en cuenta las tipologías observadas que se exponen a continuación:

2.1. a) Los casos de extorsión por protección

Los casos de extorsión-protección⁴⁷⁴ identificados son diez, y pueden englobarse en tres categorías de grupos distintos:

a) Existen grandes organizaciones criminales con cierta reputación en la zona, cuyo negocio ilegal consiste en el tráfico de drogas. En los supuestos identificados, la estrategia tradicional de las organizaciones consiste en contar con una rama o agrupación integrada dentro del grupo y especializada en la recaudación de deudas, normalmente derivadas de impagos por la compraventa de droga y sus intereses o la imposición de pagos por protección a través de métodos violentos o intimidatorios, como ocurre en los casos H2, H6 y H15.

En el caso H2, los integrantes identificados pertenecían a una organización criminal asentada en Jaén, se especializaron en el cobro de deudas, y además utilizaron las empresas de las víctimas como puntos de venta de drogas. Los miembros provienen de diferentes países: Marruecos, Argentina y España. La actividad que desarrollaron fue la de préstamos usureros, que consistía en ofrecer préstamos con altos tipos de interés a propietarios de restaurantes de la zona que atravesaban dificultades económicas, ejerciendo violencia ante retrasos en los pagos y negociando nuevas condiciones abusivas de devolución del préstamo.

En el caso H6 estaban implicados los Ángeles del Infierno (también conocidos por su nombre en inglés, Hell's Angels), una organización criminal internacional dedicada, entre otras actividades ilegales, al tráfico de drogas y a la explotación sexual. Una rama de esta organización asentada en España desarrollaba labores de extorsión por protección, obligando a las empresas a pagar un salario a cambio de ofrecerles seguridad durante los eventos de fans de motos en Castellón. Además, exigían a ciertos negocios el consumo gratuito de comida y bebida durante el tiempo que durasen tales eventos.

El caso H15 consistió en la imposición de extorsión por protección en locales nocturnos y de ocio de Barcelona por parte de una asociación criminal de gran tamaño integrada por fans de fútbol radicales. Controlaban un gran número de bares y discotecas, que también utilizaban como puntos de venta de drogas.

⁴⁷⁴ H2, H3, H4, H6, H7, H8, H10, H11, H14 y H15.

En cambio, el grupo del caso H8, si bien ejercía labores de extorsión por protección, no se dedicaba al tráfico de drogas, sino que se apoyaba en los fuertes vínculos políticos y policiales con que contaba en la pequeña localidad de Cudillero, entre los que se encontraba su alcalde. Se trataba de una organización criminal muy bien consolidada que imponía pagos a los restaurantes y comercios de la zona a cambio de ejercer las labores de seguridad propias de la policía local durante las fiestas del concejo, como pago extra en negro a los policías allí presentes.

b) En otras ocasiones, el elemento identificativo del grupo analizado es su vinculación con alguna organización mafiosa extranjera, como sucedió en los casos H7 y H10 y su vínculo con la mafia de Malasia y de Rumanía. Estas organizaciones criminales son similares a las expuestas en el apartado a) o pueden ser ramificaciones de una organización que se dedica a otras actividades delictivas, pero potencia su poder intimidatorio al existir ese elemento de conexión con alguna una importante mafia.

En el caso H7 el autor identificado pertenece a una organización mafiosa procedente de Malasia y exigía obtener una participación en los beneficios de determinados restaurantes rentables de Baleares, bajo la amenaza de avisar a sus compañeros para perpetrar acciones violentas contra las víctimas.

En el caso H10 los autores son integrantes de un grupo criminal rumano que exigieron el consumo gratuito de bebida y comida en un restaurante de Zaragoza, y requirieron también a la víctima el pago periódico de dinero que los integrantes del grupo sustraían directamente de las cajas registradoras del negocio.

En ambos casos, los integrantes vinculados a la mafia utilizan su notoria reputación para intimidar a las víctimas.

c) También existen organizaciones criminales dedicadas a los procesos extorsivos como principal actividad ilegal, como son las de los casos H3, H11, H4 y H14, aunque cada una tiene sus peculiaridades.

En el caso H3 se identifica a una organización criminal pakistaní asentada en Almería, en la que existe una clara división de funciones necesaria para llevar a cabo una compleja estrategia de extorsión a tres tipos de víctimas: a) pakistaníes en situación irregular en España, b) pakistaníes que residían legalmente en España y que tenían un alto nivel de

vida y c) vendedores ambulantes. A todos ellos se les exigía pagos a través de métodos intimidatorios, que se describen en el siguiente apartado.

En el caso H11 un individuo pakistaní, al que se le atribuía la pertenencia a una organización criminal conocida, aprovechaba el poder intimidatorio de la reputación de tal organización para extorsionar en su nombre. La víctima que denunció el caso afirmaba que ambos se conocían de un negocio anterior y la víctima pensó que había sido elegida por su conocida actividad empresarial en la zona.

En los dos casos expuestos, los autores emplearon amenazas y engaños para forzar los pagos, valiéndose además del conocimiento y de la posibilidad de utilizar información profesional y personal de las víctimas para intimidarlas.

Por su parte, la organización criminal del caso H4 era española y también contaba con una clara división de funciones para llevar a cabo una intrincada táctica para la selección y engaño a las víctimas en Almería y otras zonas de España. Iniciaban su actuación recopilando información sobre la situación económica de poderosos dueños de negocios y para ello se hacían pasar por importantes empresarios con valiosos contactos; además contaban con la complicidad de diversos cargos públicos. Cuando las víctimas se daban cuenta del engaño, comenzaba la extorsión propiamente dicha, a través de mecanismos de intimidación.

Por último, el caso H14 tuvo lugar en La Coruña y consistió en la exigencia, por parte de los autores y mediante métodos intimidatorios, de pequeños pagos a negocios locales que eran competidores de los establecimientos de la organización en la zona. Aunque autores y víctimas son competidores, lo que puede llevar a pensar en un primer momento que se trata de una extorsión monopolística, lo cierto es que corresponde al tipo de extorsión por protección. Esto es así debido a la naturaleza económica de las exigencias extorsivas: no estaban dirigidas de forma directa a la competencia, aunque pudiera derivarse de forma indirecta un consecuente empeoramiento de los negocios victimizados, en contraste con la mejora de la capacidad económica del negocio de los autores. Lo que la organización criminal exige es el cumplimiento de pagos periódicos a pequeños negocios de kebabs de la zona.

Ahora bien, existen casos donde el objetivo era claramente monopolístico, como se expone a continuación.

2.1. b) Los casos de extorsión monopolística

Se han identificado en la muestra tres casos de procesos de extorsión monopolística en el ámbito de la delincuencia organizada, que están incluidos en la muestra⁴⁷⁵. Todas las organizaciones criminales implicadas eran extranjeras, y todas las víctimas se resistieron a las exigencias de cierre de sus negocios. En estos tres casos, autores y víctimas eran competidores en la misma zona:

a) El caso H1 consistió en procesos extorsivos muy variados, perpetrados por la mafia italiana asentada en la isla de Formentera, a discotecas y restaurantes españoles. Las exigencias consistían en amenazas y coacciones para forzar la contratación de proveedores afines a la organización, el cierre del local, el cambio de productos o servicios ofrecidos en los negocios, e incluso la modificación del público al que estaba dirigida la empresa victimizada, normalmente pretendían que se cambiase el turismo nacional por el extranjero.

b) El caso H5 consistía en exigencias de cierre a restaurantes de la comunidad india en Alicante, donde un grupo criminal que poseía un negocio de restauración intimidaba a las víctimas que conformaban la competencia de la zona.

c) El caso H12 también consistía en exigencias de cierre de restaurantes, y fue perpetrado por parte de un grupo criminal inglés en Torrevieja, que pretendía dominar el territorio como restaurante de referencia, obligando a cerrar a la competencia.

En estos casos no se detectó violencia física, pero las amenazas y el acoso solían reforzarse a través de daños materiales (H1 y H12) o incendios provocados (H5), más detenidamente explicados en el siguiente apartado.

2.1. c) Los casos de extorsión laboral

Los casos identificados de extorsión laboral en el ámbito de la delincuencia organizada son dos⁴⁷⁶ y fueron perpetrados por individuos con ayuda de una organización criminal.

⁴⁷⁵ Casos H1, H5 y H12.

⁴⁷⁶ H9 y H13.

a) En el caso H9 sucedió en Almería y la extorsión fue cometida por tres pakistaníes, dos de los cuales colaboraron con un trabajador que finalizaba su contrato, para obligar al propietario del negocio de kebab a renovárselo.

b) El caso H13 es similar al anterior: tres antiguos trabajadores de Marruecos extorsionaron al propietario de un nuevo restaurante tratando de imponerle que les firmara un contrato laboral en una discoteca de Murcia.

2.2. *Modus operandi*

A raíz del estudio cualitativo del *modus operandi* se han identificado dos categorías atendiendo a su naturaleza:

a) La extorsión de naturaleza *territorial*, cuando el objetivo final de los procesos extorsivos perpetrados por la organización criminal se centra en conseguir el control de una zona concreta.

b) La extorsión de naturaleza *funcional* cuando la finalidad de la organización criminal dedicada a extorsionar consiste en la obtención de lucro o en conseguir una actuación determinada de la víctima.

Mediante esta categorización, se detallan a continuación las dos tipologías encontradas en los casos de la muestra.

2.2. a) Finalidad de la extorsión

La extorsión de *naturaleza territorial* fue identificada en los casos H1, H5 y H12, en los que el objetivo consistió en cerrar los locales, generalmente bares y restaurantes, mediante amenazas verbales que en determinados casos llegaron a la violencia física contra la víctima, así como utilizando el acoso e incluso provocando incendios.

El mejor ejemplo de la naturaleza territorial de la extorsión lo encontramos en el caso H1, donde la mafia italiana ubicada en Formentera controlaba agencias de viajes, bares, restaurantes, servicios de seguridad privada, proveedores de comida italiana, empresas de marketing, etc.

De esta forma, la finalidad de la organización consiste en el dominio de empresas en la isla; lo cual tiene un fuerte componente territorial. Esta finalidad, dada la significativa capacidad de la mafia italiana identificada, incluía el monopolio de actividades tan dispares como la restauración, la seguridad privada, los proveedores de bebidas alcohólicas y de comida típica italiana.

Los grupos criminales de los casos H5 y H12, aunque con menos poder, también tenían el propósito monopolístico de controlar los restaurantes indios de las zonas de Alicante. Por esta razón, las demandas siempre consistían en la exigencia del cierre de los locales que conformaban su competencia.

En cambio, en el supuesto de la extorsión de *naturaleza funcional*, contenida en todos los demás casos de la muestra, el objetivo consistía en la obtención de dinero a través de pagos o contratos.

Dos ejemplos claros de extorsión funcional por protección son los casos H3 y H15, donde una organización criminal controlaba una determinada zona de negocios y exigía pago a cambio de ofrecer una protección ante amenazas que ellos mismos provocaban.

En uno de los casos, una organización criminal pakistaní (H3) extorsionó al menos a 30 empresarios exigiendo pagos regulares, bajo amenazas tremendamente intimidatorias llegando a advertirles de su posible expulsión del país y de imputarles acusaciones falsas.

En el otro caso (H15) una asociación criminal de gran tamaño ejercía acciones de intimidación y violencia contra empresarios del ocio nocturno de Barcelona, con la intención de controlar los bares y discotecas frecuentadas por los extorsionadores. La actuación extorsiva consistía en exigir pagos y contratos de servicios de protección para financiar la continuidad del nivel de vida del propio grupo, además de requerir el acceso a los establecimientos y el consumo de bebidas gratuitamente.

Las organizaciones de los casos H6 y H8 desarrollaban procesos extorsivos de forma similar al caso anteriormente citado (H15). En estas ocasiones la extorsión de naturaleza funcional dirigida contra empresarios de la restauración consistió en imponer pagos a cambio de protección o, más bien, a cambio de no sabotear sus negocios procediendo de forma violenta. Concretamente en el caso H8, la coacción se vio reforzada por la posición que ocupaban los autores: el ostentar cargos públicos dotaba de una capacidad de la intimidación de las víctimas de forma inmediata y efectiva.

H9 y H13 son casos de extorsión funcional con la intención de obtener ingresos imponiendo a los empresarios victimizados la obligación de suscribir contratos laborales con determinados integrantes de la organización.

Los casos H4 y H2 son procesos extorsivos que los grupos inician simulando ser empresarios a través de mecanismos específicos de aproximación que consisten en préstamos ilegales o engaños.

Por último, en el caso H11 el extorsionador exigía un pago regular a las víctimas que tenían negocios de restauración en la zona, dándose a conocer como miembro de una violenta organización criminal.

A continuación, se presenta una tabla resumen sobre la descripción de las organizaciones que conforman la muestra de procesos extorsivos contra el sector hostelero.

Tabla 12. Descripción de los grupos de autores, los medios empleados, las causas, las actividades principales y los objetivos de la extorsión en los casos de hostelería.

Caso	Descripción del grupo	Medios	Causas	Actividades principales	Objetivos
H1	Un grupo de la mafia italiana que controla: agencias de viajes, bares, restaurantes, servicios de seguridad privada, proveedores de comida italiana, marketing, etc.	Amenazas verbales, daños materiales y boicots	Ubicación geográfica y control	Proveedores de productos italianos, inmuebles, servicios de seguridad privada, tráfico de drogas y extorsión	Forzar el cambio de la gerencia o cerrar el local
H2	El grupo se dedicaba los préstamos ilegales. Elegían a las víctimas en el casino, cuando tenían dificultades para pagar y hacían que la víctima aceptase nuevas condiciones de préstamo abusivas	Acoso, amenazas de muerte y violencia	Ubicación geográfica	Extorsión, préstamos ilegales y tráfico de drogas (cocaína y medicamentos)	La imposición de pagos periódicos (mercancías y dinero)
H3	La organización criminal pakistaní extorsionaba a otros pakistaníes de la zona. Por lo general, presentaban denuncias falsas contra aquellos empresarios que se negaban a pagar	Uso de la violencia. Pegaban a las víctimas antes de ser objeto de acusaciones falsas	Ubicación geográfica	Extorsión	La imposición de pagos periódicos
H4	La organización criminal recopilaba información económica y sobre bienes de empresarios. Actuaban como empresarios interesados en negocios.	Empleaban medios agresivos y amenazas verbales	Poder adquisitivo	Extorsión	La imposición del pago de una elevada cantidad en un breve plazo
H5	Uno de los miembros del grupo criminal tenía un restaurante indio, trataba de imponer sus normas a otros restaurantes asiáticos	Amenazas verbales e incendios provocados	Querían controlar los pequeños kebabs de la zona	Extorsión y competencia	Evitar la apertura de nuevos restaurantes indios
H6	La organización criminal extorsionaba a empresarios de la zona	Amenazas verbales y violencia física	Poder adquisitivo /ubicación geográfica	Extorsión, prostitución y tráfico de drogas	Pagos de 10.000€ por protección, en cada evento
H7	El principal extorsionador amenazaba con vender la participación en el negocio a la mafia de Malasia en caso de que las víctimas se negasen a pagar	Daños a los bienes de las víctimas y amenazas	Ubicación geográfica y poder adquisitivo	Desconocidas	Un pago único de 75.000€

H8	El grupo criminal estaba compuesto por concejales y policías locales, que exigían a los propietarios de los restaurantes pagos extraordinarios cuando tenían que hacer horas extraordinarias, durante las festividades locales	La mera petición procedente de un jefe de la policía se utilizaba como medio de intimidación	Ubicación geográfica y poder adquisitivo	Control de la localidad y el monopolio de los servicios de seguridad por los puestos que ocupan	Requerían el pago de 2.000€ por víctima al año
H9	El grupo pakistaní empleaba amenazas para exigir la renovación de un contrato laboral en un negocio de kebab	Palizas, insultos y amenazas de muerte	Miembro de la misma comunidad con negocios rentables	Desconocidas	Renovar el contrato laboral
H10	Extorsionadores rumanos visitaban frecuentemente el restaurante de la víctima y no pagaban nunca la cuenta	Acoso y amenazas	Ubicación geográfica	Desconocidas	La organización criminal quería consumir gratuitamente y obtener el pago de dinero extra del restaurante (generando un gasto de 1.800€)
H11	Un extorsionador pakistaní, que decía ser miembro de un grupo criminal, comenzó a extorsionar a otros pakistaníes	Amenazas de muerte y amenazas de incendios provocados	Poder adquisitivo	Desconocidas	Un pago mensual de 1.500€
H12	Un grupo inglés que regentaba un restaurante trató de evitar la competencia provocando incendios y empleando amenazas y boicots contra sus competidores de la zona	Amenazas verbales, daños materiales y boicots	Ubicación geográfica /control	Hostelería	El cierre de restaurantes
H13	Dos extorsionadores marroquíes habían estado trabajando como músicos en el negocio victimizado, pero cuando fueron despedidos comenzaron a acosar a los propietarios y a los gerentes	Amenazas de muerte, acoso, robo e incendios provocados	Imposición de un contrato laboral	Los autores eran también músicos	Imponer un contrato laboral
H14	Extorsionadores españoles exigían varios pagos <i>ad hoc</i> a la víctima bajo amenazas de muerte. Cuando la víctima se negaba,	Amenazas verbales	Ubicación geográfica	Hostelería	Pago de 500€ por cada visita (irregular)

	aumentaba el nivel de violencia y exigencias				
H15	La organización criminal española cuenta con más de 29 miembros, que controlaba varios locales nocturnos de Barcelona	Amenazas, agresiones, palizas, peleas y acoso	Ubicación geográfica	Extorsión, tráfico de drogas y servicios de protección	Pagos de los empresarios e imposición de servicios de protección

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de casos, publicada en Rusev et cols. (2016).

2.2. b) Medios empleados en los procesos extorsivos

Los medios que emplean las organizaciones criminales para la consecución de sus objetivos son muy diversos.

Actuaciones consistentes en amenazas verbales y acoso son estrategias comunes en todos los casos de la muestra. Acciones como el engaño, los daños materiales y los incendios provocados se utilizaron de forma excepcional por varios grupos criminales. Además, el uso de la violencia física fue mínimo, pues de las declaraciones de las víctimas se deduce que la *intimidación ambiental*⁴⁷⁷ producida por la reputación de la organización criminal es suficiente para doblegar su voluntad.

A continuación, se explica el uso de los medios específicos para forzar las exigencias extorsivas:

Engaño

El caso H4 es un claro ejemplo del engaño utilizado como mecanismo de aproximación a la víctima. Así, algunos integrantes de la organización se hacían pasar por importantes empresarios con intereses comunes a los de la víctima, y establecían contacto con ella con la

⁴⁷⁷ Como ya se ha comentado en el cuarto apartado del segundo capítulo, se entiende por intimidación ambiental una forma de intimidación implícita, a partir de la continuidad delictiva por parte de los miembros de la organización criminal conocida por las víctimas o en su entorno. Tal intimidación derivada de su reputación permite a los integrantes operar de forma más efectiva, además requiere un menor uso de violencia, pues la simple verbalización de las exigencias extorsivas provoca en las víctimas un gran temor si conocen lo que ha ocurrido a otras personas que las han rechazado, y consecuentemente lo que también les puede ocurrir si ellas no cumplen con las demandas.

disculpa de proceder a un intercambio de divisas o negocios similares. Cuando la víctima descubría el engaño, se iniciaba el proceso de extorsión reclamando los pagos según la capacidad económica de la víctima.

Daños materiales

Los daños a los bienes como muebles o utensilios del negocio o a propiedades como el propio local de las víctimas, suponen un elemento añadido de intimidación para reforzar los objetivos extorsivos en los casos H1, H7, H12 y H15. Los más comunes fueron los siguientes:

- Forzar el cierre del local de la víctima.

La mafia italiana (H1) ubicada en Formentera que pretendía un control monopolístico de empresas de restauración de la zona, empleaba daños físicos como el destrozo de mobiliario de los restaurantes victimizados que iban acompañados de una serie de medios intimidatorios: amenazas para hacer cumplir a la víctima unos estrictos horarios de apertura y cierre, ofertas de servicios de protección y seguridad e incluso de asistencia financiera para los miembros de la familia de la víctima tales como los gastos académicos de sus descendientes, dando a entender que conocía a la familia de alguna manera.

El grupo criminal británico (H12) que extorsionaba a restaurantes competidores en Alicante dañó el local de la víctima con la intención de forzar el mecanismo de intimidación a su propietario tras haber acosado insistentemente a su familia, a sus empleados y a sus clientes con amenazas de muerte, entre otras coacciones. Los autores admitieron haber provocado incendios y boicots en restaurantes de la zona para lograr la eliminación de competencia.

- Amenazas de muerte o amenazas de amputar las extremidades de la víctima.

La fuerte intimidación ejercida a través de actos verbales que provoquen en la víctima un temor por su integridad física o la de su familia es un mecanismo de gran utilidad para los extorsionadores, como ocurre con el autodenominado integrante de la mafia de Malasia (H7).

En otro caso, una asociación criminal española muy violenta provocó daños y amenazó de forma muy agresiva a las víctimas (también provocó importantes

lesiones) con el fin de lucrarse mediante pagos y contratos de servicios de protección(H15).

Incendios provocados y amenazas de provocar incendios

Los incendios provocados son una medida adicional que refuerza el mensaje extorsivo, especialmente si ya se ha amenazado previamente con incendiar el local en caso de que las víctimas se nieguen a aceptar las exigencias, que pueden consistir en la contratación laboral de un integrante de la organización (H13) o en el cierre del local (H5) y que en ocasiones se logran provocando destrozos a causa del fuego, gasto irreparable para la economía del pequeño empresario.

Cabe precisar que, las amenazas de provocar incendios como parte del proceso extorsivo se emplearon sobre bienes de la víctima, como el de su coche en el caso (H2) y sobre sus propiedades tales como su propio restaurante (H11).

Medios violentos

Algunos extorsionadores llegaron a emplear violencia física contra las personas como elemento facilitador de la intimidación, como sucedió en los casos H2, H3, H6, H9 y H15. Aunque en la mayoría de ellos dicha violencia consistió en puñetazos y palizas, en el caso H15 se utilizó una violencia extrema contra algunos empresarios que se negaron a pagar. A algunos de ellos les propinaron palizas de mucha gravedad, a otro le clavaron un objeto punzante de forma penetrante en la pierna e incluso llegaron a cometer un homicidio.

2.2. c) Implicación de cargos públicos

La implicación de cargos públicos refuerza de forma significativa todo el proceso extorsivo tanto en lo relativo a la efectividad de la intimidación, como en lo que se refiere al control territorial o funcional, permitiendo a los criminales actuar de forma más eficaz e impune.

Así ocurrió en los casos H1, H3, H4 y H8, donde las organizaciones criminales contaron con la complicidad de funcionarios y cargos públicos pertenecientes a diversas instituciones de tipo policial, político o judicial, y cada cual tenía asignadas sus propias funciones en el proceso extorsivo. A continuación, se detallan los casos encontrados:

- a) Una organización criminal combinó a integrantes de la policía local con el alcalde del pueblo, para solicitar dinero en concepto de sueldo adicional para los agentes, por los servicios prestados durante las fiestas de la localidad, argumentando que eran horas extra que debían cobrar y que percibieron como dinero negro (H8).
- b) Otra organización que perpetró procesos extorsivos contra más de 30 inmigrantes parecía contar con la complicidad de funcionarios de policía y cargos públicos adscritos a departamentos de extranjería para forzar la intimidación mediante la gestión de los permisos de estancia y trabajo en el país y ante un eventual rechazo a las exigencias extorsivas, y también para proceder a denunciar falsamente a la víctima y así lograr su ingreso en prisión, como ocurrió en el caso H3.
- c) Por último, una organización criminal contó con la connivencia de un fiscal y de un inspector de trabajo (caso H4) que reforzaban el mensaje intimidatorio en el proceso extorsivo a empresarios de gran capacidad económica. El inspector de trabajo se encargaba de proporcionar la documentación falsa a los impostores que se hacían pasar por empresarios y, cuando los empresarios detectaban que se trataba de un engaño o una extorsión y amenazaban con denunciar a los autores, el fiscal procedía a amedrentar a las víctimas.

Concretamente, la complicidad de los agentes de policía es de especial gravedad debido a sus funciones de protección de la ciudadanía propias de estos funcionarios. Su apoyo a los procesos de intimidación a la víctima se ha llevado a cabo mediante dos formas de actuación:

- Abuso de sus atribuciones para forzar a la víctima a cumplir las exigencias, como inspecciones periódicas o sanciones administrativas (H1 y H8).
- Apoyo en la intimidación para evitar denuncias por parte de las víctimas (H8).

Todos estos medios estaban orientados a someter la voluntad de las víctimas, pero no todas respondieron de la misma forma ante la extorsión. A continuación, se presenta el análisis de las respuestas de las víctimas del sector hostelero afectadas por los procesos extorsivos.

3. Las víctimas del sector hostelero afectadas por los procesos extorsivos

Las víctimas vinculadas a negocios de hostelería que fueron objeto de procesos extorsivos no respondieron de la misma manera. A este respecto cabe citar lo expresado por Centorrino et al. (1999), en el sentido de que existen distintas formas de reacción ante las demandas de extorsión⁴⁷⁸, y las más comunes son:

- La aquiescencia, cuando la víctima decide atender las exigencias o aceptar las condiciones extorsivas.
- La resistencia: la víctima se niega a atender las exigencias de los extorsionadores o rechaza el cumplimiento de las condiciones.

Ahora bien, no todas las opciones son excluyentes, hay ocasiones donde una víctima puede resistirse y terminar atendiendo a las exigencias por ser objeto de fuertes presiones, o también puede aceptar en un primer momento las demandas y posteriormente decidir resistirse y denunciar el caso a la policía.

A continuación, se presenta un cuadro resumen que describe el perfil de las quince víctimas de los casos objeto de la muestra de procesos extorsivos contra el sector hostelero, su respuesta frente a la extorsión y la ubicación del lugar donde sucedieron los hechos

⁴⁷⁸ El autor añade un tercer tipo: complicidad, cuando las víctimas atienden las exigencias de los extorsionadores y reciben ventajas indebidas (Centorrino et al. 1999); pero en este supuesto no trataríamos el caso como un proceso extorsivo tal como se pretende en el presente estudio.

Tabla 13. Descripción de los casos de extorsión en la hostelería por características de las víctimas, reacción frente a la extorsión y lugar de los hechos.

Caso	Víctimas	Reacción	Lugar
H1	Propietario de una discoteca	Resistencia: se negó a cumplir, no denunció	Es Pujols, Formentera
H2	Propietarios de un restaurante español	Aquiescencia	Castillo de Locubín, Jaén
H3	Empresarios y vendedores ambulantes pakistaníes	Aquiescencia	El Ejido, Adra, Berja y Almería
H4	Empresarios con un alto nivel de vida	Aquiescencia	Almería, Málaga, Toledo y Madrid
H5	Comercios y tiendas de comida y bebida, kebabs y restaurantes indios	Resistencia: la víctima denunció el caso ante la policía	Torre Vieja, Alicante
H6	Empresarios de la zona	En un primer momento atender a la exigencia, pero más tarde denunciar ante la policía	Castellón de la Plana
H7	Empresarios del sector de la hostelería	Resistencia: la víctima denunció el caso ante la policía	Palma de Mallorca
H8	Propietarios de restaurante	Aquiescencia	Cudillero, Asturias
H9	Propietario de un negocio de kebab	Resistencia: finalmente presentó una demanda ante la policía	Roquetas de Mar, Almería Andalucía
H10	Propietario de un restaurante indio	Aquiescencia, aunque después de 10 meses, denunció el caso ante la policía	La Almunia de Doña Godina, Zaragoza
H11	Propietario pakistaní de un negocio de kebab	Resistencia: se negó a cumplir	Caspe, Zaragoza
H12	Propietario de un restaurante indio	Resistencia: se negó a cumplir y denunció el caso ante la policía	Torre Vieja, Alicante
H13	Propietarios de locales de hostelería	Resistencia: se negó a cumplir y denunció el caso ante la policía	Torre-Pacheco, Murcia
H14	Propietario pakistaní de dos negocios de kebabs	Resistencia: la víctima atendió alguna de las exigencias, pero finalmente denunció el caso ante la policía	Carballo, La Coruña
H15	Propietario de varios bares nocturnos	Resistencia: se negó a cumplir con las exigencias de la extorsión y fue herido de gravedad	Barcelona

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de casos, publicada en Rusev et cols. (2016).

Cabe recordar en este punto que todas las víctimas de los casos seleccionados expresaron que no eran las únicas y que el comportamiento de los extorsionadores estudiados en la muestra respondía a un mecanismo sistemático de control territorial o funcional.

A continuación, se analizan los incidentes extorsivos denunciados a la policía, teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas reales no denunciaron el caso.

3.1. Características demográficas, sociales y económicas de las regiones afectadas

Siguiendo el enfoque de detección de vulnerabilidades⁴⁷⁹, el análisis comprende un breve estudio socioeconómico del entorno de la víctima. En este escenario, las variables de interés para el estudio que se presenta incluyen información sobre:

a) La actividad económica de la zona pues sus características ofrecen diferentes formas de aprovechamiento económico para las organizaciones criminales.

b) La presencia de asociaciones o formas de colaboración empresarial para identificar las posibilidades de apoyo o respuesta conjunta por parte de las víctimas.

c) El nivel de crimen organizado para evaluar un aspecto del entorno criminológico en forma de indicador de penetración del fenómeno.

En la muestra analizada, el Sur de España y la costa mediterránea son las regiones más afectadas por los casos de extorsión⁴⁸⁰, mientras que la costa este se ve afectada en menor medida. Además, cuatro de los quince casos estuvieron relacionados con negocios ubicados en zonas turísticas (H1, H6, H7 y H15).

⁴⁷⁹ Este enfoque metodológico consiste en el estudio de las oportunidades que suponen los negocios legales para los grupos de crimen organizado y centra los análisis en un entorno socioeconómico más amplio; ha sido implementado por importantes organismos en el estudio del crimen organizado como Europol (2013) y el Equipo de Trabajo de Acción Financiera (FATF, 2013). Este enfoque se explica con mayor profundidad en el punto 2.1. del capítulo cuarto de la presente tesis.

⁴⁸⁰ Los casos recopilados no son representativos de la distribución geográfica de la extorsión en España como ya se ha expuesto en las limitaciones del estudio en el cuarto capítulo.

Las prácticas extorsivas tuvieron lugar en pequeñas localidades poco pobladas de Andalucía, la costa mediterránea y el Norte de España, salvo un caso en Barcelona, que se produjo en el centro de la ciudad.

Debido al estudio del entorno de la víctima, se han podido identificar dos categorías de ubicación geográfica en las que éstas residían atendiendo a la base de su economía: regiones basadas principalmente en la agricultura (H2, H3, H4, H8, H9, H10, H11, H13 y H14) y regiones basadas principalmente el turismo (H1, H5, H6, H7, H12 y H15).

3.1. a) Regiones basadas en la agricultura

Nueve de los quince casos tuvieron lugar en pequeñas localidades en las que la agricultura constituye la base de la economía. Las regiones situadas en Asturias (H8), Zaragoza (H10 y H11), Murcia (H13) y La Coruña (H14) donde se produjeron los hechos, tienen una tasa baja de bares y restaurantes ya que se dedican fundamentalmente a la agricultura y a otras actividades distintas a la hostelería.

Sin embargo, en Almería (H4, H4, H9) y Jaén (H2), sí que existe un número mayor de establecimientos hosteleros. Ninguna de las víctimas formaba parte de una asociación de comerciantes, hosteleros o empresarios, y exceptuando las circunstancias del caso (H9) tampoco existía una asociación cercana de ámbito local.

Se debe señalar que todos estos casos tuvieron lugar en provincias en las que el nivel de crimen organizado es medio o bajo, tal como señala la tabla 14.

3.1. b) Zonas turísticas

Seis de los quince casos se produjeron en zonas turísticas, como son las Islas Baleares (H1 y H7), Alicante (H5 y H12), Castellón (H6) y Barcelona (H15).

Se trata de regiones con una alta tasa de negocios de hostelería dada su fuerte vinculación con el turismo y, presentan un nivel medio o alto de crimen organizado, como muestra la tabla 14. A partir de estos datos, cabe deducir que las organizaciones criminales que

operan en la zona ven en la presencia de este importante número de bares y restaurantes una oportunidad de financiación.

Ninguna víctima parecía formar parte de una asociación de comerciantes, hosteleros o empresarios, pero las zonas donde se ubican sí cuentan con relevantes asociaciones de comerciantes o comerciantes (salvo en el caso H6).

La siguiente tabla muestra el nivel (alto o bajo) de asociaciones de comerciantes y empresarios del sector de la hostelería de la localidad afectada, las características del lugar, el número de víctimas perjudicadas en el caso principal y el resto de las víctimas afectadas por el mismo grupo criminal, así como el nivel de crimen organizado existente en las provincias en las que tuvieron lugar los casos objeto del estudio.

Tabla 14. Características principales de los lugares afectados por los casos de extorsión en la hostelería.

Caso	Provincia	Número de asociaciones de empresarios / comerciantes	Características clave de la localidad	Nº de víctimas del caso	Nº del resto de víctimas *	Nivel de crimen organizado**
H1 y H7	Islas Baleares	Alto/Alto	Turismo e inmigración	2	Más de dos	Medio
H2	Jaén	Alto/Bajo	Agricultura	2	Más de dos	Bajo
H3, H4 y H9	Almería	Alto/Bajo	Agricultura e inmigración	22	Al menos 40	Medio
H5 y H2	Alicante	Alto/Alto	Turismo e inmigración	4	Más de cinco	Alto
H6	Castellón	Alto/Bajo	Turismo e inmigración	1	Más de dos	Alto
H8	Asturias	Bajo/Alto	Agricultura y turismo	5	Más de cinco	Bajo
H10 y H11	Zaragoza	Bajo/Bajo	Agricultura e inmigración	1	No disponible	Bajo
H13	Murcia	Bajo/Bajo	Agricultura e inmigración	1	No disponible	Medio
H14	La Coruña	Bajo/Bajo	Agricultura	1	No disponible	Bajo
H15	Barcelona	Alto/Alto	Turismo e inmigración	1	Más de 29	Alto

**Cuando el testimonio de la víctima o la documentación policial muestran la existencia de más víctimas afectadas.*

*** Los niveles de crimen organizado se han obtenido de los datos del Ministerio del Interior (2015) (en 2016 cambian los niveles de Almería a bajo y Castellón a bajo).*

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de casos.

3.2. Pautas de comportamiento de las víctimas

Es interesante para el estudio que se presenta el análisis de las pautas de comportamiento de las víctimas; teniendo en cuenta las demás características del proceso extorsivo, conocer las razones del rechazo ante las demandas extorsivas y de la interposición de denuncias a la policía, así como las relaciones previas entre autores y víctimas, puede resultar especialmente significativo para la elaboración de propuestas de mejora en la protección de estas víctimas.

Los casos en los que tanto víctimas como autores de la extorsión eran españoles (H2, H4, H6, H8 y H15), las víctimas aceptaron las exigencias y pagaron, produciéndose también esta misma respuesta en el único caso con autores españoles y víctimas extranjeras (H14). Esto muestra la gran eficacia de organizaciones criminales españolas en los procesos extorsivos perpetrados.

Sin embargo, en todos los demás casos las víctimas españolas, indias y marroquíes rechazaron la extorsión y denunciaron los incidentes ante la policía; se trata de procesos extorsivos a víctimas extranjeras o perpetradas por autores extranjeros (excluidos pakistaníes) (H1, H7, H12 y H13).

Ahora bien, los patrones de respuesta en las víctimas pakistaníes fueron diferentes, pues dependieron de la relación previa entre víctimas y autores:

- Si autores y víctimas no se conocían, ya fuesen compatriotas (H3) o no (H10 y H14), los procesos extorsivos se aceptaban.
- Si los autores eran conocidos para las víctimas (H9 y H11), las exigencias extorsivas se rechazaban y eran denunciadas ante las autoridades españolas.

Por último, en el único caso identificado dentro de la comunidad india (H5), en el que autores y víctimas compartían la nacionalidad india, la extorsión fue rechazada y el incidente fue denunciado ante la policía.

En el caso de las víctimas extranjeras, el desconocimiento de la legislación española, las dificultades con el idioma español y su situación legal constituyen un gran obstáculo para oponer resistencia⁴⁸¹.

⁴⁸¹ Por ejemplo, cuatro víctimas pakistaníes fueron encarceladas a resultas de las denuncias falsas de una organización criminal (H3).

4. Respuesta legal ante los procesos extorsivos contra la hostelería

Tal como el marco legal ha puesto de manifiesto, los procesos extorsivos abarcan diferentes conductas criminales y consecuentemente, distintos tipos delictivos. Resulta de interés, por tanto, conocer tanto la descripción jurídica de la muestra como los tipos penales aplicados a cada caso atendiendo a las conductas extorsivas identificadas. Ambas cuestiones se exponen a continuación.

4.1. Descripción jurídica de la muestra

Como ya se adelantaba en capítulos anteriores, los procesos extorsivos pueden adoptar diferentes formas de manifestación que determinan las conductas criminales que se llevan a cabo, lo que incide en los tipos penales aplicables y en otras cuestiones procesales, como, por ejemplo, la identificación del número total de autores que perpetran el proceso extorsivo o de autores implicados en el caso.

En el escenario de los procesos extorsivos contra negocios de la hostelería nos encontramos hechos delictivos muy diversos, como muestra la siguiente tabla descriptiva:

Tabla 15. Descripción jurídica de los casos de extorsión en la hostelería.

Caso	Órganos/Instituciones	Nº detenidos o condenados	Nº autores implicados	Tipos penales aplicables
H1**	Testimonio anonimizado	-	4	Extorsión, amenazas, coacciones y organización criminal
H2	Guardia Civil	5	5	Extorsión, amenazas, coacciones, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal
H3	Guardia Civil	5	5	Organización criminal, extorsión, denuncia falsa y simulación de delito, amenazas y coacciones
H4	Guardia Civil	7	7	Extorsión, estafa, usurpación de funciones públicas, grupo criminal
H5	Guardia Civil	8	8	Amenazas*
H6	Audiencia Provincial	4	4	Extorsión y amenazas
H7	Audiencia Provincial	1	1	Extorsión
H8	Audiencia Provincial	1	1	Cohecho
H9	Guardia Civil	1	3	Amenazas
H10	Guardia Civil	3	4	Amenazas y coacciones
H11	Guardia Civil	1	1	Amenazas
H12	Guardia Civil	3	4	Amenazas
H13	Guardia Civil	2	3	Incendio
H14	Guardia Civil	1	3	Amenazas*
H15	Audiencia Provincial	29	29	Asociación ilícita, extorsión, amenazas, coacciones y lesiones

*Se trata de faltas y no de delitos, según la regulación vigente en el momento de la comisión del hecho delictivo.

**Se debe tener en cuenta que el primer caso corresponde a un testimonio sin denuncia, lo que limita sustancialmente el análisis jurídico.

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de casos.

La tabla presenta una muestra de 15 casos que se distribuyen de la forma siguiente, en función de su procedencia:

a) Un testimonio anónimo.

b) Diez casos que provienen de diligencias policiales⁴⁸² de la Guardia Civil,⁴⁸³ que incluyen, entre otros documentos⁴⁸⁴, la denuncia y en ocasiones el testimonio de algún testigo e incluso de los propios autores.

c) Cuatro casos que proceden de resoluciones judiciales, todas ellas de Audiencias Provinciales.

El número real de autores implicados es complejo de analizar. En primer lugar, existe el dato aportado por las víctimas y, en segundo lugar, el número de detenidos que figura en las diligencias policiales y de condenados que se recoge en las resoluciones judiciales. Dichas cifras difieren en cinco casos de la muestra (siempre es superior la cifra aportada por la víctima). A esto debe añadirse que cuando el autor material del delito se identifica como miembro de una organización criminal, la víctima desconoce el número de integrantes de tal organización.

Por tanto, sabemos que, en cualquier caso, la cifra de detenidos o condenados únicamente refleja el número de autores identificados y sobre los que se ha logrado recabar evidencias suficientes como para vincularle a un hecho delictivo concreto⁴⁸⁵. Además, solo de los cuatro casos que provienen de la Audiencia Provincial (H6, H7, H8 y H15) se tiene constancia de que se haya judicializado el incidente extorsivo.

Por último, como muestra la tabla objeto de análisis, los hechos delictivos son muy diversos; no obstante, podemos identificar dos tipologías de delitos: aquellos vinculados directamente a los procesos extorsivos, y aquellos otros tipos penales que no están contenidos como parte del proceso extorsivo.

⁴⁸² Denominadas por el cuerpo como Diligencias Previas, pero que no son aquellas correspondientes al Juzgado, si no a documentos policiales.

⁴⁸³ Todas ellas analizadas en el marco del proyecto CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión Europea, y cuya información se ha obtenido con total confidencialidad y anonimizando los datos para proteger la intimidad de víctimas, testigos y autores.

⁴⁸⁴ Entre los documentos que no son de interés para el proyecto se encuentran partes médicos de lesiones, solicitudes de entrada y registro, solicitudes de intervenciones telefónicas, citaciones a juicio, etc.

⁴⁸⁵ Esta cuestión es resultado de la dificultad de la investigación y enjuiciamiento del crimen organizado, que presenta especiales problemas procesales y materiales (Jordá et cols., 2014).

I) Delitos directamente vinculados a los procesos extorsivos

Existen casos relativos a delitos que corresponderían a un proceso extorsivo tradicional, con los elementos propios de estas conductas delictivas, que serían los siguientes:

a) Una estructura de delincuencia organizada que se evidencia en forma *delitos de organización*: organización criminal (en H1, H2 y H3) y grupo criminal (H4), o de asociación ilícita (H15).

b) El *modus operandi*, que se recoge esencialmente a través de diferentes tipos penales que contienen los elementos de intimidación y violencia⁴⁸⁶: amenazas (H11, H2, H3, H5, H6, H9, H19, H11, H12, H14 y H15), y coacciones (H2, H3, H10 y H15); o como resultado de tales elementos: daños (H1) y lesiones (H15).

c) El delito de *extorsión* forma parte del conjunto de tipos aplicados (H1, H2, H3, H4, H6, H7, y H15) que lógicamente es el tipo penal que mejor refleja los objetivos del proceso extorsivo.

d) La concurrencia de *otros delitos* como parte de su *modus operandi* tradicional: estafa (H4) denuncia falsa y simulación de delito (H3), o de incendio (H13).

II) Delitos no vinculados directamente a los procesos extorsivos

También existen casos que contienen delitos no vinculados directa y tradicionalmente con los procesos extorsivos, según el análisis legal expuesto en el segundo capítulo de la presente tesis:

a) Se dan casos referidos a delitos aparentemente aislados o poco comunes, como la usurpación de funciones públicas (H4) y el cohecho (H8), que pueden formar parte de un *modus operandi* específico de un grupo especializado en materia de corrupción.

⁴⁸⁶ En estos casos, el testimonio de la víctima ha sido fundamental para identificar un proceso extorsivo que, según su testimonio, fue perpetrado por una organización de manera sistemática sobre un conjunto de empresas. Sin tal aportación, hubiera sido imposible conocer la vinculación del delito con un proceso extorsivo de las características que se exigen para la muestra.

b) Además, las organizaciones pueden cometer de manera simultánea otras actividades delictivas que constituyen una fuente más de financiación, como ocurre con el tráfico de drogas (H2).

A continuación, se lleva a cabo el análisis de la casuística, atendiendo a la respuesta legal a los procesos extorsivos que, salvando las barreras derivadas de la intimidación y el control territorial por parte de la organización criminal, han logrado llegar a conocimiento de un cuerpo policial o de un órgano judicial.

4.2. Conductas extorsivas y tipos penales aplicados

En este apartado se presenta caso a caso una breve descripción de los hechos de los quince incidentes extorsivos a negocios de hostelería y los tipos penales aplicados, ya sean recogidos en las diligencias policiales o descritos en las resoluciones judiciales. Hay que exceptuar el primer caso, donde se identifican los tipos penales aplicables debido a que la fuente de información es un testimonio anonimizado, por lo que no se aplicó ninguna figura por parte de ninguna institución policial ni judicial.

Ahora bien, existen dos puntos que se deben tener en cuenta en la lectura del presente apartado. Por un lado, a pesar de que hubiera sido de enorme interés para el estudio, no se lograron identificar las resoluciones judiciales de los casos policiales, dato que hubiera enriquecido enormemente el análisis de la respuesta penal. Por otro lado, existen importantes diferencias en materia de contenido, habiendo casos ampliamente explicados en las diligencias policiales o resoluciones judiciales, y otros en cambio, donde la información ha sido realmente escasa. Por esta razón debe quedar claro que los análisis del capítulo completo se basan en: a) las declaraciones de víctimas, testigos y autores recogidas en las diligencias, y b) los hechos probados contenidos en las resoluciones judiciales, así como los argumentos jurídicos en materia de tipificación penal.

Finalmente se expone un breve comentario sobre la respuesta jurídica que permitirá desarrollar un estudio legal sobre problemáticas y propuestas de mejora para el sector de la hostelería en España en el último capítulo de la presente tesis.

Caso H1

El primer caso de la muestra de hostelería acontece entre los años 2006 y 2015 en Es Pujols, Formentera, y es especialmente particular debido a la fuente: se trata de un testimonio anonimizado, por lo que no se puede analizar la tipificación de los hechos delictivos que pudiera haberse hecho desde las instituciones. Ahora bien, aporta información valiosa sobre los tipos penales habituales cometidos por la mafia italiana, experta en la ocultación de sus actividades ilegales⁴⁸⁷.

Se trata de una organización ilegal de al menos cuatro integrantes que constituía una rama de la mafia calabresa 'Ndrangheta: ubicada en el extremo sur de la Península Itálica, y que trataba de extender su radio de acción a zonas turísticas del mediterráneo como las islas Baleares. Esta rama criminal concreta estaba asentada en Formentera y se dedicaba a diversas actividades legales destinadas al turismo, como agencias de viajes, bares, restaurantes, servicios de seguridad privada, proveedores de comida italiana, marketing, etc. Las actividades ilegales se debían a sus aspiraciones monopolísticas, que consistían en controlar el mercado de proveedores que suministraban determinados productos a la isla.

Como se ha señalado anteriormente, los hechos tienen lugar en Es Pujols, zona de ocio con una alta proporción de empresas de restauración y hostelería, donde existen numerosos negocios italianos de pizza, aperitivos italianos, etc.; muchos de ellos controlados por la mafia calabresa. Para ello utilizaban diferentes estrategias, que adaptaban en función de la respuesta de cada víctima; en este caso concreto, la víctima identifica tres fases en el proceso extorsivo:

En un primer momento, que en este caso fueron dos años (2006 a 2008), la manera de aproximarse a las víctimas se produjo de forma amigable y tranquila mediante la oferta de servicios de suministro de comida y bebida desde Calabria, servicios de seguridad, de mejoras en la publicidad para atraer a clientes italianos y ventajosas oportunidades de financiación, para lo que remarcaban los beneficios que podrían suponer para el empresario.

⁴⁸⁷ De hecho, según los entrevistados expertos en crimen organizado de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el nivel de penetración de la mafia italiana es muy alto dadas las escasas operaciones policiales y judiciales contra sus organizaciones criminales. Insisten en la capacidad de ocultación como nota característica, además de una enorme flexibilidad para adaptarse a las demandas del mercado de los territorios donde desea operar, y el fuerte control que es capaz de ejercer sobre negocios de hostelería en una región concreta, casi sin dejar rastro de sus actividades ilegales.

En 2008, tras la negativa del empresario, los autores comenzaron a cambiar el discurso, advirtiéndole que su organización estaba capacitada para hacer que no volviera a tener clientes y se viera obligado a cerrar su negocio. Le intimidaron también con que desde ese momento la policía local comenzaría a incrementar las inspecciones administrativas en su local. Además, la víctima relata cómo otras víctimas de la zona, que se resistieron a realizar negocios con esta organización, sufrieron daños en sus locales, boicots contra los clientes y recibieron amenazas de que si no cerraban el local padecerían una oleada de robos y lesiones.

En el año 2009, ante la negativa de la víctima a aceptar sus condiciones, el autor, sin manifestar un comportamiento agresivo, le recordó el importante aumento de robos y acciones violentas que estaban soportando los empresarios de la zona para lograr que accedieran a contratar sus servicios de protección para ellos y sus familias, argumento que la víctima interpretó como una amenaza hacia su familia y a la seguridad de su negocio. Durante los siguientes años diversos integrantes del grupo mafioso pasaban horas y días a pocos metros de la terraza mirando a la víctima, sin llegar a comunicarse con él, para dejar patente que le estaban vigilando.

Como se aprecia por la descripción de los hechos, la extorsión siempre se lleva a cabo de forma aparentemente amistosa con un claro motivo de controlar una zona geográfica concreta para desarrollar una actividad turística a través de bares, restaurantes y clubs nocturnos. La organización criminal es especialmente cuidadosa en no dejar evidencias que puedan acarrear procesos penales en su contra, y al menos en apariencia, demuestra una buena relación con funcionarios de la Administración Pública de la región, lo que hace pensar a las víctimas que denunciar no sólo sería inútil, sino que podría conllevar represalias si la mafia se enterara.

Los tipos penales aplicables son, entre otros: amenazas condicionadas, daños en local público y extorsión; ahora bien, las limitaciones probatorias, la connivencia de instituciones públicas tanto policiales como administrativas y el miedo de las víctimas como resultado de la intimidación, impiden la identificación de casos judicializados en esta materia.

Caso H2

Se trata de una organización criminal dedicada a préstamos ilegales en distintas zonas de Jaén durante el año 2011, cuando un empresario, arruinado por no poder pagar los enormes intereses del préstamo que le había otorgado el grupo, comenzó a sufrir un proceso extorsivo. Las conductas intimidatorias consistieron en amenazas de muerte y advertencias de que se

producirían una serie de incendios en sus propiedades (su coche y su negocio). También le propinaron empujones y existió contacto físico que no produjo resultado de lesiones; además tuvo que soportar un incesante acoso mediante continuas visitas de los autores a su negocio, así como un permanente seguimiento de sus movimientos por parte de la organización.

Los hechos concretos comenzaron como un pequeño préstamo de 250 euros para que el empresario pudiera pagar parte de su alquiler porque llevaba retraso; a cambio debía devolver en 15 días los 250 euros de capital más 50 euros de interés a través de un pacto verbal. La víctima trató de liquidar la deuda con tres días de retraso: debiendo pagar el día 23 de septiembre de 2011, contactó con la organización el día 26. Como consecuencia del retraso en el pago, la organización le requirió el abono de 110 euros y un interés de 30 euros diarios computados desde el día 23 en que debía de haber abonado su deuda y le hicieron firmar a la víctima en contra de su voluntad un documento de reconocimiento de deuda, a modo de aceptación de las condiciones del supuesto préstamo. Cuando la víctima fue a pagar los 250 euros de intereses la deuda se había incrementado 140 euros en unos días, y ascendió a 2.175 euros en unas semanas. Además, la organización obligó a la víctima a firmar un nuevo contrato ilegal empleando medios intimidatorios. Cuando la víctima logró vender su coche y sus tierras, fue a pagar un total de 6.000 euros, pero el grupo le requirió 2.000 euros más.

Las conductas intimidatorias consistieron en amenazas de muerte y de provocar una serie de incendios en propiedades de la víctima, su coche y su negocio, en empujones y contacto físico que no produjeron resultado de lesiones, y en un incesante acoso con continuas visitas a su negocio, así como un permanente seguimiento de los movimientos de la víctima por parte de la organización.

Debido a la capacidad intimidatoria del grupo, este logró una importante reputación en la zona que permitió a sus miembros tener varias propiedades inmobiliarias producto de la usura y de los procesos extorsivos desarrollados contra víctimas de la región.

Los delitos identificados por la Guardia Civil y recogidos en su atestado policial fueron: a) amenazas y coacciones como resultado de los medios intimidatorios empleados, b) tráfico de drogas que constituía la actividad principal del grupo, c) extorsión con motivo de los procesos extorsivos perpetrados a partir del supuesto impago de la deuda y d) pertenencia a organización criminal.

El caso pasó a fase de instrucción en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcalá la Real.

Caso H3

Este caso corresponde a una organización criminal pakistaní que, en el año 2012, se dedicaba a extorsionar dentro de su comunidad en la región de Almería. Muchos pakistaníes residentes en España se dedican al sector de la hostelería en forma de pequeños negocios de restauración que ofrecen comida de tipo kebab: carne prensada en un hornillo vertical que puede servirse de diferentes formas, tanto en restaurante como en puestos de venta ambulante. La organización criminal identificada en este caso se dedicaba a exigir pagos a modo de impuestos dentro de su comunidad. En función del perfil de la víctima exigían pagos de tres tipos: a) un pago único de entre 3.000 y 10.000 euros que era solicitado a empresarios con alto poder adquisitivo y a propietarios de negocios de restauración exitosos; b) pagos semanales de 30 a 60 euros que se exigían a vendedores ambulantes y c) pagos mensuales del 40% de sus ingresos requeridos a los empleados de negocios de kebab en situación administrativa irregular.

Los medios intimidatorios se producían de forma paralela a la petición de dinero, momento en el que advertían a las víctimas de las consecuencias de no pagar, como por ejemplo la simulación de delitos de malos tratos, robos o lesiones de gravedad para posteriormente poder presentar denuncias falsas contra ellas.

Cuando las víctimas se negaron a pagar a la organización, ésta presentó denuncias falsas por la comisión de robos con violencia e intimidación en la puerta de sucursales bancarias, llegando a aportar testigos e incluso pruebas de lesiones que ellos mismos se habían infligido. Como consecuencia de ello, una de sus víctimas fue condenada a una pena de 4 años de prisión.

Además, estos medios intimidatorios continuaron produciéndose incluso después de hacerse efectiva la denuncia a las autoridades. En muchas ocasiones consiguieron la retirada de las denuncias por las amenazas de muerte a familiares de la víctima ubicados en Pakistán, donde la organización tenía una estructura que contaba con miembros dispuestos a cumplir las amenazas.

Los tipos penales identificados por la Guardia Civil fueron: a) amenazas y coacciones debido a los medios intimidatorios empleados, b) simulación de delito y denuncia falsa cuando se logró averiguar el *modus operandi* específico en determinados casos, c) delito de extorsión por la solicitud de pagos por protección, y d) organización criminal.

El caso pasó a fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería.

Caso H4

Este caso hace referencia a un grupo criminal que, en el año 2013, extorsionaba a empresarios dedicados a la hostelería, entre otros negocios, en diversas regiones de España. Para ello los autores recopilaban información económica útil de los negocios de las víctimas, así como de sus bienes, para engañarlas a través de un primer acercamiento, en el que los delincuentes se hacían pasar por empresarios interesados en realizar inversiones conjuntas, para obtener un mutuo beneficio. Además, contaban con la complicidad de un Abogado del Estado, que aportaba credibilidad al método de aproximación. Su ámbito de actuación, aunque estaba centrado en Almería, también tenía ramificaciones en Málaga, Madrid y Toledo, y cuyos miembros tenían distintas funciones de captación, investigación y aproximación a las víctimas.

Cuando la víctima accedía a encontrarse con ellos, y aceptaba el negocio propuesto por la organización, se producía la estafa, por lo general mediante conductas de engaño de intercambio de divisas que terminaban en transferencias bancarias en un único sentido: de la víctima a la organización, incumpliendo esta su parte del trato. En el supuesto de que la víctima descubriera sus intenciones y decidiera retirarse de las negociaciones, la organización empleaba medios agresivos e intimidatorios para exigir pagos de entre 300.000 y 4 millones de euros en brevísimos plazos de tiempo (3 horas), bajo amenaza de detenerle.

Los tipos penales identificados en el atestado policial fueron: a) usurpación de funciones públicas al hacerse pasar por autoridades atribuyéndose carácter oficial de cara a las negociaciones, b) estafa en los casos donde la víctima fue engañada, c) extorsión en los que la víctima descubrió las intenciones del grupo y d) pertenencia a grupo criminal⁴⁸⁸.

El caso pasó a fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería.

Caso H5

Este caso tuvo lugar en el año 2014, en Torreveja (Alicante) donde uno de los ocho miembros del grupo criminal tenía un restaurante indio y trataba de imponer su control en el territorio. El objetivo principal consistía en monopolizar el negocio de restaurantes hindúes en

⁴⁸⁸ En ocasiones, el *modus operandi* incluyó la actuación de integrantes del grupo haciéndose pasar por funcionarios públicos además de importantes empresarios, perpetrando así un delito de usurpación de funciones públicas, además de un posible delito de falsedad en documento público y un delito de cohecho.

la zona, para lo que exigía a otros indios compatriotas que no abrieran locales en su área de control.

Los medios empleados para intimidar consistieron en amenazas verbales advirtiendo de que iban a agredir a las víctimas y a sus familias, e intimidación mediante acoso telefónico para requerir que cerraran los negocios.

El delito identificado en las diligencias policiales es el de amenazas, debido a los medios intimidatorios empleados con el fin de que no se abrieran más restaurantes hindúes en la zona.

Caso H6

Este caso hace referencia a unos incidentes extorsivos específicos de una conocida organización criminal internacional denominada Hell's Angels o los Ángeles del Infierno, que contaba con al menos cuatro miembros dedicados a la extorsión. La organización perpetraba diversas actividades delictivas como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos, aunque también se financiaba a través de otras prácticas como la extorsión a empresarios.

En este caso concreto los autores exigieron pagos de aproximadamente 10.000 euros por prestar su protección a empresarios de la zona durante los eventos de motociclismo. Asimismo, requirieron el consumo gratuito de bebidas y comidas durante los mismos. Todo ello bajo la amenaza de sufrir acciones violentas.

El documento judicial por el que se logró identificar estas actividades es un recurso de apelación contra un auto⁴⁸⁹ que deniega la intervención telefónica a determinados integrantes del grupo, y que finalmente se concede durante un mes. En esta resolución se describen las actividades extorsivas del grupo, y los medios intimidatorios utilizados, que constituyen los hechos probados, así como los delitos aplicables, uno de amenazas y otro de extorsión. Se trata de una extorsión tipo “impuesto revolucionario”, que reclama a los empresarios de una zona en forma de campaña extorsiva⁴⁹⁰: solicitándoles el pago de dinero bajo la amenaza de sufrir acciones violentas.

⁴⁸⁹ Concretamente, contra el auto de fecha 28/05/10 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Castellón, dado en Diligencias Previas núm. 827/10.

⁴⁹⁰ Con características comunes a las explicadas en el apartado 2.3. en el apartado capítulo segundo, sobre el impuesto revolucionario de la organización terrorista ETA.

Caso H7

El caso H7, ocurrido en el año 2011, identifica a un extorsionador principal que decía estar vinculado a la mafia de Malasia, argumento que emplea como medio intimidatorio para exigir pagos a empresarios de negocios de restauración de Palma de Mallorca. Su fuerte poder intimidatorio es consecuencia de sus reiteradas actuaciones con esta forma de operar, como expone la sentencia relativa al incidente extorsivo que perpetró en Porto Pí: “conocimiento avalado por la propia Policía, que así lo expone en juicio, de ser conocido en hechos similares por antecedentes policiales que les constan, supone la acreditación del acto intimidatorio. La sola presencia del autor en los alrededores del restaurante y la presencia en Porto Pí en el bar donde se negociaba sin estar invitado, evidencian la intención intimidatoria que guiaba su actuación y el temor que infundía en los denunciantes. Está acreditada la presión y miedo que infundía el autor.”

En el caso judicializado, el autor reclamaba 75.000 euros a cambio de no vender su parte del negocio a la mafia de Malasia, amenazando con que, en caso de no cumplir, la mafia les cortarían una mano, un brazo o directamente los mataría. Para agilizar los pagos añadía que la venta de su participación en el negocio a la mafia la haría al día siguiente.

El delito identificado en la sentencia de la Audiencia provincial de las Islas Baleares es la extorsión⁴⁹¹.

Caso H8

Este caso tuvo lugar en el año 2010, y trata de un grupo de autores compuesto por concejales y policías locales, que exigieron a los propietarios de los restaurantes del pueblo de Cudillero (Asturias) pagos ilegales de 2.000 euros por realizar horas extraordinarias durante las fiestas locales del pueblo.

La mera petición de dinero practicada por un jefe de policía ejerció una intimidación suficiente como para que los empresarios de la zona pagaran sin resistencia.

La judicialización del caso fue compleja debido a diversos motivos:

⁴⁹¹ Se trata de la respuesta a un recurso de apelación contra la STS de 11 de julio de 2011 (sentencia núm. 300/2011, dictada el 11 de julio de 2011 de Juzgado de lo Penal número cuatro de Palma de Mallorca, cuyo procedimiento de origen es el Procedimiento Abreviado núm. 319/09.)

a) Por un lado, los pagos extorsivos se realizaron en forma de retribuciones a funcionarios públicos en dinero negro, con la dificultad añadida que conlleva evidenciar tales conductas.

b) Por otro lado, se trata de una trama que incluye acusaciones falsas contra el funcionario que combatió las prácticas extorsivas analizadas, pues como la propia sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias recoge, las acusaciones de retribuciones de dinero negro abonadas a agentes de policía durante las fiestas de la localidad fueron vertidas “contra el Sargento de la policía que precisamente puso coto a esta práctica”. Esto deja patente la peligrosidad de luchar contra la extorsión especialmente cuando los extorsionadores tienen vínculos políticos: el funcionario que trató de erradicar las prácticas abusivas de los policías locales en Cudillero fue el que sufrió a su vez las acusaciones falsas.

La sentencia aporta una información muy valiosa sobre las prácticas extorsivas que se explican en los hechos probados; ahora bien, en concreto sobre la acusación del sargento, finalmente fue absuelto del delito de cohecho por el que estaba imputado, llegando a encontrarse aplicable la denuncia falsa como delito resultante de la “trampa” contra el acusado.

Caso H9

Este caso ocurrió en el año 2011 en Almería, y versa sobre un individuo pakistaní que engañó a un compatriota que regentaba un restaurante de kebab, pidiendo que le contratara como empleado durante unos meses hasta que lograra regularizar su situación en España. Cuando el empresario se dio cuenta de que su empleado no tenía pasaporte legal ni estaba tramitando su legalización, se dispuso a ponerlo de manifiesto ante la unidad de extranjería de Almería, fue entonces cuando el autor, acompañado de dos compatriotas, comenzó el proceso de extorsión exigiendo que le renovara el contrato.

Los medios intimidatorios que se emplearon consistieron en perseguir a la víctima insultándole, intimidándole con una navaja, amenazándole de muerte si no le renovaba el contrato y agrediéndole físicamente. Le advirtió que sus acompañantes eran gente muy peligrosa y que sabían cómo hacerle daño. Estos tres autores amenazaron a la víctima con nuevas advertencias de “rajarle el pecho” y denunciarle falsamente si no cumplía con lo exigido. También le propinaron durante varios días puñetazos en la cara y en el costado, de los que no quedaron lesiones apreciables.

El único tipo penal identificado por la Guardia Civil en el atestado policial es el de amenazas, aunque no se descarta la identificación de nuevos tipos penales durante la investigación, no recogidos en las diligencias, como pudiera ser un delito de lesiones.

Caso H10

A lo largo del año 2014, diez extorsionadores rumanos de conocida reputación en una región de Zaragoza realizaron durante diez meses frecuentes vistas a locales de restauración exigiendo consumir gratuitamente las bebidas y comidas que allí se servían. La víctima denunciante añadió que también llegaron a sustraer dinero de la caja registradora de su negocio de hostelería. El montante adeudado al propietario del local asciende a 1.800 euros.

Los medios intimidatorios empleados fueron esencialmente amenazas de muerte, que incluían atemorizar a las víctimas mostrando su pistola y poniéndola encima de la barra, con una clara intención de amedrentar a los propietarios de los negocios. Se produjeron también agresiones físicas que se limitaron a empujones propinados al dueño que no supusieron lesiones apreciables. La víctima expresó que la sola presencia del grupo le conseguía infundir un gran temor por su seguridad y la de su familia.

Tras la primera declaración ante la Guardia Civil, cuando los autores se percataron de la formalización de la denuncia, se dedicaron a acosar a la víctima con la intención de que la retirara, llegando a realizar hasta 20 llamadas telefónicas en el mismo día. Tras estas actuaciones, enviaron a una persona que le entregó una pequeña cantidad de dinero como pago de parte de la deuda, posiblemente con intención de evitar las consecuencias policiales y penales de sus hechos.

Solo se logró identificar a seis autores, sobre los que la Guardia Civil consideró aplicables los delitos de amenazas y coacciones con el agravante de arma simulada, aunque las diligencias señalan que la víctima se sintió “extorsionada”. No se descarta la identificación de nuevos tipos penales durante la investigación, no recogidos en las diligencias.

Caso H11

Los hechos del caso 11 tuvieron lugar en Caspe, Zaragoza, en el año 2011, cuando un individuo pakistaní, que se presentaba como miembro de una organización criminal se dedicó a iniciar procesos extorsivos a otros compatriotas dueños de restaurantes en la zona.

La víctima que denunció el caso declaró que una persona de origen pakistaní se presentó en su negocio y le reclamó 1.500 euros mensuales. Estos actos tuvieron lugar de forma insistente, todos los días y todas las noches de la semana, bajo amenaza de matarle a él y a su familia, que residía en Pakistán. Añadió que el autor llevaba una navaja cuando reclamaba el dinero, y que había comenzado a saldar el importe del dinero demandado a razón de 50 euros diarios hasta llegar a la cantidad final. Pero al tener su número de teléfono en las tarjetas del negocio, manifiesta estar sufriendo nuevas amenazas mediante llamadas telefónicas en las que le indican que como denuncie a la policía llamará a su grupo para que mate a su familia, insistiéndolo también en que quemará su negocio.

El delito aplicable identificado en el atestado policial es el de amenazas, aunque no se descarta la identificación de nuevos tipos penales durante la investigación, no recogidos en las diligencias.

Caso H12

En el caso H12 sucedió en el año 2011, y se refiere a un ciudadano inglés, propietario de un restaurante ubicado en Torrevieja, Alicante, que trataba de imponer un control monopolístico sobre los restaurantes de la zona haciéndolos cerrar con métodos violentos.

La víctima que denunció los hechos tenía un negocio de restauración cerca de la zona de control del extorsionador. El contenido de la denuncia relata la insistencia de las amenazas y los ataques contra los restaurantes de dicha zona, incluido el suyo, y que, al igual que en su restaurante, ha provocado incendios en varios negocios de su ámbito de dominio.

Los medios que empleaba junto con sus colaboradores (al menos dos integrantes más) comenzaban con conductas de boicot contra los clientes que consumían en el restaurante de la víctima apuntándoles con un láser de color rojo y verde, tratando de molestarles y expulsar así a su clientela. Tras esto, procedió a hacer gestos al denunciante y a su familia con la mano en el cuello amenazando con que se lo iba a cortar, así como a hacer gestos con la mano a modo de pistola amenazando con dispararles, además de gestos soeces. Finalmente, perpetraron las amenazas verbales de muerte hacia él y su familia e incluso hacia sus empleados, además de quemarle el local y advertirle de que lo volvería a hacer (asumiendo así la comisión del anterior incendio sufrido).

La víctima interpuso diversas denuncias tras cada incidente violento, pero insiste en que el autor principal, al verse en libertad hace señales de victoria y lo celebra junto a sus

colaboradores en el bar de la víctima; reitera que el extorsionador cada vez era más violento y él se planteaba cerrar su restaurante.

Los hechos recogidos por la Guardia Civil en el atentado aparecen como un delito de amenazas, se entiende que condicionales, aunque no se descarta la identificación de nuevos tipos penales durante la investigación, no recogidos en las diligencias.

Caso H13

El caso H13 tiene lugar en una región de Murcia, en el año 2011, cuando tres individuos marroquíes trataron de forzar que se les realizasen contratos de trabajo en negocios de hostelería de la zona.

Las víctimas de nacionalidad marroquí y china (una arrendadora del local y la otra arrendataria, respectivamente), explican que estas tres personas habían estado trabajando como músicos en la región, pero que cuando fueron despedidos comenzaron a acosar a los propietarios y gerentes de los negocios donde tocaban, exigiendo su contratación laboral.

Los medios empleados para intimidar a las víctimas consistían amenazas de muerte, acoso telefónico, robo e incluso la provocación de un incendio en el local, tras la advertencia vertida por uno de los autores de que “si él no trabaja allí, no trabaja nadie”.

La Guardia Civil identifica un delito de incendio, aunque no se descarta la inclusión de nuevos tipos penales durante la investigación, no recogidos en el atestado policial. Ahora bien, no se señalan amenazas condicionales, que resultarían aplicables a razón de los hechos declarados, ni un eventual delito de extorsión en grado de tentativa, que podría resultar aplicable.

Caso H14

El caso H14 tiene lugar en Carballo, La Coruña, en el año 2015, cuando tres individuos españoles exigieron varios pagos a determinados empresarios de hostelería de la zona. Cuando las víctimas se negaban a pagar, el nivel de violencia y las cantidades exigidas se incrementaban rápidamente.

La víctima que denunció el caso explicó cómo un día, el dueño de un pequeño negocio de restauración cercano al suyo acudió a su local para solicitarle amablemente 30 euros, diciéndole que se los devolvería al día siguiente. La víctima se negó a prestarle el dinero, dado

que ya le había dejado unas botellas de licores meses atrás que no le había devuelto. Desde el rechazo al pago de dinero el autor comenzó a amenazar con causar destrozos en su local para que la víctima no pudiera abrir al día siguiente. A los dos días comenzó a enviar a personas de su confianza o se presentaba él mismo en el restaurante para solicitar insistentemente que le pagara 500 euros.

Los medios intimidatorios utilizados fueron amenazas de dañar la propiedad y amenazas de muerte. A pesar de la denuncia ante la Guardia Civil y de la asistencia de la policía local, que se personó dos veces en su restaurante, la víctima se seguía sintiendo atemorizada, pues el autor le comunicó que no tenía miedo ni a la Guardia Civil, ni a la Policía local, manifestando que “mañana yo te mato”.

En el atestado policial se identifica un delito de amenazas, aunque no se descarta la inclusión de nuevos tipos penales durante la investigación, no recogidos en las diligencias.

Caso H15

Se trata de un caso donde una agrupación de jóvenes, con casi una treintena de miembros controlaba varios locales nocturnos de Barcelona entre los años 2003 y 2013. La amplia y compleja sentencia comprende una gran diversidad de acciones perpetradas, de las cuales este análisis únicamente se centrará en los procesos extorsivos a negocios de restauración.

Este colectivo denominado “Casuals” es un grupo violento seguidor del Fútbol Club Barcelona, que empleaba amenazas, agresiones físicas, boicots y acoso para lograr los pagos por protección que exigían a los empresarios, o los contratos como empleados de seguridad para proteger el local de sus propios ataques, tal como recoge la sentencia: “igualmente desarrollaron un importante volumen de actividad centrada en crear altercados violentos con ataques gratuitos contra la integridad física de clientes y personal en los principales centros de ocio nocturno de Barcelona. Y ello para, a continuación, exigir a los responsables de éstos, como único modo de evitar su repetición, la entrega de importantes cantidades de dinero o bien el compromiso de contratarlos como empleados de seguridad asalariados en los mismos”.

A partir de la actuación de los cuerpos policiales, se conoce la importante función represiva de estos grupos violentos, que incluyen amenazas de muerte y brutales palizas a los

empresarios que declararon los hechos a las fuerzas del orden⁴⁹², con la intención de que no prestaran declaración en los juicios contra los integrantes del colectivo⁴⁹³. De las informaciones facilitadas por los negocios ya victimizados⁴⁹⁴, se comprende la alta efectividad que tienen estos grupos para lograr sus objetivos.

Los tipos penales identificados en la sentencia son: asociación ilícita, extorsión, amenazas, coacciones y lesiones en los hechos probados vinculados a procesos extorsivos.

Breve comentario sobre la respuesta jurídica

Como ponen de manifiesto los análisis realizados, la dificultad probatoria es enorme debido a diferentes motivos: por un lado, los delitos vinculados a medios intimidatorios no dejan pruebas físicas (como sí puede ocurrir con delitos físicos y de resultado como las lesiones); por otro, las pruebas testificales de las víctimas suelen ser las únicas evidencias con las que se cuenta en el caso. No hay que olvidar que los procesos extorsivos suelen iniciarse con uno o dos miembros que se identifican como integrantes de una organización criminal con reputación en

⁴⁹² En la sentencia se relatan así los hechos: “una vez dentro y sorprendiendo a su víctima, al grito de “te vamos a matar” “chivato”, los procesados citados le acorralaron y aprovechando su superioridad numérica y lo sorpresivo de su ataque, le acometieron con las armas que portaban, golpeándole con una defensa extensible en la cabeza. Tras zafarse de los procesados, logró subirse a una valla, donde continuó siendo acosado y atacado por los éstos para conseguir hacerle bajar, mientras le gritaban “baja chivato, maricon que te vamos a matar”, y así mientras el procesado le lanzaba navajazos, el resto le lanzaba botellas de cristal que cogían de las barras del establecimiento. Finalmente, el otro procesado, logró alcanzarle, asestándole dos navajazos en la pierna izquierda. La brutal agresión y la clara situación de peligro para la vida de la víctima determinó la intervención del personal de seguridad del centro, que en primera instancia realizó a éste un torniquete, mientras que los procesados no cesaban en sus ataques, hasta que finalmente fueron”.

⁴⁹³ Así lo señala la sentencia cuando dice que “el ataque contra la vida de la víctima fue encargado por los procesados al procesado y ordenado por éste a los procesados previamente identificados, sus subordinados en la trama criminal constituida, en represalia por los hechos ocurridos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Barcelona el 15 de diciembre de 2.008 y a fin de que la víctima no declarara el día 16.06.2009 ante el Juzgado de Instrucción núm. 33 instructor del procedimiento incoado en investigación de los mismos.”

⁴⁹⁴ Tal como señala la sentencia: “el acusado, al trabajar o haber trabajado en los locales de ocio nocturno como miembro del personal de entrada y de seguridad, y ser amigo de quienes desempeñaban también tales tareas, cumplía dentro del grupo la función de tener la información sobre si se denunciaría y se testificaría contra otros miembros del grupo por sus actos antisociales y agresivos dentro de los expresados locales -aunque tales actuaciones no se hallaran como objetivos del grupo-, y además ejercía influencia sobre dicho personal para que fueran condescendientes con ellos”.

la zona, con la única prueba de la declaración de la víctima; y además sus integrantes son difíciles de identificar cuando la víctima no los conoce (o conoce solo a uno de los integrantes).

Además, existen dos importantes aspectos vinculados a la impunidad de los extorsionadores: a) el fuerte efecto intimidatorio de tales conductas provoca una auténtica impunidad al conseguir que las víctimas no denuncien por miedo a acciones de venganza y b) la clandestinidad de las actividades del crimen organizado, que permite su comisión de una forma inadvertida. Esto genera un fuerte desconocimiento de la incidencia real de las prácticas extorsivas por parte de policías y jueces.

Es importante tener en cuenta que, además de existir grandes organizaciones criminales que dominen zonas urbanas, el estudio evidencia que también pueden darse pequeñas organizaciones que controlen zonas más modestas de áreas rurales, pero que igualmente supongan un peligro para la legalidad y la seguridad de los empresarios y actividades económicas de la región.

CAPÍTULO 6. LOS PROCESOS EXTORSIVOS EN LA COMUNIDAD CHINA ASENTADA EN ESPAÑA

La muestra de los quince casos de procesos extorsivos en la comunidad china asentada en España⁴⁹⁵ y las entrevistas a expertos⁴⁹⁶ permiten identificar una serie de problemas de gran interés en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado chino, en especial, los que se refieren a la protección de una comunidad fuertemente arraigada a su cultura⁴⁹⁷.

Con este propósito⁴⁹⁸ se analiza, en primer lugar, el contexto donde tienen lugar los casos en términos generales: las características culturales de la comunidad china, su asentamiento en España y los aspectos más relevantes del crimen organizado chino.

En segundo lugar, se aborda la intervención de los autores en los procesos extorsivos, estudiando la implicación de las organizaciones criminales, las motivaciones y causas de las extorsiones a los negocios asiáticos y las principales formas de operar prestando especial interés a los medios empleados para intimidar a las víctimas y a la implicación de los cargos públicos.

En tercer lugar, se estudian concretamente las víctimas de los procesos extorsivos, teniendo en cuenta las características geográficas de las regiones afectadas, el perfil de los negocios victimizados y su relación con los extorsionadores. Por último, se identifican las pautas de comportamiento de las víctimas frente a las extorsiones y las medidas de protección adoptadas.

Una vez descritos los principales rasgos de los autores y las víctimas de los procesos extorsivos en la comunidad china, es fundamental llevar a cabo un estudio global de tipo criminológico-penal con el objetivo de conocer, tanto los patrones de los comportamientos extorsivos de la muestra, como la respuesta jurídica que se ha dado a tales conductas,

⁴⁹⁵ Muestra e información obtenidas en todos los casos en el marco del Proyecto CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión europea.

⁴⁹⁶ Se realizaron entrevistas a un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado chino, dos miembros de la Guardia Civil expertos en crimen organizado chino y un académico experto en cultura china.

⁴⁹⁷ Cabe recordar que los términos en los que se expresan ciertos contenidos como extorsión u organización criminal no hacen referencia a los delitos o conceptos jurídicos si no a los criminológicos, a no ser que se explicita que se trata del tipo penal en cuestión.

⁴⁹⁸ Ahora bien, el objeto de estudio de este capítulo presenta unas especiales características que limitan fuertemente su análisis empírico dada la importante falta de información en muchos casos.

procediendo a realizar una descripción jurídica de la muestra e identificando la respuesta legal dada a cada caso.

1. Aspectos contextuales: la comunidad china en España

Para contextualizar el escenario donde ocurren los casos de extorsión se debe estudiar el crimen organizado chino. Al contrario de lo que ocurriría con el sector hostelero, materia muy conocida y analizada en la actualidad, gran parte de las aportaciones⁴⁹⁹ sobre la extorsión en la comunidad china requiere un conocimiento más profundo de aspectos como las características culturales de la comunidad china, su asentamiento en España y en especial, sobre el crimen organizado chino. Estos aspectos contextuales se describen a continuación.

1.1. Características culturales

La comunidad china se caracteriza por mantener sus raíces socioculturales, fuertemente arraigadas, en los países donde se establecen y conservar profundos lazos sociales y económicos con su país de origen (Ellis, 2013). La cultura china es colectivista y tiene su origen en el pensamiento confucianista⁵⁰⁰, que enfatiza el orden social jerárquico y autoritario priorizando el *jen* (sociedad) sobre el individuo (Wang, 2013).

También se valoran especialmente principios como la piedad filial, es decir el compromiso moral y personal con la familia y sus antecesores; así como la importancia de la red de relaciones personales (Bond, 1996). Estos valores potencian la creación de empresas y negocios familiares, así como el uso de fuentes de financiación informales a través de relaciones personales (Betrisey, 2010). Se trata de mecanismos ligados a la cultura tradicional china, como el sistema *guanxi*⁵⁰¹: un sistema complejo de redes interpersonales y normas morales donde amigos o familiares se prestan dinero entre sí (McIlwain, 1999).

⁴⁹⁹ Por esta razón se describe el contexto de manera más extensa que en el capítulo anterior.

⁵⁰⁰ Como matiza Wang (2013) aunque estas ideas nunca se han ordenado en forma de religión, han sido seguidas por la comunidad china durante dos milenios.

⁵⁰¹ Se basa en relaciones y prestaciones recíprocas, bajo el lema *es importante devolver el favor a quien te ha ayudado* y, en caso contrario, se cae en descrédito.

Estas relaciones crean un vínculo emocional y de lealtad con familiares o amigos íntimos, que son altamente beneficiosas para esta comunidad. Sin embargo, cuando estas reglas informales violan las leyes del país donde residen y se convierten en prácticas ilícitas también pueden conllevar cargas costosas: cuando los préstamos son abusivos o las exigencias se convierten en prácticas extorsivas, las víctimas, al estar aisladas del contexto legal y social de acogida, se ven despojadas de cualquier tipo de protección y deben soportar dichos abusos sin acudir a la denuncia policial como medio de protección personal (Wang, 2013).

Los inmigrantes chinos, al entrar en España, se encuentran con fuertes barreras culturales y lingüísticas (Chin et al., 1992) por las diferencias culturales con Occidente (Brody y Luo, 2009) que contribuyen a mantener cierto nivel de aislamiento en su asentamiento (Merino, 2008).

1.2. Aspectos relevantes del asentamiento de la población china en España

El significativo crecimiento de la población china en España ha sido objeto de estudio desde distintas perspectivas. Un aspecto de especial interés ha sido el proceso migratorio y el asentamiento empresarial de esta comunidad en nuestro país⁵⁰², que ha mantenido un desarrollo progresivo gracias a numerosos factores y a su incursión en sectores comerciales que han resultado rentables (Bernardos et cols., 2014) como son el sector textil o la restauración.

Algunas características que favorecen el emprendimiento económico de esta comunidad son el amplio apoyo familiar y la gran acogida por parte de la comunidad china asentada en España a los nuevos inmigrantes, que cuenta con canales informales de financiación para emprendedores y una gran cultura del esfuerzo, lo que contribuye a que en determinadas regiones de china sea frecuente que los jóvenes migren a países occidentales para iniciar un negocio. Ahora bien, estas características positivas que facilitan el éxito de los empresarios y los comerciantes asiáticos en países occidentales pueden ser también aprovechadas por los grupos de crimen organizado, que ven en las pequeñas empresas exitosas una oportunidad para delinquir y lucrarse a costa del esfuerzo de sus compatriotas. Desde la literatura sobre delincuencia organizada, se alerta de que las minorías étnicas recién asentadas son más propensas a sufrir abusos del crimen organizado, especialmente cuando los grupos tienen un

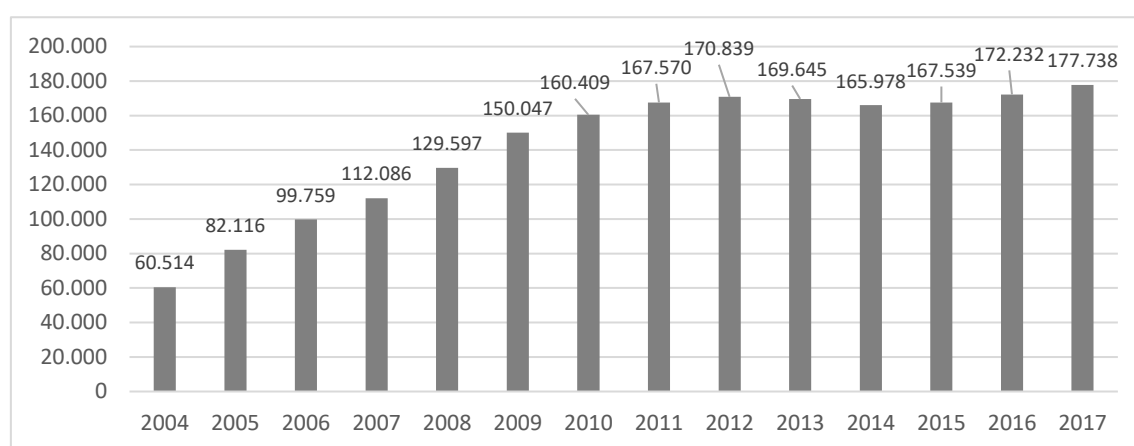
⁵⁰² Como se puede apreciar en los estudios de Saiz López (2004) y Beltrán (2010).

gran control y penetración social y económica en el territorio (Perrone, 2000; Taylor, 2006 y Wagstaff et cols., 2006).

Actualmente, la comunidad china es el sexto colectivo extranjero en número de residentes en España, representando el 3% de la población inmigrante total. La afluencia de miembros de esta comunidad ha ido aumentando desde el año 2003, aunque ha tenido un ligero receso los últimos dos años. En 2017, un total de 177.738 chinos residían dentro de nuestras fronteras con un fuerte flujo migratorio de unas 11.800 personas al año desde 2008⁵⁰³.

Se presenta a continuación una ilustración con la población de residentes chinos anual⁵⁰⁴ en España, que muestra la evolución del asentamiento.

Ilustración 8. Residentes de nacionalidad china en España de 2004 a 2017.



Fuente: elaboración propia con datos de INE (2017).

Vinculado al emprendimiento, el ya mencionado incremento significativo de la población china en España que ha sido destacado por los medios de comunicación, en particular, el aspecto relacionado con la creación de empresas chinas, como recuerda Saiz López (2004).

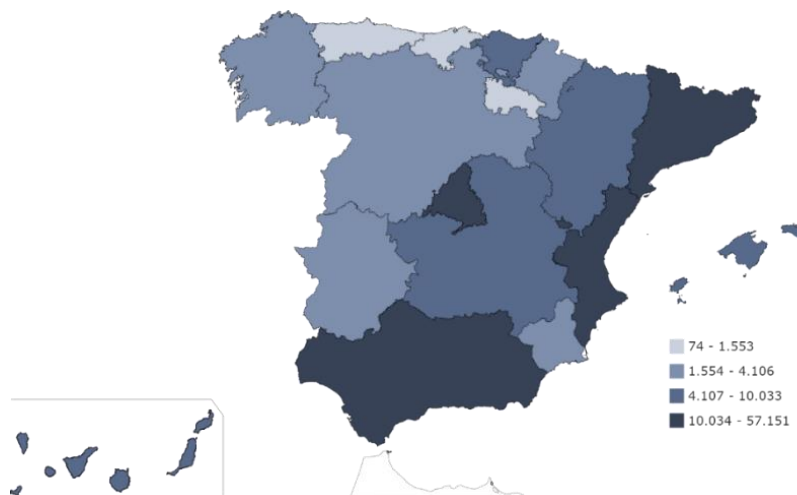
Además, el asentamiento se ha concentrado geográficamente de forma estratégica durante las últimas décadas en determinadas regiones y barrios (Bernardos et cols., 2014). De hecho, el establecimiento de la población china en barrios con alta densidad de compatriotas es

⁵⁰³ Las notas de prensa del INE (2017) señalan que, por nacionalidades, los mayores descensos en términos absolutos se produjeron en las poblaciones de Rumanía, Bolivia, Marruecos y Ecuador, mientras que los mayores aumentos se produjeron en nacionales de Italia, China y Ucrania.

⁵⁰⁴ A fecha uno de enero de cada año señalado.

común alrededor del mundo⁵⁰⁵. A nivel nacional, se presenta un mapa ilustrativo de la distribución a nivel poblacional de la comunidad china en España.

Ilustración 9. Mapa de distribución de la población de nacionalidad china por comunidad autónoma en España.



Fuente: INE (2017).

Las dos comunidades autónomas con mayor población china son Madrid y Cataluña. Dentro de estas, la inmigración china se concentra en barrios concretos en los que se identifican los principales puntos calientes. En el caso de la Comunidad de Madrid, estos puntos se sitúan en la propia ciudad de Madrid, así como en las zonas de Alcorcón, Fuenlabrada, Parla y Getafe. En cuanto a Cataluña estos puntos se ubican en la ciudad de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, en Santa Coloma de Gramenet, así como también en Badalona, Sabadell y Mataró.

La combinación entre el espíritu tradicionalmente emprendedor de los inmigrantes chinos en España, con una edad media joven⁵⁰⁶ hace que sea el tercer colectivo con mayor proporción de afiliados a la Seguridad Social: alrededor del 50 %, y de ellos, la mitad está dado de alta como autónomo⁵⁰⁷.

⁵⁰⁵ Como el barrio de Chinatown en Nueva York o Londres, o el barrio de Usera en la ciudad de Madrid.

⁵⁰⁶ Entre 30 y 31 años de media, según el INE (2017), dato muy significativo en contraste con la edad media de población española: 44, y extranjera: 36.

⁵⁰⁷ Según los datos aportados por un interesante estudio de la Unión de Profesionales Autónomos (2015).

El asentamiento de los negocios chinos en España ha evolucionado de forma gradual en los últimos cien años. A continuación, se presenta un cuadro resumen de las etapas de asentamiento de negocios chinos en España, explicada tras el mismo.

Ilustración 10. Etapas del asentamiento de negocios chinos en España.



Fuente: elaboración propia a partir de la literatura científica.

Las primeras actividades económicas de la comunidad china que se conocen en España son de tipo comercial: la venta ambulante entre 1920 y 1990. El principal objetivo de los emigrantes chinos que llegaban a nuestro país era lograr una acumulación de capital suficiente para regresar a su país con una mejora sustantiva de su nivel económico. Como consecuencia, se trataba de una población masculina y joven, que debía dejar a su familia en china para ahorrar los costes de dos traslados: el de ida y el de vuelta (Beltrán, 2010).

La propuesta gastronómica de comida asiática a través de restaurantes familiares con la misma ambientación que en su país de origen, tuvo una buena acogida en España desde antes de los años 90 en los que se comenzó a popularizar la denominada comida china. El considerable aumento de dicha población alentó a los emprendedores afincados en nuestro país a identificar

nuevas oportunidades de negocio ante la saturación de restaurantes: las tiendas de ropa y los bazares (Beltrán, 2010).

Madrid y Barcelona experimentaron un crecimiento poblacional progresivo pero muy concentrado en determinadas áreas, que propició la ampliación de la oferta de negocio a la apertura de bazares. Estos cambios requirieron el establecimiento de grandes naves en polígonos industriales y la contratación de proveedores para abastecer a todos los negocios abiertos dedicados a tiendas de todo tipo de productos de importación en polígonos industriales (Sainz López, 2005).

El crecimiento poblacional sostenido ha estado ligado al incremento de la demanda de bienes y servicios y consecuentemente, a la inmediata respuesta de los emprendedores chinos en forma de pequeñas empresas como tiendas de ropa, peluquerías y centros de estética (Chao, 2015). Además, para proveer de bienes a estos negocios, han continuado surgiendo y creciendo áreas industriales de forma concentrada, para importar productos desde China⁵⁰⁸.

1.3. El crimen organizado chino

Se ha realizado una seria revisión de la literatura científica que ha permitido esbozar algunos aspectos relevantes sobre las formas de organización y el *modus operandi* de las redes criminales chinas para conocer el contexto criminológico donde se enmarcan los casos de crimen organizado chino en el estudio empírico que se presenta en este trabajo.

a) Puntos en común identificados en la diversidad de organizaciones criminales chinas

La literatura científica sobre crimen organizado chino en España es escasa, aunque a nivel internacional este fenómeno ha suscitado el interés de expertos que ha elaborado interesantes estudios⁵⁰⁹.

⁵⁰⁸ Un ejemplo de ello es el área industrial de Cobo Calleja, situado en Fuenlabrada, a 20 km de Madrid, que es el más grande de España y uno de los principales centros de importación de Europa: cuenta con 162 hectáreas con unas 500 pequeñas y medianas empresas de venta al por mayor.

⁵⁰⁹ Por citar algunos de los autores más interesantes para el presente trabajo: Zhang y Chin (2002); Curtis et cols. (2003), Chow (2003), Wang (2013), Finckenauer y Chin (2000), Finckenauer (2007), Brody y Luo (2009) y Soudijn y Zhang (2012).

Zhang y Chin (2008) afirman que estos estudios resultan insuficientes dada la complejidad del fenómeno, que abarca una multiplicidad de actores y mercados a nivel transnacional de una importancia estratégica clave en la seguridad internacional⁵¹⁰. Así podemos encontrar grupos criminales muy diferentes como las tríadas, que son grupos de estructuras complejas organizados jerárquicamente con un líder o *san chu* y un segundo líder o *fu san chu*; o los *tong*, que son asociaciones fraternales, políticas o religiosas que terminan tornando en actividades delictivas entre otras muchas tipologías (Finckenauer, 2007; De la Corte y Giménez-Salinas, 2010).

Ahora bien, parece que existen una serie de elementos que se repiten sistemáticamente dentro de los grupos de nacionalidad china (Cuiñas, 2011): el que los integrantes sean nacionales chinos, la jerarquía y la disciplina, ley del silencio dado su hermetismo, la violencia física o psicológica que incluye amenazas, palizas o chantajes, la combinación de actividades legales e ilegales siendo muchas veces los negocios una tapadera para sus actividades ilícitas, y la división de funciones, particularmente a través de la especialización de sus miembros.

En cuanto a las actividades ilegales a las que se dedican, lo cierto es que China es una de las plataformas con mayor capacidad de falsificación de productos del mundo, y sus exportaciones suponen una amenaza creciente para comercio mundial, aspecto que el crimen organizado ha sabido aprovechar (Curtis et cols., 2003; Chow, 2003; Dees, 2012; UNODC, 2013). Para ello combinan sus tradicionales actividades delictivas como secuestros, extorsiones, trata de seres humanos y blanqueo de capitales⁵¹¹, con colaboraciones con otros grupos criminales locales de las regiones donde operan (Curtis et cols. 2003); por ejemplo, en Italia buscan el control de establecimientos de restauración y negocios textiles; en Francia centran sus esfuerzos en actividades financieras ilícitas a gran escala y en Bélgica y Países Bajos el tráfico de estupefacientes es una de las principales fuentes de ingresos. En España sus principales fuentes de financiación son la inmigración ilegal, el tráfico de personas para explotación laboral y sexual, los préstamos ilegales, el tráfico de productos legales e ilegales (bienes, tabaco y drogas), el blanqueo de dinero y el fraude fiscal (Giménez-Salinas, 2006).

⁵¹⁰ Así lo afirman también, Zhang y Chin (2008), Sansó-Rubert (2011) y Wang (2013).

⁵¹¹ Según la literatura revisada (Chin et al., 1992; Zhang y Chin, 2002; Barras, 2014; De la Corte y Giménez-Salinas, 2010; Dees, 2012; Wang, 2013).

b) El crimen organizado y la migración china

Las organizaciones criminales han desplegado sus actividades ilegales valiéndose de la expansión económica de China y su consecuente proceso migratorio masivo a Occidente (Sansó-Rubert, 2011; Dees, 2012). Numerosos grupos de crimen organizado ven en la migración de sus compatriotas importantes oportunidades de enriquecimiento⁵¹² mediante las diferentes formas de extorsión como elemento principal de obtención de beneficios y así como a través de formas delictivas asociadas a los procesos migratorios, que se aprovechan de la perentoria necesidad que tienen de emigrar utilizándolos para la trata de seres humanos, y se valen de su actitud emprendedora para explotarlos proporcionándoles préstamos ilegales y abusivos⁵¹³. Ante situaciones de impago de estos préstamos, se suelen iniciar procesos extorsivos violentos para forzar los pagos y para demostrar dentro de la comunidad china las graves consecuencias de no cumplir con las condiciones pactadas.

c) La importancia de la cultura china en el crimen organizado

Como ya se ha expuesto previamente, los valores socioculturales tienen gran peso en el comportamiento de la comunidad china, que antepone las necesidades de familiares, de amigos o de socios a las propias (Wang, 2013; De la Corte y Giménez-Salinas, 2010). Conexa a esta idea, se deriva una práctica de riesgo: el uso de fuentes de financiación informales que expone a los empresarios a un mayor peligro ante grupos dedicados a la facilitación de este tipo de préstamo a través de prácticas abusivas. Ciertos mecanismos ligados a la cultura tradicional china facilitan la proliferación de grupos dedicados al préstamo ilegal y abusivo (Zhang y Chin, 2002; Dees, 2012). Dos ejemplos de ellos son a) la contribución al capital social de la comunidad (Merino, 2008) que es una suerte de obligación social arraigada y b) el fortalecimiento de las comunidades chinas en forma de organización social, como el sistema *guanxi*, que es un sistema complejo de redes interpersonales y normas morales en el cual amigos o familiares se prestan dinero (Brody y Luo, 2009). Estos mecanismos culturales crean un entorno de préstamos informales, que son prácticas consideradas como creencias de gran arraigo entre la población china asentada en España (Betrisey, 2010). Es lógico asumir que los grupos de prestamistas tengan, habitualmente,

⁵¹² Tal como afirman autores como Curtis et cols. (2003), Zhang y Chin (2002), Giménez-Salinas (2006) y Finckenauer (2007).

⁵¹³ Como indica la literatura al respecto (Zhang y Chin, 2002; Curtis et cols. 2003; De la Corte y Giménez-Salinas, 2010; Soudijn y Zhang, 2012).

un servicio especializado de cobro de deudas ante impagos de empresas, ya sean legales o ilegales (Zhang y Chin, 2002; Soudijn y Zhang, 2012).

En general, estos aspectos culturales contribuyen a que los negocios chinos, fácilmente reconocibles por sus estéticas tradicionales como los bazares o restaurantes típicos chinos asentados en España, se enfrenten a mayores riesgos ante una organización criminal que busque aprovecharse de sus compatriotas.

Además, aquellas comunidades más reacias a adoptar la cultura, las normas y las leyes de un nuevo territorio, son más propensas a sufrir determinados delitos, tanto económicos como violentos, dada la tendencia a evitar comunicar los incidentes a las autoridades y ofreciendo así mayores niveles de impunidad a los delincuentes (Taylor, 2006).

d) Los negocios asiáticos como oportunidad para el crimen organizado

Los negocios asiáticos en España han aprendido a ser rentables invirtiendo de forma apropiada en pequeños comercios dedicados a la venta de bienes de uso cotidiano, productos textiles y comida tradicional. El hecho de ser productivos atrae la atención de las organizaciones criminales, que identifican los beneficios con oportunidades de enriquecimiento ilícito y que proceden a exigirles pagos de forma violenta que los empresarios pueden asumir como coste (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010).

También ofrecen posibilidades delictivas para aquellos empresarios dedicados a la importación y suministro de bienes: existen importantes organizaciones criminales chinas de nivel transnacional que están tradicionalmente especializadas en exportar ilegalmente bienes, tanto ilegales y como legales (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010; Soudijn y Zhang, 2012; Wang, 2013).

Estas oportunidades pueden consistir en la obligación o imposición a los pequeños comerciantes a firmar contratos de suministro de bienes o forzar préstamos para emprendedores con cláusulas abusivas (Soudijn y Zhang, 2012). Estos contratos legales se firman forzosamente a través de coacciones y amenazas a compatriotas⁵¹⁴, dejando a la víctima

⁵¹⁴ Desde la literatura sobre delincuencia organizada, se alerta de que las minorías étnicas recién asentadas son más propensas a sufrir abusos del crimen organizado, especialmente cuando los grupos tienen un gran control territorial (Perrone, 2000; Wagstaff et cols., 2006; Tilley y Hopkins, 2008).

obligada prácticamente para toda la vida a contratar el mismo proveedor de bienes para su bazar o a pagar una deuda con intereses abusivos.

De nuevo, la fácil identificación de los comercios chinos dada su estética tradicional, hace más sencillo para los grupos criminales puedan identificar potenciales víctimas para conseguir el control de negocios en determinados territorios dentro de una comunidad (Chin et al., 1992). Sin duda, tanto las tiendas como los barrios son un claro objetivo para el crimen organizado chino (Chin et al., 1992; De la Corte y Giménez-Salinas, 2010), y su visibilidad facilita la identificación de puntos calientes que los convierte en espacios con una mayor exposición a la extorsión.

A pesar de haber realizado un repaso por las características culturales de la comunidad china y su asentamiento en España, lo cierto es que el estudio de la literatura científica poco revela sobre la actuación del crimen organizado chino en nuestro territorio. Dada la ausencia de literatura al respecto, se hace oportuno acudir a las fuentes policiales y judiciales para dibujar el entorno de los casos analizados de forma específica en nuestro país.

A tal fin, se presentan operaciones policiales y sentencias de especial relevancia en materia de crimen organizado chino, ocurridos recientemente en España, obtenidos de fuentes abiertas y de entrevistas a policías, fiscales y jueces expertos en la materia⁵¹⁵.

Algunas operaciones policiales contra el crimen organizado chino en España

Entre las operaciones de la Guardia Civil, destaca la del año 2013, que desarticuló una peligrosa organización asiática denominada la “Banda del Sol”, a través de la operación MING. Se trata de un grupo de al menos 13 integrantes chinos, que llevaba veinte años asentado en Madrid, dedicado a realizar servicios de cobro de deudas a empresarios de diversas nacionalidades⁵¹⁶. Entre otras actividades secundarias, se señalan la práctica de secuestros, de

⁵¹⁵ Tal como explica el apartado 2.3.c) del capítulo cuarto de presente trabajo: se realizaron entrevistas a un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado chino, dos miembros de la Guardia Civil expertos en crimen organizado chino y un académico experto en cultura china.

⁵¹⁶ Según el informe policial: “eran contratados por empresarios (tanto de origen chino como de otras nacionalidades) para cobrar deudas a asiáticos, de cuyo importe se embolsaban la mitad. A parte de las palizas y secuestros, la organización también se quedaba con los negocios de los deudores (comercios de

agresiones, de tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, de partidas ilegales de póker y *mahjong*⁵¹⁷, y en general de todo tipo de delitos encaminados a la obtención de beneficios para el mantenimiento de la organización. Entre los detenidos se encontraba el líder de la banda, Wenping Lin, también conocido entre los miembros del grupo como “Laozong”, que en su haber cuenta con numerosos antecedentes policiales.

Se trata de un grupo jerárquicamente estructurado con claro reparto de tareas y con un componente cultural importante que define su estructura piramidal, incluyendo la celebración de rituales para cambiar de estatus dentro de la organización. El jefe de la organización se sitúa en el escalón más alto, por debajo se ubican los “hermanos mayores” al frente de los “comandos” o “hermanos menores”. El *modus operandi* de las actividades extorsivas, siempre sobre ciudadanos chinos, se realiza en función del origen del cobro de la deuda⁵¹⁸: por encargo, autónomo o en especie.

Los cobros *por encargo* son realizados por personas que necesitan cobrar una deuda de ciudadanos de nacionalidad china. El precio de los servicios de cobro se establece en función de “condicionantes” del caso: la dificultad de la tarea, personas que deberán participar, trayectos, gastos de viaje, etc.

La forma denominada *autónoma* tiene como objetivo el mantenimiento económico de sus miembros y puede rondar los 5.000 euros. Es decir, se trata de actividades de extorsión como fuente de financiación del grupo, para mantener un elevado nivel de vida sin ejercer ninguna actividad laboral.

El cobro *en especie* consiste en aceptar cualquier tipo de valor o propiedad del deudor como parte del pago, incluyendo en ocasiones la retirada del documento de identidad del deudor hasta que se satisfaga la deuda; documento que la organización utiliza para el alquiler de inmuebles, alta de líneas telefónicas, compra de vehículos, etc.

barrio y bazares), en caso de los propietarios no pagaran, y luego la mafia explotaba estas tiendas o en su defecto eran revendidas”

⁵¹⁷ Es un juego de mesa de origen chino que consiste en eliminar todas las fichas del tablero seleccionándolas en parejas de dos símbolos iguales. Solo es posible retirar las piezas que tienen como mínimo uno de sus extremos -derecho o izquierdo- libres. (Fuente: www.psicoactiva.com/juegos)

⁵¹⁸ Estas tipologías han sido elaboradas por parte de la Guardia Civil.

Debido al objeto principal de sus actividades y a sus características de contratación, el grupo presentaba una gran movilidad y mantenía disputas con otras organizaciones criminales por el control territorial, principalmente en la comunidad de Madrid.

Se estima la participación de esta organización en al menos 11 actos delictivos durante el último año, por lo que se estima que sus ingresos anuales se situarían en un importe superior a los 220.000€.

En la Operación Sol Naciente de 2013 se tuvo conocimiento de un grupo organizado de al menos 5 integrantes de nacionalidad china, que operaba en Madrid, Collado Villalba y Torrelodones, particularmente en el Casino Gran Madrid. Ejercían actividades de extorsión que tenía atemorizados a los pequeños comercios de sus compatriotas en la zona geográfica donde se ubicaba el grupo. Se identificaron 2 víctimas, aunque se estima que habría un número muy superior.

Sus actividades de extorsión más conocidas se centraban en los jugadores del casino⁵¹⁹, a los que detectaban en el momento de mayor necesidad de inyección de dinero, a cambio del cual, posteriormente exigían unos intereses abusivos, en ocasiones del 10% de incremento diario. Tras un estudio del modo de vida del deudor, y ante el impago de la deuda, la organización subcontractaba a un grupo experto en el cobro mediante amenazas a familiares y secuestro de víctimas. Además del uso de violencia, este grupo tenía una especial influencia en las familias de minoristas de la comunidad china afincada en Madrid.

La operación policial Long en 2011 describe una organización de gran capacidad económica dedicada al blanqueo de capitales y tráfico de tabaco, así como de productos falsificados, a nivel internacional⁵²⁰. La organización, liderada por una familia china, utilizaba para determinados actos ilícitos a ciudadanos de su misma nacionalidad vinculados a la organización por los favores prestados para facilitar su entrada en territorio español mediante

⁵¹⁹ Según el atestado policial “una vez captado el “cliente” y prestado el dinero en forma de fichas de juego, el grupo organizado comenzaba su “juego” que era el de exigir un elevado porcentaje a modo de intereses sobre la cantidad prestada, siempre el 10 % que iba aumentando diariamente. Si el “cliente” no era capaz de afrontar la deuda el grupo investigado contaba con otros miembros que eran capaces de averiguar los medios de vida del “cliente” para así extorsionar no solo a este sino incluso a su familia. En el caso de no conseguir el pago total de la deuda el grupo investigado contactaba con otro grupo experto en amenazar e incluso llegar al secuestro”

⁵²⁰ En palabras de la Guardia Civil: “Una red que blanqueaba 40 millones de euros anuales e introducía por el puerto de Valencia contenedores cargados con tabaco y otros productos falsificados que luego distribuía en Francia, Portugal, Italia e Inglaterra”.

una oferta de trabajo, que las víctimas desarrollaban en algunas de sus empresas en condiciones precarias e irregulares. Una vez en España, la red les retiraba el pasaporte ejerciendo de esta manera un mayor control sobre ellos. Mediante el contrabando de tabaco, importación de productos textiles y otras actividades ilícitas, la organización estaba obteniendo millonarios beneficios económicos que posteriormente enviaban a su país. En China, otra rama de la organización se encargaba del blanqueo del dinero, valiéndose de un holding o entramado empresarial compuesto por más de 30 empresas, entre las que cabe destacar una cadena de cerca de 1000 lavanderías repartidas por todo el país.

En la operación Snake de 2015 la Guardia Civil identificó a una organización que transportaba de forma ilícita mercancías en el ámbito de la Unión Europea y China. Sus actividades giraban en torno a la importación de mercancías, a la evasión de impuestos y al blanqueo de capitales⁵²¹. También ejercían su control en talleres de confección ilegales que utilizaban trabajadores de forma clandestina. La organización poseía una gran capacidad económica, con ingresos de más de 14 millones de euros y de movimientos financieros ligados a los cauces de blanqueo de capitales cifrado en unos 300 millones de euros.

Las operaciones más significativas de la Policía Nacional de las que se tiene conocimiento público incluyen la operación Lirón en 2014, donde se detectó a una organización de al menos seis integrantes que extorsionaba a víctimas de alto poder adquisitivo, en su mayoría comerciantes y empresarios afincados en Madrid, mediante amenazas de muerte, acoso y lesiones.

En otra operación del año 2013, cuyo nombre no trascendió, una organización criminal china afincada en el polígono industrial de Cobo Calleja de Fuenlabrada, se dedicaba a extorsionar a pequeños comercios asiáticos, exigiendo cuotas con métodos intimidatorios a cambio de no matarlos.

En ese mismo año tuvo lugar una operación policial contra la Banda del Monje, una mafia china dedicada a extorsión, secuestros y blanqueo de capitales proveniente del juego ilegal en Fuenlabrada, y se logró identificar al menos a nueve integrantes. Intimidaban mediante

⁵²¹ Según las fuentes oficiales “la actividad fraudulenta de la organización criminal consistiría básicamente en importar grandes cantidades de mercancía eludiendo, ilícitamente, los impuestos asociados a las mismas. Esta operativa deriva en una competencia desleal en el comercio de los diferentes productos importados, acaparando el mercado. Asimismo, la organización criminal poseía la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red operada, principalmente, por testaferros y empresas instrumentales”.

amenazas y lesiones, a clientes asiáticos de los casinos de Torrelodones y Aranjuez, a quienes forzaban a aceptar préstamos de usura.

En 2014, una operación contra Luis Ye (cuyo nombre real es Wen Hai Ye Wang) destapó una organización mafiosa asiática de al menos 31 integrantes, que tenía dos ramas: una dedicada al blanqueo de capitales, a través de un complejo entramado societario, formada por hermanos y otros familiares cercanos del capo, y otra destinada a ejercer de prestamistas usureros y a extorsionar a clientes de casinos en Fuenlabrada. El *modus operandi* era controlado por el líder, Lingfen, y consistía en señalar a los jugadores que perdían en el casino para que sus trabajadoras les ofrecieran préstamos abusivos. Se han identificado medios de intimidación como las amenazas de muerte, lesiones y llamadas de acoso telefónico.

Algunas sentencias españolas contra el crimen organizado chino en España

La Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 3ª) en el Auto núm. 342/2015 de 3 de septiembre, sobre el Caso Operación Emperador, pone de manifiesto el complejo entramado empresarial, que incluye numerosos negocios minoristas y fuertes lazos financieros con China⁵²².

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2ª) en su sentencia núm. 198/2013 de 7 de mayo, expone los mecanismos empleados por un grupo ilegal chino para introducir de forma irregular a personas en España. Dichos mecanismos consistían en facilitar pasaportes y billetes de avión, el adiestramiento respecto a las preguntas que tenían que contestar en el paso de fronteras, el alojamiento en distintos domicilios, en los que permanecían hasta que partían al país de destino o hasta que saldaran su deuda. En caso de ser España el país de destino el precio del servicio se cifra en 20.000 € y de ser el Reino Unido ascendían a 27.000 €. Estos mecanismos forman parte de la trama de delincuencia relacionada con la inmigración ilegal⁵²³, al haberse

⁵²² El mismo auto señala “la solvencia de las mercantiles que conforman el entramado societario alcanzaría la suma total de ciento treinta y cinco millones a lo que habría que sumar las tiendas minoristas, llegando a una cantidad total de ciento ochenta millones, no especificando si se trata de dólares o euros. Además de las expectativas de la apertura de una nueva sede de GMC en Qingtian, que generarían unos cien millones de dólares anuales. Además de las conversaciones intervenidas se significaría la expansión internacional del mismo fuera de la República Popular China y de España, llegando a desarrollar actividades en otros países como Italia, con un volumen mensual de facturación del negocio de sus sociedades en un millón trescientos mil euros”.

⁵²³ La propia sentencia cita “el tránsito ilegal de personas, procedentes algunas de ellas de la región china de Fujian, al margen de las normas establecidas para el cruce legítimo de las fronteras, incluye tanto el cruce clandestino de la frontera como la utilización de fórmulas autorizadas de ingreso transitorio en el país con fines de permanencia; burlando o incumpliendo las normas administrativas que lo autoricen en tales condiciones; con objeto de obtener un lucro económico, al solicitar a los inmigrantes, para

trasladado a personas de forma ilícita, es decir sin atenerse a las condiciones legales establecidas para la entrada, traslado o salida del país, prevista en la legislación sobre extranjería (SSTS de 19 de enero de 2006, y de 6 de marzo de 2006).

Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 30ª) en su Auto núm. 684/2011 de 21 de noviembre describe a una organización dedicada a la distribución de drogas de diseño de gran peligro,⁵²⁴ en karaokes chinos de Parla y Leganés.

También en Madrid, el Juzgado Central de Instrucción en su Auto de 20 de octubre de 2012 identificó al líder de todo un entramado societario, con control absoluto sobre las empresas y los empleados, ejerciendo esta influencia principalmente en las empresas localizadas en el Polígono industrial de "Cobo Calleja", situado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde se realizaron actividades de inmigración ilegal⁵²⁵ y delitos contra Hacienda Pública. Este líder chino también contaba con importantes contactos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en particular con el Concejal de Participación y Seguridad Ciudadana, con el fin de que los intereses de su organización criminal se pudieran ver favorecidos. El lucro obtenido de las actividades delictivas procedía fundamentalmente de las sumas de dinero que generaban las múltiples sociedades mercantiles constituidas mediante inversiones⁵²⁶ de una parte importante de la organización ilegal, que emulaban un carácter "supuestamente" comercial". También operaba con un sistema de blanqueo de capitales, dedicado a transportar físicamente, fuera de nuestras fronteras, el dinero obtenido en España, sirviéndose posteriormente tanto de gestoras de transferencias como de sucursales bancarias⁵²⁷ para hacerlo llegar a China. Además, la

trasladarlos desde China a España la cantidad de 20.000 euros y en el caso de ser el país de destino Reino Unido, 7.000 euros más".

⁵²⁴ Exponiendo textualmente: "la dedicación de grupos de delincuentes de nacionalidad u origen chino, más o menos organizados, al tráfico de drogas con gran poder destructivo, superior incluso a la heroína o a la cocaína, que se distribuyen entre consumidores de esa nacionalidad, tales como el "ICE" o "hielo", metanfetamina de origen químico y el "KIN", o ketamina, anestésico veterinario, además de traficar con sustancias extendidas en todo el mercado ilegal".

⁵²⁵ Concretamente, se expone: "el dinero cobrado a cada uno de los inmigrantes chinos se encontraría entre los 16.000 y los 18.000 euros, salvo que decidieran trabajar entre dos o tres años de forma gratuita en los negocios que tiene establecidos en España para resarcir las deudas contraídas."

⁵²⁶ Como el propio juzgado señala "algunas sociedades mercantiles del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, a través de la realización de actividades ilícitas, producirían grandes cantidades económicas que serían aplicadas en la realización de inversiones de negocio en locales y en nuevas empresas en las que se realizarían a su vez nuevas actividades delictivas".

⁵²⁷ "En cuanto a la actividad de blanqueo de capitales, el sistema utilizado consistiría en sacar físicamente dinero en efectivo de España, utilizando para ello furgonetas y camuflándolo entre mercancía textil. El dinero se transportaría a otros países de la Unión Europea (concretamente a Italia y posteriormente a

organización disponía de un pequeño grupo violento dedicado al cobro de deudas producidas por los préstamos ilegales⁵²⁸, a través de métodos considerados extorsivos⁵²⁹. El auto referencia un club-karaoke como el lugar de reunión de distintas bandas de crimen organizado chino dedicadas al tráfico de drogas, a la prostitución y al juego ilegal⁵³⁰.

Si bien estos casos policiales y judiciales permiten señalar el contexto donde ocurren los casos de la muestra, lo cierto es que no contenían información suficiente los procesos extorsivos como tal, razón por la que no formaron parte de la muestra.

Se presentan a continuación los resultados del estudio empírico, que incluyen análisis cualitativos sobre los autores, las víctimas y la respuesta legal de los quince procesos extorsivos identificados dentro de la comunidad china y las entrevistas a expertos en la materia.

2. Los autores de los procesos extorsivos

El análisis de las características principales de los autores chinos⁵³¹ implicados en los procesos extorsivos de la muestra ha resultado especialmente difícil debido a la escasa información que aportan las fuentes. Los testimonios de las víctimas recogidos en las denuncias son la principal evidencia de la vinculación de los extorsionadores con la organización criminal, y de la existencia de muchos procesos extorsivos perpetrados contra otras víctimas que no se atreven a denunciar. Lo anteriormente descrito, pone en evidencia las importantes limitaciones que presenta el estudio de este tipo de delitos. Además, se debe también tener en cuenta que

Hungría), desde donde sería remitido a China camuflado entre remesas de emigrantes, a través de gestoras de transferencias o sucursales bancarias.”

⁵²⁸ “La organización, en su actividad de prestamista, contaría con un grupo al que se denominaría como “Grupo de Shandong”, formado por varios individuos relacionados entre sí por intereses económicos y mercantiles comunes, que se dedicaría a los cobros de préstamos empleando la violencia cuando es necesario, el cobro de deudas por inmigración ilegal, vehículos robados, etc.”

⁵²⁹ “La organización se estaría dedicando al préstamo y cobro de deudas, llegando a utilizar métodos que podrían ser constitutivos de extorsión”.

⁵³⁰ “Hay investigados que son socios del club “KTV Huang Ma”, que sería un lugar de reunión de diferentes bandas pertenecientes al crimen organizado chino, en el cual se venderían drogas y se ejercería la prostitución y el juego ilegal”.

⁵³¹ En el anexo V se recoge una sucinta descripción completa de las principales características de cada caso.

estas víctimas tienen miedo y son reticentes a aportar información sobre la identidad o las características de los integrantes de los grupos criminales chinos, conocidos dentro de su comunidad⁵³².

2.1. Implicación de las organizaciones criminales

Teniendo en cuenta los casos analizados en la muestra, se han identificado dos tipos de organizaciones con base en la información recopilada en las entrevistas y en las investigaciones criminales contra grupos criminales chinos: a) grandes organizaciones que ejercen un control significativo sobre la comunidad china, b) pequeñas organizaciones o divisiones de las grandes organizaciones, que se dedican a la extorsión y a los actos violentos.

Las grandes organizaciones identificadas cuentan con más de seis miembros y tienen una estructura organizativa jerárquica con una clara división de funciones y diferentes cargos jerárquicos perfectamente definidos. De la información obtenida a través de estos casos, podemos identificar el papel que juegan determinados miembros de los grupos criminales organizados, aunque se desconoce el detalle de su estructura global al completo. Todos estos grupos criminales tienen un claro líder asistido por sus coordinadores, mientras que otros miembros del grupo se dedican a la intimidación y a la realización de actos violentos para exigir el pago.

En este escenario se debe tener en cuenta que como punto central de las comunidades chinas suele haber una persona de referencia: un hombre de negocios (normalmente proveedor con gran poder sobre bazares y restaurantes) dedicado a la importación y exportación legal de mercancías entre China y España, que en ocasiones combina con actividades ilegales como el contrabando de tabaco o la inmigración ilegal. Esta persona de referencia en la comunidad china por el relevante crecimiento de sus negocios se convierte en un importante proveedor de las empresas chinas y ostenta un gran poder monopolístico en el mercado. Así, la ayuda inicial que presta a las personas chinas que quieren venir a España a través de préstamos para los viajes, ofertas de trabajo, permisos legales para permanecer en el país o préstamos para iniciar un

⁵³² Para elaborar este apartado ha sido fundamental la valiosa información contextual que han aportado las entrevistas realizadas a expertos en la materia, tanto la relativa a la cultura china como la que se refiere a la lucha contra el crimen organizado, que han permitido una mejor interpretación de los resultados empíricos.

negocio y la provisión de mercancías para sus bazares o restaurantes, se convierte en un dominio del mercado en búsqueda del monopolio.

Si bien muchas organizaciones no exigen altos intereses a sus compatriotas, lo cierto es que, ante el impago, las deudas sí se incrementan de forma exponencial y desproporcionada. Además, exigen lealtad en la contratación de proveedores y controlan el territorio señalando quién puede abrir un negocio en la zona y quién no.

A continuación, se presenta una tabla que contiene información de variables relevantes en los resultados del apartado que se presenta.

Tabla 16. Descripción de casos de extorsión en la comunidad china por descripción de autores, causas de la extorsión y relación previa entre autores y víctimas.

Caso	Autores / Grupo criminal organizado	Causas	Relación previa
C1	Organización criminal grande: principal actividad extorsión	Ánimo de lucro: un pago elevado	Del entorno de ocio
C2	Organización criminal grande: préstamos ilegales en casinos	Ánimo de lucro: préstamos en casinos	Cliente/deudor
C3	Vinculación débil con organización criminal	Ánimo de lucro: exige 30.000 euros	Antiguo trabajador
C4	División de una organización criminal relacionada con proveedores	Ánimo de lucro: víctima elegida por su poder adquisitivo	Antiguo socio, actualmente comparten proveedor
C6	Organización criminal pequeña vinculada a cobro de deudas	Ánimo de lucro: pago de facturas no solicitadas	Proveedor
C7	Supuesta relación con una mafia china	Ánimo de lucro: exige 50.000 euros y no quiere incorporarse al trabajo	Empleado de baja
C8	Organización criminal pequeña: especializada en la extorsión y la violencia	Ánimo de lucro: robo con fuerza e intimidación y pago de 60.000 euros	Exmarido
C10	Organización criminal pequeña: principal actividad extorsión	Ánimo de lucro: exige 20.000 euros	Misma provincia
C15	Organización criminal especializada en préstamos ilegales en casinos	Ánimo de lucro: deuda anterior	Cliente/deudor
C11	Organización criminal pequeña con poder en la zona y vínculos con una mafia	Ánimo de lucro: no paga el alquiler y exige 60.000 euros	Arrendador/arrendatario
C12	Vinculación débil con organización criminal	Ánimo de lucro: no concretan cifra	Desconocido
C5	Organización criminal pequeña vinculada a una de gran tamaño	Extorsión monopolística: cierre del negocio	Desconocido
C9	Organización criminal pequeña vinculada a una de gran tamaño	Extorsión monopolística: cierre del negocio	Desconocido
C13	Organización criminal pequeña vinculada a una de gran tamaño	Extorsión monopolística: incendio para cierre	Desconocido
C14	Organización criminal pequeña	Extorsión monopolística: cierre del negocio	Socios

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de casos.

2.1. a) Grandes organizaciones criminales

Únicamente se han logrado identificar en esta categoría dos casos (C1 y C2), aun así, son de especial interés dado el fuerte impacto que provocan en la comunidad china afectada.

El caso C1 se refiere un incidente extorsivo donde se reclama un pago de un millón de euros al dueño de un exitoso restaurante tradicional chino, al que se amenaza de muerte si no paga. Se trata de una organización criminal que muestra explícitamente una relevante capacidad económica, mediante la exhibición de varios coches de lujo y que se dedica a extorsionar negocios chinos en diferentes localidades de Valencia.

El caso C2 hace menciona a un grupo criminal que actúa en un casino de Madrid y está especializado en otorgar préstamos usureros a empresarios que apuestan en salas de juego. El método de aproximación consiste en el amable ofrecimiento de fichas de juego, que les realizan dos mujeres cuando están atravesando un momento de pérdidas importantes. El empresario accede a tal ofrecimiento para continuar jugando, sin haber sido forzado en ningún momento. Tras esta actuación, comienza un proceso extorsivo derivado de un supuesto préstamo usurero de hasta el triple de lo prestado. En el caso citado la víctima explica que le proporcionaron fichas por valor de 15.000 euros que ella devolvió, a pesar de ello, en un momento posterior, le reclamaron una deuda de 30.000 euros en concepto de intereses.

Es relevante tener en cuenta que la clave del crimen organizado chino son las grandes organizaciones con poder en España, como se desprende de las importantes operaciones policiales Emperador, Snake, Long y Dragón, entre otras. Se trata de organizaciones criminales que realmente constituyen una amenaza económica para la sociedad y en especial, para las víctimas, pequeños empresarios chinos dueños de bazares o restaurantes.

Se debe tener presente que estas organizaciones suelen tener vínculos muy sólidos con círculos económicos y políticos españoles, asunto más ampliamente explicado en el apartado 2.3.b) del presente capítulo.

Por último, lo que permite contextualizar la categorización expuesta en apartado, es la especialización de determinadas agrupaciones, pertenecientes a las grandes organizaciones, que constituyen ramas dedicadas al cobro de deudas o al control territorial para forzar contratos con proveedores u obligar al cierre de negocios. En algunas ocasiones, el poder es tal que su reputación permite a sus integrantes exigir dinero en los bazares de su control, llegando a realizar visitas sistemáticas en las que sustraen el dinero directamente de la caja registradora

sin dar ninguna explicación al dueño, que se queda paralizado esperando a que el grupo abandone su negocio.

2.1. b) Pequeños grupos criminales

Los trece casos restantes analizados se refieren a pequeños grupos criminales, que habitualmente han tenido el apoyo de las organizaciones criminales grandes.

Estos casos se pueden clasificar en tres categorías según el tipo de relación entre los integrantes:

- Vinculados a grupos criminales especializados en el cobro de deudas, la extorsión y la violencia (C6, C8, C10 y C15) en el seno de la comunidad china.
- Conectados con organizaciones criminales de gran tamaño (C4, C9, C5 y C13) con presencia en distintas provincias españolas para apoyar diferentes formas de extorsión a negocios a través de métodos violentos para la imposición de proveedores o el cierre de negocios.
- Relaciones no definidas por parte de los extorsionadores en cuatro casos, que no permiten identificar con claridad los vínculos reales: amenazas de avisar a la mafia (C7 y C11) o la simple exigencia extorsiva verbalizada de forma directa (C12 y C14) pueden llegar a provocar un enorme temor en la víctima.

2.2. Móviles y causas de la extorsión

Los motivos que mueven a los extorsionadores a actuar en cada caso pueden agruparse en dos tipologías: a) el lucro directo, a través de la solicitud de pagos por diversas causas, y b) motivaciones monopolísticas que, aunque supongan un beneficio a medio o largo plazo, no aportan beneficio económico de manera inmediata. Además, es significativa la relación previa que existe entre autores y víctimas, analizada en cada categoría.

2.2. a) Extorsión cuya finalidad el lucro directo

Once de los casos estudiados se engloban en esta categoría (C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C10, C11, C12 y C15).

- En determinados casos las víctimas se eligen por su alto poder adquisitivo a causa de la buena marcha de sus negocios: el C1 se exige un pago de un millón de euros al dueño de un restaurante chino de éxito en la zona y en el C12 no se llega a concretar la cifra, pero se le exige un pago al empresario, reiterando que acudirán de nuevo a recogerlo en un breve plazo. Se entiende que autores y víctimas no se conocen directamente, pero los extorsionadores seleccionan a estas personas en el entorno de ocio y por la fácil identificación de los negocios chinos dada su estética específica, que facilita la ubicación exacta solo con verlos desde la calle.
- En algunos casos la solicitud de pago se deriva de una deuda anterior, que es lo que vincula autores y víctimas; la deuda puede ser adquirida por el uso de fichas prestadas en un casino (C2), mediante facturas no solicitadas por la víctima⁵³³ (C6) o por un préstamo que no se saldó (C15).
- En otros casos, la relación previa es estrictamente laboral, cuando los extorsionadores son empleados (C7), exempleados (C3), exsocios (C4) o empresarios (C10) que comparten proveedores, o incluso inquilinos del arrendatario al que extorsionan (C11).
- Por último, se da un caso anecdótico (C8) donde víctima y autor son expareja en un procedimiento de violencia de género. La empresaria victimizada alega que su exmarido es miembro de la mafia y que unos desconocidos le han exigido de su parte determinado pago, ya que él no puede hacerlo porque tiene una orden de alejamiento.

⁵³³ Este caso, que sugiere intenciones monopolísticas se ha clasificado como ánimo de lucro dado que nada hacía pensar de forma explícita que el extorsionador tenía como propósito algo que no fuera el cobro de tales supuestas facturas amenazando con avisar a un grupo criminal para que acabase con la vida de la víctima; aunque pudiera formar parte de un mecanismo de presión de contratación de proveedores, lo cierto es que no se puede extraer esa conclusión de la escueta declaración de la víctima.

2.2. b) Extorsión monopolística en el ámbito de la delincuencia organizada

Cuatro casos de la muestra permiten constatar las intenciones monopolísticas de una organización criminal china en las zonas afectadas (C5, C9, C13 y C14) en todas ellas el propósito era que la víctima cerrase el negocio, alegando que se trataba de una zona controlada por una organización que no les había dado autorización para desarrollar sus actividades económicas. En términos generales autores y víctimas no se conocían, aunque en uno de los casos eran socios (C14).

La existencia de estas organizaciones es de especial relevancia dado el fuerte impacto que genera en la economía local de la comunidad china afectada. Lo mencionado anteriormente ha sido corroborado por la información complementaria de jueces, fiscales y policías expertos en la materia.

Sin embargo, en los casos C3, C7 y C12 las víctimas vinculan de forma muy débil a los extorsionadores con una organización o grupo criminal; esto denota el fuerte impacto que genera el solo hecho de pensar que se encuentran frente a alguien que puede tener lazos con la mafia, infringiendo un sentimiento de temor suficiente en la víctima como para tomar en serio sus amenazas, aun viniendo de una persona en solitario.

2.3. *Modus operandi*

A continuación, se muestran los principales medios empleados, así como la implicación de cargos públicos como parte del *modus operandi*.

2.3. a) Medios empleados en los procesos extorsivos

Lo cierto es que dada la fuerte intimidación ambiental generada por la reputación de las organizaciones criminales que respaldan los procesos extorsivos, el empleo de violencia fue excepcional. En dos casos se empleó de forma extrema: a) en el caso C2, cuando agredieron a la madre de la víctima que se encontraba en el negocio durante el momento extorsivo y además trataron de secuestrar al padre y b) en el caso C15, cuando secuestraron al hijo de la víctima para forzar el pago de la deuda. Ahora bien, en otros dos casos, el C1 y C13, autores y víctimas

habían mantenido una fuerte pelea días anteriores al incidente extorsivo, pero durante el momento de la solicitud de pago no se agredió a nadie.

Para los once casos de *extorsión con ánimo de lucro directo*⁵³⁴ no se empleó violencia física sobre las personas ni sus bienes, sino más bien intimidación mediante amenazas de muerte o la simple identificación del extorsionador como integrante de una organización criminal china importante.

Por el contrario, en los casos de extorsión monopolística, las demandas de cierre del negocio bajo amenazas de muerte se complementaron con daños materiales al negocio, incluyendo incendios provocados y en dos de los casos con lesiones a las víctimas (C5 y C13). Estos medios específicos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 17. Medios empleados para forzar el cierre de los negocios en los casos de extorsión en la comunidad china.

Caso	Medios empleados para forzar el cierre del negocio
C5	Amenazas de muerte, daños materiales y violencia. Consecuencias: daños materiales y lesiones a la víctima mediante puñetazos y golpes y empujones a miembros de su familia.
C9	Amenazas de muerte y seguimiento a la víctima. Utilización de la mafia china como amenaza.
C13	Incendios provocados como consecuencia de la extorsión. Consecuencias: pelea con familia de víctima y graves daños materiales por incendio.
C14	Amenazas de muerte y rescisión del contrato de arrendamiento del local de la víctima.

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de casos, publicada en Rusev et cols. (2016).

2.3. b) Implicación de cargos públicos

Si bien la muestra de casos de extorsión en la comunidad china no permite identificar ningún tipo de implicación de cargos públicos, lo cierto es que la información aportada desde el ámbito policial y judicial sí señala estos fuertes vínculos de corrupción.

Existen, de forma puntual, grandes organizaciones criminales, como la implicada en la operación Emperador, entre otras, que cuentan con la complicidad de funcionarios de aduanas para que les ayuden a cruzar las fronteras o para obtener permisos legales de permanencia en

⁵³⁴ Expuestos en el apartado inmediatamente anterior.

España y con la de policías corruptos que evitan su detención, facilitando su impunidad. También cuentan con la connivencia de autoridades políticas para que les sean adjudicados contratos públicos o para que les concedan los permisos necesarios para invertir en nuestro país. Lo cierto es que, aunque se trata de casos concretos, el control territorial puede ser muy alto, generando una fuerte reputación que permite actuar a sus integrantes con un gran poder intimidatorio, lo que se conoce como intimidación ambiental.

Este aspecto es clave para entender la concentración de poder que tales organizaciones ostentan en nuestro país, que, como muestran los casos analizados, les permite financiarse a base de extorsiones de lucro directo. Para ello, cuentan con ramas del grupo especializadas en exigir los pagos; además, los integrantes que se identifiquen como parte del grupo pueden aprovechar su reputación y obtener beneficios de forma rápida y sencilla a través de la intimidación ambiental. Estas prácticas extorsivas cometidas por pocos integrantes de una gran organización le ofrecen una buena oportunidad para lograr establecer el monopolio que buscan y dominar el mercado imponiendo las zonas donde cada empresario puede abrir un negocio mediante la actuación de un número reducido de miembros que aprovecha la reputación del grupo completo, lo que resulta muy eficaz.

3. Las víctimas de la comunidad china afectadas por los procesos extorsivos

Siguiendo el enfoque de detección de vulnerabilidades⁵³⁵, el análisis comprende un breve estudio socioeconómico del entorno de la víctima, que incluye aspectos característicos de las zonas geográficas afectadas y el perfil de los negocios de la muestra victimizados (especialmente las medidas de seguridad privada y la posibilidad de apoyo en asociaciones chinas o agrupaciones de empresarios compatriotas) expuestos a continuación.

⁵³⁵ Este enfoque metodológico consiste en el estudio de las oportunidades que suponen los negocios legales para los grupos de crimen organizado y centra los análisis en un entorno socioeconómico más amplio; y ha sido implementado por importantes organismos en el estudio del crimen organizado como Europol (2013) y el Equipo de Trabajo de Acción Financiera (FATF, 2013). Este enfoque se explica con mayor profundidad en el punto 2.1. del capítulo cuarto de la presente tesis.

Atendiendo a los casos de la muestra, se presentan las principales regiones o zonas geográficas en las que está presente la extorsión china. Asimismo, se describen las características socioeconómicas de las víctimas, el perfil de los negocios victimizados, las medidas de protección empleadas y el papel de las asociaciones de comerciantes.

3.1. Características de las zonas geográficas afectadas

Los casos se refieren principalmente⁵³⁶ a cuatro zonas geográficas de España: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, donde parece existir un mayor control por parte de organizaciones criminales. Aunque también se produjo un caso aislado en Pontevedra y algunos casos en León y Cáceres, estos estuvieron vinculados a la contratación de proveedores fuera de tales provincias.

Cabe destacar que la mayor parte de los casos tuvieron relación con pequeñas localidades en las que estaban establecidos un reducido número de negocios chinos (en once casos) y que carecían de asociaciones de comerciantes locales cercanas. Únicamente se localizaron cuatro incidentes extorsivos en zonas donde había una importante presencia de negocios y asociaciones chinos: Barcelona, Madrid y Alicante (C10, C11, C14 y C15).

Los negocios extorsionados situados en localidades afectadas, citadas en el párrafo anterior, estaban localizados en locales comerciales céntricos (50%) o en zonas más aisladas, industriales y a las afueras de la localidad (50%). Por ejemplo, los negocios extorsionados en Madrid y Barcelona estaban ubicados en pequeñas localidades (locales comerciales céntricos) y en zonas industriales, como a la gran zona de suministro chino de Cobo Calleja (Fuenlabrada).

3.2. Perfil de los negocios victimizados

Los negocios que regentaban las víctimas afectadas eran de tres tipos:

a) La mayoría eran bazares, que son las tiendas tradicionales de venta de productos variados comúnmente asentada en España (C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C13 y C14).

⁵³⁶ Los casos recopilados no son representativos de la distribución geográfica de la extorsión en España como ya se ha expuesto en las limitaciones del estudio en el cuarto capítulo.

b) También fueron victimizados dos restaurantes (C1 y 12), ambos mediante solicitudes de pago; aunque la víctima del caso C6 además de un bazar, también tenía un restaurante en la zona.

c) Un caso anecdótico se dio en la víctima del C15, que tenía un locutorio.

El perfil de dichas empresas es muy similar: pequeños o medianos negocios, en su mayor parte regentados por las familias propietarias de los mismos; además, se trata de locales abiertos al público, por lo que el nivel de exposición ante visitas amenazantes o reiteradas es grande.

Los pagos exigidos oscilaban entre los 4.000 y los 60.000 euros, salvo en un caso en el que al propietario de un restaurante se le pidió que pagase 1 millón de euros (C1).

En los casos de extorsión por ánimo de lucro directo⁵³⁷, las cantidades exigidas que fueron denunciadas ante la policía eran pagos únicos, no pagos periódicos ni sistemáticos. Ahora bien, las entrevistas a expertos señalan que muchas organizaciones exigen pagos sistemáticos irregulares de forma que cuando la organización estimaba oportuno cobrar, enviaba a algunos miembros a tomar el dinero en efectivo de la caja registradora del negocio de su víctima, sin que esta opusiera una gran resistencia.

Según los casos analizados, cuando el objetivo de la extorsión consistía en monopolizar el mercado, los extorsionadores exigían el cierre del negocio. Aunque no se han identificado otro tipo de exigencias en la muestra, lo cierto es los procesos extorsivos de tendencia monopolística también pueden consistir en la exigencia de contratación exclusiva de proveedores, lo que genera una riqueza enorme teniendo en cuenta la gran cantidad de pequeños bazares a los que abastecer que existen en nuestro país⁵³⁸.

También en reseñable⁵³⁹ la efectiva oportunidad real que estos pequeños negocios brindan a las grandes organizaciones criminales para blanquear dinero, mediante la utilización de facturas falsas y de clientes inexistentes. Son procedimientos difíciles de identificar por las autoridades dada la ausencia de registros en restaurantes y bazares que demuestren tales ventas falsas. Este mecanismo aporta una justificación al dinero negro obtenido de otras

⁵³⁷ Expuestos en el apartado 2.2.a) del presente capítulo.

⁵³⁸ Según las entrevistas mantenidas con expertos en crimen organizado chino de la Guardia Civil.

⁵³⁹ Atendiendo a las entrevistas a expertos en crimen organizado chino de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

actividades criminales, dándoles una apariencia de legalidad que proporciona impunidad a las organizaciones que las perpetran.

Por último, en la mayoría de los casos, las víctimas no se ubican en zonas donde existen asociaciones de comerciantes, salvo en el supuesto de las extorsiones perpetradas en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Además, en la información recopilada no se encontraron pruebas de ninguna asociación de comerciantes de la que formara parte ninguna víctima.

3.3. Pautas de comportamiento de las víctimas

Todas las víctimas de los casos analizados denunciaron la extorsión ante la policía y se negaron a aceptar las exigencias de los extorsionadores. Lo cierto es que estas víctimas indican que no son las únicas, que se trata de un fenómeno extendido en parte de su comunidad.

Estas personas que denuncian argumentan que lo hacen por dos motivos: a) porque las exigencias extorsivas implican la pérdida del negocio que constituye la fuente de ingresos familiar, porque exigen el cierre de este o porque lo exigido suponga una cuantía inasumible y b) por un verdadero temor por su seguridad física y la de su familia, que se desprende de las insistentes peticiones de que se adopten medidas de seguridad de forma inmediata por la peligrosidad de su situación.

Atendiendo a la seguridad del entorno de la víctima⁵⁴⁰, sólo una de las víctimas había contratado servicios de protección privada (C9) y la mayoría no contaba con cámaras de grabación en sus establecimientos (CCTV) aunque las víctimas de los locales que sí las tenían pudieron aportar la identificación física de los extorsionadores, como en los casos C1, C2 y C15.

⁵⁴⁰ Tal como se ha argumentado en el punto 2.1. del capítulo cuarto de la presente tesis, a lo largo del estudio se han analizado determinados aspectos del entorno de la víctima; pues bien, conocer las medidas de seguridad con las que cuentan las víctimas puede permitir una posterior evaluación de las vulnerabilidades y la identificación de posibles mejoras de protección.

4. Respuesta legal ante los procesos extorsivos en la comunidad china

Analizados los casos de extorsión en la comunidad china a nivel criminológico, resulta de interés estudiar la respuesta de los cuerpos policiales e instituciones judiciales ante los procesos extorsivos perpetrados dentro de una comunidad todavía tan desconocida para nuestra sociedad y a la vez tan numerosa en nuestro territorio. Este objetivo se llevará a cabo mediante la descripción jurídica de la muestra y la identificación de los tipos penales aplicados atendiendo a las conductas extorsivas perpetradas, que se presentan a continuación.

4.1. Descripción jurídica de la muestra

Como ya se adelantaba al comienzo del capítulo, si la obtención de información de los procesos extorsivos en general ya es difícil, en aquellos que se cometen en el seno de la comunidad china lo es aún más, debido a las características señaladas en el apartado anterior, entre las que destacan la falta de confianza de este colectivo en las instituciones españolas, el desconocimiento de nuestra regulación e idioma y el fuerte arraigo social propio de su cultura, que implica cierto nivel de aislamiento para las cuestiones que se consideran asuntos de la comunidad.

Esto queda patente si consideramos la escasa información que facilitan las víctimas, así como los enormes obstáculos que se producen en la comunicación con los cuerpos policiales y las instituciones judiciales que, en parte, puede ser debido a las barreras lingüísticas, pero también influyen las cuestiones culturales⁵⁴¹ e incluso el miedo. A continuación, se presenta una tabla que contiene las características jurídicas que describen los órganos responsables, el número de personas detenidas en los casos policiales o condenados en los casos judiciales de la muestra, el número de autores implicados en el proceso extorsivo según el testimonio de la víctima y los tipos penales aplicados en cada caso.

⁵⁴¹ Por ejemplo, considerando que corresponde a la comunidad resolver los conflictos entre empresarios y los problemas de seguridad, incluso entendiendo que el sometimiento en las extorsiones monopolísticas puede ser consecuencia legítima del poder territorial de una organización.

Tabla 18. Descripción jurídica de los casos de extorsión en la comunidad china.

Caso	Órgano responsable	Nº detenidos o condenados	Nº autores implicados	Tipos penales aplicables
C1	Guardia Civil	1	9	Amenazas
C2	Guardia Civil	4	8	Extorsión
C3	Guardia Civil	1	1	Amenazas
C4	Guardia Civil	1	2	Amenazas*
C5	Guardia Civil	1	2	Lesiones*
C6	Guardia Civil	1	1	Amenazas*
C7	Guardia Civil	1	1	Amenazas y daños*
C8	Guardia Civil	6	6	Robo con violencia/intimidación
C9	Guardia Civil	2	2	Amenazas*
C10	Guardia Civil	1	4	Amenazas*
C11	Guardia Civil	1	1	Amenazas
C12	Guardia Civil	2	2	Extorsión
C13	Guardia Civil	1	1	Incendio
C14	Guardia Civil	3	3	Amenazas*
C15	Audiencia Provincial	3	3	Secuestro, obstrucción a la justicia y extorsión

**Se trata de faltas y no de delitos, según la regulación vigente en el momento de la comisión del hecho delictivo.*

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de casos.

La tabla anteriormente expuesta pone de manifiesto diversas cuestiones.

En primer lugar, si atendemos a los órganos responsables de los casos que conforman la muestra, cabe destacar que catorce de los quince casos provienen de la Guardia Civil, correspondiendo un único caso a una sentencia de la Audiencia Provincial. Lo cierto es que, por cuestiones metodológicas, la búsqueda de diligencias policiales⁵⁴² a partir de la nacionalidad permite identificar con rapidez y exactitud numerosos casos de conflictos⁵⁴³ ocurridos dentro de la comunidad china. Ahora bien, son muchos los casos policiales que se judicializan y no llegan a enjuiciarse porque las víctimas deciden retirar la denuncia tratando de evitar represalias de la

⁵⁴² Siempre en el marco del proyecto de investigación CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión Europea, y del que la Guardia Civil formaba parte como socio, siempre respetando la confidencialidad de los documentos.

⁵⁴³ Revisión a partir de la cual se han podido extraer los casos de extorsión ateniendo a los criterios expuestos en la metodología, que incluyen la implicación de una organización criminal (en sentido criminológico), la victimización de un negocio, y un proceso extorsivo sistemático sobre más de una víctima que perdure en el tiempo, es decir, que no se trate de un incidente de extorsión aislado.

mafia china⁵⁴⁴. Los propios grupos especializados señalan que, como las víctimas habitualmente no ratifican sus denuncias en el juicio oral, cuando esta prueba testifical suele ser la única o una de las pocas evidencias en múltiples procesos extorsivos, el caso se cierra y los extorsionadores quedan impunes. De los quince incidentes extorsivos que se recogen, solo el caso que procede de la Audiencia Provincial (C15) es el único del que hay constancia de haber llegado a una sentencia.

En segundo lugar, destaca no sólo la diferencia entre el número de extorsionadores detenidos por los cuerpos policiales y el número de autores denunciados por la víctima y por los testigos en sus declaraciones, sino especialmente los casos (C1 y C2) donde se identifica una cifra muy baja de autores en tales declaraciones, llegando a haber 5 casos relacionados con el crimen organizado chino donde existe un solo autor (C3, C6, C7, C11 y C13). Esto se debe a la estrategia utilizada por los extorsionadores de identificarse como miembros de una organización criminal con reputación en la zona; este hecho es tenido como verdadero por las víctimas y es suficiente para atemorizarlas. Se trata, por tanto, de una forma de intimidación con una alta eficacia dentro de la comunidad con un alto grado de cohesión⁵⁴⁵, donde la reputación tiene un gran peso. De hecho, una de las primeras solicitudes a la policía en la denuncia suele ser la aplicación de medidas de protección alegando verdadero temor por su vida o su integridad física y la de su familia.

Por último, y como consecuencia de lo anteriormente comentado, se han detectado diversos delitos atendiendo a las conductas perpetradas:

- a) Delitos que contienen los elementos de intimidación o violencia, propios de los procesos extorsivos, tales como amenazas (C1, C3, C4, C6, C7, C9, C10, C11, C14), robo con violencia o intimidación (C8), o secuestro (C15);
- b) Delitos como resultado de la violencia e intimidación ejercidas, como los delitos de lesiones (C5) o daños (C7);
- c) Delito de extorsión (C2, C12 y C15), tipo esencial en el presente estudio;
- d) Delitos que forman parte de un *modus operandi* concreto, tal como el incendio (C13).

⁵⁴⁴ Según las entrevistas a expertos en crimen organizado chino de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

⁵⁴⁵ Debido a que los individuos se conocen entre sí o de forma indirecta: en numerosas ocasiones las víctimas dicen haber oído hablar de ese grupo criminal o incluso conocer a sus integrantes, razón por la que afirman tener un gran temor, e insisten en que otras personas de la comunidad china sufren los mismos procesos extorsivos y prefieren no denunciar.

Además, se han identificado delitos que se cometen en el marco de otras actividades criminales o con objetivos diferentes a los del propio proceso extorsivo, como ocurre con la obstrucción a la justicia (C15) que busca evitar las consecuencias penales de los delitos cometidos.

Un caso destacable es el recogido en la única sentencia encontrada sobre el objeto de estudio (C15): los tipos penales en juego son los delitos de secuestro, obstrucción a la justicia y extorsión⁵⁴⁶ sobre los que la Audiencia Provincial de Barcelona se pronuncia y condena.

4.2. Conductas extorsivas y tipos penales aplicados

A continuación, se presenta, caso por caso, una breve descripción de los hechos correspondientes a los quince incidentes extorsivos identificados dentro de la comunidad china; y los tipos penales aplicados, ya sean recogidos en las diligencias policiales o descritos en las sentencias; ambos constituyen documentos de estudio empírico de la presente tesis.

Ahora bien, existen dos puntos que se deben tener en cuenta en la lectura del presente apartado: por un lado, a pesar de que hubiera sido de enorme interés para el estudio, no se lograron identificar las resoluciones judiciales de los casos policiales, dato que hubiera enriquecido enormemente el análisis de la respuesta penal; por otro lado, existen importantes diferencias en materia de contenido, habiendo casos ampliamente explicados en las diligencias policiales o resoluciones judiciales, y otros en cambio, donde la información ha sido realmente escasa; por esta razón debe quedar claro que los análisis del capítulo completo se basan en: a) las declaraciones de víctimas, testigos y autores recogidas en las diligencias, y b) los hechos probados contenidos en las sentencias (y la resolución judicial) así como los argumentos jurídicos en materia de tipificación penal.

Finalmente se expone un breve comentario sobre la respuesta jurídica que permitirá desarrollar un estudio legal sobre problemáticas y propuestas de mejora en el último capítulo, específicamente encaminadas a la represión y prevención de la extorsión en la comunidad china asentada en España.

⁵⁴⁶ Aunque existen discrepancias entre el Ministerio Fiscal y la Audiencia Provincial de Barcelona, como se expone en el análisis de caso del siguiente apartado.

Caso C1

El caso C1 tuvo lugar en una localidad de Valencia, durante el año 2015, por un conflicto monopolístico. Nueve personas accedieron violentamente al exitoso restaurante asiático de la zona exigiendo al propietario un pago de un millón de euros bajo la advertencia de que “si no lo hacía, deberá ir preparando su ataúd”. El propietario ya había tenido una discusión previa en una zona de ocio de la comunidad que terminó en delitos de lesiones por parte de la víctima a los extorsionadores. Como respuesta ante el atrevimiento de enfrentarse a la organización criminal, la puesta en escena de la extorsión es significativa: el líder del grupo es el que se dirigió a la víctima, cuatro personas le acompañaban en el local y otras cuatro esperaban fuera, todas ellas con coches de alta gama.

La víctima declaró que se trataba de una organización criminal conocida en la zona que se financiaba amenazando, lesionando y sabotando pequeños bazares chinos de Valencia.

En el atestado policial se logró identificar un solo autor de un delito de amenazas, aunque no se descartan posibles tipos penales aplicados en un momento más avanzado del proceso judicial.

Caso C2

El caso C2 tuvo lugar en una localidad de Madrid, en el año 2011, cuando se denunció a un grupo de ocho personas que se dedicaba a la usura y la extorsión en un importante casino con gran afluencia de jugadores asiáticos.

La víctima denunció a las autoridades que una noche estaba jugando en el casino al lado de un hombre y dos mujeres quienes, cuando aquél perdió, le ofrecieron insistentemente un préstamo de 15.000 euros para que siguiera jugando. Tras aceptarlo y gastarlo, le explicaron que los intereses eran de otros 15.000 euros, y le forzaron a firmar, delante de otras personas, un documento ilegal asumiendo la deuda y las condiciones de dicho préstamo.

Los medios intimidatorios que los extorsionadores utilizaron para forzar el pago fueron las visitas reiteradas a su tienda, el acoso telefónico, las amenazas con palos, y la exigencia de la devolución de la cantidad demandada con intereses leoninos. Así, durante 24 meses la víctima fue pagando a pequeñas cantidades comprendidas entre los 2.000 y los 11.000 euros. En paralelo sufrió incidentes violentos como, por ejemplo, que un grupo de cuatro o cinco personas le sacaran de su tienda y le metieran en un coche para exigirle el dinero, que asaltaran a su

madre, aunque no le causaron lesiones visibles, y que intentaran secuestrar a su padre y estos dos últimos incidentes ocurrieron dentro de su negocio. La víctima había pagado ya un total de 23.000 euros, y temía por su vida y la de su familia.

El delito recogido en el atestado policial fue la extorsión, cometida por cuatro integrantes del grupo, sin que se haya podido identificar a los otros cuatro miembros a los que refiere la víctima que le visitaron para amenazarle en distintas ocasiones. También resultaría apreciable un delito de amenazas condicionales, que no se recogió en las diligencias.

Caso C3

El caso C3 ocurrió en el año 2013, en una localidad de Madrid donde un ex empleado de un bazar, portando un cuchillo en su mano, exigió a la víctima un pago de 30.000 euros en un plazo de pocos días bajo amenaza de muerte. En esta ocasión se contó con la declaración de un testigo que presenció los hechos y así lo corroboró.

El proceso extorsivo duró un mes durante el cual las amenazas se vertieron también contra la familia de la víctima. El extorsionador argumentó que le exigía el dinero porque deducía que tenía buena capacidad económica ya que pretendía abrir un nuevo local cerca del que poseía actualmente. La víctima señaló que esta persona podía tener relación con la mafia china y que le producía un enorme temor porque conocía a la perfección toda su vida y sus movimientos.

En el atestado policial se recoge un delito de amenazas perpetrado por el autor.

Caso C4

El caso C4 tiene una localización múltiple: tuvo lugar en Madrid, en el año 2015, pero el incidente extorsivo se perpetró contra un empresario de León. Se trata de un grupo de personas que opera también en Palencia y León.

El objetivo era forzar las obligaciones contractuales de suministro, de modo que los de bazares chinos de toda España tuvieran que abastecerse obligatoriamente desde Madrid. Para ello utilizaron amenazas de muerte. La violencia física consistió en el zarandeo de una de las víctimas, pero no llegó a producir resultado de lesiones.

La víctima que denunció el caso insistió en que no era la primera vez que le pasaba ni el suyo era el único negocio afectado. Declaró que los autores sabían que iba a abrir un nuevo

bazar y que quisieron aprovechar la oportunidad de negocio. Manifestó, además, que fueron a su local a tomar fotos para contar con más información.

La víctima sólo logró identificar a uno de los autores, al que conocía por haber compartido un negocio anterior con él y con quien declaró tener un juicio pendiente porque le debía dinero. Esta no fue la misma persona que se acercó a su local a tomar las fotos y le amenazó diciendo que tuvieran cuidado porque la próxima vez que fueran a Madrid a por mercancía de otros proveedores el jefe los mataría, refiriéndose al extorsionador conocido por la víctima.

El atestado policial recoge un delito de amenazas de un solo autor, y el caso se instruyó en el Juzgado nº3 de León.

Caso C5

El caso C5 ocurrió en una localidad de Sevilla, en el año 2013, cuando se produjo un incidente extorsivo contra un nuevo bazar chino, con el objetivo de que la víctima no abriera su nuevo negocio.

Los medios intimidatorios incluyeron lesiones a la víctima mediante puñetazos y golpes en presencia de su familia y daños al local en el que destrozaron los mostradores, rompiendo también el aire acondicionado y una pieza de cerámica.

La víctima dijo conocer a uno de los dos autores, puesto que es propietario de un bazar grande cerca de la tienda que pretendía abrir. El extorsionador le advirtió de que como abriera el negocio haría todo lo necesario para impedirlo e iría con más gente a destruirlo.

El caso pasó al Juzgado de Instrucción de Guardia de Sevilla por un delito de lesiones con un solo autor identificado.

Caso C6

El caso C6 tuvo lugar en una localidad de Pontevedra, en el año 2015; cuando un comercial quiso imponer el cobro de una mercancía que la víctima negaba haber solicitado. Cuando se resistió a pagar y requirió al comercial que retirara la mercancía que no había pedido para su bazar, el autor comenzó a exigir el pago de forma violenta.

Los medios de intimidación consistieron en insultos, así como la amenaza de contactar con determinadas personas para matar a la víctima. El extorsionador añadió que si no pagaba

las mercancías iría a su restaurante a consumir sin pagar, y se quedaría en el local hasta que liquidara la deuda.

El atestado policial recoge un delito de amenazas y llevaron el caso al Juzgado de Instrucción nº 1 de Pontevedra.

Caso C7

El caso C7 tuvo lugar en una localidad de Pontevedra en el año 2012, cuando un empleado de un bazar, que había estado de baja, recibió el alta médica y se tenía que incorporar al trabajo, reclamó el pago de 50.000 euros al propietario del negocio. La víctima señala, además, que esta persona tenía vínculos con la mafia china.

Los medios intimidatorios utilizados fueron la amenaza de llamar a la mafia y que “ya verían lo que les pasaría”; también causó daños en el local: golpeó una pantalla de ordenador y la tiró al suelo, que supuso un gasto aproximado de 300 euros.

El atestado policial recoge un tipo penal de daños y otro de amenazas; el caso pasó al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Porriño.

Caso C8

El caso C8 tuvo lugar en una localidad de Cáceres, en el año 2012, cuando unas seis personas entraron en el domicilio de la propietaria de un establecimiento comercial, para robar joyas, documentación personal, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

Los medios intimidatorios empleados fueron atar de pies y manos a las cuatro personas que estaban en la casa, taparles la boca, y amenazarles con arma de fuego y armas blancas, además de golpear a la víctima principal mientras pedían la llave de la caja fuerte. El dinero sustraído del negocio que regentaba la víctima ascendió a 6.000 euros. Ésta declaró que tenía una orden de alejamiento por violencia de género respecto de su marido, a quien atribuye el delito, vinculándolo a la mafia china.

El atestado policial recoge un robo con violencia o intimidación de cinco autores que fueron remitidas al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 1 de Talayuela, Cáceres.

Caso C9

El caso C9 tuvo lugar en una localidad de Cáceres, en el año 2014, donde la víctima quería abrir un nuevo bazar.

La víctima fue amenazada por los autores con avisar a la mafia china de Madrid para pegarle si abría el negocio en la zona, argumentando que no querían tener competencia.

El caso se puso en conocimiento de la Guardia Civil gracias a la actuación del dueño de nacionalidad española de un bar cercano que presencié el conflicto y les facilitó el número telefónico del cuerpo policial para denunciar las amenazas. Estos hechos fueron explicados por el denunciante en su declaración, que fue recogida en la diligencia policial; aunque no pudieron ser confirmados por el testigo español puesto que no escuchó la conversación, únicamente observó un intercambio de palabras que comenzó de forma normal y terminó de forma más “fuerte”.

En el atestado policial consta la tramitación en los juzgados de Plasencia, pero sin especificar bajo qué tipo penal, aunque parece aplicable un delito de amenazas condicionales.

Caso C10

El caso C10 aconteció en una localidad de Alicante, en el año 2012, cuando una persona que la víctima sabe que se encuentra vinculada con la mafia, le reclamó el pago de 20.000 euros en un plazo de dos días bajo la amenaza de quemar su nave y no dejarle tranquilo.

La víctima manifestó que él es del mismo pueblo chino que el autor, y que coincidieron una vez en Sevilla buscando proveedores, por lo que ambos saben que tienen un establecimiento cada uno. Mostrando inquietud, declaró que el extorsionador no trabajaba mucho pero que gastaba bastante dinero en casinos e iba “acompañado de gente peligrosa”.

La víctima denunció ocho horas antes de cumplirse los dos días de plazo que establecía la amenaza y afirmó que se trataba de un grupo que se financiaba extorsionando a propietarios chinos de pequeños negocios.

El atestado policial recoge un tipo penal de amenazas, y el caso pasa al Juzgado de Instrucción de Guardia de Novelda, Alicante.

Caso C11

El caso C11 tuvo lugar una localidad de Madrid, en el año 2012; donde la víctima tiene arrendada una nave a una persona desde el año 2009. Tras tres meses sin abonar el alquiler, el arrendatario solicitó a la víctima (la arrendataria) un pago de 60.000 euros en concepto de mejoras por las reformas él había realizado en la nave.

La víctima interpuso una demanda para que el inquilino abandonase la nave, siguiendo el curso legal establecido ante el impago⁵⁴⁷. El autor comenzó a amenazar con mandar a las mafias chinas, y advirtiéndole que “algo le iba a pasar”. Las amenazas se realizaron mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto a su móvil. La víctima declaró que consideraba al autor perfectamente capaz de cumplir las amenazas y explicó que en la zona donde se encuentra la nave (Cobo Calleja) eran frecuentes conflictos similares y las amenazas se cumplían. Se le preguntó si quería orden de protección y la aceptó, añadiendo que se sentía atemorizada y temía que el autor pudiera contratar a otras personas para hacer daño a ella o a su familia.

El atestado policial fue remitido con la declaración de los hechos al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3, Arganda del Rey (Madrid).

Caso C12

El caso C12 tuvo lugar en una localidad de Sevilla, en el año 2012, cuando dos personas desconocidas acudieron al restaurante de la víctima y le solicitaron que fuera preparando el dinero para cuando volvieran. El propietario del restaurante no pudo aportar más datos que la descripción física de las víctimas y los rumores que existían en su entorno sobre la reciente salida de la cárcel de uno de ellos.

No le indicaron una cantidad de dinero concreta; además no tenía cámaras de vigilancia en la tienda (CCTV) y manifestó un gran temor por su integridad y la de su negocio.

El atestado policial recoge un “delito de extorsión (amenazas con ánimo de lucro)”, caso que se tramitó en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Sevilla.

Caso C13

⁵⁴⁷ La víctima aportó el contrato de arrendamiento que incluía una cláusula donde constaba que, en caso de realización de obras por parte de la parte arrendada, debe ser consentida por el arrendador y que una vez finalizada la relación contractual quedaran a favor del arrendador sin coste alguno.

El caso C13 se produjo en una localidad de Sevilla, en el año 2011, cuando se provocó un incendio en un negocio. El fuego fue importante y afectó a tres naves colindantes además de a la de la víctima. Ésta declaró que mes y medio antes había tenido un conflicto con el propietario de otra nave muy cercana, que vendía, igual que él, artículos chinos, por lo que se consideraban competencia. En otra ocasión, también se había peleado con el hermano de la víctima, a quien habían hecho saber que se trataba de un ataque con intenciones monopolísticas.

El atestado policial recoge un delito de incendio, sin que conste el juzgado de instrucción del caso.

Caso C14

El caso C14 tuvo lugar en una localidad de Alicante, en el año 2014, cuando tres personas requirieron al propietario de un bazar para que cerrara su local bajo amenazas de muerte. La víctima y el principal autor eran socios al 50% de un negocio comercial, pero el autor decidió abrir un nuevo bazar por su cuenta y forzar el cierre del antiguo.

Los medios intimidatorios empleados por el extorsionador fueron rescindir unilateralmente el alquiler del local donde tenían el negocio autor y víctima, así como proferir amenazas de muerte hacia ésta. Cuando la víctima trató de establecer un diálogo con el extorsionador, su socio, en el nuevo bazar de éste, le echó de su negocio a empujones con amenazas reiteradas, tanto personales como posteriormente telefónicas, de avisar a gente para que lo matasen.

El atestado policial identifica un tipo penal de amenazas y se remiten al Juzgado de Instrucción nº 4 de Torreveja.

Caso C15

El caso C15 tuvo lugar en Barcelona en el año 2010, cuando tres personas secuestraron al hijo de la propietaria de un negocio exigiendo un el pago de 4.000 euros para ponerle en libertad, pero en realidad el secuestro consistía en una forma de presión para el pago de una deuda previa consistente en un préstamo de 2.500 euros entre uno de los secuestradores y la madre de la víctima de secuestro.

Se trata de una sentencia donde los tipos penales en juego son secuestro, obstrucción a la justicia y extorsión, con diferencias sustanciales entre el escrito de acusación del fiscal y el fallo del juez de enjuiciamiento, como se expondrá más adelante.

El único hecho probado resulta algo complejo ya que consta de diversas conductas perpetradas materialmente por cuatro personas con funciones y roles diferentes, y que en el caso de una de ellas no se pudo demostrar que conociera los hechos⁵⁴⁸ ya que únicamente transportó a la víctima y a sus secuestradores⁵⁴⁹.

⁵⁴⁸ Aunque el Ministerio Fiscal sí incluyó al cuarto sujeto como acusado de un delito de secuestro, no fue así condenado por el Juez, que argumentó que tal procesado “al cual el Ministerio Público atribuye la comisión como autor o, subsidiariamente como cómplice, del mismo delito de secuestro del que son acusados los otros tres procesados; es procedente dictar una sentencia absolutoria en favor del mismo; por cuanto, durante el acto de la vista oral no se ha acreditado que dicho acusado estuviera concertado con el resto de los acusados o tuviera conocimiento de sus acciones. Así, dicho procesado siempre ha mantenido que únicamente realizó un servicio de transporte en su vehículo, actividad a la que se dedica habitualmente dentro de la comunidad china y que en ningún momento se apercibió que el menor, al que acompañaban los otros tres procesados, lo hiciera en contra de su voluntad y que, cuando fue informado por una tercera persona, cuya existencia ha confirmado la madre del menor, llamó a ésta para informarle de lo sucedido y para decirle que él no había tenido ninguna intervención delictiva (...) Así, el Ministerio Fiscal basa su tesis acusatoria en la presunción que el procesado conocía al menor y a su madre, cuando lo que él ha admitido es que efectivamente conocía a la madre, por ser de la misma zona de China, pero siempre ha negado que conociera al niño. Tal circunstancia viene avalada por el hecho que el menor consta, por sus propias declaraciones, que hacía poco tiempo que estaba en España y aún menos tiempo en Barcelona, puesto que, antes de residir en esta localidad estuvo viviendo un tiempo en Madrid y, según el propio menor, únicamente había visto en una ocasión al procesado cuando éste saludó a su madre en un bar. Por tanto, la existencia de este contacto esporádico y único con el menor no puede implicar un conocimiento del mismo que signifique que pudiera reconocerlo el día de los hechos”.

⁵⁴⁹ Para conocer una los concretos hechos, se exponen a continuación tal como dicta la citada sentencia acerca de los tres principales autores: “de común acuerdo y actuando de forma concertada, se dirigieron al locutorio donde inicialmente (dos de ellos) abordaron al menor (hijo de la mujer que) había concertado un préstamo diciéndole al menor que tenía que llamar a su madre para decirle que le retendrían en su poder si su madre no pagaba la cantidad que adeudaba”; (...) “poco después (el principal acusado) volvió a llamar (...) diciéndole que si no le entregaba cuatro mil euros, se llevaría a su hijo. En esos momentos, se unió a los otros dos acusados (...) decidiendo los tres procesados llevarse al niño del locutorio. Para ello, le dijeron que le pegarían hasta matarle si no les hacía caso. Ante tales amenazas, el menor subió a un vehículo de color gris, cuya presencia había sido solicitada por los tres acusados, conducido por (el cuarto sujeto), el cual no consta que fuera conocedor de las intenciones de los otros acusados y que habitualmente se dedica a realizar trabajos de transporte de personas para la comunidad china”. Cuando llegaron a su destino “el menor fue custodiado por los dos individuos” (...) “siempre vigilado por el citado (acusado). Al día siguiente, (el acusado) se llevó al menor a comer a un restaurante para posteriormente regresar al piso, donde ya se encontraba (el principal acusado) el cual obligó al menor a hablar telefónicamente con su madre para que le dijera que lo estaban maltratando y pegando”. (...) “Así los tres juntos obligaron al menor a introducirse en un vehículo no identificado donde había concertado previamente, mediante contactos telefónicos, con la madre del menor la entrega del mismo a cambio de cuatro mil euros”. (...) “Durante este período de tiempo, los Mossos d'Esquadra, a raíz de la denuncia formulada por la madre del menor retenido, prepararon el correspondiente dispositivo de vigilancia que condujo a la liberación del menor”. (...) “Una vez producida la detención del citado (principal acusado), “personas del entorno familiar y de amistad del mismo, realizaron diversas llamadas telefónicas a la madre del menor retenido para instarle a que retirara la denuncia interpuesta, sin que conste acreditado que (el transportista procesado) tuviera conocimiento o hubiera ordenado la realización de tales gestiones”.

A partir de las conductas recogidas como probadas, si bien queda claro que el delito de secuestro en su modalidad agravada de víctima menor de edad, previsto en el artículo 165 del Código Penal es el tipo aplicable para los tres acusados, no resulta tan evidente la concurrencia de los delitos de obstrucción a la justicia y extorsión, pues a pesar de que el Ministerio Fiscal acusa al autor principal de tales tipos penales resultó absuelto por el fallo del Juez.

Así, este último señala en sus fundamentos de derecho que no es aplicable el tipo penal de extorsión, argumentando, en primer lugar, que no consta que el procesado haya realizado ningún acto de violencia o intimidación contra la presunta víctima, puesto que, según el relato del Fiscal, la actuación de la misma deriva de un temor subjetivo sobre la conducta del procesado en situaciones anteriores ni determinadas, ni probadas. Añade en segundo lugar, que la actuación del procesado, de nuevo según el Ministerio Público, se realiza para cobrar el importe de un préstamo previamente concertado voluntariamente con la presunta víctima, es decir, que su conducta no tiene por finalidad, como exige el citado artículo 243, “realizar u omitir un acto o negocio jurídico”. El juez insiste en que dicho negocio jurídico, concretamente, “un préstamo ya se había realizado, con anterioridad, sin ningún tipo de coacción o intimidación y lo que pretendía el procesado era el cumplimiento de las condiciones pactadas”. Por tanto, al no apreciar conducta violenta o intimidación alguna por parte del acusado ni la finalidad la realización de ningún acto o negocio jurídico, dicta un pronunciamiento absolutorio en relación con el descrito delito con respecto al acusado principal.

En cuanto al delito de obstrucción a la justicia argumenta que los hechos se cometen con posterioridad al momento de la detención policial de acusado, por lo que no puede haber cometido ningún delito de estas características de forma directa; y añade que no quedó acreditado que haya mantenido ningún tipo de comunicación con las personas que participaron directamente en los contactos con la denunciante que pretendían evitar el juicio del acusado. Por esta razón, también le absuelve del delito de obstrucción a la justicia.

De todo ello se deduce la falta de pruebas que acrediten la perpetración de los hechos y la dificultad de atribuir los delitos a cada procesado, especialmente cuando se actúa de forma concertada mediante diversos integrantes.

Además, el Ministerio Fiscal solicitó una importante medida de protección a las víctimas, relativas a la prohibición de comunicación y aproximación como pena accesoria, teniendo en cuenta la acreditada conflictividad dentro de la compacta comunidad social china donde se

ubican los cuatro procesados y las dos víctimas; solicitud que fue rechazada argumentando⁵⁵⁰ los siguientes puntos: a) que no existe vinculación familiar ni laboral que implique una relación continua entre la víctima y los acusados, b) que la víctima se encuentra en paradero desconocido y c) la larga duración de las penas privativas de libertad, todo lo cual hace concluir al Juez que no es previsible que exista una relación futura.

El caso se enjuició en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona que culminó con la SAP de 27 de noviembre de 2012.

Breve comentario sobre la respuesta jurídica

Como ha quedado patente en los quince casos de procesos extorsivos ocurridos dentro de la comunidad china, en los que conviene recordar que tanto víctimas como autores son compatriotas, los afectados generalmente tienen importantes vinculaciones relacionadas con su proceso de asentamiento, ya sea por cuestiones de transporte para llegar a España, por sus contactos con proveedores para la implantación de su negocio de bazar o restaurante, o por sus enlaces para establecerse en determinadas zonas de residencia, lo que implica normalmente que se conozcan entre ellos, o que al menos tengan conocimiento de su existencia e información personal. Se trata, por tanto, de un claro aprovechamiento de determinadas agrupaciones organizadas dentro de la comunidad, que se lucran a partir de las necesidades de financiación de sus compatriotas (a través de préstamos ilícitos), de la apertura de nuevas tiendas (solicitando pagos o exigiendo determinadas condiciones de contratación o incluso su cierre en determinadas regiones), etc. Por esta razón, se debe tener en cuenta que el fenómeno extorsivo reviste unas condiciones especiales: las víctimas expresan su miedo por las conductas de control, de venganza y de exigencia de retirar las denuncias que se producen dentro de su misma

⁵⁵⁰ Siguiendo el Juez el razonamiento que se expone: “en relación a la petición del Ministerio Fiscal sobre la imposición de penas accesorias a los acusados, relativas a prohibiciones de acercamiento y comunicación con las víctimas, la Sala estima que no es necesaria la imposición de tales penas, teniendo en cuenta, que no existe entre acusados y víctimas ningún tipo de relación de parentesco o laboral que suponga una relación continuada entre ellos y, además, se ha constatado que actualmente las referidas víctimas se hallan en paradero desconocido por lo que se ignora su lugar de residencia. Si a ello añadimos la larga duración de la pena privativa de libertad impuesta, se llega a la conclusión que no es previsible que en un futuro entre condenados y víctimas exista un ámbito de relación que haga necesario imponer las penas accesorias reclamadas por la acusación pública”.

comunidad (sin que tenga que ser necesariamente el acusado el autor material de tales conductas de presión).

En este escenario, se hace realmente difícil recabar información debido al intenso poder de intimidación de los grupos criminales, como queda reflejado en la escasa descripción de los hechos relativos a los casos de extorsión expuestos. Además, se hace especialmente relevante proceder a la protección de las víctimas, que son más vulnerables y accesibles dentro de la comunidad; comunidad que, para mayor complejidad, resulta especialmente desconocida para policías y jueces, con todas las barreras lingüísticas y culturales ya descritas en el primer apartado del presente capítulo.

BLOQUE IV: LUCHA Y PREVENCIÓN

CAPÍTULO 7. LA EXPERIENCIA ITALIANA EN LA LUCHA CONTRA LOS PROCESOS EXTORSIVOS

El complejo fenómeno que tiene por objeto la presente tesis requiere un abordaje criminológico-legal lo más completo posible. Una vez expuestos a nivel teórico los aspectos criminológicos y legales más relevantes, contextualizada y propuesta la metodología del estudio empírico, y conociendo ya los resultados hemos obtenido información relevante sobre los procesos extorsivos en España tanto del sector de la hostelería como de la comunidad china.

Como ha quedado patente a lo largo de los capítulos anteriores, las limitaciones del estudio son enormes. Entre ellas destacan la dificultad del acceso a datos, la elevada cifra oscura (casos no denunciados), la impunidad de los autores debido a las dificultades en la persecución y en la aplicación de la regulación específica tanto en materia de extorsión como en protección de comunidades y sectores concretos. En este punto resulta pertinente ampliar los conocimientos sobre el objeto de estudio para identificar las posibilidades de mejora en el ámbito legal español. Con este propósito se ha desarrollado un análisis sobre la experiencia de un país con una fuerte tradición en el crimen organizado: Italia.

El enorme e histórico arraigo de la mafia en el Sur del país durante siglos ha provocado una larga lucha por parte de organismos policiales y judiciales, lo que les ha aportado una dilatada experiencia en la actualidad en contraste con otros países como España. Ello ha permitido que actualmente Italia tenga una regulación dirigida a reprimir las actividades ilegales de la mafia, entre las que tradicionalmente se encuentra la extorsión en muy diferentes formatos.

Para conocer de forma breve el contexto de las medidas específicas contra la extorsión en Italia, resulta necesario conocer el marco criminológico y legal, que preceden al estudio de tres tipos de medidas de gran efectividad en la lucha y prevención contra los procesos extorsivos del crimen organizado: a) medidas legales como recurso específico contra las formas extorsivas de la mafia, b) medidas de protección económica y física de las víctimas que han sido extorsionadas, y c) medidas para implicar a la sociedad civil en el rechazo social de las extorsiones cometidas y la prevención de procesos extorsivos potenciales.

1. Los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada en Italia

El análisis de la respuesta italiana a los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada que se expone a continuación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los objetivos del estudio empírico⁵⁵¹. De tal manera que se centra en realizar una breve descripción histórica del contexto del país y concretamente del fenómeno de la extorsión perpetrada por la mafia. Por último, se procede a reseñar las principales características del crimen organizado chino como escenario de procesos extorsivos en Italia. Este primer apartado permitirá conocer el entorno donde se aplica el marco legal del segundo apartado.

1.1. La extorsión como actividad histórica del crimen organizado en Italia

La extorsión en Italia se considera la esencia histórica de la mafia (Grasso, 2016). El fenómeno de la extorsión surgió como respuesta a la inseguridad que presentaban ciertas regiones de sur de Italia, especialmente Sicilia, a finales del siglo XIX, donde la alta criminalidad coincidía con la incapacidad de las autoridades para mantener el orden público, lo que dio lugar al denominado sector de la protección (Gambetta, 1993). En este contexto, las organizaciones criminales encontraron una demanda de protección, especialmente a comerciantes y agricultores, que aprovecharon de forma exitosa ofreciendo servicios que correspondían con las funciones de protección propias de la policía frente a la delincuencia común.

Así, las mafias dieron respuesta a tal necesidad no sólo mediante la protección física de sus clientes, sino a través de diferentes servicios como la eliminación de competencia o el cobro de deudas con técnicas de intimidación y violencia. La tradicional extorsión de la mafia italiana consiste en una práctica sistemática de pagos a través del denominado *pizzo* a una organización criminal con control en un territorio (Gambetta, 1993). Este *pizzo* encaja en la tipología de Monzini (1993) de extorsión por protección donde se entrega una suerte de impuestos a la mafia para no sufrir daños, es decir, funciona como una garantía de seguridad frente a los peligros que se deseaban evitar.

⁵⁵¹ Gran parte de la información que se presenta se ha recogido cuidadosamente gracias al empeño y el interés de investigadores, policías, fiscales y jueces italianos en el marco del Proyecto CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión Europea.

Ocasionalmente, ese servicio de protección, como indica Gambetta (1993), es simplemente un compromiso por parte de la organización criminal de no dañar a la empresa; este compromiso se asume a cambio de que la víctima cumpla con sus obligaciones de pago. En este escenario, cuando un empresario es extorsionado impera la ley del silencio u *omertá*, una suerte de código de honor que prohíbe informar sobre los delitos que comete la mafia, y obliga a no cooperar con las autoridades policiales, judiciales o políticas. Si bien parece una suerte de compromiso mutuo, lo cierto es que el poder de la mafia puede tornarse en contra del empresario en casos de impago: el aislamiento y la soledad son empleados por la organización criminal como forma de tortura, prohibiendo a cualquier ciudadano dirigirse a él⁵⁵².

De esta manera, se extendió por el Sur de Italia un nuevo orden establecido por las organizaciones mafiosas que regulaban los mercados a través de procesos extorsivos que se prolongaron en el tiempo. Desde entonces, numerosos estudios han dado cuenta del importante impacto de la actividad del crimen organizado sobre la economía de las regiones afectadas.

Buen ejemplo de ello es la esencial aportación de datos sobre la mafia en el ámbito económico, como expone Lisciandra (2014) en su interesante estudio: realiza estimaciones de los ingresos procedentes de la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada en Italia situando la cifra total entre los 2.700 y los 7.700 millones de euros anuales⁵⁵³. Además, analiza los sectores más afectados por este fenómeno, donde el comercio, tanto mayorista como minorista, es el ámbito más significativo: genera unos ingresos estimados para la mafia de entre 1.300 y 2.400 millones de euros⁵⁵⁴.

En esta línea, otros dos estudios ponen de manifiesto que tal impacto no se centra sólo en las víctimas directas, sino que repercute de forma generalizada en la región.

⁵⁵² Llegando a casos en los que una víctima de la extorsión que se resiste a pagar o que no puede aportar más pagos, es eliminada de la población, de manera que nadie puede interactuar con esa persona, ni siquiera puede consumir una bebida en una cafetería porque nadie le atiende, por orden de la mafia; estos incidentes continúan dándose hoy en día (Cozzi, 2016).

⁵⁵³ También desarrolla un interesante desglose por regiones que le permite concluir que las zonas más afectadas por la extorsión del crimen organizado son aquellas con presencia histórica de la mafia. Esta interesante cuestión supera los objetivos del presente capítulo, pero resalta el valor añadido del análisis geográfico y económico.

⁵⁵⁴ De nuevo, el estudio pormenorizado de los sectores afectados supera los intereses del apartado, pero lo relevante del análisis se orienta hacia el enfoque económico en materia de sectores empresariales afectados por la extorsión.

En su estudio, Barone y Narciso (2013) analizaron los daños económicos del crimen organizado centrándose en el impacto que produce su actividad en una determinada región. Los autores exponen las extorsiones son una fuente importante de financiación para la mafia, y que también son capaces de absorber ayudas económicas provenientes de las instituciones públicas italianas. Así, se lucran ilegalmente también del gasto público en materia de políticas orientadas a favorecer el crecimiento económico de determinadas zonas geográficas empobrecidas por la actividad de la mafia, a través de empresas ficticias que crean con la única intención de recibir tales ayudas públicas. Estos fondos de promoción del crecimiento económico se convierten en mecanismos de financiación del crimen organizado y facilitadores de la corrupción.

El estudio de Capuano y Purificato (2012) exponen el impacto macroeconómico del crimen organizado dentro de un país. Según los autores, la presencia del crimen organizado tiende a reducir la capacidad económica de una región, absorbiendo los recursos mediante prácticas delictivas como la extorsión. Desde esta perspectiva, la consecuencia última es que el crimen organizado tiende a influir negativamente en la actividad económica en la medida en la que los ingresos obtenidos del sector legal no son reinvertidos en el mismo sector. Los autores añaden un importante dato económico: la Camorra, la Cosa Nostra, 'Ndrangheta y la Sacra Corona Unita tienen más reservas de efectivo que cualquier banco del país: estos grupos de crimen organizado se embolsan más de 120 billones de euros anualmente, lo que supone más del 7% del PIB italiano gracias a actividades de extorsión, tráfico ilegal de bienes, corrupción y blanqueo de capitales.

Actualmente, la Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en Campania⁵⁵⁵, la 'Ndrangheta en Calabria son las principales mafias italianas y continúan muy activas, (Capuano y Purificato 2012; Giménez-Salinas, 2012) las cuales se dedican, entre otras actividades, a la extorsión de empresas⁵⁵⁶.

⁵⁵⁵ Especialmente en la ciudad de Nápoles.

⁵⁵⁶ Esto es especialmente relevante en el escenario español, tal como ocurre en el primer caso de hostelería descrito en el quinto capítulo de la presente tesis (H1) y Giménez-Salinas (2013), explicando ambos una habilidad especial por parte de la mafia italiana de infiltrarse sigilosamente en los negocios de restauración de tipo pizzería dentro de nuestro territorio.

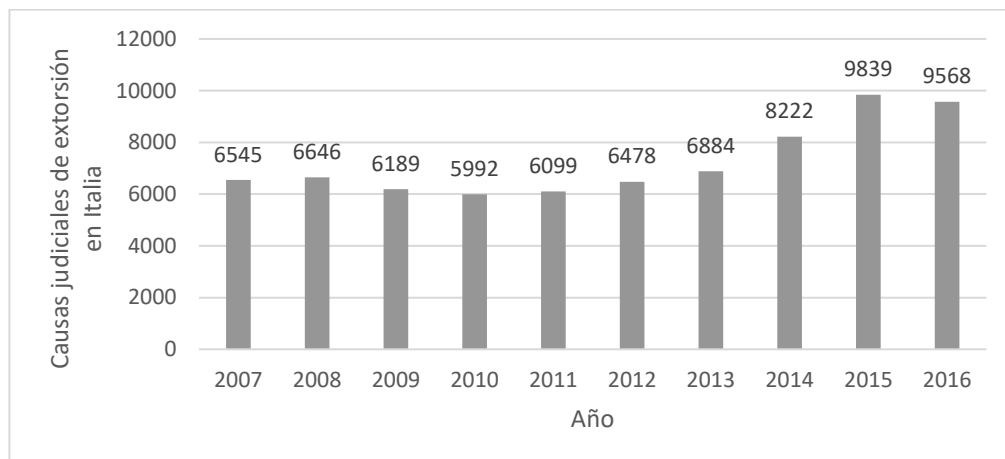
1.2. Los datos sobre las extorsiones mafiosas en Italia

Lo cierto es que el protagonismo de la extorsión de la mafia a lo largo de la historia reciente de Italia ha permitido al país desarrollar medidas centradas en la lucha contra este fenómeno, que incluye la recolección de datos estadísticos y toda una gama de medidas de corte legal, policial y judicial⁵⁵⁷.

La importancia de contar con abundantes datos oficiales radica en la posibilidad de realizar informes y estudios que aporten un amplio conocimiento del fenómeno y permitan desarrollar toda una serie de medidas adaptadas a su compleja realidad.

Así, concretamente el ISTAT (Italian National Statistics Institute)⁵⁵⁸ aporta datos de gran interés para el estudio de las extorsiones en Italia. Como muestra la siguiente tabla, las instituciones judiciales italianas reciben entre 6.000 y 9.500 casos anualmente⁵⁵⁹.

Ilustración 11. Número anual de causas judiciales por delito de extorsión entre 2007 y 2016 en Italia.



Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT, 2017).

⁵⁵⁷ Expuestas en el segundo apartado: el marco legal italiano.

⁵⁵⁸ Podría considerarse algo parecido al español INE (Instituto Nacional de Estadística).

⁵⁵⁹ Cifras muy diferentes a las españolas, que rondaban los 90 casos anuales, tal como muestra el apartado 1.1. del capítulo tercero de la presente tesis.

Además, este centro de estadística ofrece los datos judiciales sobre extorsiones y aporta información sobre las personas condenadas en Italia, que superan los 2000 sujetos anualmente⁵⁶⁰, como muestra la siguiente tabla.

Tabla 19. Número de condenados por extorsión entre 2010 y 2012 en Italia.

	2010	2011	2012
Personas condenadas	2492	2457	2267

Fuente: elaboración propia con datos del ISTAT (2017).

En cualquier caso, es evidente que existe una mayor incidencia de procesos extorsivos en Italia que en España⁵⁶¹.

Debido a la ya comentada elevada cifra oscura, resulta de especial utilidad la implementación de encuestas de victimización. Así, Transcrime (2013) aporta un dato muy llamativo en su estudio de victimización de empresas a nivel nacional: aproximadamente el 30% de los empresarios ubicados en el sur de Italia son víctimas de extorsión, de los cuales, más del 70% no denunciaron ante la policía.

Si bien cabe pensar que estos procesos extorsivos a empresas en Italia están perpetrados en su mayor parte por mafias italianas, lo cierto es que actualmente estas prácticas están emergiendo en el seno de comunidades extranjeras asentadas en el territorio, como es el caso de las comunidades chinas (Rusev et cols., 2016), expuesto a continuación.

1.3. Nuevo escenario de extorsiones: la comunidad china en Italia

De forma similar a lo expuesto sobre el contexto de los procesos extorsivos en la comunidad china asentada en España⁵⁶², es importante conocer dos aspectos básicos: en primer lugar, caracterizar a la comunidad china asentada en Italia para dibujar un escenario de acción,

⁵⁶⁰ En contraste con las menos de 250 personas detenidas de los datos policiales españoles señaladas en el apartado 1.1. del capítulo tercero.

⁵⁶¹ En comparación con las cifras españolas del primer apartado del tercer capítulo.

⁵⁶² Recogido en el primer apartado del capítulo sexto de la presente tesis.

y, en segundo lugar, exponer el crimen organizado chino y sus formas de extorsión; ambas se abordan brevemente a continuación.

1.3. a) La comunidad china en Italia

Actualmente, la mayor parte de los residentes chinos en Italia provienen de Zhejiang, Fujian y Liaoning; se trata de una emigración familiar que tiende a quedarse en el país de destino a medio y largo plazo. Además, es una población joven⁵⁶³ que cuenta con una formación universitaria en claro crecimiento.

El asentamiento de la migración china en Italia se ha producido de forma creciente y estratégica; cifrándose en 185.800 personas en el año 2012 (Istat, 2018) y en 256.800 personas en 2014 (Eurostat, 2015). La mayoría de ellos proceden de las zonas de Wenzhou y Qingtian, ambas en la provincia de Zhejiang, y su asentamiento se ha realizado de forma concentrada en Milán y Prato⁵⁶⁴:

- La mayor comunidad china de Italia se encuentra en Milán⁵⁶⁵, y se concentra en torno a la vía Paolo Sarpi, lo que denominan la “Chinatown”, que se caracteriza por el gran número de restaurantes chinos que ha sabido evolucionar en función de la demanda de los clientes, reorientando, por ejemplo, sus productos asiáticos hacia el sushi y el sashimi (Aricó, 2016).
- Por su parte, Prato es una ciudad productora del sector textil que cuenta con 5.200 empresas chinas (Mundula, 2016)⁵⁶⁶. El 7% de la población de Prato es china⁵⁶⁷: se trata de una comunidad numerosa que se concentra de forma específica en determinados barrios, y padece un alto grado de aislamiento social (Becucci, 2016).

Los grandes asentamientos de empresarios suponen una interesante oportunidad para el crimen organizado chino, que ve en sus compatriotas una forma fácil de enriquecimiento

⁵⁶³ De unos 29 años de media, muy parecida a la asentada en España.

⁵⁶⁴ Son las dos ciudades con mayores asentamientos, aunque también Florencia, Turín, Venecia y Nápoles albergan grandes conjuntos de población china.

⁵⁶⁵ Es la tercera mayor población china de Europa, después de Londres y París, según los datos de Eurostat.

⁵⁶⁶ Este autor añade un interesante dato: dice que hay mayor cantidad de residentes chinos que los recogidos legalmente, en total unos 30.000.

⁵⁶⁷ El 48% de su población es extranjera.

vinculado, entre otros fenómenos, a los procesos extorsivos. Ahora bien, para analizar los procesos extorsivos dentro de la comunidad china en Italia, conviene conocer primero las características principales de su forma de asentamiento. Brigadoi (2016) identifica tres etapas en el modo en que se estableció la inmigración china en Italia⁵⁶⁸.

- En un primer momento, en la década de los 90, los chinos se dedicaron al sector textil y de restauración en el norte y centro del país. En este punto comienzan a surgir oportunidades legales e ilegales de realizar negocios con la migración en masa a través de cadenas de confianza de China a Italia.
- En una segunda fase, hasta mediados de la década de los 2000, los empresarios chinos ampliaron sus actividades económicas incluyendo servicios prestados dentro de la comunidad de compatriotas y al abastecimiento de comercios y de vendedores ambulantes. Esta etapa se caracteriza por tres problemáticas: a) se victimiza a empresas con trabajadores ilegales que, por el miedo a represalias ante la denuncia, deciden someterse a la organización criminal china; b) comienza a producirse el fenómeno de las bandas juveniles chinas, que son grupos con bajo nivel de organización que pretenden controlar determinadas zonas; y c) la Camorra y la Cosa Nostra tratan de ampliar su ámbito de victimización mediante procesos extorsivos contra empresas chinas; estas mafias italianas son de una gran eficacia en la aplicación de sus mecanismos de intimidación a los dueños de negocios chinos.
- Por último, la tercera etapa perdura hasta la actualidad y se sitúa en un contexto de crisis económica: el sector servicios reduce sus beneficios y se pierde confianza en el mercado. Las organizaciones criminales chinas aprovechan esta situación vulnerable para extorsionar a las empresas dedicadas a actividades de servicios: en concreto, exportación, importación y falsificación. En este punto se implementan procesos extorsivos camuflados bajo la forma de venta de servicios, lo que se puede considerar una suerte de extorsión de tipo monopolístico con cierto control territorial.

⁵⁶⁸ Las etapas del asentamiento chino en España están descritas en el primer apartado del sexto capítulo de la presente tesis.

1.3. b) La extorsión del crimen organizado chino en Italia

El crimen organizado chino presenta unas características específicas⁵⁶⁹ y su eficaz asentamiento en Italia le ha permitido dedicarse a la extorsión de los negocios de sus compatriotas, al tráfico de seres humanos para explotación laboral, a la prostitución⁵⁷⁰, a la adquisición de empresas manufactureras con el fin de producir mercancías falsificadas, a las casas de juego, a la usura, a la importación ilegal de productos electrónicos y al tráfico de drogas (DIA⁵⁷¹, 2013a, 2013b, 2014).

Existen importantes asociaciones criminales chinas dedicada a organizar fiestas, alquiler de salones y venta de droga (Aricó, 2016): cuando estos grupos extorsionan a sus compatriotas que son propietarios de negocios, suelen pedir una cantidad mínima (entre 300 y 500 euros al mes) y las víctimas suelen acceder, especialmente si tienen una posición legal poco clara porque utilizan a trabajadores clandestinos u obtienen beneficios que no declaran. Así, existe una enorme limitación para denunciar las extorsiones en los negocios victimizados que giran en torno a la economía sumergida.

Lo cierto es que las extorsiones del crimen organizado chino se concentran en grandes áreas urbanas (Transcrime, 2009; Becucci, 2015); siendo el juego, la droga y el sexo los tres elementos fundamentales sobre los que pivotan sus principales actividades en Italia. También lo son, aunque en menor medida, el fraude en el reciclaje y las falsificaciones (Aricó, 2016).

Un interesante *modus operandi* identificado consiste en que uno de los delincuentes va a un local y se hace el ofendido, debido a lo cual pide una indemnización al supuesto ofensor, que debe subsanar la ofensa pagándole. Este mecanismo lleva aparejada una protección para el extorsionador frente a la denuncia de la víctima, pues da al pago una apariencia de legalidad muy difícil de negar, que incrementa la eficacia de la organización y mejora su impunidad. Al final, se paga una especie de “tasa ilegal mensual para vivir tranquilo”, que no es una cantidad periódica exacta, si no que más bien se adapta a las necesidades de los criminales jóvenes (Aricó, 2016).

⁵⁶⁹ Como ya se ha expuesto de forma pormenorizada en el apartado 1.3. del capítulo sexto de la presente tesis, específicamente sobre el crimen organizado chino.

⁵⁷⁰ Los servicios de prostitución están dirigidos tanto a compatriotas (prostíbulos ilegales en pisos) como a clientes italianos (en falsos salones de masajes).

⁵⁷¹ D.I.A. procede de las siglas “Dirección de la Investigación Antimafia”, que es una institución judicial encargada específicamente del crimen organizado, tal como se expone en el segundo apartado del presente capítulo, en el marco legal de la experiencia italiana en la lucha contra los procesos extorsivos.

2. Marco legal

Conocidos algunos datos básicos sobre las extorsiones en Italia, resulta de interés conocer también el marco legal aplicable, es decir, las respuestas penales ante incidentes extorsivos de la mafia, las medidas policiales y judiciales implementadas en este ámbito, así como otro tipo de respuestas dentro del marco legal⁵⁷².

2.1. Respuestas penales y normativa aplicable

La lucha contra la mafia italiana no es reciente, y tras importantes juicios contra miembros de organizaciones criminales en los 80, el Parlamento italiano aprobó el 20 de octubre de 1990 la Ley 302/1990, de “Normas en favor de las víctimas del terrorismo y el crimen organizado”. Esta ley denota una clara intención de proteger a las víctimas, resultado de la experiencia policial y judicial previa. Pero un año después de aprobarse esta ley específica, un conocido empresario llamado Libero Grassi fue asesinado por su resistencia frente a la mafia y por negarse públicamente, incluso ante los medios de comunicación, a pagar a la mafia parte de sus ingresos por su protección. Su asesinato tuvo un fuerte impacto en la sociedad italiana⁵⁷³ y la Confindustria⁵⁷⁴ se comenzó a personar como parte en los todos los juicios de procesos extorsivos perpetrados por la mafia⁵⁷⁵. En este contexto, queda patente la fuerte vinculación entre la extorsión de la mafia y las empresas como objetivo de tales procesos.

A partir de entonces, se han ido desarrollando normas y medidas de protección específicas, no sólo dirigidas contra el crimen organizado sino especialmente destinadas a la lucha contra los procesos de extorsión. Concretamente, la perspectiva de protección a las víctimas de extorsión llevó en 1992 a promulgar la primera norma en la materia: la Ley 172/1992,

⁵⁷² Este apartado no hubiera sido posible sin el amparo del proyecto de investigación CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión Europea; gracias a la implicación de los investigadores y colaboradores italianos se pudo desarrollar una importante tarea documental a través de informes y seminarios especialmente orientados a esta materia y permitiendo a investigadores y policías españoles conocer sus resultados.

⁵⁷³ También tuvo efectos a nivel supranacional, llegando el Parlamento Europeo a aprobar el 12 de septiembre de 1991 la Resolución sobre el asesinato a manos de la Mafia del empresario Libero Grassi en Palermo.

⁵⁷⁴ Lo que se traduce como la Asociación Nacional de la Industria Italiana.

⁵⁷⁵ Así lo exponen Sciandra y Iafano (2016) en el informe “Contrasto all’estorsione organizzata: l’esperienza italiana”.

aprobada el 18 de febrero de 1992, por la que se transforma el decreto-ley 419/1991 sobre la creación del Fondo de Solidaridad para las víctimas de extorsión.

Actualmente, el delito de extorsión está definido en el artículo 629 del Código Penal italiano: *“toda persona que, con violencia o amenaza, forzase a otra persona a hacer o abstenerse de hacer algo que conlleve un enriquecimiento ilícito para el autor o para otra persona y cause pérdidas a otras, será condenada a la pena de prisión de entre 5 y 10 años y multa de 1.000 a 4.000 euros”*.

Por tanto, los tres elementos esenciales del tipo penal son a) el empleo de la violencia o la amenaza de esta, b) el beneficio ilícito para el autor, c) la pérdida económica para la víctima (Sciandra y Iafano, 2016).

Ahora bien, en Italia se contempla la consideración de este delito de una forma específica si se comete bajo unas determinadas circunstancias agravantes, recogidas en dos artículos de dos leyes diferentes que incrementan la pena:

- En el artículo 7 de la Ley 575/1965 de Normativa contra la Mafia, si el sujeto activo del delito de extorsión es una persona sujeta a las medidas preventivas antimafia.
- En el artículo 3.1 de la Ley 203/1991 de Medidas urgentes relativas a la lucha contra el crimen organizado y a la transparencia y buena actuación de la actividad administrativa, se aplica cuando el delito en cuestión se comete para facilitar actividades del crimen organizado.

Se trata por tanto del incremento de la pena como medida penal de lucha contra el crimen organizado, que contempla expresamente el *delito sistemático de extorsión*, o lo que criminológicamente puede referirse como proceso extorsivo; esta especificidad implica la comisión reiterada de incidentes extorsivos en el escenario de la delincuencia organizada.

2.2. Investigación y persecución desde las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad

Es relevante conocer los recursos específicos con los que cuenta Italia en la lucha contra los procesos extorsivos del crimen organizado, en los que la coordinación y la efectividad son esenciales.

2.2. a) Investigación policial

El organismo dedicado a la investigación de los procesos extorsivos de la mafia es la D.I.A. (Dirección de Investigación Antimafia), que está regulado por el Decreto legislativo 345/1991 de Disposiciones urgentes para la Coordinación de actividades de Información e Investigación en la Lucha contra el Crimen Organizado. Una de sus principales funciones es “mitigar la rivalidad entre los tres principales organismos italianos que componen las fuerzas y cuerpos de seguridad”⁵⁷⁶: la Policía Nacional, los Carabinieri y la Policía Financiera. Consecuentemente, está especialmente vinculado a labores de inteligencia, pues se ocupa de la recopilación de información y realización de investigaciones sobre actividades y organizaciones criminales, entre las que se encuentra la extorsión. La D.I.A., además de ser socio de la Unidad Nacional de Europol, es miembro del Grupo de Trabajo de Expertos para la Lucha contra el Crimen Organizado de la Europa del Este y la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF).

En esta línea de coordinación de fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra el crimen organizado, Italia cuenta con el Consejo General para la Lucha Contra el Crimen Organizado, presidido por el Ministerio de Interior, e integrado por el Director General de Seguridad Pública, el Comandante General de los Carabinieri, el Comandante General de la Policía Financiera, los directores de los servicios de inteligencia y el director de la Dirección de la D.I.A. Este Consejo además se ocupa de identificar los recursos, métodos y medios técnicos que las labores de prevención e investigación requieren en el contexto de la lucha contra la mafia. Lo especialmente interesante de este organismo es que realiza un seguimiento de sus propias funciones, comparando los resultados logrados con las metas estratégicas fijadas para identificar las necesidades de corrección que presenta el sistema (Sciandra y Iafano, 2016).

⁵⁷⁶ Así expresado por Sciandra y Iafano (2016, p.9)

Italia ha creado una figura específica para coordinar las actividades de lucha contra la extorsión de la mafia a nivel nacional: el *Comisario Especial para la coordinación de iniciativas antiextorsión*. Además, tiene una interesante tarea como miembro del Comité de solidaridad con las víctimas de la extorsión y la usura, ente que se describe en el siguiente apartado. Se trata de un especial esfuerzo en la represión de una actividad criminal que afecta gravemente no sólo a las víctimas directas, sino también a las actividades económicas y a la seguridad nacional.

2.2. b) Grupos especializados

Cada cuerpo policial cuenta con grupos o unidades especializadas desde las que se combate la extorsión como actividad del crimen organizado⁵⁷⁷:

En los Carabinieri se encuentra el Grupo de Operaciones Especiales (ROS), mientras que la Policía Financiera cuenta con un Servicio Central de Investigación del Crimen Organizado (SCICO). Ambos tienen competencias de investigación en materia de crimen organizado. Por su parte, la Policía Nacional cuenta con un Departamento Central Anticrimen para coordinar labores de prevención y control, que cuenta con una importante estructura con tres unidades principales: el Servicio Central Operativo, el Servicio de Control Territorial y la Policía Científica.

Las tres unidades policiales específicas son: el Servicio de Control Territorial de la Policía Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales de los Carabinieri y el Servicio Central de Investigación del Crimen Organizado de la Policía Financiera, que colaboran con la D.I.A. en tareas de prevención contra organizaciones mafiosas.

Por último, la Dirección Central de la Policía Criminal es un organismo dedicado a prestar apoyo a los cuerpos policiales. Se trata de una figura que coordina labores destacables dentro de la policía (además de otras instituciones) y a la coordinación operativa entre los cuerpos policiales entre sí (Policía Nacional, los Carabinieri, la Policía Financiera) junto con la D.I.A. Además, desarrolla importantes actividades como son la recopilación de información e inteligencia, la prestación y ampliación del apoyo científico y técnico a los agentes de policía y a los jueces, la coordinación de las medidas de protección para testigos y colaboradores de la justicia y la cooperación internacional.

⁵⁷⁷ Para conocer más en profundidad las funciones y estructuras que se señalan a continuación, se recomienda la lectura de Sciandra y Iafano (2016).

Como se desprende de este apartado, Italia dedica esfuerzos policiales de forma específica a la lucha contra el crimen organizado y a sus actividades destacadas como la extorsión; labor que incluye coordinar a las entidades policiales tanto a nivel operativo, como de investigación e inteligencia. Además, es reseñable la existencia de entes que conectan a las fuerzas del orden con otro tipo de entidades relacionadas con las víctimas y con el sistema judicial.

2.3. Investigación y enjuiciamiento desde el sistema judicial

El protagonismo⁵⁷⁸ de la especialización en la investigación y lucha contra el crimen organizado en Italia corresponde a la D.N.A. (Dirección Nacional Antimafia), el equivalente judicial a la D.I.A.⁵⁷⁹. Creado por el Decreto legislativo 367/1991 en materia de Coordinación de investigaciones en los procedimientos relativos a delitos relacionados con el crimen organizado⁵⁸⁰, se trata de un organismo formado por fiscales especializados y dirigido por el Fiscal Nacional Antimafia. Sus principales labores radican en recabar información y supervisar la recopilación de pruebas, además de coordinar las 27 Direcciones de Distrito Antimafia y tratar de armonizar los métodos judiciales en busca de las prácticas más efectivas en la lucha contra el crimen organizado.

Ahora bien, la D.N.A. no tiene competencia para iniciar investigaciones ni proponer medidas cautelares como, por ejemplo, embargo de activos, ni para ordenar la intervención de las comunicaciones. La gran utilidad de este organismo radica en la búsqueda de efectividad, como queda patente a través de dos servicios específicos que se presentan a continuación⁵⁸¹:

- El Servicio de Estudio y Documentación de la D.N.A. tiene encomendadas las tareas de recopilar y analizar información sobre crimen organizado; entre otras materias, considera de un interés especial la infiltración de la mafia en las contrataciones públicas. Gracias a ello, y junto con la Autoridad para la Supervisión de las Obras Públicas en Curso, tiene el

⁵⁷⁸ Se ha tomado en cuenta el propósito último del presente apartado, puesto que una revisión completa de los procedimientos de instrucción y enjuiciamiento italiano superaba los objetivos del capítulo.

⁵⁷⁹ Así lo exponen Sciandra y Iafano (2016).

⁵⁸⁰ Posteriormente desarrollado por la Ley 8/1992.

⁵⁸¹ Para una revisión más completa de la materia, se recomienda la lectura de Sciandra y Iafano (2016).

propósito de desarrollar banderas rojas (*bandierine rosse o red flag*⁵⁸²) para detectar posibles infiltraciones del crimen organizado en dichas contrataciones. Se debe tener en cuenta que la corrupción política y económica son elementos clave en la propagación de la extorsión (Morada, 2016), por lo que este tipo de medidas son claramente efectivas en tanto que persiguen el ánimo de lucro, parte esencial de los objetivos de la mafia.

- El Servicio de Cooperación Internacional de la D.N.A. es una unidad compuesta por fiscales que actúan como punto central de contacto en la Red Judicial Europea (RJE)⁵⁸³. Por lo que respecta a los delitos relacionados con la mafia, la DNA actúa como “punto central de contacto” de la RJE en Italia.

Lo cierto es que uno de los factores más efectivos en la lucha contra el crimen organizado es el uso de investigaciones económicas y financieras especializadas para el desmantelamiento de organizaciones criminales (Sciandra y Iafano, 2016).

3. Medidas específicas contra la extorsión del crimen organizado

Es de especial interés para el objeto de la investigación de la tesis que se presenta conocer las estrategias legales de lucha y prevención, pero también las respuestas dadas para la protección de la víctima y las medidas de prevención en la sociedad. Se trata, por tanto, de un triple enfoque: el crimen organizado dedicado a la extorsión es un objetivo de la represión, pero también las víctimas directamente afectadas son objeto de protección y, además, el conjunto de la sociedad debe implicarse para condenar los abusos de la mafia y prevenir el fenómeno.

⁵⁸² Se trata de indicadores de movimientos sospechosos o actividades de especial riesgo, que pueden poner en marcha protocolos de investigación preventivos o de actuación reactiva ante determinadas actuaciones empresariales o institucionales.

⁵⁸³ La Red Judicial Europea en materia penal (<http://www.ejn-crimjust.europa.eu>) es una red de puntos de contacto nacionales para facilitar la cooperación judicial en materia penal. La RJE se creó a través de la Acción Común 98/428 JAI, de 29 de junio, para dar cumplimiento a la recomendación del Plan de Acción para Luchar contra la Delincuencia Organizada adoptado por el Consejo del 28 de abril de 1997.

3.1. Medidas legales específicas en la lucha contra la extorsión

Existen interesantes medidas de lucha y prevención empleadas por las autoridades policiales y judiciales italianas contra diversas actividades del crimen organizado que se regulan tanto en España como en Italia. Por ejemplo, el programa de protección de testigos⁵⁸⁴, la interceptación legal de las comunicaciones⁵⁸⁵, el agente encubierto⁵⁸⁶ o la incautación de bienes⁵⁸⁷, todos ellos aplicables en casos de crimen organizado en ambos países con sus propias normativas aplicables.

Además, existen determinadas respuestas específicas que se aplican con el fin de paliar el fuerte impacto que los procesos extorsivos de la mafia causan en Italia. Se trata de herramientas legales ausentes en nuestra regulación para dar apoyo a las autoridades policiales y judiciales, y pueden ser consideradas como buenas prácticas debido a su aplicabilidad y eficacia⁵⁸⁸.

3.1. a) Colaboradores de la justicia

Existen determinadas medidas de protección para aquellos que colaboran con la Justicia específicamente en materia de secuestros extorsivos, reguladas en la Ley 82/1991, Transformación en Ley, con modificaciones, del Decreto Legislativo 8/1991, de 15 de enero, que incluye nuevas medidas sobre secuestros extorsivos económicos y para la protección de aquellos que colaboran con el sistema de justicia⁵⁸⁹. Son medidas de protección y de asistencia financiera

⁵⁸⁴ En España regulado mediante la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales

⁵⁸⁵ Regulada en España en el artículo 588 ter a de la LECrim, y en Italia dentro del artículos 266 a 271 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

⁵⁸⁶ En el caso español, recogido en el artículo 282 bis LECrim, y en el italiano en el artículo 9 de la Ley 146/2006, de Ratificación y aplicación del Convenio y Protocolos del Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General el 15 de noviembre de 2000 y el 31 de mayo de 2001.

⁵⁸⁷ Aplicables en esta materia son en España el artículo 127, 128 el Código Penal (el 374 sólo sobre tráfico de drogas), en Italia el artículo 416 bis sobre decomiso, y 240 sobre confiscación del Código Penal Italiano. Concretamente sobre el decomiso de bienes por delitos cometidos en el seno de una organización criminal, se encuentra en el artículo 127 bis.r).

⁵⁸⁸ Aunque su encaje en el ordenamiento jurídico español sea debatible, o cuando menos, diferente al italiano.

⁵⁸⁹ Modificada por la Ley 45/2001, *por la que se modifican las reglas de protección y tratamiento de las sanciones contra aquellos que colaboran con el sistema judicial, así como disposiciones relativas a los testigos.*

para personas que han delinquido en el seno de una organización criminal y sus familiares frente a otros miembros del crimen organizado, aplicables de forma extraordinaria siempre que decidan colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con los fiscales aportando información útil para las investigaciones. Su regulación contempla medidas de tres tipos: personales, económicas y judiciales, que se articulan a través de un acuerdo con el Estado.

Los colaboradores de la justicia han demostrado ser el factor más efectivo e importante de la lucha contra la mafia en Italia⁵⁹⁰ y la regulación específica sobre determinados procesos extorsivos responde a la necesidad de mejorar la eficacia de la lucha policial y judicial.

3.1. b) Interceptaciones preventivas

El artículo 226 del Reglamento de aplicación del Código de Enjuiciamiento Criminal italiano permite las interceptaciones preventivas exclusivamente en las investigaciones de crimen organizado y terrorismo. Se trata de una técnica especial de investigación que consiste en la interceptación de las comunicaciones entre integrantes de una organización criminal o terrorista con el propósito de obtener información útil para impedir la comisión de delitos graves.

Esta información en ningún caso puede ser considerada como prueba en un juicio, ahora bien, puede ser utilizada para el comienzo de nuevas investigaciones⁵⁹¹.

⁵⁹⁰ Sciandra y Iafano (2016) afirman de manera contundente esta idea.

⁵⁹¹ Sin que se aplique la denominada en España *doctrina fruto del árbol envenenado*, que “supone el establecimiento o determinación de un enlace jurídico entre una prueba y otra, de tal manera que, declarada la nulidad de la primera, se produce en la segunda una conexión que impide que pueda ser tenida en consideración por el Tribunal sentenciador a los efectos de enervar la presunción de inocencia del acusado”, según las SSTs de 22 de abril de 2011, y de 30 de septiembre de 2011; ni sería de aplicación el artículo 11.1 LOPJ: “*en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales*”; puesto que la normativa italiana permite recabar tal información de manera legal a través de la interceptación de las comunicaciones.

Ahora bien, en España existe una excepción: el artículo 579.3 LECrim, que permite en caso de urgencia y en supuestos de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas; tal intervención deberá ser ordenada por el Ministerio del Interior o en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad.

3.1. c) El agente encubierto

El artículo 8 de la Ley 136/2010, reguladora de un Plan extraordinario contra la Mafia, así como de la delegación en favor del gobierno de la legislación antimafia permite específicamente a los agentes encubiertos investigar los delitos de extorsión, usura, secuestro extorsivo económico y falsificación. Además, su regulación permite a los agentes encubiertos cometer determinados delitos de manera impune: el blanqueo de capitales, el empleo de dinero, bienes o beneficios de origen ilícito, delitos contra la libertad de las personas, delitos relativos a la posesión, uso y tráfico de armas, municiones y explosivos, la ocultación de colaboradores y socios de los grupos delictivos y la adquisición de drogas.

La autorización de estas operaciones encubiertas está a cargo de los más altos responsables policiales, que deberán informar al fiscal detalladamente, quien, por su parte, puede proponer embargos de bienes ilegales y detenciones de delincuentes si esto fuera solicitado por la policía.

3.1. d) Confiscación de bienes previa a la condena

El Decreto Legislativo 159/2011 contiene el Código Antimafia: la recopilación organizada de todas las leyes y herramientas legislativas en la lucha contra la delincuencia organizada y los activos ilícitos. En sus artículos 20 y 24 regula el embargo y la confiscación respectivamente, cuando el valor de los activos resulte desproporcionado en relación con los ingresos declarados y las actividades económicas realizadas y cuando las pruebas existentes sugieran que proceden de actividades ilegales.

La confiscación de bienes previa a la condena se produce siempre que se tenga conocimiento de la participación funcional del sujeto en las actividades de la organización criminal. Así, esta regulación trata de separar las medidas cautelares del procedimiento penal, desarrollando respuestas que atacan prioritariamente los activos de la organización criminal, en lugar de centrarse en sus miembros⁵⁹².

⁵⁹² En España no se permite la incautación de bienes previos a la condena por casos de extorsión ni crimen organizado. Ahora bien, existen supuestos donde es aplicable: los supuestos de decomiso recogidos en el artículo 127 del Código Penal, que no guarda relación con la lucha contra el crimen organizado, pues establece como criterios: *“cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los siguientes supuestos: a) Que el sujeto haya fallecido o sufra una*

3.1. e) Reutilización social de los activos confiscados

La Ley 109/1996 sobre Disposiciones relativas a la gestión y asignación de activos embargados o confiscados permite a las autoridades italianas la reutilización de los activos confiscados a las organizaciones criminales para compensar a las comunidades afectadas por sus actividades ilícitas⁵⁹³.

El organismo que gestiona, mantiene y transfiere a las comunidades pertinentes estos activos es la Agencia Nacional para los Activos Embargados y Confiscados al Crimen Organizado (ANBSC). Además, supervisa el uso del activo durante el primer año después de su asignación, llegando a tener la facultad de revocar la asignación de este si no ha sido utilizado para los fines acordados.

Se trata de una medida no sólo económica, sino con un gran peso simbólico, que hace partícipe a la sociedad de la efectividad de las investigaciones policiales y judiciales.

3.2. La protección económica y física de las víctimas

En este contexto de lucha contra el crimen organizado y medidas específicas contra la extorsión, son destacables dos buenas prácticas italianas: el apoyo económico y la salvaguarda física de la víctima y su familia. Se trata de dos medidas de protección esenciales en un entorno de procesos extorsivos de larga duración perpetrados por organizaciones con control territorial⁵⁹⁴, escenario que crea una serie de necesidades en las víctimas que afectan tanto al ámbito físico como al económico.

enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos, b) Se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos puedan ser enjuiciados dentro de un plazo razonable, o c) No se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido". También se permite en determinados supuestos de contrabando, bajo los mismos criterios del artículo 127, en el quinto apartado del artículo 5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de la represión del contrabando, tras la modificación sufrida, gracias a su modificación a través de la LO 6/2011, de 30 de junio.

⁵⁹³ A diferencia de otros países europeos, España sólo prevé la reutilización social de activos en caso de procedimientos penales en materia de drogas: tráfico de drogas y blanqueo de capitales por tal actividad, a través de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

⁵⁹⁴ Tal como se ha explicado, aunque de forma breve, en el primer apartado del presente capítulo.

3.2. a) El Fondo de solidaridad con las víctimas del crimen organizado, la extorsión y la usura

El Decreto Legislativo 225/2010 regulador de la Prórroga de los plazos establecidos por las leyes y de medidas urgentes en materia de impuestos y apoyo a los negocios y familias se creó en Italia a través de la fusión de fondos de solidaridad previos, tales como el fondo para las víctimas de actividades criminales de la mafia y el fondo para las víctimas de la usura y la extorsión. Lo cierto es que, a pesar de esta fusión legal, los comités que están a cargo de los fondos siguen manteniendo la división inicial, aunque llama la atención que en su configuración están implicadas muy diversas entidades públicas:

- El Comité de solidaridad con las víctimas de delitos de la mafia está compuesto por seis miembros. Cinco miembros representan a cada uno de los siguientes Departamentos Ministeriales: Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo, Salud y Políticas Sociales. También tiene un representante de la Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, es una entidad que presta servicios y actividades de interés público, entre las que se encuentran los seguros públicos).
- El Comité de solidaridad con las víctimas de la extorsión y la usura se compone de nueve miembros: un representante del Ministerio de Desarrollo Económico, uno del Ministerio de Economía y Finanzas, uno de la Consap, tres miembros de asociaciones antiextorsión y antiusura, y tres miembros del Consejo Nacional de Economía y Trabajo.

El Comisario especial que preside estos Comités decide la cuantía de las ayudas económicas, las pérdidas económicas directas sufridas por las víctimas, el lucro cesante y las lesiones sufridas por la víctima o su familia y las ayudas pueden consistir en una compensación económica o un préstamo. Ahora bien, tal asignación sigue un procedimiento estipulado: se requiere a las víctimas, como primer paso, una denuncia formal a las autoridades, tras lo cual se les puede conceder el acceso al Fondo de Solidaridad cumplimentando un formulario específico.

3.2. b) Medidas de protección física para las víctimas de la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada

En este punto rige la Ley 45/2001, por la que se modifican las reglas de protección y tratamiento de las sanciones contra aquellos que colaboran con el sistema judicial, así como disposiciones relativas a los testigos que regulan las medidas de protección a los testigos de la justicia que han sido víctimas de determinados procesos extorsivos en el ámbito del crimen organizado. Tal ley establece que debe considerarse un peligro inminente para el testigo frente a la mafia provocado por el testimonio que presta, y dicho testimonio deberá ser fiable y crucial para una investigación o procedimiento penal.

Las víctimas que prestan declaración normalmente lo hacen porque se han resistido a pagar la demanda extorsiva que les demanda la mafia, o porque han decidido dejar de hacerlo. Además de servicios de protección y dispositivos técnicos de seguridad, se pueden aplicar medidas más de mayor intensidad mediante un programa especial de protección, que incluya el traslado de la persona protegida y su familia a un lugar seguro, la prestación de asistencia personal y económica, el cambio de identidad e incluso el apoyo necesario para comenzar una nueva vida. A cambio, las personas protegidas deben aceptar unas determinadas reglas, como cumplir con las normas de seguridad establecidas y continuar cooperando con el sistema de justicia de la forma que se considere oportuna. En caso de no cumplir las reglas establecidas, este programa de medidas puede ser revocado (Sciandra y Iafano, 2016).

3.2. c) Medidas específicas para la protección de la comunidad china

Dadas las especiales características de la comunidad china, la aplicación de medidas de protección adaptadas a su entorno resulta más efectiva que las respuestas comunes.

El caso que se ha utilizado para el estudio de este tipo de medidas es Prato, que como ya se ha comentado previamente, cuenta con uno de los mayores asentamientos de población china del país. Pues bien, las autoridades locales decidieron instaurar cuatro medidas para proteger a los empresarios chinos, tal como explica Nannucci (2015), miembro del cuerpo policial que las instauró:

La primera medida consiste en la publicación de documentos y folletos en dos idiomas: italiano y chino, para informar de las normas y leyes que rigen tanto en el país como en la

localidad en concreto, así como para aportar datos sobre acontecimientos locales. De esta manera se incrementa el conocimiento de las leyes y las costumbres italianas y se comienza un acercamiento institucional a la sociedad.

La segunda medida se fundamenta en la creación de mesas redondas con los empresarios más activos durante la preparación de eventos locales, como la celebración de conmemoraciones tras haberse desencadenado incidentes en los que se haya producido la muerte de algún ciudadano chino en la región. De esta forma lo que se pretende es acercar la comunidad china y sus sentimientos hacia las instituciones italianas.

La tercera medida se implantó gracias a la colaboración de la Confederación Nacional de Artesanos y Pequeñas y Medianas Empresas chinas, creando un grupo de WeChat⁵⁹⁵ para facilitar información a los empresarios sobre cuestiones relacionadas con la asesoría económica y legal, etc. Este instrumento también permite emitir advertencias a través de alertas inmediatas ante cuestiones importantes de seguridad, avisos de nuevos métodos de victimización, de nuevas zonas afectadas en materia de extorsión, robo o cualquier otro delito.

La cuarta medida consiste en un centro asistencial gestionado por un mediador cultural que habla chino, y permite un servicio de información y ayuda a las víctimas de delitos. Además, Nannucci (2015) explica que se establecen patrullajes estratégicos conjuntos con la policía china por determinadas zonas y durante determinados períodos de tiempo. Esta policía china se traslada desde su país de origen para colaborar en la seguridad de la comunidad asentada en Italia. Estas últimas medidas son muy relevantes si tenemos en cuenta que las barreras lingüísticas en muchas ocasiones son enormes y dificultan la protección efectiva incluso cuando la víctima quiere denunciar.

3.3. La implicación de la sociedad civil

La relevancia de la implicación civil en la lucha y prevención de los procesos extorsivos radica en la naturaleza del propio fenómeno: la intimidación subyacente para la consecución de los objetivos de la organización criminal limita las posibilidades de enfrentamiento de la víctima.

Cabe añadir que, a veces, el rechazo a la extorsión puede incluso suponer la muerte social para la víctima. Como indica Marannano (2016), la Cosa Nostra asesinó a Libero Gracia

⁵⁹⁵ El equivalente chino al Whatsapp, una mensajería instantánea de uso frecuente entre la población.

cuando éste se resistió, y afirma que le mataron porque socialmente le dejaron solo. Es entonces cuando surge el planteamiento de la eficacia mediante el fenómeno de la resistencia en grupo. Ahora bien, aunque las víctimas se junten y resistan, deben asumir un doble riesgo ante la denuncia: ser asesinados por la mafia y ser aislados o ignorados por la sociedad (Grasso, 2016). Nace así la idea de que la implicación de la sociedad civil es claramente relevante.

Como respuesta, en los años 90, comienzan a crearse agrupaciones de pequeñas empresas antimafia, que se unificaron formando la denominada *FAI* (Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane) en 1996. Tras dicho acontecimiento, surgen importantes asociaciones en este contexto como *Addiopizzo*, *Libera*, *SOS Impresa* y *Civitas Virtus*. La idea de la verdadera eficacia en la lucha contra la extorsión radica en el rechazo social: se comienza a propagar la idea de quien paga la extorsión carece de valor social (Marannano, 2016). Así, el objetivo de las asociaciones en la lucha contra la mafia es triple: agrupar empresarios para la resistencia conjunta, involucrar a la sociedad en el rechazo generalizado a la mafia, y cooperar con las autoridades policiales y judiciales, especialmente apoyando a la víctima en la dura decisión de denunciar la extorsión.

Tal como afirma Cozzi (2016), para combatir la creciente usura y los progresivos procesos extorsivos se requiere un planteamiento sinérgico policial, judicial, social, cultural y político. Explica que la agresión contra un empresario es una agresión contra el entramado socioeconómico, y que en ese territorio está en juego la libertad, así como la legalidad en las actividades económicas y la democracia, que suponen un objeto de protección de las Administraciones públicas. Esto justifica la responsabilidad del estado en la lucha contra el fenómeno; pero lo cierto es que la sociedad civil también está haciendo grandes aportaciones en esta importante batalla.

3.3. a) Las asociaciones italianas contra la extorsión

Para conocer el papel de las citadas asociaciones en la lucha contra los procesos extorsivos del crimen organizado, conviene recordar las principales funciones de algunas de ellas, tal como exponen Sciandra y Iafano (2016):

La *FAI*⁵⁹⁶, además de agrupar las asociaciones en la lucha contra la extorsión y la mafia tiene otras actividades relevantes como promover el consumo de bienes y servicios en negocios

⁵⁹⁶ Siglas de la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura italiane.

que no se someten a la mafia, apoyar a las víctimas en los procedimientos penales, y dar asistencia financiera a través de centros específicos, además de emprender acciones civiles contra la mafia en procedimientos penales de extorsión.

Libera es una red que también se dedica a la agrupación de asociaciones, y está muy orientada hacia la promoción de la cultura de la legalidad en los ámbitos legales y culturales. Uno de los principales compromisos de *Libera* es la reutilización social de activos de la mafia para “la educación en la legitimidad democrática, la lucha contra la corrupción, los campamentos de educación antimafia y las actividades antimafia”.

Addiopizzo es una asociación que centra sus esfuerzos en apoyar a víctimas de la extorsión (*‘pizzo’* en italiano) y promover una nueva forma de comportamiento en el mercado. Una de sus propuestas más destacadas es el denominado *Consumo Crítico*, que consiste en: “un pacto entre ciudadanos, consumidores y actores económicos destinado a crear una economía independiente de la Mafia”, promoviendo el consumo en forma de recompensa en aquellas empresas que rechazan las extorsiones de la mafia. Derivado de ello, esta asociación ha creado un *Mapa sin Extorsión*, que muestra la distribución geográfica de los negocios que cumplen el *consumo crítico* y no pagan a la mafia. Para formar parte de este mapa el empresario solicita el alta y la asociación evalúa su situación a través de determinada documentación e información que el empresario debe aportar, además debe suscribir una declaración formal de legalidad y un compromiso solemne de no someterse a la mafia en el futuro.

SOS Impresa es la iniciativa de una agrupación de empresarios que tratan de defender la libertad empresarial y el rechazo a la extorsión. Desarrollan campañas para promover la denuncia de extorsiones a las autoridades y el desarrollo estratégico empresarial de defensa frente a los procesos extorsivos. Entre sus campañas más destacadas se encuentra el Día de la No Usura (“No Usura Day”) el 21 de noviembre, que denuncia públicamente las actividades de la mafia contra empresarios para dar visibilidad a la problemática italiana. Además, da asistencia legal a las víctimas y publican informes sobre juicios e investigaciones de procesos extorsivos.

Por último, *Civitas Virtus* es una asociación que da formación en comercios y escuelas, en pro de las víctimas de la extorsión. Su principal objetivo es que las víctimas denuncien o al menos acusen a la mafia en la asociación (Morada, 2016).

3.3. b) La sociedad china frente a la extorsión

La victimización de negocios a través de la extorsión es un fenómeno especialmente difícil de reprimir cuando se desarrolla en una comunidad minoritaria⁵⁹⁷. En el caso de la comunidad china asentada en Italia, se han podido examinar los métodos de protección desarrollados por los propios empresarios gracias a las entrevistas mantenidas con expertos en la materia (Becucci, 2015; Borsacchi, 2015; Mundula, 2015; Nannucci, 2015; Squillace, 2015). Los empresarios chinos emplean tres tipos de métodos para resistir a la extorsión del crimen organizado chino:

- El primer método está conectado con el rechazo social: negarse a pagar argumentando que los negocios de la zona tampoco pagaban. De esta forma, la organización criminal identifica una resistencia colectiva expresada de forma individual.
- El segundo método es la creación de un grupo privado en WeChat⁵⁹⁸ llamado *Sicurezza* (seguridad) para colgar avisos y fotos de personas sospechosas que visiten los negocios y soliciten pagos o información sobre los propietarios. Así, los empresarios están informados de cuestiones de seguridad que les pueden afectar y de las personas que deben evitar.
- El tercer método consiste en contratar los servicios de una empresa privada de vigilancia para una zona industrial de Prato, denominada Macrolotto. De esta manera, se pagan servicios de protección legal para que los vigilantes de seguridad supervisen la zona y en caso de peligro o sospechas avisen ellos mismos a la policía.

Estas medidas responden a una estrategia de autoprotección colectiva, ante las limitaciones que tienen las autoridades policiales y judiciales dedicadas a la seguridad pública. En cualquier caso, conviene conocer tales limitaciones para mejorar la efectividad de la lucha contra la extorsión, tal como se expone a continuación.

⁵⁹⁷ Así lo señala la literatura científica, y específicamente con la comunidad china (Chin et al., 1992; Perrone, 2000; Tilley y Hopkins, 2004; Wagstaff et cols., 2006).

⁵⁹⁸ Como ya se ha especificado previamente, es el equivalente chino al Whatsapp, una mensajería instantánea de uso frecuente entre la población.

3.3. c) Principales necesidades planteadas

Gracias a la implicación civil se puede, no solo mejorar la tasa de denuncia de procesos extorsivos y tratar de reducir la cifra oscura, sino conocer también las principales críticas de víctimas y asociaciones a las respuestas legales frente a la extorsión y las necesidades para combatirla.

Entre ellas destacan la lentitud en la aplicación de las leyes para recibir ayuda económica, las pocas víctimas que denuncian y las que lo hacen es porque constituye el último recurso que literalmente les queda; en este sentido, es fundamental tender puentes entre la víctima y las instituciones (Cozzi, 2016). Además, no hay que olvidar que cuando la víctima es un empresario, pierde su única fuente de ingresos, por lo que la resistencia a la extorsión puede tener un fuerte y rápido impacto en su modo de subsistencia.

A pesar de todo lo expuesto, actualmente existen dos puntos esenciales en la lucha efectiva contra la extorsión todavía pendientes de implementar. El primero es la represión a través de la investigación policial y judicial, que debe traducirse en condenas que alejen a los mafiosos y extorsionadores de la ciudadanía. Es decir, tratar de reducir la impunidad al máximo en aras de una respuesta efectiva que motive a las víctimas a denunciar. El segundo es el fenómeno de la resistencia social: se requiere un verdadero cambio estructural, pues lo cierto es que la cultura de la legalidad está en manos de la sociedad, y es necesario que la ciudadanía en su conjunto muestre una respuesta unánime de repulsa a la mafia y de apoyo a aquellos negocios que respeten la legalidad y no paguen a la mafia (Marannano, 2016).

Concretamente sobre la protección de la sociedad china, existen importantes limitaciones específicas: el idioma, la desconfianza hacia la ley y el miedo a la venganza incluso después de la condena, además de las barreras culturales que tiene este colectivo. Por todo ello, Aricó (2016) afirma que es fundamental que las instituciones cuenten con personas que conozcan la cultura china, y no solo el idioma, si no su literatura, su filosofía, en ocasiones un gesto basta para arruinar una relación de confianza. Añade que en Milán hay 14 asociaciones chinas y una vez al año se reúnen con asociaciones chinas de otros países; se pueden emplear este tipo de momentos y canales para tener informados a los miembros del colectivo (Aricó, 2016).

En conclusión, se puede afirmar que el fenómeno objeto de estudio de la presente tesis, que es los procesos extorsivos a las empresas perpetrados por parte de organizaciones criminales, presenta unas características idiosincráticas y de una gravedad importante que lo

hacen merecedor de una respuesta contundente y efectiva por parte del Estado. Esto se traduce en la necesidad de medidas específicas a nivel legislativo, policial y social que aporten a las víctimas diferentes formas de protección y que, a su vez, supongan un recurso útil ante la resistencia, adaptado a sus necesidades personales y empresariales.

De no ser así, los delitos que conforman las diferentes formas de actuar de las organizaciones criminales permanecerán ocultos o se identificarán como incidentes aislados, y al no obtener la respuesta represiva adecuada y el rechazo social oportuno, se podrán perpetuar las actividades predatorias del crimen organizado contra empresas. Y, como se ha expuesto anteriormente, tales actividades mantenidas en el tiempo tendrán un gran impacto en los diferentes ámbitos de la sociedad, especialmente la seguridad, la economía y la democracia.

CAPÍTULO 8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: PROPUESTAS DE MEJORA EN LA LUCHA CONTRA LOS PROCESOS EXTORSIVOS

Este capítulo final tiene como objetivo recopilar los aspectos esenciales del estudio que aborda los procesos extorsivos a las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada desde un enfoque de evaluación de vulnerabilidades.

A tal fin, se expondrá en primer lugar, la discusión de los resultados obtenidos, identificando los principales elementos tanto generales como específicos de las prácticas extorsivas objeto de estudio empírico, en contraste con la literatura científica más significativa relacionada con el tema que nos ocupa. Para ello se describirán las características principales y los factores de vulnerabilidad tanto en el sector de la hostelería como en la comunidad china, situados en el escenario actual español.

Una vez conocidas las conductas, se analiza la respuesta que da nuestro sistema penal, lo que exige conocer los principales tipos penales en juego. Con este propósito, se identificarán aquellos tipos que tienen mayor relevancia en cuanto a su aplicación a las diferentes formas de actuación de las organizaciones criminales implicadas. Del mismo modo, se describirán las dificultades más importantes que se han encontrado para llevar a cabo la investigación de estos delitos. Para el estudio de este último punto, la aportación realizada por policías, fiscales y jueces, tanto españoles como italianos, ha sido esencial.

En segundo lugar, se presentan las conclusiones globales del estudio, entre las que destacan las lecciones aprendidas del análisis realizado, y, las medidas de protección adoptadas frente a la extorsión en los sectores y las comunidades afectadas, incluidos los aspectos legales, económicos y sociales vinculados a los aspectos mencionados. Al final de este apartado, se reseñan determinados retos de futuro en materia de procesos extorsivos en el ámbito de la criminalidad organizada, que apuntan al desarrollo de posibles estudios a partir del presente análisis expuesto.

En tercer y último lugar, se expone una síntesis final que contiene los puntos clave del presente trabajo, resultado de un proyecto de investigación Europeo y de una posterior aplicación al ámbito del derecho público, que implica utilizar el Derecho penal como un instrumento eficaz en la lucha contra determinadas situaciones que afectan a ciertos derechos de los ciudadanos, que identifique sus problemas y ayude a poner a su disposición las

herramientas legales, policiales y judiciales con las que cuenta nuestro sistema para dar una respuesta efectiva a las prácticas extorsivas a las empresas.

1. Discusión de resultados

El estudio que se presenta examina diversos aspectos de los procesos extorsivos que se producen en España, en el ámbito de la delincuencia organizada, tanto en el sector de la hostelería como las extorsiones perpetradas en la comunidad china. La investigación constituye la parte española de un proyecto de investigación europeo denominado CEREU, Countering Extortion and Racketeering in EU, junto con el instituto Transcrime de Italia y el Center for the Study of Democracy de Bulgaria.

Los análisis contenidos en los capítulos 5 y 6 describen los aspectos criminológicos y legales de los 30 casos de extorsión que conforman la muestra (15 casos de extorsión en el sector hostelero y 15 casos en la comunidad china) mientras que en el capítulo 7 se exponen las buenas prácticas implementadas en Italia en la lucha contra este fenómeno, dada su dilatada experiencia debido a la tradicional mafia extorsiva asentada en su territorio.

La discusión que plantea el presente capítulo sobre los resultados del análisis se desarrolla siguiendo la línea del resto del estudio, basado en el contexto general y las características específicas y los patrones de comportamiento tanto de los autores como de las víctimas, prestando especial interés a las vulnerabilidades que presentan el sector y la comunidad aquí analizados, y las medidas de protección más efectivas de represión y prevención adoptadas, tanto las referidas a la proliferación como las concernientes a la persistencia de los propios procesos extorsivos.

En este contexto, y teniendo en cuenta que la extorsión es una actividad intensamente vinculada con el crimen organizado en todo el mundo⁵⁹⁹, esta supone una de las herramientas más efectivas empleadas por el crimen organizado para la acumulación de recursos financieros y el acceso a la economía legal (Transcrime, 2009); en contraste, es un fenómeno muy poco estudiado debido a la dificultad de obtener información del mismo y que manifiesta una gran necesidad de investigación (Mugellini, 2013; Rusev et cols., 2016).

⁵⁹⁹ Como vienen defendiendo Best (1982) y Konrad y Skaperdas (1998).

Se trata de prácticas muy lucrativas (Paoli, 2003; Dugato et cols., 2013) que suelen estar concentradas normalmente en negocios especialmente vinculados a los sectores económicos más expuestos⁶⁰⁰ y en las comunidades étnicas más vulnerables⁶⁰¹.

Descrito el escenario en el que se desarrolla el análisis que nos ocupa, se van a exponer los factores de vulnerabilidad que presentan las empresas que componen constituyen la muestra del presente estudio, y sobre los que posteriormente se abordarán las propuestas de mejora en la lucha contra los procesos extorsivos del crimen organizado.

1.1. Aspectos generales de los procesos extorsivos

Las vulnerabilidades que presentan las empresas ante la extorsión del crimen organizado responden a determinadas características específicas de los grupos de negocios a los que atacan, si bien existen ciertas características empresariales y del entorno que comparten las dos muestras analizadas, tanto las pertenecientes al sector hostelero como las que se refieren a la comunidad china.

Siguiendo el enfoque orientado a la evaluación de las vulnerabilidades⁶⁰² (Europol, 2013; FATF, 2013), a continuación, se detallan las características de las empresas victimizadas y las del entorno donde se perpetran los procesos extorsivos.

Características de las empresas victimizadas

Se procede a destacar brevemente una serie de características que comparten la mayor parte de las empresas victimizadas de la muestra (N=30), en línea con los estudios de Lavezzi (2008), Albanese (2008); Caneppele et al. (2013) y Savona y Berlusconi (2015):

- ✓ Son pequeñas y medianas empresas: ninguna cuenta con más de 10 empleados.
- ✓ Presentan un bajo perfil tanto económico como tecnológico: aunque puedan ser exitosas, lo cierto es que no tienen un capital importante y se centran en el plano físico, más que el virtual (tipo comercio electrónico).

⁶⁰⁰ Así lo exponen Savona y Berlusconi (2015), Caneppele et al. (2013) y Albanese (2008).

⁶⁰¹ Tal como explican Tilley y Hopkins (2008), Albanese (2011) y Lisciandra (2013).

⁶⁰² Expuesto en el apartado 2.1. del cuarto capítulo de la presente tesis.

- ✓ El entorno donde se ubican es muy dado a las prácticas de economía sumergida, como la evasión fiscal, el empleo de mano de obra no declarada, etc.
- ✓ Predomina el dinero en efectivo como forma de pago.
- ✓ Los negocios tienen un fuerte arraigo territorial: no puede trasladarse fácilmente a otros lugares.

Estas características pueden ser tratadas como factores generales de vulnerabilidad, que, tal como explica la literatura científica sobre la materia, propician el aprovechamiento por parte del crimen organizado de las limitaciones que afectan a estos negocios.

Así, las pequeñas empresas cuentan con menores medidas de seguridad y consecuentemente el impacto de las acciones intimidatorias es mayor. Además, su bajo perfil económico y tecnológico limita los recursos que pueden destinar para la propia protección; tanto es así que ni siquiera se permiten contratarlo de manera reactiva y en muchas ocasiones prefieren aceptar la extorsión como una suerte de impuesto que asumen como un gasto más de la empresa. Además, las barreras de acceso al mercado hostelero o para la creación de empresas chinas tradicionales en España es realmente bajo, pues no se requiere un gran capital, ni un alto nivel tecnológico ni una dilatada experiencia.

A todo ello se suman las prácticas que conlleva operar mediante la economía sumergida, que limitan en gran medida las alternativas al pago de lo exigido por la extorsión para tratar de evitar la denuncia que revelaría sus propias infracciones a las autoridades. El dinero efectivo como principal forma de pago facilita enormemente la posibilidad de generar gastos no declarados y de pagar de forma inmediata a los extorsionadores. Por último, el arraigo local dificulta la posibilidad de evitar o rechazar las extorsiones al no poder reubicar fácilmente sus actividades empresariales.

Características del entorno de la victimización

Es esencial tener en cuenta el entorno socioeconómico cuando se estudian las oportunidades que suponen los negocios legales para los grupos de crimen organizado (Lavezzi, 2008), por ello se presentan las características que configuran los factores que resultan atractivos o que hacen más efectivo para los grupos perpetrar la actividad extorsiva.

Pues bien, el análisis del entorno elaborado en el estudio que se presenta ha permitido extraer diferentes aspectos del contexto en el que se implementan las prácticas extorsivas

objeto de la muestra. A continuación, se describen los factores de vulnerabilidad que presentan los grupos de empresas victimizados.

Factores relacionados con el contexto y con el control:

- ✓ Presencia de organizaciones criminales
- ✓ Falta o ineficiencia de organismos de control
- ✓ Falta o complejidad de la legislación
- ✓ Corrupción
- ✓ Ausencia de políticas de prevención para las víctimas
- ✓ Baja presencia o falta de vínculo con asociaciones empresariales
- ✓ Ausencia de protección con seguridad privada

Los procesos extorsivos resultan más efectivos en regiones donde hay una mayor presencia de organizaciones criminales, pues los empresarios asumen de antemano el riesgo que supone iniciar un negocio en dicho entorno.

Además, la ineficiencia de los mecanismos de control supone un alejamiento de las instituciones públicas, responsables de la protección y la justicia, de la ciudadanía.

Por su parte, la ausencia de legislación específica⁶⁰³ para proteger las actividades económicas de las empresas frente a estos fenómenos complejos como el expuesto en el presente estudio, provoca que la ciudadanía no identifique a las fuerzas del orden ni a las instituciones de justicia como un recurso viable para su propia protección ante las extorsiones. Además, aunque de forma puntual, las prácticas corruptas de determinados integrantes del funcionariado potencian la impunidad de las organizaciones criminales dedicadas a este tipo de actividades.

Igualmente, la ausencia de políticas de prevención ahonda en esta línea ya que facilita el pensamiento único ante la extorsión: la aceptación como modo de evitar represalias.

Asimismo, un menor vínculo con asociaciones empresariales sitúa a la víctima en un contexto de aislamiento y falta de posibilidades de respuesta alternativas a la denuncia policial directa y la aceptación de las condiciones extorsivas.

⁶⁰³ Aunque como se ha expuesto a lo largo del trabajo, las mayores dificultades contra la impunidad del crimen organizado, en términos generales, no son tanto las limitaciones legislativas, sino las probatorias y de aplicación de la ley.

Por último, la ausencia de protección privada, servicio que las pequeñas y medianas empresas raramente pueden permitirse, facilita la actuación intimidatoria que genera temor y una enorme sensación de desprotección de forma inmediata.

Ahora bien, concretamente los casos de la muestra que hacen referencia a empresas del sector hostelero y aquellos que se ubican dentro la comunidad china presentan características propias, lo que implica que cuentan con sus vulnerabilidades específicas. Estas características se presentan a continuación.

1.2. Los procesos extorsivos perpetrados contra el sector hostelero en España

El fuerte crecimiento del crimen organizado que se ha producido en nuestro país en los últimos años, especialmente en la costa y en las grandes ciudades, frente a la falta de especialización policial y judicial debido a que tradicionalmente no constituía una de las grandes amenazas, o al menos así se consideraba (Giménez-Salinas, 2013) son las razones que explican la proliferación de los procesos extorsivos que atacan a las pequeñas y medianas empresas dentro de nuestras fronteras.

Teniendo en cuenta este elemento explicativo, se exponen a continuación las características esenciales de los procesos extorsivos perpetrados contra una empresa del sector de la hostelería siguiendo el enfoque orientado a la evaluación de las vulnerabilidades⁶⁰⁴ (Europol, 2013; FATF, 2013).

1.2. a) Las características principales

El análisis de las principales características de los procesos extorsivos que se presenta abarca el contenido sobre las organizaciones criminales, el relativo al *modus operandi* y el que se refiere a las empresas victimizadas del sector de la hostelería.

⁶⁰⁴ Expuesto en el apartado 2.1. del cuarto capítulo de la presente tesis.

Las organizaciones criminales

Las organizaciones criminales, tanto locales como extranjeras, suelen dedicarse como actividad principal a la extorsión, o al menos destinar a este objetivo una rama específica de la organización. También es frecuente que se especialicen en el cobro de deudas o en la utilización de empresas legales del sector infiltradas por el crimen organizado. En determinadas ocasiones también están vinculadas a otras actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, la usura y la corrupción.

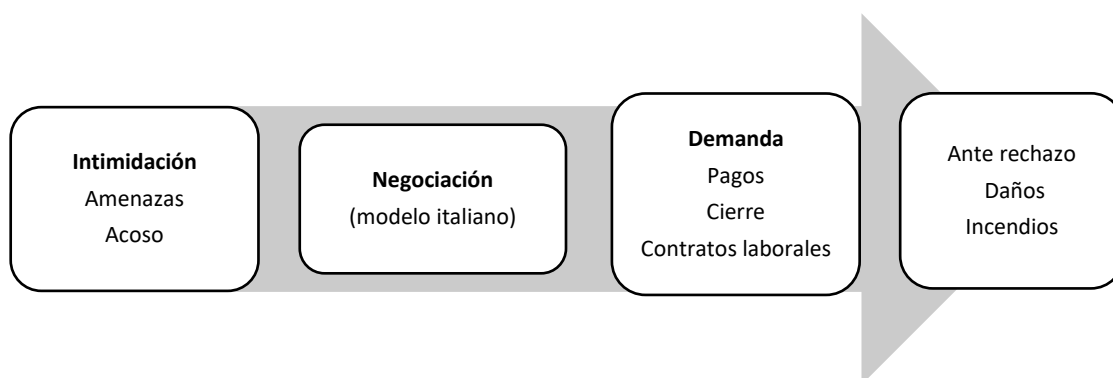
En la muestra analizada se han identificado tres tipos de prácticas extorsivas que se ajustan a la tipología descrita por Monzini (1993) son las siguientes: a) *extorsión-protección*, impuesta por grandes organizaciones con una gran capacidad para forzar la realización de los pagos, o por organizaciones criminales de cierto origen étnico o racial o de una determinada nacionalidad que extorsionan a víctimas del mismo grupo étnico, b) *extorsión laboral* en el ámbito de la delincuencia organizada, que se perpetra principalmente cuando autores y víctimas son de la misma nacionalidad, c) *extorsión monopolística* en el ámbito de la delincuencia organizada, encontrada en tres casos: dos negocios indios y un gran grupo criminal organizado con una importante participación en la economía local.

El modus operandi

A pesar de la enorme diversidad de organizaciones criminales como los resultados del capítulo quinto ponen de manifiesto, lo cierto es que la mayoría sigue un modus operandi en la línea de lo expuesto por La Spina et cols. (2014), que responde a tres fases: a) la *intimidación* mediante amenazas con fuerte carga intimidatoria, acoso a través de reiteradas visitas al negocio o insistentes llamadas telefónicas, b) la *negociación*, que no se ha identificado como tal en las declaraciones de las víctimas, y c) la *demanda*, bien de pagos, de cierre del negocio o de contratos laborales para los integrantes de la organización.

Ante las respuestas de rechazo al cumplimiento de lo requerido, los medios comúnmente utilizados son los daños al local y los incendios, sin embargo, el uso de violencia fue poco frecuente. Además, en la fase previa a la intimidación algunos grupos estaban especializados en el engaño como método de aproximación, y en el ofrecimiento amable de las demandas como forma de mejora del negocio. Estas fases se presentan a continuación en la siguiente gráfica a modo de resumen.

Ilustración 12. Esquema resumen del *modus operandi* en los procesos extorsivos al sector hostelero



Fuente: elaboración propia.

Las empresas victimizadas

Las víctimas de los procesos extorsivos suelen ser dueños de locales de hostelería, en muchos casos de una pequeña empresa familiar que constituye su única fuente de ingresos.

La reacción más frecuente de las víctimas ante las exigencias extorsivas es la aceptación inmediata de las demandas, especialmente si se refuerza el mensaje intimidatorio a través de la presencia de cargos públicos.

Las víctimas se deciden a poner denuncias únicamente ante dos supuestos: a) el temor a que el grupo cumpla sus amenazas de atentar contra la integridad física de la propia víctima o de sus familias, y b) cuando la víctima no puede afrontar las exigencias extorsivas por tratarse de cantidades económicas inasumibles que incluso puede suponer el quedarse sin su único modo de vida.

Se trata de empresas cuyos negocios son restaurantes, pubs y bares que se concentran en zonas donde existen otros negocios de hostelería y turismo y que están ubicadas tanto en zonas costeras como en las grandes ciudades.

A partir del análisis cualitativo de los casos de la muestra, se ha podido identificar la naturaleza de la extorsión en función de las actividades económicas principales del territorio donde se han perpetrado los procesos extorsivos, dando lugar a dos categorías: zonas turísticas y zonas de agricultura.

a) Las víctimas de las *zonas turísticas* se encuentran localizadas en regiones costeras y grandes ciudades donde existe una gran concentración de empresas hosteleras, lo que significa una oportunidad de financiación importante para las organizaciones criminales. En esta zona, los tipos de extorsión más frecuentes identificados fueron la *extorsión monopolística* y la *extorsión-protección*.

b) Las víctimas de las *zonas basadas en la agricultura* se hallan en ubicaciones más dispersas y fueron perjudicadas por las organizaciones criminales que ejercen su importante control territorial en entornos muy amplios. En estos supuestos se hizo poco uso de la violencia física debido a que la reputación del grupo fue suficientemente intimidatoria. En estas zonas, se identificaron dos tipologías de extorsión la denominada *laboral* y la conocida como *por protección*.

1.2. b) Factores de vulnerabilidad en el sector de la hostelería

Como ya se ha mencionado, la alta densidad de negocios de hostelería como son los restaurantes, pubs y bares situados en pequeñas regiones turísticas, actúa como factor de atracción para las organizaciones criminales, porque consideran que dichos establecimientos son muy vulnerables debido al control territorial que ejerce el grupo en la zona.

En este escenario, la cultura de la ilegalidad es especialmente relevante porque está integrada en el entorno: los empresarios pueden percibir las prácticas extorsivas como actividades ilegales habituales en determinadas regiones, asumiendo que el cumplimiento de la legalidad no es algo frecuente ni exigible a la vista de la impunidad de las organizaciones criminales que allí operan. Esto conlleva una mayor propensión a aceptar las exigencias de los extorsionadores.

Del análisis realizado de los casos de la muestra, se han extraído factores específicos de vulnerabilidad que se pueden clasificar en dos categorías, en función de atendiendo a la nacionalidad de los autores y las víctimas:

a) Cuando los autores y las víctimas *comparten la misma nacionalidad*, existen elementos de vulnerabilidad que facilitan oportunidades de negocio para las organizaciones criminales.

- ✓ La situación extranjera, sea regular o irregular, da las víctimas, que las organizaciones criminales aprovechan para exigir pagos a cambio de permitir su estancia en nuestro país.
- ✓ Las víctimas para las que la organización criminal es *desconocida* sufren un mayor impacto ante acciones intimidatorias y frente al el temor de que cumplan sus amenazas, por lo que aceptan de forma inmediata las exigencias extorsivas; actitud que las organizaciones criminales aprovechan por la oportunidad lucrativa que supone.
- ✓ La apertura de un nuevo negocio, especialmente si está vinculado a los hábitos de consumo de la misma comunidad (como es el caso de los negocios de kebabs en la comunidad pakistaní), ya que los grupos ilegales lo identifican como un negocio con una alta capacidad económica y por tanto con posibilidades reales de efectuar los pagos que les exijan o de proceder a la contratación de proveedores que el grupo les imponga.

b) Cuando los autores y las víctimas tienen *distinta nacionalidad*, las organizaciones delictivas están dispuestas a iniciar procesos extorsivos si se dan ciertas características en la región:

- ✓ *Concentración alta* de negocios del mismo sector en una zona determinada, que además no pertenezcan a ninguna asociación de comerciantes ni de empresarios. Ello permite a las organizaciones criminales explotar dicha zona en términos extorsivos sin la intervención de un ente que ponga en contacto a las víctimas entre sí para apoyar la resistencia de estas al rechazo de la extorsión.
- ✓ La existencia de zonas rurales y algo *aisladas* sitúa a las empresas en un escenario con escasas alternativas al cumplimiento de las exigencias, dado el enorme temor que provocan y la ausencia de instituciones públicas cercanas a la población que puedan proteger a las víctimas que decidan rechazarlas.
- ✓ La posibilidad de implicación de *cargos públicos* en el proceso extorsivo refuerza el mensaje de que no existe alternativa al pago. Las víctimas son fáciles de extorsionar cuando las fuerzas policiales o las instituciones políticas o del ámbito

de la justicia son cómplices de la extorsión, que son precisamente las instancias que deben proteger a la ciudadanía de estas prácticas.

- ✓ La demanda de la población de *préstamos* al margen de cualquier entidad legal sitúa a la víctima ante un posible proceso de gestión de morosos que puede derivar en un proceso extorsivo con el que se ejerce un gran control sobre la víctima, al obligarla a firmar documentos con cláusulas abusivas mediante acciones intimidatorias.

1.3. Los procesos extorsivos en la comunidad china

Las raíces explicativas de los procesos extorsivos que se producen en la comunidad china asentada en España están relacionadas, en gran medida, con los intensos procesos de crecimiento empresarial, comercial y migratorio de China respecto a Europa; así se han conformado nuevos nichos de mercado en España como la venta de ropa y de productos de bazar, más allá del sector tradicional de restauración (Rusev et cols., 2016).

Además, el fuerte arraigo que esta comunidad tiene con la familia y el carácter emprendedor de su cultura aportan a los negocios asiáticos asentados en nuestro territorio unas características muy definidas⁶⁰⁵, que las organizaciones criminales saben aprovechar explotando los negocios de sus compatriotas.

Desde este punto de partida, se exponen las principales características de los procesos extorsivos identificados en la muestra siguiendo el enfoque orientado a la evaluación de las vulnerabilidades⁶⁰⁶ (Europol, 2013; FATF, 2013).

1.3. a) Las características principales

Dado que la extorsión es una de las actividades más habituales de las organizaciones criminales chinas (Barras, 2014; De la Corte y Giménez-Salinas, 2010 y Chin et al., 1992), y que la comunidad china es una de las más numerosas dentro de nuestras fronteras (INE, 2017), una

⁶⁰⁵ Tal como se expone más profundamente en el primer apartado del sexto capítulo de la presente tesis.

⁶⁰⁶ Expuesto en el apartado 2.1. del cuarto capítulo de la presente tesis.

parte del estudio analiza el fenómeno extorsivo que afecta a las empresas chinas radicadas en España.

El análisis descriptivo que se presenta abarca tanto el correspondiente a las organizaciones criminales, como el relativo al *modus operandi* y a las empresas victimizadas de la comunidad china.

Las organizaciones criminales

Las organizaciones criminales chinas identificadas en la muestra responden a dos tipologías clasificadas en función de su tamaño, en línea con lo expuesto por Chin et al. (1992).

Por una parte, existen organizaciones criminales de gran tamaño, con un perfil aparentemente similar al de cualquier organización tradicional en cuanto a su estructura jerárquica y su clara división de tareas. Estos grupos suelen tener una rama dedicada a la extorsión y recaudación de deudas, cuyos miembros se ocupan de intimidar a las víctimas y emplear la violencia para exigir los pagos extorsivos. Aunque no constituyen la mayoría de los casos de la muestra, tanto su control territorial como el poder de intimidación que tienen los convierten en grupos de gran efectividad.

Por otra parte, también se han detectado pequeños grupos cuyos integrantes tienen un perfil más joven e independiente (de segunda o tercera generación, nacidos ya en Europa), que en determinadas ocasiones están apoyados por las organizaciones criminales de dimensiones importantes, lo que les aporta un fuerte poder intimidatorio.

En cuanto a los procesos extorsivos, se han identificado diferentes tipologías de procesos extorsivos:

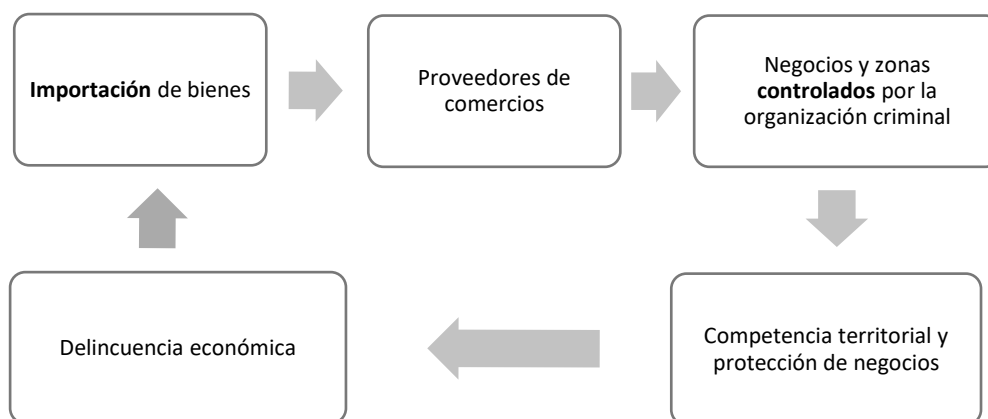
- Extorsión monopolística, que se produce cuando la organización tiene un gran control del territorio.
- Por afán de lucro: es la extorsión vinculada a los préstamos ilegales que se conceden a los inmigrantes chinos que les permite emprender su proceso migratorio o iniciar un negocio en el país de destino.
- Existencia de conflictos personales, derivados de las relaciones de determinados miembros de la mafia con terceras personas, de las que se aprovechan mediante mecanismos fuertemente intimidatorios.

En definitiva, se trata de delincuencia económica⁶⁰⁷, pues se basa en la importación de bienes, en ocasiones parte de ellos no declarados. Una vez obtienen los productos, imponen determinados proveedores a los comercios que permitan a la organización controlar zonas y negocios a través del abastecimiento y estableciendo el dominio de la competencia territorial y de la protección de los negocios que les interés extorsionar, lo cual permite al grupo continuar con el desarrollo de sus actividades ilegales en este ámbito y generar un importante lucro.

En este escenario, la extorsión es un mecanismo de control⁶⁰⁸ que se produce a través de distintos métodos dentro del mismo proceso de delincuencia económica, mediante: a) la imposición de proveedores de mercancías a comercios chinos y b) la protección extorsiva de negocios y dominio de la competencia territorial.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de lo explicado.

Ilustración 13. Esquema resumen de los procesos extorsivos en la comunidad china con base en la importación



Fuente: elaboración propia.

⁶⁰⁷ Según la entrevista a un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado chino.

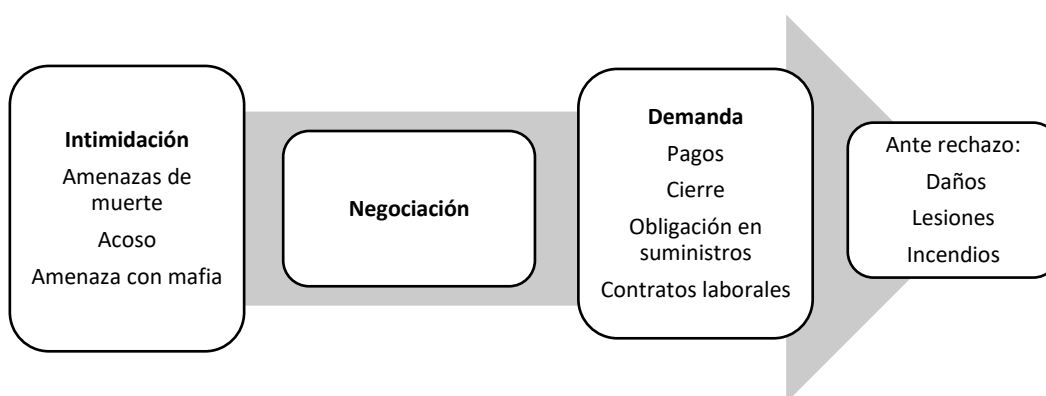
⁶⁰⁸ Atendiendo a las entrevistas mantenidas con dos miembros de la Guardia Civil expertos en crimen organizado chino.

Modus operandi

El *modus operandi* responde al método seguido para acometer el proceso extorsivo definido por la Spina et cols. (2014), con una primera fase de *intimidación* a través de amenazas de muerte a la propia víctima o a sus familiares, conductas de acoso como, por ejemplo, reiteradas llamadas telefónicas o continuas visitas al negocio, y mediante advertencias de avisar a la mafia. Éste último es un mensaje con gran poder intimidatorio. Sobre la segunda fase, que es la de *negociación*, no se han obtenido muchos datos, pues parece ser que las organizaciones concretan la capacidad económica de las diferentes empresas que van a ser objeto de procesos extorsivos y en función de ella solicitan diferentes cantidades de dinero a una u otra víctima, por lo que posiblemente el proceso de negociación no sea necesario. Por último, la fase de la *demanda* consiste en requerir determinadas exigencias como, por ejemplo, pagos en efectivo de forma sistemática, el cierre del negocio en un territorio controlado por la organización, la obligación de contratar suministros a determinados proveedores o contratar a personal específico vinculado a la mafia china.

Cuando se produce la negativa de la víctima a aceptar las exigencias del grupo, la respuesta de la organización es producir daños en sus negocios, lesiones a los propietarios del establecimiento o a sus familias e incluso incendios en sus empresas.

Ilustración 14. Esquema resumen del modus operandi de los procesos extorsivos en la comunidad china



Fuente: elaboración propia.

Las empresas victimizadas

El alto nivel de interdependencia que existe entre los residentes chinos les hace más vulnerables frente a la extorsión y las prácticas intimidatorias (Becucci, 2016). Esto es, el grado de concentración y cohesión de los integrantes de los grupos de asentamiento lleva aparejado importantes mecanismos de interrelación entre compatriotas, y especialmente un fuerte nivel de dependencia hacia las organizaciones criminales. Así, los préstamos⁶⁰⁹ que los residentes chinos reciben de estas organizaciones una vez llegan a nuestro territorio para emprender negocios familiares, para cubrir el suministro de bienes y servicios, para atender los gastos del día a día, etc., les sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad ante posibles situaciones de impago, que es cuando comienzan los procesos extorsivos a través del incremento abusivo de los intereses.

Además, si la organización criminal china tiene poder en la comunidad asentada en determinado territorio, puede tener el objetivo de imponer el monopolio de la provisión de bienes a los bazares y restaurantes de la zona, sin necesidad de la existencia de un préstamo previo, haciendo uso de su reputación en forma de intimidación ambiental al exigirles las condiciones extorsivas.

Las principales empresas victimizadas responden a tres tipologías:

- Pequeño bazar chino, al que se le obliga a realizar pagos extorsivos, a contratar a determinados proveedores o a cerrar el negocio.
- Comerciantes que juegan en casinos, a quienes se fuerza para que acepten préstamos usureros.
- Empresa china tipo restaurante o centro comercial, a quien se le exige el pago extorsivo o incluso el cierre de negocio.

Destaca también la localización específica de la victimización, que se sitúa en determinadas áreas de Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía, con una especial incidencia en zonas de gran población china como son Cobo Calleja, Sabadell y Mataró.

⁶⁰⁹ Atendiendo a las entrevistas mantenidas con dos miembros de la Guardia Civil expertos en crimen organizado chino y un académico experto en cultura china.

1.3. b) Factores de vulnerabilidad en la comunidad china

En primer lugar, se deben reseñar las características⁶¹⁰ de la comunidad china que les hace vulnerables a los procesos extorsivos:

- Naturaleza hermética
- Ayuda entre la comunidad y relaciones informales
- Cultura basada en la supremacía del bien común
- Préstamos económicos entre la comunidad
- Comunidad emprendedora a través del negocio familiar
- Vinculación con su país de origen
- Proceso migratorio clandestino
- Amenaza e importancia del crimen organizado chino
- Importancia del juego en la cultura

La suerte de aislamiento social⁶¹¹ que caracteriza a la comunidad china asentada en Occidente obliga a que la resolución de conflictos se haga siempre dentro de la misma, debido a la importancia que tiene en su cultura la ayuda al compatriota y el bien común; esto, a su vez, facilita la proliferación de préstamos económicos entre los integrantes de la comunidad, al margen de las instituciones del país en el que residen, necesidad a su vez creada por la gran cultura emprendedora que les caracteriza. Además, se trata de una comunidad muy familiar y con una fuerte vinculación con su país de origen, lo que provoca fuertes lazos intercontinentales que la mafia china sabe aprovechar a través de mecanismos intimidatorios perpetrados desde China.

La mafia china proporciona una gran variedad de servicios ilícitos como son los préstamos ilegales, el transporte de la inmigración ilegal, el suministro de diversos bienes y mercancías a través de sus propios proveedores, así como la oferta de locales de juego y de prostitución. Al mismo tiempo sabe mantener una importante reputación intimidatoria que les permite, con una sola amenaza de aviso a una organización criminal o la autodenominación de ser miembro de la mafia, provocar un intenso temor en las víctimas.

⁶¹⁰ Más detalle sobre estos contenidos se puede encontrar en el 3.1.b) del tercer capítulo de la presente tesis, donde se hace una revisión de la literatura científica específicamente de la materia.

⁶¹¹ Este extremo está corroborado por el académico experto en cultura china entrevistado.

Además, en muchos casos las organizaciones criminales ostentan el monopolio del suministro de determinados productos que son los de mayor venta en los bazares, lo que agrava la vulnerabilidad de dichos negocios.

De esta manera, los factores más relevantes de vulnerabilidad que se han identificado en los negocios de la comunidad china, para su potencial victimización son:

- ✓ Interdependencia económica, social y laboral de los miembros de la comunidad.

La naturaleza hermética de la cultura china y la interdependencia entre sus miembros son dos factores que derivan en un escenario muy vinculado a la efectividad de los procesos extorsivos, pues los conflictos tienden a resolverse dentro de la comunidad, donde las organizaciones criminales pueden ostentar gran poder con impunidad.

- ✓ Ausencia de mecanismos de protección de las víctimas y falta de confianza en las autoridades locales y en la policía

La ausencia de mecanismos de protección de las víctimas y la falta de confianza en las autoridades locales y en la policía genera un clima de desprotección, esto facilita la aceptación de las exigencias extorsivas como única respuesta considerada por las víctimas.

- ✓ Economía sumergida y prácticas irregulares

En esta misma línea, la economía sumergida y las prácticas irregulares por parte de determinados negocios chinos (como no declarar todos los ingresos o no dar de alta a todos sus empleados) limitan las posibilidades de obtener apoyo de las instituciones porque no quieren poner en evidencia sus propias irregularidades. Ante esta situación, aceptar las exigencias extorsivas les permite continuar incumpliendo determinadas normativas.

En el marco descrito anteriormente, se han identificado determinados momentos en los que corren un riesgo especial las empresas que se asientan en la comunidad china:

- ✓ Los negocios que van a establecerse o la apertura de nuevos locales

Como se ha puesto de manifiesto en la exposición de los casos, la apertura de un primer o segundo local constituye una situación de riesgo ante las extorsiones monopolísticas, que obligan a cerrar o a contratar proveedores según el lugar donde esté ubicado el negocio.

- ✓ Las empresas que tienen éxito y en las que se aprecia una gran capacidad económica

Del mismo modo, el éxito de un restaurante chino en una región concreta posibilita que las organizaciones se lucren mediante la solicitud de pagos o a obligar al cierre para evitar la competencia.

- ✓ Empresarios que precisan fondos para su negocio

Por su parte, la necesidad de préstamos para el inicio o la adaptación del negocio es un momento vulnerable porque los grupos delictivos pueden exigir intereses usureros de forma ilegal para, posteriormente, iniciar un proceso extorsivo reclamando más dinero del pactado.

- ✓ Dueños de negocios que acuden a jugar a los casinos

La vinculación entre empresarios y juegos de apuestas facilita a las organizaciones la utilización en su beneficio de las- identificación de nuevas situaciones en que pueden ofrecer préstamos de usura a los jugadores.

- ✓ Bazares que requieren suministros

Por último, la necesidad de suministro de productos que tienen los bazares aporta clientes forzados a los proveedores vinculados con el crimen organizado chino.

Se trata de momentos de especial riesgo porque las organizaciones criminales chinas saben aprovecharse de sus compatriotas en cada uno de estos momentos para iniciar un proceso extorsivo.

Ahora bien, en este escenario resulta de interés exponer la respuesta del sistema penal ante los casos encontrados, tal como se presenta a continuación.

1.4. La respuesta desde el sistema penal a los procesos extorsivos analizados

De forma paralela al capítulo segundo, para el análisis de la respuesta legal desde el sistema penal, se han considerado dos aspectos diferenciados: los principales tipos penales en juego y las dificultades de investigación de los delitos, ambos se exponen a continuación.

1.4. a) Principales tipos penales en juego

El estudio conjunto de los tipos penales aplicables a los procesos extorsivos permite categorizar los delitos en cuatro grupos distintos, que se describen seguidamente.

a) Delitos principales

Están constituidos por los delitos aplicados de extorsión, robo con violencia e intimidación, amenazas y coacciones. Se trata de tipos penales que conforman de manera esencial los procesos extorsivos y, por tanto, al menos uno de ellos se aplica en la mayoría de los casos.

La extorsión es el delito por excelencia del presente estudio, puesto que incluye en sus diferentes elementos los principales componentes del proceso extorsivo, aunque con algunas dificultades: a) el comportamiento consistente en *exigir a una persona que realice u omita un negocio jurídico* va a estar invariablemente presente, en forma de pagos, contratación de proveedores o empleados, cierre de locales, etc., b) *la violencia o la intimidación* como medio para imponer condiciones, si bien está presente, en ocasiones resulta muy difícil de probar, especialmente cuando reviste la forma de intimidación ambiental⁶¹², c) *el perjuicio causado en el patrimonio* del obligado o en el de un tercero, si bien el acto o negocio jurídico es siempre en contra de la voluntad del empresario, el perjuicio no siempre va a aparecer de manera evidente, como puede ocurrir, por ejemplo, en organizaciones criminales chinas que tienen el monopolio del suministro de ciertos productos destinados a la venta en bazares o, en el caso de la mafia italiana que tienen capacidad para abastecer de bebidas alcohólicas a las Islas Baleares a precios de mercado, que pueden incluso mejorar los ingresos de la víctima, donde lo que se ve alterada es la libertad de decisión, más que la situación económica, d) en cuanto al *ánimo de lucro*,

⁶¹² Comentada tras el apartado 1.3 del segundo capítulo de la presente tesis.

constituye el elemento que se identifica con el fin último de las organizaciones criminales, por lo que es especialmente relevante. Ahora bien, nos encontramos con que, a pesar de ser un tipo penal muy concreto, no siempre podemos identificar en los procesos extorsivos todos los elementos que lo constituyen, para ello debemos acudir a otros delitos que contengan violencia o intimidación como elementos centrales.

El delito de robo con violencia e intimidación comparte los elementos de empleo de violencia o intimidación, así como el de ánimo de lucro y aparece en ciertos procesos extorsivos de inmediata actuación; tal es el caso cuando las organizaciones deciden que la ejecución del pago debe ser inminente sustrayendo dinero de la caja registradora o de productos del local como forma de pago extorsiva, mediando intimidación ambiental de una organización criminal con reputación en la zona. Así, resultan aplicables los diferentes elementos del tipo, que son: a) una *acción de apoderamiento*, cuando la organización accede al negocio o domicilio de la víctima para sustraer físicamente el pago requerido, b) *una cosa mueble*, por lo que este tipo penal solo será aplicable en los casos de extorsión por protección donde se reclame un pago o un objeto específico, no así en el supuesto de los negocios jurídicos propios de la extorsión monopolística y laboral, c) que la cosa sea *ajena*, es decir, que exista una víctima a quien se le separa de su posesión, d) que el apoderamiento se realice *sin consentimiento* de la persona que pueda disponer de la cosa conforme a la ley y e) que exista el *ánimo de lucro* por parte del sujeto activo.

Estos dos delitos requieren elementos que en ocasiones presentan serias dificultades probatorias. Se trata de casos donde las principales evidencias se basan en los testimonios de las víctimas, que en muchas ocasiones se niegan a testificar en el juicio oral⁶¹³, no sólo para evitar posibles amenazas o coacciones, sino porque éstas ya se han producido y han inducido a la víctima a no seguir con el proceso.

Sin embargo, sí suelen ser aplicables con mayor facilidad las amenazas condicionales y las coacciones. Estos tipos han actuado de forma residual, dada su estructura subsidiaria⁶¹⁴, tal como se ha puesto de manifiesto en la exposición correspondiente a los casos de procesos extorsivos, al estar presentes siempre en los delitos que contengan los elementos de violencia o intimidación.

⁶¹³ Se trata de supuestos muy frecuentes en los casos de extorsión perpetrados a través de mecanismos de intimidación del crimen organizado, sustentadas por acciones verbales, donde la ausencia de evidencias físicas hace recaer el peso de la prueba en el testimonio de la propia víctima o de un testigo, tal como se explica en el apartado 1.2 del capítulo tercero del presente trabajo.

⁶¹⁴ Aspecto explicado a nivel teórico en el punto 1.3. del capítulo segundo de la tesis que se presenta.

De esta forma, cuando se producen las exigencias de pago o de contratación como condición para la no realización del mal constitutivo de delito, que generalmente consiste en causar la muerte al empresario o a su familia, sería aplicable el delito de amenazas condicionales en el caso de que no se pueda probar que la condición es un acto o negocio jurídico.

Además, para reforzar o acelerar el propósito del primer mensaje, el grupo criminal emplea la violencia, para obligar o impedir a la víctima la realización de determinadas conductas, con lo que sería aplicable un delito de coacciones, aunque estemos ante un proceso extorsivo con más elementos, nuevamente por la dificultad probatoria que tienen esos otros elementos.

Ahora bien, si las coacciones se prolongan en el tiempo y suponen una privación de libertad para la víctima, cabría hablar de un delito de detenciones ilegales o de secuestro. Este último delito se ha perpetrado de forma más inusual, pero constituye una parte esencial del mensaje extorsivo ante posibles impagos de deudas o frente al rechazo de las condiciones extorsivas.

b) Delitos secundarios y accesorios

Existen otros delitos que forman parte de los *modus operandi* típicos de las organizaciones criminales cuyo cometido es extorsionar, que se pueden definir como secundarios o como accesorios⁶¹⁵.

Los delitos secundarios aplicados son:

La estafa, como forma no violenta de aproximación a determinadas víctimas poco accesibles, resulta un mecanismo muy efectivo de comenzar el contacto porque, mientras la víctima no detecta el engaño e inducido por el error, realiza diversos actos de disposición patrimonial que ocasionan un perjuicio para ella misma, mientras que la organización se lucra de forma dolosa. Cuando la víctima detecta el engaño, la organización comienza el proceso de intimidación utilizando la información y las formas de contacto obtenidas durante la fase previa.

Por otro lado, las lesiones derivadas de los actos violentos en la fase de intimidación permiten reforzar el mensaje extorsivo de manera más creíble porque causan un menoscabo de

⁶¹⁵ Más ampliamente descritos en el apartado 1.4 del segundo capítulo de la presente tesis.

la integridad física de la víctima. La máxima expresión detectada de esta violencia culmina en el delito de homicidio, que se ha identificado en un solo caso.

Los daños, al igual que las lesiones, son la expresión de la violencia para consolidar el mensaje extorsivo, pero se perpetra contra la propiedad del empresario. Normalmente consiste en el destrozo de elementos valiosos del negocio como son los ordenadores o los aparatos de aire acondicionado, en los casos de la muestra.

Los delitos accesorios son:

Por un lado, el incendio, mediante la acción de prender fuego al local de la víctima. Con frecuencia, se desencadena un incendio descontrolado, que puede implicar peligro para la integridad de la víctima, sus familiares y en ocasiones los vecinos colindantes. No se trata de un intento de dañar a las víctimas puesto que se perpetra cuando estas no se encuentran dentro del negocio; la intención es causar un temor suficiente para doblegar su voluntad y que acepten las exigencias extorsivas.

Por otro lado, la denuncia falsa y simulación de delito son herramientas muy efectivas, especialmente para extranjeros en situación irregular que son amenazados con denunciar su situación, y en ocasiones son efectivamente denunciados ante la policía, pero por delitos violentos que el grupo atribuye de manera clara e individualizada a determinadas personas que no cumplen con las exigencias extorsivas y que pueden llegar incluso a ser condenados a prisión, como ocurrió en uno de los casos de la muestra analizada.

c) Delitos de organización

Situados en el ámbito de la delincuencia organizada, los delitos de organización y grupo criminal son aplicables, aunque en contadas ocasiones.

Las organizaciones y grupos criminales han podido ser condenados por estos delitos después de haberse realizado importantes operaciones policiales, que han sido capaces de detectar agrupaciones estables que, de forma coordinada, se habían repartido las tareas con la finalidad de cometer delitos como la extorsión, las amenazas, las coacciones, las denuncias falsas y simulaciones de delito, las estafas y la usurpación de funciones públicas.

En cambio, el delito de asociación ilícita, antecesor de los delitos de organización y grupo criminal, ha sido aplicable a un solo caso de la muestra y corresponde a una agrupación de gran

tamaño de forofos violentos del Fútbol Club Barcelona, que empleaba los procesos extorsivos sistemáticamente para financiarse y así poder mantener su estilo de vida.

d) Otros delitos no directamente vinculados a los procesos extorsivos

A lo largo del estudio de los casos analizados, se han detectado autores de procesos extorsivos de perfiles muy diferentes, que en determinadas ocasiones actúan de manera conjunta haciendo aplicable el delito de organización o grupo criminal; en otras los procesos se perpetran mediante la actuación de una sola persona que se identifica como integrante de la mafia, o incluso pueden cometerse a través de ramas de organizaciones especializadas en la extorsión. Lo que muchos de estos perfiles tienen en común es que los procesos extorsivos son una de sus principales fuentes de financiación, aunque no tiene por qué ser la única.

En nuestro país, el delito no vinculado a la extorsión más tradicional es el tráfico de drogas que constituye una manera de obtener importantes beneficios además de, ocasionalmente, poder gestionar préstamos a empresarios debido a las fuertes cantidades de efectivo que estas organizaciones manejan a través de tales actividades.

Cabe señalar que en uno de los casos estudiados, el proceso extorsivo se perpetra por una organización criminal conocida a nivel internacional, que, aunque no sea objeto del caso judicial concreto de la muestra, es un ejemplo de la diversificación de las actividades delictivas que llevan a cabo los grupos, ya que, este en concreto, también se dedicaba a la trata de seres humanos para su explotación sexual, a los robos con violencia, al uso de armas y a cometer homicidios, entre otras actuaciones.

Por otro lado, el delito de usurpación de funciones públicas permite a las organizaciones criminales hacerse pasar por autoridades con capacidad para intimidar a las víctimas extranjeras, forzando así el cumplimiento de las exigencias extorsivas.

Por último, las actividades de autoprotección encaminadas a la impunidad de los autores incluyen las amenazas y coacciones a la víctima para que retire la denuncia, así como el delito de obstrucción a la justicia, intentando influir con violencia e intimidación en la víctima para que modifique la actuación procesal en marcha tras la denuncia.

1.4. b) Dificultades de investigación de los delitos

Tal como evidencian los treinta casos analizados, si bien los procesos extorsivos ponen en juego diversos tipos penales vinculados con la violencia, lo cierto es que la intimidación es el elemento esencial de su efectividad; de hecho, como ya se ha mencionado previamente, cuanto mayor es la reputación de la organización criminal en la zona, menor necesidad tiene de emplear la violencia debido a que la simple exigencia verbal acompañada de una amenaza induce a la víctima a una situación de temor suficiente, lo que supone una mayor efectividad de su actividad lucrativa.

En contraste con la violencia, la intimidación en ningún caso deja evidencias físicas, especialmente debido a que las pequeñas y medianas empresas victimizadas no cuentan con cámaras de grabación (CCTV) ni con micrófonos que aporten más pruebas que las testificales.

Además, los efectos intimidatorios de las prácticas extorsivas pueden limitar estas pruebas testificales por el silencio forzado de las víctimas, que la organización consigue mediante amenazas de venganza antes y después de la denuncia, lo que coarta no solo el inicio de la instrucción si no, en ocasiones, también el enjuiciamiento de los hechos del caso, dado que las víctimas habitualmente retiran la denuncia antes del juicio oral⁶¹⁶.

Así, el fuerte efecto intimidatorio que producen tales conductas provoca tanto la impunidad de sus autores frente a los múltiples delitos graves cometidos, como la imposibilidad de conocer determinados hechos por parte de las autoridades policiales y las instituciones judiciales. En este escenario, la consecuencia final es el total ocultismo del fenómeno real de los procesos extorsivos perpetrados contra las empresas en el ámbito de la delincuencia organizada, dado que policías y jueces suelen disponer, para la investigación de los delitos, de una sola víctima intimidada por una o dos personas, respaldadas por un grupo delictivo, que afirman no ser las únicas, que se sienten amenazadas por una organización criminal, y que siente un gran temor debido a la reputación de esta. Todo lo descrito limita enormemente la capacidad de actuación por parte de las autoridades policiales y judiciales, ya que no pueden iniciar la investigación de ningún caso sin que exista una denuncia previa. La consecuencia de lo expresado anteriormente es que la organización permanece en la clandestinidad por el silencio de la mayoría de las víctimas.

⁶¹⁶ Según lo explicado por expertos en crimen organizado chino de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El estudio pone de manifiesto que existen grandes organizaciones criminales con mucho poder en grandes zonas urbanas, aunque también funcionan pequeñas organizaciones que controlan reducidas áreas urbanas a través de métodos muy similares a los utilizados en los procesos extorsivos expuestos que generan un gran temor en los empresarios de la zona y afectan tanto a la seguridad como al respeto a la legalidad en la región.

Además, la victimización de personas físicas que son propietarios de negocios lleva consigo la victimización de personas jurídicas, que carecen de sistemas de compensación y de asistencia especializada en el ámbito empresarial, lo que puede dificultar las denuncias y la correcta protección de las víctimas, especialmente cuando se trata de organizaciones criminales con control territorial.

Por último, como ya ha quedado patente en más de una ocasión, el hecho de que estos procesos de victimización afecten a determinadas comunidades extranjeras dificulta aún más la investigación. Si bien este estudio en términos de análisis de comunidades afectadas se centra en la nacionalidad china, también se ha identificado la existencia de procesos extorsivos posiblemente sistemáticos en determinadas regiones que conciernen a otras comunidades asiáticas como la pakistaní o la india, aunque se ha analizado de forma mucho más superficial, puesto que no formaba parte de los objetivos del estudio.

En cualquier caso, los integrantes de la comunidad china asentada en España cuentan con fuertes barreras lingüísticas y culturales, y suelen desconocer las instituciones a las que deben acudir en caso de necesitar protección, o sienten una gran desconfianza en ellas. Además, los miembros de estas comunidades están estrechamente conectados entre sí; suele suceder, por ejemplo, que las víctimas conozcan a los autores porque frecuenten los mismos lugares de ocio, o porque compartan negocios de suministro; más allá de las relaciones de parentesco o laboral que son insuficientes para responder a la compleja e intensa realidad de la vinculación social en la comunidad china, como se ha expuesto. Así, en la SAP Barcelona de 27 de noviembre de 2012 se alega “que no existe entre acusados y víctimas ningún tipo de relación de parentesco o laboral que suponga una relación continuada entre ellos y, además, se ha constatado que actualmente las referidas víctimas se hallan en paradero desconocido por lo que se ignora su lugar de residencia” para rechazar la prohibición de aproximación y comunicación como pena accesoria solicitada por el fiscal, lo que pone de manifiesto es desconocimiento del juez de la intensa vinculación que existe dentro de la comunidad china asentada en España.

Por estas razones, los procesos extorsivos pueden quedar establecidos como parte de un proceso de asentamiento llegando a ser aceptados con normalidad en la comunidad, lo que permite a estas organizaciones criminales seguir delinquir y lucrarse a costa de sus compatriotas en la clandestinidad.

2. Conclusiones del estudio: propuestas de mejora en la lucha contra los procesos extorsivos

Como objeto de investigación de la presente tesis, se han analizado los procesos extorsivos a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada desde una perspectiva criminológica⁶¹⁷ y legal⁶¹⁸, describiendo el fenómeno como actividad de financiación del crimen organizado e identificando los tipos penales en juego como parte del *modus operandi* de cada tipología extorsiva. Asimismo, se han examinado el contexto legal y determinadas implicaciones en el ámbito de la investigación, instrucción y enjuiciamiento. También se ha estudiado el marco metodológico⁶¹⁹ de un delito latente pero claramente infra estudiado que presente importantes problemas de investigación. Para tratar de profundizar en su investigación, se ha elaborado una propuesta metodológica⁶²⁰, que se ha implementado en forma de estudio empírico⁶²¹ en el escenario español. Por último, se han expuesto los principales aspectos de la experiencia italiana⁶²² en la lucha contra la extorsión mafiosa propia de su territorio, dejando patentes algunas medidas específicas adoptadas contra los procesos extorsivos.

El trabajo se ha desarrollado teniendo como punto de partida e incorporando la experiencia adquirida mediante el estudio de un proyecto europeo de investigación denominado CEREU: Countering Extortion Racketeering in the UE. Dicho aprendizaje fue posible porque se celebraron diversos seminarios con el objetivo de aportar los conocimientos obtenidos en dicho proyecto, así como por la difusión de los resultados que se divulgaron en

⁶¹⁷ En el primer capítulo de la presente tesis.

⁶¹⁸ En el segundo capítulo.

⁶¹⁹ En el tercer capítulo.

⁶²⁰ En el cuarto capítulo.

⁶²¹ En los capítulos quinto y sexto.

⁶²² En el séptimo capítulo.

forma de informes de propuestas de mejora en la Unión Europea. Los seminarios tuvieron lugar en Bulgaria, Italia y España.

Pues bien, todo ello ha permitido la elaboración de este último apartado del capítulo final de la presente tesis, que expone las lecciones aprendidas derivadas de todo el estudio, una serie de propuestas de protección de tipo legal, económico, empresarial y social para mejorar la lucha y prevención de los procesos extorsivos analizados en España, y finalmente describe algunos de los principales retos de futuro a los que nos enfrentamos.

2.1. Lecciones aprendidas

Es importante destacar algunos aspectos esenciales que se han identificado a raíz de un profundo estudio de los procesos extorsivos⁶²³, que han permitido conocer determinadas notas características del fenómeno y que fundamentan la elaboración de medidas efectivas para la protección de las víctimas.

Las principales lecciones aprendidas son:

- ✓ La existencia de una tasa muy baja o nula de denuncia de los hechos, debido al miedo de las víctimas, lo que da lugar a que sea un fenómeno latente y poco estudiado.

Como ya se avanzaba en los primeros capítulos de la tesis, los testimonios de víctimas y profesionales han puesto de manifiesto que la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada es una forma latente de delito, sobre el que hay un gran desconocimiento que conduce a la creencia de que la incidencia del fenómeno en España es mínima, lo que dificulta conocer su escala real. Este es

⁶²³ Derivadas de las siguientes entrevistas con:

a) cuatro miembros de la Policía Nacional expertos en extorsiones, b) cuatro miembros de la Guardia Civil expertos en extorsiones, c) un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado, d) un miembro de la Guardia Civil experto en crimen organizado, e) un miembro de la Policía Nacional experto en crimen organizado chino, f) dos miembros de la Guardia Civil expertos en crimen organizado chino, g) un académico experto en cultura china. Así como de los siguientes seminarios: a) “La extorsión del crimen organizado chino” el 21 de abril de 2016 en la Universidad Autónoma de Madrid, b) “Conferencia sobre la lucha contra la extorsión”, tuvo lugar el 29 de septiembre de 2016 en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, y c) “La extorsión del crimen organizado en España. Factores de vulnerabilidad para las empresas”, que tuvo lugar el 21 de octubre de 2016 en la Sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Todos ellos señalados en el apartado 2.c.) del capítulo cuarto del presente trabajo.

el resultado de la clandestinidad propia de las actividades de financiación del crimen organizado que, a través de mecanismos de intimidación a las víctimas para silenciarlas logra una gran impunidad, dado que su testimonio suele ser la única prueba de los hechos. Así, cuando una víctima logra denunciar, lo habitual es que manifieste que existen numerosas víctimas en su situación que no desean poner en conocimiento de las autoridades los mismos hechos, debido siempre al enorme temor que provocan las amenazas y al miedo que produce la reputación de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

- ✓ El aislamiento social en las comunidades extranjeras y el desconocimiento y la desconfianza de la protección que las instituciones españolas les dan.

El problema de la baja tasa de denuncias se agudiza cuando las prácticas extorsivas se cometen en el seno de comunidades extranjeras, pues disminuye aún más la visibilidad del fenómeno y resulta más complicado que los organismos destinados a la protección de las víctimas actúen. Esto se debe esencialmente al desconocimiento y la desconfianza de la protección que pueden dar en casos de víctimas extranjeras.

- ✓ La intimidación ambiental y el silencio social

Son dos elementos clave para la efectividad en las exigencias extorsivas y la impunidad de las organizaciones criminales: la capacidad de intimidación ambiental de las organizaciones criminales puede generar un silencio social⁶²⁴ que permita no sólo perpetrar las prácticas extorsivas con impunidad si no generando un clima de inseguridad que limita las alternativas a la aceptación de las exigencias e impide a las víctimas y testigos poner en conocimiento de las autoridades los delitos cometidos por los extorsionadores.

- ✓ La importancia del enfoque proactivo desde las autoridades policiales y judiciales

⁶²⁴ Como se ha visto en el apartado 2.3. del segundo capítulo del presente trabajo, es el silencio al que deben sumarse miembros, colaboradores y víctimas de una organización criminal, que genera un entorno de inseguridad, y deriva en el aislamiento ante el rechazo de las exigencias extorsivas, dando lugar a fuertes reticencias para hacer pública la oposición ante estas prácticas.

El tradicional enfoque de respuesta reactiva de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, que inician una investigación sobre un incidente extorsivo únicamente cuando la víctima denuncia los hechos, no permite una lucha efectiva contra el fenómeno. Un enfoque alternativo es el adoptado actualmente por Italia, que incluye una vigilancia policial proactiva, y unas medidas específicas de prevención y apoyo a las víctimas, que facilita los canales de comunicación entre instituciones públicas y víctimas, así como diferentes formas de colaboración para apoyar la resistencia de los empresarios frente a las exigencias extorsivas. La adopción de este enfoque proactivo es resultado de una profunda comprensión de los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada, y de los mecanismos de intimidación y clandestinidad contenidos en ellos.

- ✓ El papel esencial de las asociaciones de protección a las víctimas (como en Italia Adiopizzo y Libera) para la lucha efectiva y la prevención.

El papel de las asociaciones en contra de la extorsión ha resultado vital en un país con una tradición mafiosa importante como es Italia. Estas entidades estrechan los canales de colaboración entre las autoridades y los empresarios que son potenciales víctimas, proporcionando un escenario con gran fluidez de información, de formación y de investigación a través de la celebración de eventos y el desarrollo de proyectos conjuntos. Además, son una figura que genera más confianza en las víctimas y que facilita los canales de comunicación en la interposición de denuncias y para posibilitar la implementación las labores de protección e instrucción propias de las instituciones públicas, actuando como soporte entre los empresarios atemorizados por las amenazas de venganza de la mafia y las autoridades que deben recabar información sobre los hechos que se han de investigar.

- ✓ La gravedad de ciertos mecanismos de corrupción política y económica, pues son elementos de gran riesgo que limitan las alternativas a la aceptación de las exigencias extorsivas, aunque encontrados de forma muy aislada en la muestra.

Por último, los mecanismos de corrupción de funcionarios y empresarios suponen un importante refuerzo para las organizaciones criminales, que una vez se hacen con el control territorial en base a mecanismos corruptos, es realmente

difícil frenar las dinámicas extorsivas. En este sentido, la corrupción ejerce una fuerte presión no solo sobre la víctima para que acepte las exigencias extorsivas como única respuesta posible, sino que propaga y refuerza un importante mensaje de ilegalidad y violencia, que induce a los empresarios de la zona a aceptar y normalizar la imposición de las condiciones extorsivas, como un gasto más y un riesgo añadido a su actividad económica. Esta forma de influir en la cultura de la legalidad y en la libertad empresarial, puede generar un fuerte impacto democrático en las instituciones que deben proteger tales valores, quedando difuso el papel real que adoptan las Administraciones públicas en la lucha contra las organizaciones criminales que tienen el control territorial.

En este contexto, se debe tener en cuenta que los factores de vulnerabilidad tienen vocación de carácter universal y son aplicables a diversos sectores económicos y diferentes comunidades de origen étnico o racial (o que comparten una nacionalidad). En cambio, las medidas de protección son más específicas de cada país y atienden al momento del análisis, puesto que vienen marcados por los mecanismos institucionales, legislativos y civiles establecidos en cada región. A continuación, se expone una serie de medidas de protección específicas aplicables a los concretos escenarios estudiados.

2.2. Medidas de protección de los sectores y las comunidades

Las lecciones aprendidas y en especial, el extraordinario valor de las aportaciones de autoridades policiales y judiciales tanto españolas como italianas, así como de las víctimas y asociaciones de empresarios de ambos países, han permitido la elaboración de medidas de protección adaptadas a los problemas y las necesidades identificados.

Sobre las conductas extorsivas en el ámbito de la delincuencia organizada, resultan de gran interés las palabras de los fiscales Gómez Recio y Espina Ramos (2005, p.2):

“A la vista del poder que manejan estos entramados criminales, la única forma eficaz para culminar con éxito el proceso penal es la de garantizar adecuada y efectivamente la protección de las personas que en el mismo intervienen.”

Pues bien, en este sentido, la protección de las víctimas es en realidad lo que va a permitir la interposición y mantenimiento de la denuncia hasta el juicio oral, que será lo que realmente aporte un conocimiento empírico del problema, especialmente a los cuerpos policiales e instituciones judiciales, que a su vez facilitaran una mayor especialización en la materia motivada por la toma de conciencia que se producirá a partir de la detección de la gravedad que entraña la incidencia de los procesos extorsivos en determinadas regiones.

De esta forma, si logramos garantizar no sólo la seguridad sino también la percepción de seguridad en las víctimas, podremos avanzar en el estudio del fenómeno. Para ello, se proponen tres tipos de medidas que afectan a diversos ámbitos del contexto del empresario victimizado: las medidas legales que refuercen la protección institucional, las medidas económicas y empresarias que protejan la continuidad del negocio y la libertad de decisión del empresario, así como la adopción de medidas sociales, que aporten un clima de confianza y generen una cultura antiextorsión en las zonas afectadas.

2.2. a) Medidas legales

En línea con los países europeos de nuestro entorno (Rose-Ackerman, 2010), la legislación penal española no contempla la perpetración de delitos de extorsión por parte de los grupos organizados de forma explícita, sino que tipifica su comisión de forma individual exclusivamente. De esta forma, quedan algunas lagunas de protección frente a la actividad extorsiva no cubiertas específicamente por nuestras leyes.

Es relevante en esta materia la implicación del derecho penal, pues tal como señala Vicente (2004a), el principio de legalidad penal y su vigencia real y efectiva es lo que permiten considerarlo un auténtico derecho democrático.

Las recomendaciones que se exponen a continuación responden a dos objetivos principales: a) potenciar el incremento de denuncias de incidentes extorsivos, para alcanzar una mayor detección de procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada por parte de los cuerpos policiales y mejorar así su visibilidad, y b) prevenir, impedir y controlar la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada para reducir el impacto que producen sus consecuencias.

Estas medidas en forma de recomendación pueden agruparse en tres categorías:

I) Recomendaciones específicas sobre el sector

Atendiendo a la revisión teórica y empírica del capítulo quinto, y en línea con lo señalado por Sciandra y Iafano (2016) y Rusev et cols. (2016), las recomendaciones específicas en la lucha contra los procesos extorsivos sobre el sector son las siguientes:

- ✓ Incrementar la sensibilización sobre las nuevas formas de extorsión.
- ✓ Acercarse a negocios vulnerables a través de campañas de información y establecer puntos de ayuda o líneas telefónicas de emergencia.
- ✓ Promover la denuncia de las víctimas y otorgar protección adecuada cuando se produce la denuncia por extorsión.
- ✓ Apoyar a las empresas y asociaciones que puedan aportar asistencia a las víctimas de extorsión.
- ✓ Incrementar las medidas anticorrupción dentro de la policía y de las instituciones públicas que controlan los sectores específicos más vulnerables.
- ✓ Dar apoyo y protección financiera a las víctimas a través mecanismos de compensación económica.

Un aspecto muy relevante en esta materia es la concienciación sobre la incidencia de los procesos extorsivos, y especialmente de sus mecanismos de intimidación, a través de la formación y el intercambio de experiencias con policías de otros países. Ello permitirá a las autoridades policiales y judiciales identificar de forma más completa la realidad del fenómeno y adecuar así su respuesta mediante las herramientas legales con las que ya cuentan.

Es importante también la elaboración de campañas informativas que adviertan del problema a las potenciales víctimas y aproximen las instituciones públicas a la ciudadanía, iniciativas que permitirán a las potenciales víctimas identificar alternativas de protección frente a los procesos extorsivos. Igualmente deberían establecerse puntos de ayuda o líneas telefónicas de emergencia a los que recurrir cuando se rechacen las exigencias extorsivas y se produzca la amenaza del crimen organizado. Adoptar estas medidas alejará la cultura de la ilegalidad proporcionando a los empresarios una visión de la importancia que tiene la libertad para la toma de decisiones relacionadas con sus actividades económicas.

Además, para ser capaces de comprender el poder intimidatorio que producen las amenazas de una organización criminal, es indispensable creer en el temor que viven las víctimas ante las palabras de los extorsionadores. En este sentido, sería recomendable que fuera posible la aplicabilidad de los delitos contenidos en los procesos extorsivos para la adopción de las medidas cautelares ya existentes, como la prohibición de aproximación y comunicación prevista en el artículo 544 bis de la Lecrim, u otras medidas de protección física. Ello proporcionará a las víctimas confianza en las instituciones y reducirá su temor a denunciar y a mantener la denuncia hasta llegar al juicio oral.

Por otra parte, establecer normativas específicas de protección y campañas de visibilización a los empresarios que rechacen la extorsión otorgaría un importante apoyo a las víctimas resistentes, especialmente cuando se trata de agrupaciones de asistencia especializada como asociaciones antiextorsión promoverá la resistencia colectiva, asunto de vital importancia que se aborda en la última agrupación de medidas, las de tipo social.

Además, toda medida de lucha contra la corrupción producirá un gran impacto en contra del crimen organizado que emplee a la Administración pública como parte de su mecanismo de intimidación y financiación. Por ejemplo, el establecimiento de protocolos de identificación de posibles prácticas de corrupción en determinados sectores, a modo de *banderas rojas* (*bandierine rosse o red flag*⁶²⁵) puede ser una forma eficaz de prevención y de detección precoz del delito⁶²⁶.

Por último, es necesario también establecer normativas de protección económica que permitan la continuidad de las empresas afectadas económicamente por los procesos extorsivos y si, además, aquellos activos confiscados al crimen organizado se destinan a ayudas sociales para las víctimas, se podrá regenerar el clima de confianza en las instituciones públicas. Este punto es tan relevante que se desarrolla en el apartado siguiente, sobre medidas económicas y empresariales.

⁶²⁵ Como ya se ha comentado en el apartado 3.2 del capítulo séptimo, se trata de indicadores de movimientos sospechosos o actividades de especial riesgo, que pueden poner en marcha protocolos de investigación preventivos o de actuación reactiva ante determinadas actuaciones empresariales o institucionales.

⁶²⁶ Ahora bien, para la concreción de los indicadores de tales banderas sería necesario un interesante y amplio estudio sobre corrupción.

II) Recomendaciones específicas sobre la comunidad

Basadas en el estudio de la comunidad china tanto teórico y como empírico expuesto en el capítulo sexto, y en línea con lo expuesto por Becucci (2015) y Nannucci (2015), las recomendaciones de lucha contra los procesos extorsivos en las comunidades extranjeras son las siguientes:

- ✓ Implementar estrategias de vigilancia de la comunidad constituida por estos grupos de determinado origen étnico, racial o de una concreta nacionalidad.
- ✓ Promover la denuncia de los casos de extorsión a través de campañas especializadas.
- ✓ Dar formación especializada a autoridades policiales y judiciales para fomentar un mejor entendimiento de la naturaleza de las extorsiones intra-étnicas.
- ✓ Reclutar y formar a miembros de la policía de otras nacionalidades afectadas por la extorsión.

La implementación de estrategias de vigilancia de la comunidad debe ir acompañada de la mejora de las vías de comunicación y colaboración entre las instituciones públicas y las comunidades extranjeras mediante el respeto a su cultura y especialmente la adaptación de los mensajes a su idioma. Asimismo, el patrullaje conjunto con policías de su misma nacionalidad en las zonas de mayor asentamiento puede generar un importante intercambio de experiencias y conocimientos y fomentar la mutua confianza.

Además, promover campañas de información especializadas puede aproximar a estos colectivos a los recursos de protección que las instituciones públicas ponen a su disposición, como, por ejemplo, elaborando carteles y vídeos de concienciación y prevención en su idioma, así como organizando eventos o celebrando fechas relevantes en su cultura.

También resulta imprescindible la formación especializada de jueces, fiscales y policías en determinadas culturas, pues favorece un mejor entendimiento de los hechos declarados y una mayor comprensión de los conflictos que se producen dentro de una comunidad extranjera⁶²⁷.

⁶²⁷ Por ejemplo, tal como relatan Chin et cols. (1992) en los procesos extorsivos del crimen organizado chino, la solicitud de pagos a empresarios compatriotas asentados en EE. UU., genera un mayor poder

Por último, trabajar de forma conjunta a nivel policial con fuerzas de orden de otros países aporta una valiosa información y supone un aprendizaje indispensable en materia de represión, especialmente cuando se trata de fenómenos vinculados con el crimen organizado, debido a las connotaciones transnacionales que éste tiene.

III) Recomendaciones generales

Una vez expuestas las recomendaciones derivadas de los estudios empíricos sobre la extorsión en España, la aportación de la experiencia italiana en materia de represión de la extorsión mafiosa resulta de gran interés como propuestas de mejora de tipo general.

En el *ámbito ejecutivo*, concretamente a nivel policial, existen dos iniciativas que han resultado ser efectivas en la lucha contra la extorsión. Todas ellas consideran la extorsión como parte de las actividades de la delincuencia organizada y son aplicables tanto a casos de la mafia italiana como al crimen organizado chino.

- ✓ Un comisario especial a cargo de la coordinación de las iniciativas antiextorsión de ámbito nacional, creado por el Ministerio del Interior.
- ✓ Unidades especiales dentro de los cuerpos policiales para hacer frente al crimen organizado y a la extorsión.

Si bien en el nuestro territorio la extorsión es considerada como parte de las actividades de la delincuencia organizada, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del capítulo segundo, no existen cargos ni unidades especializadas en estas prácticas; es decir, contamos con expertos en crimen organizado y con expertos en extorsión, pero como pone de manifiesto el punto 3.2 del capítulo segundo, son especialidades separadas.

En el *ámbito judicial* italiano, existen una serie de decisiones y medidas contra la financiación del crimen organizado que establecen el marco de las medidas económicas⁶²⁸ de protección a los empresarios victimizados. Estas medidas que permiten a los jueces luchar

intimidatorio cuando la cifra demandada hace alusión al número 8: negar la aportación de 88 o de 888 dólares a la organización criminal puede terminar con su buena fortuna debido a sus creencias sobre este número, al que se considera el número de la buena suerte, evitando así el posible infortunio derivado del rechazo ante la solicitud de pago.

Otro ejemplo claro, ya expuesto, es la fuerza intimidatoria de los ritos de vudú para ciertas comunidades nigerianas asentadas en España.

⁶²⁸ Que se abordan en el apartado 2.2.b del presente capítulo.

contra la financiación del crimen organizado, se basan en las disposiciones expuestas en el capítulo séptimo sobre la experiencia italiana, y son las siguientes:

- ✓ La confiscación de bienes previa a la condena de miembros de una organización criminal.
- ✓ La reutilización social de activos procedentes de cualquier actividad del crimen organizado.
- ✓ La introducción de los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada como parte de la materia de especialización de fiscales y jueces contra la corrupción y la criminalidad organizada.

Este tipo de medidas no existen en el escenario español de la lucha contra la criminalidad organizada, como pone de manifiesto el apartado 3 del capítulo séptimo.

En el *ámbito legislativo* italiano se han desarrollado leyes específicas de lucha contra la extorsión mafiosa, derivadas de la consideración de los procesos extorsivos como actividad desarrollada por la criminalidad organizada.

- ✓ La implementación de programas especiales de protección de testigos para las víctimas que testifican contra el crimen organizado: es la medida de protección física más importante y eficaz (Sciandra y Iafano, 2016), pues el testimonio de las víctimas es la única fuente de información accesible, y garantizar su seguridad animará a otras víctimas a denunciar, al ver protegida su integridad física y su familia a través de un programa especial que sea efectivo, y demuestre que se pueden rechazar las extorsiones del crimen organizado sin sufrir las consecuencias de las amenazas de venganza cuando se produce la denuncia.

España cuenta con un plan de protección de testigos, que pueden ser aplicados de forma similar ante casos de procesos extorsivos perpetrados por organizaciones criminales, aunque no se ha identificado la aplicación de este en ninguno de los casos de la muestra. Teniendo en cuenta la experiencia italiana expuesta en el séptimo capítulo, resultaría de gran eficacia la potenciación de un plan de protección de testigos, cuyo análisis superaría los objetivos del presente estudio.

Por otra parte, existen otro tipo de iniciativas que no provienen de la experiencia italiana, que serían de interés para el trabajo que se presenta.

Así, sería deseable la elaboración de un protocolo de identificación de procesos extorsivos del crimen organizado, que permita a autoridades policiales y judiciales especializadas poner en marcha las medidas de protección tanto físicas y como económicas. El protocolo deberá contener los siguientes criterios para identificar un proceso extorsivo criterios de consideración (Rusev et cols., 2016): a) violencia o intimidación, b) un perjuicio patrimonial para la víctima, c) continuidad del proceso extorsivo en el tiempo.

Del mismo modo, deberá contener las siguientes pautas de actuación-comportamiento en el ámbito de la delincuencia organizada: a) la actuación de un mínimo de tres personas involucradas o de una persona que se identifique como parte integrante del crimen organizado y b) la afectación a un mínimo de dos negocios.

Esta información se puede obtener de la declaración de una sola víctima que denuncie un proceso extorsivo en una región concreta y ponga en marcha el protocolo de identificación que, en caso de cumplir los criterios, active las medidas de protección oportunas.

Además, existen actualmente determinadas propuestas de mejora en materia legislativa penal en España. Destaca la presentada por la Fiscalía General del Estado (2017) en línea con la lucha del fenómeno que esta tesis presenta.

Tales son: a) la mejora del desarrollo legislativo de protección de las víctimas, b) introducción del tipo penal de incremento patrimonial injustificado⁶²⁹ y c) Introducción de un

⁶²⁹ Por tratarse de un tema de especial interés, aunque supere los objetivos del presente apartado, conviene al menos citar la argumentación que la Fiscalía General del Estado (2017) aporta:

“Este tipo penal tendría aplicación no sólo en los supuestos de criminalidad organizada, sino también en las investigaciones relativas a los delitos económicos y de corrupción, competencia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Respecto de estos últimos, crear la figura delictiva que castiga el enriquecimiento ilícito de las autoridades o de los funcionarios que participan del ejercicio de la función pública, representaría un avance en aquellos casos en los que desde esa función pública hayan participado en actos de corrupción y hubieran resultado absueltos.

En consecuencia, este tipo penal se configuraría como un tipo penal de peligro abstracto, siendo, además, un tipo subsidiario que sería sólo aplicable ante la falta de otro delito contra la Administración Pública.

La construcción básica del tipo penal pivotaría sobre la existencia de un incremento patrimonial relevante que, al modo de las exigencias de los indicios del blanqueo de capitales expuestos por la jurisprudencia

subtipo agravado en el delito de organización criminal previsto en el artículo 570 bis, del Código Penal. Este último punto afecta de forma sustantiva a marco legal analizado, pues lo que se propone es un subtipo penal agravado cuando la organización presenta un carácter mafioso⁶³⁰.

Si bien se trata de propuestas que requieren un estudio profundo de la materia en concepto de implementación y aplicabilidad, lo cierto es que sugieren la necesidad de análisis profundos sobre las distintas actividades del crimen organizado en España, como es el caso de la presente tesis.

2.2. b) Medidas económicas y empresariales

Si bien se ha explicado la importancia de reprimir la financiación del crimen organizado como medida de gran efectividad en la lucha contra el mismo, por la misma razón, también es necesaria la protección económica de las empresas victimizadas, para que los negocios de las personas víctimas de procesos extorsivos puedan continuar su actividad económica y conseguir que el impacto de la actividad del crimen organizado en una zona concreta cause el menor daño posible (Sciandra y Iafano, 2016).

de nuestro Tribunal Supremo, delate una desproporción entre los ingresos legales (dada la obligación del contribuyente de declararlos) y los injustificados. En definitiva, solo cabrá aplicar este delito en aquellos supuestos en los que el Estado, a partir de las obligaciones de los ciudadanos respecto de las Haciendas Públicas, pueda aportar los dos anteriores elementos y concurra una falta de justificación de su procedencia.”

En la actualidad, además, nuestro Código Penal ha recogido estos elementos en los artículos 127 bis (párrafo 2.º) y 127 quiquies (párrafo primero, apartado segundo), en el que habla incluso de «indicios relevantes».

Por otra parte, se ha de recordar que la Convención de Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2003, contra la corrupción, en su artículo 20 exhorta a los Estados firmantes a que con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él.”

⁶³⁰ Así, la Fiscalía propone la aplicabilidad de un tipo mixto alternativo cuando se cumplan las siguientes características:

- Establecimiento de normas internas de comportamiento
- Establecimiento de órganos propios de enjuiciamiento y sanción
- Ritos o signos de iniciación y pertenencia
- Prohibición de abandono de la organización
- Control de una parte del territorio
- Empleo de la violencia para conseguir sus fines.

En este sentido, se plantean una importante recomendación con un doble objetivo: a) proteger a las víctimas que denuncian los procesos extorsivos y b) incrementar la confianza de la ciudadanía en la buena gestión pública.

Tal recomendación es la siguiente:

- ✓ Mejorar los supuestos de reutilización social de los activos confiscados al crimen organizado, mediante la ampliación de las actividades para las que actualmente se permite tal uso, como son el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, según lo previsto en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Se trata de una medida importante para el resarcimiento de las víctimas y para la prevención y la formación.

Además, contiene un fuerte simbolismo ya que, por un lado, limita el impacto económico del crimen organizado en la sociedad, devolviendo parte de los activos perdidos a causa del lucro de algunas organizaciones criminales y por otro, haciendo a la sociedad partícipe de la efectividad de las investigaciones policiales y judiciales, mejorando asimismo la imagen y el conocimiento de la realidad del fenómeno.

Parte de estos activos se pueden emplear en investigaciones científicas, formación de potenciales víctimas y difusión de campañas de sensibilización; también puede permitir crear un fondo específico de solidaridad con las víctimas.

En relación con lo anterior, resulta aconsejable establecer un fondo solidario especial de apoyo a las víctimas del crimen organizado, y en especial, de los procesos extorsivos, que implica que, tras presentar la denuncia, se lleve a cabo la evaluación del daño emergente y el lucro cesante, así como la valoración del impacto sobre los empleados y familiares del empresario. Una aportación económica y unas buenas condiciones de un préstamo financiero pueden permitir al empresario la continuidad de su negocio, además de motivarle para denunciar los procesos extorsivos ante las autoridades.

2.2. c) Medidas sociales

Tal como ha puesto de manifiesto la experiencia italiana la implicación de la sociedad civil y en especial de las asociaciones de empresarios y de lucha contra la extorsión o el crimen organizado, son esenciales para una efectiva erradicación del fenómeno.

La protección física y económica es imprescindible para que la víctima se atreva a formular una denuncia contra aquellas personas que la han intimidado o agredido, pero el peso de la cultura de ilegalidad puede llevar al empresario a no poner en conocimiento los hechos extorsivos por asumir que se trata de un gasto añadido o un riesgo asumido por desarrollar actividades económicas en una región concreta.

Para luchar contra ello, se destacan las siguientes actuaciones:

- ✓ Los importantes mecanismos de autoprotección y de los empresarios afectados: la contratación de servicios de protección privada a través de vigilantes de seguridad permite protegerse de forma efectiva ante la aproximación de organizaciones criminales en los casos donde las fuerzas del orden no actúan de forma preventiva. Además, las cámaras de grabación (CCTV) en el negocio aportan evidencias físicas para identificar a los extorsionadores (Becucci, 2015).
- ✓ El relevante el papel de las asociaciones de empresarios y comerciantes en materia de resistencia colectiva (Sciandra y Iafano, 2016): la eliminación del aislamiento del empresario permite el rechazo en bloque de las actividades extorsivas, lo que las organizaciones criminales identifican como una actividad no lucrativa. En este sentido, las campañas de concienciación a empresarios, las investigaciones científicas y la colaboración con las instituciones públicas son claves en la actuación efectiva de las asociaciones, que deben ejercer su función de nexo entre el mundo público y privado, generando confianza en la víctima y aportando herramientas e información de utilidad a las autoridades (Cozzi, 2016).

Su importancia se acrecienta cuando se trata de empresarios de una comunidad étnica con la que pueden relacionarse con su propia forma de comunicación, un idioma y una cultura diferentes, y que tienen un fuerte desconocimiento de la legislación y las instituciones públicas, especialmente las orientadas a su protección. Además, pueden tener un rol significativo en la gestión del fondo de

solidaridad de las víctimas y promover importantes campañas de concienciación social que generen un clima en contra de las prácticas extorsivas y apoyo a quienes han rechazado tales actividades del crimen organizado (Becucci, 2015).

- ✓ Resulta vital la actitud de la sociedad frente a las prácticas extorsivas a empresarios (Sáez de la Fuente, 2017): la cultura de la legalidad es esencial para la resistencia social. La libertad, la justicia y la igualdad son valores superiores del Estado Social Democrático de Derecho en el que vivimos que permiten el ejercicio de derechos económicos y la cultura de la legalidad protegiendo el interés general, la solidaridad y la dignidad humana, todos ellos gravemente afectados cuando las organizaciones criminales con suficiente control del territorio establecen mecanismos de intimidación a empresarios que les permiten de forma sistemática y generalizada lucrarse mediante diversas actividades económicas y empresariales victimizando a los negocios de una región.

El claro rechazo de la sociedad evitará legitimar conductas extorsivas que permitan a las organizaciones actuar con impunidad y librerá a la ciudadanía de las graves consecuencias que el mantenimiento de tales organizaciones conlleva (Marannano, 2016)⁶³¹.

Este trabajo⁶³² pretende ser una aportación inicial en la lucha contra los procesos extorsivos desde la perspectiva criminológico-legal para el mundo académico, policial, judicial y

⁶³¹ Expuestas en el apartado 3.4 del primer capítulo de la presente tesis.

⁶³² El presente estudio de procesos extorsivos a empresarios, aunque se ha centrado en una serie de actividades y eventos previamente establecidos por el proyecto europeo de investigación CEREU: Countering Extortion and Racketeering in the EU, ha contado, para su análisis, con la colaboración y las aportaciones de policías, fiscales, jueces y asociaciones de empresarios que son los receptores de los contenidos aprendidos. En este sentido, cabe mencionar dos interesantes reseñas del impacto de tal estudio.

En el Anexo VI se adjunta una noticia sobre la asistencia de integrantes de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante a uno de los eventos celebrados conjuntamente con los colaboradores del proyecto, que se muestran interesados por la información aportada, y manifiestan estar muy de acuerdo con las afirmaciones sobre la importancia de la implicación de asociaciones en la lucha contra la extorsión del crimen organizado. La parte más significativa de la noticia es su frase final, que explica: “Huelga decir que, si alguien de los que estéis leyendo esto, está siendo ahora mismo víctima de extorsión, podéis poneros en contacto con nosotros por cualquiera de las vías habituales, pues hemos sido aleccionados sobre cómo proceder en estos casos.” Este importantísimo ofrecimiento de protección y comunicación con la víctima extorsionada permite acreditar no sólo la buena acogida del estudio, sino

social, pero se trata de una materia de investigación en fase embrionaria, que cuenta con importantes retos de futuro, como los que se exponen a continuación.

2.3. Retos de futuro

El dinamismo y la flexibilidad propia de las organizaciones criminales que les permiten la obtención del máximo beneficio posible a través de diversas actividades ilegales⁶³³ suele derivar en procesos de adaptación al entorno en el que operan. Esto apunta una consecuencia directa en los procesos extorsivos analizados: que continuarán evolucionando y adaptándose a los diversos escenarios que las organizaciones criminales pretendan explotar.

Una sencilla fórmula de dirigir sus acciones extorsivas a otros sectores y comunidades, tal como se expone a continuación siguiendo el enfoque orientado a la evaluación de factores de vulnerabilidad⁶³⁴ de Europol (2013) y el Equipo de Trabajo de Acción Financiera (FATF⁶³⁵, 2013).

2.3. a) Procesos extorsivos a empresas en otros sectores

La literatura revisada en la materia sugiere⁶³⁶ que la clave de los factores de vulnerabilidad de las empresas radica en cuatro puntos esenciales:

también la efectividad en la formación y concienciación (en este caso breve, aunque muy específica) en la materia.

En el Anexo VII se aporta una noticia donde la presidenta de la misma asociación concede una entrevista para el periódico El Mundo donde habla de las formas de extorsión expuestas en el proyecto de investigación CEREU, que además cita. Esta noticia aporta dos datos de gran interés: el significativo impacto de la implementación de eventos con asociaciones, que pueden implicar la difusión de información sobre procesos extorsivos en un periódico de gran impacto como El Mundo, y la toma de conciencia de la asociación que asume que son un sector de gran vulnerabilidad ante estas prácticas.

⁶³³ Actividades reiteradamente expuestas en el presente estudio, especialmente en los capítulos primero y segundo y que, lógicamente, supone una peligrosidad añadida, tal como resaltan Albanese (2000), De la Cuesta Arzamendi (2001), Sánchez-García de Paz (2008), FGE Circ 2/2011, Faraldo (2012), De la Corte y Giménez-Salinas (2010), Europol (2017) e Interpol (2017), entre otros muchos.

⁶³⁴ Detalladamente expuesto en el apartado 2.1 de capítulo cuarto de la presente tesis.

⁶³⁵ Por sus siglas en inglés Financial Action Task Force.

⁶³⁶ Estudios como los de Albanese (2008), Caneppele et al. (2013), Dugato et al. (2013), Mugellini (2013) o Savona y Berlusconi (2015), entre otros.

- El tamaño pequeño del negocio y un gran movimiento de dinero en efectivo, lo que en materia de extorsión los haría más accesibles a la demanda de pagos.
- La fuerte vinculación con la economía sumergida y la corrupción ya que, en el supuesto de delitos como robos o extorsiones, pueden tener muy limitadas las alternativas al pago, porque evitarán la denuncia para no evidenciar sus propias infracciones ante las autoridades.
- Un perfil tecnológico bajo.
- El arraigo local, lo que dificulta que se eviten y rechacen las prácticas extorsivas por no poder cambiar fácilmente la ubicación de sus negocios.

Cualquier sector que reúna estos elementos, puede ser objeto de procesos extorsivos.

A nivel internacional, los sectores más vulnerables, además de la hostelería, son la manufactura y la construcción. Sin embargo, en el caso español, la vulnerabilidad de los sectores depende del momento histórico. Cuando la crisis económica golpeó de forma intensa al sector de la construcción, desvió los intereses de las organizaciones criminales, que se lucraban a costa de dicho sector, hacia sectores menos afectados por la crisis económica⁶³⁷.

Se puede afirmar que, además de la hostelería, existen sectores afectados actualmente por los procesos extorsivos en el ámbito del crimen organizado cuyo estudio sería de especial interés:

- ✓ El sector del comercio y minoristas: pequeñas tiendas, tiendas de barrio y pequeñas y medianas empresas, normalmente familiares. El método de extorsión consiste en intimidar, mediante de amenazas de muerte y con el uso de la violencia, a pequeños negocios y empresas minoristas para que paguen por su seguridad.
- ✓ Negocios de cobro de deudas que ofrecen servicios de recaudación a empresas a las que posteriormente extorsionan, es decir, estos grupos se aprovechan tanto de las empresas deudoras (exigiéndoles más dinero que el que adeudan) como de las acreedoras, a quienes demandan pagos con violencia e intimidación.

⁶³⁷ Tal como explicaron expertos en crimen organizado y en extorsiones de la Policía Nacional en las entrevistas realizadas.

El reto de futuro será, por un lado, replicar el estudio⁶³⁸ del sector hostelero a estos sectores, para detectar los factores de vulnerabilidad que comparten y aquellos que sean propios de los sectores citados, prestando especial atención para que se implementen las medidas específicas de protección que precisan los empresarios de tales negocios. Por otra parte, existe el reto de continuar analizando el escenario español y su evolución para identificar otros posibles sectores también se vean afectados.

2.3. b) Procesos extorsivos a empresas de otras comunidades

La revisión de la literatura científica⁶³⁹ ha permitido localizar tres elementos significativos que funcionan como factores de vulnerabilidad, y que las organizaciones criminales de diversas nacionalidades saben explotar dentro de una comunidad de compatriotas asentadas en territorio extranjero.

- La concentración de negocios en las zonas de asentamiento, puesto que las poblaciones extranjeras tienden a emplazarse en regiones específicas y establecer vínculos con sus compatriotas, aunque estas tendencias pueden variar en función de la cultura a la que pertenezcan. Esta característica facilita específicamente los procesos extorsivos para el control del territorio.
- Las necesidades de traslado y financiación de los grupos migratorios, debido a que las organizaciones criminales tienen capacidad para ofrecer servicios de transporte de grupos de personas en procesos migratorios, ya sea de forma legal o ilegal, y de financiación para la supervivencia e incluso para la apertura de un negocio en territorio extranjero. Estas situaciones suelen conllevar préstamos usureros que se pueden transformar en extorsión ante situaciones de impago.
- La especial vulnerabilidad física de determinadas poblaciones, puesto que el crimen organizado tiene la oportunidad de beneficiarse a través de falsos servicios de protección, aprovechando la situación de numerosos inmigrantes establecidos en territorios nuevos, que no suelen denunciar a la policía las situaciones de abuso o encontrar enormes problemas para hacerlo debido a barreras lingüísticas o culturales.

⁶³⁸ Cuya metodología está expuesta en el capítulo cuarto de la presente tesis.

⁶³⁹ De estudios como los de Chin et al. (1992), Tilley y Hopkins (2008), Albanese (2011), Ellis (2013) y Lisciandra (2013), entre otros.

Lo cierto es que, con estas claves, la literatura se suele remitir a comunidades chinas o de Oriente Medio, asentadas en los continentes europeo y americano. Ahora bien, concretamente en el escenario español, existen, además de la comunidad china⁶⁴⁰, tres comunidades extranjeras especialmente afectadas por los procesos extorsivos⁶⁴¹.

- La comunidad rusa: en la mayoría de los casos estos grupos criminales se centran en el blanqueo de capitales de actividades en su país de origen, por lo que el delito de extorsión es un medio para alcanzar sus objetivos, no una actividad principal. Así, extorsionan a empresarios propietarios de negocios que atraviesan dificultades económicas o que se encuentran al borde de la quiebra para adquirirlos y emplearlos como tapadera de otras actividades ilegales.
- La comunidad colombiana: en materia de procesos extorsivos se caracterizan por regentar oficinas de cobro implantadas en nuestro país. El empleo de intimidación y violencia tanto en nuestro territorio como en su país de origen les permite iniciar procesos extorsivos ante impagos, especialmente de deudas derivadas del tráfico y consumo de drogas.
- La comunidad rumana: los grupos suelen extorsionar a empresarios dedicados a la compraventa de locales, naves industriales e inmuebles, aunque también a extranjeros, prostitutas y víctimas de trata para solicitarles pagos en efectivo.

El reto de futuro, en la misma línea que en el de los sectores, será doble: replicar el estudio⁶⁴² de la comunidad china a estas comunidades para identificar factores de vulnerabilidad ante los procesos extorsivos, a la vez que dar continuidad al análisis del escenario español y la evolución de sus flujos de migración para detectar otras posibles nacionalidades también afectadas.

Más allá del presente estudio y la replicabilidad de su propuesta metodológica sobre el análisis de vulnerabilidad de comunidades y sectores, es de interés exponer otros fenómenos relacionados con la extorsión, ya que esta es el elemento central sobre el que se articula el objeto de investigación.

⁶⁴⁰ Además, los resultados no representativos del presente estudio también han mostrado, en el ámbito de la hostelería, la existencia de procesos extorsivos en otras comunidades, especialmente la comunidad pakistaní e india, como ya se ha señalado anteriormente.

⁶⁴¹ Tal como se expone, más ampliamente, en el apartado 3.3. del capítulo tercero.

⁶⁴² Cuya metodología está expuesta en el capítulo cuarto de la presente tesis.

2.3. c) Otros fenómenos relacionados con los procesos extorsivos en el ámbito de la delincuencia organizada

Manteniendo el interés por los procesos extorsivos a empresas perpetrados por organizaciones criminales, cierto es que el escenario virtual, en línea con la capacidad de adaptación y la clara búsqueda de beneficio del crimen organizado, ofrece oportunidades lucrativas a gran escala.

1) Los procesos extorsivos en el mundo virtual: la extorsión digital

La ciberdelincuencia⁶⁴³ constituye uno de los ámbitos delictivos de más rápido crecimiento pues presenta características muy ventajosas que sólo las tecnologías modernas pueden ofrecer tales como la rapidez, la comodidad y el anonimato. Además, su naturaleza cambiante facilita la comisión de delitos que tradicionalmente eran perpetrados por individuos aislados o pequeños grupos, y que actualmente parecen atraer la atención de organizaciones delictivas tradicionales que se sirven de profesionales de la tecnología para lograr la consecución de sus objetivos ilegales, lo cual supone una sustancial mejora de su eficacia (INTERPOL, 2017).

Tal como señala el Centro Criptológico Nacional (2017), las organizaciones criminales en internet responden al propósito de obtener un beneficio económico, el cual puede ser a) *directo*, mediante la sustracción de credenciales, o b) *indirecto*, a través de extorsiones.

Dicha institución añade que “en 2016 los ciberdelincuentes han puesto el foco en la extorsión digital” (Centro Ciptológico Nacional, 2017, p.31).

⁶⁴³ Si bien se trata de un concepto terminológico abstracto y de una versatilidad inagotable, la ciberdelincuencia a lo largo del presente apartado va a ser considerada tal como es definida en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones, de 22 de mayo de 2007, “Hacia una política general de lucha contra la ciberdelincuencia” [COM(2007) 267]: “engloba tres tipos de actividades delictivas. El primero comprende formas tradicionales de delincuencia. El segundo se refiere a la publicación de contenidos ilegales a través de medios de comunicación electrónicos. El tercero incluye delitos específicos de las redes electrónicas, por ejemplo, los ataques contra los sistemas informáticos, la denegación de servicio y la piratería”. El presente apartado se va a centrar en la primera tipología, la comisión de delitos del crimen organizado a través de internet, pero sin olvidar la amplitud funcional de esta herramienta, que se puede combinar con ataques que constituyen otro tipo de delitos de un perfil más técnico.

En este escenario, nos encontramos con dos interesantes tipologías: el ataque distribuido de Denegación de Servicio⁶⁴⁴ (DDoS) y el *ransomware*⁶⁴⁵. En la actualidad, ambas constituyen líneas de investigación de gran importancia en materia de procesos extorsivos digitales.

Debido a la entrada en vigor el pasado 23 de diciembre de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, el ataque propiamente dicho está tipificado como delito de daños informáticos previsto en el artículo 264⁶⁴⁶ del Código Penal por considerarse la conducta citada en el apartado

⁶⁴⁴ El ataque distribuido de Denegación de Servicio (DDoS) es un tipo de ataque cuya finalidad es hacer que un servicio en línea no esté disponible, generalmente interrumpiendo o suspendiendo temporalmente los servicios que presta el servidor. El último informe del Centro Criptológico Nacional (2018), señala a la extorsión como una de las principales motivaciones en los ataques distribuidos de Denegación de Servicio (DDoS), y asimismo la utilización de la amenaza de llevarlos a cabo como mecanismo lucrativo de los atacantes.

⁶⁴⁵ El ransomware consiste en un software malicioso que infecta las máquinas y las bloquea solicitando una cuantía económica, a menudo en bitcoins u otra criptomoneda, para la liberación de la misma.

Uno de los mejores ejemplos es el *ransomware Wannacry* que, según informa Europol, se extendió en mayo de 2017 de forma masiva, a más de dos mil dispositivos de numerosas empresas de sectores como la salud, el gobierno, las telecomunicaciones y el gas de más de 150 países, entre ellos Reino Unido, Taiwán, Ucrania, Rusia o Turquía, solicitando a cada máquina un rescate de 300 dólares en bitcoins. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) confirmó 1.000 infecciones, entre las que se encontraban ordenadores de Telefónica y más de 2.400 incidentes de ransomware durante el año 2017.

⁶⁴⁶ El artículo 264 del Código Penal consta de tres apartados, pudiendo ser de especial interés el segundo: *“1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.*

2. Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.

2.ª Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas informáticos.

3.ª El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.

4.ª Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder mantener sus funciones.

5.ª El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el artículo 264 ter.

Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, podrá imponerse la pena superior en grado.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.”

primero “hacer inaccesible” una página o red, mientras que el segundo apartado contiene agravantes de la pena cuando la conducta se comete en el marco de una organización criminal, o cuando haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas informáticos.

También se contempla la intensidad con que afecte a servicios públicos o infraestructuras críticas debido a la gravedad de las consecuencias de su paralización. Así, el artículo 264 es aplicable al suponer una interrupción del funcionamiento de un sistema informático de la víctima dejando a su vez inaccesibles los datos informáticos que contenga. Si bien analizar este tipo penal supera los objetivos del presente apartado, conviene al menos recordar que se trata de un delito totalmente autónomo del tradicional delito de daños del artículo 231⁶⁴⁷ del Código Penal, que trata de abordar prácticamente cualquier injerencia en un programa ajeno, tal como recogen la SAP Madrid de 3 de junio de 2013⁶⁴⁸ y SAP Valencia de 10 de junio de 2011⁶⁴⁹.

En el supuesto de la infección por *ransomware* los delitos aplicables atendiendo al *modus operandi* de cada organización criminal son, además de los daños informáticos del artículo 264, la estafa en el artículo 284.2ª del citado texto penal que prevé: *“los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro”*.

Así lo pone también de manifiesto la SAN de 3 de marzo de 2016⁶⁵⁰, que versa sobre una organización criminal que hizo uso de un malware que afectó a 300 ordenadores españoles para

⁶⁴⁷ Expuesto brevemente en el apartado 1.1.4 a) del segundo capítulo de la presente tesis.

⁶⁴⁸ Que señala: “ya que en su número primero, como elenco de conductas punibles alude a: borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos, programas o documentos, y, en su número segundo a: obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático ajeno introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, conductas todas éstas que no dejan de ser exponente de un funcionamiento anómalo de un sistema informático y, por extensión, de un determinado terminal, por consecuencia de una conducta voluntaria y deliberada de un tercero, que es definitiva es lo que ocurre en el supuesto de autos, (...), por lo que se trata de un delito con sustantividad propia.”

⁶⁴⁹ Que justifican la introducción de este tipo penal de daños informáticos “consciente el legislador de la necesidad de dar respuesta al problema introducido a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías por los conocidos como “piratas o hackers” a través de la difusión de “virus informáticos”, es decir programas cuya única finalidad es producir un deterioro o destrucción del “software” de aquellos terminales que infectan, o sencillamente una alteración de su sistema operativo, que determina un funcionamiento anómalo o deficiente”

⁶⁵⁰ Además del delito de organización criminal y blanqueo de capitales y de otros que ocasionalmente puedan darse.

solicitarles el pago de 300 euros, que “bajo la apariencia de un comunicado en nombre de diferentes Cuerpos Policiales (...) alertaba al usuario que en su ordenador se había constatado un tráfico de datos y de navegación vinculados directamente con diferentes ilícitos penales (pornografía infantil o actividades de terrorismo), induciéndole, a efectuar el pago de la cantidad de 100 euros a través de pasarelas de pago virtuales y anónimas (PAYSAFECARD y UKASH para Europa o MONEYPACK para EEUU), a modo de multa por el ilícito penal presuntamente detectado para con ello conseguir el desbloqueo y el acceso de los datos del equipo informático infectado”.

II) Los procesos extorsivos a particulares

Aunque el estudio presentado se centra en los procesos extorsivos contra empresas, se ha puesto de manifiesto que en España existen numerosas organizaciones que también se dedican a extorsionar a particulares dentro de las mismas comunidades o con algún tipo de vinculación a sectores concretos, lo que afecta a diversos ámbitos de interés en un estudio futuro sobre la materia:

- Falsos servicios energéticos de reparación o mantenimiento: en España existe un importante problema con víctimas de un perfil concreto: personas de edad avanzada de entre 73 y 92 años. Las organizaciones criminales aprovechan la vulnerabilidad de su edad para acceder de forma repentina a las viviendas, identificándose como técnicos del servicio de gas y empleando intimidaciones y frases coercitivas, ejerciendo una fuerte intimidación⁶⁵¹, llegando en ocasiones a obligar a firmar presupuestos no cumplimentados de servicios que las viviendas no requieren. Posteriormente, se pueden llegar a realizar cambios de elementos en perfecto estado, como reguladores, gomas o tuberías, y limpiezas en instalaciones como calentadores o estufas sin un consentimiento previo y efectivo del titular.
- Amenazas de ataques reputacionales: a través de mecanismos de engaño e intimidación, los integrantes de organizaciones criminales pueden recabar información íntima o personal de personas conocidas o de una orientación sexual no mayoritaria, a

⁶⁵¹ Por ejemplo, a través de frases como “es obligatorio”, “le vamos a cortar el gas”, “hemos de dar cuenta al Juzgado” o “se enfrenta a una sanción económica”, que presionan a las víctimas para aceptar sus falsos servicios de reparación o supervisión.

las que se exige un pago a cambio de no revelar información personal obtenida mediante técnicas de engaño.

- Personas involucradas en el mundo de la prostitución y la inmigración: las personas dedicadas libremente a la prostitución y las personas víctimas de la trata de seres humanos para explotación sexual, así como los inmigrantes tanto regulares como irregulares, presentan relevantes elementos de vulnerabilidad vinculados con la economía gris, con necesidades de traslado o financiación o incluso vulnerabilidad física frente al empleo de violencia e intimidación, por lo que suponen una buena oportunidad lucrativa para las organizaciones criminales.
- El cobro de deudas: se pueden ofrecer servicios de cobro de dinero entre particulares, no necesariamente a empresas; lo cual presenta similares características de vulnerabilidad a las expuestas en el apartado anterior sobre los sectores.

III) Otros fenómenos: el secuestro virtual o la extorsión telefónica

Si en los párrafos anteriores hablábamos de secuestros virtuales de máquinas, el término secuestro virtual de personas físicas consiste en la simulación de tener secuestrado a un familiar para iniciar un proceso extorsivo contra la víctima⁶⁵². Estas organizaciones aprovechan momentos en los que el familiar en cuestión está en el cine o de viaje y no puede comunicarse con la víctima para que ésta corrobore la información y además suelen emplear voces comunes haciendo creer a la víctima que se trata de la voz su ser querido, mientras fuerzan con rapidez el pago mediante verbalizaciones de gran violencia.

Lo cierto es que el tipo penal aplicable en esta ocasión sería la estafa, no la extorsión, pues concurren los elementos típicos:

1) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito, haciendo creer a la víctima que tiene a su familiar y que debe pagar para su liberación.

⁶⁵² Así lo pone de manifiesto la Policía Nacional en la acción de prevención de secuestros virtuales en su portal web, disponible en: https://www.policia.es/actualidad/pre_secuestros_virt.html

2) Es ese engaño el que desencadena el error del sujeto pasivo de la acción, que cree las palabras del supuesto secuestrador y considera que debe pagar para mantener la integridad física de su familiar.

3) Se da un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo pagando al secuestrador, debido precisamente al error de creer que su familiar está secuestrado y en beneficio de la organización criminal.

4) La conducta engañosa es ejecutada con dolo y ánimo de lucro por parte de los integrantes de la organización.

5) De ella se deriva un claro perjuicio para la víctima, que ve reducido su patrimonio a causa de la acción engañosa, al haber pagado por la liberación del falso secuestro de su familiar.

Así, se da la “vinculación secuencial perfecta” que Quintero requiere para la concurrencia del delito de estafa (2016b, p.651); se trataría de una estafa de tipo básico.

Todas estas materias contribuyen a la apertura del ámbito de estudio y resultan de gran interés para el fin último que lo constituye el lograr analizar las diferentes prácticas extorsivas del crimen organizado con el objetivo de erradicar y prevenir la victimización de empresas y particulares.

3. Síntesis final

Lo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el estudio es que los procesos extorsivos a empresas en el ámbito de la delincuencia organizada constituyen un fenómeno latente, cuya incidencia real desconocemos debido a la enorme dificultad de acceder a los datos imprescindibles y a la carencia de denuncias con las que poder iniciar procedimientos que aporten visibilidad y experiencia práctica.

Por esta razón, el objetivo fundamental de desarrollar recomendaciones de lucha y prevención a partir de las implicaciones jurídicas, policiales y judiciales ha requerido el paso previo de analizar y describir los procesos extorsivos a empresas en España y la respuesta desde

el sistema penal. Para ello se ha elaborado una propuesta de investigación basada en criterios científicos a partir del estudio criminológico y legal de la materia, que dejan patente el significativo abanico de herramientas legales con las que cuenta nuestro ordenamiento jurídico para reprimir tales conductas en el ámbito penal, elemento esencial del presente estudio.

A pesar de haber identificado diversos tipos penales aplicables, algunos de ellos de reciente introducción en el Código Penal, y precisado cuáles son las unidades policiales especializadas en extorsión, así como las diferentes instancias judiciales dispuestas a reprimir tales conductas, lo cierto es que la falta de denuncias y los problemas probatorios, potenciados por la dificultad en la calificación jurídica de los hechos, nos sitúan ante un escenario complejo: una amplia variedad de conductas criminales contenidas en los procesos extorsivos que pueden incluir delitos tan dispares como las coacciones, el secuestro, la realización arbitraria del propio derecho o el delito de daños informáticos, hacen realmente difícil que la respuesta de nuestros policías, jueces y fiscales sea efectiva.

Tras estudiar los factores de vulnerabilidad del sector de la hostelería y de la comunidad china asentadas en España desde la perspectiva de victimización de empresas en el ámbito del crimen organizado, cabe reseñar el fuerte impacto que la intimidación genera en las víctimas, que generalmente encuentran en la aceptación de las condiciones extorsivas la única alternativa que les permite mantener su integridad física y la de su familia.

Es precisamente este motivo el centro de las recomendaciones de lucha y prevención, que implican un enfoque reactivo desde los ámbitos *legislativo*: a través de la formulación de normas que protejan física y económicamente a estas víctimas, *ejecutivo*: mediante la dotación a los cuerpos policiales de recursos y formación para hacer más efectiva sus capacidades de protección y toma de denuncia, y *judicial*: al que se demanda un mayor esfuerzo en la lucha contra la financiación de las organizaciones criminales y de aplicación efectiva de los tipos penales identificados; además de importantes implicaciones a nivel empresarial, asociativo y civil, que reclaman esfuerzos conjuntos para potenciar la visibilización del fenómeno y lograr la forma correcta de lucha y prevención mediante la resistencia social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abadinsky, H. (2007). *Organized Crime*. Belmont: Thomson Wadsworth.
- Aebi, M. F. y Linde, A. (2010). Las encuestas de victimización en Europa: evolución histórica y situación actual. *Revista de derecho penal y criminología*, vol. 3, no.3, pp. 211-298.
- Albanese, J. (2000). The Causes of Organized Crime: Do Criminals Organize Around Opportunities for Crime or Do Criminal Opportunities Create New Offenders? *Journal of Contemporary Criminal Justice*, vol. 16, no.4, pp. 409–423.
- (2008). Risk Assessment in Organized Crime: Developing a Market and Product-Based Model to Determine Threat Levels. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, vol. 24, pp. 263-273.
- (2011). *Organized Crime in Our Times*. Ohio: Lexis Nexis, Anderson Publishing.
- De Alfonso, D. y Samaniego, C.B. (2011). *El Código Penal Español visto e interpretado por el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado*. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Álvarez García, F.J. (2011a). Lesiones. En Álvarez García (dir.). *Derecho penal español. Parte especial (I)*, pp.179-258. Valencia: Tirant lo Blanch.
- (2011b). Robo con violencia o intimidación en las personas. Extorsión. En Álvarez García (dir.). *Derecho penal español. Parte especial (II)*, pp.139-180. Valencia: Tirant lo Blanch.
- (2011c). Estafa (I) y (II). En Álvarez García (dir.). *Derecho penal español. Parte especial (II)*, pp.223-289. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Alvazzi Del Frate, A. (2004). The International Crime Businesses Survey: Findings from Nine Central-Eastern European Cities. *European Journal on Criminal Policy and Research* vol.10, no.2, pp.137-161.
- Anarte, E. (1997). Conjeturas sobre la criminalidad organizada. En Ferré Olivé, J. C. y Anarte, E. (coord.). *Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos*, pp.13-58. Huelva: Universidad de Huelva.
- (2017). Estafa, en Boix Reig, J. (dir.) y Lloria García, P. (coord.). *Diccionario de Derecho penal Económico*, pp.471-483. Madrid: Iustel.
- Andrés Domínguez, A.C. (2010). De los daños. en Gómez-Tomillo (dir.). *Comentarios al Código Penal*, pp.103-129. Valladolid: Lex Nova.
- (2015). De los hurtos. En Gómez-Tomillo (dir.). *Comentarios al Código Penal*, pp.915-921. Valladolid: Lex Nova.
- Aricó, B. (2016). *Crime and extortion within the Chinatown in Milan*. Presented at The Italian experience in helping and supporting victims of extortion racketeering Conference, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy, May 26.
- Aromaa, K., (2000). Organised crime and business security. En Hatalak, O. Alvazzi del Frate, A. Zvekic, U. (Eds.), *Surveying Crime: A Global Approach*, pp.183-194. Rome: ISTAT/UNICRI.

- Australian Institute of Criminology. (2004). Crimes against Business: A Review of Victimization, Predictors and Prevention. *Technical and Background Paper* no. 11.
- Bajo, M. (1975). Ánimo de lucro y ánimo de hacerse pago. *Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales*, Tomo XXVIII-3, pp. 355-378.
- (2004). Los delitos de estafa en el Código Penal. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
- (2017). Estafa. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.1209-1225. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- Barone, G. y Narciso, G. (2013). The effect of organized crime on public funds. *Economic working papers*, no. 916, pp.5-28. Roma: Bank of Italy, Economic Research and International Relations Area.
- Bassiouni, M. y Vetere, E. (1998). *Organized Crime: A Compilation of U. N. Documents 1975-1998*. New York: Transnational Publishers.
- Becucci, S. (2015). *Evoluzione de lla criminalità organizzata cinese e cambiamenti nelle comunità etniche cinesi in Italia*. Interview by Marina Marchiaro. Interview for CEREU project - Countering Extortion and Racketeering in EU.
- (2016). The Chinese communities in Italy. Presented at *The Italian experience in helping and supporting victims of extortion racketeering Conference*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy, May 26.
- Beltrán, J. (2010). Comunidades asiáticas en España. Movilidad transnacional en un territorio de frontera. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, no. 92, pp.15-37.
- Benlloch, G. (2015). Delitos contra la Administración de justicia. En Silva, J.M. (dir.) y Raqués, R. (coord.). *Lecciones de Derecho penal. Parte especial*, pp.387-414. Barcelona: Atelier.
- Bernardos, G., Martínez-Rigol, S., Frago, L. y Carreras, C. (2014). Las apropiaciones de la ciudad a la hora de la globalización: las estrategias de capital ruso y chino en el mercado inmobiliario de Barcelona. *Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, no. 13, vol. 493, pp.1-17.
- Best, J. (1982). Crime as a strategic interaction. The Social Organization of Extortion. *Urban Life*, vol.11, no.1, pp.107-128.
- Betrissey, D. (2010). Empresarios y "líderes" chinos en Madrid Prácticas políticas y económicas. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, no.92, pp.207-222.
- Bezlov, T., Gounev, P. y Hristov, D. (2006). *Crime Trends in Bulgaria 2000-2005*. Sofia: Center for the Study of Democracy (CSD).
- Bond, M. H. (1996). *The Handbook of Chinese Psychology*. Oxford University Press Hong Kong.
- Borsacchi, L. (2015). *Progetti ASCI e FACE. Cambiamenti nella comunità cinese di Prato e emersione del sommerso*. Interview by Marina Marchiaro. Interview for CEREU project - Countering Extortion and Racketeering in EU.
- Brandariz, J.A. (2003). *El delito de robo con violencia o intimidación en las personas*. Granada: Comares.

- Brigadoi, D. (2011). *Getting Closer: Shifting Identities, Socio-Economic Roles and Perceptions of the Other in the Chinese-Italian Experience*. Presented at the China in the World Conference, Monash University-Prato, Italy, September 22.
- (2016). *Chinese in Italy as victims of extortion rackets*. Presented at The Italian experience in helping and supporting victims of extortion racketeering Conference, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy, May 26.
- Broadhurst, R., Bacon-Shone, J., Bouhours, B. y Bouhours, T. (2011). *Business and the risk of crime in China: the 2005-2006. China international crime against business survey*. Asian studies series, monograph 3. Canberra: Australian University Press.
- Brody, R. y Luo, R. (2009). Fraud and white-collar crime: a Chinese perspective. *Cross Cultural Management*, vol. 16, no. 3, pp. 317-326.
- Buesa, M. (2006). *Consecuencias económicas del terrorismo nacionalista en el País Vasco*. Documento de trabajo no. 53. Madrid: Instituto de Análisis Industrial y Financiero y Departamento de Economía Aplicada II. Universidad Complutense de Madrid.
- De la Calle, L. y Sánchez-Cuenca, I. (2004). La selección de víctimas en ETA. *Revista Española de Ciencia Política*, no. 10, pp. 53-79.
- Cancio, M. (2008). El injusto de los delitos de organización: peligro y significado. En Cancio, M. (coord), Pozuelo Pérez, L. (coord.) y Rodríguez Mourullo, G. (pr.) *Política criminal en vanguardia: Inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada*, pp. 385-449. Navarra: Thomson Civitas.
- (2010). Delitos de terrorismo. En Álvarez García, F.J. y González Cussac, J.L. (dir.) *Comentarios a la Reforma Penal de 2010*, pp. 521-532. Valencia: Tirant lo Blanch.
- (2011). Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo. En Díaz-Maroto y Villarejo (dir.) y Rodríguez Mourullo, G. (pr.). *Estudios sobre las Reformas del Código Penal operadas por la LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero*, pp. 643-670. Pamplona: Aranzadi.
- (2013). El derecho penal antiterrorista español y la armonización penal en la Unión Europea. *European Inklings*, no. 2, pp.304-2015.
- (2017a). Lesiones. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.817-841. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- (2017b). Realización arbitraria del propio derecho. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.1743-1744. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- (2017c). Acusación y denuncia falsas y simulación de delitos. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.1744-1747. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- (2017d). Terrorismo. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.1937-1960. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- (2018). El concepto jurídico-penal de terrorismo entre la negación y la resignación. En Alonso, A., Cuerda, M.L. y Fernández Hernández, A. (dir.). *Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales*, pp. 95-134. Valencia: Tirant lo Blanch.

- Caneppele, S., Riccardi, M., y Standridge, P. (2013). Green energy and black economy: Mafia investments in the wind power sector in Italy. *Crime Law and Social Change*, vol. 59, no.3, pp.319-339.
- Capuano, C. y Purificato, F. (2012). The macroeconomic impact of organized crime: a neo-Kaleckian perspective. *MPRA Paper* no. 40077, posted 15, pp.1-33.
- Carbonell, J.C. (2016). Lesiones. En González Cussac, J.L. (coord.). *Derecho penal. Parte Especial*, pp. 101-122. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Caruso, V. (2011). El acoso inmobiliario como agravante del delito de coacciones y su posible incidencia en el concepto de violencia. *Eguzkilore*, no. 25, pp.5-20.
- Centorrino, M., La Spina, A., y Signorino, G. (1999). *Il nodogordiano. Criminalità mafiosa e svilupponeel Mezzogiorno*. Roma: Laterza.
- Centro Criptológico Nacional (2017). *Ciberamenazas y Tendencias. Edición 2017 CCN-CERT IA-16/17*. Madrid: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
- (2018). *Buenas Prácticas CCN-CERT BP-01/18 Recomendaciones de seguridad para CDN*. Madrid: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
- Chao, A. (10 de febrero de 2015). Cuantos chinos hay en España y otras respuestas sobre esta comunidad. *Europa Press*.
- Chin, K., Fagan, J. y Kelly, R. (1992). Patterns of Chinese gang extortion. *Justice quarterly* vol. 9 no. 4, pp.625-646.
- Chow, D. (2003). Organized crime, local protectionism, and the trade in counterfeit goods in China. *China Economic Review*, vol. 14, pp.473-484.
- Cobo, M. y Sánchez-Vera, J. (2002). *Gestión de cobro de morosos y derecho penal*. Valencia: Tirant lo Blanc.
- Comisión Europea. (2007). *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones: Hacia una política general de lucha contra la ciberdelincuencia*. [COM(2007) 267 final de 22 de mayo de 2007]. Bruselas: Comisión Europea.
- (2017). *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, Al Banco Central Europeo al Eurogrupo. Informe País de España 2017*. [COM(2017) 90 final de 22 de febrero de 2017]. Bruselas: Comisión Europea.
- Consejo de Europa. (2001). *Recomendación Rec11 del Comité de Ministros sobre principios directrices en la lucha contra el crimen organizado*. Estrasburgo: Consejo de Europa.
- Corcoy, M. (2001). Delitos contra la integridad personal y contra la libertad: lesiones, amenazas y coacciones. *Cuadernos de Derecho Judicial*, no.5, pp.153-199.
- Córdoba, J. (1978). Comentario a los delitos contra la seguridad interior del Estado. En Córdoba, J. y García Arán, M. *Comentarios al Código Penal*, tomo3, pp.170-172. Barcelona: Ariel.
- De la Corte, L. (2006). *La lógica del terrorismo*. Madrid: Alianza.

- (2007). *Actividad yihadista en Ceuta: antecedentes y vulnerabilidades*. Documentos de Trabajo, no. 28, pp.1-14. Madrid: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
- (2013). ¿Hasta qué punto convergen el terrorismo global y la criminalidad organizada?: parámetros generales y escenarios críticos. *Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, no. 1, pp. 149-176.
- (2015). ¿Por qué crecen los vínculos entre terrorismo y crimen? *Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública*, no. 50, pp.6-26.
- De la Corte, L. y Blanco, J.M. (2014). *Seguridad Nacional, amenazas y respuestas*. Madrid: LID Editorial.
- De la Corte, L. y Giménez-Salinas, A. (2010). *Crimen.org: Evolución y Claves de La Delincuencia Organizada*. Barcelona: Ariel.
- Cozzi, M. (2016). *Extortion racketeering and usury. Paths and strategies in search of legality*. Presented at The Italian experience in helping and supporting victims of extortion racketeering Conference, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy, May 26.
- Cuerda, M. L. (2016a). Delitos contra la libertad (II): Amenazas. Coacciones. En González Cussac, J.L. (coord.). *Derecho penal. Parte Especial*, pp.151-176. Valencia: Tirant lo Blanch.
- (2016b). Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (IV): robo con violencia e intimidación en las personas. Extorsión. En González Cussac, J.L. (coord.). *Derecho penal. Parte Especial*, pp.363-378. Valencia: Tirant lo Blanch.
- (2016c). Delitos contra el orden público. En González Cussac, J.L. (coord.). *Derecho penal. Parte Especial*, pp.737-788. Valencia: Tirant lo Blanch.
- De la Cuesta Aguado, P. (2011). Delitos de incendios. En Álvarez García (dir.). *Derecho penal español. Parte especial (II)*, pp.1192-1216. Valencia: Tirant lo Blanch.
- De la Cuesta Arzamendi, J. L. (2001). El Derecho penal ante la criminalidad organizada: nuevos retos y límites. En Gutiérrez-Alviz, F y Valcárce, M. (Dirs.) *La cooperación internacional frente a la criminalidad organizada*, pp. 85-123. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Cuiñas, M. (2011). ¿Familia feliz?: La receta del crimen organizado chino en España. En Requena, M. (coord.) *Actas de III jornadas de estudios de seguridad*, pp. 329-350. Madrid: Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
- Curtis, G. E., Elan, S.L., Hudson, R.A. y Kollars, N.A. (2003). *Transnational Activities of Chinese Crime Organizations*. Washington DC: Library of Congress.
- Europol. (2011). *European Organised Crime Threat Assessment (OCTA)*. The Hague: Europol.
- (2013). *EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)*. The Hague: Europol.
- (2017). *EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)*. The Hague: Europol.
- Dees, J. (2012). Claws of the Dragon: Chinese Organised Crime in the UK. *The British Criminology Conference*, London, UK, 4–6 July 2012.

- Denning, D.E., y Baugh, W.E. (2000). Hiding crimes in cyberspace. En Thomas, D. y Loader, B.D.(Eds.) *Cybercrime: Law enforcement, security and surveillance in the information age*, pp.107-131. London: Routledge
- DIA. (2013a). *Relazione Del Ministro dell'Interno Al Parlamento Sull'attività Svolta E Sui Risultati Conseguiti Dalla Direzione Investigativa Antimafia: Primo Semestre 2013*. Roma: Direzione Investigativa Antimafia.
- (2013b). *Relazione Del Ministro dell'Interno Al Parlamento Sull'attività Svolta E Sui Risultati Conseguiti Dalla Direzione Investigativa Antimafia: Secondo Semestre 2013*. Roma: Direzione Investigativa Antimafia.
- (2014). *Relazione Del Ministro dell'Interno Al Parlamento Sull'attività Svolta E Sui Risultati Conseguiti Dalla Direzione Investigativa Antimafia: Primo Semestre 2014*. Roma: Direzione Investigativa Antimafia.
- Díaz-Maroto, J. (1997). El delito de extorsión. *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, no.2, pp.1-11.
- (2017). Extorsión. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.1195-1209. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- Díaz Pita, M. M. (1996). *El delito de acusación y denuncia falsas. Problemas fundamentales*. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.
- Van Dijk, J. (2007). Mafia markers: assessing organized crime and its impact upon societies. *Trends in Organized Crime*, vol. 10, no. 4, pp. 39-56.
- Van Dijk, J.J.M., van Kesteren, J.J. & Smit, P. (2008). *Criminal Victimization in International Perspective, Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS*. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
- Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. (2017). *Estadísticas PYME evolución e indicadores*. Madrid: Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
- DJS Research (2005). *What are CAPI, CATI and CAWI?* London: Market Research World.
- Dugato, M., Favarin, S., Hideg, G., y Illyes, A. (2013). *The crime against businesses in Europe: A pilot survey*. Milán: Transcrime.
- Ellis, E. (2013). Crimen organizado chino en Martínez Cortés, J. *América Latina en América Latina y El Caribe – China, Relaciones Políticas e Internacionales*. México: Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China.
- Ernst & Young. (2013). *The Hospitality sector in Europe. An assessment of the economic contribution of the hospitality sector across 31 countries*. London: Ernst & Young.
- Escuchuri, E. (2004). Detenciones ilegales y robo con intimidación. (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2003). *Revista de derecho penal y criminología*, no. 13, pp. 325-352.
- Europol. (2011). *European organised crime threat assessment (OCTA)*. The Hague: Europol.

- (2013). *EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)*. The Hague: Europol.
- (2017). *EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)*. The Hague: Europol.
- Eurostat. (2015). Tourism statistics Eurostat Database. Disponible en: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/database>
- Faraldo, P. (2012). *Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código Penal español*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- FATF. (2013). *National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*. Paris: FATF/OECD.
- Felip, D. (2015). Las lesiones. En Silva, J.M. (dir.) y Raqués, R. (coord.). *Lecciones de Derecho penal. Parte especial*, p.75-94. Barcelona: Atelier.
- Felson, M. (1996). Preventing retail theft: An application of environmental criminology. *Security Journal*, vol.7, no.1, pp.71–72.
- Ferrandis, D. (2017). Criminalidad Organizada. En Boix Reig, J. (dir.) y Lloria García, P. (coord.). *Diccionario de Derecho penal Económico*, pp.257-263. Madrid: Iustel.
- Ferris, V. (1988). La realización arbitraria del propio derecho, en *Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales*, vol. 41, no. 3, pp. 809-832.
- Figueroa, M., Sánchez, M. y Herranz, J.L. (2017). *Los sectores de Hostelería en 2016-2017*. Madrid: Federación Española de Hostelería.
- Finckenauer, J. O. (2005). Problems of Definition: What is Organized Crime? *Trends in Organized Crime*, vol. 8, no. 3, pp.63-83.
- (2007). *Chinese transnational organized crime: The Fuk Ching*. New York: International Center National Institute of Justice.
- Finckenauer, J.O. y Chin, K.L. (2006). *Asian transnational organized crime and its impact on the United States: developing a transnational crime research agenda*. Washington: National Institute of Justice.
- Fiscalía General del Estado. (2017). *Memorias de la Fiscalía General del Estado*. Madrid: Fiscalía General del Estado. Ministerio de Justicia.
- Fraile, C. (2015). Artículo 172 Ter. En Gómez Tomillo (dir.), *Comentarios prácticos al Código Penal*, pp.666-674. Pamplona: Aranzadi.
- Gambetta, D. (1993). *The Sicilian Mafia: The business of private protection*. Cambridge: Harvard University Press.
- (2007). *La mafia siciliana: El Negocio De La Protección Privada*. México: Fondo de Cultura Económica.
- García Albero, R. (2016). De las organizaciones y grupos criminales. En Quintero, G. (dir.) y Morales, F. (coord.). *Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal*, pp.2151-2167. Navarra: Aranzadi.

- García Arán, M. (1998). *El delito de hurto*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- García Del Blanco, V. (2017a). Coacciones. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.919-925. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- (2017b). Organizaciones y grupos criminales. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.1913-1937. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- García Moreno, J. M. (2017). Las conductas típicas del art. 172 ter CP: el delito de “Stalking”. Intervención en Foro Abierto, *Revista de Jurisprudencia* no.1, p. 26.
- García García-Cervigón, J. (2002). Las lesiones en el Código Penal de 1995. Tramitación parlamentaria. *Boletín de la Facultad de Derecho*, no. 19, pp. 311-221.
- (2004). El papel de la víctima en la política Criminal. Especial referencia al delito de lesiones. *Revista de Derecho penal y Criminología*, 2.ª Época, no. extraordinario 2, pp. 483-500.
- García-Pablos de Molina, A. (1977). *Asociaciones ilícitas en el Código Penal*. Barcelona: Bosch.
- (1983a). Sobre el delito de coacciones. *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. VI. Cursos e Congresos no. 26., pp. 104-151.
- (1983b). Asociaciones ilícitas y terroristas. En Cobo Del Rosal (dir.) y Bajo Fernández (coord.) *Comentarios a la Legislación penal, El Derecho penal del Estado democrático*. Madrid: Edersa.
- García Rivas, N. y Lamarca, C. (2010). Organizaciones y grupos criminales. En Álvarez García, F.J. y González Cussac, J.L. (dir.) *Comentarios a la Reforma Penal de 2010*, pp.503-520. Valencia: Tirant lo Blanch.
- (2011). Realización arbitraria del propio derecho. En Álvarez García (dir.). *Derecho penal español. Parte especial* (III), pp.929-941. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (1999). *Principios de criminología*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Giampietri, V., y Sarno, F. (2015). Italy. En Savona E. U y Berlusconi, G. *Organised crime infiltration of legitimate businesses in Europe: A pilot project in five European countries*, pp. 37–44. Trento: Transcrime – Università degli Studi di Trento.
- Giesen, D., Meertens, V., Vis-Visschers, R. y Beukenhorst, D. (2012). *Questionnaire development*. The Hague: Statistics Netherlands.
- Gili, A. (2010). El delito de realización arbitraria del propio derecho. *Revista de Derecho penal*, no. 29, pp. 59-102.
- Giménez-Salinas, A., de la Corte, C., Requena, L. y de Juan, C. (2009). La medición y evaluación de la criminalidad organizada en España: ¿Misión Imposible? *Revista Española de Investigación Criminológica*, Art. 9, no. 7, pp.1-28.
- Giménez-Salinas, A. (2006). *El control de los flujos migratorios hacia España: situación actual y propuestas de actuación. Inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos*. Documentos de Seguridad y Defensa, n6. Madrid. Madrid: Ministerio de Defensa.

- (2012) *Lucha contra el crimen organizado. Centro superior de estudios de Defensa Nacional*. Madrid: Ministerio de Defensa.
- (2013). Perception and establishment of Italian criminal organisations in Spain. *Sicurezza e scienze sociali*, no.3, pp.69-89.
- Gago, J. (1999). Delitos contra el patrimonio: generalidades y modificaciones introducidas por el CP de 1995. La extorsión como tipo pluriofensivo: su problemática. *Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal*, no. 6. pp.195-234.
- Gómez Recio, F. y Espina Ramos, JA (2005). De las amenazas condicionales a la extorsión, huyendo del jurado, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, no. 1, pp. 1620-1626.
- Gómez Rivero, M.C. (2011). El Derecho penal ante las conductas de acoso persecutorio. En Martínez González, M.I. (dir.) *El acoso: tratamiento procesal y penal*, pp.27-48. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Gómez-Céspedes, A. (2010). *Conducting organized-crime research in Spain: An appraisal of the pros and cons*. Research Conference on Organised Crime. Frnakfurt, 2 – 13 October.
- Gómez Tomillo, M. (2015). Delitos contra el patrimonio y socioeconómicos. Artículos 234-318, *Comentarios prácticos al Código Penal*, vol. 3, pp.1-3. Madrid: Thomsom Reuters.
- González Cussac, J.L. (2016a). Delitos contra la libertad (I): detenciones ilegales y secuestros. En González Cussac, J.L. (coord.). *Derecho penal. Parte Especial*, pp.131-150. Valencia: Tirant lo Blanch.
- (2016b). Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (VI): Estafas. En González Cussac, J.L. (coord.). *Derecho penal. Parte Especial*, pp.387-408. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Grasso, G. (2016). *The anti-racket movement and the victims of extortion in criminal proceeding*. Presented at The Italian experience in helping and supporting victims of extortion racketeering Conference, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy, May 26.
- Guardiola, J. (2003). *La realización arbitraria del propio derecho*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Guérez, P. (2017). Daños. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.1266-1273. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- Hava, E. (2011). Extorsión. En Quintero, G., Carbonell, J.C., Morales, F., García Rivas, N., Álvarez García, J. A. (dirs.). *Esquemas de la parte especial de Derecho penal (I)*, pp. 277 - 282. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Herrero, C. (2006). El concepto plural de estafa en el Código Penal vigente. *La Ley Digital*, no. 33, pp.1-20.
- Hidalgo, I. (1999). Los delitos de robo con violencia o intimidación en las Personas. Tipo básico y privilegiado. La realización arbitraria del propio derecho como modalidad del apoderamiento violento sin robo: problemática. *Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal*, núm. 6, pp. 307-338.
- HOTREC. (2017). *2016 2017 HOTREC annual report*. Brussels: Hospitality Europe.

- Interpol. (2013). *Informa anual*. Lyon: Interpol.
- (2014). *Informe anual*. Lyon: Interpol.
- (2017). *Global strategy on organized crime and emerging crime*. Lyon: Interpol.
- ISTAT. (2015). Base de datos del Instituto Nacional de Estadística de Italia. Disponible en www.istat.it
- Jaén Vallejo, M. y Perrino Pérez, A.L. (2015). *La reforma penal de 2015*. Madrid: Dykinson.
- Jiménez Villarejo, C. (2005). Problemas derivados de la internacionalización de la delincuencia económica. En García Arán, M. *El fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica*, pp.149-176. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- Jordá, C., Regadera S., García J. y Requena, L. (2014). *Problemas metodológicos en la medición del rendimiento policial de la Guardia Civil en delincuencia organizada. Crisis y cambio: propuestas desde la Sociología*. XI Congreso Español de Sociología (volumen II). Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense, Madrid, 10-12 de julio. pp. 444-452.
- Jordá S., C. y Requena E., L. (2013). ¿Cómo se organizan los grupos criminales según su actividad delictiva principal? Descripción desde una muestra española. *Revista Criminalidad*, Vol. 55, no. 1, pp. 31-48.
- Jordá, C., Zhivkova, S. y Giménez-Salinas, A. (2015). Estudio exploratorio sobre la victimización de las empresas chinas. En: González García, E.; García Muñiz, A.; García Sansano, J. e Iglesias Villalobos, L. (Coords.). *Mundos emergentes: cambios, conflictos y expectativas*, pp. 489-510. Toledo: ACMS.
- Jordán, J. (2009). Respuestas al terrorismo yihadista en España: apuntes para una posible reforma legal. *Cuadernos de Pensamiento Político*, No. 23, pp. 33-53.
- Kaufmann, D., Kraay, A. y Mastruzzi, M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*. World Bank Policy Research Working Paper no. 5430. Washington DC: World Bank.
- Kearney, A.T. y Schneider, F. (2013). *The Shadow Economy in Europe 2013*. Linz: Johannes Kepler University.
- Konrad, K., y Skaperdas, S. (1998). Extortion. *Economica*, Vol. 65, no.260, pp. 461–477.
- KPMG Forensic. (2004). *ANZ Fraud Survey 2004*. Sydney: KPMG Australia.
- La Spina, A., Frazzica, G., Punzo, V. y Scaglione, A. (2014). *How Mafia Works: An Analysis of the Extortion Racket System*. Glasgow: EPCR Conference.
- Lamarca Pérez (1998). Sobre el concepto de terrorismo (a propósito del caso Amedo). *Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales*, no. 2, pp. 535-560.
- Lambsdorff, J. G. (2007). *The Institutional Economics of Corruption and Reform*. England: Cambridge University Press.
- Von Lampe, K. (2016). *Organized Crime. Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-legal Governance*. London: Sage Publications.

- Lasarte Álvarez, C. (1992). *Principios de Derecho Civil, tomo I, Parte General y Derecho de la persona*. Madrid: Ed. Trivium.
- Lashley, C. y Morrison, A. (2013). *In search of hospitality: theoretical perspectives and debates*. Oxford: Butterworth Heinemann.
- Lavezzi, A. M. (2008). Economic structure and vulnerability to organised crime: Evidence from Sicily. *Global Crime*, Vol., pp.198-220.
- Lisciandra, M. (2014). Proceeds from extortions: the case of Italian organised crime groups, *Global Crime*, vol. 15, pp. 93-107.
- Llobet, M. (2015). Delitos contra el orden público. En Silva, J.M. (dir.) y Ragués, R. (coord.). *Lecciones de Derecho penal. Parte especial*, pp. 415-437. Barcelona: Atelier.
- (2017a). Detención ilegal y secuestro. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.865-891. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- (2017b). Amenazas y chantaje. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.892-910. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- (2017c). Robo con violencia o intimidación en las personas. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.1184-1195. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- López Barja de Quiroga, J. (2014). *Grandes Tratados. Tratado de Derecho Procesal Penal*. Navarra: Aranzadi.
- Manzanares, J.L. (2010). *Código Penal II, Parte Especial (Artículos 138 o 639)*. Granada: Comares.
- Manzanero, A.L. (2001). Procedimientos de evaluación de la credibilidad de las declaraciones de menores víctimas de agresiones sexuales. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, vol. 1, no. 2, 2001, pp. 51-71.
- Manzanero, A.L. y Diges, M. (1994). Evaluación Subjetiva de la Exactitud de las Declaraciones de los Testigos: La Credibilidad. *Anuario de Psicología Jurídica*, no.3, pp. 7-27.
- Manzanero, A.L. y Muñoz, J.M. (2011). *La prueba pericial psicológica sobre la credibilidad del testimonio: Reflexiones psico-legales*. Madrid: SEPIN
- Marannano, D. (2016). *Assisting and supporting victims in reporting extortion to police forces: the experience of Addiopizzo*. Presented at The Italian experience in helping and supporting victims of extortion racketeering Conference, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy, May 26.
- Maraver, M. (2017). Incendios. En Molina Fernández, F. (coord.). *Memento Práctico Penal*, pp.1530-1543. Madrid: Lefebvre El Derecho.
- Martín-Peña, J. (2013). Amenazados de eta en Euskadi: una aproximación al estudio científico de su victimación. *Eguzkilo*, no. 27, pp. 95-117.
- Martínez Atienza, G. (2014). *Comentarios al Código Penal. Estudio sistematizado*. Barcelona: Editorial Vlex.
- (2015). *Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo*. Barcelona: Editorial Vlex.

- Martínez-Buján, C. (2016). Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (X): sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural. Daños. En González Cussac, J.L. (coord.). *Derecho penal. Parte Especial*, pp.477-488. Valencia: Tirant lo Blanch
- Martínez Garay, L. (2007). El nuevo delito de pertenencia a "organizaciones y grupos criminales" (art. 385 bis) en el proyecto de reforma del Código Penal. *Revista General de Derecho penal*, no. 7, pp.1-76.
- Martínez Garay, L. y Mira, J. (2010). La responsabilidad penal de las organizaciones terroristas con personalidad jurídica: especial referencia al caso de los partidos políticos. *Revista General de Derecho penal*, no. 14, pp.1-13.
- Martínez González, M.I. (1991). El delito de extorsión. *Cuadernos de Política Criminal*, no. 44, pp. 371-420.
- Martín-Retortillo, L. (1975). *La cláusula de orden público como límite -impreciso y creciente- del ejercicio de los derechos*. Madrid: Civitas.
- Mastrobuoni, G. y Patacchini, E. (2012). Organized Crime Networks: an Application of Network Analysis Techniques to the American Mafia, *Review of Network Economics*, vol. 11, no. 10, pp.1-41.
- Mata y Martín, R.M. (1995). *El delito de robo con fuerza en las cosas*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Mata, M. y Vicente, R. (2010). De los robos. En Gómez Tomillo. *Comentarios al Código Penal*, pp.922-948. Valladolid: Lex Nova.
- McIlwain, J.S. (1999). Organized crime: A social network approach. *Crime, Law & Social Change* no. 32, pp.301-323.
- Medina, L. y Schneider, F. (2018). *Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IFM working Paper 18/17*. Washington: Fondo Monetario Internacional.
- Mendoza, L.M.E. (2016). La cooperación policial en la Unión Europea: Europol. En González-Orús, J. y Becerril, B. *Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea* (Tomo VIII), pp.241-321 Pamplona: Aranzadi.
- Merino, J. A. (2008). "La inmigración china en España: ¿Qué imagen?" *Observatorio de la Economía y la Sociedad China*, no. 6, pp.1-18.
- Ministerio del Interior. 2015. *Database on extortion in Spain*. Madrid: Ministerio del Interior. (Documento no publicado).
- Mir, S. (1977). El delito de coacciones en el Código Penal. *Anuario de Derecho penal y Ciencias Penales*, Tomo 30, Fasc/Mes 2, pp.269-306.
- (2003). Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, no. 5, pp.1-19.
- Mirat, M.P. (2001). *Detenciones ilegales (artículo 163 del Código Penal)*. Madrid: Edersa.
- Monzini, P. (1993). L'estorsione nei mercati leciti e illeciti. *Liuc Papers*, no. 1 Serie Storia, impresa e società, pp.1-18.

- Morada, S. (2016). Extortion and usury within neighbourhood 9 in the city of Milan: analysis and the project. Presented at The Italian experience in helping and supporting victims of extortion racketeering Conference, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy, May 26.
- Morón, E. (2011). Acusación y denuncia falsas. Simulación de delitos. En Álvarez García (dir.). *Derecho penal español. Parte especial* (III), pp.943-962. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Mugellini, G. (2013). Crime against the Private Sector in Latin America: Existing Data and Future Orientations to Analyse the Victimization of Businesses. *Revista Internacional de Estadística y Geografía*, vol. 4, no.2, pp.18-39.
- Mundula, I. (2016). Personal safety perception among Chinese citizens living in Prato: a social network-based analysis, presented at The Italian experience in helping and supporting victims of extortion racketeering Conference, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy, May 26.
- Muñoz Clares, J. (2003). *El robo con violencia o intimidación*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Muñoz Conde, F. (1985). *Derecho penal, Parte Especial*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- (2010). *Derecho penal. Parte Especial*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- (2013). *Derecho penal. Parte Especial*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- (2017). *Derecho penal Parte Especial*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Muñoz Cuesta, F.J. (2004). *Repertorio de Jurisprudencia no. 27*. Pamplona: Aranzadi.
- (2008). Incendio sin peligro para la vida o la integridad física de las personas causando daños que no superan los 400 euros. ¿Delito de incendio o falta de daños?, *Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi no. 5*. Pamplona: Aranzadi.
- Naciones Unidas. (1975). *Cambios de las formas y dimensión de la delincuencia transnacional y nacional*, V Convención de Naciones Unidas para la Prevención del Crimen, Ginebra, 1 de septiembre.
- (1990). *Propuestas de medidas internacionales concertadas contra las formas de delito definidas en el Plan de Acción de Milán*. VIII Convención de Naciones Unidas para la Prevención del Crimen, La Habana, 27 de agosto.
- (2000). *Resolución 55/25 de la Asamblea General, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000*, Convención de Palermo, Nueva York, 15 de noviembre.
- Nannucci, F. (2015). *Sistemi di indagine, buoneprassi e problema del contrasto alla criminalità organizzata cinese in Italia oggi*. Interview by Marina Marchiaro for CEREU project - Countering Extortion and Racketeering in EU.
- Octavio, E. (1982). Presente y proyecto del delito de extorsión. *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, no. 4, pp. 1080-1094.
- Orts, E. (2016). Delitos contra la Administración de Justicia. En González Cussac, J.L. (coord.). *Derecho penal. Parte Especial*, pp.679-704. Valencia: Tirant lo Blanch.

- Paoli, L. (2003). *Mafia brotherhoods: Organized crime, Italian style*. New York: Oxford University Press.
- Parkinson, S. (2004). *Tackling crimes against small businesses: lessons from the Small Retailers in Deprived Areas Initiative Development and Practice*. Report 29. London: Home Office.
- Pérez Manzano, M. (1998). Las defraudaciones (I). Las estafas. En Bajo Fernández (dir.) *Compendio de Derecho penal. Parte Especial*, vol. II, pp.437-473. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Perrone, S. (2000). Crimes against small business in Australia: A preliminary analysis. Trends and Issues. *Crime and Criminal Justice*, no. 184. Canberra: Australian Institute of Criminology.
- Pastor, N. y Coca, I. (2015). Delitos contra el patrimonio (II). En Silva, J.M. (dir.) y Raqués, R. (coord.). *Lecciones de Derecho penal. Parte especial*, pp.253-302. Barcelona: Atelier.
- Pradel, J. (1988). Relación General. Los sistemas penales frente el reto del crimen organizado, en Les systèmes pénaux à l'épreuve du crime organisé. Section III. Procès pénal. Colloque Préparatoire de Guadalajara (México), *Revue Internationale de Droit Pénal*, vol. 70, no. 3-4, pp.701-729 (trad. por De la Cuesta Arzamendi).
- PriceWaterhouseCoopers. (2010). *Fraud: The Enemy Within*. Mumbai: PriceWaterhouseCoopers.
- Quintero, G. (2016a). Delitos contra la libertad. En Quintero, G. (dir.) y Morales, F. (coord.). *Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal*, pp.171-216. Navarra: Aranzadi.
- (2016b). Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. En Quintero, G. (dir.) y Morales, F. (coord.). *Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal*, pp.601-763. Navarra: Aranzadi.
- (2016c). Delitos contra la Administración de Justicia. En Quintero, G. (dir.) y Morales, F. (coord.). *Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal*, p1811-1864. Navarra: Aranzadi.
- Racovita, M., Shrestha B., y Pokhrel A. (2013). Risky Business? Crime and Security Perceptions in the Nepali Private Sector. *Nepal Issue Brief*, no. 3, pp.1-16.
- Ragués, R. (2003). La delimitación entre detenciones ilegales y coacciones ¿Una tarea condenada al fracaso? *Actualidad Penal*, vol. 1, no. 11, pp.1-18.
- (2015). Delitos contra la libertad. En Silva, J.M. (dir.) y Ragués, R. (coord.). *Lecciones de Derecho penal. Parte especial*, pp. 95-114. Barcelona: Atelier.
- (2016). Ánimo de hacerse el pago en las defraudaciones ¿elemento subjetivo o causa de justificación? En Bacigalupo, S., Feijoo, B., Echano, J.I. *Estudios de Derecho penal: Homenaje al profesor Miguel Bajo*, pp.451-467. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Rebollo, R. (2011) Detenciones ilegales y secuestros. En Álvarez García (dir.). *Derecho penal español. Parte especial (II)*, pp.323-347. Valencia: Tirant lo Blanch.
- (2017). Engaño en el delito de estafa. En Boix Reig, J. (dir.) y Lloria García, P. (coord.). *Diccionario de Derecho penal Económico*, pp. 463-471. Madrid: Iustel.

- Reuter, P. (1982). *Racketeering in Legitimate Industries: Two Case Studies*. Washington, D. C.: National Institute of Justice.
- Robes, R. (2015). Delitos contra el patrimonio (I). En Silva, J.M. (dir.) y Raqués, R. (coord.). *Lecciones de Derecho penal. Parte especial*, pp.224-251. Barcelona: Atelier.
- Robes, R. y Pastor, N. (2015). Delitos contra el patrimonio (III). En Silva, J.M. (dir.) y Raqués, R. (coord.). *Lecciones de Derecho penal. Parte especial*, pp.277-302. Barcelona: Atelier.
- Rodríguez Devesa, J.M. (1946). El hurto propio. *Publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos*, Serie 3ª Monografías de Derecho Español No. 6.
- (1983). *Derecho penal Español, Parte Especial*. Madrid: Dykinson.
- Rodríguez Mourullo, G. (2017). Ánimo de lucro. En Boix Reig, J. (dir.) y Lloria García, P. (coord.). *Diccionario de Derecho penal Económico*, pp.50-52. Madrid: Iustel.
- Rohwer, A. (2009). *Measuring corruption: a comparison between the transparency international's Corruption Perceptions Index and the World Bank's Worldwide Governance indicators. Report 3/2009*. Munich: Munich Society for the Promotion of Economic Research.
- Rose-Ackerman, S. (2010). The Law and Economics of Bribery and Extortion. *The Annual Review of Law and Social Science*, no. 6, pp. 217-238.
- Rusev, A., Garofalo, L., Sciandra, E., Giménez-Salinas, A., Jordá, C. y De Juan, M. (2016). *Final Report of Project CEREU: Countering Extortion and Racketeering in the EU*. Sofia: Center for the Study of Democracy.
- Sáez de la Fuente, I., Arellano, F.J., Bilbao, G., Etxeberria, X. y Prieto, J. (2017). *Informe sobre la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial*. Bilbao: Centro de Ética Aplicada.
- Sáez de la Fuente, I. y Prieto, J. (2017). La extorsión como proceso social en un contexto de violencia terrorista. En *Misivas del terror: análisis ético-político de la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial*, pp.31-84. Madrid: Marcial Pons Historia.
- Saiz López, A. (2004). La migración china en España. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, no.68, pp.151-163.
- Sánchez-García de Paz, I. (2008). *La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*. Madrid: Dykinson.
- Sánchez Moreno, J. (2004). *El robo y hurto de uso de vehículos*. Valencia: Bosch.
- Sánchez Robert, M.J. (2015). Hurto, *furtum possessionis*, robo, robo y hurto de uso de vehículos de motor, usurpación. En Morillas Cueva (dir.) *Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015)*. Madrid: Dykinson, Madrid.
- Sánchez Tomás, J.M. (1999). *La violencia en el Derecho penal*. Barcelona: Bosch.
- (2011). Amenazas. Coacciones. En Álvarez García (dir.). *Derecho penal español. Parte especial (I)*, pp.349-426. Valencia: Tirant lo Blanch.

- Santana, D.M. (2011). De la realización arbitraria del propio derecho. En Corcoy, M. y Mir, S. (dirs.). *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, pp.1520-1523. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Sansó-Rubert, D. (2011). Criminalidad organizada transnacional en Asiapacífico: repercusiones para la seguridad regional e internacional. *UNISCI Discussion Papers*, no. 26, pp.159-189.
- Sanz Delgado, E. (2006a). Detención ilegal, ¿delito de consumación instantánea). *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, no. 29, pp. 56-71.
- (2006b). Robo y detención ilegal, punto de encuentro. *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, no.23, pp. 83-98.
- Savona, E., Riccardi, M. y Berlusconi, G. (eds.) (2016). *Organised Crime in European Businesses*. London: Routledge.
- Savona E. y Berlusconi G. (Eds.). (2015). *Organized Crime Infiltration of Legitimate Businesses in Europe: A Pilot Project in Five European Countries*. Trento: Transcrime-Università degli Studi di Trento.
- Savona, E. (2014). Organised crime numbers. *Global Crime*, Vol. 15, no. 1, pp. 1-9.
- (2012). *A framework to quantify organized crime and assessment of availability and quality of relevant data in three selected countries of Latin America and the Caribbean*. Milán: Transcrime.
- (2010). *Extortion and organised extortion and organised Crime in Europe*. Milán: Transcrime.
- Scagliarini, L. (2015). *Evoluzione della criminalità organizzata cinese dagli anni '90 ad oggi in Italia*. Interview by Marina Marchiaro for CEREU project - Countering Extortion and Racketeering in EU.
- Schneider, F. (2010). *Money Laundering and Financial Means of Organized Crime: Some Preliminary Empirical Findings*. Economics of Security Working Paper 26. Berlin: Economics of Security.
- (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 Other OECD Countries from 2003 to 2014: Different Developments? *Journal of Self-Governance and Management Economics*, vol. 3, no.4, pp. 7-29.
- Sciandra, E. y Iafano, A. (2016). *Countering extortion racketeering: the Italian experience*. Sofia: Center for the Study of Democracy.
- Serrano González de Murillo, J.L. (2005). La simulación de delito o falta: ¿un delito sin bien jurídico protegido? *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, no. 2, pp. 1561-1570.
- Silva Sánchez, J.M. (2001). *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*. Madrid: Civitas.
- Skarbek, D. (2012). Prison Gangs, Norms, and Organizations. *Journal of Economic Behavior and Organization*, vol. 82, no. 1, pp. 96-109.

- Soudijn, M. R., y Zhang, S. (2013). Taking loan sharking into account: A case study of Chinese Vest. Pocket Lenders in Holland. *Trends in Organized crime*, no. 16, pp.13-30.
- Soto Rodríguez, M. L. (2012). La denuncia falsa en el Código Penal español. *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, no. 7977, pp.1-10.
- Sparks, R.F., Genn, H.G. y Dodd, D.J. (1977). Surveying Victims: A Study of the Measurement of Criminal Victimization. *British Journal of Law and Society* Vol. 6, no. 1, pp. 140-143.
- Squillace, E. (2015). Sistemi di indagine, buoneprassi e problem del contrasto al la criminalità organizzata cinese in Italia oggi. Interview by Marina Marchiaro for CEREU project - Countering Extortion and Racketeering in EU.
- Stangeland, P. y Muñoz, E. (1996). La delincuencia contra comercios. *Boletín Criminológico* no. 18.
- Sutherland, E.H. (1947). *Principles of criminology*. Philadelphia: Lippincott.
- Tamarit, J.M. (2016a). De las lesiones. En Quintero, G. (dir.) y Morales, F. (coord.). *Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal*, pp.91-142. Navarra: Aranzadi.
- (2016b). De los incendios. En Quintero, G. (dir.) y Morales, F. (coord.). *Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal*, pp.1361-1377. Navarra: Aranzadi.
- Taylor, N. (2006). Crime against businesses in two ethnically diverse communities. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, no. 321. Canberra: Australian Institute of Criminology.
- Taylor, N. y Mathew, P. (2002). Financial and psychological costs of crime for small retail businesses. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, no. 229. Canberra: Australian Institute of Criminology.
- Tilley, N., y Hopkins, M. (2008). Business views of organised crime on business in three high crime neighbourhoods. *RDS Research Report 10*. London: Home Office.
- Transcrime. (2009). *Study on Extortion Racketeering: The Need for an Instrument to Combat Activities of Organised Crime*. Milan: Transcrime.
- (2013). *The crime against businesses in Europe: a pilot survey*. Milan: Transcrime.
- Transparency International. (2017). *Transparency International's Perception Corruption Index*. Berlin: Transparency International.
- Tylor, N. (2006). *Crime against business in two ethnically diverse community*. *Trends and Issues in Organized Crime, and Criminal Justice*, 321. Canberra: Australian Institute of Criminology.
- Soto Nieto, F. (2003). Características del robo con violencia: Transmutación de hurto en robo violento, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, no. 5801, pp. 1649-1651.
- Souto García, E.M. (2017). *Los delitos de hurto y robo. Análisis de su regulación tras la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- UNECE-UNODC (2010). *Manual on Victimization Surveys*. Geneva: UNECE-UNODC.

- Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. (2015). *Análisis de los flujos del trabajo autónomo inmigrante en España*. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad social.
- UNODC. (2006). *Forum on crime and society*, Vol. 5, no. 1. New York: United Nations.
- (2010). *Methodologies, including evidence-based approaches for assessing areas of special vulnerability to corruption in the public and private sectors*. Vienna: United Nations.
- (2013). *Business, corruption and crime in Montenegro: the impact of bribery and other crime on private enterprise*. Vienna: United Nations.
- Ureta, J. C. (2013). *La Economía Sumergida en España*. Documento de Trabajo, no. 4. Madrid: Fundación de Estudios Financieros.
- Varela, J. A. (2004). El delito de extorsión su problemática, incardinación en el sistema penal del Código Penal. *Cuadernos de Derecho Judicial*, no.13, pp. 373-395.
- Varese, F. (2011). *Mafias on the Move: How Organized Crime Conquers New Territories*. England: Oxford University Press.
- (2010). *Organized Crime. Critical Concepts in Criminology*. London: Routledge.
- (2001). *The Russian Mafia: Private protection in a new market economy*. England: Oxford University Press.
- Vargas, I. (2017). Las conductas típicas del art. 172 ter CP: el delito de "Stalking". *Revista de Jurisprudencia* no.1, p. 25.
- Vicente, R. (2004a). Sobre el difícil arte de legislar en materia penal. *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, no. 5, pp.1614-1618.
- (2004b). El robo con violencia o intimidación en las personas. *Cuadernos de Derecho Judicial*, no.13, pp. 431-442.
- (2016). *Vademécum de Derecho penal*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Villacampa, C. (2010). La respuesta jurídico-penal frente al *stalking* en España: presente y futuro. *Revista de l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la UV*, no. 4, pp.33-57.
- (2016). Artículo 172 ter (Acoso). En Quintero, G. (dir.) y Morales, F. (coord.). *Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal*, pp.222-235. Navarra: Aranzadi.
- Wagstaff, M., Dale, M. y Edmunds, M. (2006). *Redefining business crime & assessing crimes against Black & Minority Ethnic businesses in London*. London: Government Office for London Crime & Drugs Division.
- Walker, J. (1995). Crimes against businesses in Australia. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, no. 45, pp.1-6.
- Wang, P. (2013). The rise of the Red Mafia in China: a case study of organised crime and corruption in Chongqing. *Trends in Organized Crime*, vol. 16, no.1, pp.49-73.
- World Bank. (2015). *World Development Indicators database*. Washington DC: World Bank.

- World Economic Forum. (2017). *Travel & Tourism Competitiveness Report*. Geneva: World Economic Forum.
- Zhang, S.X. (2002). Enter the dragon: Inside Chinese human smuggling organizations. *Criminology*, vol. 40, no.4, pp.737–768.
- Zhang, S. X., y Chin, K. (2008). Snakeheads, mules, and protective umbrellas: A review of current research on Chinese organized Crime. *Crime, Law and Social Change*, no. 50, pp.177–195.
- Zúñiga, L. (2016). El concepto de criminalidad organizada transnacional: problemas y propuestas. *Revista Nuevo Foro Penal* vol. 12, no. 86, pp. 62-114.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: design and methods*. London: Sage.

AUTOS Y SENTENCIAS

- AAN de 3 de septiembre de 2015
- AAN de 17 de marzo de 2010
- AAP Madrid de 21 de noviembre de 2011
- SAJC de 20 de octubre de 2012
- SJI de 23 de marzo de 2016
- AP Mallorca de 15 de marzo de 2010
- SAP Madrid de 19 de septiembre de 2008
- SAP Asturias de 5 de marzo de 2014
- SAP Navarra de 31 de octubre de 2015
- SAP Santa Cruz de Tenerife de 9 de enero de 2013
- SAP Valladolid de 20 de enero de 2015
- SAP Gerona de 22 de enero de 2015
- SAP Burgos de 20 de noviembre de 1998
- SAP Madrid de 21 de diciembre de 2000
- SAP Albacete de 22 de abril de 2014
- SAP La Rioja de 17 de octubre de 2016
- SAP Sevilla de 17 de abril de 2006
- SAP Madrid de 27 de diciembre de 2016
- SAP Burgos de 30 de noviembre de 2000
- SAP Burgos de 27 de abril de 2017
- SAP Guadalajara de 19 de octubre de 2011
- SAP Madrid de 7 de mayo de 2013
- SAP Madrid de 3 de junio de 2013
- SAP Valencia de 10 de junio de 2011
- SAN de 3 de marzo de 2016
- ATS de 29 de mayo de 2014
- ATS de 7 de julio de 2000
- ATS de 29 de mayo de 2014
- STS de 18 de septiembre de 1998
- STS de 21 de octubre de 2004
- STS de 22 de octubre de 2009
- STS de 26 de abril de 2002
- STS de 29 de septiembre de 1999
- STS de 13 de octubre de 2009
- STS de 27 de diciembre de 2010
- STS de 12 de abril de 1999
- STS de 18 de octubre de 2001
- STS de 10 de octubre de 2015
- STS de 4 de septiembre de 2007
- STS de 23 de septiembre de 2002
- STS de 9 de abril de 1999
- STS de 30 de enero de 1999

- STS de 11 de noviembre de 2004
- STS de 23 de octubre de 2008
- STS de 28 de junio de 2000
- STS de 3 de octubre de 2002
- STS de 2 de noviembre de 2004
- STS de 22 de mayo de 1992
- STS de 15 de marzo de 2000
- STS de 23 de noviembre de 2005
- STS de 15 de noviembre de 1994
- STS de 18 de noviembre de 1998
- STS de 20 de octubre de 2010
- STS de 1 de julio de 2008
- STS de 14 de julio de 2011
- STS de 22 de septiembre de 2011
- STS de 8 de marzo de 2012
- STS de 12 de junio de 2000
- STS de 2 de febrero de 1981
- STS de 13 de diciembre de 1982
- STS de 30 de abril de 1985
- STS de 2 de diciembre de 1992
- STS de 15 de octubre de 2009
- STS de 4 de mayo de 2005
- STS de 15 de octubre de 2009
- STS de 27 de octubre de 1982
- STS de 13 de junio de 1989
- STS de 5 de julio de 2007
- STS de 11 de julio de 2001
- STS de 20 de marzo de 2012
- STS de 18 de febrero de 2016
- STS de 10 de febrero de 2009
- STS de 6 de abril de 2009
- STS de 8 de julio de 2003
- STS de 8 de octubre de 1992
- STS de 13 de marzo de 1997
- STS de 21 de julio de 1999
- STS de 8 de octubre de 2007
- STS de 1 de octubre de 2009
- STS de 28 de enero de 2005
- STS de 27 de diciembre de 2004
- STS de 26 de diciembre de 2008
- STS de 13 de abril de 2010
- STS de 11 de marzo de 1999
- STS de 1 de marzo de 1994
- STS de 10 de noviembre de 2004
- STS de 2 de diciembre de 2004

- STS de 6 de mayo de 2005
- STS de 4 de mayo de 2005
- STS de 11 de abril de 2000
- STS de 23 de junio de 2000
- STS de 22 de noviembre de 2000
- STS de 27 de febrero de 2002
- STS de 23 de enero de 2003
- STS de 29 de enero de 2002
- STS de 14 diciembre de 2001
- STS de 22 de diciembre de 2009
- STS de 26 de marzo de 2006
- STS de 9 de mayo de 1996
- STS de 23 de mayo de 1996
- STS de 17 de diciembre de 1997
- STS de 6 de julio de 1998
- STS de 11 de septiembre de 1998
- STS de 26 de octubre de 2012
- STS de 6 de mayo de 2005
- STS de 21 de noviembre de 2008
- STS de 2 de marzo de 2017
- STS de 8 de marzo de 1968
- STS de 23 de enero de 1998
- STS de 18 de mayo de 2005
- STS de 29 de marzo de 2002
- STS de 29 de junio de 2009
- STS de 16 de mayo de 2000
- STS de 8 de noviembre de 2005
- STS de 3 de octubre de 1997
- STS de 13 de junio de 1992
- STS de 26 de noviembre de 2003
- STS de 1 de junio de 2012
- STS de 19 de mayo de 2000
- STS de 5 de junio de 2000
- STS de 22 de septiembre de 2000
- STS de 8 de marzo de 2002
- STS de 29 de febrero de 2003
- STS de 14 de septiembre de 2001
- STS de 21 de octubre de 2015
- STS de 26 de diciembre de 2008
- STS de 15 de junio de 2015
- STS de 15 de octubre de 2004
- STS de 27 de enero de 2004
- STS de 15 de junio de 2015
- STS de 25 de junio de 1999
- STS de 5 de abril de 2016

- STS de 28 de septiembre de 2016
- STS de 14 de julio de 2005
- STS de 8 de octubre de 2008
- STS de 18 de noviembre de 2009
- STS de 18 de noviembre de 2014
- STS de 24 de octubre de 2003
- STS de 3 de diciembre de 2017
- STS de 26 de enero de 2012
- STS de 22 de febrero de 2004
- STS de 24 de febrero de 2001
- STS de 6 de julio de 2005
- STS de 16 de abril de 2014
- STS de 5 de diciembre de 2013
- STS de 25 de noviembre de 2008
- STS de 20 de enero de 2009
- STS de 5 de diciembre de 1998
- STS de 2 de diciembre de 2010
- STS de 12 de febrero de 2002
- STS de 28 de febrero de 2003
- STS de 13 de abril de 2010
- STS de 22 de mayo de 2009
- STS de 19 de enero de 2007
- STS de 19 de enero de 2006
- STS de 22 de abril de 2011
- STS de 30 de septiembre de 2011
- STS de 30 de junio de 2015
- STS de 21 de junio de 2005
- STS de 13 de julio de 2006
- STS de 26 de julio de 2012
- STS de 1 de diciembre de 2015
- STS de 3 de julio de 2012
- STS de 10 de julio de 2014
- STS de 30 de enero de 2013
- STS de 13 de junio de 2000
- STS de 11 de diciembre de 2012

ANEXO I

Se adjunta el cuestionario original al que se respondió en el caso H1 una persona cuyos datos fueron anonimizados.

Cuestionario del proyecto CEREU

Por favor, rellene las preguntas del cuestionar lo más descriptiva y exhaustivamente que sea posible. No es necesario identificar nombres de personas o empresas si no se desea. En cualquier caso, esta información será tratada como confidencial y será utilizada para la implementación de medidas de lucha y prevención contra la extorsión en la Unión Europea en el marco del proyecto CEREU: "Countering Extortion and Racketeering in EU", número de identificación HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005213, financiado por la Comisión Europea.

Muchas gracias.

1.- ¿DÓNDE Y CUANDO COMENZÓ EL INDICENTE EXTORSIVO?

Año, localidad, breve descripción de la zona.

2.- ¿SOBRE QUIÉN SE PREPETRÓ?

a) Número de víctimas amenazadas o extorsionadas, nacionalidades, documentado/indocumentado, edades sexo y cargo de cada uno, si son familiares o no de la víctima principal)

b) Identificar a la víctima principal: el "representante" de la empresa o negocio: edad, sexo, cargo, tipo de entidad: persona física, cooperativa, SL..otras, tamaño de la empresa : número aproximado de empleados, de 1 a10, de 11 a 50, de 50 a 250), sector al que se dedica, si es miembro de alguna asociación y si tiene seguro como empresa que cubra los daños)

3.- ¿CÓMO FUE LA REACCION DE LA VÍCTIMA?

Cuál es la razón por la que se trató de extorsionar justamente a esa empresa: cuestiones geográficas, económicas, personales...; propósito de la extorsión: forzar préstamos, pagos periódicos, imponer a determinados proveedores o responsabilidades contractuales...; periodicidad de los pagos: semanal, mensual, única, ad hoc, ; reacción de la víctima: resistencia, aceptación o complicidad y su descripción; relación con los extorsionistas, de qué les puede conocer, duración de la extorsión, estado del negocio tras la extorsión: operativo, insolvente, bancarrota...

4.- ¿CÓMO SON LOS AUTORES?

Número de personas implicadas, nacionalidades, tipo de organización: jerárquica o en red, actividad principal: extorsión, tráfico de drogas...; implicación de agentes públicos, cuerpo o grupo al que pertenecen (alcalde, Guardia Civil...)

5.- ¿CÓMO SE DESARROLLA LA EXTORSIÓN?

El grupo trata de controlar un sector o una zona geográfica (o ambas), la extorsión se suele lograr o se queda en intentos, se hace uso de la violencia, se hace uso de la intimidación, cómo se intimida: amenazas, incendios, daños a la propiedad, robos, lesiones a las personas, excesivas inspecciones (lo más exhaustivo posible), hay presencia de mediadores: si o no, quienes son, cómo se lleva a cabo.

6.- ¿CÓMO SE PUEDE EVITAR ESTO?

Medidas o propuestas que puedan proteger a los negocios que son víctimas potenciales en un futuro.

ANEXO II

Se presenta el documento original de las entrevistas a expertos empleadas en el desarrollo del proyecto europeo de investigación CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión Europea.

Entrevista semiestructurada

1º Breve explicación sobre el proyecto CEREU (centrada en la medición de la amenaza de extorsión) y el objetivo de la entrevista (más orientada a estudiar la presencia del crimen organizado dedicado a actividades extorsivas de los últimos cinco años).

2º Preguntas (para información cualitativa)

Víctimas

Una de las principales barreras en su estudio suele ser la ausencia de denuncias por parte de las víctimas, ¿cuánto porcentaje de los casos de extorsión estimarías que se mantiene oculto en España? ¿A qué atribuyes esa cifra?

Para conocer algo más sobre las víctimas, ¿suelen presentar algún perfil concreto? ¿Es la nacionalidad o la etnia un elemento clave?

¿Qué sectores parecen ser los más afectados? ¿Qué características les hacen más vulnerables?

Teniendo en cuenta la ausencia de datos oficiales relacionados con la presencia de extorsiones del crimen organizado ¿Qué zonas geográficas de España presentan un mayor índice? ¿Como escogen los grupos una zona o región determinada? ¿En base a qué condiciones?

Autores y organizaciones

¿Qué objetivos persiguen los grupos con la extorsión? (dinero, contrato de servicios de seguridad, compra de empresas o productos a un precio más bajo, ser proveedor de productos o servicios, cobra una deuda previa, emisión de facturas falsas, etc.) ¿Podría aventurar alguna tipología? Por tipo de comunidades, sectores u organizaciones criminales.

¿Qué medios suelen emplear para ello? (amenazas, lesiones, etc.) ¿habitualmente incluye conductas agresivas explícitas?

¿Los grupos dedicados a actividades extorsivas suelen controlar zonas o áreas concretas? Qué organizaciones suele tener mayor control sobre el territorio y como es el proceso (explicar modus operandi)

¿Es la nacionalidad o la etnia de los autores un elemento clave? ¿En ocasiones esto guarda relación con la etnia o nacionalidad de las víctimas?

¿Se trata de grupos internacionales o habitualmente actúan en territorio español de forma exclusiva?

¿Las extorsiones suelen ser su actividad principal o la combinan con otras como el tráfico de drogas o los secuestros?

¿Se emplean empresas legales para la perpetración del delito? ¿En qué sentido? (para cobro, para absorción de otras empresas, para blanqueo de capitales, etc.)

Evaluación de la amenaza

¿Cómo evalúa la amenaza actual de los grupos de crimen organizado que extorsionan a empresas en España?

A partir de tres niveles (bajo, medio alto) valore las siguientes dimensiones la extorsión en España

- La amplitud del foco, teniendo en cuenta el número de víctimas y el área geográfica afectada
- La profundidad, en función del nivel de control del sector, y del área, y las capacidades económicas de los grupos.
- El riesgo, teniendo en cuenta la agresividad de las actividades extorsivas y otros delitos violentos que cometan las organizaciones.

¿Cómo piensa que se puede estudiar la presencia del crimen organizado dedicado a la extorsión en España o en Europa?

ANEXO III

Se adjunta el cuestionario sobre implicaciones éticas.

Indicar si la propuesta del plan de investigación contempla alguno/s de los siguientes aspectos:

- | | |
|--|--|
| A: Investigación con seres humanos o uso de datos personales | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| B: La investigación implica contacto habitual con menores | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| C: Utilización de muestras biológicas humanas o información genética | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| D: Experimentación animal | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| E: Utilización de agentes biológicos de riesgo para la salud humana, animal o para las plantas | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| F: Uso de organismos modificados genéticamente (OMGs) | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |

En caso de haber contestado afirmativamente a uno o más ítems, y después de que el Plan de Investigación haya sido evaluado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, el doctorando debe enviar copia de este anexo (junto con la documentación requerida) al Comité de Ética de la Investigación (CEI) de la UAM a la dirección de correo electrónico: comite.eticainvestigacion@uam.es

Si el trabajo se hace dentro de un Proyecto de Investigación más amplio que cuenta con la aprobación de un Comité de Ética de la Investigación (CE), especificar:

- Título del proyecto:
CEREU Countering Extortion and Racketeering in EU
- Investigador Principal:
Manuel de Juan Espinosa
- Fecha y código de aprobación por el CEI-UAM:
2014-2016 ID de la Comisión Europea HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005213

Si el trabajo de investigación no se enmarca en un Proyecto ya aprobado; se ha de enviar, junto al presente Anexo, el Plan de Investigación, que debe incluir las actividades a realizar, y especificar la metodología y el material —en su caso— que se va a utilizar.

Aparte del Plan de Investigación con sus anexos, se adjuntará la siguiente documentación:

- En el **supuesto A**, si la investigación es prospectiva, se deberá aportar el documento de **consentimiento informado** que se utilizará, donde conste la información detallada que recibirá el participante en el estudio. Si la investigación es retrospectiva se deberá establecer un **compromiso de confidencialidad** sobre los posibles datos identificativos de los participantes. En cualquier caso, se detallará si los datos o el material obtenido serán **anonimizados o codificados** y cómo se custodiarán. También deberá indicarse el **modo de reclutamiento** de los participantes. Si se trata de experimentación clínica se debe adjuntar el informe del Comité de Ética del Centro en el que se llevará a cabo la experimentación, señalando la extensión de esta autorización (usos restringidos al proyecto, o para otros usos relacionados).
- En el **supuesto B**, se deberá adjuntar el documento del Registro Central de Delincuentes Sexuales. En el caso de estudiantes extranjeros (incluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea), este certificado deberá ser complementado con

ANEXO IV

A continuación, se presenta el inventario original de estudios de caso con el que se trabajó para la recogida de casos de documentos policiales y judiciales en el proyecto europeo de investigación CEREU: Countering Extortion Racketeering in the EU, cofinanciado por la Comisión Europea. A partir de la información obtenida con esta herramienta, y protegiendo los datos de forma que los casos codificados por orden de identificación (C1, C2, Cn en casos de la comunidad china, y H1, H2, Hn en casos del sector de la hostelería) y anonimizados los datos personales de forma que no sean ni víctima ni autor identificables por la lectura del inventario, se ha trabajado en la elaboración de los informes del proyecto y de los capítulos cinco y seis de la presente tesis.

Case study inventory

General description of case

Case ID*	
Place of incident (city, address)	
Year of incident (e.g. 2012)	
Short description of incident	

* Please assign an unique code for the identified case - e.g. BG-A1 (Bulgarian case 1 in agricultural sector), IT-C2 (Italian case 2 in Immigrant community), ES – H3 (Spanish case 3 in hospitality industry)

Local context of extortion incident

The local context description aims to contextualise the data on each extortion incident identified. Therefore please try to collect statistics about the indicators listed below on regional level (NUTS-3 level), if possible.

1. What is the population of the region? For immigrant communities please also indicate size of the immigrant community in focus. (Source: national statistics, NUTS-3 level)

--

2. Please provide a general description of main economic sectors in the region and the share of researched sector in local economy

--

3. What is the number of companies registered with main activity agriculture/hospitality? For immigrant communities, please indicate number of companies with owners from the immigrant community.

--

4. What is the number of number of business associations in researched sector or business associations of researched immigrant community (e.g. Italian_Chinese Chamber of Commerce)?

5. What is the number of number of companies that are members of this/these business associations?

6. Please provide the following crime statistics (relevant to the time of the incident), if available disaggregated on regional level for the region where the extortion incident took place:

Indicator	Statistics	Additional information
Overall number of organised crime cases (police, prosecution, national statistics)	----- investigations	
	----- Bills of indictment	
	----- Convictions	
Number extortion cases (police, prosecution, national statistics)	----- investigations	
	----- Bills of indictment	
	----- Convictions	
Number arson cases (police, prosecution, national statistics)	----- investigations	
	----- Bills of indictment	
	----- Convictions	
Number of corruption cases (police, prosecution, national statistics)	_____ investigations	
	----- Bills of indictment	
	----- Convictions	

Profile of victim

7. What is the number of persons from the company targeted for extortion intimidated by the extortionists?

8. What is the age and the sex of the intimidated person/s?

Indicator	Information available
Age	_____ years
Sex	(e.g. male/female)

9. What is the nationality of victimized person/s? If more than 1 victim in the company, please provide details for each one. (e.g. country citizen, Chinese, Russian, Albanian, etc.)

10. In case the intimidated persons are immigrants, please also indicate the following information

Indicator	Information available
-----------	-----------------------

Duration of residence in country

Immigration status (e.g. documented/undocumented immigrant)

11. What is the role of the intimidated person in the company targeted for extortion (e.g. shareholder, executive director, employee, etc.)?

12. Where is the location of the main office of the victimized company?

13. Where is the location of the commercial venues of the victimized company (e.g. restaurant, hotel)? For agricultural sector – please indicate the location of the cultivated lands.

14. What type of legal entity is the victimized company (limited liability company, joint-stock company, cooperative, etc.)?

15. Please indicate the number of employees that work for the company?

16. What is the core business activity of the victimized company (e.g. agriculture, hospitality)? Please provide more details, if available.

17. What other business activities or auxiliary activities does the company have?

18. Is the victimized company member of any business association? Please provide more details, if available.

19. Does the victimized company have any insurance against such risks related to crime? Please provide more details, if available.

20. Does the victimized company have any contract with a private security company? Please provide more details, if available.

Victim's response to extortion

21. Did the owner file a report to the police? What was the reaction of the company to the extortion? (E.g. acquiescence (complies with extortion demands), complicity (complies with demands and receives improper advantages), resistance (refuse to comply). Please provide more details, if available.

22. What was the relation of the company with the extortionists? (E.g. extortionists were clients, employees, etc.). Please provide more details, if available.

23. What was the duration of the extortion? Please describe main stages of the extortion from the point of initial intimidation to the filing of report to the police.

24. What was the economic status of the company after the extortion took place (e.g. operational, insolvent, bankrupt)? Please provide more detail, if available.

Profile of perpetrators

25. What was the number of individuals involved in the extortion?

26. What was the nationality of individuals involved in the extortion? (e.g. Bulgarian, Russian, Albanians, etc.)?

27. How would you characterize the organised crime group involved in the extortion (e.g. hierarchical, network)?

28. What was the core business of the group involved in the extortion (e.g. extortion, loansharking, drugs, etc.)? Did the group had any involvement in other type of criminal business?

29. Was there any involvement of public servants in the group? In case there were public servants involved, what was their affiliation (e.g. local administration, tax administration, law enforcement, etc.)? Please provide more details, if available.

Modus operandi of perpetrators

30. What was the general modus operandi of the group (e.g. territorially based extortion, functionally based extortion, etc.)? Please provide more details, if available.

31. How would you characterize the extortion incident (e.g. attempted, actual, etc.)? Please provide more details, if available.

32. Was there any use of violence related to this particular incident? Please provide more details, if available.

33. Was there presence of intimidation in this particular incident? Please describe what kind of intimidation was used – e.g. verbal threats, arson, theft of property, damage to property, physical violence, imposition of administrative penalties, rejection of application for national / European subsidies, excessive inspections / audits, excessive time to process or approve normal requests, claims, reports or other documents by the administration. Please provide more details, if available

34. Were there any mediators involved in the extortion incident? What was their role? Please provide more details, if available.

35. What was the reason to target the company (e.g. property owned, geographical, location, economic capacity, etc.)? Please provide more details, if available.

36. What was the purpose of the extortion (e.g. periodical payments (goods, money), forced loan, forced contractual obligations, imposition of labour, etc.)? Please provide more details, if available.

37. What was the timing of payments requested/imposed to the company (e.g. weekly, monthly, ad hoc, etc.)? Please provide more details, if available.

Other relevant information

ANEXO V

A continuación, se expone una breve descripción de los casos incluidos en el estudio realizado.

En primer lugar, con la inicial H, se enumeran los casos de la muestra de víctimas que son empresarios de hostelería.

En segundo lugar, comenzando con la letra C, se enumeran los casos ocurridos dentro de la comunidad china.

Cada resumen contiene el año y el lugar (la provincia) de los hechos, y una breve descripción de los tres principales aspectos a analizar: los autores, el *modus operandi* y las víctimas.

Caso H1

- Año: de 2006 a 2015. Lugar: Formentera.
- Autores: una organización ilegal de al menos cuatro integrantes que constituía una rama de la mafia calabresa 'Ndrangheta: ubicada en el extremo sur de la Península Itálica, y que trataba de extender radio de acción a zonas turísticas del mediterráneo como las islas Baleares. Esta rama criminal concreta estaba asentada en Formentera y se dedicaba a diversas actividades legales destinadas al turismo, como agencias de viajes, bares, restaurantes, servicios de seguridad privada, proveedores de comida italiana, marketing, etc. Las actividades ilegales se debían a sus aspiraciones monopolísticas, que consistían en controlar el mercado de proveedores que suministraban determinados productos a la isla.
- *Modus operandi*: esta organización actuaba siguiendo tres fases. En un primer momento, que en este caso fueron dos años (2006 a 2008), la manera de aproximarse a las víctimas se produjo de forma amigable y tranquila mediante la oferta de servicios de suministro de comida y bebida desde Calabria, servicios de seguridad, de mejoras en la publicidad para atraer a clientes italianos y ventajosas oportunidades de financiación, para lo que remarcaban los beneficios que podrían suponer para el empresario. En 2008, tras la negativa del empresario, los autores comenzaron a cambiar el discurso, advirtiéndole que su organización estaba capacitada para hacer que no volviera a tener clientes y se viera obligado a cerrar su negocio. Le intimidaron también con que desde ese momento la policía local comenzaría a incrementar las inspecciones administrativas en su local. Además, la víctima relata cómo otras víctimas de la zona, que se resistieron

a realizar negocios con esta organización, sufrieron daños en sus locales, boicots contra los clientes y recibieron amenazas de que si no cerraban el local padecerían una oleada de robos y lesiones.

En el año 2009, ante la negativa de la víctima a aceptar sus condiciones, el autor, sin manifestar un comportamiento agresivo, le recordó el importante aumento de robos y acciones violentas que estaban soportando los empresarios de la zona para lograr que accedieran a contratar sus servicios de protección para ellos y sus familias, argumento que la víctima interpretó como una amenaza hacia su familia y a la seguridad de su negocio. Durante los siguientes años diversos integrantes del grupo mafioso pasaban horas y días a pocos metros de la terraza mirando a la víctima, sin llegar a comunicarse con él, para dejar patente que le estaban vigilando.

- Víctimas: propietarios de discotecas y otros negocios relacionados con el turismo.

Caso H2

- Año: 2011. Lugar: Jaén.
- Autores: una organización criminal dedicada a conceder préstamos ilegales, integrada por cinco miembros: tres españoles, un argentino y un marroquí.
- *Modus operandi*: un empresario, arruinado por no poder pagar los enormes intereses del préstamo que le había otorgado el grupo, comenzó a sufrir un proceso extorsivo. Las conductas intimidatorias consistieron en amenazas de muerte y advertencias de que se producirían una serie de incendios en sus propiedades (su coche y su negocio) también le propinaron empujones, existió contacto físico que no produjo resultado de lesiones, además tuvo que soportar un incesante acoso mediante continuas visitas de los autores a su negocio, así como un permanente seguimiento de sus movimientos por parte de la organización.
- Víctimas: un empresario de hostelería que atravesaba dificultades económicas.

Caso H3

- Año: 2012. lugar: Almería.
- Autores: una organización criminal compuesta por cinco pakistaníes dedicada a exigir pagos a modo de impuestos a sus compatriotas asentados en España.

- *Modus operandi*: en función del perfil de la víctima exigían pagos de tres tipos: a) un pago único de entre 3.000 y 10.000 euros que era solicitado a empresarios con alto poder adquisitivo y a propietarios de negocios de restauración exitosos; b) pagos semanales de 30 a 60 euros que se exigían a vendedores ambulantes y c) pagos mensuales del 40% de sus ingresos requeridos a los empleados de negocios de kebab en situación administrativa irregular.

Los medios intimidatorios se producían de forma paralela a la petición de dinero, momento en el que advertían a las víctimas de las consecuencias de no pagar, como por ejemplo la simulación de delitos de malos tratos, robos o lesiones de gravedad para posteriormente poder presentar denuncias falsas contra ellas.

- Víctimas: pakistaníes residentes en España dedicados al sector de la hostelería en pequeños negocios de restauración que ofrecen comida de tipo kebab: carne prensada en un hornillo vertical que puede servirse de diferentes formas, tanto en restaurante como en puestos de venta ambulante.

Caso H4

- Año 2012. Lugar: Almería, Málaga, Madrid y Toledo.
- Autores: un grupo criminal compuesto por siete españoles, que contaba con la complicidad de un Abogado del Estado para engañar y extorsionar a empresarios dedicados, entre otros negocios, a la hostelería.
- *Modus operandi*: los autores recopilaban información económica útil de los negocios de las víctimas, así como de sus bienes, para engañarlas a través de un primer acercamiento, en el que los delincuentes se hacían pasar por empresarios interesados en realizar inversiones conjuntas, para obtener un mutuo beneficio. Cuando la víctima accedía a encontrarse con ellos, y aceptaba el negocio propuesto por la organización, se producía la estafa, por lo general mediante conductas de engaño de intercambio de divisas que terminaban en transferencias bancarias en un único sentido: de la víctima a la organización, incumpliendo esta su parte del trato. En el supuesto de que la víctima descubriera sus intenciones y decidiera retirarse de las negociaciones, la organización empleaba medios agresivos e intimidatorios para exigir pagos de entre 300.000 y 4 millones de euros en brevísimos plazos de tiempo (3 horas), bajo amenaza de detenerle.
- Víctimas: empresarios de hostelería y otros negocios, con alto nivel de vida.

Caso H5

- Año: 2014. Lugar: Alicante.
- Autores: ocho extorsionadores, uno de los cuales tenía un restaurante indio que trataba de imponer su control en el territorio prevaleciendo de la reputación del grupo extorsivo al que pertenecía.
- *Modus operandi*: el objetivo principal consistía en monopolizar el negocio de restaurantes hindúes en la zona, para lo que exigía a otros indios compatriotas que no abrieran locales en su área de control.

Los medios empleados para intimidar consistieron en amenazas verbales advirtiéndoles de que iban a agredir a las víctimas y a sus familias, e intimidación mediante acoso telefónico para requerir que cerraran los negocios.

- Víctimas: empresarios de comercios y tiendas de comida y bebida, negocios de kebabs y restaurantes indios.

Caso H6

- Año: 2010. Lugar: Castellón.
- Autores: una conocida organización criminal internacional denominada Hell's Angels o los Ángeles del Infierno, que contaba con al menos cuatro miembros dedicados a la extorsión. La organización perpetraba diversas actividades delictivas como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos, aunque también se financiaba a través de otras prácticas como la extorsión a empresarios.
- *Modus operandi*: en este caso concreto los autores exigieron pagos de aproximadamente 10.000 euros por prestar su protección a empresarios de la zona durante los eventos de motociclismo. Asimismo, requirieron el consumo gratuito de bebidas y comidas durante los mismos. Todo ello bajo la amenaza de sufrir acciones violentas.
- Víctimas: empresarios de hostelería y gestión de eventos de la zona controlada por el grupo extorsivo.

Caso H7

- Año: 2011. Lugar: Palma de Mallorca.
- Autores: un extorsionador vinculado a la mafia de Malasia.
- *Modus operandi*: el autor utilizaba su vinculación a la mafia como medio intimidatorio para exigir pagos a empresarios propietarios de negocios de restauración en Palma de Mallorca. Su fuerte poder intimidatorio se debía a sus reiteradas actuaciones mediante esta forma de operar. Reclamó 75.000 euros a cambio de no vender su parte del negocio a la mafia de Malasia, amenazando con que, en caso de no acceder a su petición, la mafia les cortarían una mano, un brazo o directamente los mataría. Para agilizar los pagos, informaba a los empresarios de que al día siguiente vendería su participación en el negocio a la mafia si no recibía el dinero de inmediato.
- Víctima: empresarios del sector de la hostelería.

Caso H8

- Año: 2010. Lugar: Asturias.
- Autores: un grupo de extorsionadores compuesto por concejales y policías locales.
- *Modus operandi*: exigieron a los propietarios de los restaurantes del pueblo de Cudillero (Asturias) pagos ilegales de 2.000 euros por realizar horas extraordinarias durante las fiestas locales del pueblo. La mera petición de dinero practicada por un jefe de policía ejerció una intimidación suficiente como para que los empresarios de la zona pagaran sin resistencia.
- Víctima: empresarios de hostelería.

Caso H9

- Año: 2011. Lugar: Almería.
- Autores: tres individuos pakistaníes, al menos uno de ellos en situación administrativa irregular.
- *Modus operandi*: un individuo pakistaní engañó a un compatriota que regentaba un restaurante de kebab, pidiendo que le contratara como empleado durante unos meses hasta que lograra regularizar su situación en España. Cuando el empresario se dio cuenta de que su empleado no tenía pasaporte legal ni estaba tramitando su legalización, se dispuso a ponerlo de manifiesto ante la unidad de extranjería de

Almería, fue entonces cuando el autor, acompañado de dos compatriotas, comenzó el proceso de extorsión exigiendo que le renovara el contrato.

Los medios intimidatorios que se emplearon consistieron en perseguir a la víctima insultándole, intimidándole con una navaja, amenazándole de muerte si no le renovaba el contrato y agrediéndole físicamente.

- Víctima: dueño de un negocio de kebab.

Caso H10

- Año: 2014. Lugar: Zaragoza.
- Autores: diez extorsionadores rumanos de conocida reputación en la zona.
- *Modus operandi*: realizaron durante diez meses frecuentes vistas a locales de restauración exigiendo consumir gratuitamente las bebidas y comidas que allí se servían.

Los medios intimidatorios empleados fueron esencialmente amenazas de muerte, también atemorizaban a las víctimas mostrando su pistola y poniéndola encima de la barra, con una clara intención de amedrentar a los propietarios de los negocios. Se produjeron también agresiones físicas que se limitaron a empujones propinados al dueño que no supusieron lesiones apreciables.

- Víctima: propietario de un restaurante situado en la zona.

Caso H11

- Año: 2011. Lugar: Zaragoza.
- Autores: un individuo pakistaní, miembro de una organización criminal.
- *Modus operandi*: una persona de origen pakistaní se presentó en el negocio de un compatriota reclamándole 1.500 euros mensuales de forma insistente, durante todos los días y todas las noches de la semana, bajo amenaza de muerte a él y a su familia que residía en Pakistán.
- Víctima: pakistaníes dueños de restaurantes en la zona controlada por el grupo extorsivo.

Caso H12

- Año: 2011. Lugar: Alicante.

- Autores: cuatro extorsionadores, al menos uno de ellos es ciudadano inglés.
- *Modus operandi*: trataban de imponer un control monopolístico sobre los restaurantes de la zona provocando su cierre con métodos violentos.
Los medios intimidatorios utilizados fueron las amenazas reiteradas a las víctimas y boicots a los clientes (molestándoles mediante un puntero láser que apuntaba a sus ojos, por ejemplo), así como el incendio provocado de locales.
- Víctimas: empresarios de restaurantes de la región que suponían competencia para el restaurante de los autores.

Caso H13

- Año: 2011. Lugar: Murcia.
- Autores: tres individuos marroquíes.
- *Modus operandi*: el grupo trataba de forzar que se les realizasen contratos de trabajo en negocios de hostelería de la zona.
Los medios empleados para intimidar a las víctimas consistían amenazas de muerte, acoso telefónico, robo e incluso la provocación de un incendio en el local, tras la advertencia vertida por uno de los autores de que “si él no trabaja allí, no trabaja nadie”.
- Víctimas: las víctimas de nacionalidad marroquí y china (una era la arrendadora del local y la otra la arrendataria, respectivamente) se dedicaban negocios vinculados con la hostelería.

Caso H14

- Año: 2015. Lugar: La Coruña.
- Autores: tres individuos españoles.
- *Modus operandi*: consistía en exigir varios pagos a determinados empresarios de hostelería de la zona. Cuando las víctimas se negaban a satisfacer la petición, el nivel de violencia y las cantidades exigidas se multiplicaban exponencialmente.
Los medios intimidatorios utilizados fueron amenazas de dañar la propiedad y amenazas de muerte.
- Víctima: propietario pakistaní de dos negocios de kebabs.

Caso H15

- Año: de 2003 a 2013. Lugar: Barcelona.
- Autores: una agrupación de jóvenes con casi una treintena de miembros pertenecientes a un colectivo denominado “Casuals”, que es un grupo violento seguidor del Fútbol Club Barcelona.
- *Modus operandi*: empleaban amenazas, agresiones físicas y acoso a empresarios, así como boicots a clientes de restaurantes y bares nocturnos, con la intención de recibir pagos por la protección que exigían a los empresarios, consistentes en no dañar sus locales.
- Víctimas: empresarios de locales nocturnos de restauración de Barcelona.

Caso C1

- Año: 2015. Lugar: Valencia.
- Autores: nueve personas integrantes de una organización criminal conocida en la zona.
- *Modus operandi*: los autores accedieron violentamente al exitoso restaurante asiático de la zona exigiendo al propietario un pago de un millón de euros bajo amenaza de muerte.
- Víctimas: empresarios chinos de la zona controlada por el grupo extorsivo.

Caso C2

- Año: 2011. Lugar: Madrid.
- Autores: un grupo de ocho personas que se dedicaba a la usura y la extorsión.
- *Modus operandi*: localizaban a víctimas en importante casino con gran afluencia de jugadores asiáticos. A la víctima que denunció el caso le ofrecieron insistentemente un préstamo de 15.000 euros para que siguiera jugando y, al perder, aceptara el préstamo. Tras aceptarlo y gastarlo, le explicaban que los intereses eran de otros 15.000 euros forzándole a firmar, delante de otras personas, un documento ilegal asumiendo la deuda y las condiciones de dicho préstamo.

Los métodos intimidatorios para forzar los pagos consistieron en amenazas de muerte, visitas reiteradas al negocio de la víctima, acoso telefónico, agresiones físicas e intento de secuestro.

- Víctimas: empresarios chinos de pequeños negocios asiduos al juego en casinos.

Caso C3

- Año: 2013. Lugar: Madrid.
- Autores: un ex empleado de un bazar relacionado con la mafia china.
- *Modus operandi*: exigió, cuchillo en mano, un pago de 30.000 euros en un plazo de pocos días, bajo amenaza de muerte.
- Víctimas: un empresario de un bazar.

Caso C4

- Año: 2015. Lugar: Madrid, Palencia y León.
- Autores: un grupo de al menos dos integrantes, pertenecientes a una organización de mayor tamaño.
- *Modus operandi*: el objetivo era forzar las obligaciones contractuales de suministro de productos, de modo que los bazares chinos de toda España tuvieran que abastecerse necesariamente desde Madrid. Para ello utilizaron amenazas de muerte.
- Víctimas: dueña de un pequeño bazar.

Caso C5

- Año: 2013. Lugar: Sevilla.
- Autores: al menos dos extorsionadores.
- *Modus operandi*: el objetivo era que la víctima no abriera su nuevo negocio.

Los medios intimidatorios consistieron en causar lesiones a la víctima a la que propinaron puñetazos y golpes en presencia de su familia y provocar daños en el local donde destrozaron los mostradores, rompieron el aire acondicionado y una pieza de cerámica.

Víctimas: el dueño de un bazar.

Caso C6

- Año: 2015. Lugar: Pontevedra.
- Autores: un comercial de ventas que contaba con el respaldo de un grupo violento.
- *Modus operandi*: el comercial quiso imponer el cobro de una mercancía que la víctima negaba haber solicitado. Cuando se resistió a pagar y requirió al comercial que retirara la mercancía que no había pedido para su bazar, el autor comenzó a exigir el pago de forma violenta.

Los medios de intimidación consistieron en insultos, así como la amenaza de contactar con determinadas personas para matar a la víctima.

- Víctimas: dueño de un bazar.

Caso C7

- Año: 2012. Lugar: Pontevedra.
- Autores: un extorsionador vinculado con la mafia china.
- *Modus operandi*: cuando un empleado de un bazar, que había estado de baja, recibió el alta médica y se tenía que incorporar al trabajo, reclamó el pago de 50.000 euros al propietario del negocio.

Los medios intimidatorios utilizados fueron la amenaza de llamar a la mafia y provocar daños en el local de la víctima.

- Víctimas: dueño de un bazar.

Caso C8

- Año: 2012. Lugar: Cáceres.
- Autores: seis personas integrantes de una mafia china no identificada.
- *Modus operandi*: los autores sustrajeron joyas, documentación personal, teléfonos móviles y dinero en efectivo del domicilio de la víctima.

Los medios intimidatorios empleados fueron inmovilizar a las víctimas, y amenazarlas con un arma de fuego y otras armas blancas, además golpearon a la víctima principal mientras le pedían la llave de la caja fuerte.

- Víctimas: la propietaria de un establecimiento comercial y sus familiares.

Caso C9

- Año: 2014. Lugar: Cáceres.
- Autores: dos autores vinculados con la mafia china.
- *Modus operandi*: forzar el cierre de un local a través de amenazas de avisar a la mafia china, argumentando que no querían tener competencia.
- Víctimas: dueño de un bazar.

Caso C10

- Año: 2012. Lugar: Alicante.
- Autores: un autor acompañado de tres compatriotas, vinculados con una mafia china no identificada.
- *Modus operandi*: reclamó el pago de 20.000 euros en un plazo de dos días bajo la amenaza de quemar la nave de la víctima advirtiéndole que no le dejarían tranquilo.
- Víctimas: el propietario de un pequeño negocio.

Caso C11

- Año: 2012. Lugar: Madrid.
- Autores: un extorsionador vinculado con la mafia china.
- *Modus operandi*: tras tres meses sin abonar el alquiler, el autor, arrendatario de la víctima, le solicitó un pago de 60.000 euros en concepto de mejoras por las reformas que había realizado en la nave.

Los medios intimidatorios utilizados fueron amenazas de muerte y de avisar a la mafia china.

- Víctimas: propietaria de un local.

Caso C12

- Año: 2012. Lugar: Sevilla.
- Autores: dos extorsionadores.
- *Modus operandi*: acudieron al restaurante de la víctima y le solicitaron que fuera preparando un importe determinado de dinero para cuando volvieran.
- Víctimas: dueño de un restaurante de la zona.

Caso C13

- Año: 2011. Lugar: Sevilla.
- Autores: un extorsionador único, propietario de un bazar competencia de la víctima.
- *Modus operandi*: provocó un incendio en el negocio de un compatriota de la zona, y agredió físicamente a su familiar.
- Víctimas: dueño de un bazar.

Caso C14

- Año: 2014. Lugar: Alicante.
- Autores: tres extorsionadores, uno de ellos socio de la víctima.
- *Modus operandi*: requirieron al propietario de un bazar para que cerrara su local profiriendo amenazas de muerte
Los medios intimidatorios empleados por el extorsionador fueron rescindir unilateralmente el alquiler del local donde tenían el negocio autor y víctima, así como proferir amenazas de muerte hacia ésta.
- Víctimas: dueño de un bazar.

Caso C15

- Año: 2010. Lugar: Barcelona.
- Autores: tres personas, una de ellas dedicada a otorgar préstamos a compatriotas.
- *Modus operandi*: ante el impago del préstamo por parte de una víctima, procedió a secuestrar a su hijo para forzar el pago de la deuda con sus intereses.

- Víctimas: propietaria de un locutorio.

ANEXO VI

La noticia que se presenta está extraída de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante publicada en el siguiente enlace:

<https://gastronomiadealicante.com/2016/la-extorsion-del-crimen-organizado-a-los-hosteleros/>

La extorsión del crimen organizado a los hosteleros



INFORMACIÓN DE SUMA IMPORTANCIA

El pasado viernes, 21 de octubre, asistimos en la Dirección General de la Guardia Civil, invitados por el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Madrid (a quienes aprovechamos para agradecer su hospitalidad), al seminario sobre la Extorsión del Crimen Organizado en España.

Nuestra presencia allí estuvo motivada porque las empresas de hostelería representan el sector más vulnerable para este tipo de delitos, seguido de los empresarios chinos. Este inquietante dato se desprende de los resultados del proyecto CEREU, presentados durante la jornada.

CEREU (siglas de "Countering Extortion and Racketeering") es un proyecto llevado a cabo en colaboración entre diversas policías europeas, destinado a analizar la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada en la Unión Europea, y cuyo informe de resultados nos fue comunicado a lo largo de las distintas ponencias del pasado viernes, impartidas por técnicos del instituto forense de la UAM involucrados en el proyecto, así como por el fiscal especial contra la corrupción y

criminalidad organizada, y un alto mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Por problemas de espacio no podemos desarrollar aquí todo lo que se nos informó, que fue mucho y muy interesante, pero podéis consultar pulsando [aquí](#) el informe CEREU en Pdf. Para los que no tengáis la posibilidad de descargarlo, tenemos en nuestra sede, a vuestra entera disposición, algunos ejemplares en papel que nos trajimos para vosotros.

Sin querer ser alarmistas, los datos que arroja son preocupantes para nuestro sector, que se ha convertido en el objetivo prioritario de los grupos de crimen organizado, tras la crisis de la construcción (tradicional víctima de estas mafias).

La extorsión en nuestro sector se realiza principalmente de tres maneras:

- Extorsión por protección, que consiste en una serie de pagos para evitar daños en nuestro negocio o a nosotros mismos. Paradójicamente esa “protección” cubre exclusivamente contra los daños que los propios extorsionadores causarían en caso de no efectuarse el pago.
- La extorsión laboral consiste en negociaciones violentas para conseguir que se contrate forzosamente a ciertos trabajadores del entorno del grupo criminal. Estos casos suelen provenir de antiguos trabajadores resentidos con el empresario, que fuerzan su readmisión recurriendo al grupo mafioso.
- Extorsión monopolística es la eliminación por todos los medios de la competencia, con el objetivo de acaparar todo el mercado de una zona específica.

Nos llena de orgullo saber que entre las medidas a tomar para prevenir este tipo de delito, en lugar prioritario se tenga la importancia de estar asociados, por –citamos textualmente- <<el papel de las asociaciones de empresarios en la protección y prevención de este tipo de delitos>>. Este es otro buen motivo para tener en cuenta la importancia de permanecer unidos, pues, a pesar de estar muy manido, el dicho no deja de ser cierto: la unión hace la fuerza.

Huelga decir que si alguien de los que estáis leyendo esto, está siendo ahora mismo víctima de extorsión, podéis poneros en contacto con nosotros por cualquiera de las vías habituales, pues hemos sido aleccionados sobre cómo proceder en estos casos.

ANEXO VII

La noticia que se presenta a continuación ha sido extraída del periódico El Mundo publicada en el siguiente enlace:

<http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/10/30/58159f67468aebc9218b459e.html>

30/10/2016 08:26

María del Mar Valera acaba de renovar como presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante y es propietaria del restaurante El Caldero, uno de los referentes de la isla de Tabarca.

¿Acabamos de cambiar la hora ¿Qué opinan al respecto los hosteleros de la provincia de Alicante?

Estamos rotundamente en contra. Somos una provincia privilegiada con una luz especial y con el cambio de hora perdemos horas de sol. Por lo tanto, retrasar la hora es una medida que nos acarrea pérdidas económicas.

¿Es cierto que según informes de la Guardia Civil el «crimen organizado» está extorsionando a la hostelería?

Sí. Según los resultados del proyecto CEREU, llevado a cabo entre varias policías europeas, la hostelería ha pasado a ser el objetivo prioritario de los grupos de crimen organizado, junto con empresarios chinos.

¿Cómo, desde cuándo y por qué ocurre esto?

La extorsión a los empresarios hosteleros se realiza fundamentalmente de tres formas. Por una parte, existe extorsión por «protección», que consiste en una serie de pagos para evitar daños al negocio o a las personas. Esta «protección» cubre exclusivamente contra los daños que los propios extorsionadores causarían en caso de no efectuarse el pago. También existe extorsión laboral, que consiste en negociaciones violentas para conseguir que se contrate forzosamente a ciertos trabajadores del entorno del grupo criminal. Y por último, la extorsión monopolística, que es la eliminación por todos los medios de la competencia, con el objetivo de acaparar todo el mercado de una

zona específica. Los hosteleros nos hemos convertido en el sector más vulnerable.

¿Se llegará a un acuerdo definitivo entre los vecinos y la restauración en el tan controvertido tardeo?

Nuestro deseo es que se alcance un acuerdo pronto, y en sentido estamos trabajando. Dependerá de la capacidad de negociación que muestren los vecinos, ya que pensamos que el tardeo supone una importante fuente de ingresos para la ciudad.

¿Hasta qué punto las inspecciones de la Consellería son eficaces?

Estas inspecciones son eficaces a medias, ya que en ellas se suele comprobar que se cumplan las normativas, pero siempre se llevan a cabo en las empresas que están legalmente registradas, quedando excluidas de estos controles las empresas ilegales que, estando abiertas al público, suponen una competencia desleal y economía sumergida, ya que nadie las controla.

Los consumidores demandan que se especifique en las cartas cuando un producto es congelado o fresco. Usted tiene dos restaurantes, ¿está de acuerdo?

Totalmente de acuerdo, ya que el consumidor tiene derecho a saber lo que está comiendo.

Los Ayuntamientos de la provincia difieren en cuanto a espacio a ocupar por mesas en terraza, impuestos y horarios. ¿Cree que deberían unificarse criterios?

Por supuesto, y, de hecho, ésa es una de nuestras reivindicaciones históricas.

¿Se siente apoyada por las instituciones y por las administraciones?

Sí, pero sólo a medias, ya que en muchas ocasiones percibimos que no son totalmente conscientes de la verdadera importancia que tiene este sector para la economía de una provincia eminentemente turística, como es la de Alicante.

¿Si al final cierra la patronal, Coepa, en la que está integrada APEHA, ¿qué harán ustedes?

De momento, y antes de tomar ninguna decisión a ese respecto, hay que recordar que el edificio donde se ubica la sede de Coepa, en la calle Orense, y donde tenemos alojada nuestra propia sede, es propiedad de la CEOE, con lo que por la parte meramente física, habrá que esperar a los acontecimientos. Respecto a nuestra adscripción a la confederación empresarial, nuestro sincero deseo

es que este asunto se resuelva positivamente para Coepa, y nos alegra que las recientes noticias sobre el asunto parecen ser esperanzadoras. Todo esto teniendo en cuenta que Alicante no se puede permitir quedarse sin un órgano provincial de representación empresarial.

En APEHA confluyen muchos pequeños empresarios de hostelería, ¿cómo valoran lo que ha pasado con Coepa?

La lección que podemos extraer las asociaciones empresariales de todo este embrollo, es que debemos estar más unidos para no depender en gran medida de las administraciones, porque si éstas al final te fallan, te verás en un apuro.

¿Qué normativas estima que puede y debe cambiar la Conselleria del ramo?

Llevamos más de 20 años solicitando una ventanilla única para agilizar nuestros trámites, ya que en este momento tenemos: Agencia Valenciana de Turismo, para las cuestiones de promoción; Conselleria de Medio Ambiente, para residuos y demás; Agencia Valenciana de Seguridad (antigua Conselleria de Justicia), para la ley de espectáculos y horarios; Conselleria de Trabajo, para contratos, inspecciones, prevención riesgos laborales, etcétera; Conselleria de Sanidad y alguna más que seguro se me queda en el tintero... Como verás son demasiados estamentos diferenciados, y en muchas ocasiones, totalmente estancos e incomunicados entre ellos. Esto tiene que cambiar en una sociedad moderna que dispone de las herramientas tecnológicas suficientes, y se debe buscar el mejor modo de unificar criterios burocráticos.

Gran parte de su vida y uno de sus restaurantes están en Tabarca, ¿cuida suficientemente el Ayuntamiento de Alicante a la isla?

Sinceramente no estamos contentos con el cuidado que se hace de la isla. Se nos exige mucho pero recibimos muy poco a cambio. Por ejemplo, ahora mismo, pasada la temporada estival, ya no tenemos servicio de limpieza, y servicio médico contamos únicamente durante los meses de julio y agosto, un par de horas de lunes a viernes. La falta de zonas de sombra y ajardinadas y otras muchas carencias que, desde la asociación de vecinos de Tabarca, se está luchando para conseguir.

Tenemos varias e importantes Denominaciones de Origen, y otras que aspiran a ese reconocimiento oficial. ¿En qué ámbito colabora con ellas la restauración?

Desde APEHA siempre hemos fomentado el uso de nuestro producto autóctono. Tanto en las vigentes jornadas del arroz y vino alicantino, como en las de los guisos tradicionales, celebradas en abril, en las bases se hacía hincapié en el uso y promoción de los productos autóctonos.

¿Debería mejorar, y en qué la formación de los CdT?

La calidad de la formación de los CdT ha mejorado mucho en los últimos años. Ahora los alumnos realizan prácticas en restaurantes. Por supuesto, siempre se puede mejorar, pero estamos muy satisfechos del nivel alcanzado por los CdT.

¿Cómo llevamos la formación continuada?

Sinceramente, esta es una asignatura pendiente en nuestro sector. Por la especial idiosincrasia del empresario hostelero, sometido a unos horarios muy extensos e intempestivos, no se suele encontrar cabida para la formación continua y el reciclaje de conocimientos. Si bien es verdad, que esto está empezando a cambiar con las nuevas generaciones de hosteleros, que sí entienden que es fundamental mantenerse al día y estar bien formado e informado, en un sector en constante evolución como es el nuestro.